**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**2000**

**LDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA**
**PRESIDENTA**

**SALA PRIMERA (CIVIL)**

**LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK**
**PRESIDENTE**

**DR. ELIGIO A. SALAS** **LDO. JOSÉ A. TROYANO**

**LDA. SONIA F. DE CASTROVERDE**
**SECRETARIA**

**SALA SEGUNDA (PENAL)**

**DR. HUMBERTO A. COLLADO**
**SUPLENTE ENCARGADO**
**PRESIDENTE**

**LDO. CÉSAR PEREIRA BURGOS** **LDA. GRACIELA J. DIXON C.**

**LDO. MARIANO E. HERRERA E.**
**SECRETARIO**

**SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)**

**LDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA**
**PRESIDENTA**

**LDO. ARTURO HOYOS** **DR. ADAN ARNULFO ARJONA**

**LDA. JANINA SMALL**
**SECRETARIA**

**SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)**

**LDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA**
**PRESIDENTA**

**LDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK** **DR. HUMBERTO A. COLLADO**
**SUPLENTE ENCARGADO**

**DR. CARLOS H. CUESTAS G.**
**SECRETARIO GENERAL**

# ÍNDICE

ÍNDICE . . . . . I

PLENO . . . . . 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES . . . . . 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE ANEL GUERRA CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 2

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. JULIO A. CANDANEDO, EN REPRESENTACION DE CAFETALES, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 007 DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHIRIQUI. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 3

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JULIO A. CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE CAFETALES, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 006 SJ-2000, DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHIRIQUI, MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 5

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR RAUL EDUARDO VACCARO EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS VACCARO MORA, CONTRA EL JUEZ PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 6

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICDO. RAUL TRUJILLO MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 9

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICDO. RAUL TRUJILLO MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000) . . . . . 10

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE MOLINA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALBA MOLINA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 1-2000, DE 24 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 12

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS EN REPRESENTACION DE NORMAN RAMCHARAN Y CONTRA EL JEFE DE FISCALIZACION ADUANERA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 13

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . 15

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACION DE AMEC DE CHIRIQUI, S. A. CONTRA LA

ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 20 DE ENERO DEL 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 17

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZALEZ, EN REPRESENTACION DE MARIBLANCA STAFF WILSON, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL ARTICULO 28 DE LA LEY 49 DE 24 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 19

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HORACIO TREJOS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° AG-0015-99, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL AMBIENTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 22

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL DOCTOR DIOGENES ANIBAL AROSEMENA GRIMALDO, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 34-99 DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 23

RECURSO DE HABEAS CORPUS . . . . . 25

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SERGIO EUCLIDES MORAN MACIA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 25

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARÍA SUENGAS DE CAJAR CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 29

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CUTBER ANDERSON BOXILL CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 30

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JULIO GODOY Y JOSE RUBIO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 31

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EPIFANIO RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . 32

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO SOTO PUELLO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL. . . . . 33

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROHAN DEEN FINLATOR, DESMOND ANTHONY GREEN, WAYNE RICHARD WOODROW BURREL Y BRIAN MARTINEZ ERLINTONG ERLYN CONTRA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION ADUANERA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 34

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EXIQUIO RIVAS MOSQUERA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 34

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EXIQUIO RIVAS MOSQUERA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE

AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 35

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE BOTELLO PAJARO CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 36

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUSTINO ROMERO MEDINA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 38

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBEN LAM BUSTAMANTE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL Y EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 41

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUMBERTO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 42

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BORIS ALBERTO CHÁVEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 43

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUCITANIA MARIA SEGURA VALVERDI CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS (2000). . . . . 44

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ROBIN DANIEL PÉREZ PITTÍ Y JOSÉ SÁNCHEZ QUIROZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA ZONA DE POLICÍA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 45

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KENNETH FIELD CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . 47

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBEN ALBERTO MATTEUS VEGA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . 50

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID A. VITERI EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER HERNÁNDEZ PINO CONTRA LA FISCAL DÉCIMA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 53

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VIDAL RAMOS JR. CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CECILIO VARGAS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 56

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PAULO ADOLFO HERNÁNDEZ AGUILAR, JAIRO ABDIEL VÁSQUEZ RESTREPO, JORGE ENRIQUE RAMOS HERRERA Y JUAN ANTONIO MESSINAS RAMOS CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 57

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR LA LICENCIADA DINA CORTÉS EN FAVOR DE

MARVIN GUEVARA Y JORGE CANDANEDO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 57

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA MORÁN EN FAVOR DE GIOVANNI PINDER Y CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LAZARO CASABELLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE BORIS JESUS FOGEL Y SUENGAS CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 63

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR EDDIE EVARISTO GONZALEZ CONTRA EL FISCAL DE DROGAS DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 66

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEONEL PERALTA CORTEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE. HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 68

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EMANUEL RINGROSE WILLIAMS CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO PENAL DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ERNESTO TORRES SANTANA Y JOSÉ ENRIQUE CORDERO SANTANA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 73

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO A. ALLEN SHAW CONTRA EL DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 74

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD . . . . . 75

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA ANA LUISA CAL DE BORREL CONTRA LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO EJECUTIVO 434 DEL 1° DE OCTUBRE DE 1959. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 75

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO LUIS LUQUE V., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACION Y EN CONTRA DEL DECRETO No 690 DE 21 DE OCTUBRE DE 1993, EXPEDIDO POR LA ALCALDIA DEL DISTRITO CAPITAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 76

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANTONIO GONZALEZ Q., CON REPRESENTACION DEL SEÑOR JOSE R. LUTRELL Y EN CONTRA DE LA RESOLUCION N° 581 DE 1 DE JUNIO DE 1993, DICTADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, ENCARGADO Y LA RESOLUCION No 807 DE 23 DE JULIO DE 1993, QUE CONFIRMA LA ANTERIOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 80

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTA POR EL LICENCIADO DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA ANTE EL JUEZ SEGUNDO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA CONTRA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 2204 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS

MIL (2000). . . . . 83

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR EL LIC. JOSE MARIA LEZCANO YANGUEZ EN REPRESENTACION DE EL SR. ROGELIO AGUSTIN BARUCO EN CONTRA DEL AUTO REP. No.455-94-JUR. DEL 31 DE MAYO DE 1994, DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADA PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 84

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACION DE AQUILINO QUINTERO, CONTRA LA SENTENCIA N° 50 DE 21 DE JULIO DE 1997, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 86

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACION DE CARLOS ABDIEL ORTEGA, CONTRA EL ARTICULO 2 DE LA LEY 53 DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 89

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARISELA DONADO DE PECCHIO, PERSONERA QUINTA DEL DISTRITO DE PANAMA, CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N° 201 DE 30 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 92

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA SEÑORA FLORA DE ORDINOLA, CONTRA LA RESOLUCION N° 88-7-5 DE 14 DE JULIO DE 1988, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . 95

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS SOLIS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR JUAN RAMON POLL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA GOLY, S. A. Y EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE 10 DE AGOSTO DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 97

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS GARCIA MARTIN CONTRA EL PARRAFO O INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 1° DE LA LEY 28 DE 12 DE MARZO DE 1974, EL DECRETO EJECUTIVO N° 37 DE 1974 Y EL DECRETO EJECUTIVO N° 7 DE 10 DE ENERO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . 100

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL BUFETE ARTURO VALLARINO CONTRA EL AUTO N° 848 DEL 28 DE ABRIL DE 1994, DICTADO POR EL JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 104

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSE NELSON BRANDAO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACION Y EN CONTRA DE LA LEY N° 28 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1993, "POR LA CUAL SE LIMITA EL CRECIMIENTO DEL ORGANO LEGISLATIVO". MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 108

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS CONTRA EL DECRETO DE GABINETE N° 74 DE 27 DE JUNIO DE 1990, MODIFICADO POR EL DECRETO DE GABINETE N° 78 DE 18 DE JULIO DE 1990. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 110

TRIBUNAL DE INSTANCIA . . . . . 119

SUMARIO INSTRUIDO CONTRA EL DOCTOR JOSÉ MANUEL TERÁN, MINISTRO DE SALUD, POR EL

SUPUESTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, (DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA ROSA MARÍA SÁNCHEZ DE ISAZA). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 119

INCIDENTE DE PRORROGA DE LA COMPETENCIA INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SIDNEY SITTON URETA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANK LUZER PARDO Y OTROS, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ORISTELA OCARIS BATISTA BARBA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 124

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN, SEGUIDAS CONTRA EL LEGISLADOR ARCELIO BATISTA Y NELLY ALLARD, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA FÉ PÚBLICA EN PERJUICIO DE BANDERLITT LEZCANO SUIRA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 127

ACCION DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO JAVIER QUINTERO RIVERA, EN REPRESENTACION DE ERICK RAFAEL DE PUY GARCIA, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, AUTO FORMAL DE 27 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 129

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JORGE FEDERICO LEE DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ABILIO RODRÍGUEZ B. CONTRA EL OFICIO N° 519 DE 14 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 130

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO FERNANDO BASURTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 130

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAÚL OSSA, EN REPRESENTACIÓN DEL H. L. ENRIQUE GARRIDO AROSEMENA, CONTRA LA SENTENCIA DEL 24 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA SALA QUINTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 131

SALA PRIMERA DE LO CIVIL . . . . . 133

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL . . . . . 134

PEDRO PABLO ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A CRISTÓBAL ELOY LASSO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, UNO (1) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 134

LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, UNO (1) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 136

DISTRIBUIDORA XTRA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 137

BADKISINGEN REALEST, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PARQUE DE DIVERSIONES CLAI, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 144

JULIETA DE LEON Y MARITZA DE LEON DE GONZALEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE SAMUEL HUMBERTO GONZALEZ.

MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 145

ASSA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASCIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE EIDA MIREYA LARA DE HERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 146

INMOBILIARIA MARCHENA, S.A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JOSE DEL C. PEREZ ANGULO Y/O PEREZ ANGULO, S,.A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . 148

ANA MORENO JARAMILLO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD DE TITULO DE PROPIEDAD QUE LE SIGUE LUCIA MORENO JARAMILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 149

KAREN MARCELA SIERRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE JUAN CARLOS SILVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 149

CARLOS GUARAGNA RIVERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE PEDAL INTERNATIONAL CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 150

ALONSO PINZON CORRALES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LUIS GASPAR SUAREZ Y/O RADIO SOBERANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . 151

CORE TRADING, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PH PACIFIC. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . 153

VIDA PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ORCON, S. A. E IMPORTADORA PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUNÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . 154

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRITZ COMPANIES (PANAMA), INC. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . 156

JUANA CARRASQUILLA RIOS Y FELIPE GUDIÑO CARRASQUILLA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA QUE LE SIGUEN A SENEN CARRASQUILLA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 157

MAYA CHANDRU NATHANI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 160

ANA JULIA DE VELARDE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL MACHINERY AND EQUIPMENT TRADING CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 161

RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A PETROLERA DEL CARIBE, S. A. Y FRANCISCO SAMUDIO T. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 162

BRITTANIA RODANICHE RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO QUE LE SIGUE JOSE MANUEL TERAN SITTON Y GLORIA PINO DE TERAN. MAGISTRADO

PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL. . . . . 164

CORE TRADING, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PH PACIFIC. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 164

IMPEDIMENTOS . . . . . 165

FISCALIA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL Y CONSORCIO VAN DAM -SOSA Y BARBERO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL PRESENTADO POR LA NACION Y CONSORCIO VAN DAM- SOSA Y BARBERO. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓN RODRÍGUEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). 165

MORGAN & MORGAN RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 1° DE FEBRERO DE 2,000 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO INCOADO POR TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. Y ATLANTIC TURIST INVESTMENT, S. A. CONTRA FERRYS INTERNATIONAL, S. A.; TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA, INC.; EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A. FERRY DE BOCAS DEL TORO, S. A. Y ARTHUR ROBINSON. CALIFICACIÓN DE IMP. DEL MAG. ROGELIO A. FABREGA Z. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 166

IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSE A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR DARIO CARRILLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 4 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA INTERPEUSTO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y OTROS, CONTRA JOSUE LEVY, RUBEN LEVY LEVY Y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 167

RECURSO DE HECHO . . . . . 168

RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR ARIAS, FABREGA Y FABREGA CONTRA LA RESOLUCION DEL 28 DE OCTUBRE DE 1999 DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMA QUE NIEGA LA APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 1999 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO INCOADO POR FRITZ TRANSPORTATION IINTL CONTRA UNITED ARAB SHIPPING CO. (S. A. G.) Y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD. (SOLIDARIAMENTE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 168

ARIAS, FABREGA & FABREGA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA EL AUTO DEL 28 DE OCTUBRE DE 1999 DEL TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA QUE NIEGA LA APELACION ANUNCIADA CONTRA LA SENTENCIA DEL 10 DE AGOSTO DE 1998 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARTIMO INCOADO POR MORISHIGE ENTERPRISES CO. LTDA. CONTRA UNITED ARAB SHIPPING CO. (S. A. G.) Y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTDA.. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 172

RECURSO DE REVISIÓN . . . . . 177

JOSUE LEVY LEVY Y RUBEN LEVY LEVY INTERPONEN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1998, DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO DE QUIEBRA QUE LE SIGUEN A DESARROLLO VIZCAYA, S. A. ABRAHAM DAVID MIZRACHI Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 177

TRIBUNAL DE INSTANCIA . . . . . 179

PEDRO PABLO CASTILLO ALVARADO Y AGUSTIN SANCHEZ GARCIA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE EVANGELISTA FRIAS GUTIERREZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL

(2000). . . . . 179

SALA SEGUNDA DE LO PENAL . . . . . 181

AMPLIACIÓN DE SUMARIO . . . . . 182

QUERELLA INTERPUESTA POR GERARDO ALVARADO MARINE CONTRA EL LICENCIADO CARLOS AUGUSTO HERRERA, FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA Y CONTRA EL LICENCIADO RODRIGO SARASQUETA, SECRETARIO GENERAL DE LA FISCALIA AUXILIAR DE LA REPUBLICA POR DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 182

AUTO APELADO . . . . . 184

EN GRADO DE APELACION INGRESO A ESTA SALA AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A FAVOR DE MARGARITO PINEDA HERNANDEZ COMO PRESUNTO INFRACTOR DEL CAPITULO I, TITULO I, LIBRO II, DEL CODIGO PENAL EN PERJUICIO DE ARCADIO ATENCIO (Q. E. P. D.). MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 184

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO . . . . . 188

APELACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISABEL TENORIO GONZÁLEZ POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE SU HIJO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DEL DOS MIL (2,000). . . . . 188

RECURSO DE CASACIÓN PENAL . . . . . 190

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID SIMMONS, ROGELIO DE GRACIA Y MIGUEL PEÑALBA, POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE DOS MIL 2000. . . . . 190

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA GUILLERMO GOTI MUÑOZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA UNO (1) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 191

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALCIDES RAMOS ARANGO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL DOS MIL (2,000). . . . . 192

PROCESO SEGUIDO A VICENTE ANTONIO BENT INNIS POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE OLIVER JOEL DAVIS TEJADA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, NUEVE (9) MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 198

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HOLMI GUERRA PITTY Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 199

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE BYRON MENDOZA ARIAS, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . 199

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSORA DE OFICIO DE JUVENAL ALEXIS JIMÉNEZ, SINDICADO POR DELITO DE HURTO AGRAVADO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000). 200

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE ELIZABETH DE VARGAS DE MEDINA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DEL DOS MIL (2000). . . . . 201

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HUMBERTO PINEDA ARAUJO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DEL DOS MIL (2000) . . 206

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RODRIGO ERNESTO CELIS ROTH, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DEL DOS MIL (2000) . . . . 213

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANTONIO OSORIO ABREGO Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE DALLYS ALICIA RÍOS RANDOLPH Y MIXILA GUERRA DE CASTILLO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DEL DOS MIL (2,000) . . . . . 215

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE SEGUNDO MENDOZA MENDOZA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 224

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A EDWIN GONZÁLEZ MONTENEGRO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 225

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALEXANDER CHEN SMITH, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 227

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA Y MIGUEL PEÑALBA, POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 231

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CARMEN ALICIA CANDELO SALCEDO, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 232

PROCESO SEGUIDO A NANCY ARACELY SAAVEDRA G., SINDICADA POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA Y CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE LA MINISTRA DE SALUD. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (31) Y UNO DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 232

DENUNCIA . . . . . 238

SUMARIAS SEGUIDAS A ELITZA CEDEÑO Y OTROS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PÚBLICA, LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ESTADO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000) . . . . . 238

RECURSO DE REVISIÓN . . . . . 242

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EMILIO NAVARRO ROMERO, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE ELVIN JOEL ESPINOSA SAMUDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DEL DOS MIL (2000) . . . . . 242

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SILVESTRE FUENTES VALDES, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 244

REVISIÓN SOLICITADA POR MARVIN M. SALAZAR HIND, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VENTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 245

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JAVIER ANTONIO RAMOS SMITH, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 247

SENTENCIA APELADA . . . . . 248

PROCESO SEGUIDO A JOSE ALBERTO MENA MARTÍNEZ POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE EDUARDO ANTONIO VEGA Y ABDIEL VEGA MAC. FARLANE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 248

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENÓ A JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ TEJADA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES PERSONALES. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VIENTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 251

PROCESO SEGUIDO A RICARDO ANTONIO DRAKES HOWARD, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO EN PERJUICIO DE BRICEIDA ALVAREZ Y MILITZA CONCEPCION ARAUZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO H. COLLADO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 253

PROCESO SIGUIDO A ORLANDO ALEXIS BLAKE, POR DELITO DE HOMICIDO COMETIDO EN PERJUICIO DE ROGELIO WILSON (A) SIMPLE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 256

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN . . . . . 257

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ANA EMÉRITA CALAMARIS BONILLA, SINDICADA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSÉ DAVID BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 258

FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE DANIEL MORENO JULIO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE CIRILO PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 259

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL . . . . . 261

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN . . . . . 262

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MODESTO CERRUD DUARTE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL GERENTE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA INSTITUCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 262

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO BARRÍA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ JERÓNIMO HUC CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 468-D-136 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 267

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CHAVEZ MARTINEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 28 DE 10 DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 268

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS & ABREGO, ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE ERIC FIDEL SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 219-04-450 DE 3 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 277

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS HENRÍQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO ALCALDICIO N° 1312 DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO CAPITAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 280

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SILKA CORREA, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE AND WIRELESS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DPER-3553 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 280

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO QUINTERO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 29-99 DXR DE 16 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 281

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR RUILOBA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALFONSO LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 77-99, DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 282

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO CÉSAR DE LEÓN, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ARELY JESUS FUENTES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 283

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ESKILDSEN & ESKILDSEN, EN REPRESENTACIÓN DE CYBER-TECH INTERNACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 245 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y EL VICEMINISTRO DE ECONOMÍA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO PAN/95/001, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 284

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ANAYS ALVAREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACION PARA LA DEFENSA DEL PUEBLO (FUND.DEPU), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N°256-D.A.L. DICTADA POR EL MINISTERIO DE JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 286

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SABINO E. VARGAS EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA MONTANARI DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 216 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 287

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN CANIMAR IMPORT AND EXPORT, S. A., CUYO APODERADO GENERAL ES EL SEÑOR DOV BINDER, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DECA 1672-99, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE CUARENTANA AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 288

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE MARTA TRINIDAD VÁSQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 99 (130) 546 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 290

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 219-04-324 DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 291

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURIDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLCUIÓN N° 219-04-304 DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINITRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 292

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENICADO CARLOS ARAÚZ EN REPRESENTACIÓN DE DEOCLIDES MELENDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°11-97 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N°4 DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE. ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 292

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE IRMA H. KHATUM MOLLICK, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, EL DECRETO EJECUTIVO N° 221 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA NOTA N° DP-DOPA-6429 DE 15 DE

OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 296

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° JD-946 DE 10 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, Y SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 297

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA & MARRE EN REPRESENTACIÓN DE CARDOZE & LINDO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 644-97 D. G. DE 2 DE ABRIL DE 1997, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN N° 298-99 D. G. DE 28 DE MAYO DE 1999, DICTADAS POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 298

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE MARIELA SÁNCHEZ DE VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0889-99 DE 29 DE JUNIO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 299

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE HERMEL ROSAS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 99-15-D DE 20 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 300

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL DOCTOR JAVIER CARRILLO GONZÁLEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 76 DE 23 DE JULIO DE 1997, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO; Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . 301

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA WATSON Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CITIBANK, N.A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 074 DE 5 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR EL DIRECTOR DEL HIPÓDROMO Y OTROS JUEGOS DE AZAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 302

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARIO E. CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS BHIKÚ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 06-98 DE 14 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 304

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DAVID COHEN, PARA

QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DG-010-96, DE 11 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . 306

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NELSON ROJAS, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO PARILLON, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 27-99 D, DE 4 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . 314

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARELLANO, CHALHOUB & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ISHMAEL BAILEY THOMAS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 09-97 D.N. DE 23 DE JULIO DE 1997, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 3 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 315

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ARACELLY MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE ANTONIO JOSÉ ACOSTA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 019, DE 14 DE ENERO DE 1999, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 317

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIOLA MENDIETA DE DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE KARELINA LUNA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL N° 99 (2210-22-2) 20 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 319

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CARLOS MERLANO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DV-19-97 DE 19 DE AGOSTO DE 1997, DICTADA POR EL VICEMINISTRO DE VIVIENDA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA AREAS REVERTIDAS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE HUGO NAVARRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 99-15-D DE 20 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 321

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SILKA A. CORREA EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° JD-1466 DE 23 DE JULIO DE 1999, EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 322

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DE GRACIA ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE PETER ROMERO GRENAL, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 195 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 323

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HILARIO BELLIDO EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO MORALES Q., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4150-97 DNP DE 10 DE OCTUBRE DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 325

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIOLA MENDIETA DE DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE GLORIA MITCHELL PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 200-99 (D) DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 328

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ PÍO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN DE BERTA G. DE ÀLVAREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 220 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 329

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ PÍO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN DE DIOMILA D. DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 220 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 330

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE JULIO SANTAMARÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN R. L. C. S. N° 027 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 331

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENZO EDUARDO POLO, EN REPRESENTACIÓN DE DAVID EDWARD SIMPSON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUSIÓN N° 714-04-115-98 DE 7 DE JULIO DE 1998, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE ADUANAS ZONA OCCIDENTAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 332

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, EN REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° REC-002-99 DE 5 DE AGOSTO DE 1999, PROFERIDA POR LA COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (CLICAC), ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 333

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMIDIO MANZANÉ EN REPRESENTACIÓN DE MATILDE DE LA CRUZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20-2000 DE 8 DE FEBRERO

DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000. . . . . 334

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN RENÉ MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARIBEL COCO DE GARIBALDI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1752-99-DNP DE 1° DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000) . . . . . 334

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILIA DE MONTÚFAR EN REPRESENTACIÓN DE ARGELIS AGUILAR BARRIOS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 203-99 (D) DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, Y SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 335

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILIA CEDEÑO DE MONTÚFAR, EN REPRESENTACIÓN DE MIRKA MORÁN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 262-99 (D) DE 8 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ASÍ COMO SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 337

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO ROJAS C., EN REPRESENTACIÓN DE EDILIA DE MONTUFAR, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 198-99 (D) DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, EL ACTO COFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 339

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD . . . . . 340

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ARMANDO SALAZAR (REPRESENTANTE DEL CORREGIMIENTO DE RÍO ABAJO), PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 14 DE FEBRERO DE 2000, POR MEDIO DE LOS CUALES SE DECLARA NULO UN VOTO EMITIDO A FAVOR DE ARMANDO SALAZAR, Y SE REALIZAN NUEVAS ELECCIONES PARA ELEGIR A UN NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL, REALIZADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 340

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS VILLALAZ EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N°6,534 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1995, SUSCRITO POR EL ENTONCES MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, Y POR EL ADMINISTRADOR DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 343

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA CIRCULAR DE 1 DE MARZO DE 1999, EXPEDIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EL ACUERDO N°19-99 DE 21 DE ABRIL DE 1999, DICTADO POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE JORGE FABREGA P.

PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 344

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA DIXA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ELIDA ORTEGA GUERRA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ADJUDICACIÓN MUNICIPAL DE UN LOTE DE TERRENO DE ELIDA DEL CARMEN VILLAMONTE ORTEGA Y OTROS, Y QUE CULMINÓ CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 210 DE 26 DE FEBRERO DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 344

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ASCENCIÓN BROCE, EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS LITERALES A Y B DEL DECRETO EJECUTIVO N° 302 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 345

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA BAHIA LAS MINAS, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° JD-1700 DE 10 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 347

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR ALVARADO, LEDEZMA & DE SANCTIS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO GARCÍA, PATRICK DILLON, ALLAN BAITEL, TETEL DE CONTRERAS, SHANINA CONTRERAS, JULIO CONTRERAS, JOSÉ CHIRINO, MARÍA DE CHIRINO, SOUHAILA CHIRINO, LUIS CHIRINO, FRANCISCO ALVARADO, MARIELA CALDERÓN, AVELINA DE CALDERÓN, RICARDO SOTO, CECILIA ALMENGOR, ROSA ELVIRA DE ROMERO, JAVIER ROMERO, ANNETTE DE ROMERO, YOLANDA MARCO SERRA, LUIS CASCANTE Y RAQUEL DE CASCANTE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 122 DE 20 DE MAYO DE 1998, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA SE DICTEN OTRAS DISPOSICIONES EN SU REEMPLAZO. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA LÓPEZ. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 349

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS GONZÁLEZ RAMÍREZ EN REPRESENTACIÓN DE CERVECERÍA DEL BARÚ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 8 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA JUNTA DE CARNAVAL 2000 DE PENONOMÉ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 352

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL VANEGAS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CORREGIMIENTO DE LA COMARCA KUNA DE MADUNGANDI, OVIDIO ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHEPO, CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 353

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DOCTOR PEDRO MORENO CESPEDES Y EL LICENCIADO GABRIEL D ANNUNZIO ROSANIA, EN SUS PROPIOS NOMBRES Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 Y 28 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 70 DE 6 DE AGOSTO DE 1999, EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 354

IMPEDIMENTO . . . . . 355

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD EN REPRESENTACI{ON DE MANUEL FUENTES, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-1531 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1998, EXPEDIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000). . . . . 355

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO RICARDO REBOLLEDO ISTURAIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0482-99 DE 6 DE ABRIL DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 356

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE MARIANA DE MCPHERSON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0481-99 DE 6 DE ABRIL DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 357

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE RODRIGO ARQUIMEDES QUEZADA CORONADO PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0385-99 DE 19 DE MARZO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 358

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR MONTEMAYOR ABREGO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0615-99 DE 3 DE MAYO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 359

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE ESTRELLA ASUNCIÓN OLCESE JIRÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-210-99 DE 9 DE FEBRERO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 360

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS GABRIEL MUÑOZ SAMUDIO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0407-99 DE 24 DE MARZO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 361

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MAUAD & MAUAD EN REPRESENTACIÓN DE COMEXA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1-0203-99 DE 12 DE MAYO DE 1999, EXPEDIDO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 362

JURISDICCIÓN COACTIVA . . . . . 363

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RENALDO MELÉNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS OSES DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL JUZGADO EJECUTOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 363

TERCERIA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE DARSHAN SINGH, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A ORDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 365

EXCEPCION DE ILEGITIMIDAD DE PERSONERIA, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GILBERTO BOSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN FILOPOULOS Y/O INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO LE SIGUE AL HOTEL CENTRAL Y/O INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., Y/O PREVEZA, S. A. Y/O AZBEL TRISTAN Y/O JUAN FILOPOULOS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 365

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL . . . . . 369

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FÉLIX ALBERTO PÉREZ ESPINOSA, EN REPRESENTACIÓN DE TUNA FISHERY ENTERPRISES, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 6 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ELOY CORONADO -VS- TUNA FISHERY ENTERPRISES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 369

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GERARDO SIMEÓN EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUI LAND COMPANY, CONTRA LA SENTENCIA DE 10 DE JULIO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS ALBERTO SUÑE -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 371

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA EN REPRESENTACIÓN DE DIEGO AGUILAR, CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DIEGO AGUILAR -VS- SUPER DORADO, S. A., Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 375

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA MURGAS & MURGAS EN REPRESENTACIÓN DE ANDYELENA S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE LUIS DE PUY GARCIA -VS- ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A., Y DE PUY FAGIA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 377

TRIBUNAL DE INSTANCIA . . . . . 382

DECLARATORIA DE DESACATO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE NICASIO ALBAEZ ROSALES, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, POR INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 382

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES . . . . . 385

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL . . . . . 386

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, EN MATERIA CIVIL, PROVENIENTE DEL ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE INGLATERRA DENTRO DEL PROCESO INTERPUESTO POR ROBIN MICHAEL HEMING GILKES EN CONTRA DE VENIZELOS A. N. E., S. A. y OMEN MARINE COMPANY LIMITED. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 386

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN AMSTERDAM DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE ADELANTAN EN EL PROCESO PENAL EN CONTRA DE FIREDICH ADOLF SPECHT Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 387

CARTA ROGATORIA . . . . . 388

EXHORTO N° 6946/88 POR DEMANDA DE FILIACIÓN PATERNA EXTRAMATRIMONIAL, PROMOVIDA POR GRACIELA RODRÍGUEZ CASTEL CONTRA GERARDO ANTONIO SIMEON MARTINEU, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 18 DE MADRID ESPAÑA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 388

CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DEL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EL DISTRITO DE NEVADA, RELATIVO AL PROCESO CIVIL POR JEAN ROUSH CONTRA BOBBY BEROSINI, SR. ET. AL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . 390

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA . . . . . 391

SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA EL 12 DE JUNIO DE 1996 POR LA CORTE DEL JUZGADO 11 JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE-MIAMI FLORIDA, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A LOS SEÑORES DORIS GUTIERREZ Y OMAR ENRIQUE ADAMES. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 391

DALIDES E. CRUZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO DEL CONDADO DE DALE, ALABAMA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO DONDE SON PARTES LANCE EUGENE OLDHAM Y DALIDES ENEIDA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . 392

SANDRA LIBRADA MEDINA GONZÁLEZ (NOMBRE USUAL SANDRA CALDERA), SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA EL 3 DE MARZO DE 1998, POR EL JUZGADO DE CIRCUITO DEL UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN EL CUAL SE DISUELVE EL MATRIMONIO CONTRAIDO CON EL SEÑOR MARVIN JOSÉ CALDERA SOLANO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 394

SAMUEL LEVY MALCA, SOLICITA RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO, DECRETADA EN EL JUZGADO DIECISIETE DE FAMILIA DE SANTE FÉ DE BOGOTÁ, D. C., CON FECHA 25 DE ENERO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 395

EXHORTOS . . . . . 396

CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEJICANOS, RELATIVA A LA CONTROVERSIA DE ORDEN FAMILIAR SOBRE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MÓNICA CECILIA LÓPEZ DE LA VEGA EN CONTRA DE GUSTAVO ZETH RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 396

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ALLEGANY TRADING CORP., DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS PROMOVIDO POR ROBERTO GUILLERMO AGUIRRE MATOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . 398

EXHORTO LIBRADO EN LA CAUSA N° 9552/99 CARATULADA "N.N. S/ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS" POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°. 12 DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000) . . . . . 399

CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FEDERAL N° 11, SECRETARIA 21. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 400

EXHORTO LIBRADO EN LA CAUSA N° 4031 CARATULADA ALIMO S.A. DE CONTRABANDO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO NACIONAL DE LO PENAL Y ECONÓMICO N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL DE REPÚBLICA ARGENTINA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 402

EXHORTO NÚMERO 4156/99 PROCEDENTE DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NO. 7 DE BURGOS, DENTRO DEL PROCESO DE ALIMENTOS PROPUESTO POR SANDRA SOFIA RINGRESSI GONZALEZ CONTRA SANDRO ALFREDO LUIGI RINGRESSI PRANDI. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 403

EL DECIMO NOVENO (19°) JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DENTRO DEL PROCESO "TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR NO PAGO DE RENTAS" PROPUESTO POR BANCO BICE CONTRA BURKETOWN INVESTMENT INC. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 404

EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N°.7, SECRETARÍA 14, DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DENTRO DE LOS AUTOS CARATULOS "SATELITE SHIPING LIMITED C/DEL BENE SACIF S/ORDINARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 406

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN . . . . . 407

INOCENTE HERRERA GONZÁLEZ INTERPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN CONTRA DEL LICENCIADO LUIS ALBERTO ARBOLEDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 407

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DOMINGO BATISTA, CONTRA LA LICENCIADA NIVIA ABREGO, POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . 409

TRIBUNAL DE INSTANCIA . . . . . 411

LAURA JARAMILLO DE BARRIO INTERPONE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA EL LICENCIADO LUCIO BERNAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 411

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL WILSON MATIAS, JUAN BAUTISTA PÉREZ R. , SERGIO AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y SILVIO C. CHAVERRA G. CONTRA EL LICENCIADO MANUEL GONZÁLEZ C., POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ,

DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 414

CATALINA DE YANIS INTERPONE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA LA LICENCIADA CINTIA OLMEDO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . 418

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ROGELIO FÁBREGA ZARAK, DENTRO DE LA CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO, REFERENTE AL JUICIO QUE POR COBRO DE BOLÍVARES SIGUE LA SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR, C.A. Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA CONTRA FIELD REAL STATE CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2,000) . . . . . 421

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA MITZI LISBETH ABREGO GONZÁLEZ CONTRA EL LICENCIADO PEDRO TORRES TORRES POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 422

INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA LICENCIADA ERAYDA SIMITI, EN REPRESENACIÓN DE MARICELA CEBALLOS DE RUDAS, DENTRO DEL PROCESO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO, INTERPUESTO POR LA SEÑORA YADIRA JIMENEZ ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000). . . . . 426

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR FAKIR MOHAMED CASIN ABOVAD CONTRA EL LICENCIADO LEONEL URRIOLA CASTILLO POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 427

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR FERNANDO IGLESIAS VARGAS CONTRA LA LICENCIADA MARÍA CRISTINA RUIZ POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000). . . . . 428

**ÓRGANO JUDICIAL**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**PLENO**

**MARZO 2,000**

## AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

**AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO EDRULFO ESPINALES MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE ANEL GUERRA CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE CHIRIQUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.**

**VISTOS:**

**El licenciado EDRULFO ESPINALES MIRANDA, actuando en representación de ANGEL GUERRA, ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 27 de enero de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que decidió no admitir el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto contra el Auto No. 1312 de 10 de agosto de 1998 emitido por el Juez Primero del Circuito de Chiriquí.**

**Según se ha podido apreciar, el fallo apelado resolvió no admitir la acción de amparo en base a las tres consideraciones que a continuación se describen:**

**En primer lugar, se expresa que el acto atacado en amparo no constituye una orden de hacer o de no hacer pues se trata de un auto que admite una demanda ejecutiva, de manera que, a juicio del sentenciador, "en él no se obliga a hacer o no algo". En este sentido se cita un fallo de la Corte publicado en la obra "La Jurisdicción Constitucional" de Edgardo Molino Mola (Primera Edición, 1998, págs 583-584), en cual se señaló que el acto jurisdiccional mediante el cual se admite una acusación particular no contiene orden de hacer alguna, pues en estos casos el juzgador se limita a examinar si el libelo correspondiente cumple los requisitos de procedibilidad que establece la ley.**

**En segundo lugar, el sentenciador observa que el amparista fundamenta su desacuerdo contra el auto que libró mandamiento de pago, en que el funcionario demandado no tomó en cuenta que el título ejecutivo no reunía los requisitos de ley tratándose de canones de arrendamiento. Sobre este punto expresa que el amparo no es un medio para entrar a valorar pruebas y cita jurisprudencia de la Corte, contenida en la citada obra de Jurisdicción Constitucional (pp. 579-580), donde ha reiterado dicho señalamiento.**

**Finalmente se argumenta que la orden impugnada no reúne el requisito de inminencia en su revocatoria, ya que el amparo fue interpuesto después de tres meses de la fecha (6 de octubre de 1999) en que se dictó la resolución que confirma el auto atacado. Igualmente, cita jurisprudencia de la Corte en la que se considera que es evidente la ausencia de urgencia en la solicitud de revocatoria de la supuesta orden atacada, pues transcurrieron casi tres meses desde la fecha en que el afectado tuvo conocimiento de la decisión de segunda instancia que le fue adversa, sin que hubiese presentado la acción de amparo (Cfr. fs. 64).**

**Como se ha podido apreciar, en este caso la orden objeto de amparo está contenida en el Auto No. 1312 de 10 de agosto de 1998 dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí, visible a fojas 43, mediante el cual se decide: ADMITIR el proceso ejecutivo incoado por RUBEN ANGUIZOLA contra ANEL GUERRA, CITAR al demandado para que reconozca la firma estampada en el documento aportado como prueba y si de ello resulta mérito, se libre mandamiento de pago y se prosiga con las diligencias señaladas en el artículo 1667 del Código Judicial.**

**Al examinar la naturaleza del acto atacado, en concordancia con los cargos que contra el mismo formula el amparista (sobre la supuesta falta de requisitos del título ejecutivo), esta Corporación concluye, en el mismo sentido de la sentencia apelada, que no se puede considerar que constituya o contenga una orden de hacer susceptible de amparo, pues se trata de una resolución producto del trámite a cumplir por el sentenciador dentro de un proceso ejecutivo, donde no**

se observa una actuación arbitraria originada en la voluntad o capricho de la autoridad que no se ajuste a la respectiva regulación legal.

Como es sabido, para efectos de la acción de amparo y conforme a nuestro ordenamiento jurídico, se consideran "órdenes" los mandatos provenientes de la voluntad abusiva o arbitraria de un servidor público, por la que se impone a una persona la ejecución o no ejecución de un acto, de lo cual resulta violado un derecho que la Constitución le reconoce y garantiza.

En este orden de ideas, además de lo anotado por a-quo, la Corte ha podido observar, según se infiere del libelo de amparo, que el accionante pretende que se examinen aspectos procesales que realmente no comprenden la conculcación de algún derecho o garantía de orden constitucional.

Consecuentemente, el hecho de que el acto impugnado no cumpla con la condición de contener o constituir una ORDEN, lo cual es suficiente razón formal para no admitir el amparo, y considerando los otros reparos que se han hecho en este caso, esta Superioridad procede ha confirmar el fallo apelado.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 27 de enero de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado EDRULFO ESPINALES MIRANDA, en representación de ANEL GUERRA, contra EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LIC. JULIO A. CANDANEDO, EN REPRESENTACION DE CAFETALES, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 007 DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHIRIQUI. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado JULIO ANTONIO CANDANEDO, en representación de CAFETALES, S. A. contra el DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI.

Al encontrarse la presente acción constitucional en estado de resolver, a ello se pasa, previa las siguientes consideraciones.

Observa esta corporación de Justicia, que la resolución atacada mediante el recurso vertical, resulta ser la Resolución de 8 de febrero del 2000, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, dentro de la Acción Amparo de Garantías Constitucionales arriba descrita, la cual decidió NO ADMITIR la referida acción.

Así las cosas, observamos que el promotor de la presente acción

constitucional, ahora recurrente el Licenciado JULIO ANTONIO CANDANEDO, en representación de la sociedad CAFETALES, S. A., pretende con la alzada, se revoque la Resolución de 8 de febrero del 2000, antes citada, en la cual el inferior jerárquico decidió NO ADMITIR la acción de amparo interpuesta contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución No. 007, de 2 de febrero del 2000, dictada por el Director Regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí, en la se señaló lo siguiente:

"RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Deja sin efecto la Resolución No. 004 de 19 de enero de 2,000.

ARTICULO SEGUNDO: Acoger la reconsideración solicitada por los demandantes, en tal sentido ordena el reintegro inmediato del trabajador Agapito Aguilar a su puesto de trabajo y a la vez se ordena el pago de salarios caídos a la Empresa Cafetales, S. A. desde la fecha del despido hasta que se haga efectivo el reintegro." (fs. 14-15).

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al resolver en primera instancia el amparo de garantías constitucionales decidió no admitirlo, basándose fundamentalmente en los siguientes términos:

"La revisión del amparo que interpone Cafetales, S. A. permite advertir que no reúne los requisitos que contempla la norma transcrita, en su numeral 2° ya que, la decisión emitida por el Director Regional de Trabajo es susceptible de impugnación por la vía del proceso abreviado, al tenor de lo que dispone el artículo 981 del Código de Trabajo". (fs. 19-20).

Sobre el recurso objeto de estudio, el Pleno coincide con lo expresado por el tribunal de primera instancia, en cuanto a que antes de admitir la presente demanda, debe considerarse que la acción de amparo de garantías constitucionales puede interponerse contra resoluciones judiciales cuando se hayan agotado los medios y trámites, previstos en la ley, para la impugnación de la resolución judicial de que se trate. En el caso en estudio, la Resolución No. 007 de 2 de febrero del 2000, dictada por el Director Regional del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la Provincia de Chiriquí, es susceptible de impugnación por la vía del proceso abreviado, tal como lo señala el Artículo 981 del Código de Trabajo.

La Corte ha señalado en diversas ocasiones que el Amparo Constitucionales sólo es procedente en aquellos casos en los cuales no existen medios procesales idóneos para impugnar efectivamente un acto emitido por un servidor público, ya que no es factible alcanzar el objeto perseguido, acudiendo al empleo del recurso extraordinario de Amparo que, por supuesto, debe conservar siempre su condición excepcional, para evitar que se convierta simple y llanamente en una instancia adicional a los procesos.

En virtud de lo anterior, y tomando en consideración que en el caso sub-judice, no encontramos evidencia alguna, que demuestre que efectivamente el recurrente haya agotado la vía establecida para ello, no puede decidirse entonces, que se ha violado las garantías fundamentales consagradas en nuestra Carta Magna, por lo que se procede entonces, a confirmar la resolución del tribunal a-quo.

Por lo tanto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 8 de febrero del 2000, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, que NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovido por el Licenciado JULIO ANTONIO CANDANEDO, en representación de CAFETALES, S. A. contra el DIRECTOR REGIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL DE LA

PROVINCIA DE CHIRIQUI.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JULIO A. CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE CAFETALES, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 006 SJ-2000, DICTADA POR EL DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHIRIQUI, MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación de Justicia el expediente contentivo de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado JULIO ANTONIO CANDANEDO, en nombre y representación de CAFETALES, S. A., contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. 006 SJ-2000 de 2 de febrero de 2000 dictada por el Director Regional de Trabajo de Chiriquí, mediante la cual ordena el reintegro del trabajador ROBERTO MIRANDA a su puesto de trabajo en la empresa CAFETALES, S. A.

La resolución apelada fue proferida el 8 de febrero de 2000 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y en la misma resolvió no admitir la referida acción de amparo, en base a las siguientes consideraciones:

En primer lugar, expresó el tribunal que el punto fundamental que se extrae de los hechos de la demanda es el señalamiento relativo a que la resolución atacada se contradice con el texto del artículo 978 del Código Laboral, debido a que el funcionario estimó que para la procedencia del reintegro solo se exige la presentación de pruebas de la relación de trabajo, cuando lo que se debe acreditar es la condición de trabajador amparado por el fuero sindical. Por ello, considera vulnerados los artículos 32 y 17 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, para decidir la admisibilidad de la demanda de amparo, el tribunal observa que respecto a este tipo de resolución, que ordena el reintegro de un trabajador, el artículo 981 del Código de Trabajo establece:

> "El empleador puede impugnar el mandamiento dentro de los tres días siguientes a su notificación, en cuyo caso se seguirán los trámites del proceso abreviado de trabajo. En este sólo se resolverá respecto a la existencia de la relación de trabajo, del despido o del fuero."

Conforme a lo expuesto, indica el sentenciador, el amparista "contaba a su favor con la impugnación de la resolución que ordena el reintegro" (fs. 19).

En ese sentido se enfatiza en que la Corte ha reiterado en diversos fallos que es necesario agotar los medios ordinarios de impugnación para después utilizar el amparo como medio reparador de los derechos fundamentales que se dicen lesionados (Veáse sentencias de 29 de mayo de 1992, 27 de enero de 1993, 13 de enero de 1994).

Debido a lo expuesto se estimo procedente no admitir la acción de amparo.

Por su parte el amparista sostiene que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial desconoce que la resolución del Director Provincial de Trabajo, atacada en amparo, no era susceptible de recurso ordinario dentro de la vía administrativa y, como consecuencia de ese desconocimiento, equivocadamente razonó que el reintegro tenía que ser impugnado a través de lo que establece el artículo 981 del Código de Trabajo, "asimilando la expresión que utiliza el legislador en el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, con lo señalado en la ley laboral que trata de un proceso y no de un recurso que es a lo que se refiere el artículo 2606 del Código Judicial" (fs. 25). Es decir, que confunde lo que es proceso impugnativo con recurso impugnativo.

Al examinar lo que, en síntesis, plantea el apelante contra las consideraciones expuestas en la resolución de amparo, la Corte debe aclarar que cuando el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial dice que sólo procederá el amparo "cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley" para la impugnación de la resolución de que se trate, no se está circunscribiendo a los recursos ordinarios de impugnación, como pretende hacer ver la censura, sino que incluye todos los medios de defensa disponibles a favor del afectado, entre los que quedan comprendidos el proceso abreviado, como en este caso, y también la vía o proceso sumario cuando, por ejemplo, se ataque el auto que libra mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo hipotecario por jurisdicción coactiva (con renuncia de trámite) (cfr. fallos del Pleno de 23 de mayo de 1997 y 11 de enero de 1999).

Por tanto, esta Superioridad comparte el criterio vertido en la sentencia apelada, pues resulta evidente, de acuerdo a las normas que regulan el proceso de reintegro (arts. 978 a 983), que el amparista podía impugnar la orden de reintegro emitida por la Dirección General o Regional de Trabajo, siendo que, para efectos de tal impugnación, se seguirían los trámites del proceso abreviado de trabajo, el cual se desarrolla conforme a las debidas garantía procesales a favor de la partes, como lo son las notificaciones, presentación de pruebas, realización de audiencia y derecho de apelar contra la sentencia que mantenga la inamovilidad o que la revoque (Cfr. art. 991 del C. de Trabajo).

De manera que, al no cumplirse con el presupuesto fundamental del agotamiento de la vía, el amparo no puede admitirse.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 8 de febrero de 2000, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por CAFETALES, S. A. contra la Resolución de 2 de febrero de 2000 dictada por el DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO DE CHIRIQUÍ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR RAUL EDUARDO VACCARO EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS VACCARO MORA, CONTRA EL JUEZ PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia del amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado Raúl Vaccaro actuando en representación de Carlos A. Vaccaro, contra la orden de hacer contenida en la resolución No. 1038 de 16 de octubre de 1998, dictada por el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial.

La resolución impugnada

Se trata de la Sentencia de 13 de julio de 1999 mediante la cual el Primer Tribunal Superior de Justicia decide no admitir la acción de amparo antes descrita, promovida contra el Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, fundamentándose en el siguiente argumento:

> "Ahora bien, pese a lo antes expresado el Tribunal ha de declarar como manifiestamente improcedente el amparo propuesto por el señor CARLOS A. VACCARO MORA (ver Artículo 2611 del Código Judicial, como quedó reformado por el Decreto de Gabinete No. 50 de 20 de febrero de 1990), pues el mismo, en esta oportunidad, enfrenta un obstáculo de orden jurisprudencial que imposibilita su admisibilidad.
>
> Y es que, agrega el Tribunal, en sentencia reciente, de fecha 21 de agosto de 1998 dictada en ocasión de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el señor Aldo López Tirone contra la Juez Segunda Seccional de Menores del Primer Circuito Judicial de Panamá, el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia dejó sentado que las decisiones tamporales en asuntos de familia, como resulta ser la materia que se trae en el auto atacado por vía del presente amparo (ver fojas 12-20), no cabe ser impugnada mediante esta acción de carácter extraordinaria. Se expresó así nuestro máximo Tribunal de Justicia en la parte pertinente de la aludida resolución judicial:
> ...
> Debemos destacar que esta decisión posee una estabilidad temporal condicionada, ya que ante el surgimiento posterior de elementos que demuestren la variación en las condiciones familiares, se podría dejar sin efectos la resolución atacada. Lo anterior nos lleva a concluir que no es el amparo la vía idónea para deslindar este tipo de controversias, más aun cuando ello implica una valoración de las probanzas, materia que trasciende la competencia del tribunal . (Lo subrayado es el del Tribunal)."

La apelación

El amparista al proponer la alzada sostiene básicamente que en Panamá no se sigue el sistema de obligatoriedad de los precedentes, y que en todo caso no se ha registrado un mínimo de tres pronunciamientos uniformes que constituyan doctrina probable, en el sentido de que las decisiones en asuntos de familia poseen estabilidad temporal, y que su examen implica una nueva valoración de la pruebas, desbordándose en consecuencia, la competencia del Tribunal de amparo.

Por otro lado, el artículo 2606 del Código Judicial autoriza la interposición de amparo contra resoluciones judiciales sin restringir la promoción de éste en materia de menores y de familia ya que ello niega "anticipadamente la posibilidad de remediar oportunamente la producción de un daño irreparable o la prolongación de la violación de un derecho."

En lo concerniente a la orden impugnada manifiesta el amparista que la "imposición de un reintegro al nuevo domicilio de la madre, a pesar de la opinión reiterada de los menores adolecentes, en el sentido de pedir que no se les obligue a regresar a un lugar que ellos rechazan y adversan; lesiona el derecho que como personas tienen estos menores de expresar sus ideas, su pensamiento y

su voluntad."

Continúa argumentando el recurrente que "La Constitución Política y los Convenios Internacionales, aprobados por nuestro país, sobre protección de la población minoril, consagran el derecho de los niños a expresar su opinión, a ser consultados y escuchados sobre todo proceso que les afecte y considerar sus opciones sobre la permanencia con uno de sus padres, en los casos de separación o disolución del matrimonio." Ello se plantea dentro del contexto en el cual se verificó la huida aterrorizada por parte de los menores Carlos y Franco Vaccaro del ambiente que rodea a la madre buscando refugio en el hogar de sus abuelos y su padre."

Opinión de la Corte

Observa la Corte que el problema medular planteado a través de la alzada se circunscribe al hecho de que en opinión del amparista, el tribunal primario al no admitir el amparo propuesto, desconoció los derechos constitucionales de sus menores hijos de 13 y 14 años respectivamente, puesto que dichos menores manifestaron su preferencia en permanecer bajo los cuidados de su padre y no bajo la tutela de su madre.

Es decir, no se reconoció el derecho de los menores a expresar su opinión con respecto al familiar con el cual desean vivir, sino que por el contrario y contra su voluntad, se les obliga a regresar a un medio que les es hostil. (El materno)

Sin embargo, estima la Corte que el planteamiento que se propone en el presente amparo tiene la finalidad de que la Corte pondere el caudal probatorio que obra en el expediente principal, que no ha sido aducido como prueba en este proceso constitucional y que, en consecuencia, se le asigne mayor valor a la manifestación de voluntad de los menores con relación a su deseo de permanecer con su padre. Este examen valorativo convertiría a la Corte en un tribunal de instancia con jerarquía superior, con la misión jurisdiccional de decidir acerca del futuro inmediato de los menores de conformidad con la pruebas antes mencionadas.

En este sentido, la Corte ha expresado con anterioridad, que la revisión del trabajo valorativo que hace el Juzgador en una causa determinada no es parte de sus funciones, ya que se convertiría en un tribunal de tercera instancia y se desconocería que el amparo ha sido instituido como un mecanismo para enderezar situaciones de infracción de garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República. (Cfr. fallo de 4 de septiembre de 1998). Y aun cuando este trabajo valorativo fuera permisible, tampoco cuenta la Corte con la pruebas necesarias para concluir sobre el objeto de dicho proceso de menores.

Por otra parte, se advierte que el Juzgador en su oportunidad valoró la manifestación de voluntad de los menores en cuanto a permanecer a lado de su padre y no de su madre, siendo que pareciera desprenderse del fallo y de la sentencia que la confirma, que la decisión de que retornaran a la casa materna obedeció a la protección de los mejores intereses de los menores.

Finalmente en cuanto al argumento de que en Panamá no se sigue el sistema del precedente jurisprudencial es necesario acotar, que la Corte al plasmar su criterio en las sentencias que emite, tiene no sólo la finalidad de decidir un caso concreto, sino también de orientar la jurispruedencia. Lo anterior tomando en cuenta que al presentarse un caso parecido, debe tomar una decisión igualmente parecida para efectos de unificar la jurisprudencia, dar un trato igualitario a quienes accionan antes esta Corporación Judicial y brindar certeza jurídica a los administrados.

Ello significa que un cambio de posición o giro en la jurisprudencia involucra un análisis razonado que amerite el cambio de criterio, el cual y de

igual manera debe ser aplicable a casos futuros dentro de los parámetros del que sirve de precedente. Por consiguiente, no es cuestionable que los juzgados de circuito y los tribunales superiores aplique la jurisprudencia vertida por esta Alta Corporación de Justicia.

En el caso que nos ocupa, la Corte efectivamente señaló que el amparo no es el medio idóneo para tratar de enervar las resoluciones en los que se diluciden situaciones de menores, ya que la naturaleza de dichas resoluciones conlleva estabilidad temporal condicionada debido a que tales relaciones son dinámicas y pueden variar con el paso del tiempo. En consecuencia, una resolución en materia de tutela de menores puede modificarse si surge algún elemento que amerite revisión, y por tanto, su carácter no es absolutamente definitivo. (cfr. art. 825 C. Fam.).

En mérito de lo expresado, La Corte Suprema PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 13 de junio de 1999, proferida por el Primer Tribunal de Justicia, donde no admite el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el señor CARLOS AUGUSTO VACCARO MORA contra el Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO FABREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICDO. RAUL TRUJILLO MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ confirió poder al Licenciado RAÚL TRUJILLO MIRANDA con la finalidad de que, en su nombre y representación, interpusiera acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en el edicto N° 239 de 27 de octubre de 1999, mediante el cual el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial notificó el Auto de 26 de octubre de 1999, proferido por ese mismo tribunal dentro del Proceso Abreviado de Impugnación de Reintegro propuesto por la señora DE GUTIÉRREZ contra JAIME ALBERTO CABALLERO.

De acuerdo con el amparista, la orden mencionada violenta de manera directa por omisión la garantía constitucional establecida en el artículo 32 de la Constitución Nacional, toda vez que "no se ha hecho 'conforme a los trámites legales' ... privándola de ejercer los recursos de impugnación que la ley le confiere en contra del acto de 26 de octubre de 1999, esto es, el recurso de casación.". Agrega que conforme al numeral 1 del artículo 877 del Código de Trabajo se debe notificar personalmente la primera resolución que se dicte después de estar paralizado el proceso por más de un (1) mes y que el artículo 879 de ese mismo cuerpo de leyes dispone que la sentencia de segunda instancia se notificará por edicto, pero que no estamos en presencia de una sentencia, pues la resolución notificada no decide sobre pretensiones ni excepciones sino que decreta la nulidad de lo actuado. Finalmente, cita pronunciamientos de la Corte

en los que se revocan órdenes que conculcan el debido proceso "como es la orden de notificación realizada indebidamente, lo cual ha sucedido con el auto dictado el 26 de octubre de 1999".

Expuestos los cargos, el Pleno procede a confrontarlos con los textos constitucionales que se aducen violados, para establecer si se infringieron las garantías constitucionales invocadas.

En primer término, observa el Pleno que el presente Amparo se interpone contra un Edicto de notificación de una Resolución proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro de un proceso abreviado, como lo es la impugnación de la orden de reintegro de un trabajador. En ese sentido, es necesario señalar que el edicto de notificación, ahora impugnado, per se, no constituye ni contiene en sí una orden de hacer, pues éste simplemente representa una manera de informar a las partes de lo resuelto por el tribunal.

Ahora bien, ciertamente que esta Superioridad ha concedido acciones de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se han hecho notificaciones indebidamente o inobservando las disposiciones procesales pertinentes y por ende infractoras del principio del debido proceso.

Sin embargo, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, "sólo procederá la acción de amparo cuando se haya agotado los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate". La norma dispone como condición previa para la admisión de un amparo el agotamiento de los medios ordinarios de impugnación -principio de definitividad- que puedan ejercerse contra la orden pronunciada.

En ese orden, se observa que el artículo 889 del Código del Trabajo, que se refiere a las notificaciones hechas en forma distinta a las expresadas en ese Código, indica que las mismas son nulas pero se advierte en el párrafo final de esta disposición que "la petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente", vía ésta que de acuerdo a las constancias procesales no ha sido agotada por el recurrente.

Por otra parte, en el presente caso se está en presencia de un proceso de conocimiento contemplado en el capítulo IV del Título X del Libro IV del Código del Trabajo, donde el artículo 991, que es la única norma de este capítulo, señala que en este tipo de procesos se aplicará las disposiciones sobre procesos comunes, "sujetos a las siguientes normas especiales:

1) ...

2) Todas las notificaciones se harán por edicto, salvo la de la demanda a la parte demandada que será personal".

Se trata de una norma especial de procedimiento, donde no se deja establecido que en el pronunciamiento abreviado, cuando el Tribunal Superior se excede del término de un mes para proferir su decisión tenga que hacer necesariamente la notificación personal.

En tales circunstancias como inicialmente esta demanda fue admitida lo procedente es la declaratoria de no viabilidad de la acción propuesta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado RAÚL TRUJILLO MIRANDA en nombre y representación de MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ, contra el Edicto N° 239 de 27 de octubre de 1999 por medio del cual el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial notificó la Resolución de 26 de octubre de 1999.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO FABREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICDO. RAUL TRUJILLO MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ confirió poder al Licenciado RAÚL TRUJILLO MIRANDA con la finalidad de que, en su nombre y representación, interpusiera acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en el edicto N° 239 de 27 de octubre de 1999, mediante el cual el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial notificó el Auto de 26 de octubre de 1999, proferido por ese mismo tribunal dentro del Proceso Abreviado de Impugnación de Reintegro propuesto por la señora DE GUTIÉRREZ contra JAIME ALBERTO CABALLERO.

De acuerdo con el amparista, la orden mencionada violenta de manera directa por omisión la garantía constitucional establecida en el artículo 32 de la Constitución Nacional, toda vez que "no se ha hecho 'conforme a los trámites legales' ... privándola de ejercer los recursos de impugnación que la ley le confiere en contra del acto de 26 de octubre de 1999, esto es, el recurso de casación.". Agrega que conforme al numeral 1 del artículo 877 del Código de Trabajo se debe notificar personalmente la primera resolución que se dicte después de estar paralizado el proceso por más de un (1) mes y que el artículo 879 de ese mismo cuerpo de leyes dispone que la sentencia de segunda instancia se notificará por edicto, pero que no estamos en presencia de una sentencia, pues la resolución notificada no decide sobre pretensiones ni excepciones sino que decreta la nulidad de lo actuado. Finalmente, cita pronunciamientos de la Corte en los que se revocan órdenes que conculcan el debido proceso "como es la orden de notificación realizada indebidamente, lo cual ha sucedido con el auto dictado el 26 de octubre de 1999".

Expuestos los cargos, el Pleno procede a confrontarlos con los textos constitucionales que se aducen violados, para establecer si se infringieron las garantías constitucionales invocadas.

En primer término, observa el Pleno que el presente Amparo se interpone contra un Edicto de notificación de una Resolución proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro de un proceso abreviado, como lo es la impugnación de la orden de reintegro de un trabajador. En ese sentido, es necesario señalar que el edicto de notificación, ahora impugnado, per se, no constituye ni contiene en sí una orden de hacer, pues éste simplemente representa una manera de informar a las partes de lo resuelto por el tribunal.

Ahora bien, ciertamente que esta Superioridad ha concedido acciones de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se han hecho notificaciones indebidamente o inobservando las disposiciones procesales pertinentes y por ende infractoras del principio del debido proceso.

Sin embargo, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, "sólo procederá la acción de amparo cuando se haya agotado los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate". La norma dispone como condición previa para la admisión de un amparo el agotamiento de los medios ordinarios de impugnación -principio de definitividad- que puedan ejercerse contra la orden pronunciada.

En ese orden, se observa que el artículo 889 del Código del Trabajo, que se refiere a las notificaciones hechas en forma distinta a las expresadas en ese Código, indica que las mismas son nulas pero se advierte en el párrafo final de esta disposición que "la petición de nulidad se tramitará por la vía de incidente", vía ésta que de acuerdo a las constancias procesales no ha sido agotada por el recurrente.

Por otra parte, en el presente caso se está en presencia de un proceso de conocimiento contemplado en el capítulo IV del Título X del Libro IV del Código del Trabajo, donde el artículo 991, que es la única norma de este capítulo, señala que en este tipo de procesos se aplicará las disposiciones sobre procesos comunes, "sujetos a las siguientes normas especiales:

1) ...
2) Todas las notificaciones se harán por edicto, salvo la de la demanda a la parte demandada que será personal".

Se trata de una norma especial de procedimiento, donde no se deja establecido que en el pronunciamiento abreviado, cuando el Tribunal Superior se excede del término de un mes para proferir su decisión tenga que hacer necesariamente la notificación personal.

En tales circunstancias como inicialmente esta demanda fue admitida lo procedente es la declaratoria de no viabilidad de la acción propuesta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado RAÚL TRUJILLO MIRANDA en nombre y representación de MELVA APARICIO DE GUTIÉRREZ, contra el Edicto N° 239 de 27 de octubre de 1999 por medio del cual el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial notificó la Resolución de 26 de octubre de 1999.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO FABREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE MOLINA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ALBA MOLINA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 1-2000, DE 24 DE ENERO DE 2000, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Molina, en nombre y representación de la señora Alba Molina, ha presentado demanda de amparo de garantías 01constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. 01-2000 RC, de 24 de enero de 2000, mediante la que el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivenda dispuso, entre otras cosas, revocar en todas su partes la Resolución No. 11-99 RC, de 15 de septiembre de 1999, emitida por la Comisión de Vivienda No 1.

A juicio del amparista, la orden de hacer es violatoria del debido proceso que establece el artículo 32 de la Constitución Política de la República, y en su escrito el impugnante expone que la infracción ha ocurrido porque se le ha negado el derecho que tiene como parte en el proceso de aportar pruebas y objetar las de la contraparte, así como que
éstos elementos de convicción sean válidos y lícitos (foja 12).

El Pleno se percata que la presente acción especial de amparo no es viable porque está enderezada contra un acto administrativo y la vía preferente para el enjuiciamiento de este tipo de actos, como lo ha expresado en variadas ocasiones anteriores, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ejercida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En sentencia de 21 de abril de 1995, corroborando los precendentes sobre el tema, el Pleno dijo que su jurisprudencia ha sido "constante, reiterada y prolija, en cuanto a que la vía de amparo no queda abierta "incontinenti" y accesible sin antes agotar los medios legales de impugnación ordinarios, precisamente porque ésta es una acción extraordinaria y no sustitutiva o supletoria de los medios legales comunes establecidos por el ordenamiento legal (fr. Registo Judicial de marzo, 1990, p. 6)". Además que, una vez agotada la vía administrativa, "procede la vía contenciso administrativa" (Sentencia de 11 de enero de 1993).

Este Tribunal de amparo estima que debe proceder a hacer una declaración similar en el presente asunto.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE, la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado Jorge Molina, en representación de Alba Molina, contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. 01-2000 RC, de 24 de enero de 2000, expedida por el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS EN REPRESENTACION DE NORMAN RAMCHARAN Y CONTRA EL JEFE DE FISCALIZACION ADUANERA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Carrillo Brux y Asociados, en nombre y representación de NORMAN RAMCHARAN dueño de la Motonave G. C. GORTON, ha propuesto acción de amparo

de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 17 de enero de 2000, proferida por el Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera de la Dirección General de Aduanas. Considera el demandante que dicho acto viola los artículos 32 (debido proceso) y 44 (garantía de la propiedad privada) de la Constitución Política.

ORDEN DE HACER

La Resolución calendada 17 de enero del 2000, trata sobre la decisión del funcionario instructor aduanero de comisar provisionalmente la motonave G. C. GORTON, de bandera jamaicana, que se encuentra actualmente anclada en el muelle 5 de Colón Port Terminal, de Coco Solo, en razón de que presuntamente la misma fue utilizada para transportar dinero en efectivo hasta nuestro país, para ser introducido al Territorio Fiscal Aduanero sin declararlo.

ARGUMENTOS DEL AMPARISTA

El amparista (ver de foja 2 a la 8 en el expediente) asegura que el 12 de enero de 2000 los funcionarios de aduanas asignados al Puerto de Coco Solo en Colón, al practicar una revisión personal a los señores Desmond Green, Wayne Richard y Rohan Deen, tripulantes de la MN G. C. GORTON, propiedad de Norman Ramcharan, como producto de ello se les encontró la suma de doscientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y dos doláres (US $256,282.00). Pese a que el dinero no fue encontrado ni en la MOTONAVE G. C. GORTON ni en posesión de NORMAN RAMCHARAN, el Departamento de Fiscalización Aduanera ha ordenado el decomiso provisional de la Motonave, cuando no se ha configurado en su opinión, ilícito penal-aduanero alguno. Adicionalmente, el demandante afirma que quien tenía las facultades para dictar la orden de hacer, que es motivo de esta controversia constitucional, era el Administrador Regional de Aduanas de la Zona Norte.

Luego de revisado el libelo, el Magistrado Sustanciador admitió la acción de amparo incoada para que el Funcionario de Instrucción de Aduanas rindiera un informe explicativo de los hechos acaecidos, que motivaron tomar la decisión que hoy se impugna por esta vía constitucional.

INFORME DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN ADUANERA

Frente a lo manifestado por el demandante, el Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera remitió a esta Superioridad un informe de su actuación, mediante Nota de 24 de febrero de 2000 (ver de foja 19 a la 26 del expediente) y adjuntó a la misma el expediente contentivo de la instrucción sumarial aduanera. En dicho informe el Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera manifestó básicamente que, uno de los requisitos que el artículo 2606 del Código Judicial exige para la admisión de la acción constitucional, como lo es el amparo, es que el actor haya agotado todos los mecanismos de impugnación que ofrece la propia Ley antes de utilizar esta vía extraordinaria.

Añade el Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera, que el amparista ha obviado el mecanismo impugnador que ofrece el artículo 2009 del Código Judicial, supletorio en materia fiscal, tal como lo recoge el artículo 1329 del Código Fiscal. Según esta interpretación el Funcionario de Instrucción sostiene que el actor en esta causa constitucional, tenía la posibilidad de recurrir por la vía apelación contra la decisión de comiso provisional ante el Administrador Regional de Aduanas, Zona Norte, Colón.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Fundado en el principio indubio pro libertate, esta Corte conceptuó que como se había aducido un motivo que presuntamente atentaba contra el debido proceso, se debía admitir para tramitar el amparo, pese a que no existía la constancia de que el demandante hubiera agotado previamente los medios de impugnación contra la Resolución atacada.

Sin embargo a pesar de esta postura, en esencia proteccionista de la Corte Suprema en beneficio del amparista, al adentrarse al conocimiento de la presente actuación sumarial aduanera, se observa que es sobresaliente la circunstancia omisiva en que incurrió el actor, debido a que desde un principio debió agotar los recursos a su alcance para oponerse a la decisión de comiso proferida por el Jefe Nacional de Fiscalización Aduanera, los cuales eran los remedios jurídicos más efectivos para la consecución del objetivo deprecado, como lo era la invalidación de los efectos de la Resolución 17 de enero de 2000, por el presunto hecho de que la misma constituía una afrenta a la Ley. En este sentido el señor **NORMAN RAMCHARAN**, mediante su procurador judicial, no propuso las impugnaciones correspondientes ante el Superior Jerárquico, esto es, no enderezó el incidente de controversia recogido en el artículo 2009 del Código Judicial, ni se promovió la alzada ante el Administrador Regional de Aduanas Zona Norte, Colón, cuya viabilidad procesal se desprende del contenido del artículo 14 de la ley 16 de 1979, y del Decreto Ejecutivo N° 155 de 1995 por medio del cual se crea el Departamento de Fiscalización de Aduanera.

La afirmación anterior por parte de este Tribunal Pleno, obedece al hecho de que no hay evidencia alguna en el expediente, que el amparista haya demostrado de manera clara y por medio de los documentos idóneos, que hizo uso en tiempo oportuno de las prerrogativas procedimentales que ofrecen la legislación especializada en temas aduaneros, y la general que está recogida en el Código Judicial. El artículo 2606 numeral 2°, señala textualmente tal requisito a que hemos hecho referencia:

> "2. Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate."

Como se expone, esta exigencia no obedece a un ánimo caprichoso del Tribunal; descansa en las razones que esta Corporación de Justicia ha venido expresando en reiteradas ocasiones, sobre la necesidad de agotar los medios y trámites para la impugnación de las resoluciones tanto judiciales como administrativas. En este sentido transcribimos parte de las Resoluciones de 10 de julio y 31 de diciembre, ambas de 1998, mediante las cuales este Tribunal Constitucional resaltó, respectivamente, lo siguiente:

> "Esta Superioridad ha sido enfática y reiterativa en la necesidad de agotar todos los medios procesales de impugnación que concede la Ley, como requisito para la instauración de estas acciones de naturaleza constitucional subjetiva, en aplicación directa del texto del artículo 2606 numeral 2° del Código Judicial; exigencia reiterada en copiosos pronunciamientos de este Máximo Tribunal de Justicia para los fines de concederle viabilidad a las acciones de Amparo de Garantías Constitucionales".

> "En este contexto se desprende seguidamente, que la Acción de Amparo tampoco cumple con lo preceptuado en el artículo 2606 numeral 2° del Código Judicial, texto legal que condiciona la presentación de estas acciones al agotamiento de los medios de impugnación ordinarios previstos en la Ley".

En vista pues del condicionamiento jurisprudencial sentado por el Pleno de la Corte para estos casos, no queda otra alternativa que declarar la no viabilidad del amparo in examine.

Por todo lo expuesto los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARAN NO VIABLE** la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense Carrillo Brux y Asociados, en nombre y representación de **NORMAN RAMCHARAN**, contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 17 de enero de 2000, proferida por el Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera de la Dirección General de Aduanas.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, en nombre y representación de la empresa MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra "la orden de hacer contenida en el edicto s/n, proferido por el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, que se encuentra fijado en el tablero fuera de su oficina desde el día 28 de diciembre de 1999 por el cual se notifica al representante legal de MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD de que se ha emitido la resolución ministerial No. 068-99 de 20 de diciembre de 1999 que declara la terminación anticipada del Contrato No. 032-99 de 12 de agosto de 1999 suscrito entre MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A. y Ministerio de Obras Públicas".

Admitida la acción constitucional, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad o en su defecto, un informe acerca de los hechos que originaron la presente acción y consta a foja 15-16 del cuaderno el informe No. AJ-58 remitido por el Licenciado Héctor E. Jiménez B., en su condición de Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, al que se adjuntó copia del respectivo expediente administrativo.

Como se ha expresado, la orden de hacer impugnada consiste en la notificación, por vía edictal, al representante legal de la Sociedad MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A. de la Resolución No. 068-99, proferida por el Ministerio de Obras Públicas, de 20 de diciembre de 1999, mediante la cual se declara la terminación anticipada del Contrato No. 032-99 de 12 de agosto de 1999, suscrito entre dicha empresa y el Ministerio de Obras Públicas.

Para el amparista, esa notificación es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso consignada en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, así como también del artículo 17 de ese mismo cuerpo de normas, pues, a su juicio, "... siendo una resolución que da por terminado el Contrato No. 032-99, contentivo de derechos individuales en favor de MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A. tiene que se (sic) notificada personalmente, para que así se inicie el procedimiento administrativo con las garantías constitucionales consagradas en la Constitución Política".

Para resolver la acción constitucional interpuesta, previamente se adelantan las siguientes consideraciones.

En primer lugar, de los antecedentes que fueron remitidos al momento en que se rindió el informe solicitado, se aprecia que el día 4 de enero de 2000, el señor Pedro Campagnani, en nombre y representación de la Sociedad MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A. confirió poder especial a la firma forense Arias, Fábrega y

Fábrega para que representara a dicha sociedad en "todo aquello relacionado con la ejecución y terminación del Contrato No. 032-99 de 12 de agosto de 1999" y en uso de las facultades conferidas en dicho mandato, ese mismo día, 4 de enero de 2000 cuando aún no se había desfijado el edicto contra el que se recurre en este amparo la firma forense Arias, Fábrega y Fábrega presentó escrito al Ministerio de Obras Públicas en donde señala que "en nuestra calidad de apoderados legales de la sociedad MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, cuyas generales constan en poder que antecede nos damos por notificados de la Resolución ministerial No. 068-99 de 20 de diciembre de 1999e interponemos el recurso de reconsideración en contra de esa decisión".

Como se aprecia la firma recurrente en este amparo, en su condición de apoderada de la sociedad MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, presentó escrito dándose por notificada de la resolución en donde el Ministerio de Obras Públicas declara la terminación del Contrato No. 032-99 y sabido es que en esos casos dicha manifestación surte, desde ese momento, los efectos de una notificación personal, razón por la cual no puede alegarse la ilegalidad de la notificación que se pretendió realizar en forma edictal.

En otro orden de ideas, la firma amparista sostiene que conforme al numeral 3 del artículo 104 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1996, las resoluciones ministeriales en las que se da por terminado el contrato necesariamente debe ser comunicadas personalmente y a este respecto, cabe señalar que la norma invocada por la firma amparista se encuentra incluida dentro del Capítulo XVII de la Ley 56, que se refiere a la resolución administrativa del contrato, precisándose en los cinco numerales del artículo 104 de este Capítulo las causales de resolución administrativa del contrato, apreciándose de la lectura que se hace de esta disposición, y de la resolución pronunciada por el Ministerio de Obras Públicas, que en ninguna de estas causales se fundamenta la declaratoria de la resolución del Contrato No. 032-99 sino que, como se expresa en la propia resolución del ministerio el fundamento para la resolución del contrato se encuentra dentro de lo previsto por el artículo 72, incluido en el Capítulo XII de la Ley 56 que faculta a declarar la terminación unilateral del contrato, sin perjuicio de las causales previstas en el Capítulo XVII, "cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista deberá ser indemnizado por razón de los perjuicios causados con motivo de la terminación unilateral por la unidad contratante".

La Ley 56, para este tipo especial de terminación de contrato administrativo, que se fundamenta en circunstancias de interés público, tal como se deja establecido en la resolución ministerial donde se declara la terminación anticipada del contrato, no exige, como lo hace para la terminación del contrato con fundamento en las causales contenidas en el artículo 104 de la Ley citada, que la notificación sea de orden personal, advirtiéndose que aún así el Ministerio de Obras Públicas realizó gestiones los días 23, 24 y 27 de diciembre para notificar personalmente al representante legal de la Sociedad MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD de la resolución de terminación del contrato, tal como consta en los informes respectivos que aparecen en los antecedentes remitidos a esta Corporación, donde detalladamente se explican las gestiones realizadas para tal efecto.

De lo que se deja expuesto, y sin entrar en otras consideraciones sobre la acción interpuesta, se concluye que no se da la violación a los artículos constitucionales invocados por la parte amparista dado que la violación del debido proceso ocurre "cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso, que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes". (Fallo de 13 de septiembre de 1996).

En las condiciones que se dejan anotadas y como quiera que inicialmente esta demanda fue admitida, lo procedente es la declaratoria de no viabilidad de la acción constitucional propuesta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por la Firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, en nombre y representación de MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A., contra el edicto sin número, fijado por el Director Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, dentro del proceso administrativo de terminación anticipada del Contrato No. 032-99 de 12 de agosto de 1999, suscrito entre la sociedad MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD, S. A. y el Ministerio de Obras Públicas.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACION DE AMEC DE CHIRIQUI, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 20 DE ENERO DEL 2000, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Trujillo, Vidal y Miranda, en representación de la Sociedad denominada AMEC DE CHIRIQUÍ, S. A., presentó ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de amparo de garantías constitucionales contra la sentencia de 20 de enero de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral que interpuso el Sr. FÉLIX ÁBREGO ZURDO contra AMEC DE CHIRIQUÍ, S. A., ARROCERA LA FORTUNA, S. A. y/o MIRIAM MORENO DE MÉNDEZ, y que modificó la sentencia N° 32 de 1° de diciembre de 1999, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 10, de la Provincia de Chiriquí.

Los hechos más relevantes de la acción revelan que FÉLIX ÁBREGO ZURDO inició proceso ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 10 contra los ya mencionados demandados, para que se le pagara salarios caídos o indemnización, más el 50% de recargo, vacaciones proporcionales y décimotercer mes proporcional, siendo que la demanda tenía una cuantía de mil quinientos B/.1,500.00 balboas.

Mediante la sentencia N° 32 de 1° de diciembre de 1999, a Junta en mención absolvió a todos los demandados de las pretensiones incoadas en su contra, sin costas.

Establece el amparista como hecho, que las decisiones de las Juntas de Conciliación y Decisión en demandas cuya cuantía no exceda de dos mil B/.2,000.00 balboas, o cuando el monto de las prestaciones, indemnizaciones y salarios caídos que se deban pagar en sustitución del reintegro, no excedan de dicha suma, no son apelables, razón por la que el Tribunal Superior de Trabajo no tenía competencia para conocer el recurso de apelación contra la mencionada decisión, y que produjo la sentencia impugnada mediante la acción que nos ocupa.

Consideró la amparista que la sentencia impugnada violó el principio del debido proceso, contenido en el artículo 32 Constitucional, toda vez que el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial no era competente para conocer el caso, dado lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley 1 de 1986, que

adicionó el artículo 914 del Código de Trabajo, referentes a las resoluciones de primera instancia, las cuales sólo son susceptibles de recurso de apelación cuando su cuantía sea superior a dos mil B/.2,000.00 balboas, o cuando el monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro, incluyendo salarios caídos, sobrepasen esa suma.

Si el demandante estableció la cuantía de su demanda en B/.1,500.00, y la Junta de Conciliación y Decisión N° 10 absolvió a las demandadas, era claro que no procedía la segunda instancia, violándose con ella a su juicio el debido proceso.

Consideró el actor que también se quebrantó el principio en estudio, toda vez que el ad-quem procedió a condenar a pagar salarios caídos sin que antes se condenara a indemnizar.

Admitida la demanda, se procedió a solicitar el envío de la actuación a la autoridad demandada, o en su defecto un informe acerca de los hechos de la materia, así como se le ordenó la suspensión inmediata de la orden impugnada, mientras se decide la acción, optando la Junta de Conciliación y Decisión por el envío del expediente.

Por lo tanto, encontrándose el negocio en estado de decisión de fondo, se dispone el Pleno a emitir su resolución previas las siguientes consideraciones.

De la lectura del libelo de amparo, y del expediente recibido, esta Colegiatura considera que le asiste la razón a la amparista.

En efecto, la demanda por despido injustificado propuesta por FÉLIX ÁBREGO ZURDO contra AMEC DE CHIRIQUÍ, ARROCERA LA FORTUNA Y/O MIRIAM MORENO DE MÉNDEZ, tenía una cuantía de mil quinientos B/.1,500.00 balboas, y la Junta de Conciliación y Decisión N° 10, al dictar la sentencia N° 32 de 1° de diciembre de 1999, absolvió a las demandadas, sin costas.

Lo anterior queda fuera del ámbito de competencia del Tribunal Superior de Trabajo, cuyo artículo 8, esgrimido por la amparista, reza de la siguiente manera:

> Artículo 8. En adición a lo dispuesto en el Artículo 914 Código(sic) de Trabajo, el recurso de apelación puede interponerse ante Tribunal Superior de Trabajo contra las sentencias dictadas por Juntas de Conciliación Y Decisión en los procesos cuya cuantía exceda de Dos Mil Balboas (B/.2,000.00), o cuando el monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro incluyendo los salarios vencidos, exceda de dicha suma. En estos casos no se causarán salarios vencidos durante la segunda instancia del proceso.”

Tal como señala la amparista, sin mayor esfuerzo puede advertirse que en este caso, el Tribunal Superior de Trabajo no tenía competencia para conocer en segunda instancia el proceso de marras, toda vez que la cuantía establecida por el demandante fue de mil quinientos B/.1,500.00 balboas.

Advertimos que, luego de que el representante legal del demandante, Licdo. Guillermo Serrano, apeló la sentencia en el acto de notificación -f. 23 del expediente-, aparece un Informe Secretarial en el que se deja constancia del cambio de la Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión N° 10, Licda. Ana Vigil de Castro, por quedar insubsistente su cargo, y adjudicando el caso a la nueva Presidenta de dicha Junta, Licda. Janet de Sousa Santos, quien a la postre concedió el recurso de apelación que había anunciado el representante del demandante.

Sorprende a la Corte, que la Providencia N- 241 de 20 de diciembre de 1999 -f. 26- dice que la apelación propuesta por el Licdo. Serrano en representación

del demandante dentro del proceso de marras, "se encuentra enmarcada dentro de los términos del Artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986, este Tribunal de Justicia Laboral N-10, Concede la misma y ordena el envío del expediente al Tribunal Superior de Trabajo ...", cuando evidentemente ello no es cierto.

De igual manera, advierte el Pleno con suma sorpresa, que la sentencia demandada en amparo que nunca se debió dictar señala que "Una vez examinada la actuación procesal, con el objeto de precisar si se incurrió en una causa de nulidad que produzca indefensión a las partes, o violado normas imperativas de competencia o de procedimiento, no encontrándose alguna, se entrará a resolver el fondo de la controversia."

Si bien la Providencia de la Junta de Conciliación y Decisión N° 10, que concedió el recurso de apelación, fue dictada por la nueva Presidenta de dicha Junta, aunque ello no justifica la medida adoptada, es un poco más comprensible el error cometido, por dictar la resolución recién asumida sus funciones.

No ocurre así con el error de competencia en que incurrió el Tribunal de segundo grado, toda vez que la norma que le atribuye competencia para conocer el recurso de apelación a los fallos de las Juntas de Conciliación y Decisión data del año 1986, por lo que la Corte le recomienda a dicho Tribunal que sea más acucioso al determinar su competencia.

Por lo tanto, considera esta Superioridad que no cabía el recurso de apelación interpuesto por el demandante, y menos la sentencia impugnada en amparo, que nunca debió ser emitida, por lo que se violó el principio del debido proceso, contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías solicitado por la Sociedad denominada AMEC DE CHIRIQUÍ, S. A., y en consecuencia, DECLARA NULA la sentencia de 20 de enero de 2000, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZALEZ, EN REPRESENTACION DE MARIBLANCA STAFF WILSON, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL ARTICULO 28 DE LA LEY 49 DE 24 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Miguel González, en nombre y representación de la Licda. MARIBLANCA STAFF WILSON ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema, acción de amparo de garantías constitucionales, contra la orden de hacer contenida en el artículo 28 de la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999, que derogó la Ley N° 32 de 1999 que creó la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, de la Corte Suprema de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial N° 23,914 del domingo 24 de octubre de 1999, y que restableció la vigencia de artículos del Código Judicial y de la Ley N° 23 de 1985 y se dictaron otras disposiciones.

Dicha orden dejó sin efecto el nombramiento de la amparista como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para un período fijo de cinco (5) años, del 1° de agosto de 1999 al 31 de diciembre del año 2004, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Resolución N° 22 de 30 de julio de 1999.

Al encontrarse el negocio en etapa de admisibilidad, le corresponde a esta Corporación de Justicia verificar el cumplimiento de los requisitos para acoger la acción.

Se observa que el libelo cumple los requisitos que establece el artículo 2610 del Código Judicial, ya que contiene los requisitos comunes a toda demanda, que enumera el artículo 654 íbidem, menciona de manera expresa la orden impugnada, así como el nombre de la Corporación demandada, despliega los hechos en que funda su pretensión, así como las garantías fundamentales que estima infringidas y el concepto en que lo han sido.

Empero, la iniciativa adolece de una falla crítica que impide su admisibilidad, y que se encuentra regulada en el artículo 2611 de la excerta en mención; la misma consiste en que la acción "no fuere manifiestamente improcedente".

El presente negocio está dirigido a impugnar el artículo 28 de la citada Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999; la jurisprudencia producida por esta Colegiatura ha sentado que no cabe la acción de amparo de garantías constitucionales contra leyes de carácter general; así lo expresó el Ex-Magistrado Edgardo Molino Mola en su monografía "LOS ACTOS SUJETOS A LA ACCIÓN DE AMPARO", al señalar en la página 11, lo siguiente:

> "Ya hemos dicho que no todas las órdenes caen dentro de este control, pues la jurisprudencia ha sostenido que las órdenes que violen derechos no establecidos en el Título III de la Constitución, deben ser objeto de la acción de inconstitucionalidad, como serían por ejemplo las leyes, que violen derechos, que por su carácter genérico, podrían violar derechos en formas abstracta pero no concreta, es decir, tiene que ser en casos específicos. Igual ocurre con las órdenes de detención, que no son susceptibles de amparo, ya que para ellas existe el recurso especial de habeas corpus.
>
> De lo dicho vemos entonces que no cabe amparo contra leyes o actos de carácter general ni contra las órdenes o medidas cautelares que afecten la libertad ambulatoria,." (Negrilla de la Corte)

En el presente caso, vemos que lo impugnado mediante la acción de amparo es una norma perteneciente a una ley formal, que es de carácter general por su naturaleza, al haber cumplido el procedimiento establecido en la Constitución Nacional para la formación de leyes -Título V, Capítulo II- de carácter formal, por lo que no puede ser impugnada mediante esta vía; el medio idóneo para refutar la constitucionalidad de la norma, es la demanda de inconstitucionalidad, que contempla la defensa de la integridad de la Constitución desde un ángulo objetivo, e idóneo para el estudio de normas legales de carácter general.

Esto es corroborado por el mismo autor, en su obra "LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PANAMÁ. Un Estudio de Derecho Comparado", en la que señaló:

> "El examen de la demanda y de la documentación adjunta, hechos para determinar su admisibilidad, demuestra que, aun cuando en esta acción el demandante atribuye a las disposiciones legales que impugna la naturaleza de 'órdenes de hacer', dichas normas forman parte de un acto legislativo de carácter general emitido por una autoridad constitucionalmente facultada para ello." (MOLINO MOLA, Edgardo. LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN PANAMÁ. EN UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO. Editorial Biblioteca Jurídica Dike, Santa Fe de Bogotá, 1ª Edición, 1998, p. 564)

Es decir, que por formar la norma impugnada parte de un acto legislativo de carácter general -emisión de leyes formales- por una autoridad facultada constitucionalmente para ello -Asamblea Legislativa-, aunque se le atribuya una orden de hacer individualizada, no es susceptible de impugnación vía amparo de garantías.

Visto el problema desde otro ángulo, la amparista impugnó un acto legislativo derogatorio de otro acto legislativo que había creado una Ley Orgánica, según lo dispone el artículo 158 en concordancia con el numeral 1° del artículo 153, ambos de la Constitución Nacional.

La norma objeto de la presente acción, el artículo 28 de la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999 -que deja sin efecto los nombramientos de los tres Magistrados de la Sala Quinta de Instituciones de Garantía de la Corte Suprema de Justicia y a sus suplentes-, es consecuencia lógica del contenido integral de toda esa Ley, utilizada para la derogación de otra ley.

Es decir, la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999 derogó la existencia jurídica de una Sala de la Corte Suprema de Justicia, o sea una Institución Estatal -o parte de ella-, por lo cual, al declarar sin efecto el nombramiento de los funcionarios ya mencionados -entre ellos la amparista-, no hizo más que establecer la consecuencia lógica del contenido y espíritu del resto de la ley de la cual forma parte.

Cosa distinta ocurre cuando un funcionario es destituido de forma individual, sin que se afecte la existencia de la Institución o dependencia de la cual forma parte, ya que la orden de hacer está dirigida contra una persona individual, situación en la que los derechos individuales de esa persona sí son susceptibles de ser violados; en éstos casos, sí es viable la acción de amparo de garantías constitucionales, siempre y cuando cumpla los requisitos exigidos en el Código Judicial, para su admisibilidad.

Luego entonces, los derechos de inamovilidad, autonomía, estabilidad y permanencia en el cargo, son impugnables por vía de amparo cuando la orden de hacer está dirigida de manera individual hacia la persona destituida siempre que -como ya se dijo- cumpla con los requisitos legales para la admisión del negocio.

Por esta razón, no es viable en amparo de garantías la impugnación de todas las normas constitucionales que considera infringidas, incluido el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente al derecho de defensa, a cuya denuncia de violación se aplican los argumentos ya vertidos.

De ello se deduce que la impugnación presentada debe proceder, en todo caso, mediante la acción autónoma de inconstitucionalidad.

En consecuencia, no le queda alternativa a esta Superioridad, que no admitir el amparo.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licdo. Miguel González en representación de la Licda. MARIBLANCA STAFF WILSON, contra el artículo 28 de la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999.

Cópiese, Notifíquese y Archívese

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN

Secretaria General, Encargada

SALVAMENTO DE VOTO
DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

A propósito de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado Miguel González en representación de la licenciada Mariblanca Staff Wilson, contra la orden de hacer contenida en el artículo 28 de la Ley N° 49 de 24 de octubre de 1999, mediante la cual, entre otros efectos, se deja sin efecto el nombramiento de la amparista como Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, para un período fijo de cinco años, temo disentir con la posición de la mayoría de mis colegas, por lo que procedo a Salvar el Voto, por las consideraciones que a continuación detallo:

1. Si bien ciertamente, como regla general la vía del Amparo de Garantías Constitucionales no es la idónea para impugnar leyes de carácter general, como acertadamente lo ha establecido la jurisprudencia, soy del criterio que en el caso de la acción ejercitada por la amparista, nos encontramos frente a la impugnación del artículo 28 de la ley 49 de 24 de octubre de 1999, que de manera específica, y no general, afecta derechos individuales.

2. En virtud de lo anterior, comparto plenamente la postura de mis colegas en el presente fallo, solamente en cuanto a lo expresado por el Doctor Edgardo Molino Mola, en su libro titulado "Los Actos Sujetos a la Acción de Amparo", en donde claramente se excluyen "las órdenes que violen derechos no establecidos en el Título III de la Constitución", debiendo ser, dichas órdenes, objeto de la acción de inconstitucionalidad.

3. Congruente con lo anterior el Doctor Molino Mola cita, a manera de ejemplo, las leyes, que por su carácter genérico podrían violar derechos en forma abstracta pero no concreta. No obstante, en lo que respecta a la referida ley 49 cuyo artículo 28 se impugna, nos encontramos frente a una disposición que de manera específica y no abstracta, con nombre y apellidos, y no de manera genérica, lesiona los derechos y garantías individuales contenidas en el Título III de la Constitución, es decir, se trata de un caso específico y no abstracto ni general.

4. En virtud de lo anterior, no siendo el artículo 28 de la ley en cuestión (como lo expone acertadamente el Doctor Molino Mola), una disposición genérica que de manera abstracta lesiona los derechos de la amparista, sino que constituye una orden de hacer individualizada, considero que si es susceptible de impugnación por la vía del Amparo de Garantías Constitucionales.

5. Por otra parte siendo que lo impugnado es un artículo específico, aún cuando forma parte de la ley 49 de 24 de octubre de 1999, la cual derogó la existencia jurídica de una Sala de la Corte Suprema de Justicia, soy del criterio que dicha norma más que entenderse como "la consecuencia lógica" de la letra y el espíritu de la citada ley, a los efectos de decidir la admisibilidad del proceso de garantías constitucionales que ha sido sometido a consideración de la Corte, debe examinarse si en efecto, se cumple con los requisitos para que sea acogida la acción, sobre todo, como lo expone en uno de sus párrafos la sentencia que motiva mi salvamento de voto, "los derechos de inamovilidad, autonomía, estabilidad y permanencia en el cargo" de la amparista, han sido vulnerados.

6. Lo anterior cobra singular relevancia en tanto que la disposición atacada no tiene carácter abstracto, ni general sino que está dirigida de manera individual hacia las personas destituidas.

7. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, soy del criterio que sí es viable el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la licenciada Mariblanca Staff Wilson contra el artículo 28 de la ley 49 de 24 de octubre de 1999, por lo que ante la discrepancia que surge con la posición de la mayoría de mis colegas en la presente sentencia, con el mayor respeto, SALVO EL

VOTO.

GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS VARELA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HORACIO TREJOS, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° AG-0015-99, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL AMBIENTE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Luis Varela en representación del señor José Horacio Trejos, ha interpuesto ante este Tribunal de Amparo acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. AG-0015, de 15 de marzo de 1999, expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente, a través de la licenciada Mirei Endara, en aquella fecha Directora General de la Institución.

Mediante la referida resolución que se impugna, la Autoridad Nacional del Ambiente dispuso, entre otras cosas, imponer una servidumbre de abrevadero a favor de la señora Alejandrina Trejos en beneficio del ganado que pasta en su finca y sobre la finca perteneciente al señor José Horacio Trejos.

En opinión del amparista, esta Resolución es violatoria del artículo 32 de la Constitución Política de la República que consagra el principio del debido proceso legal, y en este sentido afirma que "... el procedimiento utilizado por la Dirección de la ANAM no ha sido el correcto, toda vez que no se le ha brindado el medio legal de defensa a mi representado" (foja 9).

A juicio de los Magistrados que suscriben, el presente recurso extraordinario de tutela de las garantías fundamentales no debe ser admitido porque el amparista ha dirigido dicha acción contra una acto administrativo y no consta que haya agotado los recursos que el ordenamiento jurídico prevé para impugnar esa decisión en la vía administrativa.

Esta Superioridad ha sido constante en expresar la necesidad de que se agoten los medios impugnativos ordinarios para atacar las órdenes de hacer expedidas por autoridad pública antes de acudir a la vía especial de amparo, y en el caso particular de actos administrativos son diversos los fallos del Pleno que confirman esta jurisprudencia, según la que una vez agotada la vía administrativa, la vía preferente para enervar los efectos de un acto que el particular estima ilegal, es la jurisdicción contencioso administrativa, ejercida por la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia.

Además, la orden que se impugna fue dictada hace un año, 15 de marzo de 1999, y por tanto no se trata de una orden que por la inminencia del daño que representa, requiera una revocación inmediata. Este requisito está contemplado en el artículo 2606 del Código Judicial y reiteradamente este Pleno lo ha señalado como necesario para que la acción sea procedente.

En mérito de lo expresado, lo que procede es no admitir la presente demanda de amparo, de conformidad con el artículo 2111 del Código Judicial por ser manifiestamente improcedente.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la

demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado José Luis Varela, en nombre y representación del señor José Horacio Trejos, contra la orden de hacer contenida en la Resolución No. AG-0015, de 15 de marzo de 1999, expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente, a través de quien en aquella fecha ejercía el cargo de Directora General de dicha entidad estatal.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL DOCTOR DIOGENES ANIBAL AROSEMENA GRIMALDO, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 34-99 DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor Diógenes Aníbal Arosemena Grimaldo, abogado en ejercicio, en su propio nombre ha propuesto acción constitucional de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución n° 34-99, de 24 de noviembre de 1999, expedida por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá.

El libelo está dirigido al Magistrado Sustanciador de la Honorable Corte Suprema de Justicia (Pleno) y no al Presidente de la corporación de justicia, como lo ordena el artículo 102 del Código Judicial. Se ha identificado la orden de hacer, se ha indicado las partes en este proceso constitucional, se han citado las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas, a saber, el artículo 32 de la Constitución Política, y se han indicado los fundamentos de hecho en que apoya la pretensión, dando razonable cumplimiento al artículo 2610 del Código Judicial.

Aún cuando a primera vista la demanda de acción de garantías constitucionales cumple los requisitos que gobiernan este tipo de acción constitucional, es evidente que la misma no puede ser admitida.

En primer lugar, la resolución que supuestamente contiene la orden, no la contiene, es decir, no constituye un mandato imperativo dirigido a una persona que lesione sus derechos fundamentales, sino que su esencia es el de un acto de comunicación procesal. La censura, en efecto, va dirigida a un mero acto de comunicación procesal, poniendo en conocimiento del afectado el expresado acto administrativo. Los actos de comunicación procesal son actos distintos y complementarios de la resolución que comunican, y como tales no lesionan derechos fundamentales del amparista, que amerite ser tutelado mediante la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales.

De otra parte, el acto administrativo contentivo de órden de hacer o de no hacer arbitraria, es un acto administrativo que deniega un recurso de amparo y confirma, en todas sus partes, el acto administrativo apelado, es decir, la resolución n° 99-15D, expedida por el Rector de la Universidad de Panamá, mediante el cual se separa al recurrente como profesor titular T. C. de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es decir, constituye un acto

confirmatorio y no un acto originario. Como es sabido, es menester que el acto que se impugna mediante esta acción extraordinaria, constituya un acto originario, y no un acto confirmatorio, por la muy elemental razón de que, de no impugnarse el acto originario, sino el confirmatorio, y de serle favorable la pretensión constitucional, quedaría intocable el acto que contiene las vulneraciones de derechos fundamentales denunciada.

Por último: la órden impugnada, la resolución n° 34-99, que fue indebidamente notificada al demandante, en apreciación de éste, es decir, por la vía edictal (si bien quedó subsanada al notificarse personalmente de la aludida resolución -foja 10-), dejaba, en efecto abierta la vía impugnativa ante la jurisdicción contencioso administrativa, vía jurisdiccional ésta que tiene preferencia sobre la via de amparo de garantías constitucionales, como ha tenido ocasión de señalar en número plural de ocasiones este Pleno.

Así, por ejemplo, la sentencia de amparo de 30 de diciembre del año 1999, señaló en parte que interesa:

> "El acto contentivo de la orden cuestionada mediante este proceso constitucional de amparo de garantías constitucionales, constituye un acto administrativo, para cuya impugnación ofrece los cauces legales el ordenamiento, singularmente mediante las pretensiones contencioso-administrativas encaminadas a su anulación y, en su caso, a la restauración del derecho subjetivo que ha sido desconocido, por parte de los titulares de tales derechos subjetivos, para que ha sentado Pleno que tiene preferencia la vía contencioso-administrativa sobre la constitucional. El acto revocatorio, que constituye un acto administrativo, como sin la menor duda lo es el que ocupa al Pleno en este proceso constitucional, debe ser comunicado a las partes afectadas, puesto que es el momento a partir de la notificación, el momento en cual pueden ensayar los afectados mecanismos de impugnación por los cauces legales correspondientes, singularmente contenidos en la Ley No. 12, de 10 de febrero de 1998 y, en caso, en los recursos que procedan en vía gubernativa y jurisdiccional, contenidos en la Ley 135 de 1943, 33 de 1946 y sus reformas. No obstante, la pretermisión del acto de comunicación, que es la omisión de un deber legal dentro del procedimiento administrativo en que se dictó el acto impugnado, tiene su cauce propio de impugnación, que es la jurisdicción contencioso-administrativa, que debe el recurrente acreditar que ha utilizado con preferencia, en virtud de la jurisprudencia constante, en este campo, del Pleno, que ha señalado la preferencia que tiene la jurisdicción contencioso administrativa sobre la constitucional como lo ha expresado últimamente las sentencias de amparo constitucional de 13 de mayo de 1998, de 10 de junio de 1998, de 27 de noviembre de 1998, de 31 de diciembre de 1998 y 5 de febrero de 1999.
>
> Es evidente para el Pleno la importancia que tiene el acto de comunicación procesal, pero su ausencia se traduce en la posibilidad, para el recurrente, de impugnar la resolución administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y no la jurisdicción tutelar de las garantías individuales, por las que ha optado".

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando. Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales promovido por el Dr. DIOGENES ANIBAL AROSEMENA en su propio nombre y representación contra la RESOLUCION No. 34-99 DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SERGIO EUCLIDES MORAN MACIA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Asunción Alonso de Montalvo ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS, contra LA FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° FD-T17-290-00 de 14 de febrero de 2000, el cual es del tenor siguiente:

...
A) Es cierto que este Despacho ordenó la detención preventiva del señor SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS. Dicha orden se emitió por escrito mediante resolución debidamente motivada, fechada el diez (10) de diciembre de 1999.

B) Los fundamentos de hecho y derecho que nos llevaron a emitir dicha resolución son los siguientes:

FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: El día nueve (9) de diciembre de 1999 se verificó una Diligencia de Allanamiento en el sector "S" de Curundú a la residencia 491, propiedad de la señora ELIZABETH AYALA IBARRA. Al momento del allanamiento se encontraban en la residencia SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS, LUIS DE LOS RIOS, JORGE NUÑEZ y la prenombrada ELIZABETH AYALA.

SEGUNDO: Tal operativo se realizó en virtud de la posible existencia de armas de fuego en ese inmueble donde el Cabo 1ro. RODOLFO CURLEY pudo observar que desde el lado izquierdo y del interior de la casa lanzaron una bolsa de biberones color blanco con rosado que al ser abierta mantenía en su interior veinticinco (25) cigarrillos y un (1) envoltorio pequeño de color blanco los cuales contenían hierba seca que se presume sea marihuana. Igualmente se encontró en la bolsa la suma de dos balboas con sesenta y cinco centavos en dinero fraccionado.

TERCERO: Al practicársele la correspondiente prueba de campo a las sustancias incautadas esta dio resultados positivos para la presencia de la droga (Fs. 13).

CUARTO: Al momento de rendir declaración indagatoria ELIZABETH AYALA IBARRA manifestó que la sustancia ilícita le fue entregada por un

**novio suyo Colombiano de nombre ANTONIO y que ella la metió en la bolsa de biberones y la arrojó por la ventana. Que el padre de sus hijos SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS iba a visitar a los niños y también fue retenido junto con los otros dos vecinos que se encontraban en su apartamento.**

**QUINTO: En igual sentido manifiesta SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS que no vive en la residencia donde se practicó el allanamiento pero va todos los días a visitar a sus hijos y que cuando llegaron las unidades del DIIP incluso se llevaron detenidos a dos muchachos que estaban en una vereda. Indica por otro lado que ha sido detenido dos veces por Delito Contra la Salud Pública.**

**SEXTO: En consideración de los indicios de presencia y oportunidad en la comisión del presente Delito Contra la Salud Pública, mediante resolución de 10 de diciembre de 1999 se decreta la Detención Preventiva de los procesados ELIZABETH AYALA IBARRA y SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS.**

**SEPTIMO: Reposa a folio 42 un informe secretarial donde se hace constar que el ciudadano SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS mantiene dos sumarias por Delito Contra la Salud Pública una en este Despacho y la otra en la Fiscalía Primera de Drogas.**

**OCTAVO: Se incorpora a folios 53 la Evaluación Psiquiátrica del sindicado SERGIO EUCLIDES MORAN donde el médico forense indica que no tiene psicosis, no presenta adicción actualmente, ni amerita ser referido a programa de tratamiento.**

**NOVENO: Visible a folios 54-55 se encuentra el Historial Penal y Policivo de SERGIO EUCLIDES MORAN según el cual fuere procesado por Robo a Mano Armada.**

**DECIMO: Se recibe la Declaración Jurada de la Unidad de Control de Multitudes ELEUTERIO MIRANDA quien indica que la joven ELIZABETH AYALA al verles arrojó el maletín con la droga (fs. 56-60)**

**UNDECIMO: Reposa a fojas 63-64 la Declaración Jurada del Cabo 1° ERIC CORNELIO GUTIERREZ MORAN indicando que la joven ELIZABETH AYALA les manifestó que la sustancia la mantenía para la venta y que en ese momento ella asumía la culpa de todo, pero SERGIO EUCLIDES MORAN manifestó que tenía conocimiento que su mujer vendía sustancias para ayudarlo ya que él no tenía trabajo. Finalmente declara que mantenían información de que ambos, ELIZABETH AYALA y SERGIO EUCLIDES MORAN se dedicaban a la venta de drogas, sin embargo no le habían dado seguimiento.**

**DUODÉCIMO: Rinde Declaración Jurada el cabo 1ro. RODOLFO CURLEY FRANCIS quien se afirma y ratifica del Informe de Novedad suscrito a foja 6 y manifiesta bajo la gravedad de juramento que el día de los hechos procedió a custodiar el lado izquierdo externo de la casa y observó cuando arrojaban de la residencia la bolsa en cuestión por lo que informó a las unidades que se encontraban en la residencia y se deduce que la misma fue arrojada por ELIZABET AYALA, toda vez que esta era la única que se encontraba en la habitación de donde fue visualizado que se arrojó el maletín.**

**DECIMOTERCERO: Se incorporó al expediente el respectivo análisis efectuado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial de las sustancias incautadas, lo cual dio un resultado positivo para la presencia de la droga conocida como MARIHUANA (Cannabis Sativa), en un peso de 10.21 gramos (Fs. 71-72).**

Sobre la base de todo lo inicialmente expuesto, aunado a las pruebas y Declaraciones Juradas que posteriormente refuerzan la investigación, tenemos que militan contra el señor SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS indicios vinculatorios con el ilícito objeto de esta causa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La conducta en estudio reviste evidentemente las características y elementos debidamente acreditados de un DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA RELACIONADO CON DROGAS, normado en el Capítulo V, Título VII del Libro Segundo del Código Penal reformado por la Ley 23 del 30 de diciembre de 1986 y la Ley No. 13 del 27 de julio de 1994.

Los fundamentos de derecho que nos obligan a ordenar la detención preventiva de SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS encuentran su asidero jurídico en lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial por lo que consideramos que nuestra decisión reúne todos y cada uno de los requisitos para ser ordenada esta medida.

C) Actualmente el prenombrado se encuentra detenido en el Centro Penitenciario La Joya y fue puesto a órdenes de su despacho mediante Oficio No.FD2-T17-291-00 del 15 de febrero de los corrientes. ..." (Fs. 5-9)

Por su parte, la defensora de oficio del señor MORAN MACIAS sostiene que su detención es ilegal ya que la droga incautada en la diligencia de allanamiento pertenece a ELIZABETH AYALA IBARRA, quien en su declaración jurada manifestó que era de su propiedad y para su consumo personal, sin que existan pruebas que justifiquen la detención preventiva del beneficiario de la presente acción constitucional.

El presente habeas corpus guarda relación con diligencia de allanamiento practicada el 9 de diciembre de 1999 en la casa No. 491 en el sector "S" de Curundú, propiedad de ELIZABETH AYALA IBARRA, debido a información recibida por la Policía Nacional de que en ese lugar se encontraban armas de fuego ilícitas.

Durante el allanamiento a la propiedad no se encontraron armas ni sustancias ilícitas, sin embargo, una de las unidades que custodiaban el área observó cuando, desde la recámara de la vivienda, lanzaban una bolsa que resultó contener veinticinco (25) cigarrillos de color blanco elaborados con hierba seca; un pequeño bulto de hierba seca, y la suma fraccionada de dos balboas con setenta y cinco centésimos (B/.2.75). Dicha sustancia, una vez analizada, resultó ser marihuna con un peso total de 10.21 gramos. (Fs. 72). Además, al ser cuestionado el señor MORAN MACIAS, sobre el lugar donde según información recibida guardaba un arma, éste le reveló a los agentes dónde tenía el arma y se encontró fuera de la residencia en un tanque de basura junto con su cargador y ocho (8) municiones vivas.

En la residencia allanada se encontraban los ciudadanos ELIZABETH AYALA IBARRA, SERGIO EUCLIDES MORAN, JORGE ABDIEL NUÑEZ y LUIS DE LOS RIOS.

Mediante diligencia de 10 de diciembre de 1999, la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva de ELIZABETH AYALA IBARRA y SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS por existir los elementos incriminatorios suficientes que los vinculan con la comisión de un delito Contra la Salud Pública Relacionado con Drogas.

En su declaración indagatoria, debidamente ratificada, ELIZABETH AYALA IBARRA manifiesta textualmente lo siguiente:

"...

> ... después de un momento sentí que habían entrado y desde donde estaban los vi y que ya habían entrado y tiré rápido la bolsita donde se meten las mamaderas por la ventana por los nervios porque yo sabía que ahí tenía los cigarrillos de marihuana, esa marihuana yo la tenía ahí que me la había regalado un novio que tenía, un colombiano que se llama ANTONIO, el me la regaló porque se iba para Colombia para que yo hiciera con ella lo que quisiera, ..." (Fs. 20 del Antec.)

Señala que SERGIO EUCLIDES MORAN no vive en dicha residencia, sino que todos los días va a visitar los hijos que tienen ambos y señala que MORAN no tiene nada que ver con la sustancia ilícita incautada. (Fs. 18 a 24).

Por su parte, SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS en su declaración indagatoria manifiesta que es inocente de los cargos formulados en su contra, que diariamente visita a sus hijos en la residencia de la madre y que las autoridades policiales lo arrestaron junto con las otras personas porque encontraron la droga dentro de una bolsa en los alrededores del sitio allanado. Manifiesta que desconoce a quién le pertenece la droga incautada, acepta que anteriormente ha estado dos veces detenido por asuntos relacionados con drogas y que ha dejado de consumir drogas porque quiere cambiar.

Se aprecia a fojas 42 del infolio el informe secretarial de 20 de diciembre de 1999 donde se precisa que SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS tiene dos casos adicionales en la Fiscalía de Drogas. El primero, correspondiente al expediente 1044 de 05-12-97, donde se le incautaron 1.31 gramos de marihuana, se ordenaron medidas de rehabilitación y se suspendió el proceso; el segundo, corresponde al expediente 459 de 12-06-98, donde consta que se le incautaron 14.60 gramos de marihuana y 7.78 gramos de crack, caso por el cual fue sobreseído.

Consta a foja 55 del expediente el prontuario penal y policivo en donde se aprecia que MORAN MACIAS fue sobreseído provisionalmente el 6 de mayo de 1996 del delito de "Robo a Mano Armada" en perjuicio de María del Carmen Cortéz.

Corresponde determinar si la medida de carácter personal atacada cumple con las formalidades previstas en los artículos 21,22 y 23 de nuestra Constitución y los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En la acción de habeas corpus corresponde al Tribunal evaluar si la orden de detención cumple con los requisitos y elementos formales que a tal efecto indican la Constitución y el Código Judicial; esto es, que emane de autoridad competente, que contenga fundamentos de hecho y de derecho, que se trate de delito con pena mínima de 2 años o que haya flagrancia, que esté comprobada la comisión del hecho punible y que exista una vinculación del sujeto con el ilícito.

En el caso que nos ocupa, el delito imputado es CONTRA LA SALUD PUBLICA, de los contenidos en el Libro II, Título VII, Capítulo V del Código Penal. Entre los elementos probatorios incorporados al proceso, el funcionario instructor señala que surgen indicios de presencia y oportunidad, mala justificación y otros elementos indiciarios contra MORAN MACIAS, como son los señalamientos de los agentes captores, la presencia del dinero fraccionado encontrado junto a la droga, la cantidad de droga ilícita incautada y el hecho de que MORAN MACIAS presenta antecedentes en delitos relacionados con drogas.

En tal sentido, es procedente valorar el caudal probatorio en lo relativo a las pruebas incorporadas en el sumario que vinculan a SERGIO MORAN MACIAS con los hechos investigados en atención a la acción constitucional interpuesta.

De acuerdo a las declaraciones indagatorias y las declaraciones juradas de los agentes policiales, MORAN MACIAS se encontraba dentro del inmueble allanado, lo cual evidentemente constituye un indicio de presencia y oportunidad. No

obstante, en jurisprudencia de la Corte se ha señalado que la presencia en el lugar no es indicador directo de participación en la compra y venta de sustancias ilícitas, pues, además de la presencia en el lugar de los hechos, deben haber otros elementos y factores que demuestren que la conducta está vinculada a la actividad sancionable. (Fallo de 24-8-99).

Así mismo, procedente del domicilio allanado se encontraron 25 cigarrillos de marihuana con un peso de 10.14 gramos y B/.2.75 y ELIZABETH AYALA, en el momento de su detención y cuando rendió declaración indagatoria, manifiestó que eran de su propiedad, sosteniendo que tales artículos nada tienen que ver con MORAN MACIAS.

En las declaraciones juradas de los tres agentes que participaron de la diligencia de allanamiento -ELEUTERIO MIRANDA (f. 56), ERICK CORNELIO GUTIERREZ (f. 61) y RODOLFO CURLEY FRANCIS (65)-, se observa que todos coinciden en señalar que la droga incautada fue lanzada desde la habitación donde se encontraba sola ELIZABETH AYALA.

No hay dentro del expediente informes de vigilancia y seguimiento que indiquen que en dicha vivienda los detenidos se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas. El agente ERICK GUTIERREZ es el único que manifiesta que tenía conocimiento de que en ese inmueble vendían drogas, pero indicando que nunca se corroboró esa información. Los otros dos agentes manifiestan que no sabían que allí se vendiera drogas, de lo que se desprende que ese simple señalamiento, sin que existan los correspondientes informes preliminares que vinculen a MORAN MACIAS con la venta de drogas, por si solo, no es un indicio de responsabilidad en su contra, sobre todo si se tiene en consideración que el lugar allanado constituye la residencia del acusado.

En el caso bajo estudio, la orden de detención contra SERGIO MORAN MACIAS, no cumple con las formalidades señaladas en las disposiciones procesales arriba mencionadas, dado que no es el propietario de la sustancia incautada, no se encontró en su poder droga ni dinero fraccionado, no hay informes de vigilancia o seguimiento que indiquen que se dedique al consumo o tráfico de sustancias ilícitas; los agentes policiales no hacen señalamientos directos contra MORAN MACIAS, y aunque en el historial policivo se determina que fue sobreseído provisionalmente en un caso de robo a mano armada y que mantiene dos procesos relacionados con drogas, en el primero se suspendió el proceso ordenándose medidas de rehabilitación y en el segundo fue sobreseído, por lo que tales antecedentes no necesariamente representan un indicio que amerite que ahora, en este caso, se ordene su detención preventiva, ya que no concurren las circunstancias necesarias establecidas en el artículo 2159 del Código Judicial.

En virtud de que del examen de los elementos probatorios allegados al expediente no se desprenden graves indicios de responsabilidad contra MORAN MACIAS, se debe decretar ilegal la medida cautelar aplicada, lo cual no impide que, de encontrarse nuevos elementos que justifiquen la detención, la misma se produzca, tal como lo contempla el artículo 2595 del Código judicial.

Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de SERGIO EUCLIDES MORAN MACIAS y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto INMEDIATAMENTE EN LIBERTAD, si no tiene otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARÍA SUENGAS DE CAJAR CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Damarys Caballero de Almengor presentó, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de María Suengas de Cajar y en contra del Procurador General de la Nación.

A objeto de resolver la iniciativa constitucional propuesta, el magistrado sustanciador libró un mandamiento de habeas corpus, dirigido al Procurador General de la Nación (vid. f. 9) quien informó que María Suengas de Cajar se encuentra a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores (fs. 10-11). Posteriormente, se libró un segundo mandamiento contra el Ministro de Relaciones Exteriores, del cual se recibió el informe correspondiente el 21 de febrero del año que decurre (fs. 13-29).

Encontrándose el negocio en estado de resolver, se recibió por Secretaría General escrito de desistimiento, en el cual la activadora procesal expresa que desiste de la acción de habeas corpus debido a que "... aún no hemos conocido de la existencia de ninguna orden de detención ...", por lo que "... ya puede haber surgido una sustracción de la materia ... ya que la señora Suengas transita libremente por este o cualquier otro territorio del mundo ..." (f. 32).

Como quiera que el artículo 1073 del Código Judicial reconoce al demandante el derecho a desistir de su iniciativa procesal, expresa o tácitamente, corresponde en el presente caso ordenar el archivo del expediente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus presentada por la licenciada Damarys de Almengor y en consecuencia ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CUTBER ANDERSON BOXILL CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de esta Corporación la acción de habeas corpus

preventivo interpuesto por el licenciado JUAN PAULINO RODRIGUEZ a favor del señor CUTBER ANDERSON BOXILL contra el Director de la Policía Técnica Judicial, División de Homicidios.

Alega el accionante que dicha autoridad inicia una investigación a fín de establecer la identidad del autor del homicidio, cometido en perjuicio de ROBERTO FLORES (TOTITO). Explica en su escrito que unidades de la Policía Técnica Judicial, se presentaron al trabajo de su representado, y que por rumores se le quiere vincular al ilícito.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario contestó en los siguientes términos:

"...
1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor CUTBER ANDERSON BOXILL.

2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.

3. No tenemos a nuestras órdenes, ni bajo nuestra custodia al prenombrado ANDERSON BOXILL. ..." (Fs. 5)

Del informe transcrito se infiere que, contrario a lo expresado en la demanda, el Director de la Policía Técnica Judicial no ha ordenado la detención del favorecido con esta acción. Por tanto, no es procedente el habeas corpus preventivo, como lo pretendió promover el accionante, ya que en nuestro medio su utilización se permite cuando existe una orden de detención que aún no haya sido hecha efectiva.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE, de la continuación de la acción de habeas corpus interpuesto a favor del señor CUTBER ANDERSON BOXILL y ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JULIO GODOY Y JOSE RUBIO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ENRIQUE PEREZ, Juez Segundo Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal, a través del Oficio No. 225 de 17 de febrero del 2000, remitido al Pleno de esta Corporación de Justicia, se inhibe de la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado GONZALO MONCADA LUNA a favor de los señores JULIO GODOY y JOSE RUBIO contra EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL.

Acogida esta acción constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus contra dicha autoridad. Esta remitió el informe de rigor mediante nota de 23 de

febrero del 2,000 en la que señaló lo siguiente:

> 1. No es cierto que hemos ordenado la detención de los señores JULIO GODOY Y JOSE RUBIO.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. Los prenombrados señores, fueron recibidos en nuestra Institución, procedentes de la Dirección de Información e Investigación Policial, de la Policía Nacional, mediante oficio N° 137-DIIP/INV.00 de 17 de febrero del año que discurre (sic), por el supuesto Delito contra la Fe Pública, a disposición de la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante oficio N° DDCLFP-0599-00, calendado 18 de febrero del 2000, no obstante los mismos permanecieron bajo nuestra custodia en el Sistema Transitorio de Cárcel, hasta el día 21 de los corrientes, cuando dichas personas a través de oficio N° 2515 de 21 de febrero del 2000, suscrito por el señor Fiscal Auxiliar de la República, fueron desaprehendidas en virtud de medida cautelar distinta de la detención preventiva, y puestas a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, del Ministerio de Gobierno y Justicia, a fin de verificar su estatus migratorio. ..." ( Fs. 10)

Posteriormente se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de Migración y Naturalización y, mediante Oficio No. DNMYN-DG-0197-2000 de 24 de febrero del 2000, nos informó:

> "...
> a) No es cierto que se ordenó la detención de los señores JULIO GODOY Y JOSE RUBIO.
>
> b) No se ha ordenado la detención, por tanto no existen fundamentos de hecho ni de derecho para la misma.
>
> c) Los señores JULIO GODOY y JOSE RUBIO, fueron remitidos a las oficinas de Migración central, mediante oficio 2515 del 21 de febrero de 2000, por la Fiscalía Auxiliar de la República, para verificar su status migratorio. Después de analizar sus expedientes y percatarnos de que los mismos se encontraban legales en el país, procedimos a liberarlos, por tanto no encuentran en nuestra custodia ni bajo nuestras órdenes.
> Atentamente,
>
> LIC. ERIC SINGARES
> DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION
> Y NATURALIZACION"

Con base al oficio anteriormente transcrito, al considerar la situación jurídica de los favorecidos con esta acción en el sentido de que no existe orden de detención emitida por el Director de Migración y Naturalización y que las personas fueron liberadas por encontrarse legales en nuestro país, lo procedente es declarar el cese de los trámites del procedimiento de habeas corpus, por no existir fundamento legal para su continuación.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE, de la continuación de la acción de habeas corpus interpuesto a favor de los señores JULIO GODOY Y JOSE RUBIO y ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FABREGA PONCE (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EPIFANIO RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Humberto Mosquera B., en representación de ESTEBAN EPIFANIO RODRÍGUEZ PUELLO, presentó acción de habeas corpus contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Licenciado Rosendo Miranda.

Encontrándose el recurso en etapa de resolver, el beneficiario de esta acción constitucional, ESTEBAN RODRÍGUEZ PUELLO, remitió a la Secretaría General de esta Corporación escrito en el que manifiesta que desiste de la acción propuesta en su nombre por el Licenciado Mosquera.

El artículo 1073 del Código Judicial establece que la parte actora puede desistir de su pretensión, y si dicho desistimiento cumple con los requisitos que exige la ley, el Juez debe admitirlo y dar por terminado el trámite.

En vista de que el desistimiento fue presentado por el interesado en esta acción constitucional, y cumple con las formalidades que al efecto señala el artículo 1075 del citado Código, esta Superioridad admite el desistimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de habeas corpus presentada por ESTEBAN EPIFANIO RODRÍGUEZ PUELLO, en su propio nombre, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO FABREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO SOTO PUELLO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado GABRIEL D ANNUNZIO ROSANÍA VILLAVERDE, presentó el día 1 de marzo de 2000, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, la

acción de Hábeas Corpus verbal a favor del ciudadano GILBERTO SOTO PUELLO, contra el Fiscal Auxiliar de la República, a fin de que se declare ilegal la detención preventiva decretada en contra del prenombrado.

Una vez acogido el recurso, se libró mandamiento de Hábeas Corpus contra la autoridad demandada, a fin de que remita el informe de conducta y la copia del expediente.

Encontrándose en espera del respectivo informe, la Secretaría General de la Corte, recibió escrito de desistimiento presentado el día 3 de marzo de 2000 por el Licenciado Gilberto Bernal, en el que manifiesta que desiste de la acción de Hábeas Corpus presentado a favor de su representado, toda vez que el mismo fue presentado por persona desconocida de manera inconsulta y se había consignado una fianza de excarcelación e incluso girado boleta de libertad, acto que impide que su representado obtenga la libertad ambulatoria a que tiene derecho.

Conforme a la solicitud anterior y al tenor de lo dispuesto en el artículo 1073, primer párrafo del Código Judicial, que confiere a toda persona el derecho a desistir expresa o tácitamente una demanda, un incidente o recurso que haya interpuesto, el Pleno de la Corte considera viable acoger esta decisión y concluir las actuaciones que se derivan de la presente acción de Hábeas Corpus.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de Hábeas Corpus presentado por el Licenciado Gilberto Bernal a favor de GILBERTO SOTO PUELLO y en consecuencia se DISPONE el archivo del expediente.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO C.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROHAN DEEN FINLATOR, DESMOND ANTHONY GREEN, WAYNE RICHARD WOODROW BURREL Y BRIAN MARTINEZ ERLINTONG ERLYN CONTRA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION ADUANERA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JOSÉ ALBERTO PLATA MCNULTY, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Acción de Hábeas Corpus a favor de los señores ROHAN DEEN FINLATOR, DESMOND ANTHONY GREEN, WAYNE RICHARD WOODROW BURREL Y BRIAN MARTÍNEZ ERLINTON ERLYN, y contra el Jefe del Departamento de Fiscalización Aduanera, a fin de que se declare ilegal por arbitraria la medida cautelar aplicada a sus representados, consistente en la prohibición al imputado de abandonar el territorio de la República de Panamá sin autorización judicial.

Acogida la acción se libró mandamiento de Hábeas Corpus a la autoridad demandada el día 28 de febrero de 2000, a fin de que remitiera el informe de conducta y copia del expediente. En atención a este requerimiento el funcionario demandado mediante Oficio s/n de fecha 29 de febrero de 2000 remitió el informe, manifestando entre otras cosas, que el Despacho a su cargo no ordenó la detención

preventiva de los recurrentes ni verbalmente ni por escrito.

Informa además que los recurrentes no se encuentran bajo custodia ni a órdenes de esa Agencia de Instrucción Aduanera, ya que el expediente fue enviado para su calificación legal, desde el día 18 de febrero de 2000, a la Administración Regional de Aduanas, Zona Norte con sede en la Provincia de Colón.

Atendido el Mandamiento de Hábeas Corpus y obtenida esta respuesta, el Pleno de la Corte carece de competencia para conocer de la presente Acción de Hábeas Corpus, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la presente acción constitucional y lo DECLINA en el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, para que continúe con el trámite legal correspondientes.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EXIQUIO RIVAS MOSQUERA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Lasso Perea promovió el día 21 de febrero del presente año, acción de habeas corpus a favor de EXIQUIO RIVAS MOSQUERA y contra el Director Nacional de Migración.

Mediante auto dictado el pasado 22 de febrero se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que, en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención.

Sin embargo el licenciado José Lasso Perea desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 24 de febrero de 2000.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado José Lasso Perea dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de EXIQUIO RIVAS MOSQUERA contra el Director Nacional de Migración y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EXIQUIO RIVAS MOSQUERA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez promovió el día 25 de febrero del presente año, acción de habeas corpus a favor de EXIQUIO RIVAS MOSQUERA y contra el Director Nacional de Migración.

Mediante auto dictado el pasado 29 de febrero se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que, en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención.

Sin embargo el licenciado Miguel Deen Rodríguez desistió de la acción de habeas corpus promovida, mediante escrito recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 1 de marzo de 2000.

De igual manera la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia recibió el 2 de marzo de este año una nota mediante la cual el señor EXIQUIO RIVAS MOSQUERA desistió de cualquier habeas corpus que se hubiese presentado a su favor.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado dentro de la presente acción de habeas corpus promovida a favor de EXIQUIO RIVAS MOSQUERA contra el Director Nacional de Migración y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE BOTELLO PAJARO CONTRA EL JUEZ SEGUNDO

DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la Resolución de 2 de febrero del 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acción de Hábeas Corpus promovida por el Licenciado JOSÉ LUIS GALLOWAY, en representación de JORGE BOTELLO PAJARO, contra el JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA.

En la demanda de hábeas corpus interpuesta ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el apoderado judicial del detenido JORGE BOTELLO PAJARO, alega que la detención preventiva de su representado es ilegal porque la cantidad de droga encontrada al imputado es escasa para su consumo, y en la declaración de indagatoria su representado señala que consume droga desde los 16 años. Por otro lado señala que, con respecto al dinero encontrado a su representado, es producto de la venta de raspado, tal y como lo señala el imputado y lo corrobora la declaración del señor ROBERTO PAJARO.

Además agrega el recurrente, que la conducta de su representado se ubica dentro del primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, por la cantidad de droga encontrada y que el señor BOTELLO PAJARO fue sorprendió fumando no vendiendo.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la detención de JORGE BOTELLO PAJARO, motivando su Sentencia en los siguientes términos:

> Examinadas las constancias de autos y sin el ánimo de calificar el mismo, todo parece indicar que estamos frente al supuesto contemplado en el segundo párrafo del Artículo 260 del Código Penal, pues el miércoles 13 de octubre de 1999, cuando fue detenido en flagrancia en posesión de los cinco carrizos y medio de marihuana, también portaba B/.56.00 en efectivo, de los cuales B/.31.00 estaba fraccionado en billetes de B/.1.00. Si bien argumenta a su favor que el dinero era producto de la venta de raspado, ROBERTO PAJARO GONZALEZ, su jefe inmediato, fue claro al señalar que éste sólo presta servicios de viernes a domingo, no así los miércoles como indicó el encartado.
>
> Por otro lado, observa el Tribunal que la orden de detención emanó de autoridad competente mediante resolución motivada, por lo que se ha dado cumplimiento en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo cual debemos declarar legal la detención por la que transita el imputado.” (fs. 18-19).

Según consta en el expediente, el día 13 de octubre de 1999, siendo las 9:15 de la noche, frente al Mini Super MAUSE, fue detenido el señor JORGE BOTELLO PAJARO, por el Sargento Damián Rivera. Señala el Sargento en su informe de novedad, quien se ratificó de dicho informe (fs. 8-10), que sintió un olor a humo de marihuana y procedió a detener al señor BOTELLO, encontrándole en el bolsillo derecho del pantalón, un envase plástico que contenía cinco (5) cigarrillos y uno (1) por la mitad, elaborados con papel blanco, que se presume sea droga, al igual que la suma de cincuenta y seis balboas (B/.56.00), desglosados en un billete de veinte balboas (B/.20.00), un billete de cinco balboas (B/.5.00) y treinta y uno en billetes de un balboa (B/.1.00).

Al rendir indagatoria JORGE BOTELLO PAJARO, manifestó que consume MARIHUANA desde los 16 años y que el dinero que le fue encontrado era producto de la venta

de respado, ya que él se dedica a esa actividad de viernes a domingo y le pagan de B/.40.00 a B/.75.00. Que labora también los miércoles y que le pagan de B/.15.00 a B/.20.00. Indicando que trabaja para su tío ROBERTO PAJARO.

Mediante el dictamen pericial practicado por el Laboratorio Especializado en Drogas, de la Policía Técnica Judicial, la sustancia encontrada al señor BOTELLO PAJARO, dio resultado POSITIVO, para la determinación de Marihuana, con un Peso de 1.19 gramos.

Para una adecuada solución de esta acción constitucional subjetiva es preciso analizar si la medida cautelar impugnada se ajusta a los requisitos establecidos por el Código Judicial, específicamente el que señala el precepto 2148 de dicha excerta legal, que se refiere a la improcedencia de la detención preventiva cuando se investiga delito que tiene señalada pena mínima de dos años de prisión.

Esta Corporación Judicial al analizar las constancias procesales que se adjuntan, considera que, hasta la fecha no existen elementos que comprometan al encartado con el delito de venta de sustancias ilícitas, sino más bien con el de posesión de drogas.

Los hechos investigados vinculan claramente al detenido con el delito de posesión de drogas, tipificado en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, y sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días multa. Lo anterior es así, porque al momento de ser detenido tenía en su poder cinco cigarrillos y medio de marihuana con un peso de 1.19 gramos, cantidad que no sobrepasa el límite que establece el Instituto de Medicina Legal para una dosis de consumo mínima en los adictos.

Todos los elementos autorizan a concluir que la conducta del imputado se enmarca en la comisión del delito de posesión de drogas para fines de consumo, sancionado por el artículo 260 del Código Penal, con pena mínima de un (1) años de prisión, siempre y cuando por la cantidad ocupada se demuestre que no se pretendía suministrarla en venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la Sentencia dictada el 2 de febrero del 2000 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, DECLARA ILEGAL la detención decretada en contra del señor JORGE BOTELLO PAJARO y ORDENA sea puesto inmediatamente en libertad, siempre que no exista otra causa penal pendiente en su contra.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUSTINO ROMERO MEDINA CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACION. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gustavo Adolfo Peralta Sánchez, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de JUSTINO ROMERO y contra el Director General de Migración y Naturalización.

En su escrito, el licenciado Peralta Sánchez, señaló lo siguientes:

"Primero: El señor JUSTINO ROMERO MEDINA cumplió condena de tres años en el Centro Penitenciario La Joyita, el mismo fue puesto en libertad de acuerdo a la boleta número 0854 después de haber cumplido la totalidad de la misma (3 años). Actualmente se encuentra detenido en la Dirección de Migración y Naturalización.

Segundo: El señor Justino Romero Medina es natural de Colombia, nació cerca de Puerto Obaldia y de muy pequeño se vino a vivir a Santa Fe, Provincia de Darién.

Con el transcurso de los años obtuvo su cédula panameña que es la E-8-703-90, a través del Convenio Colombo-Panameño.

Al momento de su detención había estado unido con la señora Rebeca Torrero por espacio de siete años. De esa unión nacieron dos niños y una niña que sólo conoció por espacio de seis meses y que en la actualidad cuenta con tres años y que no ha podido ver.

Como se puede apreciar el señor JUSTINO ROMERO MEDINA tiene su residencia permanente en la República de Panamá específicamente en Monte Oscuro, casa 1117, calle novena.

Tercero: Señores Magistrados, si nuestro representado ya cumplió una pena impuesta por un tribunal competente para estos casos, no consideramos prudente que se realice cualquier otro acto, como en este caso es su detención para después pretender aplicarle una deportación injusta, puesto que lo único que ocasionaría es un perjuicio mayor en vista que lo separaría de su esposa e hijos, trayendo como consecuencia el resquebrajamiento familiar y los daños de carácter emocional a sus hijos, que aún son menores de edad y dependen totalmente de su padre.

Cuarto: Somos conscientes que el señor Romero Medina ha infringido la ley, pero ya ha pagado a la sociedad cumpliendo toda la condena que se le impuso; pero querer ir mas allá como aplicarle otra sanción, sin tomar en cuenta que es residente y además tiene cédula panameña, es sancionarlo doblemente. Por otra parte, la sentencia dictada en su momento por el juzgado, no incluye como pena accesoria su detención en la Dirección de Migración para su deportación y lo que es peor, aún después de pagarle a la sociedad continúa privado de su libertad.

Somos conscientes que existen algunos extranjeros que violan las disposiciones de naturaleza penal, como lo son los delitos relacionados con drogas, ejemplo el tráfico internacional de drogas o personas que atenté directamente contra el orden público; el delito que cometió el señor Romero Medina no entra en esta esfera, y si fuera así no debería proceder con la deportación en vista de que posee cédula panameña y lo más importante como lo hemos resaltado a lo largo de este escrito ha residido por muchos años en la República de Panamá.

Respetados Magistrados, el pretender cuartarle la libertad al señor Romero Medina con el pretexto de aplicarle una deportación es injusta no sólo para él sino para toda su familia; viola todas las garantías constitucionales; este comportamiento puede repetirse no

sólo para nuestro patrocinado, también puede afectar en el futuro a otras personas que están en iguales condiciones, por eso con todo el respeto hacemos un llamado muy especial a este supremo tribunal para que se pronuncie en estas arbitrariedades." (fs. 3 y 4)

I. MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

Acogida la presente acción se libró el mandamiento correspondiente contra el funcionario demandado, quien mediante nota N° DNMYN-118/2000, de 14 de febrero de 2000, rindió su informe en los siguientes términos:

"a) No es cierto que se ordenó la detención del ciudadano JUSTINO ROMERO MEDINA de nacionalidad colombiana, el mismo fue remitido mediante oficio N° 20, del 26 de enero de 2000, por el Centro Penal la Joyita, posteriormente este despacho ordena su detención mediante Resolición DNMYN-SI-0078 DEL 27 de enero de 2000 por razones de Seguridad y de Orden Público.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicho ciudadano son los siguientes:

Primero: Que JUSTINO ROMERO MEDINA de nacionalidad colombiana, fue remitido mediante oficio N° 20, del 26 de enero de 2000, por el Centro Penal La Joyita.

Segundo: Que el señor JUSTINO ROMERO MEDINA de nacionalidad colombiana, fue condenado por delito contra el Pudor y la Libertad Sexual.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el decreto ley N° 16 de 30 de junio de 1960, modificado por el decreto ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965, y la ley 6ta. del 5 de marzo de 1980, específicamente los artículos 36, 37 literal f, 65 segundo párrafo, 66 y 85 ...

c) Al señor JUSTINO ROMERO MEDINA, de nacionalidad colombiana, se le canceló la Permanencia Definitiva con derecho a cédula de identidad personal mediante Resolución 0586 del 9 de febrero de 2000 y mediante Resolución N° 0585 del 9 de febrero de 2000 se ordena su Deportación del Territorio Nacional, por razones de Seguridad y Orden Público, ambas resoluciones le están siendo notificadas por edicto ya que el mismo no quiso notificarse personalmente, el señor ROMERO MEDINA, se encuentra bajo nuestra custodia y bajo nuestras órdenes, en espera de la compra de su pasaje de vuelta a su país de origen una vez se le notifique de las resoluciones antes citadas." (fs. 7 y 8)

II. CONSIDERACIONES DEL PLENO

Al resolver la presente acción de habeas corpus, el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia observa que el Director Nacional de Migración y Naturalización, mediante Resolución N° DNMYN-SI-0078 fechada el 27 de enero de 2000, ordenó la detención del ciudadano colombiano JUSTINO ROMERO MEDINA por razones de seguridad y de orden público (f. 9).

Dicha resolución le fue notificada personalmente al prenombrado ROMERO MEDINA el 27 de enero de 2000, y el mismo no recurrió contra ella.

También observa esta Superioridad, que el Director Nacional de Migración y Naturalización, mediante resolución N° 0585DNMYN de 9 defebrero de 2000, ordenó deportar del territorio nacional al señor JUSTINO ROMERO MEDINA por motivos de

seguridad y de orden público, y que a través de la Resolución N° 0586 DNNYN de esa misma fecha, dicha autoridad resolvió revocarle el permiso de permanencia definitiva con derecho a cédula que le había sido concedido mediante la Resolución N° 5690 de 23 de agosto de 1996.

El contenido de ambas resoluciones le fue comunicado al señor ROMERO, quien se negó a plasmar su firma en señal de notificación. Por esta razón la Dirección Nacional de Migración y Naturalización publicó los edictos N° 013 y 014, ambos de 9 de febrero de 2000, mediante los cuales dio a conocer el contenido de dichas resoluciones.

Vale la pena destacar que la Dirección Nacional de Migración y Naturalazación se encuentra plenamente facultada para hacer este tipo de notificaciones, por cuanto que el segundo párrafo del artículo 85 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960 establece que las resoluciones dictadas por el Director de Migración deben ser notificadas personalmente al interesado o a su representante o apoderado, y que si no pudiera ser notificado personalmente, se fijará un edicto en papel común en lugar público del respectivo Despacho por el término de tres (3) días hábiles, con inserción de la parte dispositiva de la resolución.

También es importante indicar que con fundamento en el artículo 85 del Decreto Ley 16 de 1960 (que le concede al Director Nacional de Migración y Naturalización la facultad de decidir, en primera instancia, los asuntos relacionados con la migración en general), dicha autoridad aplicó el artículo 65 del Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965.

Ese artículo establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia se encuentra facultado por la Ley para cancelar los permisos de permanencia definitiva así como para ordenar la deportación de aquellos extranjeros que se encuentren en cualquiera de los casos contemplados en los artículos 36, 37 y 38 del Decreto Ley N° 16 de 1960, modificado por el Decreto Ley N° 13 de 1965 y la Ley N° 6 de 1980.

Ahora bien, el señor JUSTINO ROMERO MEDINA fue condenado por la comisión de un delito contra el pudor y la libertad sexual, razón por la cual le es aplicable el contenido de los artículo 36 y 37 (literal f) del decreto ley antes mencionado, los cuales establecen lo siguiente:

> "Artículo 36. El Ministro de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo, a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, de salubridad o de orden público."
>
> "Artículo 37. Queda prohibida la migración al país de los extranjeros que se encuentren en cualquiera de las condiciones que se pasan a enumerar:
>
> Literal f) En general todas las personas de antecedentes penales, tales como los prófugos y los condenados o sindicados por delitos comunes; y los que hubieren sido deportados por la República de Panamá."

Como el señor Justino Romero Medina está detenido de acuerdo con un mandamiento escrito dictado por autoridad competente, ha sido debidamente notificado de dicha decisión y ha tenido la oportunidad de impugnarla, el Pleno de la Corte estima que su detención es legal y así debe declararse.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL la detención del

señor JUSTINO ROMERO MEDINA, y dispone ponerlo a órdenes de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBEN LAM BUSTAMANTE CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL Y EL DIRECTOR DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Yovani Garrido ha interpuesto acción de habeas Corpus preventivo a favor de RUBEN LAM BUSTAMANTE y contra el Director de la Policía Técnica Judicial y el Director de la Policía Nacional.

La abogada sustenta su acción en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El señor RUBEN LAM BUSTAMANTE se halla en libertad y como todo ciudadano es merecedor de que se le garanticen sus derechos y garantías; por ello y en virtud de que la dependencia de la DIIP de Ancón ha venido realizando una persecución en su contra sin que medie resolución de algún funcionario de instrucción que lo vincule a delito alguno.

SEGUNDO: El señor LAM BUSTAMANTE se encuentra desconcertado del proceder de estas autoridades, quienes intentan vincularlo al ilícito perpetrado en el supermercado El Rey de Villa Lucre, hecho acontecido a inicios del mes de febrero de 2000, sin que existan pruebas o señalamientos que lo involucren, cuando establece claramente el Código Judicial nuestro, en su artículo 1966, que toda persona tiene derecho a su libertad personal y frente a toda denuncia se presume su inocencia.

Es importante señalar que mi cliente el señor RUBEN LAM BUSTAMANTE, ha sido investigado por delitos anteriores, pero esto no debe estigmatizarlo para que apenas ocurra algún hecho ilícito, acuda inmediatamente la DIIP a perseguirlo y detenerlo, sin que utilicen mecanismos de prueba serios para poder limitarle el derecho de libertad a algún ser humano.

CUARTO: Que mi cliente es un ciudadano respetuoso de las leyes y está consciente de que los delitos deben ser investigados, no obstante, para ejecutar las pesquisas necesarias existen procedimientos, mismos que a través de esta solicitud se están violentando al no ser observados por el departamento de la DIIP e incluimos a la Policía Técnica Judicial por ser los que actualmente ejercen la recopilación como investigadores de los ilícitos en su etapa inicial.

> QUINTO: Que mi cliente está dispuesto a cooperar con las autoridades dentro de lo que le sea posible y le conste, porque no podría aportar hechos o informaciones que no haya percibido por sí mismo. (fs. 1-2)

Mediante auto de 1° de marzo de 2000 se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente y se le requirió a los funcionario demandado que informaran si habían ordenado la detención del señor LAM BUSTAMANTE, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvieron para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El Director General de la Policía Técnica Judicial contestó el mandamiento de habeas corpus mediante Nota A. L-0145-00 de 1° de marzo de 2000, en la cual informó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor RUBEN LAM BUSTAMANTE.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos a nuestras órdenes, ni bajo nuestra custodia al prenombrado LAM BUSTAMANTE." (f. 7)

Por su parte el Director General de la Policía Nacional respondió al mandamiento de habeas corpus en los siguientes términos:

> "1. No es cierto que haya ordenado la detención del ciudadano Rubén Lam Bustamante, ni por escrito ni verbalmente.
>
> 2. Queda explicado en el literal anterior.
>
> 3. No tengo bajo mi custodia, ni a mis órdenes a la persona que se me ha mandado a presentar. El mismo no ha estado en nuestras instalaciones ni ha sido perseguido por delito alguno." (f. 8)

Esta Corporación de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que en las acciones de habeas corpus preventivas, es necesario la existencia de una orden de detención. En el presente caso, se ha comprobado plenamente que las autoridades demandadas no han emitido ninguna orden de detención contra el señor RUBEN LAM BUSTAMANTE, ni ha sido detenido, por tanto, no existe uno de los presupuestos procesales que dan vida a esta acción.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de este procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del presente proceso de habeas corpus promovido por la licenciada Yovani Garrido, en representación de RUBEN LAM BUSTAMANTE, y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUMBERTO VÁSQUEZ RODRÍGUEZ CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.**

**VISTOS:**

**Ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus presenta por el licenciado Orlando Alonso Rodríguez a favor de Humberto Vásquez Rodríguez, sindicado por delito contra el patrimonio y contra del Magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia.**

**Por acogida la iniciativa constitucional se libró mandamiento de habeas corpus, que fue contestado por la autoridad requerida mediante oficio No. 66-A. C. del 23 de febrero del 2000, en el que indica "... que no es cierto que haya ordenado la detención del Señor Vásquez ..."(Cfr. f. 5).**

**Agrega la autoridad demandada que tuvo conocimiento del expediente en razón de apelación presentada contra la sentencia del 13 de octubre de 1998 proferida por el Juzgado Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá (f. 5).**

**De otra parte sostiene que la apelación fue resuelta mediante sentencia del 22 de febrero del 2,000 confirmando la sentencia de primera instancia en todas sus partes y remitida la actuación en la misma fecha al Juzgado de Circuito de origen (Cfr. f. 5).**

**Por acreditado el hecho de que el beneficiario de esta acción constitucional se encuentra, en estos momentos, a órdenes del Juzgado Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, la Corte Suprema concluye que carece de competencia para conocer, en primera instancia de esta acción de habeas corpus en virtud del artículo 2602 del Código Judicial.**

**En consecuencia, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento de la presente acción constitucional y lo DECLINA ante el Segundo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Panamá.**

**Notifíquese y Devuélvase.**

**(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS**
**(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ** **(fdo.) JOSE A. TROYANO**
**(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.** **(fdo.) GRACIELA J. DIXON**
**(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK** **(fdo.) HUMBERTO COLLADO T.**
**(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA** **(fdo.) ARTURO HOYOS**
**(fdo.) YANIXA Y. YUEN**
**Secretaria General, Encargada**

**=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=**

**ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BORIS ALBERTO CHÁVEZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.**

**VISTOS:**

**Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por la Licenciada Ana Lola Blaisdell N. contra el Director de la Policía NacionaL, a favor de BORIS ALBERTO CHÁVEZ..**

Acogida la presente acción constitucional, se libró el mandamiento correspondiente contra el señor Carlos Barés Weeden, Director General de la Policía Nacional, quien mediante Oficio N° AL-723-00 de 1 de marzo de 2000 expresó que CHÁVEZ sería trasladado en esa fecha "a la Fiscalía Auxiliar de la República" a petición de la Policía Técnica Judicial, puesto que al mismo "se le investiga por la denuncia 2A-232-2000 (robo a mano armada) ...". (f. 4)

Enderezada la acción contra el Fiscal Auxiliar de la República, Licenciado Carlos Augusto Herrera, quien mediante Oficio N° 3149, rindió informe de conducta en los siguientes términos:

"...
A). Sí es cierto. Mediante resolución de fecha 2 de marzo del año 2000, ordenamos la detención preventiva de BORIS ALBERTO CHÁVEZ.

b). El día 2 de este mes y año, el señor ALBERTO ESPIÑO NEIRA denunció ante la Policía Técnica Judicial denunció ante la Policía Técnica Judicial que varios sujeto (sic), con armas de fuego se presenta por la empresa la Arenera, ubicada en el Chorrillo, aproximadamente a las 2:00 de la tarde. Despojaron al celador de la empresa CANDELARIO ALVARADO de su arma de reglamento. Encañonaron al cajero y se llevaron la suma de dinero en efectivo de cuatro mil balboas (B/.4,000.00). Posteriormente se llamó a la Policía Nacional quienes montaron un operativo en el Chorrillo y lograron la captura de tres sujetos cuyos nombres son ALEXIS ROLANDO COX ESPINO (A) CHOMBÓN, LAFFITH VIQUEZ y ERNESTO LUIS GUERRERO.

Rinde declaración jurada el señor CANDELARIO ALVARADO, seguridad de la empresa afectada quien manifiesta que de los sujetos que lo despojaron de su arma de reglamento pudo identificar en la Policía de San Felipe a uno de ellos, el cual responde al nombre de BORIS ALBERTO CHÁVEZ (A) BORIS al igual identificó el arma de fuego.

...
c) El señor BORIS ALBERTO CHÁVEZ no se encuentra ni a nuestra órdenes (sic) ni bajo nuestra custodia ya que mediante el oficio No. 3104, enviado a la Directora del Sistema Penitenciario (Corrección), para que sea filiado, recluído y puesto a ordenes (sic) de la Fiscalía Décima del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fecha del día 2 de marzo del año en curso, imputado por el delito CONTRA EL PATRIMONIO. ...". (f. 9).

Como del informe transcrito se aprecia que BORIS ALBERTO CHÁVEZ se encuentra actualmente a órdenes de la Fiscalía Décima del Primer Circuito Judicial de Panamá, la competencia para conocer de la presente acción constitucional de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 128 y numeral 2 del artículo 2602, ambos del Código Judicial, corresponde al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en razón de ser los Fiscales servidores públicos con jurisdicción en una provincia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE del conocimiento de la presente acción de habeas corpus, y DECLINA ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial la competencia para conocer del mismo.

Notifíquese y Envíese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA

(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUCITANIA MARIA SEGURA VALVERDI CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Nemesio Fajardo Angulo, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor LUCITANIA MARIA SEGURA VALVERDE, y contra el Fiscal Superior Especial, por considerar que la detención que ha sufrido la precitada es ilegal.

Acogida la acción, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo mediante providencia de 2 de marzo de 2000, el cual fue contestado por el Fiscal Superior Especial, mediante el Oficio N° 192 de 3 de marzo de 2000, contestando el referido mandamiento.

En momentos en que circulaba el proyecto de resolución judicial preparado por el Magistrado Sustanciador que resolvía la acción de habeas corpus, el licenciado Nemesio Fajardo Angulo y presentó escrito de desistimiento calendado 13 de marzo de 2000 ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente" conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, esta Superioridad considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO de la acción de Habeas Corpus, presentado por el licenciado Nemesio Fajardo Angulo.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ROBIN DANIEL PÉREZ PITTÍ Y JOSÉ SÁNCHEZ QUIROZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA ZONA DE POLICÍA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado Edrulfo Espinales Miranda a favor de los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ QUIROZ y en contra de la Resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, calendada 16 de febrero del 2000, mediante la cual declaró legal la detención preventiva de los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ y JOSÉ ALFREDO

SÁNCHEZ QUIRÓZ, dentro de la Demanda de Hábeas Corpus presentada a favor de ellos, en virtud de detención decretada por la Fiscalía Delegada de Drogas de Chiriquí por encontrarse sindicados por el delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial funda su decisión en los siguientes términos:

> "Del examen de lo actuado, estima la colegiatura que tal como lo ha expuesto la funcionaria acusada, surgen en la encuesta penal los elementos probatorios suficientes que demuestran la vinculación de Rubén Daniel Pittí Pérez y José Alfredo Sánchez Quiroz con el ilícito investigado. En efecto, los informes de investigación policial señalan a los prenombrados como los sujetos que se estaban dedicando a la venta y distribución de sustancias prohibidas, hecho que culminó con su aprehensión en el vehículo taxi rojo, con placa de circulación 4T-652 que transportaba a los imputados con gran cantidad de droga (cocaína) esparcida por todas partes.
>
> Siendo ello así, y en virtud de que la diligencia que ordena la detención preventiva de los accionantes satisface el querer del artículo 2159 del Código Judicial y ha sido emitida por autoridad competente, cumpliendo con las formalidades legales en materia de detención preventiva, lo procedente es declarar legal la privación de libertad que vienen sufriendo los imputados y así procede hacerlo.
>
> Por tanto, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva que viene sufriendo ROBIN DANIEL PITTY PEREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ QUIROZ por aparecer vinculado a un delito contra la salud pública. En consecuencia, se ordena filiar nuevamente a los prenombrados a disposición de la Fiscalía de Drogas de la Provincia de Chiriquí:" (fs. 18-19).

Por su parte, la disconformidad del recurrente con el fallo del A-quo radica en que los señores ROBIN DANIEL PITTI PÉREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ QUIROZ se encuentran frente a una conspiración policial afectando seriamente la vida y la integridad de sus representados.

Señala que el SDIIP, como la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial no coordinaron con la Fiscalía de Drogas un operativo para detener a estas personas.

Agrega que la narración de los hechos ocurridos el doce (12) de febrero del presente año, contienen muchas lagunas y contradicciones.

Pasa el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a resolver la acción de hábeas corpus, previas las siguientes consideraciones:

Es preciso determinar en primer lugar si la detención preventiva que sufren los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ QUIROZ, cumple con los requisitos previstos en la Constitución y en las Leyes, esto es, que emane de autoridad competente, que contenga fundamentos de hecho y de derecho, que se trate de un delito con pena mínima de dos años o que haya flagrancia, que esté comprobada la comisión del hecho punible y que exista una vinculación del sujeto con el ilícito.

Se observa de fojas 66 a 69, que la orden de detención preventiva contra los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ fue decretada mediante providencia de fecha 12 de febrero del 2000, emitida por la Fiscalía Delegada de Drogas de Chiriquí, que la misma cumple con las formalidades legales,

todo lo cual unido a que los sindicados fueron aprehendidos el 12 de febrero del 2000, por unos Agentes Policiales de la Subdirección de Información e Investigación Policial de la Zona Policial de Chiriquí, quienes se transportaban en un taxi, color rojo, con matrícula 4T-652, del cual se tenía información que supuestamente era utilizado para transportar sustancias ilícitas. Al ser interceptados por los Agentes, éstos señores intentaron darse a la fuga, por lo que, los Agentes Policiales procedieron a realizar un disparo en la rueda trasera izquierda, obligando así al conductor a salir del auto.

En la diligencia de registro al vehículo en que se trasportaban los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ, JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ, EDDIE EVARISTO GONZÁLEZ GUTIERREZ y ARIS EDEM AROSEMENA, se encontró en el asiento del conductor cierta cantidad de residuos de sustancia de color cremoso, presumiblemente Crack, en el asiento del acompañante o derecho delantero se encontró cinco fragmentos de diferentes tamaños y residuos que se presume cocaína, en el asiento trasero se encontró una bolsa plástica a rayas rojas y blancas que contenía treinta y cinco fragmentos de diferentes tamaños y residuos presumiblemente cocaína, en el piso de la parte trasera se encontró sesenta y cinco fragmentos o piedras y residuos de presunta cocaína, debajo del asiento derecho delantero se encontró una bolsa plástica a rayas verdes que en su interior contenía ciento cincuenta y seis barras de presunta cocaína.

La División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial de la Provincia de Chiriquí practicó la prueba de campo preliminar a la gran cantidad de sustancias incautadas, dando resultado POSITIVO para la determinación de COCAÍNA (CRACK), tal como consta a foja 56 del expediente.

Al ser indagados los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ, ambos se acogieron a sus derechos constitucionales y legales correspondientes, al señalar que no declararán solo, sino con la asistencia de un abogado. (fs. 73 y vta. y 79-80 respectivamente).

Por otro lado, consta en el expediente informes de seguimiento e investigaciones adelantadas, tanto por la Subdirección de Información e Investigación Policial (SDIIP) como por la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial de la Provincia de Chiriquí, que señalan o vinculan a los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ, JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ , con la venta y distribución de sustancias ilícitas.

El examen de las constancias procesales nos permiten concluir que concurren los indicios graves suficientes para vincular a los detenidos con el hecho que se les imputa, que es de aquellos que atentan contra la salud pública relacionado con drogas, que el delito conlleva pena de prisión superior a los dos años y que el mismo amerita la medida cautelar de detención preventiva, por lo que el Pleno de la Corte considera legal la detención de ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ ordenada por la Fiscalía Delegada de Drogas de la Provincia de Chiriquí.

Por todo lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución fechada 16 de febrero del 2000, expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se declaró legal la detención preventiva que sufren los señores ROBIN DANIEL PITTÍ PÉREZ y JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ QUIROZ, y DISPONE que los detenidos sean puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE KENNETH FIELD CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el Licenciado Mauro Pérez Cittadini, a favor de KENNETH BERNARD FIELDS, y en contra del Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, Licenciado Rosendo Miranda.

Librado el mandamiento que exige la ley, el funcionario acusado remitió su informe de conducta en donde indicó que, en efecto, mediante resolución de 21 de diciembre de 1999 ese despacho ordenó la detención preventiva del señor KENNETH BERNARD FIELDS, teniendo como fundamentos de hecho y de derecho lo siguiente:

> "SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que inspiraron dicha decisión tienen sus inicios el pasado catorce (14) de diciembre del año 1999, cuando fueron retenidos los ciudadanos de nacionalidad estadounidense BONITA TOMLINSON PARK y KENNETH BERNARD FIELDS por inspectores de Aduana de la Zona Aeroportuaria, debido a su presunta vinculación con un delito enmarcado de manera genérica en el Capítulo V, Título VII del Código Penal, es decir, por delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA Relacionado con Drogas.
>
> Los hechos tienen su inicio, cuando inspectores de Aduana fueron avisados de la presencia de unas maletas que presentaron anomalías. Una vez ubicadas las maletas fueron revisadas en presencia de los respectivos dueños, los cuales respondieron a los nombres BERNARD KENNETH FIELD (sic) y BONITA TOMLINSON PARK de nacionalidad estadounidense quienes viajaban justos con destino a Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Al revisar la maleta colillada DL 232-928 perteneciente a BONITA TOMLINSON PARK la cual matenías dos envases de almidón en spray que levantaron las sospechas de los inspectores, por lo que se procedió a perforarlos brotando de los mismos polvo blanco, el cual fue sometido a una prueba de campo arrojando una coloración positiva para la droga conocida como COCAÍNA.
>
> Este Despacho consideró que existían elementos indiciarios que justificaban la recepción de indagatorias a los prenombrados. En las mismas BONITA TOMLINSON manifestó que quería declarar en presencia de su abogado tal y lo prevé el artículo 22 de la Constitución Panameña. Por su parte él (sic) señor KENNETH BERNARD señalo (sic) que el (sic) conoce a la joven BONITA TOMLINSON y que la había invitado a veranear a Panamá toda vez que en su país hace mucho frío. Agrega que a él se le dio (sic) un dinero producto de una indemnización y con el mismo aprovechó para irse de viaje con la joven TOMLINSON. Aduce que tenía setecientos a ochocientos dólares ($700.00 u 800.00) a su arribo a Panamá y que al momento de su retención le quedaban quince dólares ($15.00). Indicó que la sustancia fue hallada en la maleta de BONITA TOMLINSON y por tanto, señaló no tiene que ver en nada con las sustancias encontradas.
>
> Pese a lo argumentado por Kenneth Bernard, es importante considerar

> que fue él quien le propuso a Bonita Tomlinson venir a Panamá y no lo contrario.
>
> TERCERO: Las sustancias incautadas fueron remitidas al Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, el cual fue positivo para la determinación de COCAÍNA con un peso de 613.50 gramos. ...". (fs. 6-8).

De acuerdo con las constancias procesales, la presente investigación se inicia cuando el día 14 de diciembre de 1999, en horas de la mañana la señora Aydeth Contreras, auditora de la Compañía Delta Airlines, se presenta ante la Dirección General de Aduanas del Aeropuerto Internacional de Tocumen, informando que en las correas de dicha línea aérea se habían detectado unas maletas que mostraban un contenido sospechoso.

Ante tales circunstancias, los inspectores de aduana Juan Carlos Rodríguez, Manuel Asfall y el teniente Ricardo Jaramillo procedieron a revisar las maletas, ante la presencia de sus respectivos dueños, los señores KENNETH BERNARD FIELDS y BONITA TOMLINSON PARKS, de nacionalidad norteamericana, encontrándose en una de ellas dos (2) envases de almidón en spray Niagara, que al ser perforados brotaron un polvo blanco, al cual al realizársele la prueba de campo resultó positiva para la presencia de sustancia ilícita.

Tales hechos motivaron que se le recibiera declaración indagatoria al señor FIELDS, en la que manifestó que viajó a Panamá en compañía de su amiga BONITA con el fin de disfrutar de unos días de vacaciones. También señaló desconocer la existencia de esos envases en la maleta de la señora PARKS y expresa que ésta se entrevistó a solas, en la habitación del hotel donde se hospedaron, con una señora que BONITA conoció en dicho hotel.

Esta Superioridad no puede soslayar que, aunque el hecho punible se encuentra debidamente acreditado con el hallazgo e incautamiento de sustancias ilícitas, la vinculación del señor FIELDS debe examinarse con minuciosidad, toda vez que la incriminación de dicha persona se produce, a juicio de la Fiscalía de Drogas, por el hecho de que éste era el compañero de viaje de la señora PARKS de lo que se desprende que tenía pleno conocimiento de la existencia de dicha sustancia ilícita. De esta forma, a juicio de la agencia instructora, pesan sobre el encartado indicios de presencia y oportunidad.

Advierte el Pleno que, según el informe redactado por los inspectores de aduana del Aeropuerto de Tocumen que participaron en la revisión del equipaje sospechoso y que consta a fojas 2 del expediente principal, se deja claramente establecido, en la parte final del mismo, que la maleta en la cual se encontraron los envases contentivos de la sustancia ilícita, estaba colillada con el número DL 232-928 perteneciente a la señora BONITA TOMLINSON PARKS, sin que en ese informe se haga alusión al hallazgo de sustancia ilícita alguna en la maleta del señor KENNETH FIELDS.

Es el criterio este Tribunal, que los indicios a los que se hace alusión en el expediente, no revisten la magnitud suficiente -conforme al principio de proporcionalidad contenido en el artículo 2147-D del Código Judicial- para justificar la privación de libertad del señor FIELDS. De otra parte, el hecho de que este señor haya decidido venir a pasear a Panamá y estuviera viajando en compañía de la señora PARKS, a quien se le encontró en su equipaje dos envases con contenido ilícito, no constituyen por sí solos indicios incriminatorios contundentes para los fines de establecer la vinculación del señor FIELDS con el hecho.

De lo que se deja dicho, si bien se estima que nos encontramos ante la presencia de un hecho ilícito, en lo que respecta a la persona de KENNETH BERNARD FIELDS no se dan los elementos probatorios suficientes para mantener la privación de su libertad, razón por la cual se debe declarar ilegal su detención

preventiva.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de KENNETH BERNARD FIELDS, y en consecuencia ORDENA su inmediata libertad.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (Con Salvamento de Voto).
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) YANIXA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
ADAN ARNULFO ARJONA L.

Con todo respeto deseo manifestar que disiento de las consideraciones plasmadas en la decisión adoptada por la mayoría del Pleno, en virtud de que, en mi concepto, constan en el expediente una serie de circunstancias que razonablemente vinculan al señor KENNETH BERNARD FIELDS, con el delito en virtud del cual se le ha detenido. Tales circunstancias son las siguientes:

1. Cantidad de droga encontrada: Según consta a foja 79 de los antecedentes al momento de la detención del señor KENNETH BERNARD FIELDS y de su acompañante BONITA TOMLMINSON PARK se logró el decomiso de 613.50 gramos de cocaína que venían escondidos en dos envases de metal en forma cilíndrica.

2. Indicios que comprometen y vinculan al detenido: Del análisis de las constancias procesales emergen, a mi modo de ver, los siguientes hechos indiciarios que, de acuerdo a la experiencia común, evidencian, en principio, que el señor KENNETH BERNARD FIELDS no desconocía la actividad ilícita que motivó su fugaz viaje a Panamá:

a) El detenido propuso el viaje a Panamá:

Según informa el agente de instrucción, el detenido KENNETH BERNARD FIELDS manifestó que fue él quien le propuso a su acompañante viajar a Panamá, y ambos estuvieron en todo momento juntos, razón por la cual, resulta verdaderamente inverosímil que él ignorara de la existencia y transporte de la sustancia ilícita por parte de su compañera de viaje.

b) Ausencia de Pasaporte:

Tanto el señor KENNETH BERNARD FIELDS como su acompañante BONITA TOMLMINSON PARK ingresaron a nuestro país sin pasaporte, de lo que se infiere que sólo realizaban un brevísimo viaje para retornar inmediatamente a los Estados Unidos, circunstancia que razonablemente hace dudar de que su viaje a Panamá estuviera justificado por razones meramente turísticas.

c) Indicios asociados a la actividad de tráfico de droga:

El Agente de Instrucción indica en su informe que los insuficientes recursos económicos de que disponían tanto el señor KENNETH BERNARD FIELDS como su acompañante (B/.700.00 u B/.800.00) en relación con el tiempo de estadía y los presuntos motivos turísticos del viaje, deja "... en evidencia que el motivo del viaje era el de venir a buscar la droga", que iba a ser introducida en los Estados Unidos. (Véase foja 8 del expediente de Habeas Corpus).

Apoyado en los hechos que anteceden estimo que, en el estado incipiente en que se encuentra la investigación, la medida de liberar al detenido puede resultar prematura y contraproducente para el eficaz desarrollo de la misma, habida cuenta que, es bastante probable que el señor KENNETH BERNARD FIELDS una vez liberado abandone el territorio nacional en su condición de norteamericano y se ponga de ese modo a cubierto de la acción de las autoridades panameñas. Por los motivos expresados, respetuosamente SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBEN ALBERTO MATTEUS VEGA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

EL Pleno de La Corte Suprema de Justicia ha recibido procedente de la Secretaría General, la Acción de Hábeas Corpus interpuesta el día 7 de febrero de 2000, por la Licenciada ROSARIO GRANDA BRANDAO a favor del ciudadano RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA, a quien se le sigue proceso penal por la supuesta comisión del Delito Contra La Salud Pública y Contra la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.

ADMISIÓN DEL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS Y
RESPUESTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

Una vez admitida la presente acción de Hábeas Corpus, se libro mandamiento contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, PATRICIO CANDANEDO, quien al rendir su informe mediante Oficio N°FD2-T20-610-00 de 9 de febrero de 2000, manifestó haber sido el funcionario de instrucción que ordenó la detención preventiva del ciudadano RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA, y para ello se fundamentó en los elementos probatorios constituidos en el informe de novedad visible a folio 2 del sumario, el señalamiento directo efectuado bajo la gravedad del juramento por el Agente Gustavo Chong, los graves indicios de presencia, oportunidad, y de mala justificación que militan en contra del prenombrado al momento de efectuar su declaración indagatoria donde acepta la posesión de la sustancia ilícita, la Prueba de Campo practicada a las sustancias encontradas en poder del sindicado, las cuales arrojaron resultados positivos para la presencia de la droga conocida como Cocaína.

Por último, el demandado señala que la cantidad de droga encontrada en poder del encartado, sobrepasa con creses la cantidad establecida para consumo personal, por el Instituto de Medicina Legal, situación de la cual se infiere la conducta delictiva y punible del sumariado MATTEUS VEGA, encontrándose reunidos los requisitos del artículo 2148 y 2159 del Código Judicial para ordenar su detención.

FUNDAMENTO DEL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS

Por su parte, la Licenciada ROSARIO GRANDA DE BRANDAO, Defensora de oficio del sindicado manifiesta entre otras cosas, que muy a pesar de que la prueba de campo haya dado resultado positivo, no consta dentro del caudal probatorio una corroboración por parte del Laboratorio Técnico de Drogas que confirme y certifique que efectivamente estamos en presencia de la droga conocida como

COCAÍNA y que mucho menos señale cual es su respectivo peso.

Que su representado bajo ninguna circunstancia fue sorprendido suministrando en venta o traspasándola a otro título, ni tampoco existe algún tipo de señalamiento que incrimine al señor MATTEUS VEGA como una persona dedicada a la venta de sustancias ilícitas.

Finalmente, la Defensa Técnica del beneficiario de esta acción señala que la detención preventiva como última medida cautelar aplicable a un caso concreto, necesariamente debe descansar sobre hechos ciertos cabalmente probados y solicita por ello, a esta Alta Magistratura que se declare ilegal la detención preventiva impuesta a su representado.

ANTECEDENTES DEL CASO Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HÁBEAS CORPUS

Esta Superioridad procede al estudio de piezas procesales contenidas en el cuaderno penal remitido por el Ministerio Público, en vías de comprobar si la medida cautelar personal aplicada a RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA se ha dado con la omisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para la detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta cabalmente a las exigencias legales correspondientes.

Teniendo como marco estos parámetros, procedemos a verificar la procedencia o no de esta acción.

Primeramente haremos un breve análisis de la historia del caso que nos ocupa y para ello tenemos que Agentes Policiales del Área "A" de Samaria, Distrito de San Miguelito, encontrándose en un recorrido en dicho lugar, visualizaron en la parte trasera del Centro de Salud de Nuevo Veranillo, a un sujeto en actitud sospechosa, quien al ser abordado por éstos, se resistió al registro de rigor, teniendo los agentes que hacer uso de la fuerza para reducir el estado de violencia utilizada por el ciudadano. Agregan los agentes que éste no portaba identificación personal, pero dijo llamarse RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA, quien después de haber sido tranquilizado pudieron efectuarle la requisa, encontrándole en el bolsillo delantero, lado derecho del pantalón, un envoltorio de papel aluminio contentivo de un polvo blanco que fue presumido como droga. Posteriormente, al llegar a la Base Policial, se le efectuó otro registro minucioso, logrando encontrarle en la basta izquierda del pantalón jeans de color azul, un cartucho de material plástico transparente, el cual contenía en su interior la cantidad de cincuenta y ocho (58) carrizos plásticos transparentes contentivo de un polvo blanco que también fue presumido como droga (Cocaína). (Fs. 2 del expediente sumarial)

Al momento de rendir sus descargos, el sindicado aceptó los cargos que se le imputan, argumentando en su defensa que la sustancia ilícita decomisada se la encontró. Agrega que no es vendedor de droga y que ha sido investigado anteriormente por caso similar al que nos ocupa.

En virtud de la Prueba de Campo efectuada a la sustancia ilícita incautada la cual dio resultados positivos, procedió la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas a ordenar mediante providencia de 22 de diciembre de 1999, la detención preventiva de RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA, por considerar que militan en su contra graves indicios fácticos y concretos. (Fs. 17 del sumario)

Luego de efectuar un análisis previo de los constancias procesales, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia llega a la conclusión que en el caso que nos ocupa, la orden de detención aplicada al señor RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA, reúne los requisitos que establece el artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, ya que fue dictada por autoridad competente, en ella se determina el hecho

punible y la existencia de elementos que vinculan al beneficiario de la presente acción constitucional con la comisión del ilícito como es el hallazgo de cincuenta y ocho (58) carrizos en posesión del sindicado, que como bien apunta el funcionario demandado, sobrepasa con creces la cantidad establecida para consumo personal por parte del Instituto de Medicina Legal; aunado a la propia confesión del encartado y los antecedentes que revelan su vinculación a esta clase de actividad ilegal. De allí que consideramos que existen los indicios suficientes para vincular a RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA al delito de venta o traspaso de sustancias ilícitas, que de conformidad con el artículo 260 del Código Penal es sancionado con pena de prisión que supera a los dos (2) años, por lo que procede declarar legal la detención preventiva ordenada, sin perjuicio de que allegados nuevos medios de convicción al proceso varíe su situación procesal.

Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor RUBÉN ALBERTO MATTEUS VEGA y por tanto DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAVID A. VITERI EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera Morán ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de DAVID VITERI RUEDAS y contra el Director de la Policía Nacional.

La parte actora alega en su escrito de habeas corpus que a su representado se le mantiene detenido en las instalaciones de la Policía Nacional por la supuesta comisión de delito de posesión ilícita de armas. Agrega que la detención VITERI RUEDAS es ilegal porque el arma, cuyo permiso legal se investiga fue comprada en un establecimiento de la localidad y, su representado poseé permiso para portarla, expedido por la Policía Técnica Judicial.

Mediante auto de 9 de marzo de 2000 se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente y se le requirió al funcionario demandado que informara si había ordenado la detención de DAVID VITERI RUEDAS, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante el Oficio N° AL/785/00 de 10 de marzo de 2000, en la cual informó lo siguiente:

> "A. No es cierto que hemos ordenado la detención del ciudadano David A. Viteri Ruedas, ni por escrito ni verbalmente.

B. Queda explicado en el literal anterior.

3. No tengo bajo mi custodia a la persona que se a (sic) mandado a presentar, él (sic) mismo estuvo en las instalaciones de la Policía Nacional por encontrarse en actitud sospechosa con una menor de edad y tener en su poder un (sic) pistola calibre 9 milímetros y 17 municiones vivas, la cual tenía su respectivo permiso, pero se retiró de las instalaciones horas después de concluir la investigación." (f. 5)

La acción de habeas corpus puede ser preventiva o reparadora y ambas acciones tienen como presupuesto procesal necesario la existencia de una orden de detención escrita, que no se ha dado en este caso, o la detención de una persona.

Como no existe orden de privación de libertad girada contra el señor DAVID VITERI RUEDAS, ni ha sido detenido, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de este procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del presente proceso de habeas corpus promovido por el licenciado Carlos Herrera Morán, en representación de DAVID VITERI RUEDAS, y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER HERNÁNDEZ PINO CONTRA LA FISCAL DÉCIMA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación, la Sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior el 25 de enero de 2000, dentro de la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Benjamín Reyes en representación de JAVIER HERNÁNEZ PINO y contra la Fiscalía Décimo Cuarta del Primer Circuito de Panamá.

En la demanda de habeas corpus interpuesta ante el Segundo Tribunal Superior, el apoderado judicial del detenido JAVIER HERNÁNDEZ PINO alegó que su detención es ilegal, toda vez que no hay elementos probatorios que lo vinculen a la comisión del delito investigado.

El Segundo Tribunal Superior resolvió en primera instancia está acción y declaró legal la detención de JAVIER HERNÁNDEZ PINO, fundamentando su sentencia en los siguientes términos:

"...
Luego de analizadas las constancias procesales, se procede a resolver la encuesta bajo las siguientes consideraciones:

> Este Tribunal considera que existen los elementos suficientes para mantener la detención del sindicado, ya que a pesar de lo manifestado por el sumariado en su indagatoria, consta la deposición del denunciante, quien señaló que vio el auto operado por el procesado transitar por el local afectado, en actitud sospechosa, en 3 ocasiones y fue el vehículo en que los asaltantes se dieron a la fuga, luego de perpetrado el ilícito, lo que compromete la responsabilidad del encartado.
>
> El delito por el cual se le investiga tiene pena mínima superior a los 2 años de prisión, por lo que de acuerdo al Artículo 2148, en concordancia con el 2159, ambos del Código Judicial, existen méritos suficientes para mantener la mediada adoptada, por cuanto la orden emanó de autoridad competente, mediante resolución razonada. No se aprecia violación alguna al Artículo 21 de la Constitución Nacional, lo que nos obliga a declarar legal su detención ..."

Esta Sala Plena estima que no le asiste la razón al apelante cuando afirma que en el sumario instruido no hay elementos que vinculen a HERNÁNDEZ PINTO con el delito de robo investigado. Veamos porqué. El señor Jim He Limloo mediante denuncia afirmó que el día 22 de septiembre del presente año, vio al automóvil, color negro con matrícula RI-2440, transitando frente al local comercial, denominado Mini Super Lucy, en tres ocasiones "a baja velocidad" y, que su conductor lo estacionó a unos 50 metros del mencionado super, el cual está situado en Caimitillo, Chilibre. Aunado a lo anterior, expresó que después de retirarse un cliente, tres personas lo asaltaron, utilizando un arma de fuego; se llevaron la suma de B/.400.00 y un VHS y, se dieron a la fuga en el automóvil color negro que se había estacionado a 50 metros del Mini Super (fs. 2-3). Luego que los agentes de la policía, Estribí y Araúz, fueron informados de los hechos impetrados, procedieron a practicar un operativo, por medio del cual lograron aprehender en el sector de la Cabima, al señor JAVIER HERNÁNDEZ PINO, mientras conducía el automóvil color negro, en el que se habían escapado los asaltantes (fs. 12,20-21).

Al rendir declaración indagatoria, HERNÁNDEZ PINO aseguró que no conoce a los asaltantes y que él conducía el automóvil en el que los autores del robo llegaron al Mini Super a cometer el ilícito y en el que huyeron del lugar de los hechos, pero alega que fue coaccionado con un arma por ellos (fs. 26-28).

De estos hechos surgen indicios que vinculan a JAVIER HERNÁNDEZ PINO con la comisión del delito contra el patrimonio, tipificado en el Capítulo II, Título IV del Libro II del Código Penal, y sancionado con pena de prisión cuyo mínimo excede dos años. Además, como se ha acreditado en autos la existencia del delito investigado, es legal la detención preventiva decretada contra JAVIER HERNÁNDEZ PINO de conformidad con los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Luego de analizado el fallo impugnado, el Pleno de esta Corporación de Justicia lo estima inobjetable y procede a confirmarlo.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 25 de enero de 2000, dictada por el Segundo Tribunal Superior, mediante la cual se declara LEGAL la detención preventiva del señor JAVIER HERNÁNEZ PINO y ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del funcionario demandado.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VIDAL RAMOS JR. CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor VICENTE TORRES DIAZ presentó a la Secretaría General de la Corte ha interponer, en forma verbal, acción de Habeas Corpus a favor de VIDAL RAMOS JR., contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA.

Sostuvo el accionante que el mencionado ciudadano tiene diez meses de encontrarse detenido por el supuesto delito de robo de auto, sin que exista prueba que lo vincule con el hecho, por lo que solicita se declare ilegal su detención.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el señor Fiscal Auxiliar de la República informó lo que a continuación se transcribe:

"A) Si es cierto que se haya ordenado la detención preventiva del señor VIDAL RAMOS TORRES, la cual fue ordenada en resolución motivada, de acuerdo a lo que establece el artículo 2159 del Código Judicial.

B) Los hechos en que se fundamentó la decisión tomada por este despacho son los siguientes:

El señor DIOMEDES JAEN GONZALEZ,interpuso denuncia ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial, el día veinte de abril del año 1999, autorizado por la empresa Budget Rent a Car. Indicó, que la empresa rentó el vehículo marca Ford Contour, con matrícula 170597 al señor EUGENE RENSEY, el cual, en la madrugada del día 18 del referido mes, le entregó las llaves del automóvil a un empleado encargado de estacionamientos en el hotel Miramar. En la noche del día siguiente, al acudir a buscar el vehículo, le informaron que este no se encontraba, al igual que las llaves.

Lo anterior es corroborado por el señor EUGENE RENSI CARMEN en declaración juramentada.

Los agentes de la Policía Nacional,TOBIAS EMANUEL THOMSON BARTOLI, JAYSON VALDES MENDOZA Y GUSTAVO WATSON ALFRED MAYNARD, declararon que al encontrarse de recorrido por la barriada San José, en horas de la noche, le dieron la voz de alto a un automóvil y este intentó darse a la fuga. Al detenerlo, se encontraban dentro tres sujetos, dos menores de edad y uno mayor de edad, de nombre VIDAL RAMOS TORRES. Al verificar el vehículo, este se encontraba denunciado.

En indagatoria, el señor VIDAL RAMOS TORRES, manifestó que este vehículo lo había llevado a su residencia el señor FERNANDO MONTOYA, el cual laboraba en el hotel Miramar, y lo estaba conduciendo el día en que fue aprehendido, para ir a hacer una compra. Añadió, que se había percatado que el auto tenía un tiquete del hotel Miramar.

Los hechos narrados en el sumario, se adecuan a lo establecido en el

> Capítulo I, Título IV del Libro Segundo del Código Penal, del delito genérico CONTRA EL PATRIMONIO, acto delictivo al que la norma penal le asigna una sanción mínima superior a los dos años de prisión que trata el artículo 2148 del Código Judicial, con relación a la aplicación de una medida de detención preventiva en contra de la persona que es señalada con graves indicios de ser responsable, tal como se establece en el expediente.
>
> C) El señor VIDAL RAMOS TORRES no se encuentra bajo nuestras órdenes, ya que fue puesto a disposición de la Fiscalía Quinta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, para la fecha del 22 de abril de 1999, por medio del Oficio No. 5272, con relación al sumario en comento. ..." (Fs. 4 y 5)

Según se expresa en el último párrafo previamente transcrito, el señor VIDAL RAMOS TORRES actualmente se encuentra a órdenes de la Fiscalía Quinta de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá. Debido a esta circunstancia, no corresponde al Pleno de la Corte conocer de esta acción y determinar si es legal o no la detención que sufre esta persona, por lo que se debe declinar el conocimiento de la misma al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en atención a lo normado por el artículo 2602 del Código Judicial.

Por las consideraciones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA de esta acción de habeas corpus, interpuesta a favor de VIDAL RAMOS TORRES, al SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CECILIO VARGAS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ISAAC A. FIGUEROA ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de CECILIO VARGAS y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogida la presente acción constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, quien mediante Oficio No. A.L.0163-00 de 14 de marzo de 2000 señaló lo siguiente:

> "1.No es cierto que hemos ordenado la detención del señor CECILIO VARGAS.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos a nuestras órdenes, ni bajo nuestra custodia al prenombrado ciudadano, no obstante le comunicamos que el mismo

> permaneció en nuestro Sistema Transitorio de Cárcel, hasta el 10 de marzo de 2000, día este que fue puesto en libertad a través de oficio N°3376 de la misma fecha, suscrito por el Señor Fiscal Auxiliar de la República, en virtud de medida cautelar distinta de la detención preventiva" (f. 5).

Del informe anterior se colige que el señor CECILIO VARGAS, no se encuentra detenido, por lo que procede ordenar el cese del procedimiento, conforme a lo estipulado en el artículo 2572 del Código Judicial, que indica:

> "El procedimiento de Habeas Corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier causa, su libertad corporal".

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de CECILIO VARGAS, y por lo tanto, DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) YANIXSA YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PAULO ADOLFO HERNÁNDEZ AGUILAR, JAIRO ABDIEL VÁSQUEZ RESTREPO, JORGE ENRIQUE RAMOS HERRERA Y JUAN ANTONIO MESSINAS RAMOS CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO interpuso acción de habeas corpus a favor de los señores PAULO ADOLFO HERNÁNDEZ AGUILAR, JAIRO ABDIEL VÁSQUEZ RESTREPO, JORGE ENRIQUE RAMOS HERRERA y JUAN ANTONIO MESSINA RAMOS y contra el Fiscal Superior Especial.

Encontrándose el expediente en estado de lectura de proyecto, el licenciado VÁSQUEZ ATENCIO, presentó escrito donde manifiesta el desistimiento de la acción presentada, el cual fue recibido en la Secretaría de la Corte Suprema el día 22 de marzo de 2000.

La Corte Suprema ha sostenido que es viable el desistimiento de la acción, siempre y cuando lo expresen así el apoderado legal o el detenido, y como ello es así en el caso que nos ocupa, esta Corporación Judicial acepta el escrito de desistimiento presentado por el licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, a la luz del artículo 1073 del Código Judicial, que en su primer párrafo consigna que "Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente".

PARTE RESOLUTIVA

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO y ORDENA EL CESE de procedimiento.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR LA LICENCIADA DINA CORTÉS EN FAVOR DE MARVIN GUEVARA Y JORGE CANDANEDO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción de habeas corpus presentada por la licenciada Dina Cortéz, en favor de Marvin Guevara y Jorge Candanedo, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados Con Droga.

Por admitida la presente iniciativa constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad requerida, quien mediante oficio FDO1 T02-769 de 25 de febrero de 2000, admite haber ordenado la detención de los imputados, e indica las circunstancias de hecho y los fundamentos de derecho que motivaron la medida (vid. cuaderno de habeas corpus, fs. 4-8).

ANTECEDENTES

Los antecedentes dan cuenta que el 16 de febrero de 2000, la Dirección de Información e Investigación Policial de la Zona de Policía de Panamá tuvo conocimiento de que en los predios de la cantina La Confianza, en la Calle San Cristóbal en el Distrito de Chepo tres sujetos se estaban dedicando a la distribución de droga (vid. antecedentes, f. 3).

Los agentes de policía Tomás Camargo, G. González y I. Batista, se apersonaron al lugar e identificaron como las personas denunciadas a Marvin Guevara Valdés, Gregorio Bonilla Golis y Jorge Candanedo Jiménez.

Inmediatamente fueron sometidos a revisión corporal, encontrándosele a Marvin Guevara "... un frasco plástico con veinticuatro (24) sustancias sólidas de color crema y, dentro de un monedero, cuarenta y dos (42) carrizos de plástico transparente con polvo blanco, todo lo cual se presumió fuera droga ..." y B/.110.00 en billetes de baja denominación (antecedentes, fs. 4, 5 y 20).

La sustancia incautada fue sometida a diligencia de prueba de campo el 21 de febrero de 2000, dando positivo para la determinación de droga (vid. antecedentes, f. 17).

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte a resolver si la medida restrictiva de libertad impuesta a Marvin Guevara y Jorge Candanedo cumple con los requisitos que a tales efectos

establecen la Constitución y la Ley.

Un examen de la orden de detención preventiva proferida contra los imputados por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga, permite advertir una clara vinculación de los beneficiarios de esta iniciativa constitucional subjetiva con el hecho delictivo que se investiga (vid. antecedentes, fs. 31-33).

En primer lugar, en cuanto al hecho imputado, expresa que se trata de delito Contra la Salud Pública, Relacionado con Drogas, el cual tiene aparejado pena mínima superior a los dos años de prisión (vid. antecedentes, f. 31).

De otra parte, en cuanto a los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, constan la diligencia de prueba de campo (vid. f. 17) y el informe del laboratorio Técnico Especializado en Drogas que señala:

> "... las muestras analizadas resultaron POSITIVAS para la determinación de COCAINA (CRACK) en la cantidad de 2.80 g. y de COCAINA en la cantidad de 5.04 g. , para un total de 7.84 gramos ..." (cuaderno de habeas corpus, f. 15).

En cuanto a los elementos probatorios que figuran en el proceso contra los sindicados, consta el informe de novedad rendido por el Sargento 2° Tomás Camargo (fs. 3-4). De otra parte, si bien en su declaración indagatoria Marvin Guevara sostiene que tanto él como Gregorio Bonilla y Jorge Candanedo son consumidores de droga (vid. antecedentes, f. 37) y que el día que fueron detenidos "... no estaban vendiendo si no consumiendo ... " (vid antecedentes, f. 359), la Corte observa que existen serias contradicciones entre esta afirmación y las declaraciones de los otros dos implicados.

En primer lugar, Bonilla asegura que es falso que el día de los hechos estuviera consumiendo drogas con Marvin Guevara y Jorge Candanedo (antecedentes, f. 40), y que al momento de la detención se encontraba libando licor con Candanedo. Por su parte, Jorge Candanedo sostiene que no tenía conocimiento que Guevara tenía la droga consigo, y afirma que "... nunca he visto esa droga hasta el día de hoy ...". Aclara que si bien es consumidor de droga, nunca lo ha hecho en compañía de Marvin Guevara y Gregorio Bonilla (Cfr. antecedentes, f. 44).

La tabla posológica del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público plantea que, en los adictos, la dosis de cocaína por ingestión es de 1 a 1.5 gramos. De allí que, tomando en consideración el peso de la droga incautada, las contradicciones existentes entre los testimonios de los imputados y la tenencia de una gran cantidad de billetes de baja denominación, la Corte estime que existen elementos probatorios suficientes para fundar adecuadamente la presunción de que los imputados pretendían suministrar los estupefacientes en venta o traspaso para su consumo ilegal.

Con fundamento en lo antes expuesto, esta Superioridad concluye que la orden de detención preventiva bajo examen reúne todos los requisitos que exigen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo cual procede declarar su legalidad.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que es LEGAL la detención preventiva en que se mantiene a Marvin Guevara y Jorge Candanedo y ordena que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Droga.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA MORÁN EN FAVOR DE GIOVANNI PINDER Y CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus presentada por el licenciado Carlos Herrera Morán a favor de Giovanni Pinder, contra el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial.

El recurrente sostiene que su representado fue denunciado por el presunto delito de lesiones personales cometido en perjuicio de Lenín Omar Cabal.

Agrega que, la incipiente encuesta penal que adelanta el Ministerio Público "... a todas luces demuestra que el delito tiene aparejada pena mínima menor de dos años de prisión ...", por lo que solicita que se declare ilegal su detención preventiva o se le aplique una medida cautelar personal más benigna de la que actualmente padece (Cfr. cuaderno de habeas corpus, f. 10).

Por acogida la presente iniciativa constitucional, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien manifiesta no haber ordenado la detención de Pinder, la cual fue decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante resolución de 14 de febrero de 2000, y expone los fundamentos de hecho y derecho en que se fundamenta tal medida (Cfr. cuaderno de habeas corpus, fs. 13-16).

Entre estos señalamientos, el Fiscal Cuarto Superior sostiene que el delito por el cual se mantiene detenido a Giovanni Pinder se encuentra entre los contemplados por el Capítulo I, Título I del Libro II del Código Penal. No obstante, la autoridad demandada considera que "... en base a la forma como se ejecutó el hecho delictivo, de los reiterados disparos de arma de fuego dados a la víctima, no estamos frente a la concurrencia de una tentativa de Homicidio que permita sustituir la medida de detención ..." (cuaderno de habeas corpus, f. 15).

DECISION DE LA CORTE

Procede la Corte entonces a examinar la situación procesal de Pinder, a los efectos de decidir sobre la legalidad de su privación de libertad.

A fojas 35-36 del cuaderno de antecedentes aparece resolución de 14 de febrero de 2000, por medio de la cual el funcionario de instrucción ordenó la detención preventiva de Giovanni Pinder.

Como elementos que demuestran la existencia del hecho punible la diligencia que ordena la detención menciona la denuncia interpuesta por Clara Palma de Cabal y el informe médico legal, visible a foja 24 de los antecedentes, que otorga al afectado una incapacidad provisional de 45 días.

En cuanto a los elementos probatorios que vinculan al imputado a la comisión del hecho punible aparecen la declaraciones de la víctima y de su

hermano José Manuel Cabal, quienes coinciden en identificar al imputado como la persona que hirió a Lenín Omar Cabal Palma el 28 de diciembre de 1999.

Sin embargo, la Corte observa que no se cumple en el presente caso con el requisito que contempla el artículo 2148 del Código Judicial, en el sentido de que para que se decrete la detención preventiva se requiere que el delito imputado tenga contemplada pena mínima superior a dos años de prisión.

Pese a lo anterior, no puede la Corte ignorar el hecho de que el ilícito que se le imputa a Giovanni Pinder, fue perpetrado de manera altamente violenta, ya que tal cual lo demuestra el informe de la medicatura forense, la víctima presenta heridas múltiples provocadas por proyectil de arma de fuego, que "... pusieron en peligro la vida ...". (cuaderno de antecedentes, f. 24).

En ese orden de ideas, debe tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 2147-C del Código Judicial, que abre expresamente la posibilidad para ordenar una medida cautelar de carácter personal como lo es la detención preventiva, habida cuenta de la concurrencia de circunstancias especiales que en este caso ponen en evidencia la peligrosidad del imputado. El mencionado artículo expresa:

> ARTICULO 2147-C. Serán aplicables las medidas cautelares:
> ...
> c) Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal. (Las cursivas son de la Corte).

En las actuales circunstancias, resulta cónsono con los intereses de la justicia mantener la medida cautelar impuesta a fin de salvaguardar los intereses de la sociedad en virtud del principio favor societatis.

Por lo antes expuesto la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara LEGAL la detención preventiva de Giovanni Pinder y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ LAZARO CASABELLA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Jaime Díaz Mo presentó a favor de JOSE LAZARO CASABELLA de nacionalidad española acción de habeas corpus y en contra del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la detención que sufre el señor CASABELLA es ilegal, ya que no se le ha encontrado en posesión de drogas y no existen elementos probatorios que lo vinculen a una organización

criminal.

Como una cuestion preliminar es preciso observar que con esta acción son dos los habeas corpus que se han propuesto a favor del ciudadano español JOSE LAZARO CASABELLA, como se colige del Informe Secretarial suscrito por el Secretario General del Pleno de la Corte Suprema que reposa a foja 2 del expediente. Esta situación ha incidido en el reparto de esta causa, pues el Magistrado Sustanciador que conoció del primer habeas corpus, está obligado en la ponencia del segundo, de acuerdo al artículo 108 del Código Judicial el cual dice:

> "Artículo 108. Todas las veces que un mismo asunto sea elevado al conocimiento de la Corte, conocerá de él, como sustanciador, el Magistrado a quien se repartió la primera vez o a su suplente".

MANDAMIENTO DE HABEAS CORPUS

Acogido el recurso de habeas corpus, el Magistrado Ponente requirió al Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas rindiera el informe pertinente en relación a la presunta detención ilegal.

Mediante Oficio N° FD-O-689-97 de 16 de febrero de 2000, el Fiscal Segundo Especializado en Delitos de Droga contestó que su Despacho no había ordenado la detención del precitado encartado.

Posteriormente el licenciado Jaime Choy García, como apoderado judicial del señor CASABELLA, presentó un escrito el cual fue recibido por la Secretaria General de la Corte el 17 de febrero de 2000, en la que le informaba al Magistrado Sustanciador que el detenido se encontraba en el Centro de Custodia de la Policía Técnica Judicial, y a su vez adjuntaba un poder otorgado por el afectado con la medida cautelar de detención al licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila (ver de foja 7 a la 9 del expediente).

En virtud de que el licenciado Choy manifestó que el señor JOSE CASABELLA se encontraba en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, una vez más se compulsó mandamiento de habeas corpus, con fecha de 18 de febrero de 2000 al Director de dicha Entidad Investigativa, y el mismo contestó que el detenido se encontraba a órdenes de la Dirección de Migración y Naturalización, pero retenido en la cárcel de la Fiscalía Especializada en Delitos de Droga, bajo la custodia de agentes de narcóticos (ver foja 11 del expediente).

En aras de salvaguardar todos los derechos que le asisten al señor JOSE CASABELLA, quien sustancia, en representación del Tribunal de Habeas Corpus, requirió de manera inmedata al Director de Migración (ver foja 14), para que explicara la situación en que se encontraba hasta ese momento el afectado con la medida cautelar de detención, y por medio de la Nota N° DNMYN-DG-162-2000 de 22 de febrero de 2000, el Director de dicha entidad migratoria indicó que el encartado sí se encontraba bajo sus órdenes, pero que a esa fecha no había sido puesto físicamente bajo la custodia de dicha Institución Gubernamental. Además, en tiempo ulterior el Director de Migración hizo llegar a esta Superioridad Judicial las Notas N° DNMYN-SI-0158-00 de 28 de febrero de 2000 y la N° DNMYN-SI-0179-00 de 10 de marzo del mismo año, de las cuales se colige que CASABELLA de nacionalidad española se encontraba ilegal en Suelo Patrio y que por esta razón ese Despacho ordenó la detención del mismo mediante Resuelto N° DNMYN-SI-043 de 15 de febrero de 2000 (se adjunta el Resuelto a foja 20).

EXAMEN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo del recurso constitucional en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al ciudadano español se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la

detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigencias legales correspondientes.

Según consta en autos, la encuesta penal que la mantiene privado de libertad se origina a raíz de que:

1. El señor JOSE LAZARO CASABELLA de nacionalidad española se encontraba ilegal en territorio panameño desde el 15 de diciembre de 1999, tal como lo corroboraban los archivos de Migración, pues el detenido había ingresado a nuestro país el 15 de septiembre de 1999, lo que trajo como corolario que se ordenara su detención por medio del Resuelto N° DNMYN-SI-043 de 15 de febrero de 2000, de conformidad con el Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960, rubricado por el Director Nacional de Migración y Naturalización.

2. Aunado a lo anterior, se colige del documento que milita a foja 21 del expediente, que la explicación lógica de la detención que sufre CASABELLA bajo órdenes de Migración, pero que físicamente se encuentra en el centro carcelario de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial descansa en el hecho de que el citado ciudadano español, supuestamente es miembro de una organización criminal objeto de investigación en Perú, y sobre el cual pesa orden de arresto.

DECISION DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Esta Corporación advierte, que la detención preventiva ordenada se sustenta en elementos que hasta el momento apuntan a la permanencia ilegal del señor CASABELLA en territorio nacional, a parte de la acusación que pesa sobre su persona por la comisión de delitos en Perú.

En lo atinente a la mencionada medida cautelar personal, esta Superioridad concluye que la privación de libertad ordenada se ha verificado con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia migratoria, y dentro del marco de las facultades legales conferidas a las autoridades de Migración y Naturalización, por lo que se encuentra plenamente legitimada la detención preventiva cuya ilegalidad se acusa.

De consiguiente, el Pleno conceptúa que la detención que se ataca de ilegal ha sido ordenada de conformidad con los requerimientos de la Constitución y la Ley, razón por la cual es de lugar reconocer la legitimidad de la misma.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de JOSE LAZARO CASABELLA.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE BORIS JESUS FOGEL Y SUENGAS CONTRA EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Conoce el Pleno de esta Corporación, la acción de hábeas corpus interpuesta por el licdo. VICTOR ALMENGOR en favor de BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, en demanda que originalmente se presentó contra el Señor Procurador General de la Nación.

Acogida la acción y librado el mandamiento correspondiente contra el funcionario demandado, respondió que, por providencia de 10 de febrero último, ese Despacho había ordenado la detención de BORIS JESUS FOGUEL Y SUENCAS, con fundamento en solicitud de detención preventiva con fines de extradición remitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por la Embajada del Perú en Panamá "ya que en ese país se adelanta investigación en contra del prenombrado FOGUEL Y SUENGAS y de otras personas por la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas y delitos conexos".

También señaló en su comunicación el Señor Procurador, que la resolución judicial emitida por su Despacho, donde ordena la detención de FOGUEL Y SUENGAS, dispuso "ponerla (sic) a ordenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, toda vez que por disposición legal corresponde al Órgano Ejecutivo la concesión de una persona en extradición.

Ante el hecho de que el beneficiario con esta demanda de hábeas corpus se encontraba a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, se enderezó la acción contra ese Ministerio quien mediante comunicación AJ No. 399 de 18 de febrero de 2000 señaló que la Embajada de la República del Perú solicitó a la Cancillería la detención preventiva con fines de extradición y entre otros, del ciudadano panameño BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, sustentando esa petición en la documentación que se adjuntó con la referida solicitud, donde se da fe que en ese país se siguen procesos penales en su contra, existiendo "fuertes elementos que los vinculan con la comisión de los ilícitos investigados en la República de Perú que guardan relación con delitos relacionados con drogas (delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de dinero, provinente de dicha actividad).

Igualmente comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores que, dada la condición de panameño de BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, el Órgano Ejecutivo por resolución No. 3 de 16 de febrero de 2000, resolvió negar, entre otras, la extradición de BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, "debiéndose procesar a los mismos como si el ilícito se hubiera cometido en la República de Panamá", por lo que se remitió copia de la resolución ejecutiva al Procurador General de la Nación, con los respectivos expedientes para fines pertinentes.

Finaliza su respuesta el Ministerio de Relaciones Exteriores informando que FOGUEL Y SUENGAS "se encontraba a órdenes de este Ministerio, sin embargo, con el propósito de que se cumpliera con lo establecido en las normas referentes al juzgamiento de panameños que cometen delitos en el extranjero y que no pueden ser extraditados por su condición de nacionales fue puesto a órdenes del Ministerio Público".

Con base a esta información nuevamente se libró mandamiento contra el Señor Procurador General de la Nación, quien respondió señalando que en cumplimiento a la resolución pronunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, había remitido "la documentación respectiva a la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Realacionados con Drogas, para que este Despacho instructor dé inicio a la investigación penal en contra de los señores BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS o BORIS JESUS FOGUEL SUENGAS, PABLO MURES LOAYZA o PABLO MURES LOAYZA y MARIA SUENGAS MURES DE CAJAR, por los delitos cometidos en el Perú".

Esa información llevó a librar mandamiento contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien respondió en la forma siguiente:

"Primero: Este Despacho si ordenó la detención preventiva del señor BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, mediante resolución motivada fechada 25 de febrero del año en curso por encontrarse vinculado con la comisión de un delito Contra la Salud Pública Relacionado con Drogas.

Segundo: Los fundamentos de hecho y de derecho que motivan dicha detención preventiva surgen del envió a este despacho de una solicitud de detención preventiva con fines de extradición del señor BORIS FOGUEL SUENGAS formulada por al República del Perú, de cuya lectura se aprecia que en ese país se sigue una investigación contra el prenombrado, entre otros, iniciada en virtud de la incautación de un total neto de 2,161.646 kilogramos de la droga conocida como Clorhidrato de Cocaína, el treinta y uno (31) de marzo de 1999, en las instalaciones del Frigorífico de la empresa SETEPO, S. A., ubicado en El Callao, República del Perú.

La mercancía ilícita fue detectada camuflada bajo una carga de productos del mar (merluza), la cual sería depositada en un contenedor que sería enviado por vía marítima hacia la ciudad de Bilbao, España, en el barco Ancud, propiedad de la empresa de transporte marítimo Agunsa.

Posteriormente se incautaron 2,152.47 kilogramos de pasta básica de cocaína laboratorio e insumos químicos en el Fundo Topará, Chincha, República del Perú.

Igualmente, la fiscalía de instrucción de la República del Perú abrió investigación contra el prenombrado y otros, relacionada con el lavado de fondos que ascienden a un total de veinticuatro millones de dólares (US$ 24.000.000.00), suma total detectada hasta la fecha de la incautación del cargamento ilícito, hecho ocurrido desde el año 1996 a 1999 y en el cual resultan involucrados, entre otros, los precitados FOGUEL SUENGAS, MURES LOAIZA y SUENGAS MURES DE CAJAR.

Según consta en la denuncia presentada en Perú ante la Juez Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, el precitado ciudadano intervino, junto a otros, en actos de venta, transferencia o posesión de ganancias, cosas o bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas o en actos de conversión o transferencia de bienes a través del sistema financiero de Perú o de repatriación de capitales (ver fojas 229) y siguientes del tomo III)

Obran en los tomos remitidos las Resoluciones Nos. 0001 de diecisiete (17) de abril de 1999 y 0002 de veinticinco (25) de agosto de 1999 dictadas por el Juzgado Especializado en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Lima, República del Perú por la cual se pronunció mandato de detención contra Boris Jesus Foguel Suengas o Boris Jesus Foguel y Suengas, entre otros.

De acuerdo con los elementos probatorios recabados, se ha podido acreditar que BORIS JESUS FOGUEL SUENGAS era el cabecilla en Perú de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas internacionalmente y que su vinculación se comprueba con la adquisición, en diciembre de 1998 de 20,910 kilos de merluza, a nombre de un tercero, y con la utilización de varias empresas de fachadas de las cuales se servía para el blanqueo de capitales adquiridos a través del envío internacional de sustancias ilícitas.

De otro modo y dentro de la documentación proveniente de la República de Perú, se deja establecido en cuanto a la persona en cuyo favor se ha interpuesto

esta acción constitucional, lo siguiente:

> "Con relación a la persona de BORIS FOGUEL SUENGAS de nacionalidad panameña con cédula Nro. PE-4-141, domiciliado en la calle las Cucardas Nro. 126 en la Urbanización Las Casuarinas en Surco, dentro de las investigaciones efectuadas se ha llegado a determinar es el presunto cabecilla de la organización de TID que pretendió embarcar los 2,161.646 Kg. de Clorhidrato de Cocaína el 31MAR99 por el terminal marítimo del Callao, al haberse evidenciado su participación inicialmente en la adquisición de los 20,910 kg. de filete de merluza para su utilización en el acondicionamiento de la droga, haber facilitado el camión de su propiedad de placa WG-2666 para el traslado de las 50 cajas de filete de merluza de la empresa SERFRISA hasta el local aun no determinado en donde se acondiciono la droga para el presente embarque" (fs. 83).

También se detalla en la información proporcionada una serie de empresas que figuran a nombre de BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, que supuestamente se utilizan para el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y en ese sentido la Fiscal Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas del Perú, a fojas 565-579, manifiesta:

> "En el caso de BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS se ha establecido que el 11NOV96, en sociedad con su tío EDWIN ANTON CABADA y su padre ISACC BORIS FOGUEL CABADA, constituyeron la empresa CLEAN & PAINT SERVICE, S. A., con el objeto de brindar servicio de personal a empresas usuarias con carácter complementario y temporal en las áreas de mantenimiento, limpieza, gasfitería, saneamiento, jardinería, pintura, lavandería y otros, teniendo su centro de operaciones en la Av. Sucre Nro. 1027-1025 Pueblo Libre, empresa que ha sido utilizada como fachada, para lavar el dinero procedente del tráfico ilícito de drogas toda vez que desde su constitución a la fecha realizó sólo tres operaciones, que no han generado ingreso alguno" igualmente se hace mención de la empresa PITSTOP SAC, de la cual se señala que "esta empresa ha sido utilizada por BORIS FOGUEL Y SUENGAS para el lavado del dinero producto del tráfico ilícito de drogas, principalmente vía la compra y venta de vehículos de lujo, que no eran registrados en sus Libros Contables, además de haberse establecido que no les ha generado ganancias".

En la acción de hábeas corpus presentada no se cuestiona la vinculación que pudiera tener BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS con los hechos que se le imputan sino que se alega que su detención es ilegal porque "no puede ser deportado ni trasladado de la República de Panamá, por ser ciudadano panameño, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Panamá".

Como ya se dejó señalado, el Órgano Ejecutivo negó la extradición de BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, solicitada por la República de Perú, precisamente por ser ciudadano panameño, pero esa negativa no impide, conforme a lo establecido por el artículo 2509 del Código Judicial y el artículo 45 del texto único de la ley No. 23 de 1986, que la persona reclamada, en este caso FOGUEL Y SUENGAS, "sea juzgada en la República de Panamá como si el delito imputado al mismo se hubiera cometido en territorio panameño".

En ese orden, se aprecia que con vista a los antecedentes que se remitieron con la contestación del mandamiento de hábeas corpus, consistente en cuatro (4) tomos, que existen suficientes elementos probatorios para vincular a BORIS DE JESUS FOGUEL Y SUENGAS con delito contra la salud pública, señalandose además, que en la acción de hábeas corpus corresponde al Tribunal evaluar si la orden de detención cumple con los requisitos y elementos formales que a tal efecto indican la Constitución y el Código Judicial, esto es que emane de autoridad competente, que contenga fundamentos de hecho y de derecho, que se trate de delito con pena

mínima de dos (2) años o que haya flagrancia, que esté comprobada la comisión del hecho punible y que exista una vinculación del sujeto con el ilícito. En este caso, la orden de detención contra BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS, expedida por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, aparece a fojas 1471 del tomo IV y se observa que la misma cumple con las formalidades legales a que hacemos referencia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra BORIS JESUS FOGUEL Y SUENGAS y en consecuencia ORDENA sea filiado nuevamente en el Centro Penitenciario Respectivo a ordenes del Fiscal Segundo Especializado de Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR EDDIE EVARISTO GONZALEZ CONTRA EL FISCAL DE DROGAS DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de hábeas corpus interpuesta por el Licenciado Edrulfo Espinales a favor de EDDIE EVARISTO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ contra el Fiscal de Drogas de la Provincia de Chiriquí, luego de que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial declarara legal su detención mediante fallo de 16 de febrero de 2000.

Para fundamentar su decisión el Tribunal A-Quo sostuvo que "... resulta evidente que surgen en la encuesta penal graves indicios que vinculan a Eddie Evaristo González Gutiérrez con el delito que se investiga, puesto que fue él el conductor del vehículo que transportaba la gran cantidad de sustancias ilícitas y del cual se tenía conocimiento era utilizado para ese fin, además de intentar darse a la fuga cuando fue interceptado por unidades policiales". (fs. 10-13).

De la lectura de las constancias procesales se aprecia que la presente encuesta penal se inicia cuando en horas de la noche del día 12 de febrero del año en curso, unidades del SDIIP de David, en momentos que realizaban un recorrido vehicular, visualizaron el vehículo taxi de color rojo, con matrícula 4T-652, del cual se tenía información que, conducido por el ciudadano EDDIE GONZÁLEZ, era utilizado para el transporte de sustancias ilícitas. Posteriormente, dicho vehículo fue interceptado por dichas unidades de policía, logrando detener en el operativo a los ciudadanos ROBIN DANIEL PITTY, JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ y a su conductor EDDIE EVARISTO GUTIÈRREZ, procediendo seguidamente la Fiscal de Drogas de Chiriquí, a llamado que se le hiciera, a la revisión del vehículo, localizándose en su interior una considerable cantidad de sustancias sólidas de color cremosa, que se presumió era cocaína (crack) que se describieron en dicha diligencia de la siguiente forma:

> "Evidencia N° 1: en el asiento del conductor se encontró cierta cantidad de residuos, presumiblemente de cocaína; Evidencia N° 2:

> sobre el asiente del acompañante o derecho delantero se encontró cinco -5- fragmentos de diferentes tamaños y residuos de cocaína presumiblemente; Evidencia N° 3: en el asiento trasero se encontró una bolsa plástica a rayas rojas y blancas conteniendo treinta y cinco -35- paquetes de diferentes tamaños y residuos presumiblemente cocaína; Evidencia No. 4: en el piso de la parte trasera se encontró sesenta y cinco -65- fragmentos y piedras y residuos, presumiblemente cocaína; Evidencia No. 5: debajo del asiento derecho delantero en la parte próxima a los asientos traseros se encontró una bolsa plástica a rayas blancas y rojas conteniendo ciento cincuenta y seis (156) fragmentos o barras, presumiblemente de crack cocaína envueltos a su vez en un plástico color blanco a rayas verdes".

Practicada la prueba de campo a las sustancias incautadas dentro del vehículo, se deja consignado a fojas 56 que "todas las evidencias descritas en líneas anteriores, dieron resultado positivo para la determinación de la droga conocida como cocaína".

En cuanto a la situación del ciudadano EDDIE EVARISTO GONZÁLEZ, en cuyo favor se conoce de esta acción constitucional, se observa a fs. 66-69 del expediente principal, la resolución de 12 de febrero de 2000 mediante la cual se ordena la detención preventiva de su persona y en cuanto a los elementos que lo vinculan con la comisión del ilícito, la Fiscal señala la diligencia de prueba de campo preliminar, el informe suscrito por las unidades policiales que narran detalladamente los hechos que motivaron la presente investigación; los informes de seguimiento e investigación "que vinculan a ROBIN PITTY, JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ, ARIS EDEM AROSEMENA y EDDIE GONZÁLEZ con la venta y distribución de sustancias ilícitas" y el "resultado positivo que arrojó la diligencia de registro practicada por su Despacho al taxi con matricula No. 4T-652, mediante la cual se logró incautar la gran cantidad de cocaína (crack) que transportaban y la diligencia de inspección ocular practicada al área donde también se logró incautar sustancias ilícitas".

El agente de la Policía Nacional, FERMIN PITTY SANTAMARIA de servicio en la Sub-Dirección de Información e Investigación Policial, que participó en la aprehensión de GONZALEZ GUTIERREZ, en declaración que ofrece a fojas 74-77 señala lo siguiente:

> "Esa aprehensión se dio el día sábado 12 del presente mes y año, aproximadamente como a las nueve y media de la noche, yo andaba en un recorrido en compañía del Sargento Romero, el cabo Santamaría y el cabo González, veníamos de Doleguita hacia la avenida Sexta Oeste y cuando veníamos por unos árboles de cedro cuando yo vi un taxi rojo estacionado y del lado del lote baldío venía saliendo ROBIN PITTY (a) Mono Blanco y tomó el taxi, ese taxi es conocido mío con placa 652, ya que tenemos información de que estaba últimamente transportando droga, yo sospeché de que andaban en algo de drogas, entonces yo me desvié y el taxi salió y decidí mejor esperarlo, cuando más adelante lo vi que cogió como para la carretera hacia El Aguacatal, decidimos esperar que saliera ya que allí no hay más salida, al poco rato el taxi salió y ya nosotros habíamos puesto nuestros vehículos en la mitad de la vía y nos colocamos los chalecos del S.D.I.I.P., cuando ellos nos vieron les dimos voz de alto y nos identificamos como policías, como traían los vidrios cerrados, les hicimos señas de que se bajaran, en ese momento el conductor metió reverso y se tiró para atrás pero el Sargento ROMERO le disparó a una llanta, entonces el Sargento Romero lo sacó del vehículo cuando él abrió la puerta y lo colocó en la parte de afuera en el suelo".

El beneficiario de esta iniciativa constitucional, al momento de rendir

indagatoria, negó su participación en el hecho imputado y alegó que él, como taxista, se limitó a realizar una carrera a tres personas desconocidas que demandaron del servicio vehicular que prestaba.

Sin embargo, existe la circunstancia que ya, con anterioridad al hecho que motivara su detención, se había informado (fs. 54-55) que el vehículo comercial conducido por su persona -el taxi 4T652 toyota tercel de color rojo- era utilizado por las personas de ROBIN PITTY (a) MONO BLANCO y JOSE ALBERTO SANCHEZ (a) PITO "para realizar actividades ilícitas relacionadas con la venta y distribución de drogas", información que resultó establecida cuando las autoridades policivas detienen el vehículo en mención, conducido en ese momento por EDDIE EVARISTO GONZALEZ GUTIÉRREZ , llevando como ocupantes a los señores PITTY y SANCHEZ y se encuentra la droga que motiva la presente investigación.

La defensa del imputado, al sustentar la apelación que interpusiera contra lo resuelto por el inferior, sostiene que "en este expediente, constan solamente en dos lugares informes que supuestamente involucran al señor González. Uno procedente del SDIIP en el cual supuestamente unos informantes le indican al cabo RUBEN SANTOS (fs. 11) que los señores Robbin Ptitty y Pito subió a un taxi con placa 4T-652. Informantes que no se saben quiénes son. Y si es verdad que existen".

Pero se da el caso que más que esos informes, existe el hecho cierto de la captura del vehículo 4T-652 conducido por EDDIE EVARISTO GONZALEZ GUTIERREZ, en momentos en que llevaba a personas que previamente se había señalado que utilizaban dicho automóvil para la comercialización de drogas ilícitas y dada la cantidad de drogas incautadas dentro del automóvil, los distintos lugares del vehículo en que se encontraba colocada la droga, la conducta asumida por el imputado en el momento en que se ordena que detuviera la marcha del vehículo y las circunstancias en que se produce la aprehensión de GONZALEZ, se concluye que existe vinculación suficiente entre éste y el hecho imputado, que da margen legal suficiente para mantener su detención preventiva, dado que, por otra parte, la orden de privación de libertad pronunciada en su contra cumple con las formalidades legales que exige la ley y el delito que se investiga tiene señalada una pena mínima superior a los dos años, todo lo cual nos hace coincidir con la decisión tomada por el Tribunal primario en cuanto a que la detención preventiva de EDDIE EVARISTO GONZALEZ GUTIERREZ es legal, por lo que procede confirmar la resolución recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 16 de febrero de 2000, del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que declara legal la detención preventiva de EDDIE EVARISTO GONZALEZ GUTIERREZ.

Notifíquese y Devuélvase

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEONEL PERALTA CORTEZ CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE. HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema ingresó la acción de hábeas corpus interpuesta por el licdo RAFAEL AGAMES a favor de LEONEL PERALTA CORTEZ, contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial.

Librado el mandamiento que exige la ley, el funcionario acusado remitió su informe de conducta, donde indicó que la detención preventiva del ciudadano LEONEL PERALTA fue pronunciada por la Fiscalía Auxiliar de la República mediante providencia de 1 de marzo de 2000, fundamentándose esa decisión en los testimonios de DEIDAMIA SOBRINO y de MARIA ELENA SOBRINO, al denunciar la primera en el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial, que en medio de una discusión sobre la propiedad de una olla, dentro de la residencia del ofendido LEONEL PERALTA (sic) manifiesta que se llevaría la olla a las buenas o a las malas, luego de lo cual ALFREDO PERALTA hermano del sindicado inicia una pelea con el señor CASTILLERO, mientras LEONEL PERALTA saca un arma de fuego y le propina también golpes con la cacha, luego CASTILLERO al verse sangrando intenta agarrar un machete lo cual no logra y LEONEL PERALTA le dispara a su esposo, retirándose tranquilamente del lugar junto a sus acompañantes".

La investigación que motiva el presente hábeas corpus, de la que da cuenta las copias remitidas con la contestación de la acción constitucional interpuesta, tuvo su origen el día 30 de enero de 2000 cuando ocurrió un incidente en el que resultó seriamente lesionado con arma de fuego DARISNEL CASTILLERO RODRÍGUEZ.

De acuerdo a la versión que expone DEIDAMIA SOBRINO, la señora ILDA DE LEON se apersonó a su casa el día 29 de enero de 2000, reclamando la propiedad de una vasija que DARISNEL CASTILLERO RODRIGUEZ, su esposo, le había comprado a una persona conocida como ARIEL. Señala DEIDAMIA que DARISNEL le expresó que él no le había comprado ninguna olla a ARIEL, mostrándole una paila que tenía en su casa, diciéndole que esa "no era la paila, sino olla grande de aluminio de agarradero" y agregó DEIDAMIA, que al día siguiente, domingo 30 de enero, se presentó a su casa LEONEL PERALTA, marido de ILDA, en compañía de su hermano ALFREDO, en momentos en que su esposo DARISNEL se encontraba ayudando a su hija en la construcción de una casa y al llegar esas personas y preguntar por DARISNEL, éste bajó del techo de la casa en construcción donde se encontraba en esos momentos y al manifestarle LEONEL que venía a buscar la olla, DARISNEL le manifestó que "buscara a ARIEL y en presencia de todos dijera si él nos había vendido alguna olla", a lo que el hermano de LEONEL, ALFREDO expresó que "él tenía la olla y no la quería entregar", procediendo seguidamente a darle un puñetazo a DARISNEL, agarrándose a pelear mi esposo y ALFREDO, luego LEONEL PERALTA sacó su revolver y comenzó a darle golpes a mi esposo con la cacha en la cabeza ..." ..." y en momentos en que ALFREDO PERALTA se le abalanzó a pegarle a mi esposo nuevamente y mi esposo se defendió tratando de darle con el machete y en eso LEONEL PERALTA le disparó a mi esposo cayendo éste al piso luego de todo esto ILDA, LEONEL PERALTA y ALFREDO PERALTA se fueron tranquilamente".

Esa versión, en términos generales, la corrobora MARIA ELENA SOBRINO, quien indica que primeramente "LEONEL le pega a mi padrastro con la cacha del arma de fuego y en el forcejeo a LEONEL se le sale un tiro, pero no le da a mi padrasto así que mi padrastro toma una (sic) machete ya se vio que estaba sangrando, mi mamá le quita el machete a mi padrastro y LEONEL apunta y le dispara a mi padrastro a una distancia de unos tres (3) metros aproximadamente, luego mi padrasto cayó al piso y ellos se retiran caminando".

En su indagatoria, fs. 26-29, LEONEL PERALTA señala que no le disparó a DARISNEL, que "eso fue un accidente" y explicó que, en momentos en que DARISNEL cortó a su hermano con un machete por detrás de la oreja izquierda, después yo agarré a mi hermano y DARISNEL CASTILLERO se lanzó tirando machetazos, entonces yo saqué la pistola, para que se quedara quieto. Allí fue cuando me cortó aquí en el brazo. Después DARISIN CASTILLERO vino y se me lanzó encima. En vista de que ya tenía a mi hermano, lo tenía abrazado por el cuello, forcejeando con

DARISIN CASTILLERO se me disparó el arma".

Se encuentra establecido en el proceso que LEONEL PERALTA, armado con un revolver 380 de siete (7) municiones, cañón corto, marca BRICO, concurre a la casa de DARISNEL CASTILLERO RODRIGUEZ en unión de su hermano ALFREDO y de su mujero ILDA, a fin de solicitarle que le regresara una olla que según él, pertenecía a su casa; surge una discusión entre ellos y se causa una herida a DARISNEL con arma de fuego en el cuello que, de conformidad con la certificación médica que aparece a fojas 5 del cuaderno de antecedentes, produce lesión vértebra cervical C6-C7; lesión medular, cuadrapléjica completa a nivel de T4, lesión que puso en peligro su vida y y se asigna una incapacidad provisional de 90 días.

No hay duda alguna que LEONEL PERALTA CORTEZ fue la persona que, con su arma, ocasionó las graves lesiones que sufriera DARISNEL CASTILLERO RODRIGUEZ y que seguramente, de acuerdo con el diagnóstico médico que aparece en las sumarias, habrán de afectarlo permanentemente. Para reclamar una olla, que alegaba pertenecerle, concurre LEONEL a la casa de DARISNEL, armado con un revolver y acompañado de su hermano y de su mujer donde, sosteniendo que fueron cortados previamente con machete por DARISNEL, se causa le lesión que da cuenta la certificación médica. Su versión, hasta la fecha, no encuentra respaldo procesal y por el contrario las personas que hasta ahora han declarado describen lo sucedido en forma distinta a la expuesta por el indagado y de otro modo, las certificaciones médicas expedidas sobre LEONEL y ALFREDO, visibles a fojas 47 y 48, señalan que sufrieron sólo excoriaciones con objeto contundente de bordes agudos.

En el contenido de la acción constitucional interpuesta, no se cuestiona la vinculación del beneficiario de esta demanda con el hecho que se le imputa sino que lo alegado consiste en que no es procedente la detención preventiva en casos como el presente, dado que el hecho incriminado a PERALTA CORTEZ -tentativa de homicidio- se encuentra penado, en su modalidad simple, con pena mínima menor de dos (2) años de prisión.

Sin embargo, si bien es cierto que esta Corporación, en otros casos ha decretado la ilegalidad de la detención preventiva en atención a la penalidad mínima que tiene prevista nuestra legislación penal para esta clase de delitos, no menos es cierto que, cuando medien circunstancias especiales y atendiendo también a la gravedad del hecho, se ha estimado como legal la privación de libertad de una persona cuando así lo ameritan las constancias procesales, independientemente del monto de la sanción mínima que tiene establecida la ley penal para determinado caso.

En el caso particular que se tiene a la vista, se trata de una persona que armada concurre a casa de la víctima para reclamar una vasija que, hasta la fecha, no se tiene acreditada que le perteneciera; concurre en compañía de su hermano, que también participa en el incidente; porta un arma que, según declara a fojas 28, siempre la "tenía guardada en mi casa en un maletín privado", lo que pareciera indicar que la sacó y llevó con el propósito interno de utilizarla, arma con la que causa una lesión grave a DARISNEL CASTILLERO RODRIGUEZ, por un motivo que, al menos por ahora, no revestía una trascendencia de magnitud significativa que justificara una conducta penal como la accionada, que revela un grado de violencia personal que, conforme a lo normado por el artículo 2147c y 2147e del Código Judicial permiten concluir considerando como legal la orden de detención preventiva pronunciada en contra de LEONEL PERALTA CORTEZ y así ha de declararlo esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor LEONEL PERALTA CORTEZ y dispone sea filiado nuevamente a ordenes del Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EMANUEL RINGROSE WILLIAMS CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO PENAL DE PANAMA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licdo. DICKY REYNOLDS O'RILEY interpuso formal recurso de apelación contra la resolución de 4 de febrero del año en curso, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en la cual se declara legal la orden de detención preventiva dictada por el Juez Quinto de Circuito de Panamá contra EMANUEL RINGROSE WILLIAMS.

DISCONFORMIDAD DEL RECURRENTE

El apelante solicitó al Tribual Superior que declarara ilegal la detención preventiva que pesa contra EMANUEL RINGROSE WILLIAMS y la sustituyera por otra medida cautelar menos severa de conformidad con el texto del artículo 2148-A, ya que su poderdante se encuentra detenido desde el 10 de septiembre de 1997.

La petición fue negada por el funcionario judicial quien fundamentó su decisión en que la pena ha imponerse al sindicado oscila entre los 30 meses y 6 años de prisión, y éste no ha cumplido lo que debe ser el mínimo de la pena ha imponersele en el caso de ser condenado (F.1 del cuadernillo)

El accionante considera que el tipo penal que ha infringido EMANUEL RINGROSE WILLIAMS es el artículo 181 del Código Penal que califica el hecho como hurto simple cuya sanción es de 6 meses a 2 años, teniendo en cuenta lo señalado por el denunciante, señor ALLAN ERNESTO GUEVARA, quien asevera que no hubo visos de violencia al momento en que irrumpieron en su casa, de lo cual no puede dar fe porque solamente refiere lo dicho por su cónyuge.

Por otro lado, sostiene el Licdo. REYNOLDS O'RILEY que en el expediente no consta que se haya realizado un peritaje a efecto de verificar que la vivienda afectada hubiese sido violada y agrega que la conducta desarrollada por su poderdante no encuadra en el tipo penal que se le quiere endilgar, toda vez que la misma debe ser observada como hurto simple.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL A-QUO

El Segundo Tribunal Superior indicó en los fundamentos legales que sustentan la resolución que se pretende impugnar, que el funcionario demandado es el Fiscal Auxiliar de la República quien ordenó la detención de RINGROSE WILLIAMS mediante resolución de 15 de septiembre de 1997, la que se mantiene porque el 2 de agosto de 1999 se ordenó abrir causa criminal contra el prenombrado por presunto infractor de las normas que regulan los delitos contra el patrimonio, sumario que se encuentra radicado en el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. (F.8)

Examinadas las pruebas que operan en las sumarias, esto es, la denuncia y ampliación suscrita por ALLAN GUEVARA, la declaración indagatoria de RINGROSE WILLIAMS en la que acepta haber participado en el ilícito, y teniendo en cuenta los cargos endilgados al imputado como presunto transgresor de delitos contra el patrimonio, el A-quo concluyó que:

> "la conducta específica desplegada por los autores del hecho, pareciese encontrarse regulada en lo normado en el numeral 3 del artículo 184 del Código Penal, cuya pena mínima es de 30 meses de prisión, ya que para cometer el hurto se tuvo que quitar obstáculos que protegían la vivienda, en esta caso un vidrio de la ventana de la puerta. Como quiera que RINGROSE se encuentra detenido desde el 10 de septiembre de 1997, no ha cumplido la pena mínima que posiblemente se le imponga, por tanto se debe mantener su detención". (F.10)

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Los argumentos esgrimidos por el accionante en el memorial de habeas corpus van dirigidos a que se revoque la orden de detención preventiva, porque el sindicado ha excedido el mínimo de la pena que señala la ley por el delito que se le imputa, lo que tiene su fundamento legal en el artículo 2148-A del Código Judicial.

Si bien es cierto que la acción de habeas corpus está encaminada a examinar la legalidad o ilegalidad de una detención y no a calificar el tipo penal al cual se adecúa la conducta del agente, se debe entrar al análisis de las constancias procesales a fin de determinar si hay lugar a lo solicitado por el apelante.

El señor ALLAN ERNESTO GUEVARA RODRÍGUEZ interpuso formal denuncia ante la Policía Técnica Judicial en la que manifestó que el 29 de abril de 1997, su esposa fue a su residencia a eso de las 6:15 p. m., y encontró que uno de los vidrios de la ventana que se encuentra a un costado de la puerta principal estaba removido y que en el piso debajo de la ventana había un cuchillo. La puerta estaba abierta pero no mostraba señas de haber sido forzada. (F.2)

GUEVARA RODRÍGUEZ indica que al llegar a su casa se percató que se habían hurtado un radio portátil marca Kenwood, con su cargador y una batería adicional; diez cajas de CD que contenían treinta CD cada uno; una caja de diez CD; y entre 150 y 200 CD sueltos que estaban sobre una bocina; e indica que la puerta trasera de la casa estaba forzada. (Fs.3 y 4)

A foja 11 del expediente, consta ampliación de denuncia de GUEVARA RODRÍGUEZ en la que señala como eran los autores del hecho punible a MARCOS ALDRETE, EMANUEL BATISTA, SAMUEL CAMAÑO, ROBERTO MEDINA, ANEL PIMENTEL GRENACA GALTIERI, LUIS SÁNCHEZ, JUAN ATENCIO, quienes eran compañeros de su hijo en el colegio.

Mediante auto de 2 de agosto de 1999, el Juez Quinto de Circuito de lo Penal abrió causa criminal contra EMANUEL RINGROSE y MARVIN CABRERA por infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título IV del Libro II del Código Penal, es decir por la presunta comisión de Delito Contra el Patrimonio y dispuso mantener la detención preventiva porque el delito investigado excede los dos años de prisión.(Fs.312-313)

Ahora bien, la Jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que "si bien el artículo 2148-A consagra que la detención preventiva será revocada de oficio o a petición de parte, cuando se exceda el mínimo de la pena que señala la ley por el delito que se imputa, esta misma disposición también advierte seguidamente, 'de conformidad con las constancias procesales', las cuales el juzgador debe valorar cuando se aleguen situaciones como las planteadas por el activador de esta iniciativa constitucional".(Noviembre 9 de 1999)

Siendo así las cosas, en las constancias procesales se advierte que los que penetraron en el inmueble quitaron un vidrio de la ventana, abrieron la puerta principal y, como indica el ofendido, la puerta trasera de la casa fue forzada y fueron sustraídos varios bienes muebles. Evaluada esta conducta con las contenidas en nuestro Código Penal, la acción desplegada por los agentes presuntamente podría encuadrar de manera clara, en la contenida en el Libro II, Título IV, Capítulo I, relativa al hurto, específicamente el artículo184, numeral 3, del Código Penal, que a la letra dice:

> "La sanción será de 30 meses a 6 años de prisión en los siguientes casos:
>
> ...
> 3. Si el autor para cometer el hecho o para transportar la cosa sustraída, destruye, rompe o fuerza obstáculos de cualquier naturaleza establecidos para proteger a la persona o a la propiedad, aunque la fractura no se ejecute en el lugar mismo del delito; ...

A partir de lo dispuesto en la norma citada, siendo que el imputado se encuentra detenido desde el 15 de septiembre de 1997, fecha en que se dictó la orden de detención preventiva (F.97), lo que a la fecha constituye 2 años y 6 meses de estar detenido, la Corte concluye que la privación de libertad de EMANUEL RINGROSE WILLIAMS ha excedido la pena mínima fijada para el delito de hurto calificado.

Por las consideraciones anteriores, este Tribunal de Habeas Corpus estima procedente sustituir la medida de detención preventiva que pesa contra el beneficiado con la presente acción, por las medidas cautelares personales contempladas en los numerales a, b y c del artículo 2147-B del Código Judicial, a saber:

> "a) La prohibición del imputado de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial;
>
> b) El deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública; y,
>
> c) La obligación de residir en un determinado lugar comprendido dentro de la jurisdicción correspondiente."

En tal sentido, se le impone al sindicado el deber de presentarse cada 15 días ante la autoridad que conozca del proceso, y la obligación de residir en la jurisdicción correspondiente al Tribunal de la causa.

Esta sustitución no debe entenderse como un pronunciamiento del Tribunal que desvincule a RINGROSE WILLIAMS del delito que se le imputa, quedando sujeto al resultado del proceso penal que se le sigue, sin perjuicio de que sea detenido preventivamente si incumple los deberes inherentes a las medidas cautelares que le serán aplicadas.

**PARTE RESOLUTIVA**

En mérito de lo anterior, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra EMANUEL RINGROSE WILLIAMS, mediante providencia fechada 15 de septiembre de 1997 y la REEMPLAZA por las medidas cautelares enumeradas en los literales a), b) y c), del artículo 2147-B del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADAN A. ARJONA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ERNESTO TORRES SANTANA Y JOSÉ ENRIQUE CORDERO SANTANA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor César Augusto Cordero González en representación de LUIS ERNESTO TORRES SANTANA y JOSÉ ENRIQUE CORDERO SANTANA, ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor y contra el Director de la Policía Nacional.

Acogido el recurso y librado el mandamiento de Habeas Corpus, el funcionario demandado rindió el informe que se le solicitó por medio del Oficio N° AL-852-00, fechado el 15 de marzo de 2000. En el mencionado informe el señor José Sosa, Director de la Policía Nacional, expresó lo siguiente:

"...

A. No es cierto que haya ordenado la detención de los ciudadanos LUIS ERNESTO TORRES SANTANA y JOSÉ ENRIQUE CORDERO SANTANA, ni por escrito ni verbalmente.

B. Queda explicado en el literal anterior.

C. Sí tengo baja mi custodia a las personas que se han mandado a presentar. Los mismos fueron transferidos a la Policía Técnica Judicial por supuesto delito contra el Patrimonio, mediante oficio 221/DIIP-DIV 00 de fecha 9 de Marzo de 2000 y en la actualidad se encuentran detenidos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República (Expediente N° 1318) ..." (f. 6)

Como los detenidos se encontraban a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República, se libró el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien en su Oficio N° 3706, fechado 16 de marzo de 2000, manifestó que sí ordenó la detención del señor LUIS ERNESTO TORRES SANTANA y, que el mismo fue puesto a órdenes de la Fiscalía Primera de Circuito del Primer Circuito Judicial por delito contra el Patrimonio. Agregó que contra el señor JOSÉ ENRIQUE CORDERO SANTANA, no se ha dictado orden de detención verbal ni escrita (fs. 8-9).

Como el detenido, LUIS ERNESTO TORRES SANTANA, está a órdenes de la Fiscalía Primera de Circuito de Panamá, el Pleno de la Corte Suprema carece de competencia para conocer de la acción de habeas corpus interpuesta a su favor y debe declinar su conocimiento al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, de conformidad con los artículos 2602, numeral 2 y 2588 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus promovida por el señor César Augusto Cordero González a favor de LUIS ERNESTO TORRES SANTANA y JOSÉ ENRIQUE CORDERO SANTANA en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO A. ALLEN SHAW CONTRA EL DIRECTOR DEL SISTEMA PENITENCIARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.**

**VISTOS:**

El Señor ROBERTO A. ALLEN SHAW, mediante manuscrito remitido al Magistrado Presidente de esta Corporación Judicial desde el Centro Penitenciario La Joya, manifiesta que la presente acción está dirigida a la Directora Encargada del Sistema Penitenciario Estatal del país, por el hecho de que se encuentra en una situación de quebranto de salud diagnosticado (H. T. A.) por el resto de la vida, situación que requiere un tratamiento especial y una alimentación adecuada y balanceada, en la cual el sistema penitenciario no le otorga a las personas, además de que ha solicitado un traslado por motivo de seguridad, ya que en las instalaciones las visitas son cada 15 días, la alimentación es mala y no se otorga un balance alimentario.

Librado el mandamiento se ordenó al funcionario demandado rindiera el informe escrito al cual se refiere el artículo 2582 del Código Judicial. El Director General del Sistema Penitenciario a. i., Lcdo. José Álvarez Cueto, procedió a dar cumplimiento al mandato del Magistrado Sustanciador, rindiendo el siguiente informe:

> "A. El suscrito en calidad de Director General del Sistema Penitenciario a. i., no ha impartido, verbalmente ni por escrito, orden de detención en contra del prenombrado.
>
> B. No podemos hacer referencia de los motivos o fundamentos de hecho o de derecho que motivan la detención, porque no lo hemos ordenado.
>
> C. El señor ROBERTO A. ALLEN SHAW, con cédula de identidad No. 8-125-821 se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Joya a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario, en virtud del cumplimiento de la pena de ciento doce (112) meses de prisión impuesto por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, mediante sentencia proferida por el Juzgado Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.
>
> Cabe señalar que este interno ingresó el veintiséis (26) de marzo de 1998, por lo que cumplirá las dos terceras partes de la pena impuesta el 16 de junio de 2004 y culminará la totalidad de la pena impuesta el veintiséis (26) de julio de 2007, según Mandamiento N° 1607-DGSP de 23 de agosto de 1999.
>
> Finalmente, le informamos que el día 3 de septiembre de 1999 la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, respondió Habeas Corpus interpuesto por el detenido, declarando legal su detención y ordenando que el mismo fuera puesto nuevamente, a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario."

En este caso se ha podido observar que la sanción impuesta al señor ROBERTO A. ALLEN SHAW fue proferida por el Juez Sexto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá por el delito de tráfico ilícito de drogas es de ciento doce (112) meses de prisión, o lo que es lo mismo, de nueve años y cuatro meses de prisión, por lo que no ha cumplido la pena líquida señalada por el Juez de la causa; es evidente, por lo tanto, que la detención que pesa sobre el accionante tiene fundamento legal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención contra ROBERTO A. ALLEN SHAW a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÀBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA ANA LUISA CAL DE BORREL CONTRA LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO EJECUTIVO 434 DEL 1° DE OCTUBRE DE 1959. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Ana Luisa Cal de Borrel actuando en nombre y representación de Panama Railroad Company, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia advertencias de inconstitucionalidad, correspondientes a las entradas 56-2000, 57-2000, 58-2000 y 59-2000, contra los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 434 del 1° de octubre de 1959.

Las iniciativas constitucionales se presentan dentro de los recursos de apelación promovidos por la recurrente ante la Sala Civil de esta Corporación de Justicia, contra las siguientes resoluciones proferidas por el Registro Público:

1. Auto de 1° de diciembre de 1999, que niega la inscripción del documento ingresado bajo el asiento 64439 del tomo 279 del diario;

2. Auto de 2 de diciembre de 1999, que niega la inscripción del documento ingresado bajo el asiento 65318 del tomo 279 del diario;

3. Auto de 24 de noviembre de 1999, que niega la inscripción del documento ingresado bajo el asiento 62976 del tomo 279 del diario;

4. Auto de 24 de noviembre de 1999, que niega la inscripción del documento ingresado bajo el asiento 62033 del tomo 279 del diario.

De conformidad con el informe secretarial visible a foja 165 del expediente contentivo de esta causa constitucional, tales advertencias fueron acumuladas mediante resolución de 4 de febrero del 2000, con la finalidad que fueran sustanciadas y falladas en una sola sentencia, por motivos de economía procesal (vid. cuaderno de advertencia, f. 165).

Por encontrarse la presente iniciativa constitucional en etapa de decidir sobre su admisibilidad, se procede a determinar si el libelo cumple o no con los presupuestos formales que dispone el inciso segundo del numeral primero del artículo 203 de la Ley Fundamental y el artículo 2549 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2551 del Código Judicial, así como los consagrados por la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

Encuentra el Pleno que el libelo de advertencia satisface todos los requisitos de carácter formal comunes a toda demanda, así como los dispuestos por el artículo 2551 del Código Judicial. No obstante, esta Superioridad ha manifestado que para la admisibilidad de un planteamiento constitucional por vía incidental o indirecta, se requiere como presupuesto básico, en atención a lo dispuesto por los artículos 2548 y 2549 del Código Judicial, "... que el precepto legal o reglamentario advertido sea virtualmente aplicable al conflicto jurídico para resolver sobre la pretensión ..." (Sentencia de 23 de junio de 1999 y 17 de enero de 2000).

En el caso que nos ocupa, los antecedentes dan cuenta que las disposiciones que se impugnan ya fueron aplicadas en el proceso originario como fundamento de derecho para negar la inscripción de los títulos de propiedad de Panama Railroad Company, tal como lo reconoce la propia recurrente en el libelo de advertencia (vid. fs. 17 y 25). Por tal motivo, resulta procedente negarle curso legal a la iniciativa procesal bajo examen.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por la licenciada Ana Luisa Cal de Borrel contra los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 434 del 1° de octubre de 1959.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARIO LUIS LUQUE V., EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACION Y EN CONTRA DEL DECRETO No 690 DE 21 DE OCTUBRE DE 1993, EXPEDIDO POR LA ALCALDIA DEL DISTRITO CAPITAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado MARIO LUÍS LUQUE VELASCO presentó ante el Pleno de la Corte Suprema, en su propio nombre, demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto N° 690 de 21 de octubre de 1993, expedido por la Alcaldía del Distrito Capital, por el que se le destituyó del cargo de Asistente Abogado I, en el Departamento de Legal, Obras y Construcciones, de la Dirección de Legal y Justicia, Posición N° 387, del Municipio de Panamá.

Los fundamentos fácticos de la presente activación constitucional, estriban principalmente, en los siguientes:

Que desempeñó el cargo de Jefe del Departamento Técnico Legal de Obras desde agosto de 1992.

Que sin previa ni expresa investigación, tal como lo prevé el artículo 106 del Decreto N° 536 de 3 de septiembre de 1992, fue notificado por la Alcaldesa de Panamá del Decreto que lo destituyó.

Que el fundamento del Decreto impugnado, fue "la necesidad de realizar una reorganización administrativa a nivel interno del Municipio", que no está contemplada como causal de destitución en el Decreto N° 536 de 3 de septiembre de 1992, que estableció el Reglamento de Personal del Municipio de Panamá.

Las normas constitucionales infringidas, a su juicio, son los artículos 17, 70 y 231 de la Carta Fundamental.

La primera norma -que afirma el deber de las autoridades nacionales de proteger en su vida, honra y bienes a los panameños y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional- fue violada en concepto de violación directa por omisión, ya que pese a que la jurisprudencia nacional ha determinado la naturaleza programática de dicha norma, la destitución de la que fue objeto, constituye una "violación flagrante" del precepto en comento, pues no se le aseguró la efectividad de sus derechos individuales y sociales.

El artículo 70 Constitucional -fija la estabilidad laboral, el despido por justa causa, y deja a la ley su establecimiento, así como la indemnización correspondiente-, fue violado en concepto de violación directa, ya que omitió el acatamiento del precepto; se incumplieron las formalidades legales previas a su destitución, establecidas en artículo 106 del Decreto N 536 de 3 de septiembre de 1992.

Conceptúa que, aunque se trata de una relación laboral entre el Estado y un particular, la cual no es susceptible de la aplicación del Código de Trabajo, dicha relación tiene reguladas las causales de despido -artículo 105 del Decreto N° 536 de 3 de septiembre de 1992-, que implican la terminación del nexo empleador-trabajador, que no fueron aplicados.

Y el artículo 231 íbidem -deber de las autoridades municipales de cumplir la Constitución y las Leyes de la República, decretos y órdenes del Ejecutivo, y las resoluciones de los Tribunales ordinarios y administrativos- fue vulnerado por el Decreto impugnado de forma directa por omisión -según el actor-, porque, al omitir la primera autoridad del Distrito el procedimiento para su destitución, consignados en los artículos 105 y 106 del Reglamento de Personal del Municipio de Panamá, que establecen claramente las causales de destitución y su procedimiento; enfatiza el Licdo. Mario Luís Luque, que el Decreto N° 536 de 3 de septiembre de 1992 es una ley de la República, debidamente publicada en la Gaceta Oficial.

Admitida la demanda, se corrió traslado al Ministerio Público, tocándole el turno para conocer el caso al señor Procurador de la Administración, quien a través de la Vista N° 65 de 10 de febrero de 1994, externó su opinión sobre el negocio, considerando que la demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa, debe ser rechazada por esta Corporación de Justicia.

Arribó el funcionario Opinador a esta conclusión, por los siguientes motivos.

En primer lugar, el demandante no logró demostrar que el acto acusado estuviera en firme, ni que utilizó los recursos legales pertinentes, siendo que en la fotocopia autenticada contenida a foja 2 del expediente, no existe constancia de la notificación del Decreto, al Licdo. MARIO LUQUE.

Por otra parte, el actor señaló que interpuso recurso de reconsideración, el cual no le fue contestado luego de transcurrido los dos -2- meses de interpuesto; pero -dice el Procurador- no consta la interposición del mismo, ni de que hubiera solicitado certificación de la presentación o negación del recurso, para que se constituya la figura del silencio administrativo, por lo que

esta demanda "es a todas luces, prematura", toda vez que su objeto es "un acto jurídico cuya firmeza jurídica no se ha comprobado, y por tanto, podría ser revocado antes de que la Corte se pronuncie, caso de ser admitida la demanda."

El Procurador citó jurisprudencia de esta Corporación de Justicia que justifica el criterio de que la demanda de inconstitucionalidad es un medio de impugnación extraordinaria y suprema contra un acto jurídico del Estado, por lo que su empleo debe hacerse cuando exista certeza de que se produjo la infracción constitucional, lo que no puede ocurrir cuando el afectado dispone recursos legales ordinarios para impugnar el acto acusado, y que no han sido utilizados en este caso.

De no utilizar este criterio, considera el representante del Ministerio Público que la Corte Suprema se convertiría en un Tribunal más, iría contra el principio de cosa juzgada y el carácter obligatorio y definitivo de sus decisiones, lo que las haría susceptibles de ser impugnadas.

En cuanto al fondo del negocio, consideró el Opinador que los actos administrativos están investidos de la presunción de legalidad, en su forma y contenido, por ser emitidos por autoridad competente, a menos que se compruebe lo contrario; lo que supone que quien los acusa de ilegalidad lleva sobre sí la carga de la prueba.

También conceptuó que ninguna de las tres normas constitucionales que el actor consideró violadas, pueden servir de sustento jurídico para invocar la violación de la Carta Fundamental, porque al admitir esta demanda, se estaría aceptando la violación al principio constitucional del debido proceso, al no cumplir el actor los trámites legales, ni acudir a la autoridad competente; además, la vía aquí escogida no es la adecuada para verificar si el actor incurrió en causal de destitución.

Por todo lo anterior, reiteró el señor Procurador de la Administración que la presente demanda de inconstitucionalidad debe ser rechazada.

Devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez -10- días después de la última publicación del Edicto, para que los interesados pudieran incorporar sus argumentos, término éste utilizado por el actor.

Encontrándose el caso en etapa de resolver, se apresta el Pleno a analizar el fondo de la controversia, no sin antes verter la siguientes consideraciones.

La presente demanda constitucional se dirigió contra el Decreto N° 690 de 21 de octubre de 1993, emitido por la Alcaldesa del Distrito Capital, refrendado por el Secretario General de dicha entidad, por dictaminar el despido del demandante, Licdo. MARIO LUÍS LUQUE V., sin cumplir ni la causal de destitución, ni el procedimiento que para éstos casos, dispone el Decreto N° 536 de 3 de septiembre de 1992, que establece el Reglamento de Personal del Municipio de Panamá, infringiéndose a su juicio, el principio del debido proceso legal, establecido en el artículo 32 del Estatuto Fundamental.

En el hecho quinto del libelo, aduce el actor haberse notificado del Decreto que lo destituye, y que interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, y que hasta la fecha de la presentación de la demanda constitucional no le había sido resuelta.

La abundante jurisprudencia de esta Colegiatura ha sentado que, para que la acción o demanda de inconstitucionalidad sea viable, es necesario que el demandante agote todos los medios impugnativos disponibles, ya que sin dicho requisito el negocio será inadmisible.

Vemos que, en el presente caso, el actor dijo interponer el recurso de reconsideración con apelación en subsidio, pero no lo demostró en la oportunidad procesal adecuada, ya que no acompañó su demanda con ningún elemento probatorio

que demostrara que había recurrido.

El señor Procurador de la Administración opinó en su Vista, que el actor no había agotado los medios impugnativos disponibles, toda vez que no había demostrado el silencio administrativo que denunciaba, ya que no adjuntó con su demanda ninguna prueba de la presentación del recurso de reconsideración con apelación en subsidio, ni menos utilizar la vía contencioso-administrativa mediante el recurso de plena jurisdicción.

Entonces, en la etapa de fijación en lista por el término de diez -10- días para que los interesados alegaran sobre el negocio -luego de la fijación de los Edictos-, el letrado presentó sus argumentos el día 6 de abril de 1994 ante la Secretaría General de la Corte, junto con las fotocopias autenticadas de su libelo contentivo del recurso de reconsideración con apelación en subsidio, así como el sello de notificación en el reverso del Decreto que lo destituyó, y la solicitud de certificación de que si el Municipio había resuelto o no, dicho recurso; es decir, más de 2 meses y medio después de presentada la demanda que nos ocupa.

Considera el Pleno que el proceder del demandante en este caso, no es cónsono con el procedimiento establecido para este proceso constitucional, ya que el Código Judicial no prevé que en la etapa de presentación de argumentos por parte de los interesados, ni en ninguna otra de este procedimiento, puedan presentarse pruebas; ello significa que las mismas fueron presentadas extemporáneamente, lo que legitima el argumento del Procurador de la Administración.

Esto trae como consecuencia, que dichos elementos probatorios no tienen cabida en este caso, ni son tomados en cuenta en la decisión.

En cuanto al fondo de dicha argumentación, el Licdo. LUQUE transcribió un extracto de la sentencia de 21 de noviembre de 1991, en el que el entonces Magistrado, Dr. César Quintero, citó al Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, el cual utilizó para fundar su posición, y que aquí transcribimos.

> "La razón de ser de la inexistencia de término para el uso de la acción pública debe ubicarse en el interés del constituyente de garantizar, en todo momento, la sujeción de la normatividad ordinaria al orden constitucional. Habría actuado como una burla en esta firme pretensión del constituyente el hecho de someter a plazo la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad. La fijación de un término para usar de la acción pública habría surtido el efecto de convalidar y legitimar todos los actos y normas inconstitucionales no impugnados dentro del plazo que se hubiera señalado. Como tal no fue, ni mucho menos, la idea del constituyente, en Panamá la acción pública para provocar el control de la constitucionalidad puede usarse en cualquier momento después de la expedición de los actos que se consideren inconstitucionales." (Subraya del actor)

Dicha actuación no es compatible con el procedimiento establecido en el Código Judicial para la interposición y trámite de este negocio constitucional, ya que dichas pruebas debió presentarlas con la demanda, y no como lo hizo.

La frase subrayada, fue interpretada por el actor en el sentido, de que la acción popular de inconstitucionalidad puede ser interpuesta una vez expedido el acto administrativo, aunque no esté en firme; no comparte esta Corporación de Justicia, ese criterio.

De la lectura del fallo citado, y en especial del mismo párrafo expuesto por el Licdo. MARIO LUQUE, resalta que el sentido con el que el autor del mismo expuso su criterio, es más bien que la demanda de inconstitucionalidad no tiene término de prescripción, que puede ser interpuesta en cualquier momento, para que

no fuera ilusoria la posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad con el transcurso del tiempo; así lo dijo el autor del comentario, al señalar que "... La fijación de un término para usar de la acción pública habría surtido el efecto de convalidar y legitimar todos los actos y normas inconstitucionales no impugnados dentro del plazo que se hubiera señalado."

No prospera entonces, el argumento del letrado, y por ende, le asiste la razón al representante del Ministerio Público al considerar que el demandante no agotó los recursos que la ley pone a su disposición, para lograr la viabilidad de la presente demanda.

Además, el planteamiento central del problema se funda en que el Decreto N° 690 de 21 de octubre de 1993, que destituyó al actor, fue expedido pretermitiendo el procedimiento que sobre el Reglamento de Personal instauró el Decreto N° 536 de 3 de septiembre de 1992, lo cual induce a este Pleno al criterio de que la esfera que se debate en este caso, es el de la mera legalidad, pues no se advierte que la controversia alcance el rango constitucional requerido para debatir el fondo de esta demanda constitucional.

Por lo tanto, no le queda alternativa a esta Corporación de Justicia, que declarar la no viabilidad del negocio.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de inconstitucionalidad promovida por el Licenciado MARIO LUÍS LUQUE VELASCO en su propio nombre, contra el Decreto N° 690 de 21 de octubre de 1993, dictado por la Alcaldesa del Distrito Capital.

Cópiese, Nofifíquese y Publíquese

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ANTONIO GONZALEZ Q., CON REPRESENTACION DEL SEÑOR JOSE R. LUTRELL Y EN CONTRA DE LA RESOLUCION N° 581 DE 1 DE JUNIO DE 1993, DICTADA POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, ENCARGADO Y LA RESOLUCION No 807 DE 23 DE JULIO DE 1993, QUE CONFIRMA LA ANTERIOR. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado José R. Luttrell, en representación del Licenciado ANTONIO GONZÁLEZ Q., presentó acción de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 581 de 1° de junio de 1993, dictada por el Procurador General de la Nación, Encargado, y la Resolución N° 807 de 23 de julio de 1993, que la confirma.

Las Resoluciones impugnadas declararon insubsistente el nombramiento del Licdo. GONZÁLEZ Q. en el cargo de Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación, para el cual había sido nombrado mediante Decreto N° 407 de 15 de junio de 1990, para entrar a regir el día siguiente, 16 de junio de 1990.

El actor expone una extensa relación de hechos, de los que se destacan los

siguientes.

Que "sorpresivamente" fue notificado el 2 de junio de 1993 de la Resolución N° 581 del día anterior, contentiva de la insubsistencia de su cargo, por el Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, Licdo. Guillermo Pianetta.

Que según el artículo 331 del Código Judicial, el período para el que fue nombrado, es de seis -6- años, siendo que llevaba sólo dos -2- años y once -11- meses en el cargo.

Que el pretexto que utilizó el Procurador para destituirlo, fue el retardo o morosidad procesal de los negocios tramitados en su despacho.

En resumen, que fue destituido sin fundamento legal para ello, pues las Resoluciones impugnadas señalaban que no estaba amparado por la Carrera Judicial, siendo que desde la Constitución de 1946 se estableció la estabilidad de los funcionarios públicos.

Que fue destituido sin que se investigaran las razones de la demora en la instrucción de los expedientes.

Que nunca fue procesado disciplinariamente, amonestado o sancionado, por lo que no tuvo oportunidad de defenderse; además, que la destitución no es la sanción correspondiente a la causal disciplinaria que se le atribuye.

El demandante constitucional expuso las normas legales en que funda los hechos expuestos.

En cuanto a las disposiciones constitucionales infringidas y el concepto de la infracción, consideró como violados los artículos 32, 208, 220 y 295 de la Constitución Nacional.

El artículo 32 -contentivo del principio del debido proceso- fue violado de manera directa por omisión, toda vez que, al ordenar el señor Procurador su destitución sin poner en su conocimiento, previamente, cualquier cargo en su contra, lo privó del derecho de defensa, y de paso incumplió el principio del debido proceso, es decir, el derecho a un juicio previo y justo.

Los artículos 208 -que los Magistrados y Jueces no pueden ser depuestos, suspendidos o trasladados de sus cargos sino en los casos y formalidades que dispone la ley- y 220 -rigen para los agentes del Ministerio Público las mismas disposiciones que para los funcionarios judiciales, establecidas en los artículos 202, 205, 207, 208, 209 y 213- ibidem, ya que el artículo 377 del Código Judicial -establece la estabilidad laboral para los agentes del Ministerio Público- no tiene nada que ver con la Carrera Judicial; por ello, para que pudiera ser destituido el Licdo. GONZÁLEZ, era necesario que hubiera cometido un delito o falta contra la ética judicial comprobados, pues son las únicas causas de destitución.

Entonces, al pretermitir la aplicación del artículo 377 del Código de Procedimiento, infringió las normas constitucionales en consideración; y no sólo por estas razones, sino porque omitió formalidades, como la dictación de una sentencia -fallo condenatorio contra el funcionario con la respectiva sanción-; también se requería la interposición de una denuncia, querella o acusación por escrito, en caso de la presunta comisión de un delito, etc.

El artículo 295 Constitucional -servidores públicos serán panameños sin distingo de raza, sexo, religión, ideas políticas, y su nombramiento y remoción no son potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo lo dispuesto por la Constitución- fue infringido de forma directa por omisión, en opinión del afectado, porque no es potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, la remoción de un servidor público.

Por lo tanto, el Procurador tenía que someterse a reglas que ignoró, incurriendo también en la violación del artículo 295 de la Carta Magna.

Admitida la acción, se corrió traslado al Ministerio Público, correspondiéndole al entonces Procurador de la Administración, emitir su opinión, lo que hizo mediante la Vista N° 432 de 24 de septiembre de 1993, y en la que, en síntesis, consideró que las Resoluciones acusadas no infringen la Excerta Máxima.

Dijo el Procurador que en las Resoluciones impugnadas se explicó que la causa de la destitución fue por el alto índice de morosidad en la instrucción de los expedientes, y que el Licdo. ANTONIO GONZÁLEZ interpuso el recurso correspondiente contra la Resolución impugnada en esta acción, que resultó en la confirmación de la misma por parte del entonces Procurador VALDÉS, lo que indica que se cumplió con el debido proceso.

Consideró también el Procurador de la Administración, que el actor no estaba amparado por ninguna estabilidad, ya que fue nombrado como Fiscal Segundo Delegado el 15 de junio de 1991, por lo tanto, no había cumplido cinco -5- años en el cargo, y por ende los requisitos del artículo 271 del Código Judicial, que dice así:

> "ARTICULO 271. Para los efectos de todos los derechos y garantías consagradas en este Código para la Carrera Judicial, sólo gozarán de los mismos los funcionarios y empleados judiciales que hayan ingresado a los cargos mediante el cumplimiento de las exigencias establecidas para el ingreso a dicha Carrera.
>
> No obstante esta disposición, los funcionarios del Organo Judicial y del Ministerio Público, nombrados por lo menos cinco años antes de la promulgación de esta Ley que no cumplan con los requisitos señalados en este Código, se les garantizará estabilidad mientras no incurran en causa que, conforme a la ley, justifique su remoción o separación del cargo que ocupan."

Señaló el señor Procurador de la Administración que, a la fecha en que emitió su Vista, no se había implementado la Carrera Judicial en el Ministerio Público, y para reforzar esta aseveración, citó fallo de 12 de julio de 1993, dictado por la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia.

También expuso el emisor de la Vista que, si como dice el accionante, la norma aplicable es el artículo 377 del Código Judicial -los agentes del Ministerio Público no pueden ser suspendidos en sus funciones sino por los motivos y mediante las formalidades legales, no pueden ser destituidos sino en virtud de sentencia por delito o falta contra la ética judicial-, seleccionó equívocamente la vía impugnativa, pues lo que correspondía era la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, previo agotamiento de la vía gubernativa.

A su juicio, recurrir a la infracción de una norma legal para demostrar la infracción de una norma constitucional, no fue lo adecuado, ya que los cargos contra la resolución deben hacerse contra la norma constitucional infringida, y no a una de inferior jerarquía.

Concluyó entonces el Procurador de la Administración su opinión, que las Resoluciones demandadas no infringieron ninguna norma de la Constitución Nacional.

Luego de fijado el expediente en lista por el término de diez -10- días, y cumplidas las demás formalidades legales, corresponde a esta Superioridad decidir el fondo del negocio, previas las siguientes consideraciones.

En primer lugar, advierte el Pleno que el actor interpuso la presente

acción contra dos resoluciones, la N° 581 de 1° de junio, y contra la N° 807 de 23 de julio, ambas de 1993; aunque pareciera inapropiada dicha iniciativa para los rigores del presente procedimiento, es ostensible que, por ser la segunda resolución confirmatoria de la primera, y tratarse de la misma materia, pueden ser dilucidadas en esta decisión; así lo ha establecido la jurisprudencia.

Considera esta Corporación de Justicia que, pese al cumplimiento de los requisitos señalados para su admisibilidad, no es posible dilucidar el fondo del negocio.

En efecto, comparte la Corte el criterio del señor Procurador de la Administración, en el sentido de que, por ser aplicable al caso el artículo 377 del Código Judicial, es decir, que los Agentes Instructores no pueden ser suspendidos sino en virtud de los motivos y mediante las formalidades legales, ni destituidos sino por la comisión de delito, o por falta contra la ética judicial, lo correcto era acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Es decir, como la destitución del Licdo. ANTONIO GONZÁLEZ Q. se debió a la mora en la instrucción de los expediente a su cargo, dicha razón es distinta de las expuestas en el artículo 377 del Código Judicial -delitos o faltas contra la ética judicial-; luego entonces, nos encontramos ante un caso administrativo, ya que se trata de una destitución por razón distinta a la contenida en el artículo 377 del Código Judicial, en cuyo caso habría que interponer una acción penal o un proceso por falta a la ética judicial contra el funcionario denunciado.

También le asiste la razón al Funcionario Opinador, al considerar que, la resolución N° 581 de 1° de junio de 1993, dictada por el Procurador General de la Nación, fue confirmada mediante resolución de 23 de julio de 1993, por razón de recurso de reconsideración interpuesto por el actor. Es necesario hacer la aclaración de que la firma del Procurador General de la Nación que aparece en ambas resoluciones es la misma, correspondiendo al del entonces Procurador General de la Nación, Jorge Ramón Valdés.

Allí agotó el demandante constitucional, la vía gubernativa, a nuestro juicio, ya que no cabía recurso de apelación porque el Procurador General de la Nación no tiene superior jerárquico.

Empero, debió agotar la vía contencioso-administrativa mediante el recurso de plena jurisdicción; de esta manera, hubiera agotado los medios impugnativos disponibles para cumplir dicho requisito para esta activación constitucional.

La jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha dejado sentado que, para la activación de esta demanda objetiva de inconstitucionalidad, se requiere el agotamiento de los recursos legales disponibles.

Para cerciorarse de lo anterior, se puede observar la sentencia del Pleno de 24 de mayo de 1993.

Por lo tanto, queda demostrado que la presente acción de inconstitucionalidad no es viable, y así debe declararlo la Corte.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Licdo. José. R. Luttrell en representación del Licenciado ANTONIO GONZÁLEZ Q. contra las Resoluciones N° 581 de 1° de junio, y N° 807 de 23 de julio de 1993, emitidas por el señor Procurador General de la Nación.

Cópiese, Notifíquese y Archívese

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTA POR EL LICENCIADO DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA ANTE EL JUEZ SEGUNDO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMA CONTRA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 2204 DEL CODIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS

El Licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA presentó, ante el Juez Segundo Municipal Penal del Distrito de Panamá, una advertencia de inconstitucionalidad contra el último párrafo del artículo 2204 del Código Judicial, procediendo el Juez del conocimiento a elevar la consulta respectiva a esta Corporación, motivo por el cual se procede, en primer término, al examen de la advertencia formulada para determinar si es del caso admitirla.

Conforme a lo que ha señalado esta corporación en fallos anteriores, no son susceptible de consulta o de advertencia de inconstitucionalidad, entre otras, normas que se refieren a la organización de los Tribunales, las que fijan jurisdicción y competencia, las que establecen términos o traslados, las que regulan la conducción del proceso, las referentes a ejecución de sentencias, la favorables al reo y las que deciden la causa. De la lectura que se hace de la norma legal que se advierte como inconstitucional -párrafo final del artículo 2204 del Código Judicial- se aprecia que evidentemente se trata de una norma de carácter procesal que concierne a la ritualidad del proceso, razón por la cual se encuentra excluida de una impugnación a través de un advertencia de inconstitucionalidad.

Por otra parte, la advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa no reúne las condiciones legales y jurisprudenciales exigidas para su admisibilidad, dado que, como antes este Pleno lo ha señalado, la advertencia de inconstitucionalidad debe cumplir con los requisitos estatuidos para las demandas de inconstitucionalidad, que están previstos en el artículo 2551 del Código Judicial, que exigen al demandante cumplir con los requisitos comunes a toda demanda. En ese orden, se observa que el demandante no cumple con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del citado artículo 2551, que requiere de la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusado de inconstitucional y la indicación del concepto de infracción, pues sólo transcribe una parte de la norma acusada de inconstitucional y omite señalar el concepto de la infracción con respecto a la norma constitucional que alega como infringida.

De otro modo, el demandante señala como única disposición infringida el numeral segundo del artículo 213 de la Constitución Nacional, norma de carácter programático que debe servir de orientación en la expedición de la legislación que lo desarrolla y que por su carácter objetivo no es susceptible de ser alegada como infringida en un proceso de inconstitucionalidad.

En ese sentido en sentencia de 16 de julio de 1991, esta Corporación sostuvo que "debe tenerse en cuenta que la Corte Suprema, en innumerables fallos, ha sostenido que artículos de la Constitución que son de carácter programáticos no pueden resultar violados sin relacionarlos con otros artículos de la Constitución, que especialmente tengan que ver con el acto acusado".

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad propuesta por el Lcdo. DARIO CARRILO GOMILA

contra el párrafo final del artículo 2204 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR EL LIC. JOSE MARIA LEZCANO YANGUEZ EN REPRESENTACION DE EL SR. ROGELIO AGUSTIN BARUCO EN CONTRA DEL AUTO REP. No.455-94-JUR. DEL 31 DE MAYO DE 1994, DICTADO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADA PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado José María Lezcano, en nombre y representación del señor ROGELIO AGUSTÍN BARUCO YANGÜEZ, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema, recurso de inconstitucionalidad contra el Auto REP. 455-94-JUR de 31 de mayo de 1994, dictado por el Tribunal Electoral, que acumuló su recurso de nulidad con el de RAFAEL AGUILAR, interpuestos contra el Acto de Proclamación de Legisladores en el Circuito 4.1 de la Provincia de Chiriquí, y que fueron rechazados de plano por ser legalmente ineficaces.

Además, el actor pretende que, además de que se declare inconstitucional la citada Resolución, se le ordene al Tribunal Electoral que otorgue al recurrente una curul de las tres existentes en el mencionado Circuito 4.1 de la Provincia de Chiriquí, por violar por omisión el numeral 3° del artículo 141 de la Constitución Nacional.

Dicha contravención ocurrió porque -a juicio del actor- el Tribunal Electoral le otorgó tres -3- curules al Partido Revolucionario Democrático (P.R.D.) en el Circuito Electoral 4.1 de Chiriquí, con 14,080 votos válidos, dejando sin representación a 35,170 electores, de los 49,258 electores que votaron en ese Circuito, es decir, que le concedió las tres curules al P.R.D., que representaba el 28% de los votantes del Circuito, contra el 72% que no votaron por ellos.

Aduce también el recurrente que la misma Resolución impugnada señaló a página 4, final del segundo párrafo, que "sin perjuicio de que la asignación de curules pudiera no serlo en algunas circunstancias", lo cual demuestra -según él- que el Tribunal Electoral está consciente de que las curules del Circuito 4.1 de Chiriquí fueron repartidas en violación del principio de representación proporcional, establecido en la oración final del numeral 3° del artículo 141 del Estatuto Fundamental, que establece que en los Circuitos Electorales que deben elegirse dos o más Legisladores, la elección se hará conforme el sistema de representación proporcional que establezca la Ley.

Admitida la presente demanda, se corrió el traslado de rigor al Ministerio Público, correspondiéndole el turno para opinar sobre el negocio a la Procuradora de la Administración, quien emitió su opinión mediante la Vista N° 407 de 13 de septiembre de 1994, en la que consideró que el Tribunal Electoral no incurrió en la infracción denunciada por el recurrente.

Consideró la Procuradora de la Administración, Suplente, que el actor no

supo interpretar lo que de forma clara establece el Código Electoral, refiriéndose a dicha excerta, porque la norma constitucional remite "al sistema de representación proporcional que establezca la Ley", siendo ésta el Código Electoral.

Que en dicho Código, es el artículo 260 el que desarrolla el método a seguir para la proclamación de dos o más Legisladores en cada Circuito Electoral, aplicable al caso que nos ocupa.

Y así, la Procuradora de la Administración hace un análisis de la situación, concluyendo que el Tribunal Electoral sí hizo homenaje al principio de representación proporcional, contenido en la parte final del numeral 3, del artículo 260 de la Constitución Nacional.

Devuelto el expediente, se fijó el mismo en lista por el término de diez -10- días contados a partir de la última publicación de los Edictos, para que todas las personas interesadas presentaran sus argumentos sobre el caso, el cual no fue utilizado.

Por lo tanto, cumplidas las formalidades legales del caso, se dispone el Pleno a ventilar el fondo del negocio, previas las siguientes consideraciones.

La presente activación constitucional se fundamenta en que el Auto REP. N° 455-94-JUR de 31 de mayo de 1994, rechazó de plano por legalmente ineficaces, los recursos de nulidad propuestos por los Sres. ROGELIO AGUSTÍN BARUCO YANGÜEZ y de RAFAEL BOLÍVAR AGUILAR; dichos recursos de nulidad se impetraron contra el Acto de Proclamación de LORENZO ACOSTA como Legislador del Circuito 4.1 de la Provincia de Chiriquí.

Dicho acto de Proclamación, a juicio del recurrente constitucional, Sr. BARUCO YANGÜEZ, violó el principio de representación proporcional contenido en la última oración del numeral tercero del artículo 141 de la Carta Magna.

El Ministerio Público, al emitir su opinión, consideró que no se infringió dicho principio, porque se cumplió lo normado por el artículo 260 del Código Electoral, que establecía las reglas para la adjudicación de Curules Legislativas en Circuitos que por su población, eran elegibles más de un Legislador.

Empero, advierte esta Corporación de Justicia que la problemática planteada ocurrió en torno a las elecciones generales de 1994, período legislativo anterior al que nos encontramos.

Considerando que el país está dentro de un nuevo período legislativo, dado que en mayo del año pasado se realizaron las elecciones generales para escoger Presidente de la República, Legisladores Nacionales, Alcaldes, Representantes de Corregimientos y Diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la pretensión del recurrente constitucional, cual era que se le adjudicara una de las legislaturas del Circuito 4.1 de la Provincia de Chiriquí, deviene sin objeto, porque el período que hubiera podido disfrutar, de lograr su pretensión, concluyó el 31 de agosto de 1999, día en que terminó el período de cinco -5- años para el que fueron electos los candidatos a Legisladores en las elecciones del 7 de mayo de 1994.

En complemento a lo anterior, el artículo 260 del Código Electoral, esgrimido por la Procuradora de la Administración, Suplente, para considerar que no se violó la Norma Superior, fue adicionado por el artículo 41 de la Ley N° 22 de 1997, y corresponde ahora al artículo 282 del Código Electoral.

Ambas circunstancias determinan la falta de objeto que se ha producido en este caso, razón por la cual se ha constituido el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia, y así ha de declararlo esta Corporación de Justicia.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Sr. JOSÉ MARÍA LEZCANO YANGÜEZ contra el Auto REP. 455-94-JUR de 31 de mayo de 1994, emitido por el Tribunal Electoral, se ha producido el fenómeno jurídico denominado SUSTRACCIÓN DE MATERIA; en consecuencia, SE ORDENA el cese del procedimiento, y el archivo del expediente.

Cópiese, Notifíquese y Archívese

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACION DE AQUILINO QUINTERO, CONTRA LA SENTENCIA N° 50 DE 21 DE JULIO DE 1997, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Roberto Enrique Fuentes presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de inconstitucionalidad a favor del Sr. AQUILINO QUINTERO, contra la sentencia N° 50 de 21 de julio de 1997, dictada por el Juez Tercero del Primer Circuito Penal de Panamá, que lo condenó a la pena de 3 años 6 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período al de la pena principal, luego de cumplida ésta.

Cuenta el actor, que el Juzgado Tercero de Circuito de Panamá, Ramo Penal, abrió causa criminal contra AQUILINO QUINTERO, mediante autos de 25 de julio de 1994 y de 16 de marzo de 1995, por la presunta comisión del delito de Abusos Deshonestos, en perjuicio de sus menores hijas KAREN MAYLIN QUINTERO VILLAMIL y YENNY YESSENIA QUINTERO GONZÁLEZ, procesos éstos que fueron acumulados, y condenándolo mediante la sentencia meritada.

Que el Juzgador primario dejó de aplicar al sindicado el artículo 220 del Código Penal que estaba vigente para el tiempo en que acaecieron los hechos delictivos, hasta el 15 de junio de 1995, para aplicarla, pero modificada por la Ley 27 de 16 de junio de 1995, que entró a regir el 23 de junio de ese año, cuya sanción es más grave.

Antes de la modificación, la norma imponía una pena de prisión de 1 a 3 años, que con la modificación aumentó de 3 a 6 años de prisión.

Por lo tanto, el Juzgado Tercero de Circuito Penal de Panamá dejó de aplicar a AQUILINO QUINTERO el principio jurídico "in dubio pro reo", o "Ley más aplicable al reo", establecido explícitamente por el artículo 13 del Código Penal.

Consideró el actor, que la sentencia N° 50 de 21 de julio de 1997, dictada por el Juez Tercero de Circuito Penal de Panamá, violó los artículos 32-debido proceso y 43- se refiere a la irrectroactividad de las leyes, exceptuando las de orden público e interés social cuando en ellas así se exprese, y la ley más favorable al reo, aun cuando medie sentencia ejecutoriada.

El primero fue violado -a juicio del demandante- de manera directa por

omisión, ya que el fallo impugnado desatendió el principio jurídico, contenido en el artículo 13 del Código Penal, consistente en que si luego de la comisión de un hecho punible se promulga una nueva Ley, y no se hubiere decidido el caso de manera definitiva, se aplicará al sindicado la Ley más favorable.

No se siguió este principio en el caso en estudio, porque el Juzgador aplicó la Ley N° 27 de 16 de junio de 1995, promulgada posteriormente a la comisión de los hechos y desfavorable, en lugar del artículo 220 del Código Penal antes de ser modificado por la antes referida Ley.

En opinión del demandante, el artículo 43 íbidem, fue infringido en concepto de violación directa por omisión, toda vez que el Tribunal de conocimiento aplicó el artículo 220 del Código Penal reformado -con pena mayor-, de forma retroactiva, a un delito cometido con antelación a la promulgación de dicha reforma.

Admitida la demanda, se corrió traslado al Ministerio Público, correspodiéndole al Procurador General de la Nación emitir su opinión sobre el caso, lo cual hizo mediante la Vista N° 22 de 30 de julio de 1999, y en la que consideró lo siguiente.

En cuanto a la presunta violación del artículo 43 de la Constitución, consideró que, aunque la primera querella contra el imputado se formalizó en 1993, la conducta ilícita se inició en 1990; la segunda querella -por el mismo delito- ocurrió lo mismo, pues se formalizó la querella en 1993, siendo que el delito venía cometiéndose desde 1989.

Que el contenido del artículo 13 del Código Penal -si después de cometido un hecho punible se promulga una nueva ley y no se hubiere decidido definitivamente el caso, se aplica al reo la ley más favorable-, referente al concepto y validez de la ley en el tiempo, obliga a examinar el contenido y alcance de la reforma introducida.

Que en el presente caso, no resulta procedente aplicar los efectos retroactivos de sanción reformada -3 a 6 años de prisión-, al no ser considerado favorable para el reo.

Que se estableció que el hecho punible se realizó antes de la modificación del artículo 220 del Código Penal -23 de junio de 1995-; el hecho de que la dictación de la sentencia que resolvió el caso se emitiera en 1997, luego de la modificación del artículo en comento, "no autorizaba al juzgador para aplicar el artículo 220, actualmente vigente", ya que, en atención al artículo 43 Constitucional, esa norma modificada sólo podría aplicarse si fuere favorable al reo, lo que no ocurrió en este caso, ya que la modificación aumentó la sanción penal aplicable, por lo que erró el Juzgador primario al no ubicar la conducta delictiva de AQUILINO QUINTERO MORENO en el artículo 220 del Código Penal, antes de que fuera modificado.

También señaló el Opinador, que para que se declare la inconstitucionalidad de una ley, acuerdo, resolución, etc., es necesario que se quebranten las normas constitucionales "de manera clara, notoria, precisa e indudable, que la violación emerja de manera evidente e incontestable, más allá de todo reparo o duda razonable."

Al aplicar el Juez retroactivamente la disposición legal no favorable al sindicado, y aplicar la norma con la pena aumentada a unos hechos acaecidos cuando su comisión estaba regulada con una penalidad más benigna, se constituye la violación clara a la Norma Fundamental, recién esbozada, y por ello aceptó el cargo de inconstitucionalidad endilgado a la sentencia N° 50 de 21 de julio de 1997.

En cuanto a la presunta violación del artículo 32 íbidem, contentivo del principio del debido proceso, consideró el señor Procurador que el juzgamiento

conforme a los trámites legales" significa que es la ley la que establece los trámites del proceso al que deben ajustarse el juez y las partes, y eso fue lo que hizo el artículo 13 del Código Penal, al fijar el mecanismo utilizable cuando se promulgado una nueva ley, luego de cometido el delito, y no se hubiere resuelto definitivamente.

Entonces, al aplicar el Juez primario retroactivamente el artículo 220 reformado del Código Penal, no siguió el trámite previsto por la ley -artículo 13 del mismo Código-, lo que produjo la infracción del artículo 32 Constitucional.

En cuanto al efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad, si bien el artículo 2564 del Código Judicial estatuye que las sentencias de la Corte en materia de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo, cuando son declarados actos de carácter individual, es posible que las declaraciones de inconstitucionalidad produzcan efectos retroactivos, y para ello, citó fallo de 3 de agosto de 1990, proferido por esta Superioridad.

Por ello, consideró el Procurador General de la Nación que debe declararse la inconstitucionalidad de la sentencia de marras por violar los artículos 44 y 32 de la Carta Magna, y que dicha declaración debe tener efectos retroactivos para que no resulte ilusoria.

Devuelto el expediente a la Corte, se fijó en lista por el término de diez (10) días luego de la última publicación del Edicto, para que el demandante y todas las personas interesadas presentaran argumentos por escrito, el cual fue utilizado por varios abogados, coincidiendo todos en la infracción de las normas constitucionales esgrimidas por el demandante, fueron violadas por la sentencia N° 50 de 21 de julio de 1997, dictada por el Juez Tercero del Primer Circuito Penal de Panamá.

Cumplidas entonces las formalidades de rigor para esta clase de negocio constitucional, le corresponde a esta Corporación de Justicia decidir el asunto, no sin antes externar las siguientes consideraciones.

Al adentrarse al análisis necesario para determinar la procedencia de la esta acción constitucional, advierte el Pleno que en la copia autenticada de la sentencia N° 50 de 21 de julio de 1997 -f. 10, reverso-, dictada por el Juzgado Tercero de Circuito de Panamá, Ramo Penal, contra la cual se interpuso la demanda, se observa el sello de notificación del Licdo. Roberto Fuentes, realizada el día 19 de agosto de 1997, en el que anuncia que apela la decisión.

No consta en el expediente si efectivamente interpuso el recurso de apelación, ni la sentencia que lo decide, y en caso de que la decisión fuera adversa, menos aún consta si el letrado interpuso el recurso de casación, que debía decidirse en la Sala de lo Penal de esta Corporación de Justicia, en caso de ser susceptible del mismo.

Esto demuestra que a éste caso, le es aplicable la jurisprudencia que sobre la admisión de la demanda de inconstitucionalidad ha sentado esta Colegiatura, en el sentido de que es necesario que el demandante haya agotado todos los recurso legales disponibles para que pueda ser viable la acción de inconstitucionalidad.

Para evidenciar lo anterior, transcribimos parcialmente el fallo de 22 de septiembre de 1995, emitido por este Pleno:

> "En consecuencia, el Pleno de la Corte coincide con el criterio vertido por parte del Ministerio Público en el sentido de que el demandante no agotó los medios de impugnación con las cuales contaba para tratar de enervar los actos impetrados de inconstitucional, dado que contra la resolución de 9 de diciembre de 1994 le era dable al recurrente impugnar mediante proceso sumario, el cual inclusive

es susceptible en último caso del recurso extraordinario de casación civil; más sin embargo, esta opción no fue utilizada por el actor.

Se pone de relieve que el Pleno de la Corte actúa como Organismo de Derecho Público, garante de la Constitución y no como Tribunal de Justicia, por lo que previamente a la proposición de la demanda de inconstitucionalidad deben agotarse todos los medios de impugnación que conceda el ordenamiento jurídico en defensa de los derechos de quienes consideren que han sido afectados por una decisión determinada.

Este criterio ha sido sostenido con uniformidad por la jurisprudencia de esta Corporación, aseverando que solamente procede la demanda de inconstitucionalidad cuando se hayan agotado todos los recurso y acciones que periten anular el acto cuya declaratoria de inconstitucionalidad se pretende."

La pretermisión del actor, en este sentido, es evidente y no le deja otra alternativa al Pleno, sino declarar la no viabilidad del negocio, y así ha de declararse.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el Licdo. Roberto Enrique Fuentes en representación del Sr. AQUILINO QUINTERO, contra la sentencia N° 50 de 21 de julio de 1997, dictada por el Juez Tercero de Circuito de Panamá, Ramo Penal.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACION DE CARLOS ABDIEL ORTEGA, CONTRA EL ARTICULO 2 DE LA LEY 53 DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del Proceso Penal seguido a CARLOS ABDIEL ORTEGA por la supuesta comisión del delito de Posesión de Arma de Fuego a la que se le ha borrado el número de registro, la Licenciada AIDA JURADO ZAMORA, en su calidad de apoderada judicial del prenombrado, ha elevado Advertencia de Inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995.

En consecuencia, la Juez Décimo segunda de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, María Eugenia López, quien conoce de dicho proceso penal, remitió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la presente Advertencia, mediante Oficio N° 1652 de 18 de septiembre de 1998. (F. 9)

La Advertencia de Inconstitucionalidad fue admitida y en vista de que se han cumplido todos los trámites procesales correspondientes, procede la Corte a decidir el fondo del negocio.

**LA PRETENSIÓN**

**La Licenciada AIDA JURADO ZAMORA sostiene que el artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995 es inconstitucional por ser violatorio del artículo 31 de la Constitución. El artículo 2 de la mencionada ley, establece lo siguiente:**

> **"ARTÍCULO 2: El que posea arma de fuego, a la que le ha sido borrado o alterado el número de registro que le corresponde, será sancionado con pena de 2 a 3 años de prisión."**

**Como fundamento a su petición, la recurrente se sustenta en los siguientes hechos:**

**Que el día 7 de noviembre de 1997, se inicia proceso penal contra CARLOS ABDIEL ORTEGA, Por el supuesto delito de Posesión de arma de fuego a la que le ha sido borrado el número de registro, concluyendo la fase sumarial con la Vista Fiscal de Ampliación N°. 58 de 30 de junio de 1998, proferida por la Fiscalía Octava del Circuito, la cual recomienda abrir causa criminal contra su representado como presunto infractor de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995.**

**Que la antes referida Ley, tipifica y sanciona el delito de posesión y comercio de armas prohibidas, en los artículos 1 al 4; e igualmente modifica y adiciona otros artículos del Código Penal y Judicial.**

**Que los artículos del 1 al 4 de la misma Ley, incrimina conductas relacionadas con la posesión y comercio de armas prohibidas, sin que las mismas hayan sido adecuadas al Código Penal, clasificado, tradicionalmente, bajo el denominador común del bien jurídico que se tutela.**

**Que el artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, tipifica el delito de posesión de arma de fuego a la que le ha sido borrado el número de registro, sin que se precise cuál es el bien jurídico que la norma protege, vulnerando el principio de legalidad consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política, el cual constituye la cláusula de salvaguarda de los intereses primordiales del individuo en su relación con el Estado.**

**Finalmente, señala la advirtente que el artículo 2 de la mencionada Ley "es una conducta inocua, sin idoneidad lesiva, lo cual arriesga los principios de certeza y seguridad jurídica que emerge del principio de legalidad constitucionalmente consagrado."**

**DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA INFRINGIDA Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN**

**Según la demandante, el artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995 infringe el artículo 31 de la Constitución Nacional, de manera directa por omisión, toda vez que siendo la norma clara en su contenido el legislador omitió su aplicación:**

**El antes mencionado artículo 31 es del siguiente tenor literal:**

> **"ARTÍCULO 31: Sólo serán penados los hechos declarados punible por ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado."**

**En cuanto al concepto de la infracción de la norma constitucional transcrita, la recurrente señala que la misma recoge el principio de legalidad, que constituye una exigencia básica de todo Estado de Derecho, ya que por razones de seguridad jurídica, la Ley penal debe ser ante todo una garantía para el ciudadano, quiere ello decir, que toda persona tiene derecho a saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, así como también la consecuencia jurídica en el caso de que se realice una conducta penalmente prohibida.**

Manifiesta también, que el principio de legalidad abarca una serie de garantías o derechos fundamentales y otras exigencias rectoras del Derecho Penal, tales como: garantía criminal (nulum crimen sine lege), garantía penal (nulla poena sine lege), garantía jurisdiccional (nadie puede ser castigado en virtud de un juicio formal ante tribunal competente en el que se respeten las garantías establecidas por la ley), garantía de ejecución (el cumplimiento de la pena debe verificarse en la forma exactamente prevista por la ley).

Igualmente apunta la advirtente, que dichos planteamientos permiten visualizar cómo el tipo penal descrito en el artículo 2 de la ley 53 de 1995, excede los límites del poder del Estado, al incriminar una conducta en orfandad de bien jurídico, situación esta que -a criterio de la recurrente- da lugar a que la conducta punible quede al arbitrio del juez cuando proceda a dar contenido al tipo penal.

Finalmente, señala que la inexistencia del bien jurídico lesiona el principio de legalidad por cuanto que al particular le interesa que el Estado fije en el concepto de la antijuridicidad cuáles son los bienes jurídicos tutelados, porque tan solo así podría comprender y entender la magnitud jurídica de sus acciones y dentro de marcos estrictamente legales.

## CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, a quien se le dio traslado del asunto por el término de diez (10) días, el 28 de septiembre de 1998, a través de su Vista N° 32 de 14 de octubre de 1998, visible de fojas 13 a 19 del cuadernillo, conceptúa que no se ha producido la infracción al principio constitucional de legalidad en materia penal que el artículo 31 de la Constitución Política consagra, para lo cual señala los siguientes aspectos jurídicos:

Señala el máximo exponente del Ministerio Público que el principio de legalidad en materia penal, se desprende del aforismo nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, expresión que en latín significa por una parte, según el jurista César Quintero "que sólo pueden considerarse delictivos aquellos actos previamente definidos por la ley como tales, y por la otra, que a nadie puede serle aplicada una pena que no haya sido previamente establecida por medio de la ley".

Explica el señor Procurador General de la Nación que de acuerdo a lo anterior, ningún juez puede declarar la existencia de un delito, si la conducta incriminada -que se juzga- no aparece previa a la realización de esa conducta, descrita como tal en la ley penal. Es una prohibición constitucional impuesta como limitación por el propio Estado para garantizar los principios de libertad, de justicia y de seguridad jurídica, evitando además, el eventual abuso de poder en el ejercicio de la función penal del Estado.

En este sentido, el señor Procurador advierte que el tipo penal descrito en el Artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, cobija dos conductas antijurídicas y culpables: Poseer arma de fuego a la que le ha sido borrado el número de registro que le corresponde, y poseer arma de fuego a la que le ha sido alterado el número de registro que le corresponde. Conductas estas a las cuales les ha sido asignada una sanción que oscila entre 2 a 3 años de prisión.

Finalmente, conceptúa el señor Procurador General de la Nación que no existe vulneración del artículo 31 de la Constitución Política, pues, contrario sería si el juzgador sancionara como delito una conducta que no estuviera previamente tipificada a través de una ley, pero esta no es la situación que acontece en el presente caso.

## CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA CORTE

Una vez expuestos los argumentos de la demandante, y el concepto vertido por el Procurador General de la Nación, entra el pleno a considerar la pretensión

que se formula en la Presente Advertencia.

La Corte observa que la norma legal que se advierte de inconstitucional en el caso que nos ocupa, es el artículo 2 de la ley 53 de 12 de diciembre de 1995, que se refiere al delito de posesión de arma de fuego a la que le ha sido borrado el número de registro.

Dice la demandante que la mencionada disposición viola el principio de legalidad consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política de la República de Panamá, porque el tipo penal que se describe en el artículo 2 de la ley 53 de 1995, excede los límites del poder del Estado, al incriminar una conducta en orfandad de bien jurídico, situación que da lugar a que la conducta quede al arbitrio del juez cuando procede a dar contenido al tipo penal.

Sobre el particular, podemos señalar que el Principio de Legalidad tiene su origen institucional en la Constitución y que constituye una auténtica garantía de las libertades individuales. Representa, además, una verdadera seguridad jurídica, en el sentido de que a nadie se le puede sorprender con la imputación de un hecho delictuoso, si este no ha sido previamente declarado así por la ley e imponerse pena o medida de seguridad que no haya sido establecida previamente por la ley.

Ahora bien, estima el Pleno de la Corte que por ningún lado se presenta el concepto de infracción que desarrolla la demandante sobre el artículo 31 de la Constitución y el contenido del artículo 2 de la ley 53 de 1995, ya que a diferencia de lo que señala, éste cumple plenamente con los requisitos de la norma constitucional en comento, puesto que describe una conducta, así como la sanción aplicable a quien viole dicho precepto legal.

En este sentido, esta Colegiatura comparte el criterio plasmado por el señor Procurador General de la Nación cuando señala que no se puede alegar violación del principio de legalidad por el solo hecho de que una disposición legal no especifique el bien jurídico que se tutela, pues esta posición no se ajusta a los parámetros que contiene el artículo 31 de la Constitución ya que si bien es cierto que el Código Penal clasifica los delitos en cuanto al bien jurídico tutelado, y el tema que nos ocupa no está inserto en este Código sino que se trata de una ley especial que regula, entre otros casos, el delito de posesión de arma de fuego con número de registro alterado o borrado con una sanción de 2 a 3 años de prisión, no por ello debemos suponer que no se trata de un delito tipificado previamente por la ley.

A juicio de la Corte, la violación de la norma constitucional demandada se produciría en el supuesto de que al sindicado se le sancione por un hecho que no haya sido definido como delito por ley alguna, o si se le impusiere una pena o sanción que la ley no haya señalado para un determinado delito.

En conclusión, estima Pleno que no existe contradicción entre el artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995 y el artículo 31 de la Constitución Política.

Por último, y en atención a lo que dispone el artículo 2557 del Código Judicial, es preciso señalar que esta Corporación Judicial tampoco encuentra ninguna otra disposición constitucional distinta a la mencionada por la actora, con la cual esté en contradicción el artículo 2 de la Ley 53 de 1995, cuya inconstitucionalidad se advierte.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese En La Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARISELA DONADO DE PECCHIO, PERSONERA QUINTA DEL DISTRITO DE PANAMA, CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N° 201 DE 30 DE AGOSTO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada MARISELA DONADO DE PECCHIO en su condición de Personera Quinta Municipal y el Licenciado LUIS ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ en su condición de Fiscal Segundo de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, en ese orden y de manera separada, han presentado ante el Pleno de la Corte advertencia de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N° 201 de 30 de agosto de 1999, expedido por el entonces Presidente de la República Doctor Ernesto Pérez Balladares con la participación del Ministro de Gobierno y Justicia, mediante el cual se otorgó indulto a favor de la Licenciada CARMEN ROSA ROBLES dentro del proceso penal seguido en su contra por un delito Contra la Administración Pública y del señor TOMÁS CABAL HART por un delito Contra El Honor.

Apuntan los advirtentes que el Decreto N° 201 de 30 de agosto de 1999 es inconstitucional ya que en su artículo primero, otorga indulto a ciudadanos investigados, sindicados procesados o condenados conforme a supuestas conductas transgresoras de la Ley por la comisión de delitos contra el Honor, la Integridad Personal, la Fe Pública, el Patrimonio, la Administración Pública; entre otros, es decir por una serie de delitos que no constituyen delitos políticos. No obstante, consideran que dicho decreto infringe en concepto de violación directa el artículo 179, numeral 12 de la Constitución Política, que a la letra expresa lo siguiente:

> "ARTÍCULO 179: Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro Respectivo:
>
> ...
> 12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos en delitos comunes."

De La norma antes transcrita, señalan los recurrentes se desprende claramente que el Presidente de la República tiene la atribución con la participación del Ministro Respectivo de decretar indultos sólo por delitos políticos, sin embargo, en el caso que nos ocupa se ha concedido tal beneficio a personas que han cometido delitos comunes; es por ello que al ampliar el alcance de la norma a estos delitos trae como consecuencia en este caso, la inconstitucionalidad del Decreto N° 201 de 30 de agosto de 1999.

Ahora bien, tomando en consideración que en las presentes Advertencias de Inconstitucionalidad se formulan las mismas pretensiones, el Magistrado Sustanciador administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESOLVIÓ, por razones de economía procesal, ACUMULARLAS, para fallarlas en una sola sentencia.

Una vez admitidas tales advertencias de inconstitucionalidad, se corrió traslado del asunto, por el término de diez (10) días a la señora Procuradora de

la Administración, quien, en las dos oportunidades, mediante Vista N° 481 y 482 de 27 de septiembre de 1999, manifestó que las advertencias de inconstitucionalidad planteadas no pueden cumplir su cometido, ya que la actual Presidenta de la República expidió un nuevo Decreto Ejecutivo, concretamente el número 213 de 3 de septiembre de 1999, que declara inexistente, revoca en todas sus partes y deja sin efectos el Decreto Ejecutivo número 201 de 30 de agosto de 1999, por medio del cual se indulta, entre otros, al señor TOMÁS CABAL HART y a la Licenciada CARMEN ROSA ROBLES. Ello, explica la Procuradora de la Administración trae como consecuencia que se haya producido el fenómeno jurídico denominado Sustracción de Materia, ya que el decreto acusado de inconstitucional fue derogado por otro Decreto Ejecutivo, por tanto, desaparece el objeto litigioso.

En este sentido, nos permitimos citar el fallo de 27 de septiembre de 1996, dictado por el Pleno de la Corte, en el cual se advertía la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995, y donde la Procuradora de la Administración emitió su opinión, en los siguientes términos:

> "... en la mencionada advertencia de inconstitucionalidad el funcionario que administra justicia, no se encuentra ante una disposición legal o reglamentaria por aplicar a un caso concreto, por la sencilla razón que el Decreto N° 476 ya mencionado, no encaja dentro de esa categoría.
>
> Concluye, pues, que la misma no es viable, por no cumplir con lo señalado en las normas constitucionales que regulan dicha figura jurídica."

Sobre este punto, La Constitución Política en su artículo 203 establece que la advertencia de inconstitucionalidad sólo es procedente contra normas legales o reglamentarias, es decir actos con fuerza de ley, aplicables de manera general. Por tanto, no son susceptibles de advertencia los actos de autoridad que afectan únicamente a una o varias personas.

Es oportuno citar, para estos efectos, el fallo del 1 de abril de 1998 dictado por el Pleno de la Corte, en el cual se ha establecido que el Decreto Ejecutivo de Indulto "no tiene el carácter de una disposición legal o reglamentaria, sino el de un acto individualizado".

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en repetidas ocasiones, que, la advertencia de inconstitucionalidad se limita única y exclusivamente a impugnar las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al caso bajo estudio y que las consultas sobre la supuesta inconstitucionalidad de la norma legal o reglamentaria deben formularse antes de que tal disposición sea aplicable, siendo extemporánea la advertencia en el evento de que la referida norma haya sido objeto de aplicación por parte del juzgador.

En el presente caso, consta de fojas 1985 a 1987 del expediente penal, el Auto Vario N°380 del 31 de agosto de 1999, por medio del cual el Juzgado Segundo Municipal Penal de Panamá se limitó a declarar extinguida la acción penal y a ordenar el archivo del expediente, tomando como base el indulto decretado a favor de la Licenciada CARMEN ROSA ROBLES por el delito Contra La Administración Pública, lo que ubica su actividad jurisdiccional en la etapa procesal de ejecución de la medida; decisión ésta que era susceptible de un recurso de apelación.

Al analizar la situación planteada, estima el Pleno que el Decreto impugnado ha sido aplicado por el Juzgador en la etapa correspondiente, por lo que ante tal circunstancia, resulta notoriamente improcedente la acción constitucional propuesta, dado que en Jurisprudencia constante mantenida por esta Corporación de Justicia, se ha indicado la improcedencia de la advertencia cuando el acto que ha de aplicarse en la controversia, ya ha sido aplicado en la instancia correspondiente.

En cuanto a la infracción del artículo 179, numeral 12 de la Constitución Política, que se sostiene en las advertencias de inconstitucionalidad acumuladas y cuyo texto ya fue transcrito anteriormente, podemos señalar que esa potestad que dicho artículo le atribuye al Presidente de la República al dictar Decretos Ejecutivos, en este caso, al dictar el Decreto de Indulto N°201 de 30 de agosto de 1999, constituye el único mecanismo para cumplir dicho cometido y es la vía que la propia Constitución le propone.

Finalmente, el Pleno reitera, que al no ser el Decreto Ejecutivo mediante el cual se decreta el indulto una norma o disposición de rango legal o reglamentaria, sino, repetimos, el de un acto de disposición individualizado por mandato constitucional, no es susceptible de ser advertida su posible inconstitucionalidad.

Por todas las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la Advertencia de Inconstitucionalidad formuladas por la Personera Quinta Municipal y el Fiscal Segundo de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, contra el Decreto Ejecutivo N° 201 de 30 de agosto de 1999, dentro de los procesos penales seguido a los señores TOMÁS CABAL HART Y CARMEN ROSA ROBLES.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA SEÑORA FLORA DE ORDINOLA, CONTRA LA RESOLUCION N° 88-7-5 DE 14 DE JULIO DE 1988, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Arosemena y Arosemena, en nombre y representación de la Sra. FLORA DE ORDINOLA, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema, demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 88-7-5 de 14 de julio de 1988, emitida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, que la destituyó del cargo de Secretaria Parlamentaria.

Los hechos que fundamentan la demanda constitucional, revelan que la demandante constitucional fue nombrada como Secretaria Ejecutiva a partir del 24 de junio de 1985, mediante la Resolución N° 84-1-27, y ascendida a la posición de Secretaria Parlamentaria, mediante Resolución N° 87-1-26 de 5 de febrero de 1987.

Que mediante la Resolución demandada, la Sra. FLORA DE ORDINOLA fue destituida de dicho cargo sin causa legalmente justificada durante el período en que disfrutaba de sus vacaciones, y con efecto retroactivo, ya que la Resolución que la contiene fue calendada 14 de julio de 1988, pero se le dio efecto a partir del 8 de julio de 1988.

Que dicha destitución se hizo en base a la Resolución N° 10 de 26 de marzo de 1988, dictada por el Consejo de Gabinete, "Por la cual se dictan políticas y

acciones de probidad administrativa", que no es aplicable a la Sra. DE ORDINOLA por razón de la autonomía administrativa que goza la Universidad Tecnológica de Panamá, y porque la suscrita no desempeñaba dos empleos ni recibía dos sueldos como funcionaria, sino un solo sueldo y una jubilación, producto de sus cuotas acumuladas, por lo que no tenía impedimento legal alguno para trabajar estando jubilada.

Consideró la actora, que se violaron los artículos 60, 75 y 298 de la Constitución Nacional.

El artículo 60 -trabajo como derecho y deber del individuo, y la obligación del Estado de elaborar políticas económicas para promover el pleno empleo y asegurar a todos los trabajadores las condiciones necesarias para tener una vida decorosa- fue infringido por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá a través de la Resolución impugnada, de forma directa por omisión, al limitar o coartar el derecho de trabajar que tiene la Sra. DE ORDINOLA, estableciendo una causal no contenida en la norma constitucional en estudio, ni en ninguna otra.

El artículo 75 ibid. -establece como mínimos los derechos y garantías establecidos en el Capítulo 3° del Título III, a favor de los trabajadores- fue vulnerado por la Resolución atacada de inconstitucional, ya que, al violarse el artículo 60 de la Carta Política, produjo la violación de esta norma, de manera directa por omisión.

El artículo 298 de la misma Excerta -dice principalmente, que los servidores públicos no pueden tener dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo excepciones legales, ni trabajar puestos con jornadas simultáneas- se violó en concepto de aplicación indebida, ya que se aplicó a un supuesto diferente, ya que la Sra. DE ORDINOLA como empleada pública, no tenía dos sueldos diferentes, sino que como jubilada no recibe su emolumento como funcionaria pública, sino en concepto de cotización de cuotas del Seguro Social, por lo que sólo estaba percibiendo un solo salario como funcionaria pública.

Se corrió el traslado de rigor al Ministerio Público, correspondiéndole en esta ocasión la emisión de su criterio al señor Procurador General de la Nación, lo cual cumplió mediante su Vista N° 31 de 25 de octubre de 1989, y en la que en síntesis, solicitó que se declare que la Resolución de marras no violó ninguna de las normas constitucionales aducidas; fundó dicha petición, en las siguientes razones.

El artículo 60 constitucional no fue infringido por la Resolución emitida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, toda vez que éste artículo es de carácter general, y sólo establece las bases filosóficas del Estado panameño en lo que respecta al Derecho del Trabajo.

Además, la resolución de marras no niega el derecho al trabajo, de la demandante; tampoco releva al Estado del deber de elaborar políticas económicas para garantizar el pleno empleo, ni lo exonera de la obligación de asegurarle al trabajador las condiciones necesarias de una existencia decorosa.

En cuanto a la presunta violación del artículo 75 ibidem, consideró el representante del Ministerio Público que "En principio, el Artículo 75 de la Constitución Nacional es una norma de carácter tendencial o programática", que garantiza que los derechos y garantías allí contenidos se considera mínimos a favor de los trabajadores; entonces, por ser una norma de carácter general no es posible su vulneración, ya que está dirigida no a la colectividad, sino al Legislador, porque contiene un mandato que fija los parámetros dentro de los que debe desplegar -el Legislador- su actividad legislativa, razón por la que no puede alegarse su violación.

Y en cuanto a la presunta violación del artículo 298 de la Excerta Fundamental, consideró el Funcionario Opinador que "no alcanza a comprender cómo, de qué manera se suscita la pretendida violación del Artículo 298 de la

Constitución.

La resolución impugnada, en base a lo normado por la Resolución N° 20 de 26 de marzo de 1988 "por la cual se adoptan políticas y acciones de probidad administrativa" aprobada por el Consejo de Gabinete, y que establece en su artículo 1° que "Las personas con derecho a la jubilación o pensión de vejez o invalidez o que tengan ya reconocido tal derecho, deberán abandonar sus posiciones en las estructuras de personal en las entidades públicas, dejando vacante el que ocupen", tomando en cuenta que la Sra. FLORA DE ORDINOLA tiene reconocido su derecho a jubilación especial, y que laboraba en la Universidad Tecnológica de Panamá como Secretaria Parlamentaria, declaró insubsistente dicho nombramiento.

Al contrario, la medida adoptada pretende -a juicio del Procurador- acatar la medida de probidad administrativa venida del Consejo de Gabinete, y no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en la norma en estudio.

Por ello, consideró el Procurador General de la Nación que la Resolución emitida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá no infringe la Constitución Nacional.

Devuelto el expediente a esta Superioridad, se fijó en lista por el término de diez -10- días contados a partir de la última publicación de los Edictos, para que los interesados interpusieran los argumentos que a bien tuvieran, el cual no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Le corresponde ahora al Pleno el estudio de fondo del asunto, no sin antes externar las siguientes consideraciones.

La atenta lectura del libelo de demanda constitucional, así como del expediente, revelan que la Sra. FLORA DE ORDINOLA interpuso demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 88-7-5 de 14 de julio de 1988 dictada por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, que la destituyó de su cargo de "Secretaria Parlamentaria", basándose en que no percibía dos salarios del Estado, ni desempeñó cargos con jornadas simultáneas de trabajo, razón por la que violó los artículos 60, 75 y 298 de la Carta Magna.

Infiere el Pleno que la presente demanda fue interpuesta sin agotar los medios impugnativos que tenía la demandante constitucional a su alcance, toda vez que en este proceso administrativo, cabía interponer el recurso de reconsideración contra el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá; de serle contraria la decisión, todavía le cabía la activación de la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante la interposición del recurso de plena jurisdicción.

La abundante jurisprudencia de esta Colegiatura ha establecido que para la viabilidad de la acción, recurso o demanda de inconstitucionalidad, es menester el agotamiento de todos los recursos legales disponibles, dado que en éstos casos, la Corte Suprema no es un Tribunal de Justicia, sino que se constituye en un Ente de Derecho Público con la finalidad de la guarda o defensa de la Constitución, sin que esto lo convierta en un Tribunal de instancia.

Además, la presente demanda se interpuso contra una Resolución emitida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, en virtud del cumplimiento de una Resolución del Consejo de Gabinete, "Por la cual se adoptan políticas y acciones de probidad administrativa", lo cual revela que el presente negocio no alcanza rango constitucional.

Por todo lo expuesto este Pleno arriba al criterio de que no es viable este negocio constitucional.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la demanda

de inconstitucionalidad promovida por la Sra. FLORA DE ORDINOLA contra la Resolución N° 88-7-5 de 14 de julio de 1988, dictada por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Cópiese, Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS SOLIS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR JUAN RAMON POLL, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMPAÑIA GOLY, S. A. Y EN CONTRA DE LA RESOLUCION DE 10 DE AGOSTO DE 1993, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Solís, Endara, Delgado y Guevara, en representación de la Sociedad COMPAÑÍA GOLY, S. A., presentó demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia de 10 de agosto de 1993, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral por despido injustificado incoado por la Sra. AGAPITA HERNÁNDEZ DE LAINO vs. COMPAÑÍA GOLY, S. A.

La resolución impugnada mediante esta demanda, revocó la sentencia PJ-6 de 27 de abril de 1992, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, considerando el despido injustificado, y condenando a la empresa al pago de 46 semanas de indemnización -3 semanas del período anterior a la vigencia del Código de Trabajo actual y 43 semanas correspondientes a la vigencia del actual Código-, pagaderos al promedio de salario semanal calculado en B/.129.67, y condenó al pago de salarios caídos desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación.

La demandante constitucional fundó su demanda, básicamente, en los siguientes hechos.

Que la demandante laboral, AGAPITA DE LAINO, trabajaba para COMPAÑÍA GOLY, S. A. la cual, mediante carta de 22 de marzo de 1991, le comunicó su despido, fundándose para ello en que desobedeció órdenes, e incurrió en faltas de probidad y honradez; la base legal utilizada para ello, fueron los numerales 5, 10 y 14 del literal A, del artículo 213 del Código de Trabajo.

Luego de presentada la demanda por despido injustificado, la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 dictó la sentencia de primer grado, que declaró justificado el despido por parte de la demandada, y la absolvió de las pretensiones de la demandante, sentencia que fue apelada y resuelta por el Tribunal Superior de Trabajo mediante la sentencia objeto de este negocio.

El demandante constitucional consideró infringidos los artículos 32, 70 y 17 de la Carta Fundamental.

El artículo 32 fue violado -a su juicio- por la sentencia de segundo grado, porque resolvió la causa discrecionalmente, pretermitiendo el examen de las pruebas adjuntadas legalmente al proceso y que tenía la obligación de contemplar,

entre ellas las testimoniales; consideró que, por no existir inmediación probatoria en segunda instancia, el ad-quem debió reforzar el análisis de las pruebas incorporadas en primera instancia.

Por ello, no cumplió la sentencia de marras el deber legal de motivar la decisión, lo que delimitó el poder de decisión del Tribunal para resolver en derecho, y por ello violó el principio del debido proceso contenido en el artículo 32 Constitucional.

Por su parte, el artículo 70 de la misma Excerta -funda la estabilidad del trabajador así como la justa causa para su despido, sus excepciones e indemnización- fue contravenido por la sentencia del ad-quem, toda vez que, además de violar el debido proceso por no motivar correctamente la sentencia impugnada, vulneró el derecho del empleador de efectuar un despido por justa causa, según las formalidades legales, infringiendo de manera indirecta éste artículo.

Al motivar de manera deficiente su fallo, el Tribunal Superior de Trabajo no confrontó la prueba presentada al hecho objeto de dicha prueba, arribando a una conclusión contraria a la evidencia probatoria, y negando de paso, el derecho del empleador de despedir justificadamente a la demandante.

En otro sentido, el artículo 17 de la Carta Fundamental-deber de las autoridades nacionales de proteger la vida y bienes de los asociados nacionales y extranjeros bajo su jurisdicción, así como asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley- fue violado según la actora, por cuanto que, sin perjuicio de su naturaleza programática de dicha norma, el fallo impugnado, en vez de asegurar los derechos consagrados por la Constitución y la ley a favor del demandante, violó el principio del debido proceso y el derecho de despedir conforme a la ley, contenidos en los artículos 32 y 70 de la Constitución Nacional.

Luego de admitida la demanda, se corrió traslado al Ministerio Público para que emitiera el respectivo concepto, correspondiéndole el turno al entonces Procurador General de la Nación emitir la Vista N° 62 de 29 de diciembre de 1993.

En la misma, consideró que la esencia de esta demanda es la motivación indebida de la sentencia.

Consideró que "El deber de motivar la sentencia constituye, en efecto, una garantía constitucional."

Que, pese a que la parte motiva de la sentencia atacada está conformada de razonamientos, éstos son irregulares porque no armonizan con las pruebas que debieron motivar realmente la sentencia, no tomando en cuenta varias pruebas contenidas en el expediente, de tal modo que al referirse al elemento de prueba, se le vinculara con el hecho que se pretendía probar, considerando violado el principio del debido proceso, contenido en el artículo 32 Constitucional.

En otro orden de cosas, opinó el señor Procurador que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo no infringió el artículo 70 de la Carta Magna establece el principio de estabilidad laboral y la necesidad de causal de justificación para el despido, así como la posibilidad de despido justificado o no, siempre que medie indemnización, cuyo cálculo le dejó a la ley.

Conceptuó que no se violó dicha norma, porque si bien la motivación de la sentencia determina el contenido dispositivo del fallo y el encuadramiento jurídico de la ley aplicable, la sentencia inconstitucional por deficiente motivación, no se compadece con los errores jurídicos de juicio en que pueda incurrir el juzgador en sus razonamientos de fondo para fundar el fallo, aunque sean erróneos.

Por ello cree que determinar el fundamento legal de la parte resolutiva del

fallo in examine "apartaría a la Corte del objeto de este recurso de inconstitucionalidad", concluyendo que el mismo no conculcó el artículo 70 íbidem.

Finalmente, en cuanto a la infracción del artículo 17 de la Excerta Fundamental, estimó el Opinador que el fallo impugnado no pudo violar esta norma, ya que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha dictaminado que la misma es de naturaleza programática, y que por no contener derechos subjetivos susceptibles de ser infringidos, no es susceptible de ser violado; que excepcionalmente, puede ser transgredida cuando incide con otras normas de igual jerarquía, que sí contengan esos derechos.

Por lo tanto, concluyó el Procurador General de la Nación que el fallo proferido por el Tribunal Superior de Trabajo sí vulneró el artículo 32 de la Constitución Nacional, y así solicitó que se declarara.

Luego de emitida la Vista, se fijó el expediente en lista por el término de diez (10) días luego de la última publicación de los Edictos, para la presentación de argumentos de parte de los interesados, oportunidad aprovechada por la demandante.

Pues bien, luego de cumplidas las formalidades de este tipo de negocio, corresponde entonces a esta Corporación de Justicia resolver el fondo de la controversia, previas las siguientes consideraciones.

Advierte este Pleno que la esencia de la presente acción, estriba -a juicio de la demandante constitucional- en la omisión por parte del Tribunal Superior de Trabajo de la valoración de las declaraciones de los testigos del "incidente de diciembre", que sí fueron valorados por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, y lo indujo -al ad-quem- a una decisión contraria a la de dicho Tribunal.

Esa pretermisión produjo a juicio del representante de COMPAÑÍA GOLY, S. A. la violación del principio del debido proceso, que incluye como parte del mismo, la correcta motivación de la sentencia, criterio éste compartido por el Procurador General de la Nación, al considerar que el deber de motivar una sentencia constituye una garantía constitucional.

Dicha infracción produjo, de paso, la violación del principio de excepción a la estabilidad laboral -contenido en el artículo 70 Constitucional- atinente a la regulación legal del despido justificado, al no permitir a COMPAÑÍA GOLY, S. A. el despido de la Sra. AGAPITA DE LAÍNO, en virtud de la deficiencia de la sentencia en estudio; y, de igual manera engendró la violación del artículo 17 ibid, al incumplirse el deber de las autoridades, de proteger en su vida, honra y bienes, a los nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional.

No coincide el criterio de esta Corporación de Justicia con los ya vertidos por el accionante, por las razones que se externan a continuación.

Adujo el demandante que el Tribunal omitió el examen de las pruebas introducidas al proceso, y que estaba en obligación de examinar; que omitió el análisis probatorio del incidente de diciembre, suceso clave -a su juicio- para la decisión de fondo; que las declaraciones testimoniales fueron ignoradas por la sentencia, por lo cual se incumplió el deber de motivar el fallo impugnado.

Estas consideraciones demuestran con claridad meridiana que el presente negocio no posee rango constitucional.

Ello es así, por cuanto que el contenido de los cargos contra la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo revelan una inconformidad con el ejercicio probatorio realizado por dicho Tribunal, por considerar la omisión de su parte, de considerar varias declaraciones que según la actora, sí consideró la Junta de Conciliación y Decisión N° 6.

Lo que en el fondo pretende el petente, es que el Pleno corrija la valoración probatoria que le perjudica, convirtiendo este negocio constitucional en una tercera instancia, lo cual es ajeno a la naturaleza de la demanda de inconstitucionalidad, que pretende la defensa objetiva de la Carta Magna.

La abundante jurisprudencia producida por este Pleno, ha determinado que la demanda de inconstitucionalidad no puede ser utilizada por los litigantes para enmendar los errores valorativos en que, a su juicio, incurren los Juzgadores, convirtiendo esta institución instrumental constitucional en un recurso de instancia, lo cual no es posible jurídicamente.

Por lo tanto, no prospera la pretensión del demandante, y sólo le queda a esta Corporación de Justicia declarar la no viabilidad de la presente demanda de inconstitucionalidad.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad propuesta por la Sociedad COMPAÑÍA GOLY, S. A. contra la sentencia de 10 de agosto de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO CARLOS GARCIA MARTIN CONTRA EL PARRAFO O INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 1° DE LA LEY 28 DE 12 DE MARZO DE 1974, EL DECRETO EJECUTIVO N° 37 DE 1974 Y EL DECRETO EJECUTIVO N° 7 DE 10 DE ENERO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro del Proceso Sumario de Lanzamiento por Expiración del Término del Contrato Convencional de Arrendamiento seguido al Licenciado Carlos A. García M., éste actuando en su propio nombre y representación, presentó ante el Juzgado Quinto de Circuito de Panamá, Ramo Civil una Advertencia de Inconstitucionalidad contra el párrafo segundo del artículo 1 de la ley 28 de 12 de marzo de 1974, artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 37 de 15 de mayo de 1974 y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 7 de 10 de enero de 1995.

En consecuencia, el Juez Quinto de Circuito de Panamá Licenciado Rogelio G. Gálvez F., quien conoce de dicho proceso, remitió al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la presente Advertencia , mediante Oficio No. 1714 de 12 de noviembre de 1996.

La Advertencia de Inconstitucionalidad fue admitida y en vista de que se han cumplido todos los trámites procesales correspondientes, procede la Corte a decidir el fondo del negocio.

NORMA O ACTO ACUSADOS DE INCONSTITUCIONALES

En el escrito de Advertencia de Inconstitucionalidad se impugna el artículo 1 párrafo segundo de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974, el artículo 1 del Decreto

Ejecutivo N° 37 de 15 de mayo de 1974 y el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 7 de 10 de enero de 1995 respectivamente, por considerar que estas disposiciones legales son violatorias de la Constitución y cuyos textos transcribimos a continuación:

A) ARTÍCULO 1 (PÁRRAFO SEGUNDO) DE LA LEY 28 DE 12 DE MARZO DE 1974:

ARTÍCULO 1: El artículo 1 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 quedará así:

Es de orden público el arrendamiento de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes.

Salvo lo dispuesto en los artículos 4,5,6,7,8.10,13,16,19,20,65,66 y 68, el Órgano Ejecutivo podrá excluir del ámbito de aplicación de esta Ley, por medio de Decreto y en base a tramos de arrendamientos de bienes inmuebles que se regirán por la libre contratación."

B) ARTÍCULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 37 DE 15 DE MAYO DE 1974:

"ARTÍCULO 1: Excluir del ámbito de aplicación de la Ley N°93 de 4 de octubre de 1973, tal como quedó modificada por la Ley 28 de 12 de marzo de 1974;

1. Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para habitación, cuyo canon de arrendamiento sea superior a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00) mensuales.

2. Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales y docentes, cuyo canon de arrendamiento sea superior a la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00) mensuales;

3. Los contratos de arrendamientos de habitaciones amuebladas en bienes inmuebles particulares destinados a esta actividad en forma permanente u ocasional, siempre que el lapso de ocupación no sea mayor de tres (3) meses."

C) ARTÍCULO 1 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 7 DE 10 DE ENERO DE 1995:

ARTÍCULO 1: Excluir del ámbito de aplicación de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, tal como quedó modificado por la Ley 28 de 12 de marzo de 1974; salvo lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 65, 66 y 68, el Artículo 1, numeral 3 del Decreto N°37 de 15 de mayo de 1974:

a. Los contratos de arrendamientos de habitaciones amuebladas en bienes inmuebles particulares destinados a esta actividad en forma permanente u ocasional.

b. Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles particulares desocupados y destinados para habitación, que se celebren a partir de la vigencia de este decreto.

c. Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles particulares destinados para establecimientos comerciales, uso profesional, actividades industriales o docentes."

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE ESTIMA INFRINGIDA
Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El actor al presentar esta advertencia considera que las disposiciones

legales antes citadas, quebrantan el artículo 153 de la Constitución Nacional, cuyo contenido expresa lo siguiente:

> ARTÍCULO 153: La función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente: ...”

Al explicar el concepto de la infracción de la norma constitucional citada, el recurrente advierte que la Constitución Nacional no contiene ninguna disposición que faculte a la Asamblea Legislativa para autorizar al Órgano Ejecutivo a legislar mediante Decretos.

Manifiesta que la Constitución de 1972, antes de las modificaciones sufridas por actos legislativos posteriores, atribuía esta facultad para legislar a dicho Consejo Nacional de Legislación, la cual era regulada en su artículo 148. Continúa señalando que esta Constitución derogó todo aquello de las facultades “Pro Témpore” para legislar mediante Decretos-Leyes que sí consagraba la Constitución Nacional de 1946. No obstante, con las reformas que se le introdujeron a la Constitución de 1972 se contempló la facultad de la Asamblea Legislativa para conceder al Órgano Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar mediante Decretos-Leyes, en los términos y condiciones que esa norma establece.

Finalmente, señaló el advirtente que la Ley 28 de 12 marzo de 1974, en su artículo 1 hizo una delegación legislativa para que el Órgano Ejecutivo pudiera excluir de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, tramos de contratos de arrendamientos lo que -a juicio del actor- era y es absolutamente inconstitucional. Manifiesta que asimismo resultan inconstitucionales los Decretos Ejecutivos N° 37 de 1974 y N° 7 de 1995, porque ambos colisionan con el artículo 153 de la Constitución Nacional, pues los mismos pretenden tener el valor de ley para modificar las disposiciones de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973.

## CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

En su oportunidad, el señor Procurador General de la Nación al emitir su opinión sobre la inconstitucionalidad planteada, mediante Vista N° 9 de 14 de mayo de 1997, conceptúa en primer lugar que el artículo 1 párrafo segundo de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974 no es violatorio del texto del artículo 153 de la Constitución Nacional vigente, ya que si bien es cierto esta disposición constitucional establece como una de las funciones propias de la Asamblea Legislativa la de expedir la leyes nacionales, que no resulta verdadera la aseveración del recurrente de que ninguna otra norma constitucional permite que el Órgano Ejecutivo legisle mediante decretos.

Sobre la misma norma atacada, el máximo exponente del Ministerio Público señala que tanto en la Constitución actual como en la originaria que regía en el año de 1972, se encuentra instituida la llamada potestad de reglamentación de las leyes que, obviamente, tiene que realizarse mediante decretos ejecutivos y éstos, acorde a la doctrina constitucional predominante, no pueden apartarse del texto y del espíritu de la ley que reglamentan. Es así que el artículo 164 numeral 5 de la Constitución de 1972 y el artículo 179 numeral 14 de la Constitución actual, establecen como facultad del Presidente de la República con la participación del ministro respectivo, la reglamentación de las leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento.

En relación a los otros actos que también son acusados de inconstitucionales, es decir, el artículo 1 del Decreto N° 37 de 15 de mayo de 1974 y el artículo 1 del Decreto N° 7 de 10 de enero de 1995, el señor Procurador General de la Nación explica que éstos son el resultado, precisamente, de la potestad reglamentaria que señalan los artículos constitucionales antes

mencionados y, obviamente desarrollan el mandato contenido en el artículo 1 de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974, ya que, los aludidos decretos tienen el objeto de reformar la ley que regula los cánones de arrendamiento de determinados contratos de alquiler de bienes inmuebles particulares, de acuerdo a los montos que periódicamente deben ser establecidos para las diferentes actividades comerciales, industriales y profesionales.

Finalmente, opina el señor Procurador General de la Nación que las pretensiones de inconstitucionalidad alegadas mediante esta advertencia no pueden ser satisfechas de manera favorable al actor, por que las mismas no son violatorias del artículo 153 de la Constitución Nacional ni de ninguna otra norma que la integra.

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA CORTE

Una vez expuestos los argumentos del demandante, y el concepto vertido por el Procurador General de la Nación, entra el Pleno a considerar la pretensión que se formula en la presente Advertencia.

La Corte observa que la primera disposición legal que se advierte de inconstitucional en el caso que nos ocupa, es el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley N° 28 de 12 de marzo de 1974, que se refiere a que el Órgano Ejecutivo podrá excluir del ámbito de aplicación de la Ley N° 93 de 1973, mediante Decreto tramos de arrendamientos de bienes inmuebles que se regirán por la libre contratación.

El demandante fundamenta su pretensión en base a que esta disposición legal es violatoria del artículo 153 de la Constitución Política que establece que la función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Legislativa y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado. La violación se da -a juicio del demandante-, porque no existe ninguna disposición en la Constitución que faculte a la Asamblea Legislativa para autorizar al Órgano Ejecutivo a legislar mediante decreto.

A esta Corporación no le cabe la menor duda que una de las funciones de la Asamblea Legislativa es la de expedir las leyes nacionales, pero como bien apunta el máximo exponente del Ministerio Público, no es cierta la afirmación del advirtente cuando señala que no existe ninguna otra norma constitucional que permite que el Órgano Ejecutivo legisle mediante decretos, ya que en las anteriores Constituciones como en la actual de 1972 se encuentra la llamada Potestad Reglamentaria del Ejecutivo contenida en el numeral 14, del artículo 179, que establece que esta potestad debe ejercerse teniendo como límite la imposibilidad de alterar ni el texto ni el espíritu de la Ley que reglamentan.

En este sentido, el Pleno considera que la Ley N° 28 de 1974 no es violatoria de la Constitución Nacional, pues es la propia Ley la que le otorga esa facultad al Ejecutivo para que reglamente la aplicación de la Ley, es decir en aquellos casos específicos como son los tramos de arrendamientos; en otras palabras le otorga competencia al Ejecutivo para que reglamente sobre dicha actividad.

En relación a los artículos 1 de los Decretos N°37 de 1974 y N° 7 de 1995, esta Colegiatura comparte igualmente la opinión expresada por el señor Procurador de la Nación en el sentido de que estos decretos tampoco resultan violatorios del texto constitucional alegado por el recurrente, ya que son los decretos ejecutivos los que reglamentan las leyes y en el caso de la Ley N° 28 de 1974, se actúa en virtud de una facultad que la propia ley le otorga al Órgano Ejecutivo para desarrollar o reglamentar su aplicación, facultad que tiene fundamento en la Constitución. En conclusión, podemos señalar que estos decretos ejecutivos fueron dictados en concordancia y en desarrollo del mandato imperativo contenido en la referida ley, entonces el Órgano Ejecutivo al expedir los decretos en cuestión, no ha invadido en ningún momento la esfera de competencia de la Asamblea Legislativa. Es más, aunque la Ley no lo señale expresamente, el

Ejecutivo puede reglamentarla, siempre y cuando no se aparte de su texto ni de su espíritu.

Finalmente, la Corte es del criterio que los decretos ejecutivos N° 37 de 1974 y N° 7 de 1995, más que violar la Constitución son consecuencia de normas imperativas contenidas en la Ley N° 28 de 1974, la cual desarrollan con fundamento a la facultad que expresamente le otorga la Constitución.

Por todo los razonamientos expuestos, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES el artículo 1, párrafo segundo de la Ley N°28 de 12 de marzo de 1974, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 37 de 15 de mayo de 1974 y el artículo 1 del Decreto N° 7 de 10 de enero de 1995, por no ser violatorios del artículo 153 de la Constitución Política ni de ninguna otra disposición constitucional.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese En La Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL BUFETE ARTURO VALLARINO CONTRA EL AUTO N° 848 DEL 28 DE ABRIL DE 1994, DICTADO POR EL JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Bufete de abogados Arturo Vallarino, en su propio nombre interpuso demanda de inconstitucionalidad contra el Auto N° 848 de 28 de abril de 1994, emitido por el Juzgado Cuarto de Circuito de Panamá, Ramo Civil, mediante el cual se decretó la liquidación forzosa de la Sociedad LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S.A. (LARSA).

Los actores fundamentan su demanda, en los siguientes hechos:

Que mediante Resolución N° 04 de 6 de abril de 1990, la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS (C.N.R.) mandó la intervención de la empresa LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA), sus negocios, activos, administración y empresas subsidiarias; luego, mediante Resolución N° CNR-10 de 6 de septiembre de 1991, por recomendación del Interventor, la C.N.R. decretó la reorganización de la mencionada empresa, de acuerdo con un plan de reorganización presentado por una sociedad inversionista, Dunshaw Patton Financial Holding L.T.D., S. A. y se nombró un Comité Ejecutivo para que ejerciera la administración de LARSA.

Que mediante la Resolución CNR-17 de 7 de julio de 1993, dictado por la C.N.R., se resolvió "ilegal e injustamente" dar por terminada la reorganización de LARSA, ordenando la entrega de los bienes de la empresa para proceder la declaratoria de quiebra o liquidación forzosa, proceso radicado en el Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Panamá, desde el 9 de agosto de 1993.

Que, pese a que los representantes y apoderados de la C.N.R. conocían el domicilio y paradero del representante legal de LARSA y sus apoderados legales, por haber trabajado conjuntamente más de un año en su reorganización, los

demandantes declararon y juraron en su libelo de demanda, no conocer el paradero de aquellos, violando con ello, el Código Judicial, al incurrir en declaración falsa y mal intencionada que acarrea sanciones penales, porque sí tenían conocimiento del paradero de los representantes de LARSA.

Por lo anterior, los representantes de LARSA nunca fueron notificados personalmente de la Resolución que acogió la demanda y ordenó su traslado al demandado, infringiéndose con ello el artículo 989 del Código Judicial, sobre notificaciones personales, e impidiendo a los representantes de la demandada presentar pruebas y acciones legales para la defensa de sus intereses, lo que fue utilizado por la C.N.R. para acelerar el proceso y nombrar el Liquidador, la liquidación y disolución de la Sociedad.

Las actuaciones ilegales de la C.N.R. -según la actora- a partir de la Resolución N°CNR-17 de 7 de julio de 1993, impulsaron a la demandada a interponer un recurso de plena jurisdicción contra la misma, que había ordenado la reintervención de la empresa, que fue admitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema, quien solicitó la suspensión de los efectos de la Resolución recurrida, por violar la Ley 56 de 1984.

Que dicho proceso se encontraba en estado de resolver al momento de interponer la presente demanda constitucional, lo que -según el Bufete Arturo Vallarino- era del conocimiento de la Juez Cuarta de Circuito Civil, quien pese a ello, emitió la resolución que ordenó la liquidación forzosa de LARSA, y nombró un liquidador, violando así el derecho de defensa de ésta al no permitirle contestar la pretensión.

Además, por infringir el principio del debido proceso, provocó que la Juez no conociera a fondo el caso, al determinar que LARSA se encontraba insolvente, lo cual el propio expediente -a su juicio- refuta.

En cuanto a las normas constitucionales infringidas y el concepto de dicha infracción, consideró la actora que el Auto N° 848 de 28 de abril de 1994 violó el artículo 17 de la Constitución Nacional -deberes de las autoridades de la República- de manera directa, ya que, al ordenarse la liquidación forzosa de LARSA y nombrarse un liquidador, sin darle oportunidad a la actora para presentar contrapruebas, se infringió la Excerta en mención, citando varias sentencias de esta Superioridad, en ese sentido, que -según los representantes de LARSA- todo acto individual infractor de un funcionario público viola -de paso- los artículos 17 y 32 constitucionales.

Por lo tanto, la Juez Cuarta de Circuito Civil de Panamá, a través del Auto demandado, infringió el artículo 17 ibidem.

En otro sentido, el artículo 32 -principio del debido proceso- de la Carta Política fue violado de manera directa por omisión -según la demandante constitucional- por el Auto N° 848, ya que éste no estableció ningún procedimiento para que LARSA hiciera valer sus derechos en este proceso.

Admitida esta demanda constitucional, se corrió traslado al Ministerio Público, correspondiéndole el conocimiento del caso al señor Procurador General de la Nación, quien emitió su opinión a través de la Vista N° 11 de 7 de marzo de 1995, en los siguientes términos.

En cuanto a la infracción del artículo 17 Constitucional, evocó el Jefe del Ministerio Público la jurisprudencia de esta Colegiatura, en el sentido de la naturaleza programática del artículo 17 Constitucional, el cual no contiene ningún tipo de derecho individual o social susceptible de ser infringido, citando un fallo al respecto.

Agregó que lo anterior no es óbice para los casos en que, en ciertas circunstancias y por motivo de la violación de otras normas constitucionales, el artículo en estudio pueda ser violado, pero de manera indirecta.

En cuanto a la violación del artículo 32 Constitucional, conceptuó el Funcionario Opinador que el criterio de la actora, centrado en que la violación de la norma en mención fue quebrantada porque el Auto N° 848 de 28 de abril de 1994 no estableció procedimiento alguno para que el afectado hiciera valer sus derechos frente a ese tipo de procesos judiciales -liquidación forzosa-, no tiene asidero, por cuanto que no se puede sostener que se le haya impedido el acceso a los medios legales para oponerse a lo ordenado por el Auto impugnado constitucionalmente.

El hecho de que la resolución judicial señale o no, los medios impugnativos disponibles que pueda interponer el interesado, ello no significa que no tiene derecho a recurrir dicha resolución; habría entonces que demostrar la omisión de un trámite por parte del Juzgador o emisor de la resolución, y que debido a ello, se colocó al afectado en estado de indefensión.

En este caso, el demandante constitucional no acreditó tal omisión, sino que se limitó a señalar que la resolución demandada no estableció el procedimiento para que el afectado hiciera valer sus derechos en este tipo de proceso judicial.

También manifestó el señor Procurador General de la Nación que, en cuanto a que el Auto N° 848 decretó que la liquidación forzosa de LARSA, fue pedida por la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS (C.N.R.) por razón del incumplimiento por parte de aquella, de la reorganización decretada por dicha Comisión en base al Plan de Reorganización creado por la firma Dunshaw Patton Financial Holding L.T.D., S. A. luego de la intervención de que había sido objeto -LARSA-, la Ley 56 de 1984 prevé el procedimiento aplicable tanto en los casos de intervención, como de reorganización de empresas reaseguradoras.

Que el artículo 62 de dicha Ley, establece que si la C.N.R. considera necesaria la liquidación forzosa de la empresa intervenida o reorganizada, presentará solicitud fundada de disolución y liquidación al tribunal competente, conforme a las disposiciones legales pertinentes; para ello, se considerará a la C.N.R. como acreedora de la empresa con derecho a pedir su disolución y liquidación forzosa.

De lo anterior se deduce -a juicio del Procurador- que la Juez Cuarta de Circuito de Panamá, Ramo Civil, se ajustó al trámite establecido en la ley, al dictar el Auto en cuestión, y no pretermitió los trámites legales para estos procesos.

También considera el Funcionario Opinador, que se colige del contenido del artículo 63 de la misma Ley -atinente a la notificación a los interesados y al público, de la decisión de solicitar quiebra o liquidación forzosa de una empresa reaseguradora-, que la conculcación del artículo 32 de la Carta Magna no se produjo, ya que el Auto N° 848 lo dictó una autoridad competente, ajustándose su emisión conforme a los trámites legales, en especial los de la Ley 56 de 1984.

Por ello, solicitó el Procurador General de la Nación a esta Colegiatura, que se declare que la Resolución en comento no violó ningún artículo de la Constitución Nacional.

Devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez -10- días después de la última publicación del Edicto, para que el demandante y cualquier interesado vertiera sus argumentos sobre el caso, y que no fue utilizado por nadie.

Por lo tanto, cumplidas las formalidades procesales establecidas para este negocio constitucional, se dispone la Corte a resolver el caso, previas las siguientes consideraciones.

La esencia del caso estriba en que los representantes legales de LATINOAMERICANA DE SEGUROS, S. A. (LARSA), impugnaron vía demanda de

inconstitucionalidad, el Auto N° 848 de 28 de abril de 1994 dictado la Juez Cuarta del Circuito Civil de Panamá, que decretó su liquidación forzosa, declaró resueltos todos los contratos en que ésta era parte, y nombró un Liquidador.

Dicha resolución se originó en petición realizada por la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS (C.N.R.), en virtud de que resolvió dar por terminada la reorganización de la citada empresa, que había ordenado previamente por recomendación del Interventor, luego de que dicha Comisión había ordenado la intervención de la empresa de marras.

Consideraron los representantes de LARSA que la Juez Cuarta infringió el debido proceso, ya que al interponer la demanda, los representantes de la C.N.R. -que conocían el domicilio y paradero del representante legal de LARSA porque trabajaron juntos en su Reorganización-, declararon y juraron no saber el domicilio y paradero del Sr. LAURENCIO JAÉN, representante legal de LARSA y sus apoderados, violando así el Código Judicial por haber emitido una declaración falsa que acarrea responsabilidad penal.

Por lo anterior, el representante legal de LARSA nunca fue notificado personalmente de la resolución que acogió la demanda y ordenó correrla en traslado al demandado, violando el artículo 989 del Código Judicial, referente a las notificaciones personales; por ello, no pudo contestar la demanda ni presentar pruebas, etc., lo que utilizó la demandante C.N.R. para lograr la liquidación de LARSA, y el nombramiento de liquidador.

La Corte advierte un impedimento para revisar el fondo de este negocio, cual es que no se agotaron los medios impugnativos disponibles para poder contemplar este negocio constitucional.

En efecto, todo el esfuerzo impugnativo de los representantes legales de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA) se dirigió contra el Auto N° 848 de 28 de abril de 1994, dictado por la Juez Cuarta del Circuito Civil de Panamá.

Dicha resolución era susceptible de recurso de apelación, toda vez que al proceso de liquidación forzosa le son aplicables las normas generales del proceso sumario, como lo señala el artículo 66 de la Ley 63 de 1996 -que regula el negocio de Reaseguros en Panamá-, que deja el procedimiento de liquidación forzosa a las "disposiciones legales pertinentes", igual que el artículo 64 de la anterior Ley 56 de 1984, en base a la cual actuó la C.N.R.

El numeral 10° del artículo 1335 del Código Judicial lo establece como uno de los procesos tramitables por la vía sumaria, al señalar que:

> "ARTICULO 1335. Sin perjuicio de los otros casos establecidos en la ley, se tramitará por la vía del proceso sumario las causas referentes a:
> ...
> 10. Disolución y liquidación de sociedades o de cualquier persona jurídica de derecho privado por las causales previstas en el acto constitutivo o en la ley substancial;" (Negrilla de la Corte)

Es decir, a los procesos de liquidación, tanto voluntaria como forzosa, le son aplicables las normas generales del proceso sumario, cuando se ha incurrido en causal establecida en el acto constitutivo de la sociedad, o en la ley sustancial que la regule, como en el presente caso; y le son aplicables las normas generales, porque dentro de éste proceso -sumario- no se destinó procedimiento especial para la liquidación de sociedades.

Dentro de éste marco, podemos señalar que el numeral 11 del artículo 1336 del Código Judicial, establece que la Resolución que decide la pretensión tiene carácter de sentencia y por tanto contra ella cabe el recurso de apelación, pero una vez ejecutoriada hace tránsito a cosa juzgada.

El Auto N° 848 de 28 de abril de 1994, tiene el carácter de sentencia ya que decretó la liquidación forzosa solicitada por los representantes de la COMISIÓN NACIONAL DE REASEGUROS (C.N.R.), petición que emergió como resultado de un proceso llevado a cabo ante dicha Comisión, pues mediante Resolución N° 04 de 6 de abril de 1990, la C.N.R. había ordenado la intervención de LATINOAMERICANA DE REASEGUROS, S. A. (LARSA), así como de sus activos, negocios, administración y empresas subsidiarias.

Luego, por recomendación del Interventor, la C.N.R. decretó la reorganización de LARSA, mediante Resolución N° CNR-10 de 6 de septiembre de 1991, de acuerdo con un plan de reorganización que fue presentado por una sociedad inversionista, y nombró también un Comité Ejecutivo para que administrara la intervenida LARSA.

Más adelante, mediante Resolución N° CNR-17 de 7 de julio de 1993, la C.N.R. resolvió terminar la reorganización de LARSA, ordenó la entrega de los bienes de la empresa para proceder luego a la declaratoria de quiebra o liquidación forzosa, actuación llevada a cabo ante el Juzgado Cuarto de Circuito Civil de Panamá, a través del Auto N° 848 de 28 de abril de 1994, cuya inconstitucionalidad se solicita sea declarada.

Por lo tanto, el Auto acusado de inconstitucional finalizó el proceso desarrollado en la C.N.R., ya expuesto, por lo que es susceptible del recurso de apelación, y la presente iniciativa constitucional deviene no viable por no haber agotado los recursos existentes antes de la utilización del remedio constitucional como última alternativa protectora de derechos.

En efecto, esta Corporación de Justicia ha producido una abundante jurisprudencia en este sentido, de la cual copiaremos la porción correspondiente, al fallo de 22 de septiembre de 1995, que declaró no viable una demanda de inconstitucionalidad, y que es del siguiente tenor:

> "Este criterio ha sido sostenido con uniformidad por la jurisprudencia de esta Corporación, aseverando que solamente procede la demanda de inconstitucionalidad cuando se hayan agotado todos los recursos y acciones que permitan anular el acto cuya declaratoria de inconstitucionalidad se pretende."

Consideramos que la porción transcrita no merece explicación. (v. sentencias de 27 de febrero de 1956, 12 de mayo de 1993, y 10 de diciembre de 1993), por lo que sólo cabe declarar la no viabilidad de la demanda.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Bufete Arturo Vallarino contra el Auto N° 848 de 28 de abril de 1994, dictado por la Juez Cuarta de Circuito de Panamá, Ramo Civil.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSE NELSON BRANDAO EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACION Y EN CONTRA DE LA LEY N° 28 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 1993, "POR LA CUAL SE LIMITA EL CRECIMIENTO DEL ORGANO LEGISLATIVO".

MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JOSÉ NELSON BRANDAO interpuso en su propio nombre y representación, demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 28 de 14 de diciembre de 1993, "Que limita el Crecimiento del Organo Legislativo", por violar el numeral 3° del artículo 141 de la Constitución Nacional, que establece el número de habitantes por Legislador, y del residuo, por Circuito Electoral.

El Licenciado BRANDAO fundamentó su demanda en que la Ley en comento "quebranta el sistema establecido por la Constitución Política de la República, para la conformación de la Asamblea Nacional".

En lo concerniente a la indicación de la disposición constitucional violada y el concepto de dicha infracción, es necesario reproducir la porción infringida, que es del siguiente tenor:

> "La Asamblea Legislativa se compondrá de los Legisladores que resulten elegidos en cada Circuito Electoral, de conformidad con las bases siguientes:
> ...
> 3. Los actuales Distritos Administrativos que, según el último Censo Nacional de Población, excedan de cuarenta mil habitantes, formarán un Circuito Electoral cada uno y en tales circuitos se elegirá un Legislador por cada treinta mil habitantes y uno más por residuo que no baje de diez mil. El Distrito de Panamá se dividirá a su vez en cuatro Circuitos Electorales, de conformidad con el numeral cinco de este artículo y según lo disponga la Ley. En los Circuitos Electorales en que se deben elegir dos o más Legisladores, la elección se hará conforme al sistema de representación proporcional que establezca la Ley."

Sostiene el demandante que la infracción fue en concepto de violación directa por comisión, toda vez que la Ley N° 28 de 1993 establece una base distinta a la prescrita en el numeral 3° del artículo 141 Constitucional, en cuanto a la estimación del número de Legisladores que integran la Asamblea Legislativa por los actuales Distritos Administrativos, en los cuales ha producido un aumento de la población, según el último censo nacional.

Entonces, en base a ésta norma, el Legislador "quebranta" su contenido, establecido por el Constituyente "en forma perfectamente clara y con independencia de cuestiones subjetivas", que expresa que en esos Circuitos Electorales se elegirá un Legislador por cada treinta mil -30,000- habitantes y uno por un residuo que no baje de diez mil -10,000-; por lo tanto, establecer -como lo hace la Ley demandada- que la elección aumentará a un Legislador por cada cuarenta mil- 40,000- habitantes y el residuo aumenta de diez a quince mil- 15,000- habitantes, rompe la integridad de la norma constitucional.

También realizó el actor algunas consideraciones subjetivas que no serán objeto de análisis por el Pleno.

Admitida la demanda, se corrió traslado al Ministerio Público, tocándole exponer su opinión al señor Procurador General de la Nación, a través de su Vista N° 20 de 8 de junio de 1994, en la que consideró que la Ley de marras no infringe, ni la norma que se considera infringida, ni ninguna otra de la Constitución Nacional.

Afirmó el Opinador, que los argumentos planteados por el demandante fueron citados "en forma aislada", ya que no tomó en cuenta el contenido integral de la

norma constitucional, ya que el actor no consideró la parte final de dicho artículo, que indica claramente que las reglas contenidas en los ordinales anteriores -entre ellos el tercero- sólo eran obligatorias en la primera elección de Legisladores, luego de la entrada en vigencia de la reforma de 1983, la cual se realizó en 1984.

Por lo tanto, verificada dicha elección por primera vez, "la Ley podrá establecer, para la conformación de los Circuitos Electorales, pautas distintas a las contenidas en esta disposición, pero tomando en cuenta, como punto de partida, para la estructuración de los Circuitos Electorales, la división política administrativa actual de Distritos."

Evidentemente -afirma el Procurador- la Ley demandada no varía o modifica la división política-administrativa vigente actualmente en los Distritos del país.

La parte final del artículo 141 Constitucional permite la modificación de cualquiera de los ordinales de dicho artículo, mediante regulación legal. Por ello, consideró el Procurador General de la Nación que la Ley demandada no infringe la Constitución Nacional.

Devuelto el expediente, se fijó en lista por el término de diez -10- días a partir de la última publicación de los Edictos, para que los interesados argumentaran sobre el caso, término que no fue utilizado por nadie.

Se dispone el Pleno a emitir su decisión, previas las siguientes consideraciones.

El Licenciado JOSÉ NELSON BRANDAO impugnó la Ley N° 28 de 14 de diciembre de 1993, "Por la cual se limita el Crecimiento del Organo Legislativo", porque elevó a cuarenta mil -40,000- personas el número mínimo necesario de habitantes de los Circuitos Electorales, para la elección de un Legislador, y a quince mil-15,000- habitantes como residuo, para la elección de otro Parlamentario, en los Circuitos Electorales donde aumente la cantidad de Legisladores, siendo que el numeral 3° del artículo 141 de la Constitución establece la elección de un Legislador por cada treinta mil -30,000- habitantes, y uno por un residuo de diez mil-10,000- habitantes.

Es decir, que la Ley 28 aumentó en diez mil, el número necesario de habitantes para poder elegir un Legislador, y en cinco mil, la cantidad de habitantes para poder elegir uno por residuo, constituyendo dicho aumento una violación a la Norma Superior.

Empero, considera esta Colegiatura que le asiste la razón al Procurador General de la Nación, ya que el Licdo. BRANDAO omitió considerar la parte final de la misma norma que estima violada.

El párrafo final del artículo 141 de la Carta Política, dice que:

> Artículo 141. ...
> Después de la primera elección de Legisladores de que trata el presente artículo, la Ley podrá establecer, para la conformación de los Circuitos Electorales, pautas distintas a las contenidas en esta disposición, pero tomando en cuenta, como punto de partida, para la estructuración de los Circuitos Electorales, la división política administrativa actual de Distritos."

La norma revela con claridad meridiana, que sólo después de la primera elección de Legisladores, la cual se realizó en 1984, la Ley podía modificar las reglas establecidas en cada uno de los numerales de dicho artículo, incluido el numeral 3°, por lo que perfectamente se puede modificar la conformación de los Circuitos Electorales, esto es -en el caso que nos ocupa-, el número necesario de habitantes del Circuito Electoral para elegir un Legislador, así como de

habitantes de su residuo, para la elección de otro.

Sólo pone la norma como base para la estructuración -o reestructuración- de los Circuitos Electorales, la división política-administrativa actual de los Distritos; es decir, que las modificaciones deben basarse en los Distritos administrativos ya existentes, mandato que no ha sido vulnerado.

Por lo tanto, la Ley N° 28 de 14 de diciembre de 1993 no infringe la Constitución Nacional, pues fue emitida en base a la permisibilidad contenida en el párrafo final del artículo 141 Constitucional, y así ha de declararse.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Ley N° 28 de 14 de diciembre de 1993, "POR LA CUAL SE LIMITA EL CRECIMIENTO DEL ORGANO LEGISLATIVO".

Cópiese, Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L. (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR RIVERA, BOLÍVAR Y CASTAÑEDAS CONTRA EL DECRETO DE GABINETE N° 74 DE 27 DE JUNIO DE 1990, MODIFICADO POR EL DECRETO DE GABINETE N° 78 DE 18 DE JULIO DE 1990. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañedas, en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto de Gabinete No. 74 de 27 de junio de 1990, modificado parcialmente por el Decreto de Gabinete No. 78 de 18 de julio de 1990, "Por el cual se reglamenta el Servicio Especial de Vigilancia en la Zona Libre de Colón".

El demandante en un extenso escrito, luego de hacer un análisis sobre el origen de las normas legales conocidas en la doctrina fiscal como "Leyes Cuadro o Marco", señala que el mencionado decreto es inconstitucional, por considerar que el mismo infringe los artículos 195 numeral 7, 153 numeral 11, 48, 261, 19 y 274 todos de la Constitución Nacional, que a la letra preceptúan lo siguiente:

> "ARTÍCULO 195: Son funciones del Consejo de Gabinete:
> ...
> 7. Negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, con sujeción a las normas previstas en las Leyes a que se refiere el numeral 11 del artículo 153. Mientras el Órgano Legislativo no haya dictado Ley o Leyes que contengan las normas generales correspondientes, el Órgano Ejecutivo podrá ejercer estas atribuciones y enviará al Órgano Legislativo copia de todos los Decretos que dicte en ejercicio de esta facultad.
>
> ARTÍCULO 153: La función legislativa es ejercida por medio de la

**Asamblea Legislativa y consiste en expedir las Leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:**

**...**

**11. Dictar las normas generales o específicas a las cuales deben sujetarse el Órgano Ejecutivo, las entidades autónomas y semi autónomas, las empresas estatales y mixtas cuando, con respecto a éstas últimas, el Estado tenga control administrativo, financiero o accionario, para los siguientes efectos: negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.**

**ARTÍCULO 48: Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto, que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las Leyes.**

**ARTÍCULO 261: La Ley procurará, hasta donde sea posible, dentro de la necesidad de arbitrar fondos públicos y de proteger la producción nacional, que todo impuesto grave al contribuyente en proporción directa a su capacidad económica.**

**ARTÍCULO 19: No habrá fueros o privilegios personales ante las autoridades personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.**

**ARTÍCULO 274: Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas en el respectivo Presupuesto. No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto."**

**En cuanto al concepto de la infracción, el demandante señala que el Decreto N° 74 infringe los artículos 195 numeral 7, 153 numeral 11, 48, 261,19 y 274 de manera directa por comisión. En lo referente a la violación del artículo 195 numeral 7 de la Constitución Nacional, el demandante expresa:**

**"Consideramos necesario hacer referencia para estos efectos, a los límites de la potestad que la propia Constitución confiere al Ejecutivo, para "fijar y modificar los aranceles, las tasas y las demás disposiciones del régimen de aduanas".**

**En este orden de ideas, tenemos que la propia norma constitucional que alegamos como violada, consigna que dicha facultad debe ejercerse, i) en ausencia de normas generales dictadas por la Asamblea Legislativa, de forma amplia y autónoma, a través de las regulaciones y reglamentos expedidos por el propio Consejo de Gabinete, sujetándose única y exclusivamente al marco jurídico establecido por el resto de las normas consagradas en la propia Carta Magna -ya que éstas no pueden ser desconocidas por el Consejo de Gabinete, so pretexto de considerar que su facultad es absoluta e ilimitada, o que no debe concordarse con ningún otro mandato contenido en el texto constitucional-; y ii) ciñéndose a lo que dispongan las leyes cuadro expedidas por el Órgano Legislativo en materia aduanera -en caso de que las mismas hayan sido dictadas por la Asamblea Legislativa-, como ocurrió con la Ley No. 41 de 1996.**

**...**

**En el caso que nos ocupa, si bien la norma que estableció las tasas demandadas fue expedida por el Órgano autorizado para ello -el Consejo de Gabinete en materia aduanera-, la creación de dicho tributo no respetó los límites materiales que la propia Constitución prevee como marco para ejercer la potestad tributaria, esto es, la proporcionalidad de la carga tributaria en cabeza de cada**

> contribuyente y la prestación efectiva de un servicio - en el caso de las tasas- individualizado en cabeza de cada contribuyente, para efecto de aplicar la cuota impositiva que debe satisfacer cada uno de los receptores de los servicios que justifican el pago de dichas tasas.
>
> En ese orden de ideas, debemos indicar que, tal como viene definida la prestación de este servicio y la recaudación de las tasa generadas por el mismo en el Decreto de Gabinete demandado, en los artículos 1, 2 y 3 de dicha norma, nos encontramos con que a través de dichas normas se están desconociendo los mandatos expresamente contenidos en el artículo 2 de la Ley No. 41 de 1996, y que preveen entre otras cosas: i) la "eliminación de los controles cuantitativos (abandono de un objetivo de control total), por cualitativo (control técnico e integral)" -numeral 4-; ii) la necesidad de que los controles aduaneros "sean flexibles y facilitadores del comercio exterior, para el desarrollo de la industria nacional" -numeral3- y iii) la necesidad de "permitir la libre competencia como mecanismos de impulso a la modernización y eficiencia de la economía nacional' -numeral 9-; por lo que la norma expedida por el Consejo de Gabinete y atacada por inconstitucional en ésta oportunidad, violenta el mandato expresamente consagrado en el numeral 7 del artículo 195 de la Constitución Nacional, que obliga el Consejo de Gabinete a ceñirse a las normas previstas en las disposiciones generales o específicas que dicte la Asamblea Legislativa en desarrollo del numeral 11 del artículo 153 de la Carta Magna".

En cuanto al concepto de la infracción, el demandante al referirse a la violación del artículo 153 numeral 11 de nuestra Constitución, señala que el aludido decreto viola este artículo toda vez que "si bien la doctrina y la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, han determinado que el Consejo de Gabinete, en virtud del mandato contenido en el numeral 7 (sic) del artículo 153 de la Constitución Nacional, tiene una gran libertad para regular lo concerniente al régimen aduanero, ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa incidiera en el denominado fenómeno de la inercia legislativa en esta materia, también es cierto que, a partir de la aprobación de la Ley No. 41 de 1996 -tal como lo destacamos en la cuestión previa de la presente demanda-, se dictaron las normas generales o indicativas a las cuales debe obedecer el Consejo de Gabinete en ejercicio de sus potestades constitucionales, normas éstas que distan diametralmente en sus objetivos y finalidades tutelados en el Decreto de Gabinete No 74 objeto de la presente demanda... por lo que debemos concluir entonces, que existen y están vigente para todos los efectos, las normas generales de rango legislativo que debe ceñirse el desarrollo del régimen aduanero en la República de Panamá y cualesquiera normas expedidas por el Consejo de Gabinete en desarrollo de dicho régimen, tienen forzosamente que ajustarse a dichas finalidades y objetivos, extremos que obviamente no cumple la norma demandada por inconstitucional en esta oportunidad ...".

Al referirse al principio de legalidad tributaria consignado en el artículo 48 de nuestra Constitución, el demandante básicamente señala lo siguiente:

> "Consideramos que la determinación de la obligación tributaria que se consigna en el artículo 1 de la norma demandada, así como la definición y efectiva prestación del servicio especial de vigilancia regulado a través de la misma, y la determinación de la carga imponible a que se contraen las tasas listadas en el artículo 3 del tantas veces citado Decreto de Gabinete No 74 de 1990, modificado parcialmente por el Decreto de Gabinete No. 78 de 1990, infringen el mandato de legalidad tributaria consignado en el artículo 48 de la Constitución Nacional, en concepto de violación directa por comisión de dicha norma constitucional.
>
> Tal como lo hemos explicado en el desarrollo de los conceptos de

> violación a que nos hemos referido previamente, la fijación y modificación de aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, que corresponde al Consejo de Gabinete por mandato del numeral 7 del artículo 195 de la Carta Magna, es una potestad que reconoce de forma especial la posibilidad de que el Órgano Ejecutivo -a través del Consejo de Gabinete-, haga ejercicio de la potestad impositiva del Estado, en principio reservada constitucionalmente al Órgano Legislativo y a los Municipios. No obstante, ello no quiere decir, que en virtud de esta habilitación especial, el Consejo de Gabinete no deba ceñirse a los límites formales consignados a lo largo de nuestra Carta Magna, con respecto a los límites de la potestad tributaria ejercida por el Estado".

Por otro lado, al explicar el peticionario la manera como el Decreto No. 74 infringe el artículo 261 de la Constitución Nacional, el demandante señaló:

> "Ahora bien, independientemente de las justificaciones reales que pudieron dirigir la voluntad del Ejecutivo al momento de establecerse las tasas consignadas en el Decreto de Gabinete No. 78 de 1990, es claro para nosotros, que dichas medidas no se ajustan actualmente -y consideramos que ni siquiera al momento de su expedición- a los límites jurídicos y materiales en los que debe encuadrarse la potestad tributaria del Estado, porque la forma en que viene determinada la tarificación de las mencionadas tasa, exceden los parámetros de una carga impositiva, para traducirse en una discriminación directa en contra de ciertos contribuyentes en ciertas instalaciones portuarias específicas, violentándose así la norma fundamental, porque i) ni la forma en que se determina el hecho imponible, ii) ni el monto de la carga impositiva a que deben hacer frente los contribuyentes, iii) ni el sistema de impuesto específico -ya en franco desuso- por "bultos" que se consigna en esta norma, atienden en forma alguna al principio de proporcionalidad y respeto a la capacidad económica de los contribuyentes, a que hace referencia la norma constitucional que denunciamos como violada".

Respecto del artículo 19 de la Constitución, el peticionario afirma que su transgresión ha sucedido, puesto que se generan condiciones discriminatorias contra COLÓN PORT TERMINALS, S. A. y a favor de empresas distintas a las ubicadas en el Muelle de Coco Solo, alegando que las empresas que realizan actividades en otros puertos de la provincia de Colón poseen una "ventaja ficticia" sobre COLÓN PORT TERMINALS, S. A. toda vez que "las tasas del Servicio Especial de Vigilancia de la Zona Libre de Colón ... se han venido a constituir un elemento distorsionante en la oferta de dichos servicios, porque obviamente, el costo de la utilización de los servicios prestados por COLÓN PORT TERMINALS, S. A. (CPT), incluye como un cargo fijo el pago de dichas tasas, perjudicando así, única y exclusivamente, a las empresas de la Zona Libre de Colón, que decidan utilizar dicha terminal portuaria, en franco detrimento del principio de igualdad de oportunidades ...".

Finalmente, refiriéndose el demandante a la manera como, a su juicio, el Decreto No. 74 viola el artículo 274 de nuestra Carta Magna, expuso lo siguiente:

> "... en el caso de los ingresos tributarios consignados en el presupuesto, éstos (sic) sólo podrán hacerse efectivos en la medida en que dichos impuestos se hayan establecidos por Ley (principio de reserva de ley en materia impositiva), cuyo monto en el presupuesto constituye una mera estimación, mientras que el caso de los gastos, los mismos han de estar previstos de manera expresa y específica en el rubro del gasto correspondiente en el Presupuesto General del Estado (principio de legalidad financiera).
>
> En el caso que nos ocupa, el ingreso autorizado a través del Decreto

de Gabinete No. 74 de 27 de junio de 1990, modificado parcialmente por el Decreto de Gabinete No. 78 de 18 de julio de 1990, lo constituyen las tasas fijadas por el Consejo de Gabinete en el artículo 3 de dicha norma, mismas que, como hemos explicado anteriormente, violentan los límites formales y materiales de la potestad tributaria, que nos vienen dados en los artículos 153, numeral 11, 195, numeral 7, 48 y 261 de la Constitución Nacional y que, por lo tanto, no pueden considerarse como actos expedidos con arreglo a la Ley -entendida en este caso como la Ley Fundamental- y por lo tanto, acusan de vicios que les impiden tener la validez jurídica necesaria para justificar dicho ingreso".

Admitida la presente demanda, y corrido el traslado respectivo a la Procuradora de la Administración, Licenciada Alma Montenegro de Fletcher, externó su opinión mediante Vista No. 466 en la que sugiere a esta Superioridad declare la constitucionalidad del Decreto acusado, pues, a su juicio, dicho Decreto no infringe norma alguna de la Constitución Nacional. En lo medular de la Vista expresa lo siguiente:

"...
Este Despacho considera que no le asiste razón a la Firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañedas ... toda vez que los artículos 1, 2 y 3 del Decreto de Gabinete No. 74, de 27 de junio de 1990, modificado por el Decreto de Gabinete No. 78, de 18 de julio de 1990, al inicio transcrito, no transgreden el numeral 7, del artículo 195 de la Constitución Nacional de la República, que como hemos visto faculta al Órgano Ejecutivo, en ausencia de una Ley Marco, ya de carácter general, ya de carácter específico emitida por la Asamblea Legislativa, proveer lo concerniente, entre otras cosas, a la fijación y modificación de las tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, que es en concreto la materia a la que se contraen los Decretos demandados de inconstitucionales ...

En 1990 y antes de dicho año no existía una Ley como la 41 de 1996 que estableciera una serie de parámetros en torno a lo que conocemos como leyes marco, reguladoras de una materia cambiante pero principalmente instrumento de política económica ya que se refiere a la deuda nacional y su servicio, fijar y modificar los aranceles, tasas y otras disposiciones relativas al régimen aduanero ...

La competencia del Órgano Ejecutivo sobre tan importante rubro podemos considerarla subsidiaria cuando el Órgano Legislativo no ha hecho uso de su facultad; sin embargo, no fue sino hasta 1996 que esa facultad se ejerció por la Asamblea Legislativa al dictar la Ley 41, de 1 de julio de 1996. Dicha Ley establece reglas o normas 'generales a las que debe sujetarse el Consejo de Gabinete al expedir las disposiciones concernientes al régimen de aduanas', mas se excluye de esta normativa el régimen penal aduanero.

Es decir, dentro del tema de leyes marco, que no se circunscribe al orden jurídico de tipo aduanero, antes de ese año no había sido creada ninguna Ley formal, ya general, ya de tipo específico, por lo que mal pudo el Consejo de Gabinete en el año 1990 tomar como norte y guía esta Ley 41, y en ejercicio de su potestad como en muchas ocasiones lo ha hecho, dio origen a los Decretos de Gabinete No. 74 y 78, acusados de ser inconstitucionales. Una sencilla pero vital razón de orden cronológico impidió tal observancia de la Ley 41 de 1996.

...
Este Despacho considera que, aun ante la ausencia de la Ley 41 de 1996 (por razones obvias), el Consejo de Gabinete integrado por las

autoridades de turno en 1990, tan solo creó una tasa por la prestación de un servicio, haciendo ejercicio de la atribución constitucional que le asiste , según el numeral 7, del artículo 195 inserto en la Norma Fundamental.

...

No se ha violado el principio de legalidad y tampoco la reserva de Ley que constitucionalmente viene preceptuada respecto de la materia tributaria, porque la propia Constitución establece la competencia del Órgano Ejecutivo, a través de Decretos de Gabinete, para regular lo concerniente a la creación de tasas y su modificación en el rubro de aduanas.

Si la Constitución permite dicha facultad no puede siquiera pensarse que se ha violado el principio de reserva de ley, de acuerdo al cual una materia como la atinente a tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales), no puede ser sino regulada, siguiendo el mandato constitucional, a través de una Ley en sentido formal, o sea, la emanada de la Asamblea Legislativa, una vez surtido el procedimiento parlamentario previsto ...

Aquí es necesario recordar que en nuestro sistema jurídico los Decretos de Gabinete son actos con valor de Ley, y sobre el particular la Sala Tercera del Máximo Organismo de Administración de Justicia ha dicho, en sentencia de 2 de agosto de 1994, dictada a raíz de un proceso contencioso administrativo de protección de derechos humanos, que, en efecto, 'los Decretos de Gabinete son aquellos dictados por gobiernos de facto o por gobiernos de jure en situaciones de hecho excepcionales en las que no hay Órgano Legislativo, por tanto son actos con fuerza de ley'.

...

En cuanto al extremo del principio de proporcionalidad conculcado, que atiende a que todo tributo respete la capacidad económica del contribuyente, no se ha violentado el mismo ...

Este Despacho patrocina el criterio de que el carácter o principio de proporcionalidad no puede ser establecido sino como consecuencia de un análisis detenido de las circunstancias de hecho que condicionan su aplicación. Por ello la creación y aplicación de la tasa en concepto del servicio de vigilancia circunscrita a unos fines y propósitos claramente demarcados en los Decretos de Gabinete impugnados, se acoge en su establecimiento a situaciones de hecho que, si han variado, pueden determinar la voluntad de la Administración o del Órgano Legislativo para suprimirla o, por el contrario, ampliar los sujetos pasivos de la obligación.

...

Cuando en 1990 se creó a través del primero de los Decretos de Gabinete mencionados ... la tasa por Servicio Especial de Vigilancia tantas veces nombrado, en manera alguna se pretendió gravar la actividad comercial de alguna empresa en particular en detrimento o desconociendo igualdad de condiciones respecto de otra, sino establecer un tributo con propósitos definidos según su norma creadora. No debemos concebir la tasa cuestionada más allá de la finalidad que está en su base y constituye su fundamento, esto es, ser un medio de arbitrio de fondos para hacer obras 'en beneficio de los colonenses'...

...

Este Despacho es de la opinión de que no le asiste razón al demandante, cuando expone la forma en que supuestamente ha sido conculcado el artículo 274 de la Constitución Nacional.

Es claro el objeto de la norma constitucional, crear un balance en

> el Presupuesto general de Estado (ver artículos 267 y 268) y para ello se vale entre otros instrumentos y previsiones del principio de autorización tributaria, de acuerdo al cual todos los ingresos y egresos deben estar contemplados o permitidos en la Ley de Presupuesto. Sin embargo, es común en la práctica financiera estatal recurrir a mecanismos alternos que la propia Constitución prevé para cuando se requieran fuentes o recursos extraordinarios no contemplados, se pueda subsanar esa necesidad que demanda la cambiante y a veces imprevista atención de los servicios públicos y, en última instancia, los fines del Estado". (fs. 90-129).

Publicados los edictos que establece la ley, se abrió el compás para que todos los interesados presentaran alegatos por escrito respecto a la demanda de que se trata. Hizo uso de este derecho el Licenciado José Javier Rivera, quien en nombre de la firma de abogados Rivera, Bolívar y Castañedas, reitera su interés en que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Gabinete No. 74 modificado parcialmente por el Decreto de Gabinete No. 78, mediante un alegato en el que además de hacer un análisis de la Vista Fiscal, básicamente repite lo expuesto en su demanda.

Acogida la demanda de inconstitucionalidad y cumplidos los trámites procesales señalados por la ley para los procesos constitucionales, pasa la Corte a decidir la pretensión constitucional planteada.

La presente demanda de inconstitucionalidad se propone, como se ha visto, contra el Decreto de Gabinete No. 74 de 27 de junio de 1990, modificado parcialmente por el Decreto de Gabinete No. 78 de 18 de julio de 1990, "Por el cual se reglamenta el Servicio Especial de Vigilancia en la Zona Libre de Colón".

En primer lugar, la Corte comparte el criterio de la señora Procuradora en cuanto a que no se ha verificado la supuesta infracción por parte del Decreto No. 74, modificado parcialmente por el Decreto No. 78, de los artículos 195 numeral 7 y 153 numeral 11. En efecto, observa el Pleno que el mencionado Decreto, lejos de transgredir los límites que la norma constitucional le impone al Consejo de Gabinete, fue dictado amparándose, tal como se desprende de la lectura de los considerandos del decreto, en la competencia, que en estas materias, la propia Constitución -en su artículo195 numeral 7- le confiere al Consejo de Gabinete, y para lo que posee amplias facultades, las cuales sólo se pueden ver limitadas en el caso que el Órgano Legislativo haya dictado previamente una "ley cuadro o marco", tal como lo señala la norma constitucional in comento.

En el presente caso, la Ley Cuadro o Marco en materia aduanera es la Ley No. 41 de 1 de julio de 1996, por lo que resulta obvio que las autoridades de gobierno -Consejo de Gabinete, en este caso- en turno en el año 1990, gozaban de una facultad autónoma y amplia para "fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas", puesto que para ese momento no existía en nuestro ordenamiento jurídico una "ley cuadro o marco" que restringiera la competencia del Consejo de Gabinete en esta materia. Sería absurdo pensar, que el decreto de gabinete acusado, tendría que haberse ajustado a los lineamientos impuestos por una ley dictada seis años después que dicho decreto entrara en vigencia.

De forma que al actuar así el Consejo de Gabinete, con la expedición de dicho Decreto de Gabinete, no debe entenderse que con ello se arrogó las funciones propias de la Asamblea Legislativa, toda vez que el precepto constitucional es claro.

El Doctor Mario Galindo H. en su monografía Leyes-Cuadros y Materias Aledañas en el Derecho Panameño, publicada en la compilación Estudios de Derecho Constitucional Panameño del Doctor Jorge Fábrega, al abordar el tema de la potestad del Órgano Ejecutivo para regular las materias sujetas a las leyes-cuadros explica lo siguiente:

"Ahora bien, de conformidad con nuestra Ley Fundamental, la referida relación de dependencia entre las leyes-cuadros y los decretos o reglamentos que las desarrollan, presupone la existencia de las primeras y, por consiguiente, sólo en presencia de las mismas puede predicarse que tal relación exista. Ello es que, en defecto de las leyes-cuadros, el Consejo de Gabinete goza de la prerrogativa de regular, en forma directa y autónoma, las materias que pueden ser objeto de tales leyes, decretando las providencias, autorizaciones y regulaciones que tenga por conveniente, con la misma amplitud con que podría hacerlo la Asamblea Legislativa. Así lo preceptúa el inciso 7 del artículo 195 de la Constitución, que copiado a la letra, raza (sic) así:

Artículo 195: Son funciones del Consejo de Gabinete:
...
7. Negociar y contratar empréstitos; organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; fijar y modificar los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, con sujeción a las normas previstas en las Leyes a que se refiere el numeral 11 del artículo 153. Mientras el Órgano Legislativo no haya dictado Ley o Leyes que contengan las normas generales correspondientes, el Órgano Ejecutivo podrá ejercer estas atribuciones y enviará al Órgano Legislativo copia de todos los Decretos que dicte en ejercicio de esta facultad'.

De la norma transcrita se sigue, en forma no abierta a dudas, que el Consejo de Gabinete, en ausencia de leyes-cuadros, está dotado de competencia constitucional propia, es decir, no subordinada a la previa expedición de tales leyes, para regular todo lo concerniente al manejo de las finanzas públicas y al régimen aduanero. En consecuencia, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, las leyes cuadros no tienen, conforme al Derecho Panameño, el carácter de "actos-condiciones ", puesto que la facultad del Consejo de Gabinete de regular dichos asuntos para nada depende de la existencia de las leyes-cuadros. Estas, más bien, una vez aprobadas, vienen a limitar la referida competencia del Consejo de Gabinete". (El subrayado es nuestro). (Galindo H. Mario J.. Leyes-Cuadros y Materias Aledañas en el Derecho Panameño, publicado en la compilación Estudios de Derecho Constitucional Panameño del Dr. Jorge Fábrega. Pág. 736-737).

En cuanto a la supuesta violación del principio de legalidad tributaria, contenido en el artículo 48 de nuestra Carta Magna, que el demandante le atribuye al Decreto acusado, el Pleno considera que dicho cargo de inconstitucionalidad carece de sustento, porque -como ya se indicó- las medidas jurídicas adoptadas en el mismo a través de las cuales se reglamentó el "Servicio Especial de Vigilancia en la Zona Libre de Colón" que consiste en la custodia de las mercancías por parte de la Dirección General de Aduanas, desde que las mercancías son despachadas desde la Zona Libre hasta su entrega en uno de los puertos del área de Colón, causando además, dicho servicio, el pago de una determinada tasa, fueron emitidas por el Órgano Ejecutivo en base al numeral 7 del artículo 195 de la Carta Fundamental, después de haber sido aprobadas por el Consejo de Gabinete, todo lo cual indica que no se trata de un gravamen ilegalmente establecido.

Por otro lado, reiterada jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que los decretos de gabinete tienen valor de ley, así por ejemplo en fallo de 13 de septiembre de 1990, la Sala Tercera de la Corte, sostuvo que los decretos de gabinete, tienen jerarquía de ley (en ciertos casos). Igualmente en fallo de 9 de agosto de 1994, del Pleno sobre leyes cuadros y decretos de gabinete. En este sentido, el Doctor Edgardo Molino Mola en su obra "La Jurisdicción Constitucional en Panamá en un Estudio de Derecho Comparado", al referirse a los decretos leyes y decretos de gabinete como normas sujetas al control constitucional señala:

"En cuanto a los decretos de gabinete, éstos han sido, la mayor

> parte, expedidos en épocas de facto, con valor de ley, no contemplados en la Constitución con ese carácter. La Constitución vigente, establece en sus numerales 2, 3, 4, 5 y 7, del artículo 195 las materias que pueden cubrir los decretos de gabinete, que son inferiores a la ley, equiparables en un régimen de derecho, a los decretos ejecutivos, con la diferencia que son expedidos por todos los ministros de Estado y el Presidente. Sin embargo, existen decretos de gabinete, que pueden tener valor de ley, como los que fijan y modifican los aranceles, tasas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas y otros, como las leyes cuadros, a que se refiere el numeral 11 del artículo 153 de la Constitución, cuando el órgano legislativo no las haya dictado". (El subrayado es nuestro). (Molino Mola, Edgardo. La Jurisdicción Constitucional en Panamá en un Estudio de Derecho Comparado. Primera Edición. 1998. Pág. 440-441).

En cuanto a la alegada violación del artículo 261 de nuestra Carta Magna, que prevé el principio de proporcionalidad, según el cual para el establecimiento de un tributo debe considerarse la capacidad económica del sujeto pasivo de la obligación, la Sala estima que le asiste razón a la señora Procuradora cuando señala que en el expediente "no constan cifras contables de la capacidad económica de la empresa o empresas que puedan verse afectadas ..." y más aún ninguna de ellas pareciera que se está viendo afectada, puesto que de ser así habría concurrido, por medio de un abogado, a esta Superioridad a fin de que se reconociera su derecho.

Con respecto a la violación del artículo 19 constitucional que contiene el principio de igualdad, la jurisprudencia de la Corte ha señalado que se infringe cuando la ley, la resolución, o el acto entraña una ventaja exclusiva para un grupo de personas, o cuando se establecen en ellas excepciones para una persona determinada, por razones puramente personales.

En el presente caso, no se aprecia como se da la "ventaja ficticia" a la que alude el peticionario en su demanda. En efecto, de la lectura del Decreto impugnado, se desprende que la tasa por la prestación del Servicio Especial de Vigilancia que crea el mencionado decreto, serán pagadas por todas las empresas que se "dediquen a servicios de despacho, embalaje, reembarque y embarque, por cuenta propia o de un tercero, de mercancías reexportadas desde la Zona Libre de Colón y que se envían a través de los Puertos de Samba Bonita, Muelle 1 de Colón, Muelle 3 de Colón, Agua Dulce y el Muelle Fiscal de Panamá"; obligación que no conlleva ningún tipo de ventaja o excepción para alguna de las empresas que utilicen los mencionados puertos, por lo que esta Superioridad estima que el Decreto acusado no es violatorio del artículo 19 constitucional.

Por último, el actor también señala como violado el artículo 274 de la Constitución Política, que establece que todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas en el respectivo presupuesto. Dicha norma señala además, que no se percibirán entradas por impuestos que la ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el presupuesto.

Con respecto a la aducida infracción, el Pleno de la Corte hace suyo el criterio expuesto por la Sala Tercera de esta Corporación de Justicia, en su fallo de 8 de abril de 1992, en el que se dejó establecido lo siguiente:

> "Si bien es cierto que el artículo 204 (sic) de la Constitución señala que todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas en el presupuesto, no es menos cierto que la ley puede preveer en casos especiales en que existan poderosas razones de orden público o de interés social, la creación de fondos especiales formados por fondos que percibe una institución estatal por servicios prestados a los administrados. Nada impide tampoco, a juicio de la Sala, que en estos casos excepcionales la

ley autorice a la institución estatal respectiva que esos fondos, que pueden no estar presupuestados, sean utilizados por la propia institución para sufragar algunos de sus gastos. Si bien la Corte Suprema examinaría en cada caso la justificación de esa medida, no es menos cierto que estos casos, que no deben ser la regla general sino la excepción, pueden darse dentro de nuestro ordenamiento jurídico si la ley así lo prevé. Debe entenderse que en estos casos excepcionales los respectivos fondos pueden ser fiscalizados por la Contraloría General de la República, con sujeción a las normas jurídicas especiales que regulen esos fondos". (Petición de interpretación. Registro Judicial, abril 1992. Pág. 44-54).

En base a los razonamientos anteriores, el Pleno concluye que el Decreto de Gabinete No. 74, modificado parcialmente por el Decreto de Gabinete No. 78 de 188 de julio de 1990, no vulnera el contenido de los artículos 195 numeral 7, 153 numeral 11, 48, 261, 19, 274 ni ningún otro de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Decreto de Gabinete N° 74, modificado parcialmente por el Decreto de Gabinete N° 78 de 18 de julio de 1990.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIO INSTRUIDO CONTRA EL DOCTOR JOSÉ MANUEL TERÁN, MINISTRO DE SALUD, POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, (DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA ROSA MARÍA SÁNCHEZ DE ISAZA). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Para la calificación legal de rigor han sido remitidas Al Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia por parte de la Procuraduría General de la Nación las sumarias relacionadas con la denuncia presentada por la licenciada ROSA MARIA SANCHEZ contra el Ministro de Salud doctor JOSE MANUEL TERAN, por el supuesto DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (falsificación de documento, y ejercicio ilegal de la profesión de Médico).

### FUNDAMENTO DE LA DENUNCIA PENAL

La denuncia criminal en comento fue presentada ante el Despacho del señor Procurador General de la Nación el 22 de enero de 1999, y en ella plantea la denunciante que el señor TERAN SITTON presuntamente ha falsificado documentos y que está ejerciendo la profesión de médico de manera ilegal, dado que en su poder se encuentra dos (2) copias de diploma de Médico Cirujano del precitado, y que las mismas son diferentes a pesar de que fueron expedidas en la misma fecha, el mismo año y la misma universidad.

En efecto, la parte denunciante expone la acusación vertida en base a los

argumentos ampliados sucesivamente (ver fojas de 1-7; de 8-11; de 68-71; de 72-74; y foja 75 de los antecedentes) y que reproducimos a continuación en forma sucinta:

"Mi presencia ante este despacho obedece a mi deseo de presentar denuncia por FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO, EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION DE MEDICO y cualquier otro delito que pueda probarse en el transcurso de la instrucción sumaria. Esta denuncia la estoy basando en el hecho de que en mi poder reposan dos (2) copias de diploma de Médicos Cirujanos del señor MANUEL TERAN SITTON, siendo que las mismas son totalmente diferentes a pesar de que se supone que fueron expedidas en la misma fecha, el mismo año y por la misma universidad. Dichas fotocopias las estoy aportando con la presente denuncia, además de copias de los créditos presen como expedidos a favor del señor TERAN SITTON por la Universidad del Noreste, ubicada en la República de Méjico, adicionalmente también aporto copia de la fotografía que aparece en los créditos originales expedidos por esta universidad a nombre de JOSE MANUEL TERAN SITTON y que solicito se investigue y se haga un peritaje pues dicha fotografía no es del precitado señor (SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DESPACHO RECIBE LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS). Como aclaración deseo manifestar que la copia del diploma en que aparece la fotografía del señor TERAN SITTON de lado sonriente, es la que el mismo aportó al Ministerio de Educacación y la otra copia donde aparece de frente y serio es la que aportó al Ministerio de Salud al momento de tramitar su idoneidad como médico para ejercer en la República de Panamá"

"Mi presencia ante este despacho en el día de hoy obedece a que deseo aportar, como parte de la denuncia por mi presentada el 22 de enero del año en curso en contra del señor JOSE MANUEL TERAN SITTON por Falsificación de Documentos, Ejercicio Ilegal de la Profesión de Médico y cualquier otro delito que surja de la investigación, dejo constancia que estoy haciendo entrega al despacho de copia de créditos emitidos por la Universidad del Noreste, créditos éstos que no coinciden por los presentado por el día de la presentación de la denuncia, además estoy haciendo entrega de fotocopia de certificación expedida por el Consejo Técnico de Salud, donde consta que en el expediente del Dr. Terán, Sittón que consta en esa institución no se encuentra copia de la documentación del externado ni del servicio social que éste debió prestar como requisito indispensable para la terminación de la carrera de medicina"

"Señor Fiscal mi presencia en el Despacho en el día de hoy, obedece a que deseo aportar al expediente contentivo de la denuncia por mí presentada en contra de JOSE MANUEL TERAN SITTON, una certificación emitida por el señor CARLOS MONTUFAR A., con cédula 8-81-56, mejor conocido como CARLOS DE PANAMA, por la amplia experiencia que tiene en todo lo que a fotografía se refiere y en la cual nos certifica que después de ampliar la fotografía que obra en el expediente a fojas 4 y la que obra a foja 5, además de la que obra a fojas 10, pudo determinar que las de las fojas 4 y 5 pertenecen a la misma persona no así, la de la foja 10, que a pesar de tener el mismo nombre, no concuerdan con el parecido físico de JOSE MANUEL TERAN SITTON. Quiero dejar constancia que a fojas 3 del expediente se encuentra una ampliación por mí aportada de la fotografía de los créditos de la foja 10 que fue la que utilizó el fotógrafo como punto de comparación con las otras dos (SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DENUNCIANTE HACE ENTREGA DE LA NOTA DE CARLOS DE PANAMA)".

"Señor Fiscal, mi presencia en el Despacho en el día de hoy es que deseo aportar copia del acta de examen profesional del Dr. JOSE MANUEL TERAN SITTON ya que el que obra a fojas 21 del expediente y que fuera aportado por el Ministerio de Salud (CONSEJO TECNICO) el

nombre de la Directora General de Incorporación y Revalidación de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encuentra al pie de dicha acta no concuerda ya que en la aportada por el Ministerio aparece Licenciada MARIA HEIDI PEREÑA GILI y en la que yo estoy aportando aparece Licenciada MARIA HUIDI PORUÑA GILL. Quisiera dejar constancia también de que según investigaciones efectuadas sobre la fecha de presentación de dicho examen encontramos que el dieciséis (16) de enero de 1983 correspondía a un día domingo, y en la Embajada de México, el vice cónsul nos informó no puedo precisar la fecha que los domingos no se efectúan exámenes profesionales en ninguna Universidad de México (SE DEJA CONSTANCIA QUE LA DECLARANTE APORTA COPIA DE LO ANTES MANIFESTADO AL DESPACHO)".

"... el motivo de mi presencia en el despacho, es para poner en conocimiento del mismo, que en averiguaciones por mí efectuadas a llegado a mi conocimiento la información de que la UNIVERSIDAD DEL NORESTE, obtuvo su título profesional el DOCTOR LUIS CARLOS SINGARES. Deseo solicitar que se oficie al Ministerio de Salud a fin de que se sirvan enviar la documentación aportada para sacar su idoneidad por el DOCTOR TERAN SITTON, para poder comprobar si la documentación aportada por ambos concuerda para poder obtener su idoneidad como médicos en la República de Panamá concuerda".

VISTA FISCAL

La Procuraduría General de la Nación, una vez recibida la denuncia en cuestión, aprehendió el conocimiento de la misma, y dispuso iniciar todas las diligencias útiles a fin de determinar si efectivamente concurrían las circunstancias aducidas y se comprobaba la existencia del hecho punible.

El señor Procurador General de la Nación, después de adelantadas las diligencias de instrucción pertinentes, que incluyeron peritajes, declaraciones juradas, y certificaciones de instituciones, tanto nacionales como extranjeras, acerca de la autenticidad de los documentos que acreditan que el doctor TERAN es médico graduado en la Universidad Noreste de México, ha solicitado a este Tribunal el sobreseimiento definitivo, de carácter objetivo e impersonal de acuerdo al numeral 1 del artículo 2210 del Código Judicial, mediante Vista Fiscal N° 3 de 24 de enero de 2000 (ver de foja 154 a 159).

El representante del Ministerio Público, ha razonado su solicitud con base en los siguientes argumentos:

"Una vez detallada detenidamente las constancias procesales acreditadas en la presente investigación, este despacho no encuentra elementos que comprueben la comisión de los delitos imputados al Doctor JOSE MANUEL TERAN SITTON.

Lo anterior se concluye toda vez que los señalamientos esgrimidos por la denunciante, fueron desvirtuados con las investigaciones realizadas siendo una de ellas, la experticia practicada al diploma de JOSE MANUEL TERAN SITTON, donde se concluyó que los formatos presentan características similares, que los sellos proceden de una misma matriz o fuente de origen, además, la firma cuestionada y la firma suministrada como elemento de comparación CONCUERDAN EN TODAS SUS PARTES.

Así también se corroboró mediante el Consejo Técnico de Salud que el señor MANUEL TERAN SITTON realizó estudios de la Carrera de Médico Cirujano en la Universidad del Noreste, durante el período 1979-1982 y sustentó su examen profesional el 16 de enero de 1983, el cual aprobó y el día 9 de enero de 1985 le fue expedido el título de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de México.

Aunado a lo anterior, la Sub-Procuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales Agregaduría Legal P. G. R. de los Estados Unidos Mexicanos, nos comunicó, entre otras cosas, que la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública registró el 3 de mayo de 1985, el título profesional de Médico Cirujano a favor de JOSE MANUEL TERAN SITTON, registrado con el expediente número V/201.05/47328".

Esta Superioridad considera oportuno sintetizar los puntos medulares sobre los cuales versa la denuncia presentada por la licenciada ROSA MARIA SANCHEZ, el señor Ministro de Salud:

1. Alega la denunciante que existen dos copias diferentes del diploma de Médico Cirujano del señor JOSE MANUEL TERAN, en las cuales consta que fueron expedidas en la misma fecha, en el mismo año, y por la misma universidad;

2. Según la denunciante, la copia de la fotografía que aparece en los créditos originales expedidos por la Universidad del Noreste de México, a nombre de JOSE MANUEL TERAN SITTON no es del precitado señor;

3. La denunciante sostiene, que los créditos emitidos por la Universidad del Noreste, no coinciden con los aportados el día de la presentación de la denuncia, y que en el expediente del doctor TERÁN SITTÓN que reposa en el Consejo Técnico de Salud no aparece copia de la documentación del externado ni del servicio social que éste debió prestar como requisito indispensable para la terminación de la carrera de medicina; y

4. Que según investigaciones efectuadas por la denunciante sobre la fecha de presentación del examen profesional del Dr. JOSE MANUEL TERAN SITTON encontró que, el dieciséis (16) de enero de 1983 correspondía a un día domingo, y en la Embajada de México, el vice cónsul le informó, en una fecha que no recuerda, que los domingos no se efectúan exámenes profesionales en ninguna Universidad de México.

Acorde con lo expuesto, se observa que el delito imputado al Señor Ministro de Salud es el definido en el Título VIII, Capítulo I, desde el artículo 265 a 272 del Código Penal.

En estas condiciones, el Pleno de la Corte Suprema procede al análisis de las sumarias remitidas con el fin de darle la debida calificación legal, lo que pasa a realizar seguidamente:

DECISION DEL PLENO

Según consta en el cuaderno de las sumarias, mediante denuncia presentada por la ciudadana ROSA MARIA SANCHEZ, y a la cual se adjuntaron pruebas, se iniciaron las investigaciones penales tendientes a determinar la veracidad de las afirmaciones reveladas por la precitada, en relación al delito contra la fe pública (falsificación de documento, y ejercicio ilegal de la profesión de Médico) atribuido al doctor JOSE MANUEL TERAN SITTON.

Frente a las constancias procesales que obran en las referidas sumarias, esta Superioridad Plena coincide con el criterio vertido por el Procurador General de la Nación, en el sentido que debe sobreseerse definitivamente y de manera impersonal al doctor JOSE MANUEL TERAN SITTON, dado que de las pruebas aportadas por la denunciante, y de las practicadas por el Funcionario de Instrucción del Ministerio Público, se colige la suficiencia del imputado, para el ejercicio legal de la profesión de médico, y por ende cae de su peso que tanto su idoneidad y créditos sustentatorios de la culminación de la carrera de médico se ajustaron a los requisitos de la Universidad del Noreste de México y además, a las formalidades exigidas en nuestro Suelo Patrio para tales efectos.

Una circunstancia especial y de importancia que ha de destacarse, es que

desde los inicios de la denuncia incoada por la señora SANCHEZ, ésta basó sus impresiones en meras sospechas, en relación al contenido de ciertos documentos que, de alguna manera podrían prestarse a confusión en relación a la idoneidad del doctor TERAN SITTON para ejercer la medicina.

Sin embargo frente a este señalamiento, presuntamente apoyado en instrumentos documentales, el Ministerio Público procedió a realizar todas las averiguaciones pertinentes para poder aclarar la situación profesional en que se encontraba el ciudadano JOSE MANUEL TERAN SITTON.

Una de las circunstancias alegadas por la denunciante, es la referente a que existen dos copias diferentes del diploma de Médico Cirujano del señor JOSE MANUEL TERAN, en las cuales consta que fueron expedidas en la misma fecha, en el mismo año, y por la misma universidad. Esta situación fue aclarada desde el momento en que se incorporaron al expediente penal certificaciones de la Universidad Autónoma de México (ver foja 110 de las sumarias), del Agregado Legal de la SubProcuraduria Jurídica y de Asuntos Internacionales-P. G. R.. de México (ver foja 112 del expediente), y la Nota A. J. No. 1137 de 5 de agosto de 1999, suscrita por la Directora encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores (ver fojas 131 y 132), las que se explican por sí solas:

> "De acuerdo con la información que obra en el expediente N° 87800132 a nombre del José Manuel Terán Sittón, éste realizó estudios de la Carrera de Médico Cirujano en la Universidad del Noreste, durante el periodo 1979-1982 y sustentó su examen profesional el día 16 de enero de 1983, en la que resultó aprobado, y su título de Médico Cirujano fue expedido por esta Máxima Casa de Estudios el día 9 de enero de 1985"
>
> "A fin de adelantar la información que en su oportunidad se le hará llegar por la vía idónea, me permito anexar a Usted el oficio que la Secretaria de Educación Pública dirige al Director General de Asuntos Legales Internacionales de la Procuraduria General de la República, mediante el cual le informa que está en trámite para obtener la información solicitada, sin embargo señala que la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública registró con fecha de 3 de mayo de 1985, el título profesional de Médico Cirujano a favor de JOSÉ MANUEL TERÁN SITTÓN expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber realizado los estudios correspondientes en la Institución incorporada a ella, registrado en el expediente Número V/201.05/47328".
>
> "Igualmente, me complace informarle que la Embajada de Panamá en México pidió información directamente a la Universidad Noreste, institución educativa donde realizó sus estudios el Doctor Terán Sittón, la cual reconoció la legalidad de los documentos académicos del Doctor Terán Sittón.
>
> Adjunto remito copia de la nota de 4 de agosto de 1999, remitido a nuestra Embajada por la Universidad del Noreste, mediante la que certifica la autenticidad de los documentos académicos del Doctor Terán Sittón".

Las respuestas anteriores, constituyen elementos cardinales para el esclarecimiento de las inquietudes planteadas por la denunciante en relación con la idoneidad del doctor TERÁN.

Por otro lado reposa, en esta encuesta penal, el cotejo grafo-técnico que realizó el Departamento de Criminalística, sección de Documentología Forense, de la Policía Técnica Judicial con el propósito de determinar si el formato, sellos y firmas que aparecen en el diploma del doctor TERAN concuerdan con los utilizados por la Universidad Autónoma de México. El resultado del examen

pericial antes indicado corrobora la autenticidad del diploma del doctor TERÁN SITTÓN pues dicha experticia arrojó la siguiente conclusión (ver fojas 103 y 104):

> "CONCLUSION: POR TODO LO ANTES DESCRITO Y EN BASE A LO OBSERVADO EN EL PRESENTE ESTUDIO CONCLUIMOS QUE:
>
> a) LOS FORMATOS PRESENTAN CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATORIAS SIMILARES.
>
> b) LOS SELLOS PROCEDEN DE UNA MISMA MATRIZ O FUENTE DE ORIGEN.
>
> c) LA FIRMA CUESTIONADA Y LA FIRMA SUMINISTRADA COMO ELEMENTO DE COMPARACIÓN CONCUERDAN EN SUS PARTES".

En lo que concierne a que la copia de la fotografía que aparece en los créditos originales expedidos por la Universidad del Noreste de México, a nombre de JOSE MANUEL TERAN SITTON no es del precitado señor, es dable aclarar que lo relevante en estos casos es la autenticidad del diploma y las respectivas firmas que acreditan el grado de estudios de la persona. La fotografía no demuestra en estos casos nada, máxime que la propia denunciante afirma que las fotos de los diplomas si bien son distintas pertenecen ambas a la misma persona del doctor TERÁN SITTON (veáse foja 68).

Además cabe recalcar que a fin de cuentas la licenciada ROSA MARIA SANCHEZ sólo aportó copias con el fin de que el Ministerio Público se encargara de esclarecer la situación, que a su concepto, era anómala.

En otro orden de ideas, en cuanto a que en el expediente del doctor TERÁN SITTÓN que se encuentra en el Consejo Técnico de Salud no reposa copia de la documentación del externado ni del servicio social que éste debió prestar como requisito indispensable para la terminación de la carrera de medicina, indicamos que tal y como puede verificarse en el expediente sumarial, a partir de la foja 34, se evidencian los créditos de la carrera de medicina, la certificación del externado realizado por el doctor TERÁN en la Región de Salud de Panamá Oeste, del 1 de octubre de 1985 al 30 de septiembre de 1988 acompañado de su respectiva evaluación, diplomas de la Universidad del Noreste de México etc. Estos señalamientos desvirtúan los planteamientos de la denuncia que propusiera la licenciada ROSA MARIA SANCHEZ ante el Ministerio Público.

En lo relacionado con las dudas expuestas por la denunciante sobre la fecha de presentación del examen profesional del doctor JOSE MANUEL TERAN SITTON, el Pleno considera que tal aseveración no cuenta con ningún respaldo probatorio, en adición a que el hecho de que un examen se haya sustentado un día domingo, no es motivo para conceptuar que son falsos el diploma y demás documentos que acreditan el título profesional el doctor TERAN SITTON. Sobre el particular, conviene resaltar la certificación extendida por la Universidad del Noreste de México de fecha de 4 de agosto de 1999, que milita a foja 132 de las sumarias en la que dicha Institución Educativa hizo constar:

> "Habiendo verificado los documentos académicos del alumno JOSE MANUEL TERAN SITTON Clave 101420 afirmamos que la documentación enviada por el mismo así como la derivada de su expediente académico es auténtica. Por lo anteriormente expuesto, certifico que el Sr. JOSE MANUEL TERAN SITTON de nacionalidad panameña cumplió con todos y cada una de las formalidades requeridas por la Ley en México para obtener el Título de MEDICO CIRUJANO."

Luego de valorados todos los elementos de convicción incorporados a los autos, la Corte concluye que existen suficientes evidencias demostrativas que los presuntivos hechos punibles denunciados no se han ejecutado. Ello es que en relación con el cargo de falsificación de documentos, las piezas probatorias desvirtúan este señalamiento, por cuanto que tanto el diploma como las firmas de

las autoridades académicas que los suscribieron son auténticas, y no existe motivo fundado para desconocer su pleno valor legal. En el mismo sentido, el Pleno tampoco encuentra sustento con respecto a la supuesta comisión del delito del ejercicio ilegal de la profesión de médico, ya que los documentos oficiales extendidos por las autoridades del Ministerio de Salud acreditan que el doctor JOSE MANUEL TERAN sí cuenta con la idoneidad para ejercer dicha profesión en la República (veánse fojas 35, 86, 87, 88, 89, 90, y 184 del expediente).

Como corolario de todo lo anterior, concuerda este Tribunal Colegiado con la recomendación expresada por el Procurador General de la Nación, en cuanto a que no se han configurado los hechos punibles, que según la licenciada ROSA MARIA SANCHEZ, habían sido perpetrados supuestamente por el doctor JOSE MANUEL TERAN SITTON. En este sentido, el Pleno reitera, con apoyo en la documentación que reposa en el expediente, que el denunciado cumplió con todos los requisitos exigidos por la Ley y los Reglamentos, para convalidar con éxito todo los instrumentos que lo autorizan ejercer la carrera de médico cirujano en nuestro Suelo Patrio, por lo que es procedente el sobreseimiento impersonal y definitivo, como lo consagra el numeral 1 del artículo 2210 del Código Judicial.

En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO E IMPERSONAL en las sumarias que se seguían al doctor JOSE MANUEL TERAN SITTON, Ministro de Salud, con cédula de identidad personal N° 4-116-1880 por la presunta comisión del DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (falsificación de documento, y ejercicio ilegal de la profesión de Médico) que denunció la licenciada ROSA MARIA SANCHEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JORGE FÁBREGA P. (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) YANIXA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE PRORROGA DE LA COMPETENCIA INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SIDNEY SITTON URETA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FRANK LUZER PARDO Y OTROS, POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ORISTELA OCARIS BATISTA BARBA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Sidney Sitton Ureta presentó escrito de Incidente de Prórroga de la Competencia dentro del proceso penal que se le sigue a su representado FRANK LUZER PARDO, a su hermano Sandy Luzer Pardo y a la concubina de éste, Carmen Gisela Moreno Vega por el homicidio de Oristela Batista Barba ocurrido el 8 de diciembre de 1995; solicitando que el juicio se celebre en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial con sede en la provincia de Panamá.

FUNDAMENTO DEL INCIDENTISTA

El licenciado Sittón Ureta manifiesta que al referirse al homicidio de la joven Oristela Batista Barba, los medios de comunicación social hicieron enormes y reiterados despliegues noticiosos que suscitaron un ambiente general de animadversión y hostilidad contra su defendido. Situación que en una comunidad pequeña crea una actitud hostil capaz de influir en el jurado popular lo que no

garantiza la imparcialidad de la justicia.

En ese sentido se refiere a que el programa "Zona Roja" de Telemetro Canal 13 que en octubre de 1997 abordó a su representado indicando que éste mató a Oristela Batista Barba. Igualmente el programa "Entérate" trasmitido en Canal 4 en febrero de 1997, hizo alusión directa contra su defendido como el culpable.

Agrega que tales programas hablaron de ritos satánicos como móvil del crimen.

Igualmente se refiere a que programas radiales escuchados y aceptados en la Península de Azuero, tales como "El Jurado del Pueblo" de radio República y "La Mesa Revuelta" de la Exitosa, se han dedicado a prejuiciar a la opinión pública, participando los oyentes por teléfono y señalando que los procesados merecen no sólo la condena sino también la pena de muerte.

Añade que el diario Crítica Libre tituló en primer plano "La asesinó y se baño con sangre de su víctima" refiriéndose a Frank Luzer Pardo y el día anterior, 18 de febrero de 1997 titula como noticia principal en primera plana: "Arrestan a homicidas. Ritos satánicos en el asesinato de 28 puñaladas a joven santeña".

Manifiesta que incluso Sandy Patrick Luzer Pardo, hermano de su representado, ha tenido que asumir su propia defensa dado que el abogado que lleva la causa tiene temor ante el repudio general que ha despertado el delito.

Estima así, que siendo la provincia de Los Santos una comunidad pequeña, de arraigadas costumbres y devota fiel de la Virgen Santa Librada, todas esas noticias hacen más que imposible encontrar un jurado de conciencia que no esté prejuiciado sobre el caso. Lo que en su concepto hace justificable el cambio hacia otro Tribunal de igual jerarquía, para que en un ambiente de imparcialidad y de respeto por el debido proceso legal se juzgue a los hermanos Luzer Pardo.

Por tanto, sugiere que el juicio se celebre en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial con sede en Panamá (fs.1-7).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La licenciada Nedelka Díaz de Castillo, Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, opina que se debe negar la prórroga de competencia solicitada por la defensa del inculpado Frank Luzer Pardo.

En ese sentido sostiene que en el listado del jurado de conciencia que reposa en el Tribunal Superior se tienen personas de respetada honorabilidad de las provincias que componen el Cuarto Distrito Judicial, es decir, Herrera y Los Santos.

Señala que si el homicidio fue difundido por los medios de comunicación social, como televisión, radio y periódicos, éstos son medios que tienen una proyección y alcance a nivel nacional, por lo que son vistos, escuchados y leídos por la mayoría de la población panameña y no sólo en la provincia de Los Santos. Y que al igual que el presente caso, a diario aparecen en estos mismos medios, titulares y noticias de hechos delictivos ocurridos en otras áreas del país y no por ello se ha prorrogado la competencia. Como ejemplo cita, el caso Watt e indica que se tendría entonces que trasladar la competencia a otros países en donde el jurado no haya siquiera escuchado o leído noticia al respecto.

Por otro lado indica que si bien el defensor ha expresado de manera reiterada que en los medios de comunicación social han despertado una reacción generalizada de animadversión y hostilidad contra su defendido, no aportó las pruebas que indiquen que la población santeña y herrerana así lo hayan expresado; cuando no se repele al imputado en sí, sino al hecho mismo de sangre, porque nadie aplaude el homicidio.

Finalmente sugiere la representación fiscal, que si se le quiere otorgar atención a la solicitud del letrado, se puede llevar el jurado de Veraguas y Coclé al cuarto distrito, dado los escasos recursos con lo que cuentan la madre, hermanos, padres y demás familiares de Oristela Batista Barba para trasladarse a otra jurisdicción. Además que no se debe olvidar el derecho de la víctima y sus representantes (fs.36-40).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

En primer lugar, de conformidad con lo normado en el artículo 264 del Código Judicial, corresponde a la Corte Suprema disponer por razones de conveniencia pública, que conozca de determinado asunto penal un Tribunal distinto de aquel al cual está atribuido por razón del lugar donde debe ventilarse el juicio, siempre que sea de igual categoría.

En virtud de esta disposición nos adentramos al estudio del planteamiento hecho por el recurrente.

Los documentos aportados por el licenciado Sittón Ureta son demostrativos de que la prensa escrita informó en sus titulares la noticia del homicidio de la joven Oristela Batista Barba, refiriéndose a Ritos Satánicos como móvil y a los hermanos Luzer Pardo como protagonistas del mismo, situación que ciertamente crea un ambiente de animadversión contra los imputados.

Ahora bien, sostiene el recurrente que la panorámica difundida hace difícil que se encuentre en el Cuarto Distrito Judicial, que comprende las provincias de Herrera y Los Santos, personas en la lista de Jurados que no hayan sido prejuiciadas a través de los medios de comunicación social y por las costumbres extremadamente arraigadas que existen en estas comunidades.

Sin embargo no debemos obviar que la publicidad del homicidio en comento fue a nivel nacional y no sólo en la provincia de Los Santos, y las razones de tradición y costumbres religiosas no son exclusivas de dicha región del país, por lo que la afectación o influencia de dicha publicidad en la opinión pública y por ende en la conciencia de los ciudadanos es también de alcance nacional.

De todos es conocido que muchas veces los medios de comunicación difunden noticias sobre procesos criminales de manera tergiversada, lo que repercute sobre la persona del procesado quien es considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa (art. 22 de la Constitución Nacional).

Por ello vale la pena aprovechar para expresar nuestra preocupación ante la reiteración impune de esta práctica de los medios de comunicación masiva que en el afán de difundir hechos que se producen en nuestro medio, introducen juicios de valor atribuyéndose el derecho de calificar la conducta de los investigados, e incluso sancionarlos valiéndose del pretexto de que se está produciendo una "noticia" de interés colectivo.

De hecho esta práctica, desafortunadamente tolerada durante demasiado tiempo, es a todas luces violatoria del principio de presunción de inocencia que constituye una garantía constitucional, y que puede conllevar a la contaminación de los procesos judiciales por virtud del prejuicio que se infunde en los asociados frente a los procesados.

Además, valga la ocasión también para decir, que incluso se revela un cierto desprecio y frialdad frente a las víctimas y sus familiares, puesto que no se considera el impacto negativo y perdurable que puede producir en ellos, el inadecuado manejo y difusión que se hace de los acontecimientos tomados como "noticias".

Ahora bien, enmarcado dentro del principio constitucional del Debido Proceso está garantizarle al imputado y demás partes un procedimiento que se

desarrolle de manera imparcial a objeto de alcanzar la verdad real y material de los mismos.

Sin embargo, dadas las características que presenta el caso bajo examen y tomando en cuenta que los argumentos presentados por el incidentista son igualmente válidos para todo proceso en que los imputados y los hechos hayan sido difundidos a través de los medios de comunicación de alcance nacional, lo cual pudiera afectar a la población con la consiguiente contaminación del jurado, aun cuando procedan de otro distrito judicial, la Corte estima que la petición no es atendible.

Adentrándonos al contenido de la solicitud del postulante, advertimos que por un lado pide el cambio del Tribunal que juzga a los hermanos Luzer Pardo, y luego de manera específica solicita que el juicio se celebre en el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial con sede en la provincia de Panamá.

Por su parte, la señora fiscal, licenciada Nedelka Díaz de Castillo, sugiere que los miembros del Jurado de Conciencia sean llevados de otro distrito judicial al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dado los escasos recursos de los familiares de la víctima.

Respecto a la sugerencia fiscal, la misma no se ajusta a lo normado en el artículo 264 del Código Judicial, el cual ordena los siguiente:

> "Por razones de conveniencia pública, la Corte Suprema podrá disponer que conozca de determinado asunto penal un Tribunal distinto de aquel al cual está atribuido por razón del lugar donde debe ventilarse el juicio, siempre que sea de igual categoría" (Lo resaltado es nuestro).

Como bien se observa, la norma por un lado autoriza el conocimiento del proceso penal a la competencia de otro Tribunal; y no trasladar Jurados de Conciencia de un distrito judicial a otro.

Por lo que apegada a la norma de procedimiento que ha sido transcrita y analizada, no encuentra el Pleno de esta Corte fundamento jurídico para acceder a lo solicitado por el incidentista.

Debemos sin embargo recordar que ante la panorámica expuesta, al imputado le cabe la posibilidad de optar por el juicio en derecho lo cual es una facultad que puede ejercer libremente.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA EL INCIDENTE presentado por el licenciado Sidney Sitton Ureta dentro del presente proceso penal.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) YANIXA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN, SEGUIDAS CONTRA EL LEGISLADOR ARCELIO BATISTA Y NELLY

ALLARD, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA FÉ PÚBLICA EN PERJUICIO DE BANDERLITT LEZCANO SUIRA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Han sido remitidas Al Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia por parte del Juez de Circuito de Bocas del Toro, Ramo de lo Penal, las sumarias relacionadas con la denuncia presentada por la licenciada PETRA MARIA SORIANO en nombre y representación de Banderlitt Lezcano Suira, representante legal de Comerciales San Francisco, S. A. contra el doctor ARCELIO BATISTA, por el supuesto DELITO CONTRA LA FE PUBLICA.

De inmediato observa esta Suprioridad Judicial, que el Juez Penal del Circuito de Bocas del Toro, pretermitió el trámite de rigor a aplicar a las referidas sumarias, el cual consistía en enviar al Procurador General de la Nación toda la actuación investigativa para que este Funcionario de Instrucción procediera con lo legalmente pertinente. Esta omisión por parte del Juez Penal no le permite a esta Máxima Corporación Judicial aprehender el caso sub-júdice para su respectiva calificación.

Por ello es importante puntualizar que para que esta Corte Suprema pueda calificar la sumarias relacionadas con la denuncia contra el doctor ARCELIO BATISTA, es requisito sine qua non que el Jefe del Ministerio Público prosiga con averiguaciones que culminarían con la Vista Fiscal, el cual es la opinión del Funcionario de Instrucción de lo acaecido en la realidad fáctica, y que en última instancia es el punto de referencia, junto con las pruebas, que utiliza la Corte para resolver la procedencia o no del delito alegado en la denuncia. El numeral 2, del artículo 347 del Código Judicial en relación a lo anteriormente comentado, preceptúa que:

> "Artículo 347: Son atribuciones especiales del Procurador General de la Nación:
>
> 1. ...
> 2. Instruir las Sumarias y, en general, ejercer la acción penal en los procesos por delitos cuyo conocimiento esté atribuído a la Corte Suprema de Justicia o a la Sala de lo Penal de ésta;" ...

Es imperante hacer notar que actualmente el ciudadano ARCELIO BATISTA ostenta el cargo de Legislador, del Circuito 1-1 de la Provincia de Bocas del Toro, lo que en principio supone que el precitado goza de inmunidad parlamentaria, y esta circunstancia es de vital importacia para el manejo de esta causa penal, cuya etapa sumarial no ha culminado de acuerdo a lo que se colige del expediente.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REMITEN AL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, para lo que corresponda, las Sumarias relacionadas con la denuncia presentada por la licenciada PETRA MARIA SORIANO en nombre y representación de Banderlitt Lezcano Suira, representante legal de Comerciales San Francisco, S. A. contra el doctor ARCELIO BATISTA, por el supuesto DELITO CONTRA LA FE PUBLICA.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) YANIXA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCION DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROMOVIDA POR EL LICENCIADO JAVIER QUINTERO RIVERA, EN REPRESENTACION DE ERICK RAFAEL DE PUY GARCIA, CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, AUTO FORMAL DE 27 DE OCTUBRE DE 1999. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito de fecha 9 de febrero del año 2000, la Magistrada, MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA ha presentado solicitud para que se le declare impedida y en consecuencia se le separe del conocimiento de la presente acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por el licenciado JAVIER QUINTERO RIVERA, en representación de ERICK RAFAEL DE PUY GARCIA, contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, de fecha 27 de octubre de 1999.

La referida resolución se emitió dentro del secuestro penal decretado mediante Auto No. 391 de 26 de julio de 1999, proferido por el Juez Cuarto de Circuito de Chiriquí, Ramo Penal dentro del sumario que por delitos CONTRA LA FE PUBLICA el amparista interpusiera contra las señoras MIRIAM MARGARITA DE PUY LASSO y MARGARITA DE PUY GARCIA.

La Magistrada FRANCESCHI DE AGUILERA fundamenta su impedimento en el hecho que su "... hijo Rodolfo Aguilera Franceschi actuó como apoderado judicial del señor Jorge Luis de Puy García, hermano del amparista, en la demanda que éste presentó ante una de las Juntas de Conciliación y Decisión contra las sociedad ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., de las que son accionistas los hermanos De Puy García".

La manifestación de impedimento se confronta con lo dispuesto en el artículo 2619 del Código Judicial, el cual indica lo siguiente:

> "2619: Los magistrados y jueces que conozcan esta clase de asuntos se manifestaran impedidos cuando sean parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados o hayan participado en la expedición del acto".

JORGE LUIS DE PUY GARCIA demandó laboralmente, a través del licenciado RODOLFO AGUILERA FRANCESCHI a las empresas ANDY ELENA, S. A., AN DE PUY,S. A. Y DE PUY FAGIA S. A., de las cuales el amparista ERICK RAFAEL DE PUY GARCIA es accionista y a cuyo favor se ha presentado esta acción constitucional.

De allí que la manifestación de impedimento de la Magistrada FRANCESCHI DE AGUILERA no se ajusta a los parámetros jurídicos contenidos en el artículo 2619 del Código Judicial, ya que el licenciado AGUILERA FRANCESCHI no es apoderado de ninguna de las partes en esta acción constitucional.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA y DISPONE que siga conociendo del caso.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) JOSE ANDRES TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) YANIXA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JORGE FEDERICO LEE DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ABILIO RODRÍGUEZ B. CONTRA EL OFICIO N° 519 DE 14 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.**

**VISTOS:**

**En la acción de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Abilio Rodríguez en contra del oficio N| 519 de 14 de marzo de 1996, expedido por el Juzgado Primero civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso propuesto por VIRCA, S. A. contra LUCIO SANCHEZ, el Magistrado Sustanciador, Jorge Federico Lee ha solicitado al Pleno de esta Corporación que se le declare impedido para conocer de esta acción con fundamento en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 2562 del Código Judicial, dado que "a lo largo de todo el libelo de demanda se deja ver que el demandante se muestra inconforme con la actuación del Banco General S. A. como sujeto pasivo del oficio que se acusa de inconstitucional" y la firma de abogados Alemán, Cordero Galindo & Lee, de la que es socio "asesora en asuntos jurídicos al Banco General, S. A., por lo que "pudiera alegarse que el suscrito tiene interés en la decisión del caso".**

**El Pleno no encuentra fundamento legal para acceder al impedimento solicitado pues se está en presencia -de acuerdo con la documentación incorporada a esta demanda de inconstitucionalidad- de un proceso ordinario en donde la parte actora promovió una acción de secuestro contra LUCIO SANCHEZ SANCHEZ, a la que el Juzgado Primero del Ramo Civil accedió y mediante oficio N 519 de 14 de marzo de 1996 comunicó al Banco esa medida, indicándole que pusiera a disposición del Tribunal la suma de dinero que mantuviera LUCIO SANCHEZ SANCHEZ hasta nuevo aviso.**

**La demanda de inconstitucionalidad, como se aprecia, es contra el oficio N 519 dirigido por el Juez al Banco dentro de un proceso ordinario en que este no es parte ni existe motivo alguno que pueda sugerir que la institución bancaria o el Magistrado Lee tenga interés en el resultado de la decisión que finalmente haya de tomarse acerca de la pretensión contenida en la demanda de inconstitucionalidad promovida, razón por la cual se concluye que no es del caso declarar el impedimento formulado.**

**Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO , administrado justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley DECLARA que no es legal la manifestación de impedimento del Magistrado Jorge Federico Lee y RESUELVE que siga en el conocimiento de esta acción inconstitucional.**

**Notifíquese.**

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA ARTURO HOYOS
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ROGELIO A. FABREGA
(fdo.) YANIXSA YUEN

Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON DENTRO DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO FERNANDO BASURTO, EN REPRESENTACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE AGOSTO DE 1999, DICTADA POR LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Magistrada GRACIELA J. DIXON, ha solicitado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se le declare impedida y, en consecuencia, se le separe del conocimiento de la demanda de Inconstitucionalidad formulada por el licenciado FERNANDO BASURTO, en representación de la POLICIA NACIONAL, contra la Resolución de 23 de agosto de 1999, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia..

La Magistrada DIXON fundamenta lo medular de su impedimento en los siguientes términos:

> "He de declararme impedida, por cuanto que dicha resolución fue suscrita por mi persona, en mi condición de magistrada sustanciadora. Esto lo fundamento en base a lo preceptuado en el artículo 2562 numeral 2 del Código Judicial:
>
> "Art. 2562. Son causales de impedimento:
> ...
> 2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición."

Por lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento de la Magistrada GRACIELA J. DIXON, para actuar en la Demanda de Inconstitucionalidad presentada a favor de la POLICIA NACIONAL contra la Resolución de 23 de agosto de 1999, dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la separa del conocimiento del mismo y DESIGNA llamar a su magistrado suplente, ROBERTO GONZÁLEZ R., para que asuma el conocimiento del proceso antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RAÚL OSSA, EN REPRESENTACIÓN DEL H. L. ENRIQUE GARRIDO AROSEMENA, CONTRA LA SENTENCIA DEL 24 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR LA SALA QUINTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Raúl Ossa, en representación del H. L. ENRIQUE GARRIDO AROSEMENA, promovió ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recurso de revisión contra la Sentencia fechada 24 de octubre de 1999, a través de la cual, la derogada Sala Quinta de Instituciones de Garantía, concedió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por los Magistrados Elitza Cedeño, Mariblanca Staff y Oscar Ceville contra la orden de hacer contenida en la disposición de la Asamblea Legislativa que aprobó en segundo debate el proyecto de Ley N° 3 de 13 de septiembre de 1999, mediante el cual se deroga la aludida Sala Quinta.

De acuerdo con las constancias de autos, tanto el respectivo poder como el libelo contentivo del mencionado recurso, ambos dirigidos al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, fueron presentados ante la Secretaría General de esta Corporación Judicial, por lo cual corresponde ahora al Pleno pronunciarse sobre la procedencia del mismo (Cfr. 21, 22, y 27).

A juicio de quienes suscriben, el "recurso de revisión" interpuesto por el licenciado Ossa debe rechazarse de plano. Como ha podido apreciarse, con el meritado recurso se pretende obtener la revisión de una sentencia que resuelve una acción de amparo de garantías constitucionales. Se trata, pues, de una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, a través de una de sus Salas, en ejercicio de la llamada función de "control de la constitucionalidad". Conforme ha expresado la jurisprudencia de la Corte, las sentencias dictadas en ejercicio de dicha atribución constitucional no son susceptibles de impugnarse por vía del recurso de revisión, por tratarse de sentencias definitivas, finales y obligatorias.

En Sentencia del 26 de mayo de 1993, mediante la cual se rechazó de plano un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia de amparo dictada por el Pleno en segunda instancia, esta Corporación de Justicia sostuvo lo siguiente:

> "En este caso, el recurso se dirige contra una sentencia de segunda instancia, dictada por el Pleno de la Corte con motivo de una acción de garantías constitucionales. Se trata pues, de una institución de garantía relacionada directamente con el control de la constitucionalidad, porque el fundamento jurídico que genera la intervención del Tribunal competente en estos casos obedece a una tutela de los derechos y garantías de rango constitucional y por tanto le son extensivos los principios finitos concluyentes de obligatoriedad, además de la previsión del artículo 204 constitucional.
> ...
> Lo expresado nos conduce a advertir la improcedencia del recurso de revisión presentado, ya que las decisiones de la Corte, sobre control de la constitucionalidad, en cualquiera de sus modalidades, son finales, definitivas y obligatorias y a diferencia de los asuntos civiles y penales que por mandato legal admiten el recurso de revisión, ello no es posible contra sentencias dictadas por el Pleno, en ejercicio de las funciones que lo convierten en tribunal de las Instituciones de garantía constitucionales." (Registro Judicial, págs. 39-40)

Los anteriores razonamientos son pertinentes aun considerando el hecho de que la Sentencia del 24 de octubre de 1999 fue dictada por la Sala Quinta y no por el Pleno de la Corte, pues, obviamente, al expedir dicha sentencia, la Sala Quinta actuó en ejercicio de la función de "control constitucional", que originalmente correspondía al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

A lo anterior debe agregarse, que la Sentencia de 24 de octubre de 1999, cuya revisión se pide, fue declarada nula a través de la Sentencia de 25 de febrero del año 2000, dictada por el Pleno de esta Corporación de Justicia.

**Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de revisión interpuesto por el licenciado Raúl Ossa, en representación del H. L. ENRIQUE GARRIDO AROSEMENA, contra la Sentencia fechada 24 de octubre de 1999, expedida por la derogada Sala Quinta de esta Corporación Judicial.**

**Notifíquese**

**(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA**
**(fdo.) ARTURO HOYOS** **(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS**
**(fdo.) ELIGIO A. SALAS** **(fdo.) JOSÉ A. TROYANO**
**(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.** **(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.**
**(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.** **(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.**
**(fdo.) CARLOS H. CUESTAS**
**Secretario General**

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**ÓRGANO JUDICIAL**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA PRIMERA DE LO CIVIL**

**MARZO 2,000**

## RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

**PEDRO PABLO ORTEGA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A CRISTÓBAL ELOY LASSO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, UNO (1) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.**

**VISTOS:**

El doctor RICARDO FRANCO AGUILAR, apoderado judicial de PEDRO PABLO ORTEGA BOCANEGRA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 25 de octubre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que el casacionista le sigue a CRISTÓBAL ELOY LASSO NÚÑEZ.

Transcurrido el término que se le concedió a las partes para que dejaran oír sus puntos de vista acerca de la admisibilidad del recurso, sin que fuere aprovechado, corresponde a la Sala decidir sobre su admisibilidad, a lo que se procede, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La cuantía es de las consignadas para el recurso, que es actualmente de B/.10.000.00, y no de B/.3.000.00, como erróneamente señala el recurrente, no obstante que del contexto del proceso se advierte que la cuantía es de las admisibles para este medio de impugnación extraordinario.

El recurso de casación es un recurso extraordinario, que sólo procede en determinados supuestos, aquéllos expresamente consagrados en la ley, y constituye una estructura orgánica en virtud de la cual, la causal o causales, que han de venir separadamente estructuradas, debe revestir la forma que expresamente consagra la ley procesal, concretamente el artículo 1154 para la causal de fondo, que es única, y las causales de forma previstas en el artículo 1155, todos del Código Judicial. El segundo requisito que gobierna la estructuración de este recurso, consiste en los motivos, que son aquellos cargos que el recurrente le imputa a la sentencia recurrida. Dichos motivos son el soporte fáctico del recurso; y, la contención de un cargo, deviene esencial. Sobre este aspecto, la Sala ha dicho: los motivos deben contener cargos a la sentencia atacada y no recuentos fácticos del proceso. No obstante que esta Sala ha determinado que esta circunstancia no es suficiente para declarar el recurso inadmisible, si del contexto general de los motivos, o de uno de ellos individualizados, se desprende el cargo a la sentencia. Con la claridad expositiva que lo caracteriza, el casacionista colombiano HUMBERTO MURCIA BALLÉN (q. e. p. d.), se ha pronunciado en términos que la Sala no puede sustraerse de exteriorizar, para ilustración del recurrente y de los sucesivos recurrentes que acuden a este medio de impugnación extraordinario.

Dice así el ilustre expositor, o, mejor, quienes se dedicaron a preparar una nueva edición (la 4ª) de este clásico en materia del recurso de casación civil:

> "Como la casación adopta una posición de combate a la sentencia así recurrida, el recurrente censura, por considerarlas contrarias a derecho, las conclusiones del fallo, dando las razones en que apoya su ataque o su objeción, y esto lo hace por conducto de los cargos. El cargo es, pues, en casación, la réplica, la objeción o la censura, o el conjunto de réplicas, objeciones, censuras o ataques que el recurrente hace al juicio del fallador de instancia, con miras a que la Corte Suprema le restaure el derecho presuntamente quebrantado por la sentencia que impugna.
>
> Resulta así que las causales de casación vienen a constituir el piso o la base sobre las cuales se deben edificar los cargos, los ataques, las objeciones o las censuras, términos estos que al fin y

al cabo, son sinónimos, y que el recurrente le formula a la sentencia impugnada.

..." (Humberto Murcia Ballén, "RECURSO DE CASACIÓN CIVIL", 4ª edición actualizada, pág. 273, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1996).

Los motivos, pues, han de consistir en cargos que el recurrente le formula a la sentencia, en la forma que se ha dejado transcrita, y cada uno de los motivos debe ser consistente con la causal utilizada. En dicha porción del recurso, lo mismo que en la enunciación de la causal, no deben venir citas de disposiciones que se estiman infringidas, por la sencilla razón que el tercer gran apartado de la estructuración del recurso, está específicamente previsto para la enunciación de cada una de las normas que se estiman infringidas por la sentencia y la explicación de la forma en que la disposición legal que se estima infringida ha sido vulnerada, que le permita al tribunal un enjuiciamiento completo, en la forma de una proposición jurídica. Estas sencillas normas han de venir cumplidas en la estructuración del recurso, y, cuando el recurso no constituya una estructura ininteligible se puede mandar a corregir, en virtud del principio antiformalista (que no informalista) que presiden los recursos en nuestro ordenamiento jurídico-procesal.

Pues bien, en el recurso que la Sala analiza en sede de admisibilidad, tales requisitos no han sido cumplidos. Veamos.

En primer lugar, existe una porción que el recurrente denomina introducción y otra que denomina vicio, que se exigía anteriormente con la vigencia de la Ley de casación, la ley 86 de 1941, y que han sido eliminados de la actual regulación de este medio excepcional de impugnación de las sentencias, y que no corresponden, en la actualidad, a las normas de estructuración del recurso de casación, que viene señalado por el artículo 1160 del Código Judicial.

Como única causal de fondo se invoca violación directa del artículo 783 de la Ley sustantiva, aplicación indebida del artículo 1112 del Código Civil, omisión en la debida aplicación del artículo 1142 y la nula valoración de las pruebas, lo cual fue básico y determinante en la parte resolutiva de la sentencia.

Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta corporación judicial han reconocido que el artículo 1154 del Código Judicial, contempla una sola causal de fondo, la cual consiste en la "infracción de normas sustantivas de derecho", que se puede producir en los siguientes conceptos: violación directa, aplicación indebida e interpretación errónea de la norma de derecho, error de hecho sobre la existencia de la prueba y de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

Consecuentemente, observa la Sala respecto a las exigencias contenidas en el artículo 1160 ibídem, debe señalarse la causal invocada como una de las contempladas en el artículo 1154 del Código Judicial; sin embargo, el casacionista se aparta de la técnica exigida en este recurso extraordinario.

Los motivos, hacen referencia a causales probatorias, las cuales han sido defectuosamente formuladas ("la nula valoración de las pruebas").

En primer lugar, salvo el motivo primero, que es virtualmente una repetición de la causal mal enunciada, los hechos subsiguientes se basan en errores probatorios, que pueden ser, y han de ser enunciados como infracción de la ley sustantiva de derecho, por error de derecho en la valoración de la prueba o error de hecho en la existencia de la prueba, siendo así que la causal probatoria esgrimida no se compadece con la clasificación legal, y no se puede determinar que es consistente con aquélla.

Al citarse las normas que se estiman infringidas, vuelve el recurrente a

apartarse de las exigencias de la ley, ya que el recurrente comete el error de expresar conjuntamente la infracción de varias de ellas. Al respecto, la Sala ha manifestado en diversas ocasiones que, a continuación de la causal y los motivos, deben señalarse las normas que se consideran violadas y la forma como lo han sido, con la debida separación; requisito con el cual no se ha cumplido en esta oportunidad.

En el mismo sentido, en cuanto a la citación de las normas, el casacionista comete el grave error de mencionar todas las normas infringidas sin explicar seguidamente cómo han sido infringidas cada una de estas normas.

En síntesis: La causal expuesta revela que el recurrente omite la causal de fondo que consagra el artículo 1154 del Código Judicial, es decir, "infracción de normas sustantivas de derecho", puesto que invoca el concepto de violación directa, alude a otro concepto distinto: el de omisión en la debida aplicación errónea; y como causales probatorias señala "La nula valoración de la prueba", sin señalar bajo cual de las dos (2) modalidades nos encontramos, todo lo cual resulta contradictorio y apartado de la técnica del recurso de casación.

Dicha contradicción se hace más evidente al analizar los motivos que le sirven de fundamento, ya que no sólo no plantean con claridad los defectos que se le atribuyen a la sentencia atacada, sino que, también, se refieren a situaciones de hecho que guardan relación con los conceptos de la causal de fondo de infracción de la norma sustantiva de derecho en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba y de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Todo lo expuesto implica que se está frente a un recurso en donde la causal está incorrectamente enunciada, los motivos no son congruentes con la causal y las normas infringidas no han sido expresadas debidamente, siendo, en consecuencia, ininteligible el recurso.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado por PEDRO PABLO ORTEGA BOCANEGRA contra la Sentencia de 25 de octubre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS FELIPE ESTENOZ HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, UNO (1) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En la resolución que expidiera la Sala Civil el 26 de enero de 2000, se ordenó a la licenciada SELENIA ISABEL CANTO DE RUIZ, apoderada judicial de LUIS FELIPE ESTENOZ, corregir el recurso de casación en el fondo que había interpuesto contra la sentencia proferida el 9 de agosto de 1999 por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio promovido por LUIS FELIPE ESTENOZ contra FRANCISCA DEL SOCORRO GARCÍA.

Para corregir contó el recurrente con los cinco (5) días que la ley confiere para tales efectos. De fojas 189 a 199 del expediente, reposa el escrito de corrección presentado oportunamente por el casacionista; motivo por el cual procede la Sala entonces a pronunciarse respecto a la viabilidad del mismo, teniendo como referencia los presupuestos establecidos en los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial.

La Sala, luego de revisar el escrito de corrección, encuentra que se han corregido adecuadamente todos los defectos que le habían sido señalados, de manera que en esta oportunidad el recurso aparece expuesto en completo apego a lo que las disposiciones legales exigen para la procedencia de este tipo de recurso, por consiguiente, debe la Corte admitirlo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en el fondo interpuesto por LUIS FELIPE ESTENOZ, mediante apoderada legal, contra la resolución del TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA, con fecha nueve de agosto de 1999.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DISTRIBUIDORA XTRA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La sociedad DISTRIBUIDORA XTRA, S. A., por conducto del licenciado Carlos Augusto Villalaz, ha promovido recurso de casación en el fondo contra la sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de 12 de febrero de 1999, mediante la cual dicho Tribunal reforma la sentencia número 65 del 10 de febrero de 1998, dictada por el Juzgado Primero de Circuito del Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, y CONDENA a la parte demandada, DISTRIBUIDORA XTRA, S. A., a pagarle a la parte demandada, DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS, la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), en concepto de daño moral.

Admitido el recurso, se concedió a las partes los seis días que establece la ley para que alegaran en cuanto al fondo, término que sólo fue aprovechado por la parte recurrente. Evacuada la etapa procesal anterior, procede la Sala a resolver.

ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA:

La demanda ordinaria de mayor cuantía que dio origen al presente proceso fue interpuesta por la señora DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS contra la sociedad DISTRIBUIDORA XTRA, S. A., con el fin de que esta última fuera condenada a pagar a la demandante la suma de CUARENTA MIL BALBOAS (B/.40,000.00) en concepto de indemnización por daños y perjuicios morales por responsabilidad civil extracontractual.

El Juzgado Primero de Circuito Civil del Segundo Circuito Judicial de Panamá, donde quedó radicada la demanda, dio el traslado a la parte demandada. En la contestación de la demanda (fojas 19-20 del expediente), se acepta que

existió una relación laboral entre la demandante y la demandada y se niegan las pretensiones y el derecho invocado.

El Tribunal, en sentencia de 10 de febrero de 1998, "condena en forma abstracta a la empresa DISTRIBUIDORA XTRA, S. A., a favor de la señora DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS a resarcir por los daños morales causados a su persona por el despido injustificado y por acusación ante el Juez Nocturno de Policía, por el no cobro de una cerveza de 0.33 centavos de balboa".

El apoderado judicial de la parte demandada apeló y, surtida la alzada, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR, mediante sentencia de 12 de febrero de 1999, reformó la sentencia de primera instancia, condenando a la parte demandada DISTRIBUIDORA XTRA, S. A., a pagarle a la parte demandante la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00), en concepto de daño moral más el pago de costas por la suma de mil cuatrocientos cincuenta balboas (B/.1,450.00). Frente al aludido acto jurisdiccional, el apoderado judicial de la parte demandada anunció recurso de casación.

RECURSO DE CASACION:

El recurso interpuesto es de casación en el fondo y se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba.

Los motivos que sustentan la causal son los que se exponen:

> "PRIMERO: En la sentencia recurrida el juzgador consideró probado el supuesto daño moral causado a la demandante y le asignó al mismo un valor líquido de cinco mil balboas (B/.5,000.00), sin que exista en el expediente prueba alguna que sirva para constatar el supuesto daño ni mucho menos para fijarle al mismo algún tipo de cuantía.
>
> De igual manera, en la sentencia recurrida se asumen y se dan por ciertos una serie de hechos, que son alegados por la demandante para reclamar en contra de mi representado una indemnización, sin que los mismos sean en ningún momento probados y fundamentados debidamente a lo largo del proceso, ya sea por documentos idóneos, peritos o testimonios, tal como lo exige nuestra legislación patria.
>
> Si la sentencia recurrida se hubiera limitado solamente a considerar los hechos afirmados por la parte actora que han sido realmente probados por la misma, no se hubiera llegado a la decisión de condenar a DISTRIBUIDORA XTRA, S. A., por su supuesta responsabilidad al inferir un daño moral, ya que el mismo no fue de ninguna manera probado y mal puede entonces ordenarle a resarcir un daño que, al no haber sido probado jurídicamente, es a todas luces INEXISTENTE en el plano jurídico.
>
> SEGUNDO: La infracción cometida en la sentencia recurrida en relación al error en la existencia de la prueba conllevó claramente la inaplicación de una serie de normas sustantivas pertinentes, hecho éste que influyó de manera directa en la parte dispositiva de la referida sentencia."

Como consecuencia de lo expuesto en los motivos por el casacionista, el ad-quem incurrió en la violación de los artículos 770 y 773 del Código Judicial y los artículos 1644 y 1100 del Código Civil.

De los motivos transcritos anteriormente se desprende que los cargos de injuricidad que se le imputan a la sentencia de segunda instancia se fundamentan en que los hechos alegados por el demandante no fueron probados en el proceso mediante documentos idóneos, peritos o testimonios, tal como lo exige la ley, y, en consecuencia, que el Tribunal llegó a la errada conclusión de que el

demandante había probado el daño moral ocasionado por el demandado, y dictó una condena indemnizatoria en su contra, sin que existiera prueba alguna dentro del expediente.

Procede la Sala a revisar el contenido de las normas citadas como infringidas.

Se observa que la primera norma citada, el artículo 770 del Código Judicial, no guarda la debida congruencia con la causal invocada (de error de hecho en la existencia de la prueba), sino que es propia de la causal de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, pues es una norma que establece el valor de las pruebas. Por lo tanto, el concepto de infracción de la misma no puede ser considerado por esta Sala.

El casacionista hace referencia a los cargos sobre el error de hecho en la existencia de la prueba al desarrollar el concepto de infracción del artículo 773 del Código Judicial, el cual sí es cónsono con la causal propuesta. Veamos el contenido de dicha norma:

> "Artículo 773: Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables. No requieren prueba los hechos afirmados, por una parte y admitidos por la contraria, respecto a los cuales la ley no exige prueba específica; los hechos notorios; los que estén amparados por una presunción de derecho y el derecho escrito que rige en la Nación o en los Municipios.
>
> Los hechos plenamente reconocidos en el curso del proceso por la parte adversa no requieren prueba".

Considera el recurrente que en la sentencia de alzada el juzgador infringió, en concepto de violación directa por omisión, esta norma, ya que consideró como hechos ciertos las afirmaciones y alegaciones de la demandante sin que las mismas fueran probadas como lo exige la ley. Agrega que "la carga de la prueba es una obligación procesal ya que el llamado a probar un determinado hecho puede hacerlo o no, pero está claro que el juez no puede cumplir este deber, salvo casos excepcionales expresamente determinado por la ley. Asimismo, el juez no puede dar por cierto alegaciones que no han sido probadas".

Como tercera norma violada se cita el artículo 1644 del Código Civil el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 1644: El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
>
> Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas, será solidariamente responsable por los perjuicios causados."

Argumenta que esta norma no fue aplicada por el juzgador ad-quem, ya que la parte actora no aportó pruebas que demostraran el sufrimiento, el padecimiento anímico, la aflicción, la amargura, la preocupación, la angustia y las otras preocupaciones físicas o psicológicas que la afligieron como consecuencia de la denuncia presentada en su contra.

Considera que la supuesta "humillación" de que se dice objeto la agraviada no fue probada, pues los supuestos actos denigrantes y humillantes alegados por la parte actora nunca fueron demostrados a través de testimonios u otros medios probatorios.

Señala que el artículo 1644 exige la obligación de probar el nexo causal existente entre la acción culposa y la existencia del daño y si la demandante no

ha podido probar el daño moral no se puede aceptar tampoco la existencia del nexo causal necesario para que surja la responsabilidad demandada.

Finalmente, considera el recurrente que se incurrió en la violación del artículo 1100 del Código Civil que señala:

"Artículo 1100:

Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o éstas.

Son ineficaces los pactos por los cuales se advierta o modifica la carga de la prueba.

Parágrafo: Esta norma no surte efectos sobre derechos y obligaciones contraídas con antelación a la vigencia de esta ley y que tengan previamente validez".

En cuanto a la violación de este artículo, se sostiene que el Tribunal Superior asume que fueron afectados los sentimientos de la demandante sin que medie prueba de este hecho, pues en ningún momento "se presentaron testimonios de los agravios, ni testimonios de la buena reputación de DAYSI OLINDA GUZMAN que supuestamente se vio afectada con la denuncia, ya que para que se pruebe una disminución o afectación en determinada situación, debe primero establecerse un punto de referencia."

La Sala, antes de entrar a determinar si efectivamente se han dado las infracciones señaladas por el casacionista, considera necesario emitir algunos conceptos sobre cuándo se produce la causal alegada.

El elemento propio de esta causal (error de hecho) trata sobre la existencia de la prueba, y se produce cuándo la prueba en que se basa la decisión no existe, o, cuando existiendo la misma, se ha dejado de apreciar. La jurisprudencia de la Corte ha indicado:

"Para que la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba, sea útil en sus propósitos de fulminar el fallo de instancia, preciso será, además, que el cargo tenga incidencia sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida".

Pasa seguidamente la Sala a analizar cuáles fueron las pruebas que se tomaron en cuenta para resolver la controversia y así determinar si, efectivamente como señala el casacionista, el Tribunal tomó en cuenta pruebas que no existían en el expediente para dictar la sentencia atacada.

Al revisar la sentencia de primera instancia, se aprecia que el juzgador la dictó basándose en dos elementos probatorios incorporados en el expediente: la denuncia presentada en el Juzgado Nocturno de Policía por el gerente del Super Mercado Xtra, S. A. y la nota enviada por el Juez nocturno al Ministerio de Trabajo donde certifica que DAYSI OLINDA GUZMAN fue sobreseída de los cargos formulados en su contra por dicho gerente. Veamos lo que señaló el fallo al respecto:

"Las pruebas aportadas de foja 13 demuestran la acusación de parte del señor Alessandría en contra de la señora GUZMAN que en el contenido de la prueba alega el acusador que la cajera Guzmán no había cobrado el valor de la cerveza de 0.33 centavos. Foja 11 del expediente una nota oficiada al Ministerio de Trabajo de parte del Juez Nocturno de Policía, donde manifiesta que la señora DAYSI OLINDA GUZMAN, fue sobreseída ya que se le pudo comprobar su inocencia de la acusación formulada por el señor Alessandría.

Bajo este parámetro podemos enmarcar la existencia de un sufrimiento

> anímico de parte de la acusada al sentirse preocupada y angustiada ante una aseveración de esa naturaleza ... todo esto conlleva al ánimo de la juzgadora y de acuerdo a la sana crítica, de que la demandante fue acusada ante una autoridad por no cobrar una cerveza de 0.33 centavos y que esa misma autoridad la sobresee y como corolario la despide del trabajo por falta de honradez, se le ha infringido un daño moral a su reputación como ciudadana honesta. A consecuencia de esa difamación, el dinero ayuda resarcir o reparar en alguna forma el honor."

Cabe anotar que la parte demandada, en el período probatorio, solicitó la comparecencia de cuatro peritos idóneos con la finalidad de que evaluaran el daño sufrido por la demandante y adujo pruebas testimoniales. Estas fueron admitidas, y aunque se solicitó nueva fecha para la práctica de las mismas, la etapa de práctica de pruebas precluyó sin que estas se practicaran (Fs. 49-50).

El casacionista, tanto al apelar contra el fallo de primera instancia como al recurrir en casación, arguyó que las documentales, por sí solas y en ausencia de testimonios y peritajes, no demuestran la existencia de la responsabilidad civil extracontractual y tampoco los perjuicios morales que deben ser indemnizados por el demandado.

La materia expuesta en los cargos endilgados contra la sentencia de segunda instancia fue objeto del examen llevado a cabo por el Tribunal Superior cuando conoció el recurso de apelación surtido ante ese Cuerpo Colegiado, en los siguientes términos:

> "En este caso la sentencia que se revisa, estimó viable la reclamación de daños morales de parte de la demandante hacia la empresa demandada, pues encontró justificación plena a los hechos alegados con la demanda, en el sentido de que la parte actora sufrió una humillación al ser detenida y llevada ante el Juzgado Nocturno de Policía, y ser acusada de una falta cometida en ejercicio de sus funciones como cajera del Supermercado XTRA de San Miguelito; cargo que no fue comprobado por su denunciante, no obstante, es claro que le trajo como consecuencia adicional, el despido de su puesto de empleo en esa dependencia comercial."
>
> "Al respecto este Tribunal debe expresar que la existencia del daño, y en especial del daño moral, no necesita para su comprobación de un examen técnico, realizado por profesionales de la psiquiatría o por sociólogos o psicólogos; el examen técnico lo que viene a constituir es un elemento de determinación del alcance de ese daño, pues es posible que el Juez deduzca, tal afectación al honor o los sentimientos del afectado, de las pruebas que le sean aportadas, con independencia de una evaluación técnica, tal como lo sugiere el recurrente.
>
> No resulta difícil poder establecer que la acción del gerente de la empresa demandada, le causó una afectación en los sentimientos a la persona de la demandante al procurar su detención, formularle cargos directos, ante una autoridad de Policía, de una falta que resultó no probada posteriormente. Toda persona goza de una autoestima que crea en ella la reputación que, en su vida privada, la hace desarrollar sentimientos de consideración hacia si misma y hacia los demás, los cuales se pueden ver afectados por circunstancias externas derivados de actos de otras personas. La afectación de esos sentimientos, producen un daño moral que, el responsable del mismo, los debe resarcir, mediante una indemnización en dinero, según la ley, pues el recurrente no ha podido desvirtuar, mediante medio de prueba alguna, la no existencia del daño moral, toda vez que en el daño moral, se produce la inversión de la carga de la prueba.

> En casos similares, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en fallo de 26 de enero de 1998, al pronunciarse dentro del recurso de casación promovido por BASILIO LAKAS en el proceso ordinario que le seguía a DIAMANTIS PAPADIMITRIU VASILIADIS, sostuvo lo siguiente:
>
> ... cuando el agravio moral consiste en la violación de cualquiera de los derechos de la personalidad de un sujeto, la mera demostración de la existencia de dicha transgresión constituirá, al mismo tiempo, la prueba de la existencia del daño moral ocasionado. La prueba del daño moral surge o aflora, inmediatamente, de los hechos que constituyen la actividad ofensora, pues el daño moral se presume por la sola realización del hecho dañoso ... (énfasis suplido).
>
> Luego entonces a juicio de este Cuerpo Colegiado, es evidente que el evento de la denuncia en contra de la demandante por parte del gerente de la empresa demandada, es generador de una afectación a su honor y decoro que puede traducirse en un daño moral que debe ser indemnizado por parte del responsable."

Con las pruebas documentales que la parte actora incorporó a fojas 11 y 13 se demuestra que las acusaciones formuladas por la parte demandada en su contra no eran ciertas, o sea, que las afirmaciones del gerente del supermercado atribuyéndole el no cobro de una cerveza de 0.33 centésimos de balboa resultaron no probadas, ya que el Juez Nocturno dictó un sobreseimiento frente a esta denuncia. Por lo tanto, considera este Tribunal de Casación que la denuncia interpuesta sin fundamento -hecho probado con los documentos ya referidos- fue en sí "un hecho dañoso" que sufrió la señora DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS, pues le produjo las molestias propias que se derivan de haberse visto involucrada en una acusación ante un Juez Nocturno de Policía, quedando obligada a interponer una fianza de excarcelación para no ser detenida, (ver fs.. 12 del expediente); cargo del cual fue sobreseída posteriormente. Este hecho es el generador de la obligación y está acreditado debidamente; por consiguiente, quedó demostrado que hubo una lesión que afectó la personalidad de la demandante.

El artículo 1644 del Código Civil establece el principio de la responsabilidad extracontractual con base en que, todo aquel que con sus actos u omisiones culposos cause daño a otro, está obligado a reparar el daño causado.

Por su parte, el artículo 1644a, con relación al daño moral prescribe lo siguiente:

> "Artículo 1644A: Dentro del daño causado se comprende tanto los materiales como los morales.
>
> Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consi deración que de si misma tienen los demás. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo, mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya causado daño material, tanto en materia de responsabilidad contractual, como extracontractual. Si se tratare de responsabilidad contractual y existiere cláusula penal se estaría a lo dispuesto en ésta.
>
> Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva así como el Estado, las instituciones descentralizadas del estado y el Municipio y sus respectivos funcionarios, conforme al artículo 1645 del Código Civil.
>
> Sin perjuicio de la acción directa que corresponda al afectado la acción de reparación no es transmisible a los terceros por actos

entre vivos y sólo a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el Juez tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el Juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el Juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original." (El subrayado es de la Corte).

Del fallo de la Corte, de fecha 26 de enero de 1998, citado en la sentencia impugnada, es conveniente resaltar lo siguiente:

"Dos elementos se involucran siempre que se producen ataques que afecten el honor de una persona: el sentimiento que cada individuo tiene de su propia dignidad, o sea el honor en sentido estricto, o si se quiere, el sentimiento íntimo de verguenza que todos somos capaces de sufrir cuando se nos ofende; pero, cuenta también el representado por el aprecio y estimación que hacen los demás de nuestras cualidades y de nuestro valor personal. Ambas cosas se deterioran y sufren cuando se produce un ataque contra la honra; por un lado, en lo que atañe a la intimidad y, por el otro, en lo que repercute sobre la imagen que en el seno de la sociedad proyecta el individuo ... Cuando el legislador le otorga protección a los derechos inherentes a la personalidad y tutela esos bienes extrapatrimoniales, lo hace partiendo del dolor o sufrimiento moral producido normalmente por la lesión de los bienes personalísimos que sufre el afectado. Por lo cual, para tener derecho a una indemnización por la ofensa representada en una difamación, basta y sobra que la ofensa y la falsedad recaigan sobre la honra del ofendido, ya que ello es suficiente para arrojar sobre él, descredito, odiosidad o desprecio ...".

Si la denuncia presentada contra DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS no hubiese concluido con un sobreseimiento y se hubiera desarrollado un proceso culminante en una sentencia condenatoria, no se hubiese podido hablar de daños sufridos sino de las consecuencias de la culpabilidad. En cambio, el sobreseimiento dictado a favor de la denunciada convierte el hecho de la denuncia en "dañoso", por lo cual se justifica una reparación.

De lo expuesto, esta Sala arriba a la conclusión de que el acto realizado por el gerente de la empresa demandada, denunciándola ante la autoridad de policía, constituyó una difamación a la demandante (el no cobro de una cerveza de 0.33 centésimos); acusación que no pudo probarse cierta, por lo que su autor debe responder por los daños morales causados.

Finalmente, en relación al cargo de injuricidad imputado al fallo de segunda instancia en el sentido de que el juzgador consideró probado el supuesto daño moral y le asignó un valor de cinco mil balboas, sin que exista en el expediente prueba alguna que sirva para constatar el supuesto daño y mucho menos para fijarle algún tipo de cuantía, por no haberse fundamentado en documentos idóneos, peritos o testimonios, tal como lo exige la legislación, es importante advertir que el sentenciador al sustentar el cambio de la condena en abstracto por la de una condena líquida fijada en la suma de cinco mil balboas

(B/.5,000.00) y tomando en cuenta los factores que establece el artículo 1644A del Código Civil, precisó:

> "La determinación en base a los factores descritos, siempre va a requerir del juzgador el ejercicio de su facultad discrecional y prudencial. Es por ello que en la estimación cuantitativa a la que arribe este Tribunal, en cuanto al daño moral que, por esta vía se reconoce, en favor de la demandante, ha de tener en cuenta la gravedad de la ofensa y la extensión del agravio, la cual se produjo en un Juzgado Nocturno de Policía, que no por su jerarquía inferior, deja de excluir la acción de humillación pública a la que fue sometida la demandante en el local comercial, propiedad de la parte demandada, al ser conducida por agentes de orden público de San Miguelito a instancia de la demandada, hasta el Juzgado Nocturno de esa circunscripción.
>
> También es menester tener en cuenta, la situación de estado de gravidez en que se encontraba la demandante al momento en que se produjo la ofensa, pues quedó comprobado en el proceso su estado de gestación de mes y medio, lo cual, obviamente, causa desaveniencias o alteraciones en la condición física de la ofendida, dado su estado de embarazo.
>
> Otro rubro a tomar en cuenta, para establece la cuantía de la condena, es lo relativo a la personalidad de la víctima, cuya condición de trabajadora, sin profesión alguna demostrada en el proceso; frente a la situación económica del demandado, quien es propietario de una empresa comercial, como lo es el supermercado que representa, capaz de asumir la carga de satisfacer los reclamos formulados por su ofensa."

Si bien es cierto que el dictamen pericial sobre el avalúo de los daños y perjuicios es una prueba cuyo propósito es establecer el cuantum o valor del daño causado, también es verdad que cualquier otro medio probatorio es apto para crear convencimiento o convicción en el juez al respecto, sobre todo si existen elementos de juicio que permitan fijar la cuantía sin necesidad de ese dictamen, ajustándose a los lineamientos y pautas mencionados en el artículo 1644A del Código Civil.

El fallador de segunda instancia tomó en cuenta los elementos probatorios que fueron en su momento apreciados por el juez de la causa; consideró correcta la ponderación que éste hizo de los mismos; y, en base a ello confirmó la existencia del perjuicio causado, para luego admitir que sí existían suficientes elementos para fijar una cuantía líquida, por lo que reformó la sentencia y determinó ese cuantum en la suma de cinco mil balboas (B/.5,000.00). La decisión discrecional de ese Cuerpo Colegiado, al momento de realizar la tasación de dichos perjuicios, estuvo basada en criterios razonables y se hizo con arreglo a los elementos que señala expresamente el artículo 1644A del Código Civil.

De lo que viene expuesto se concluye que las infracciones a las normas indicadas por el recurrente no se configuran, de donde resulta que no puede atender esta Superioridad su pretensión en el sentido de casar la sentencia impugnada.

Por todo lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 12 de febrero de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario promovido por DAYSI OLINDA GUZMAN ROSAS contra la sociedad DISTRIBUIDORA XTRA, S. A.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00)

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BADKISINGEN REALEST, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A PARQUE DE DIVERSIONES CLAI, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados FRANCISCO CHIARI & ASOCIADOS, apoderados judiciales de la sociedad BADKISINGEN REALEST, INC.., ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 9 de noviembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que la empresa casacionista le sigue a PARQUE DE DIVERSIONES CLAI, S. A., IVÁN BLASSER, RUBÉN MORENO, CLAUDIO LACAYO Y MARIO PECHETO.

El recurso se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, a lo que procede la Sala, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución que se impugna es de las recurribles en casación, además se aprecia que este recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno.

Advierte la Sala que el libelo contentivo del recurso no se apega a las prescripciones que esta Sala ha indicado.

Así, se enuncian dos causales en que se apoya el recurrente de manera conjunta y a renglón seguido los motivos y las disposiciones legales que se encuentran vulneradas, en lugar de ajustarse a los requisitos del artículo 1160 del Código Judicial para cada causal.

En efecto: se debe enunciar la causal en la forma que viene estructurada en la ley, a continuación los motivos o cargos que se le hacen a la sentencia, que debe ser consistente con la causal, y a renglón seguido, para cada causal en forma separada, las disposiciones legales infringidas. Tratándose de causales probatorias, debe indicarse, además, las disposiciones sustantivas que, como consecuencia del examen probatorio, se realizó, de nuevo, para cada causal.

La primera causal invocada por el recurrente es: "infracción de normas sustantiva de derecho por concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, y que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido".

La segunda causal invocada es: "infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, y que ha influido sustancialmente en los dispositivo del fallo recurrido". La causal está correctamente invocada. Contiene el mismo margen de confusión ya indicado.

Los motivos, al igual que la primera causal, han sido explicados conforme la ley, pero en cuanto a la citación de las normas, el casacionista comete el error de citar todas las normas infringidas sin explicar seguidamente, y con la debida separación, cómo ha sido infringida cada una de estas normas. Cuando trata de hacer la explicación de la infracción de las normas señaladas, lo hace en conjunto, por lo cual no le es dable a la Corte poder analizar cuál es la infracción que el recurrente señala para cada disposición y, además, lo hace en

forma excesivamente escueta sin explicaciones precisas.

Esta Sala ha dicho que la explicación de la causal ha de consistir en una argumentación jurídica que ilustre la forma o manera en que se produjo la violación.

Por tanto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado por BADKISINGEN REALEST, INC. contra la Sentencia de 9 de noviembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las costas se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00)

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JULIETA DE LEON Y MARITZA DE LEON DE GONZALEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE DESLINDE Y AMOJONAMIENTO QUE LE SIGUE SAMUEL HUMBERTO GONZALEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados RAUL CARDENAS Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de JULIETA DE LEON y MARITZA DE LEON GONZALEZ ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 16 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial dentro del proceso Sumario de Deslinde y Amojonamiento seguido contra SAMUEL GONZALEZ.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que no fue aprovechado por los apoderados judiciales de las mismas.

Seguidamente la Sala procede al examen del recurso, a fin de determinar si cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

El recurso de casación es en la forma y como única causal se invoca la "carencia de competencia improrrogable en el tribunal sentenciador".

Esta Sala de la Corte ha examinado el recurso de casación, que aparece de fojas 192 a 195, y considera que cumple con los presupuestos que establecen los artículos 1165, 1160 y concordantes del Código Judicial, ya que:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno;

3. El escrito de formalización del recurso satisface los requisitos del artículo 1160 ídem; y

4. La causal invocada es de las determinadas por el artículo 1155 del Código Judicial.

Consecuentemente, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación propuesto por la firma de abogados RAUL CARDENAS Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de JULIETA DE LEON y MARITZA DE LEON GONZALEZ, contra la Sentencia de 16 de noviembre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial dentro del Proceso Sumario de Deslinde y Amojonamiento seguido contra SAMUEL GONZALEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASSA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. RECURRE EN CASCIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA QUE LE SIGUE EIDA MIREYA LARA DE HERNANDEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado SERGIO TULIO VIDAL CASTILLO formalizó ante esta Sala de la Corte, en representación de ASSA, COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A., recurso de casación con el propósito de impugnar la sentencia proferida el 4 de octubre de 1999, dentro del proceso ordinario que contra su representada interpuso EIDA MIREYA LARA DE HERNANDEZ.

Admitido el recurso y surtidos los trámites legales previos, debe la Sala resolver lo de lugar.

Como causal de fondo fue invocada la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia.

En los motivos de la causal, aduce el recurrente que la sentencia atacada valoró erróneamente la prueba testimonial rendida por los señores JOSE D. ALVAREZ, JOSE ALFONSO MORA GRANDA, ABEL PIEDRA CISNEROS, FEDERICO E. BARRIOS, RICAURTE ANGULO MARTINEZ, MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ, MIGUEL A. GONZALEZ M. y ERICK A. MIRANDA, por lo que concluyó que, con tales declaraciones, se demostró que los daños sufridos por el motor del vehículo de propiedad de la demandante, asegurado por la demandada, fueron consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 19 de agosto de 1992.

Aduce que los señores JOSE DAVID ALVAREZ, JOSE ALFONSO MORA y ABEL PIEDRA C. no fueron testigos presenciales y no podían aseverar que el daño del motor fue ocasionado por el accidente. En cuanto al testimonio de RICAURTE ANGULO MARTINEZ y de MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ, se le endilga al fallo haber cometido el error de estimar que a través de los mismos se pudo probar que el motor se dañó debido al accidente, cuando ellos tampoco presenciaron el evento ni estuvieron en el lugar de los hechos, pues sólo intervinieron en la reparación del vehículo. Frente a la valoración de lo declarado por los señores MIGUEL ANGEL GONZALEZ Y ERICK A. MIRANDA, la censura precisa que la sentencia cometió el error de considerar como testigos a estas personas, habiendo sido su actuación procesal la de peritos.

En otro orden, se denuncia la infracción de los artículos 770, 904 y 908 del Código Judicial, así como la de los artículos 1483 y 1001 del Código Civil.

Ciertamente el Tribunal Superior consideró que el vehículo de propiedad de la parte demandante y asegurado por la demandada envuelto en el accidente de

tránsito, por cuyos daños se reclama, resultó, como producto de ese hecho, con daños en su motor que deben ser indemnizados por la compañía aseguradora. Así mismo, arribó a la conclusión de que el daño del motor del vehículo a consecuencias del accidente se probó con las declaraciones de las personas que se han dejado mencionadas.

Se impone como necesidad el examen de las aludidas declaraciones para poder determinar si, como asegura la censura, esas pruebas están descalificadas a la hora de servir de sostén a una sentencia desfavorable a los intereses de la parte demandada.

El testigo JOSE DAVID ALVAREZ (fs. 156 y ss.) admitió que no presenció el accidente, pero afirmó que vio llegar, al puesto de aduana de la frontera tico-panameña donde laboraba, el camión remolcado y se dio cuenta de los daños que pasó a describir de la siguiente manera: "... tenía el carter donde va el aceite del motor lo tenía roto(sic), los resortes que sujetan el eje delantero, también estaban rotos y la parte del frente del camión estaba golpeada, tenía el parabrisas quebrado".

El testigo ABEL PIEDRA (fs. 169 y ss.), igual que el anterior de servicio en la aduana de Paso Canoa, dijo no haber presenciado el accidente, pero indicó que el camión venía remolcado por otro y describió los daños, en particular, el de "... un orificio donde parece que es el (sic) compartimiento del aceite ...".

El testigo JOSE ALFONSO MORA GRANDA (fs. 164 y ss.) manifestó por su parte que, en su condición de oficial de tránsito a quien le correspondió atender el accidente, sí estuvo en el lugar de los hechos. Manifestó que elaboró la boleta respectiva y que apreció los daños del vehículo. Indicó algunos de ellos, tales como "daños en la parte del frente del vomper (sic), cabina, el radiador y otros daños mecánicos que estaban fuera de poder notarlo, de poder diagnosticarlo yo". Expresó que en el lugar, antes de mover el camión que se había ido a un lado de la carretera, había un derrame de aceite y categóricamente contestó que ni el conductor ni ninguna otra persona trataron de arrancar la máquina del camión. Dijo que mientras él estuvo allí nadie arrancó el vehículo y expresó: "Según versiones y lo que se pudo ver el aceite estaba saliendo de la tapa del Carter".

El testigo FEDERICO E. BARRIOS (fs. 178 y ss.), conductor de camiones, declaró que pasó después del accidente y se detuvo. Vio todo el aceite del motor regado, así como otros daños. Afirmó que nadie trató de arrancar el motor para sacar el vehículo del lugar donde se había accidentado.

Hasta aquí la Sala aprecia que las declaraciones de las personas que se enteraron del accidente y tuvieron la oportunidad de apreciar los daños del camión, no incurren en ninguna clase de contradicciones. Todas ellas relatan versiones que coinciden en que, en efecto, el vehículo acusaba múltiples daños en el motor y que se había dado un derrame de aceite. Además, niegan que se hubiese intentado arrancar el motor del camión después de ocurrido el percance, tesis esta en que se basa la parte demandada para afirmar que la causa del daño no provino del accidente, sino de una conducta imprudente del conductor del vehículo por haber forzado el motor a sabiendas de que se había perdido el lubricante.

Veamos ahora los testimonio de RICAURTE ANGULO MARTINEZ (fs. 187 y ss.), Ingeniero Automotriz, y de MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ (fs. 194 y ss.), técnico en mecánica automotriz, personas que intervinieron en la reparación del camión accidentado. El primero indicó que el camión llegó al taller remolcado por otra "mula", no por sus propios medios. Declaró que MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ se encargó de hacerle un "overhol" de máquina y que "el motor se había trancado por lubricación, falta de lubricación y ocasionado por pérdida de aceite, por la rotura del carter y la línea principal de abastecimiento de la bomba de aceite". MIGUEL GONZALEZ JIMENEZ, experto en equipo pesado, coincide en que el vehículo llegó remolcado al taller. Explicó que el daño que presentaba el motor se produjo "... cuando el motor quedó sin lubricación debido a que el motor tenía más o

menos 10 horas de rodar cuando sufrió el accidente, todo el motor, todas las piezas movibles del motor sufrieron daños por estas causas, lo que ameritó la reparación total". Dada su condición de experto, lo expresado por él y que pasamos a transcribir a continuación es, en opinión de la Sala, de suma importancia, para entender lo que en realidad aconteció: "Lógicamente, el motor se dañó porque cuando surgió el impacto el lubricante se perdió, o sea, se derramó y ese motor tiene que haber trabajado unos diez minutos cuando lo pararon, quiero agregarle que ese lapso después de la pérdida del lubricante hasta cuando fue parado el motor, fue necesario para que todas las piezas movibles del motor se dañaran. El motor tenía 10 horas de venir trabajando hasta el momento del impacto, entonces, este es un momento crítico para el motor que venía en temperatura normal de funcionamiento, crítico porque si en ese momento se le quita el enfriamiento y la lubricación, como sucedió en ese motor, surgen los problemas antes mencionados". A MIGUEL GONZALEZ JIMÉNEZ se le repreguntó:

> "TERCERA REPREGUNTA: De acuerdo a su experiencia como mecánico, en un vehículo como al que nos estamos refiriendo, sufre un accidente como el que se ha podido captar por los rasgos del vehículo y por los daños sufridos, le pregunto si después del impacto con el carro embragado o en cambio, al producirse la detención del mismo, necesariamente el vehículo se detiene el motor deja de funcionar o el motor sigue en movimiento? CONTESTO: Es impredecible, en este caso el motor siguió funcionando, en este caso quedó desembragado, en neutral." (fs. 198)

La descalificación de la valoración que hiciera el Tribunal Superior de las declaraciones de los señores MIGUEL A. GONZALEZ (fs. 259 y 260) y ERICK MIRANDA (fs. 261) la apoya el recurrente en que los mismos no actuaron como testigos sino como peritos. Al examinar la sentencia atacada es dable percatarse que en ninguna parte de ella se indica que esas personas declararon como testigos y no como peritos. El Tribunal valoró sus declaraciones como peritos y el cuestionamiento formulado carece por completo de importancia, sobre todo si se aprecia que el contenido de esas declaraciones, rendidas por personas conocedoras de mecánica automotriz, no entran en contradicción con lo manifestado por los técnicos que repararon el camión accidentado.

Para la Sala, el Tribunal de segundo grado efectuó una valoración de las pruebas comentadas que se ajusta a la aplicación de las reglas de la sana crítica, pues extrajo una conclusión razonable y lógica de lo acontecido así como de las consecuencias del accidente, todo lo cual justifica que se haya decidido que la compañía aseguradora deba cubrir la indemnización del siniestro amparado por la póliza de seguro que regía las obligaciones y derechos de las partes.

Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 4 de octubre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario que EIDA MIREYA LARA DE HERNANDEZ le sigue a ASSA, COMPAÑIA DE SEGUROS.

Las costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARIN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INMOBILIARIA MARCHENA, S.A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JOSE DEL C. PEREZ ANGULO Y/O PEREZ ANGULO, S,.A. MAGISTRADO PONENTE: JOSE

A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 8 de octubre de 1999, dentro del proceso ordinario instaurado por INMOBILIARIA MARCHENA, S.A. contra JOSE DEL CARMEN PEREZ ANGULO y/o PEREZ ANGULO, S.A.

La Sala ha podido constatar que la parte recurrente presentó el nuevo escrito de casación dentro del término que se le había concedido para su corrección.

El análisis del mismo pone de manifiesto que fueron debidamente corregidos los defectos formales que se le habían indicado en la resolución dictada por esta corporación judicial el 31 de enero de 2000; razón por la cual el recurso cumple ahora con los requisitos que la ley exige para su admisibilidad.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por INMOBILIARIA MARCHENA, S.A., dentro del proceso ordinario que le sigue a JOSE DEL CARMEN PEREZ ANGULO y/o PEREZ ANGULO, S.A.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANA MORENO JARAMILLO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE NULIDAD DE TITULO DE PROPIEDAD QUE LE SIGUE LUCIA MORENO JARAMILLO. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Carlos G. Quirós, apoderado judicial de la señora ANA MORENO JARAMILLO, interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 30 de septiembre de 1999, dentro del proceso ordinario que le sigue la señora LUCIA MORENO JARAMILLO a la parte recurrente.

Mediante resolución fechada 17 de enero de 2000, esta corporación judicial ordenó la corrección del recurso de casación tanto en la forma como en el fondo, en vista de que contenía algunos defectos formales subsanables.

Según consta en el informe de la Secretaría de la Sala Civil consultable a foja 237, el recurrente no presentó el escrito de corrección dentro del término que se le había concedido con ese propósito.

En vista de ello, se debe declarar inadmisible el recurso, en atención a lo dispuesto en el artículo 1166 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por el apoderado

judicial de la señora ANA MORENO JARAMILLO, dentro del proceso ordinario que le sigue LUCIA MORENO JARAMILLO.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARIN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

KAREN MARCELA SIERRA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN QUE LE SIGUE JUAN CARLOS SILVA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RAFAEL RODRÍGUEZ A., apoderado judicial de KAREN MARCELA SIERRA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 20 de octubre de 1999 proferido por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de Filiación que le sigue JUAN CARLOS SILVA.

El recurso se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, a lo que procede la Sala, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que se trata de una resolución recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

En segundo lugar, el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona hábil.

Y en tercer lugar, el recurrente presenta una única causal de casación en el fondo: infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida.

La causal está invocada correctamente, y de acuerdo a lo exigido por nuestro Código de Procedimiento Civil.

Con respecto a los motivos y a la citación de las normas de derecho infringidas con su debida explicación de cómo lo han sido, la Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos en la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por KAREN MARCELA SIERRA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**CARLOS GUARAGNA RIVERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE PEDAL INTERNATIONAL CORP. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.**

**VISTOS:**

**El Licenciado FERNANDO ALEMÁN, apoderado judicial del demandado CARLOS GUARAGNA RIVERA, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 16 de diciembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que le sigue PEDAL INTERNATIONAL CORP.**

**Repartido el recurso, se procede a fijar en lista por el término que dispone la ley para los alegatos de admisibilidad. Concluída la fase de alegatos, sin la participación de las partes, procede la Sala a resolver el recurso conforme las pautas establecidas en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.**

**El recurso se interpone en tiempo, la resolución que se impugna es de las recurribles en casación, además se aprecia que este recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno.**

**La primera causal invocada por el recurrente es: "infracción de norma sustantiva de derecho en concepto de violación directa de la ley sustantiva que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia". La causal está correctamente invocada, y los motivos que sirven como fundamento a la misma, reúnen de manera general los requisitos contemplados por la ley.**

**La segunda causal invocada es: "infracción de norma sustantiva de derecho en concepto de aplicación indebida de la ley sustantiva que ha influído sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia de segunda instancia". La causal se encuentra invocada de manera correcta.**

**Sin embargo, en cuanto a los motivos, advierte la Sala que el recurrente vuelve a invocar los motivos utilizados en la primera causal de fondo, por lo que resulta defectuosa esta estructura en la segunda causal, por cuanto no resulta admisible que los motivos, que han de ser consistentes con la causal, sirvan paralelamente para el fundamento fáctico de dos causales distintas.**

**En este sentido la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, mediante fallo de 10 de julio de 1997, expresó lo siguiente:**

> **"...**
> **Los motivos que le sirven de fundamento revelan una situación de hecho esencialmente igual a la que plantea el recurrente en la causal de casación en la forma, esto es, la supuesta falta de notificación del mandamiento ejecutivo al liquidador de la sociedad demandada.**
>
> **No es posible que los mismos hechos sirvan de fundamento a una causal de fondo y a una de forma. El planteamiento del recurrente guarda relación con una situación procesal, razón por la cual se admitió la causal de forma. En esas mismas circunstancias no puede admitirse, ahora, esta tercera causal de fondo. Como ha venido señalando la Sala en ocasiones anteriores, el escrito de formalización del recurso de casación debe exponer un pensamiento unitario, ajeno a situaciones contradictorias como la que se presenta en este caso."**

**Dado lo anterior, resulta evidentemente ininteligible esta segunda causal en el fondo, por lo que de conformidad con el artículo 1167 del Código Judicial**

no puede ser admitida.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la primera causal de fondo del recurso de casación, interpuesto por CARLOS GUARAGNA RIVERA mediante apoderado judicial, y DECLARA INADMISIBLE la segunda causal de fondo.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALONSO PINZON CORRALES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LUIS GASPAR SUAREZ Y/O RADIO SOBERANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado GENARINO ROSAS ROSAS en su condición de apoderado judicial del señor ALONSO PINZON CORRALES, ha interpuesto Recurso de Casación en el fondo contra la Sentencia de segunda instancia de 16 de diciembre de 1999, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado por ambas partes, según consta en las fojas 345 a la 353.

La Sala procede a examinar si el recurso cumple a cabalidad con los preceptos establecidos en los artículos 1160, 1165 y concordantes del Código de Procedimiento Civil.

En el presente caso, la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno, sin embargo el escrito de formalización del recurso, que consta de fojas 330 a 337 de este expediente, no se ajusta a las exigencias requeridas para su admisibilidad, por las siguientes consideraciones:

El recurrente expresa de manera introductoria una síntesis de los antecedentes del proceso, lo cual no es propio en este tipo de recurso, ya que en el mismo el recurrente debe ajustarse en su elaboración sólo a lo previsto en el artículo 1160 de la misma excerta legal, es decir, a la determinación de la causal o causales que invoque, a los motivos que sirven de fundamento a la causal y a la citación de las normas de derecho infringidas y la explicación de como lo han sido.

La causal que se invoca en este extraordinario medio de impugnación es una de las que establece el artículo 1154 del Código Judicial para la casación en el fondo, específicamente, la de INFRACCION DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO EN EL CONCEPTO DE VIOLACION DIRECTA, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Se establece un motivo como fundamento de la causal, el cual resulta totalmente incongruente con el concepto aludido; el mismo dice textualmente lo siguiente:

"II. MOTIVOS:

> PRIMERO: La sentencia de segunda instancia, al revocar la sentencia No. 49 de 4 de septiembre de 1998 del Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y disponer No Acceder a la pretensión formulada por el demandante ALONSO PINZON CORRALES en contra de LUIS GASPAR SUAREZ y RADIO SOBERANA, S. A., ha incurrido en error de derecho, al determinar que no se ha probado por parte del demandante los daños y perjuicios sufridos y las ganancias dejadas de percibir por la actuación del demandado. Como se observa, la sentencia recurrida contraría los hechos contentivos de la demanda y la correspondiente responsabilidad de LUIS GASPAR SUAREZ SIERRA" (lo subrayado es de la Sala).

Del contenido del único motivo presentado por el recurrente se deduce que el casacionista intenta, por medio del concepto de violación directa, subsanar supuestos errores de carácter probatorio. Dentro del motivo, el recurrente nos expone insuficiencias de la sentencia del superior al valorar equivocadamente la prueba de los daños y perjuicios sufridos. Este planteamiento podría haber sido válido si se hubiese invocado una causal probatoria, mas no en el intento de establecer la posible violación directa de normas de derecho, que es el objeto al cual se dirige la causal invocada.

El artículo 1154 del Código Judicial dispone que, cuando se invoca como causal la infracción de normas sustantivas por el concepto de violación directa de la norma, no caben, para formular cargos de injuricidad contra una sentencia, señalamientos de errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba. La violación directa se da cuando una disposición diáfana y explícita deja de ser aplicada al caso pertinente o cuando la misma se aplica desconociendo un derecho en ella consagrado en forma perfectamente clara.

Con base en lo indicado, la Sala encuentra que el motivo alegado es, por completo, incompatible con la causal invocada, pues lo allí expuesto consiste en un razonamiento referido a la valoración o a la existencia de las pruebas. La causal de violación directa, cuando es invocada, no admite que en los motivos del recurso se hagan cuestionamientos contra la sentencia que tengan que ver con las pruebas relacionadas con la obligación que se reclama. Como se sabe, para esos propósitos la ley tiene previstas las causales de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y de error de derecho en cuanto a la valoración de la prueba.

Si lo que buscaba discutir en casación eran los problemas atinentes a la materia probatoria envuelta en el proceso, el recurrente no podía emplear la causal de violación directa ni otra distinta a las causales probatorias. De igual manera, sólo es posible admitir y discutir un recurso de casación interpuesto por violación directa de la norma de derecho si, en el apartado correspondiente a los motivos, se formulan cargos relacionados con una norma sustantiva de derecho aplicada o aplicable en la resolución atacada. No se atuvo el casacionista a estas reglas y por eso el recurso, como ha sido presentado, se torna ininteligible, situación que impide su admisibilidad.

En el recurso bajo estudio el problema de su ininteligibilidad se agrava cuando el recurrente cita, como una de las normas infringidas por la sentencia, el artículo 784 del Código Judicial, disposición legal de eminente carácter probatorio que nada tiene que ver con el concepto de violación directa de normas sustantivas de derecho, ya que se refiere a las pruebas que se hayan practicado en otro proceso y a la forma en que las mismas deberán ser apreciadas por el juzgador. Así mismo, al citar el recurrente como infringido el artículo 983 del Código Judicial no hace otra cosa que introducir un nuevo elemento de ininteligibilidad y confusión en el recurso, pues esa disposición define lo que es una condena en abstracto y regula los trámites y los procedimientos que deben observarse cuando este tipo de condena haya sido dictada, con el fin de hacer su liquidación, algo que no ha ocurrido en este caso. La condena dictada por el Tribunal Superior -única atacable en casación- no fue dictada en abstracto. Por el contrario, es una sentencia muy concreta en la que se absuelve a la parte

demandada de todas las obligaciones reclamadas en su contra, por lo cual resulta imposible que se haya podido producir la violación directa de la disposición legal aducida.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación propuesto por ALONSO PINZON CORRALES, mediante apoderado judicial, contra la Sentencia de 16 de diciembre de 1999, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA.

Las costa se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CORE TRADING, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PH PACIFIC. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados ESKILDSEN & ESKILDSEN, apoderados especiales de CORE TRADING, INC., han interpuesto recurso de casación contra el Auto de 30 de diciembre de 1999 proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que le sigue SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PH PACIFIC GARDEN.

El recurso se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, a lo que procede la Sala, tomando en consideración para ello, los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que se trata de una resolución recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

En segundo lugar, el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona hábil.

El recurrente presenta una única causal de casación en el fondo: infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del auto de segunda instancia que resolvió sobre liquidación en abstracto sobre perjuicios.

La causal está invocada correctamente, y de acuerdo a lo exigido por nuestro Código de Procedimiento Civil.

Con respecto a los motivos y a la citación de las normas de derecho infringidas con su debida explicación de cómo lo han sido, la Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos en la Ley.

No obstante las disposiciones legales infringidas incluyen el artículo 983 del Código Judicial, que no es una norma que verse sobre valoración de la prueba. De otra parte, la explicación de la infracción del artículo 1244 del Código Civil debe limitarse a un enjuiciamiento del derecho sustantivo, que fue vulnerado como consecuencia del error probatorio denunciado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo, interpuesto por CORE TRADING, INC., mediante apoderados judiciales, para lo cual se concede el término de cinco (5) días, tal como lo señala el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIDA PANAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ORCON, S. A. E IMPORTADORA PANAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUNÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados LUQUE, CORONELL Y ASOCIADOS actuando como apoderada judicial de VIDA PANAMA, S. A., demandantes en el proceso ordinario de mayor cuantía seguido a las sociedades ORCON, S. A., y/o IMPORTADORA PANAMA, S.A, ha interpuesto recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de 23 de noviembre de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Ingresado el negocio a la Secretaría de esta Sala de lo Civil de la Corte y luego de surtidas las reglas de reparto, se fijó en lista por el término de ley, según lo preceptúa el artículo 1164 del Código Judicial, a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, derecho aprovechado por el opositor, según consta de fojas 645 a 651 del expediente.

Seguidamente, esta Sala de la Corte, procede al examen del presente recurso de casación, conforme a los requerimientos establecidos en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil.

Vemos que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y ha sido interpuesto en tiempo oportuno. Sin embargo, en cuanto al escrito de formalización del recurso, debemos señalar ciertos defectos, que lo apartan de su correcta formalización de acuerdo a las exigencias del artículo 1160 del citado código.

En este recurso de casación se invoca como única causal de fondo la de "infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida (fs. 629).

Si bien la causal es de las que establece el artículo 1155 del Código Judicial, deben señalarse ciertas deficiencias percibidas en el contenido de sus motivos y en las normas de derecho citadas.

El recurrente expone en el escrito siete motivos de los cuales en el primero no se hacen cargos de injuricidad, se limita a realizar un breve recuento procesal sin que el contenido se relacione con la causal invocada. En los motivos segundo, cuarto, quinto y séptimo, no se desprende claramente la causal de error de derecho, y conforme a los términos utilizados para expresar los cargos de injuricidad, se infiere la otra causal probatoria, es decir la de error de hecho sobre la existencia de la prueba.

El Dr. Jorge Fábrega Ponce, señala en su libro de Casación, pág. 138, que el error de derecho en la apreciación de la prueba "se produce cuando el elemento

probatorio se examina, se toma en cuenta, se le analiza, pero no se le atribuye el valor, la eficacia probatoria, que conforme a la ley le corresponde". Y por error de hecho sobre la existencia de la prueba, señala en el mismo libro, pág. 136, "es el desconocimiento del medio o elemento probatorio, el ignorarlo, o dar por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente."

La jurisprudencia de la Sala, ha señalado que los motivos deben formularse en términos sencillos y concretos de modo que de cada uno surja el respectivo cargo que demuestre la infracción de la ley sustantiva, siempre en apoyo a la causal invocada.

El recurrente debe concretizar única y exclusivamente la forma cómo el error probatorio imputado al fallo se reflejó en la decisión impugnada, por lo que de no haberlo hecho así, debe subsanar estos defectos en los motivos.

En cuanto a los normas citadas y explicadas como infringidas, el primer error se observa en el orden en que han sido citadas las disposiciones legales invocadas. En este caso se alude inicialmente a una norma sustantiva para luego mencionar las probatorias, cuando reiteradamente se ha indicado que al invocarse cualquiera de las causales probatorias se debe hacer en forma contraria.

En relación a los artículos 974 del Código Civil, 822 y 1057 del Código Judicial, observamos que el casacionista al desarrollar el concepto de la infracción hace una explicación que no es congruente con la causal de error de derecho invocada en el recurso, ya que hace afirmaciones que configuran la causal de error de hecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

El recurrente transcribe los artículos 978 y 988 y desarrolla el concepto en que, según dice, se han infringido estas normas, pero no dice a que Código se refieren.

Con respecto a la exposición que hace el recurrente del artículo 1133 del Código Judicial, es importante destacar que el cargo que se formula en relación a la situación de Ultra Petita, no es congruente con la causal de fondo probatoria que se ha invocado, sino con una de las causales de forma establecidas específicamente en el numeral 7, acápite c) del artículo 1155 del Código Judicial.

Los errores antes descritos deben ser subsanados mediante el respectivo escrito de corrección.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación propuesto por VIDA PANAMA, S. A., mediante apoderado judicial. Para lo cual se concede el término de cinco (5) días tal como lo contempla el artículo 1166 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S.A. RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FRITZ COMPANIES (PANAMA), INC. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Pedro A. Vásquez, apoderado judicial de COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S.A., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 28 de octubre de 1999, dentro del proceso ordinario que le sigue la sociedad recurrente a FRITZ COMPANIES (PANAMA), INC.

El recurso se encuentra pendiente de decidir sobre su admisibilidad, a lo cual procede la Sala, tomando en consideración para ello lo dispuesto en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Al respecto, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno, por persona hábil y que la resolución objeto de impugnación es recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del proceso.

Al revisar el escrito de formalización se observa que se trata de casación en el fondo y que se invoca como única causal, la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida; la cual se encuentra consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Ahora bien, se puede advertir que los diez primeros motivos que le sirven de fundamento guardan relación con la valoración realizada por el Tribunal Superior en el fallo atacado, de varias pruebas que constan en el proceso; razón por la cual resultan congruentes con la causal invocada.

No obstante, el resto de los motivos se refieren a las supuestas infracciones de normas sustantivas de derecho que produjeron los errores probatorios que se alegan en los primeros motivos; es decir, se trata de alegaciones que no corresponden a este apartado del recurso de casación, en el que sólo deben señalarse los cargos que se le imputan a la resolución impugnada. Consecuentemente, los motivos deben ser corregidos.

En cuanto a las disposiciones legales que se estiman infringidas y el concepto de dichas infracciones, las mismas resultan adecuadas, luego de un primer examen formal.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en el fondo interpuesto por el apoderado judicial de COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS, S.A., para lo cual se le concede el término de cinco (5) días que establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) SONIA. F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUANA CARRASQUILLA RIOS Y FELIPE GUDIÑO CARRASQUILLA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA QUE LE SIGUEN A SENEN CARRASQUILLA. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Roberto Fuentes, en su condición de apoderado judicial de los

señores JUANA CARRASQUILLA RIOS y FELIPE GUDIÑO CARRASQUILLA, interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 29 de agosto de 1997, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva que le siguen al señor SENEN CARRASQUILLA.

El recurso fue admitido por esta corporación judicial y se encuentra pendiente de decidir en el fondo, a lo cual se procede, previas las siguientes consideraciones sobre sus antecedentes procesales.

Los señores JUANA CARRASQUILLA RIOS y FELIPE GUDIÑO presentaron demanda ordinaria ante el Juzgado Primero del Segundo Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, con el objeto de obtener las siguientes declaraciones:

> "1) Que JUANA CARRASQUILLA RIOS, con cédula de identidad personal No. 8-210-1243, y FELIPE GUDIÑO CARRASQUILLA, con cédula de identidad personal No. 8-151-57, son los legítimos propietarios por prescripción adquisitiva de dominio de la Finca No. 31615, inscrita en Tomo 777, Folio 198 del Registro Público, provincia de Panamá.
>
> 2) Que las prenombradas personas son dueñas de todas las mejoras construidas o levantadas sobre la mencionada finca.
>
> 3) Que las prenombradas personas han mantenido la posesión pacífica, ininterrumpida y pública de la Finca No.31615, por espacio de más de 15 años, lo cual les han (sic) conferido el derecho de adquirir su legítima propiedad por prescripción adquisitiva extraordinaria." (F.2)

Por su parte, el señor SENEN CARRASQUILLA o SENEN ARGUELLES CARRASQUILLA, negó todos los hechos y el derecho invocado.

Cumplidas las etapas correspondientes a la primera instancia de este negocio, el Juzgado Primero del Segundo Distrito Judicial de Panamá dictó Sentencia N° 17 de 17 de enero de 1995, en la cual niega la prescripción adquisitiva de la Finca N° 31615 solicitada por los demandantes.

La parte actora interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, que fue resuelta en la sentencia fechada 29 de agosto de 1997, confirmando la del juzgado primario, por lo que ahora se impugna en casación.

El recurso de casación es en el fondo y se invoca como única causal la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Los motivos que le sirven de sustento son los siguientes:

> "PRIMERO: La resolución recurrida le da un valor probatorio que no tiene a la prueba documental que obra a foja 31 del expediente, consistente en una Nota que el 26 de abril de 1984 le dirigió el señor SENEN ARGUELLES a la Corregidora del Corregimiento de Belisario Porras, y en donde éste se atribuía un derecho de propiedad que no le asistía para esa fecha, al considerar dicha resolución que mis mandantes se encontraban ocupando el inmueble en disputa, en virtud de la mera tolerancia del demandado, lo cual no aprovecha para la prescripción.
>
> SEGUNDO: La resolución recurrida le da un valor probatorio que no tiene a la prueba documental que obra a foja 36 del expediente, consistente en una certificación del Banco Hipotecario Nacional, fechada el 2 de noviembre de 1992, en donde está claro que el señor SENEN ARGUELLES C., para la fecha mencionada, no tenía título de propiedad del Lote No. 32-247, pues en esta misma certificación se

señala "que sobre esta propiedad no existe escritura inscrita a nombre del señor ARGUELLES", dando por sentado la resolución recurrida que éste sí tenía título de propiedad, a través de lo cual se reafirma la tésis (sic) que mis mandantes ocupan el inmueble en disputa en virtud de la mera tolerancia del demandado.

TERCERO: La resolución recurrida le niega fuerza probatoria a los testimonios de MARGARITA DE ALMENGOR, GASPARINO ALMENGOR, ANGELICA DE ALVARADO, y ELISEO ALVARADO AMORES, ignorando así el hecho de que mis mandantes vienen ejerciendo la posesión no interrumpida del inmueble en disputa, durante más de 15 años, y con ánimo de dueño, lo que -contrario a lo decidido en la resolución recurrida-, les confiere el derecho a adquirir la propiedad de dicho inmueble mediante la prescripción de dominio.

CUARTO: La resolución recurrida le niega fuerza probatoria a la diligencia de Inspección Ocular que obra a fojas 76 y 77 del expediente, en donde consta las mejoras realizadas de buena fe por mis mandantes sobre el bien inmueble en disputa, y a través de la cual quedó probado el ánimo de dueño conque mis mandantes han poseído el bien inmueble en disputa, lo que desmiente la tésis (sic) de la "mera tolerancia". (Fs. 155-156)

Como consecuencia de los errores probatorios señalados en los motivos transcritos, el recurrente alega la violación de los artículos 770, 823, 904 y 953 del Código Judicial y 373, 376 y 1696 del Código Civil.

En primer lugar, la parte recurrente sostiene que el Tribunal Superior le otorgó un valor probatorio que no tiene al documento consultable a foja 31, el cual consiste en una nota suscrita por el señor SENEN ARGUELLES con fecha 26 de abril de 1984, dirigida a la Corregiduría de Belisario Porras, en la que manifiesta lo siguiente:

"Por este medio Yo, SENEN ARGUELLES, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 8-299-772, dejo sin efecto mi nota fechada del (sic) día 5 de Abril de 1984, dirigida a la Corregiduria (sic) Amelia Denis de Icaza.

Y autorizo a mi madre; SRA. JUANA CARRASQUILLA para que habite la casa de mi propiedad, y a la señora NICASIA GONZALEZ para que si ella lo tiene a bien, que comparta la habitación con mi madre, en caso que la señora NICASIA NO lo desee tendra (sic) que irse de la casa."

El fallo impugnado consideró que esta prueba, que debía tenerse como válida puesto que no había sido impugnada por la parte demandante, demostraba "que el demandado ha estado ejerciendo las facultades de propietario de dicho bien raíz"; es decir, que los demandantes "habitan en el referido inmueble por la tolerancia del señor SENEN CARRASQUILLA". (Fs. 127-128)

La Sala considera que es correcta la valoración realizada por el Tribunal Superior de la citada prueba, puesto que se trata de un documento en el que el demandado autoriza a su madre, una de las demandantes recurrentes, a habitar el bien inmueble que a él le pertenece; en otras palabras, constituye un acto ejecutado por la señora CARRASQUILLA en virtud de licencia o mera tolerancia del dueño y, como tal, no aprovecha para la prescripción ni confiere posesión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1680 del Código Civil.

Por tanto, la Corte concluye que el fallo impugnado no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de esta prueba.

En segundo lugar la parte recurrente se refiere a la errónea valoración del documento consultable al reverso de la foja 36, en el cual el Gerente de Crédito

del Banco Hipotecario Nacional certifica lo siguiente:

> "Que el SR. SENEN ARGUELLES C., portador de la cédula de identidad personal N° 8-99-772, es el propietario legal del lote N° 32-247, ubicado en Nuevo Veranillo San Miguelito.
>
> Que el SR. ARGUELLES C., canceló en su totalidad el lote y demás compromisos con el Banco Hipotecario Nacional.
>
> Que a la fecha el SR. ARGUELLES C., se encuentra tramitando traspaso de dicha propiedad, a favor de sus hijos: ADA E. ARGUELLES, DORA E. ARGUELLES, DIANA E. ARGUELLES y SENEN ARGUELLES (hijo).
>
> Que sobre esta propiedad no existe escritura inscrita a nombre del SR. ARGUELLES. Serán confeccionadas a nombre de sus hijos al terminar el traspaso."

El recurrente sostiene que el fallo impugnado erró al valorar la prueba transcrita, porque consideró que el señor SENEN ARGUELLES "sí tenía título de propiedad" y que los señores FELIPE GUDIÑO y JUANA CARRASQUILLA ocupaban el inmueble en disputa "en virtud de la mera tolerancia del demandado".

En relación con esta prueba es preciso aclarar que la misma se refiere al Lote N° 32-247 ubicado en Nuevo Veranillo, San Miguelito el cual, de acuerdo con dicha certificación, no se encuentra inscrito a nombre del demandado; mientras que en el libelo de la demanda se señala que el inmueble que se pretende prescribir adquisitivamente es la Finca 31615, Tomo 177, Folio 198 de la Provincia de Panamá.

Y es precisamente por esta razón que el Tribunal Superior no accedió a la pretensión de los demandantes recurrentes, en vista de que no se aportó al proceso la certificación del Registro Público que acreditara la existencia de la Finca 31615 que se pretende prescribir y que el señor SENEN CARRASQUILLA es su propietario.

Consecuentemente, la Sala considera que el fallo de segundo grado no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la citada prueba, puesto que la misma no es idónea para certificar la existencia y propiedad del inmueble en disputa.

En tercer lugar, la parte recurrente se refiere a la valoración realizada por el fallo de segundo grado de los testimonios rendidos por los señores MARGARITA DE ALMENGOR (fs. 70-71); GASPARINO ALMENGOR (f. 72 y reverso); ANGELICA DE NAVARRO (fs. 81-82); y ELISEO ALVARADO AMORES (fs. 83-84).

Al revisar dichas declaraciones se advierte que estas personas coinciden en los siguientes puntos: 1) Afirman conocer a los señores JUANA CARRASQUILLA y FELIPE GUDIÑO, porque son sus vecinos; 2) Que el señor FELIPE GUDIÑO tiene más de veinte años de vivir en el Lote N° 32-247 y que fue él quien construyó las mejoras que existen en el mismo; 3) Que el señor SENEN CARRASQUILLA o SENEN ARGUELLES nunca ha vivido en ese lugar.

La Sala observa que si bien los citados testimonios concuerdan en los hechos antes mencionados, los mismos se refieren al Lote N° 32-247 que, como se aclarara anteriormente, es un bien distinto a la Finca 31615 que es el inmueble que se pretende prescribir, de acuerdo con lo que solicita en el libelo de la demanda.

Por tanto, debe concluirse que el fallo atacado tampoco incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba testimonial.

Por último, los recurrentes sostienen que la resolución de segundo grado le negó fuerza probatoria a la inspección ocular consultable a fojas 76 y 77, con

la cual, en su opinión, "quedó probado el ánimo de dueño conque mis mandantes han poseído el bien inmueble en disputa, lo que desmiente la tésis (sic) de la "mera tolerancia"."

Al revisar el contenido de dicha diligencia ocular, la Sala advierte que en ella se hace una descripción de las mejoras construidas sobre el Lote N° 32-247, ubicado en el Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá; a las cuales se les asignó un valor de doce mil balboas (B/.12,000.00).

La Corte estima que al igual que las pruebas analizadas anteriormente, esta inspección judicial tampoco es relevante para determinar la existencia de la Finca N° 31615, inscrita en Tomo 777, Folio 198 de la Provincia de Panamá y a quién le pertenece; razón por la cual no pudo influir en la decisión recurrida ya que es sobre la finca mencionada que se desea prescribir y no sobre el Lote N° 32-247 que es el que ha sido objeto de prueba en este proceso.

En vista de que no existen otros cargos que considerar, debe concluirse que el Tribunal Superior no incurrió en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba ni, en consecuencia, en la infracción de los artículos 770, 823, 904 y 953 del Código Judicial y 373, 376 y 1696 del Código Civil.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 29 de agosto de 1997, dentro del proceso ordinario interpuesto por los señores JUANA CARRASQUILLA RIOS y FELIPE GUDIÑO CARRASQUILLA contra el señor SENEN CARRASQUILLA.

Las costas de casación se fijan en la suma de doscientos balboas (B/.200.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MAYA CHANDRU NATHANI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ASEGURADORA LA UNIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ, apoderado judicial del señor MAYA CHANDRU NATHANI, recurre en casación contra la sentencia de 9 de noviembre de 1999, proferida por el Primer Tribunal Superior, del Primer Distrito Judicial, mediante la cual confirma la Sentencia No. 39, de 31 de mayo de 1999, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Se fijó en lista este negocio por el término de seis días, para que dentro de dicho período las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, lo cual sólo fue aprovechado por la parte opositora (fs. 652-654).

Procede la Sala a resolver sobre la admisibilidad del recurso, en base a los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

El recurso fue propuesto en tiempo, contra una resolución recurrible en

casación y en un proceso con cuantía superior a la legal exigida.

La primera causal de fondo invocada por el recurrente es: "infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia". Dicha causal se encuentra correctamente invocada.

El casacionista presenta cinco motivos, observándose en el segundo de ellos que el casacionista se refiere a pruebas de inspección judicial que se tomaron en cuenta, no siendo congruente dicho motivo con la causal invocada por el recurrente, lo que implicaría error de valoración, incompatible con la causal en que se funda el recurso.

Con respecto a las normas de derecho infringidas y su respectiva explicación, observa la Sala que en adición al artículo 769 del Código Judicial, debe consignar las normas que regulan cada una de las actividades probatorias aducidas por el casacionista.

Segunda causal de fondo es: "infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución recurrida."

En cuanto a los motivos, en términos generales, se observa que los mismos reúnen de manera general los requisitos que la ley exige.

Con respecto a las normas de derecho consideradas infringidas con su debida explicación, debe adicionarse el artículo 770 del Código Judicial, que se refiere al principio para la valoración de la prueba, en adición a las normas probatorias específicas que gobiernan la valoración de esas pruebas (testimonial, pericial, etc.)

Por consiguiente, considera esta Sala que el recurrente debe corregir el recurso que nos ocupa, según las anotaciones vertidas.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por MAYA CHANDRU NATHANI, mediante apoderado judicial, contra la sentencia de 9 de noviembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual confirma la Sentencia No. 39 de 31 de mayo de 1999, proferida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, para lo cual se concede el término de cinco días, tal como lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANA JULIA DE VELARDE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INTERNATIONAL MACHINERY AND EQUIPMENT TRADING CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense ROSAS Y ROSAS, en su condición de apoderada de la señora ANA JULIA DE VELARDE, ha formalizado recurso de casación en el fondo contra la resolución de 7 de diciembre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso sumario propuesto por ANA JULIA DE VELARDE contra la Asamblea General de Acciones y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad International Machinery and Equipment Trading Corporation.

Cumplidas las reglas del reparto, el negocio se fijó en lista, presentando escrito sobre la admisibilidad del recurso únicamente la parte actora, como consta a fojas 329 a la 330 del expediente.

Se procede, entonces, al examen del recurso de conformidad con los requerimientos que establecen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial.

En este caso, la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno, pero el escrito mediante el cual se formaliza presenta unos defectos.

En el aludido escrito, visible a fojas 315 a la 321, se establecen dos causales de fondo.

En la primera, que es la "infracción de normas sustantivas de Derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", podemos apreciar que hay ciertos errores que deben ser enmendados por la recurrente.

Observa esta Sala con relación al motivo quinto, que no se logra entender claramente la causal de error de derecho invocada, pues los planteamientos utilizados para expresar los cargos de injuricidad, se refieren a la otra causal probatoria, es decir, a la de error de hecho sobre la existencia de la prueba.

Sobre el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, el Dr. Jorge Fábrega Ponce, en su libro de Casación, página 138, explica que "se produce cuando el elemento probatorio se examina, se toma en cuenta, se analiza, pero no se le atribuye el valor, la eficacia probatoria, que conforme a la ley corresponde". Y por error de hecho sobre la existencia de la prueba se señala en el mismo libro, página 136, que "es el desconocimiento del medio o elemento probatorio, el ignorarlo o dar por existente un elemento probatorio que no obra en el expediente".

Por otra parte, observamos que el artículo 770 del Código Judicial, receptivo de los principios valorativos de las pruebas, no ha sido citado, siendo el mismo fundamental en el análisis de la causal alegada.

En la segunda causal, que consiste en la "infracción de la ley sustantiva, en el concepto de violación directa, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la decisión", se cumple debidamente con los requerimientos señalados por el artículo 1160 del Código Judicial.

A juicio de la Sala, el recurso resulta incompleto, mas no ininteligible, por lo que se le concede a la recurrente el término de ley para que enmiende los defectos anotados en la primera causal.

Por las consideraciones expuestas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION de la primera causal y ADMITE la segunda causal, ambas invocadas en el recurso de casación propuesto por la señora ANA JULIA DE VELARDE contra la resolución de 7 de diciembre de 1999, dictada por el Primer Tribunal Superior.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO RECURRE EN CASACION EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A PETROLERA DEL CARIBE, S. A. Y FRANCISCO SAMUDIO T. MAGISTRADO PONENTE: JOSE A. TROYANO. PANAMA, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Licenciada Ruth Mayra Alvarado, en su condición de apoderada judicial del señor RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 14 de septiembre de 1999, dentro del proceso sumario instaurado por el recurrente contra PETROLERA DEL CARIBE, S.A. y FRANCISCO SAMUDIO T.

La Sala debe decidir si el presente recurso de casación reúne los requisitos establecidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial para ser admitido.

En ese sentido, se ha podido constatar que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno, por persona hábil y que la resolución objeto de impugnación es recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del proceso.

En cuanto al escrito de formalización se observa que se trata de casación en el fondo y que se invocan dos causales.

La primera consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida; la cual se encuentra consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento han sido redactados adecuadamente y son congruentes con la causal invocada.

No obstante, al revisar las normas de derecho que se estiman infringidas y la explicación de cómo lo han sido, se advierte que si bien se cita el artículo 769 del Código Judicial, el cual se refiere a los medios de prueba en general, no se incluyó la disposición que establece la existencia de la prueba documental que se acusa ni, tampoco, la o las normas sustantivas que se consideran violadas como consecuencia de los errores probatorios que se le imputan a la resolución atacada.

Por tanto, esta primera causal debe ser corregida en atención a lo señalado.

La segunda causal es la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En los cuatro motivos que la sustentan, el recurrente alega que el Tribunal Superior le restó el valor probatorio que le concede la ley a la prueba documental aportada al proceso, sin señalar a qué documentos se refiere específicamente y a qué fojas del expediente se encuentran, situación que debe ser corregida.

No obstante, se observa que luego del apartado correspondiente a las

disposiciones legales que se estiman infringidas y sus respectivas explicaciones, la parte que recurre en casación añade una sección que denomina "PRUEBAS DOCUMENTALES ERRADAMENTE APRECIADAS" la cual, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1160 del Código Judicial, no forma parte del escrito de formalización del recurso. Por tanto, si quieren hacerse valer los argumentos allí expresados como parte del recurso, los mismos deben ser incorporados en los motivos, como cargos concretos que se le imputan a la resolución impugnada.

Por último, entre las disposiciones legales violadas el recurrente cita los artículos 462, 821 y 773 del Código Judicial, los cuales son incongruentes con la causal invocada.

Consecuentemente, se debe ordenar también la corrección de esta segunda causal.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCION del recurso de casación en el fondo interpuesto por la apoderada judicial del señor RODOLFO ALEJANDRO TROETSCH ESPINO, para lo cual se le concede el término de cinco (5) días que establece el artículo 1166 del Código Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BRITTANIA RODANICHE RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO QUE LE SIGUE JOSE MANUEL TERAN SITTON Y GLORIA PINO DE TERAN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense ALFARO, FERRER, RAMIREZ & ALEMAN, actuando como apodera especial de la Dra. BRITTANIA RODANICHE, formalizó recurso de casación contra el Auto de 22 de junio de 1999 dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la medida cautelar de secuestro propuesta por JOSE MANUEL TERAN y GLORIA CECILIA PINO DE TERAN.

Mediante resolución de 22 de diciembre de 1999, esta Sala admitió el presente recurso de casación y el mismo deviene dentro de un proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por los señores JOSE MANUEL TERAN y GLORIA CECILIA PINO DE TERAN, contra la Dra. BRITTANIA RODANICHE.

En el proceso principal ordinario de mayor cuantía en mención, los apoderados judiciales de la Dra. RODANICHE, formularon un recurso de casación. La Sala de lo Civil emitió la resolución de 25 de febrero de 2,000, casando la sentencia de 7 de enero de 1999 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, por medio de la cual revocó la sentencia de 8 de octubre de 1993 proferida por el Juez Primero de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá y, en su lugar, absolvió a la parte demandada de los cargos formulados en su contra.

Por tanto, debido a que en el proceso en cuestión se produjo un pronunciamiento por parte de esta Sala en los términos que se apuntan, no se justifica realizar el examen de un proceso accesorio habiendo mediado sentencia de fondo en el negocio principal.

Siendo así las cosas, se produce en este caso el fenómeno procesal de sustracción de materia que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, ocurre cuando la pretensión de la parte actora se ha cumplido o extinguido, o se ha decidido por otra vía, o se ha regulado normativamente en forma distinta, o se ha perdido la legitimación objetiva o subjetiva en el caso (Sentencia de 1 de diciembre de 1994).

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SUSTRACCION DE MATERIA, en el recurso de casación presentado por la Dra. BRITTANIA RODANICHE contra el Auto de 22 de junio de 1999, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la medida cautelar de secuestro presentada por JOSE MANUEL TERAN Y GLORIA CECILIA PINO DE TERAN.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSE. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CORE TRADING, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PH PACIFIC. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución del 16 de marzo de 2000, la Sala Primera de lo Civil, ordenó la corrección del recurso de casación presentado por la firma forense ESKILDSEN & ESKILDSEN, apoderado especial de CORE TRADING, INC., dentro del proceso ordinario que le sigue SOCIEDAD DE PROPIETARIOS DE PH PACIFIC GARDEN.

Para presentar la corrección del recurso contó el recurrente con los cinco (5) días que dispone el artículo 1166 del Código Judicial. Sin embargo, este término venció, segun lo establece el informe de la Secretaría de la Sala que obra a foja 398 del expediente, sin que el mismo hubiese presentado el correspondiente escrito de corrección.

Toda vez que la no corrección del recurso conlleva la inadmisión del mismo, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial, debe la Sala, actuando en correspondencia con la ley, declararlo no admisible.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo interpuesto por CORE TRADING, INC., mediante apoderado judicial contra el Auto de 30 de diciembre de 1999 proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las costas obligatorias a cargo del recurrente se fijan en SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## IMPEDIMENTOS

**FISCALIA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL Y CONSORCIO VAN DAM -SOSA Y BARBERO RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL PRESENTADO POR LA NACION Y CONSORCIO VAN DAM- SOSA Y BARBERO. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓN RODRÍGUEZ. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.**

**VISTOS:**

**El Honorable Magistrado ROGELIO FABREGA Z. solicita al resto de los Magistrados que integran esta Sala de lo Civil, lo declaren impedido para conocer de los recursos de casación interpuestos por LA FISCALIA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL y por CONSORCIO VAN DAM -SOSA Y BARBERO, en el proceso arbitral propuesto por CONSORCIO VAN DAM- SOSA Y BARBERO contra LA NACION.**

**En el escrito de manifestación de impedimento, que consta a fojas 329, se expresa lo siguiente:**

> **"...**
> **...**
> **Respetuosamente solicito a los Magistrados de la Sala Civil, me separen del conocimiento de los recursos de casación interpuestos por la FISCALIA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL y CONSORCIO VAN DAM SOSA Y BARBERO, mediante apoderados judiciales, contra la resolución de 20 de mayo de 1999 y las de 27 y 28 de mayo de 1999 que las corrigen y aclaran.**
>
> **El presente recurso extraordinario contra el laudo arbitral de 20 de mayo de 1999, tiene su origen en la Resolución No. 71 de 1980 y la Resolución No. 72, de ese mismo año, en virtud de las cuales se autorizó la contratación sin el registro de licitación, así como la celebración del contrato sometido a arbitraje. El suscrito, como Ministro de Estado, participó en la expedición de los actos administrativos que autorizaron la aludida contratación, por lo que se encuentra nuestra situación consagrada como una de las causales de impedimento.**
>
> **Por lo anterior, solicito formalmente que se me separe del conocimiento de esta causa, en base al ordinal 12o. del artículo 749 del Código Judicial.**
> **..." (Fs 329)**

**A juicio del resto de la Sala, la circunstancia anotada por el Magistrado Rogelio A. Fábrega Z. configura la causal de impedimento descrita en el ordinal 12 del artículo 749 del Código Judicial que preceptúa el "Haber intervenido el Juez o Magistrado en la formación del acto o del negocio objeto del proceso".**

**En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ROGELIO FABREGA Z. y DISPONE que se llame al Magistrado de la Sala siguiente según el orden alfabético de apellidos.**

**Notifíquese.**

**(fdo.) PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ**
**(fdo.) JOSE. A. TROYANO**
**(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE**
**Secretaria**

**=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=**

**MORGAN & MORGAN RECURRE DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 1° DE FEBRERO DE 2,000**

DICTADA POR EL TRIBUNAL MARITIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO INCOADO POR TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A. Y ATLANTIC TURIST INVESTMENT, S. A. CONTRA FERRYS INTERNATIONAL, S. A.; TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA, INC.; EXPORT & IMPORT CONSULT, S. A. FERRY DE BOCAS DEL TORO, S. A. Y ARTHUR ROBINSON. CALIFICACIÓN DE IMP. DEL MAG. ROGELIO A. FABREGA Z. MAGISTRADO PONENTE: PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado ROGELIO A. FABREGA Z. ha solicitado al resto de esta Sala de la Corte Suprema se le declare impedido y en consecuencia, se le separe del conocimiento del Recurso de Hecho formulado por TUGS & BARGES (PANAMA) LTD. INC., FERRY DE BOCAS DEL TORO, S. A. y ARTHUR ROBINSON mediante apoderados judiciales, contra la Resolución de fecha 1 de febrero del 2000 emitida por el Tribunal Marítimo de Panamá dentro del proceso ordinario marítimo incoado por TRANSPORTE Y TURISMO BOCATOREÑO, S. A., ATLANTIS TURIST INVESTMENT, S. A., contra FERRYS INTERNATIONAL, S. A.; TUGS & BARGES (PANAMA) LTDA, INC; EXPORT & IMPORT CONSULT, S.A y ARTHUR ROBINSON.

El Magistrado FABREGA Z., fundamenta su impedimento en el hecho siguiente:

> "Con todo respeto solicito al resto de los Magistrados que componen la Sala, me declaren impedido para conocer del recurso de hecho presentado en el presente, en virtud del parentesco por afinidad en segundo grado que me une al juez JOEL MEDINA, quien firma la resolución impugnada ..."

La circunstancia aludida se encuentra como causal de impedimento contemplada en el artículo 749, numeral 5, que establece:

> "Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo".

Visto y considerado lo expresado por el Magistrado FABREGA Z., observamos que procede la declaratoria de impedimento, en virtud de lo que dispone el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial que se refiere a los impedimentos de los Magistrados y Jueces.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento presentado por el Magistrado ROGELIO A. FABREGA Z. para conocer del Recurso de Hecho y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal que le corresponda, de acuerdo al orden alfabético de apellidos, tal como lo ordena el artículo 78 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) PUBLIO MUÑÓZ RODRÍGUEZ

(fdo.) JOSÉ. A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO JOSE A. TROYANO DENTRO DEL RECURSO DE HECHO

**INTERPUESTO POR DARIO CARRILLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 4 DE OCTUBRE DE 1999 DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA E ILEGITIMIDAD, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA INTERPEUSTO POR ISAAC DAVID MIZRACHI Y OTROS, CONTRA JOSUE LEVY, RUBEN LEVY LEVY Y DOV BINDER. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.**

**VISTOS:**

**El Magistrado JOSÉ A. TROYANO ha solicitado a la Sala Primera de la Corte Suprema se le declare impedido y, en consecuencia se le separe del conocimiento del recurso de hecho formulado por el licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del 21 de diciembre de 1999, en el incidente de nulidad por falta de competencia e ilegitimidad, propuesto dentro del proceso ordinario instaurado por ISAAC DAVID MIZRACHI y PROYECCIONES DE ULTRAMAR, S. A., contra JOSUE LEVY LEVY, RUBÉN LEVY LEVY y DOV BINDER.**

**El Magistrado TROYANO fundamenta su impedimento en el hecho siguiente:**

> **"...**
> **Hago esta petición en vista de que se publicó en los periódicos de la localidad, que el Licenciado DARIO CARRILLO GOMILA ha interpuesto una denuncia en mi contra, ante la Asamblea Legislativa; por lo que estimo que dicha situación configura la causal de impedimento contenida en el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial.**
> **..."**

**La circunstancia alegada por el Magistrado TROYANO, tiene amparo jurídico como causal de impedimento, por lo tanto, se procede acceder a lo pedido.**

**Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento presentado por el Magistrado JOSÉ A. TROYANO para conocer del recurso de hecho interpuesto por los señores JOSUE LEVY LEVY y RUBÉN LEVY LEY, mediante apoderado judicial, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 21 de diciembre de 1999, lo separa del conocimiento del mismo y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala Segunda, de lo Penal, que le corresponda, de acuerdo al orden alfabético respectivo.**

**Notifíquese.**

**(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.**
**(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ**
**(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE**
**Secretaria**

**=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=**

## RECURSO DE HECHO

**RECURSO DE HECHO INTERPUESTO POR ARIAS, FABREGA Y FABREGA CONTRA LA RESOLUCION DEL 28 DE OCTUBRE DE 1999 DEL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMA QUE NIEGA LA APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 1999 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO INCOADO POR FRITZ TRANSPORTATION IINTL CONTRA UNITED ARAB SHIPPING CO. (S. A. G.) Y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD. (SOLIDARIAMENTE). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.**

**VISTOS:**

La firma forense ARIAS, FABREGA & FABREGA, apoderados judiciales de la persona jurídica UNITED ARAB SHIPPING CO. (S. A. G.), en lo sucesivo UASC, ha interpuesto recurso de hecho contra el Auto de 28 de octubre de 1999, expedida por el Tribunal Marítimo de Panamá dentro del proceso ordinario que a la recurrente y a TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., le sigue FRITZ TRANSPORTATION INTERNATIONAL A DIVISION OF FRITZ COMPANIES INC.

La resolución impugnada, como se indicó, es la de 28 de octubre de 1999, expedida por el Tribunal Marítimo de Panamá la cual niega el recurso de apelación anunciado por la recurrente contra la sentencia de 31 de agosto de 1999. La apelación interpuesta fue denegada por el Tribunal Marítimo de Panamá, sobre la base de lo pautado en el artículo 471 de la Ley 8ª de 1982, reformada por la Ley 11 de 1986, el cual permite a la parte que le sea favorable lo dispositivo de una resolución apelarla, siempre que pueda sufrir un perjuicio sustantivo o procesal o que justifique un interés legítimo en la impugnación, lo que a juicio del Tribunal Marítimo, no se cumplen en el caso debatido. En el sentido que se transcribe lo expuso el Tribunal en la resolución impugnada:

> "... este juzgador, ha podido advertir, que la parte impugnante de la Sentencia arriba mencionada, ha resultado absuelta de toda responsabilidad individual o solidaria en relación al reclamo, que en su contra mantenía la sociedad FRITZ TRANSPORTATION. No obstante, se observa asimismo, que invoca como fundamento de derecho para legitimar su apelación, el artículo 471 de la Ley 8va. de 1982, reformada por la Ley 11 de 1986, en la cual se consigna la posibilidad de que, aun la parte que le sea favorable la resolución, puede impugnarla, siempre y cuando, el recurrente pueda sufrir un perjuicio sustantivo o procesal o justifique interés legítimo en la impugnación.
>
> La norma parcialmente citada, es clara cuando señala, en que caso, a quien no le ha sido adversa la resolución, puede impugnarla. Y es precisamente, lo que a juicio de este juzgador no se evidencia por parte del apelante, ...
>
> En este sentido, no puede esta otra integrante de la demandada, salir a la defensa de los intereses de aquella, cuando no evidencia en que le afecta la decisión proferida EN CONTRA DE TRIDENT, más aun cuando el argumento central, se enmarca dentro de una eventual o futura etapa de ejeecución de la sentencia, todavía no llegada.
>
> Entonces, por no acreditarse de manera clara y concreta el perjuicio sustantivo o el interés legítimo, que le asista; considera este Tribunal que no le cabe a UNITED ARAB SHIPPING CO., LTD., la razón para que sea admitido el recurso en contra de la Sentencia en cuestión". (págs. 63-64).

Por supuesto, la parte recurrente no comparte la opinión del Tribunal Marítimo, por considerar, conforme lo manifiesta en el recurso sustanciado, que no obstante resultarle favorable la parte dispositiva de la resolución impugnada, su poderdante se haya expuesto a sufrir perjuicios materiales y procesales, derivado de la posibilidad de que en la etapa de ejecución de la sentencia intente la demandante el cobro de la condena con cargo a la carta de garantía ofrecida por la parte recurrente.

Lo anterior obedece al hecho de que, de acuerdo a la parte recurrente, en proceso cuyos fundamentos son similares al que se tramita, propuesto contra TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., y la recurrente, por Y. S. B. COMMERCIAL, por intermedio de los mismos apoderados legales que representan a la demandante en el presente proceso, presentaron los apoderados legales de la demandante, Y. S. B. COMMERCIAL, en la etapa de ejecución de la sentencia, solicitud al Tribunal para que la condena individual pronunciada contra TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., le fuera cobrada a la recurrente UASC, con cargo a la carta de garantía

presentada por la recurrente para la liberación del secuestro practicado a la M/N TRIDENT EAGLE, de propiedad de la recurrente, en favor de la demandada. Lo anterior lo deja expuesto la parte recurrente en los hechos del recurso, cuyo texto se transcribe:

> "PRIMERO: La pretensión objeto de la demanda en el proceso enunciado al margen superior fue la condenana solidaria de UASC y Trident Shipping Company Ltd. ("Trident"), por daños y perjuicios causados a la demandante por la falta de entrega de la carga embarcada a bordo de la nave "trident Eagle" (la Nave"). La Nave era propiedad de UASC, fue fletada por esta a casco desnudo a Selavik Shipping Inc. (Selavik"), y subfletada por tiempo por esta última, a su vez, a Trident, quien se constituyó en transportista bajo el contrato de transporte de la carga celebrado con la demandante.
>
> SEGUNDO: Una vez que UASC tomó posesión formal de la Nave, por incumplimiento del contrato de fletamento a casco desnudo por parte de Selavik y en aras de continuar la operación de la misma, se liberaron los secuestros practicados contra la Nave y su combustible, mediante un acuerdo expreso de UASC y la demandante, de conformidad con el Artículo 182 de la Ley 8 de 1982, y la consignación de una carta de garantía de Liverpool & London Protection & Indemnity Association Limited (P&I). La carta de garantía cubría el pago de la condena de las demandadas en forma solidaria, o de la nave de propiedad de UASC en proceso in-rem separado que entonces estaba sub-judice, pero no de ambos.
>
> TERCERO: Contemporáneamente, Y. S. B. Commercial ("YSB"), quien tiene el mismo apoderado judicial de la demandante en este proceso, demandó también en proceso ordinario marítimo a UASC y Trident, solidariamente, sobre causa de pedir, hechos y reclamaciones casi idénticas a los del presente proceso. En dicho proceso se consignó una caución y se dictó sentencia en forma similar, según describimos en los puntos Primero y Segundo de este escrito. Las piezas procesales de ese proceso se han aportado a éste, y vice versa, por haber seguido, ambos cursos procesales idénticos.
>
> CUARTO: En el proceso YSB vs. UASC y Trident, slidariamente (sic), YSB presentó una solicitud de ejecución de sentencia en la que aduce que UASC se constituyó en fiadora solidaria de Trident en base al acuerdo de consignación de la referida caución para la liberación de los secuestros. En ese proceso el Tribunal Marítimo negó la ejecución solicitada, toda vez que el acuerdo de consignación de la caución liberativa se limitaba a definir los términos en los que la caución sería aceptada. Dicha caución, que consiste en la promesa condicional de pago de un tercero, sólo se podía ejecutar si, en caso de fallo condenatorio, se determinaba la existencia de responsabilidad solidaria de UASC. No obstante, el Tribunal Marítimo en aras de la equidad y no obstante los términos del acuerdo de las partes, determinó que si la caución consignada liberó el secuestro del combustible, que se presumía de propiedad Trident, entonces con la misma se debió responder por el valor de dicho combustible, determinado al momento de la liberación del secuestro respectivo, para evitar que UASC se enriqueciera injustamente.
>
> QUINTO: YSB ha apelado la decisión del Juez Marítimo a fin de que, en la alzada, esa Honorable Sala reconozca la existencia de la supuesta fianza solidaria de UASC y se ordene el pago de la totalidad contra la condena de Trident mediante la ejecución de la carta de garantía.
>
> SEXTO: Con la solicitud de ejecución y la sustentación de la apelación la demandante pretende interponer una acción distinta a la

que fuera objeto de ese proceso y, por constituir una nueva acción y una nueva pretensión, la misma tendría que ser objeto de un nuevo proceso cuya naturaleza y competencia corresponden a la justicia ordinaria civil y no al Tribunal Marítimo. Este asunto está sub-júdice.

SÉPTIMO: Por otra parte, en el proceso enunciado en el margen superior de este escrito, el Tribunal Marítimo dictó Sentencia el 31 de agosto de 1998 condenando a Trident al pago de la suma de B/.165.550.93, en concepto de daños y perjuicios causados a Fritz Transportation International ("Fritz") por el incumplimiento del contrato de transporte de la carga más costas de B/.16.555.00, y los gastos e intereses que se encuentran pendientes de computar por la Secretaría del Tribunal Marítimo, y absolvió totalmente a UASC de responsabilidad.

OCTAVO: No obstante la exoneración total de responsabilidad de nuestra representada respecto de las pretensiones de la demandante, presentamos recurso de apelación contra dicha Sentencia toda vez que, al observar el desenvolvimiento del proceso gemelo seguido por Y. S. B. contra Trident y nuestra representada, existe un riesgo de que se repita la misma experiencia de una demandante que abusivamente pretende atribuirle responsabilidad por la condena de Trident a UASC.

NOVENO: Mediante auto de 28 de octubre de 1999, el Tribunal Marítimo no admitió la apelación sobre la base de que no hubo condena contra UASC y que, al momento de resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación, la demandante no había solicitado ejecución de sentencia que pusiera a nuestra representada en la situación de "perjuicio sustantivo o procesal" según lo previsto por el Artículo 471 de la Ley 8 de 1982.

DÉCIMO: En vista de que en este proceso se pueden repetir las mismas circunstancias suscitadas en la etapa de ejecución de sentencia del proceso ordinario marítimo de YSB, demandante, contra UASC y Trident, demandadas solidarias, existe un perjuicio potencial para UASC de una determinación de responsabilidad de su parte frente a Fritz como presunta fiadora solidaria de Trident. Por lo tanto, UASC debe entenderse legitimada para apelar la Sentencia condenatoria de Trident para oponer las excepciones y limitaciones que beneficien a Trident, aún cuando ésta no compareció al proceso.

UNDECIMO: Además, UASC no estaría actuando, como lo ha entendido el Juez Marítimo, "en los zapatos procesales de Trident", sino en los suyos propios, porque lo que estaría persiguiendo la demandante con tal ejecución sería resarcirse de la condena contra Trident con la garantía del P&I, que ampara solamente la posible responsabilidad de UASC". (págs. 1-3).

## DECISION DE LA SALA

Mediante el recurso de hecho que se examina, se advierte que la parte recurrente pretende la concesión del recurso de apelación que denegó el Tribunal Marítimo de Panamá mediante la resolución que se impugna. El fundamento fáctico y legal de la impugnación es, a tenor de lo dispuesto en el artículo 471 de la Ley 8ª, la posibilidad de que la recurrente pueda sufrir perjuicios sustantivos y procesales, en el evento de que la parte demandante en la etapa de la ejecución de la sentencia solicite que la condena impuesta a TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., sea cobrada con cargo a la carta de garantía presentada por la parte que recurre.

El artículo 471 de la Ley 8ª de 1982, centro de la controversia que ocupa a la Sala en este recurso de hecho, es del tenor siguiente:

> "Artículo 471: ...
> Cualquiera de las partes podrá impugnar una resolución aún cuando en su parte dispositiva la resolución sea favorable, siempre que el recurrente pueda sufrir un perjuicio substantivo o procesal o justifique interés legítimo en la impugnación". (Destaca la Sala).

El núcleo jurídico de la controversia estriba en determinar si, quien fue parte en un proceso, pero que no ha sido condenado en el mismo, puede intervenir en el recurso de apelación. El artículo 471 de la Ley 8ª de 1982 permite a una parte que no ha sido vencida, intervenir en el recurso de apelación, siempre que, como reza el citado artículo, el recurrente pueda sufrir un perjuicio procesal o sustantivo o tenga afectado un interés legítimo.

Conviene, por lo tanto, determinar si el recurrente puede sufrir un perjuicio procesal o sustancial o ser afectado en un interés legítimo.

Es evidente, que si el Tribunal Marítimo al ejecutar la sentencia que pretende ser apelada, continúa sosteniendo la tesis mantenida en el otro proceso que se menciona en el recurso de apelación, es decir YSB v. s. United Arab Shipping Corporation (S. A. G.) (UASC) y la motonave "Trident", e imputa a la carta de garantía el pago de la condena, aún cuando la misma no afecte de manera directa al aspirante a recurrir, quien ha resultado absuelto, derivado de una interpretación del sentido y alcance de la carta de garantía, interpretación esta de esencia a la función jurisdiccional del Tribunal Marítimo, le puede ocasionar, en sede de ejecución de sentencia, un perjuicio procesal o sustancial. Es evidente, de una parte, que United Arab Republic Shipping Co., en la fase de ejecución de una sentencia, que, se repite, no le ha sido desfavorable, puede sufrir un perjuicio de naturaleza procesal o sustancial, por lo que se encuentra acreditada la condición para la legitimación para apelar de aquélla parte que no ha sido vencida en la sentencia que pretende impugnar por esa parte, United Arab Republic Shipping Co.

No solamente requiere el artículo 471 de la Ley 8ª de 1982, que exista el riesgo de sufrir un perjuicio de naturaleza procesal o sustancial, sino, al propio tiempo, aún cuando no se encuentre comprometido un derecho de la naturaleza ya dicha, también la norma analizada permite la legitimación del no vencido, cuando un interés legítimo, del cual es titular, pueda ser afectado.

La noción de interés legítimo proviene de la doctrina iusadministrativista al aplicar el concepto de legitimación, que confiere un mayor amplio márgen que el interés directo que normalmente se exige del pretensor, por lo que resultará útil determinar el concepto de interés legítimo para acreditar si existe tal interés legítimo en el recurso de hecho de ocupa a la Sala.

El Tribunal Supremo de España se ha referido a ambos tipos de interés, el legítimo, obviamente, de mayor alcance que el primero:

1. Interés directo (Sentencia de 14 de julio de 1988, del Tribunal Supremo de España).

> "La expresión interés directo debe ser interpretada en el sentido de que para que el mismo exista basta con que el éxito de la acción represente para al recurrente un beneficio, material o jurídico, o por el contrario, que el mantenimiento de la situación creada o que pudiese crear el acto combatido le originaría un perjuicio, aunque tales beneficios o perjuicios se produzcan por vía indirecta o refleja.

2. Interés legítimo (Sentencias de 9 de mayo de 1991 y de 16 de diciembre de 1992, del mismo Tribunal Supremo español) TCIAS DE 9 DE MAYO DE 1991 Y 16 DE DICIEMBRE DE 1992 del Tribunal Supremo español)

> "cualqier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación

pretendida"

La doctrina, al analizar dicho tipo de interés, de rango constitucionall, ha sido analizado por SANCHEZ MORON, de la siguiente forma:

> "En términos generales, interés legítimo es todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible, de otra persona, pero si comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se le deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en Derecho Administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica de interesado, tutelada por el Derecho, siendo así que este no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la Administración y a reclamar de los Tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales, relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés".
>
> ENCICLOPEDIA JURÍDICA BÁSICA, Volumen III, Editorial Civitas, pág., 3661.

Resulta, de lo expresado, que, además de estar en situación de perjuicio con respecto a un derecho procesal o sustancial, también el recurrente ostenta un interés legítimo para poder recurrir, derivado de la circunstancia de afectado, en su esfera económica, del resultado del proceso, y la imputación de las consecuencias económicas en la carta de garantía que ha abierto.

De las consideraciones que anteceden, resulta claro para la Sala que, en el caso que nos ocupa, United Arab Shhhiping Co. debió permitirsele o reconocérsele el derecho de apelar, contrariamente a lo decidido por el Tribual Marítimo, razón por la cual es necesario admitir el recurso de hecho contra el auto de 28 de octubre de 1999, que negó el recurso de apelación formulado por los apoderados de UNITED ARAB SHIPPING CO., contra la sentencia de 10 de agosto de 1998, y, ordenar al Tribunal Marítimo que conceda el recurso de apelación denegado.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de hecho y, ORDENA al Tribunal Marítimo que conceda al recurrente UNITED ARAB SHIPPING CO.. el derecho a apelar contra la sentencia de 10 de agosto de 1998, proferida por ese Tribunal.

Notifiquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRÍGUEZ (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ARIAS, FABREGA & FABREGA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA EL AUTO DEL 28 DE OCTUBRE DE 1999 DEL TRIBUNAL MARITIMO DE PANAMA QUE NIEGA LA APELACION ANUNCIADA

CONTRA LA SENTENCIA DEL 10 DE AGOSTO DE 1998 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARTIMO INCOADO POR MORISHIGE ENTERPRISES CO. LTDA. CONTRA UNITED ARAB SHIPPING CO. (S. A. G.) Y TRIDENT SHIPPING COMPANY LTDA.. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense ARIAS, FABREGA & FABREGA, apoderados judiciales de la persona jurídica UNITED ARAB SHIPPING CO. (S. A. G.), en lo sucesivo UASC, ha interpuesto recurso de hecho contra el Auto de 28 de octubre de 1999, expedida por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso ordinario que a la recurrente y a TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., le sigue MORISHIGE ENTERPRISES CO. LTDA.

La resolución impugnada, como se indicó, es la de 28 de octubre de 1999, expedida por el Tribunal Marítimo de Panamá la cual niega el recurso de apelación anunciado por la recurrente contra la sentencia N° 18, de 10 de agosto de 1998. La apelación interpuesta fue denegada por el Tribunal Marítimo de Panamá, sobre la base de lo pautado en el artículo 471 de la Ley 8ª de 1982, reformada por la Ley 11 de 1986, el cual permite a la parte que le sea favorable lo dispositivo de una resolución apelarla, siempre que pueda sufrir un perjuicio sustantivo o procesal o que justifique un interés legítimo en la impugnación, lo que a juicio del Tribunal Marítimo, no se cumplen en el caso debatido. En el sentido que se transcribe lo expuso el Tribunal en la resolución impugnada:

> "... este juzgador, ha podido advertir, que la parte impugnante de la Sentencia arriba mencionada, ha resultado absuelta de toda responsabilidad individual o solidaria en relación al reclamo, que en su contra mantenía la sociedad FRITZ TRANSPORTATION. No obstante, se observa asimismo, que invoca como fundamento de derecho para legitimar su apelación, el artículo 471 de la Ley 8va. de 1982, reformada por la Ley 11 de 1986, en la cual se consigna la posibilidad de que, aun la parte que le sea favorable la resolución, puede impugnarla, siempre y cuando, el recurrente pueda sufrir un perjuicio sustantivo o procesal o justifique interés legítimo en la impugnación.
>
> La norma parcialmente citada, es clara cuando señala, en que caso, a quien no le ha sido adversa la resolución, puede impugnarla. Y es precisamente, lo que a juicio de este juzgador no se evidencia por parte del apelante, ...
>
> En este sentido, no puede esta otra integrante de la demandada, salir a la defensa de los intereses de aquella, cuando no evidencia en que le afecta la decisión proferida EN CONTRA DE TRIDENT, más aun cuando el argumento central, se enmcarca dentro de una eventual o futura etapa de ejecución de la sentencia, todavía no llegada.
>
> Entonces, por no acreditarse de manera clara y concreta el perjuicio sustantivo o el interés legítimo, que le asista; considera este Tribunal que no le cabe a UNITED ARAB SHIPPING CO., LTD., la razón para que sea admitido el recurso en contra de la Sentencia en cuestión". (págs. 31-32).

Por supuesto, la parte recurrente no comparte la opinión del Tribunal Marítimo, por considerar, conforme lo manifiesta en el recurso sustanciado, que no obstante resultarle favorable la parte dispositiva de la resolución impugnada, su poderdante se haya expuesto a sufrir perjuicios materiales y procesales, derivado de la posibilidad de que en la etapa de ejecución de la sentencia intente la demandante el cobro de la condena con cargo a la carta de garantía ofrecida por la parte recurrente.

Lo anterior obedece al hecho de que, de acuerdo a la parte recurrente, en proceso cuyos fundamentos son similares al que se tramita, propuesto contra TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., y la recurrente, por Y. S. B. COMMERCIAL, por intermedio de los mismos apoderados legales que representan a la demandante en el presente proceso, presentaron los apoderados legales de la demandante, Y. S. B. COMMERCIAL, en la etapa de ejecución de la sentencia, solicitud al Tribunal para que la condena individual pronunciada contra TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., le fuera cobrada a la recurrente UASC, con cargo a la carta de garantía presentada por la recurrente para la liberación del secuestro practicado a la M/N TRIDENT EAGLE, de propiedad de la recurrente, en favor de la demandada. Lo anterior lo deja expuesto la parte recurrente en los hechos del recurso, cuyo texto se transcribe:

> "PRIMERO: La pretensión objeto de la demanda en el proceso enunciado al margen superior fue la condenana solidaria de UASC y Trident Shipping Company Ltd. ("Trident"), por daños y perjuicios causados a la demandante por la falta de entrega de la carga embarcada a bordo de la nave "trident Eagle" (la Nave"). La Nave era propiedad de UASC, fue fletada por esta a casco desnudo a Selavik Shipping Inc. (Selavik"), y subfletada por tiempo por esta última, a su vez, a Trident, quien se constituyó en transportista bajo el contrato de transporte de la carga celebrado con la demandante.
>
> SEGUNDO: Una vez que UASC tomó posesión formal de la Nave, por incumplimiento del contrato de fletamento a casco desnudo por parte de Selavik y en aras de continuar la operación de la misma, se liberaron los secuestros practicados contra la Nave y su combustible, mediante un acuerdo expreso de UASC y la demandante, de conformidad con el Artículo 182 de la Ley 8 de 1982, y la consignación de una carta de garantía de Liverpool & London Protection & Indemnity Association Limited (P&I). La carta de garantía cubría el pago de la condena de las demandadas en forma solidaria, o de la nave de propiedad de UASC en proceso in-rem separado que entonces estaba sub-judice, pero no de ambos.
>
> TERCERO: Contemporáneamente, Y. S. B. Commercial ("YSB"), quien tiene el mismo apoderado judicial de la demandante en este proceso, demandó también en proceso ordinario marítimo a UASC y Trident, solidariamente, sobre causa de pedir, hechos y reclamaciones casi idénticas a los del presente proceso. En dicho proceso se consignó una caución y se dictó sentencia en forma similar, según describimos en los puntos Primero y Segundo de este escrito. Las piezas procesales de ese proceso se han aportado a éste, y vice versa, por haber seguido, ambos cursos procesales idénticos.
>
> CUARTO: En el proceso YSB vs. UASC y Trident, slidariamente (sic), YSB presentó una solicitud de ejecución de sentencia en la que aduce que UASC se constituyó en fiadora solidaria de Trident en base al acuerdo de consignación de la referida caución para la liberación de los secuestros. En ese proceso el Tribunal Marítimo negó la ejecución solicitada, toda vez que el acuerdo de consignación de la caución liberativa se limitaba a definir los términos en los que la caución sería aceptada. Dicha caución, que consiste en la promesa condicional de pago de un tercero, sólo se podía ejecutar si, en caso de fallo condenatorio, se determinaba la existencia de responsabilidad solidaria de UASC. No obstante, el Tribunal Marítimo en aras de la equidad y no obstante los términos del acuerdo de las partes, determinó que si la caución consignada liberó el secuestro del combustible, que se presumía de propiedad Trident, entonces con la misma se debió responder por el valor de dicho combustible, determinado al momento de la liberación del secuestro respectivo, para evitar que UASC se enriqueciera injustamente.

QUINTO: YSB ha apelado la decisión del Juez Marítimo a fin de que, en la alzada, esa Honorable Sala reconozca la existencia de la supuesta fianza solidaria de UASC y se ordene el pago de la totalidad contra la condena de Trident mediante la ejecución de la carta de garantía.

SEXTO: Con la solicitud de ejecución y la sustentación de la apelación la demandante pretende interponer una acción distinta a la que fuera objeto de ese proceso y, por constituir una nueva acción y una nueva pretensión, la misma tendría que ser objeto de un nuevo proceso cuya naturaleza y competencia corresponden a la justicia ordinaria civil y no al Tribunal Marítimo. Este asunto está sub-judice.

SÉPTIMO: Por otra parte, en el proceso enunciado en el margen superior de este escrito, el Tribunal Marítimo dictó Sentencia el 10 de agosto de 1998 condenando a Trident al pago de la suma de B/.436,939.43, en concepto de daños y perjuicios causados a Morishige Enterprises Co. Ltd. (Morishigue) por el incumplimiento del contrato de transporte de la carga (más costas de B/.44,858.84 y los gastos e intereses que se encuentran pendientes de computar por la Secretaría del Tribunal Marítimo), y absolvió totalmente a UASC de responsabilidad.

OCTAVO: No obstante la exoneración total de responsabilidad de nuestra representada respecto de las pretensiones de la demandante, presentamos recurso de apelación contra dicha Sentencia toda vez que, al observar el desenvolvimiento del proceso gemelo seguido por Y. S. B. contra Trident y nuestra representada, existe un riesgo de que se repita la misma experiencia de una demandante que abusivamente pretende atribuirle responsabilidad por la condena de Trident a UASC.

NOVENO: Mediante auto de 28 de octubre de 1999, el Tribunal Marítimo no admitió la apelación sobre la base de que no hubo condena contra UASC y que, al momento de resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación, la demandante no había solicitado ejecución de sentencia que pusiera a nuestra representada en la situación de "perjuicio sustantivo o procesal" según lo previsto por el Artículo 471 de la Ley 8 de 1982.

DÉCIMO: En vista de que en este proceso se pueden repetir las mismas circunstancias suscitadas en la etapa de ejecución de sentencia del proceso ordinario marítimo de YSB, demandante, contra UASC y Trident, demandadas solidarias, existe un perjuicio potencial para UASC de una determinación de responsabilidad de su parte frente a Fritz como presunta fiadora solidaria de Morishigue. Por lo tanto, UASC debe entenderse legitimada para apelar la Sentencia condenatoria de Trident para oponer las excepciones y limitaciones que beneficien a Trident, aún cuando ésta no compareció al proceso.

UNDECIMO: Además, UASC no estaría actuando, como lo ha entendido el Juez Marítimo, "en los zapatos procesales de Trident", sino en los suyos propios, porque lo que estaría persiguiendo la demandante con tal ejecución sería resarcirse de la condena contra Trident con la garantía del P&I, que ampara solamente la posible responsabilidad de UASC". (págs. 1-3).

DECISION DE LA SALA

Mediante el recurso de hecho que se examina, se advierte que la parte recurrente pretende la concesión del recurso de apelación que denegó el Tribunal Marítimo de Panamá mediante la resolución que se impugna. El fundamento fáctico

y legal de la impugnación es, a tenor de lo dispuesto en el artículo 471 de la Ley 8ª, la posibilidad de que la recurrente pueda sufrir perjuicios sustantivos y procesales, en el evento de que la parte demandante en la etapa de la ejecución de la sentencia solicite que la condena impuesta a TRIDENT SHIPPING COMPANY LTD., sea cobrada con cargo a la carta de garantía presentada por la parte que recurre.

El artículo 471 de la Ley 8ª de 1982, centro de la controversia que ocupa a la Sala en este recurso de hecho, es del tenor siguiente:

> "Artículo 471: ...
>
> Cualquiera de las partes podrá impugnar una resolución aún cuando en su parte dispositiva la resolución sea favorable, siempre que el recurrente pueda sufrir un perjuicio substantivo o procesal o justifique interés legítimo en la impugnación". (Destaca la Sala).

El núcleo jurídico de la controversia estriba en determinar si quien fue parte en un proceso, pero que no ha sido condenado en el mismo, puede intervenir en el recurso de apelación. El artículo 471 de la Ley 8ª de 1982 permite a una parte que no ha sido vencida, intervenir en el recurso de apelación, siempre que, como reza el citado artículo, el recurrente pueda sufrir un perjuicio procesal o sustantivo o tenga afectado un interés legítimo.

Conviene, por lo tanto, determinar si el recurrente puede sufrir un perjuicio procesal o sustancial o ser afectado en un interés legítimo.

Es evidente que si el Tribunal Marítimo al ejecutar la sentencia que pretende ser apelada, continúa sosteniendo la tesis mantenida en el otro proceso que se menciona en el recurso de apelación, es decir YSB v. s. United Arab Shipping Corporation (S. A. G.) (UASC) y Trident solidariamente, e imputa a la carta de garantía el pago de la condena, aún cuando la misma no afecte de manera directa al aspirante a recurrir, quien ha resultado absuelto, derivado de una interpretación del sentido y alcance de la carta de garantía, interpretación esta, de esencia a la función jurisdiccional del Tribunal Marítimo, le puede ocasionar, en sede de ejecución de sentencia, un perjuicio procesal o sustancial. Es evidente, de una parte, que UNITED ARAB SHIPPING CO. (S. A. G.), en la fase de ejecución de una sentencia, que, se repite, no le ha sido desfavorable, puede sufrir un perjuicio de naturaleza procesal o sustancial, por lo que se encuentra acreditada la condición para la legitimación para apelar de aquélla parte que no ha sido vencida en la sentencia que pretende impugnar por esa parte, UNITED ARAB SHIPPING CO.

No solamente requiere el artículo 471 de la Ley 8ª de 1982, que exista el riesgo de sufrir un perjuicio de naturaleza procesal o sustancial, sino, al propio tiempo, aún cuando no se encuentre comprometido un derecho de la naturaleza ya dicha, también la norma analizada permite la legitimación del no vencido, cuando un interés legítimo, del cual es titular, pueda ser afectado.

La noción de interés legítimo proviene de la doctrina iusadministrativista al aplicar el concepto de legitimación, que confiere un mayor amplio márgen que el interés directo que normalmente se exige del pretensor, por lo que resultará útil determinar el concepto de interés legítimo para acreditar si existe tal interés legítimo en el recurso de hecho que ocupa a la Sala.

El Tribunal Supremo de España se ha referido a ambos tipos de interés, el legítimo, obviamente, de mayor alcance que el primero:

> "1. Interés directo (Sentencia de 14 de julio de 1988, del Tribunal Supremo de España).
>
> "La expresión interés directo debe ser interpretada en el sentido de que para que el mismo exista basta con que el éxito de la acción represente para al recurrente un beneficio, material o jurídico, o

por el contrario, que el mantenimiento de la situación creada o que pudiese crear el acto combatido le originaría un perjuicio, aunque tales beneficios o perjuicios se produzcan por vía indirecta o refleja Interés legítimo (Sentencias de 9 de mayo de 1991 y de 16 de diciembre de 1992, del mismo Tribunal Supremo español) TCIAS DE 9 DE MAYO DE 1991 Y 16 DE DICIEMBRE DE 1992 del Tribunal Supremo español)

"cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida".

La doctrina, al analizar dicho tipo de interés, de rango constitucional, ha sido analizado por SANCHEZ MORON, de la siguiente forma:

"En términos generales, interés legítimo es todo interés de cualquier persona, pública o privada, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más estricto, como concepto técnico y operativo, el interés legítimo es una situación jurídica activa que se ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo, una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible, de otra persona, pero si comporta la facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación se le deriven. En otras palabras, existe interés legítimo, en concreto en Derecho Administrativo, cuando una conducta administrativa determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica de interesado, tutelada por el Derecho, siendo así que este no tiene un derecho subjetivo a impedir esa conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la Administración y a reclamar de los Tribunales la observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos judiciales, relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés".

(ENCICLOPEDIA JURÍDICA BÁSICA, Volumen III, Editorial Civitas, pág., 3661).

Resulta, de lo expresado, que, además de estar en situación de perjuicio con respecto a un derecho procesal o sustancial, también el recurrente ostenta un interés legítimo para poder recurrir, derivado de la circunstancia de afectado, en su esfera económica, del resultado del proceso, y la imputación de las consecuencias económicas a la caución otorgada como garantía en el proceso.

De las consideraciones que anteceden, resulta claro para la Sala que, en el caso que nos ocupa, UNITED ARAB SHIPPING CO. debió permitírsele o reconocérsele el derecho de apelar, contrariamente a lo decidido por el Tribunal Marítimo, razón por la cual es necesario, en el mismo sentido que lo decidió en la resolución de esta Sala de 9 de marzo del año 2000, admitir el recurso de hecho contra el auto de 28 de octubre de 1999, que negó el recurso de apelación formulado por los apoderados legales de UNITED ARAB SHIPPING CO., contra la sentencia de 10 de agosto de 1998, y, ordenar al Tribunal Marítimo que conceda el recurso de apelación denegado.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de hecho y, ORDENA al Tribunal Marítimo que conceda al recurrente UNITED ARAB SHIPPING CO., el derecho a apelar contra la sentencia de 10 de agosto de 1998, proferida por ese Tribunal y remita el expediente a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que se surta la alzada propuesta.

Notifiquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ (fdo.) JOSE A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

JOSUE LEVY LEVY Y RUBEN LEVY LEVY INTERPONEN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 1998, DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL PROCESO DE QUIEBRA QUE LE SIGUEN A DESARROLLO VIZCAYA, S. A. ABRAHAM DAVID MIZRACHI Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, apoderado judicial de JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY, ha promovido recurso de revisión contra la sentencia de 29 de abril de 1998, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá dentro del proceso de quiebra seguido por JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY contra ABRAHAM DAVID MIZRACHI, ISAAC DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y la sociedad anónima DESARROLLO VIZCAYA, S. A.

Una vez sometido el negocio al reparto de rigor, ha ingresado al despacho del Magistrado Sustanciador con el propósito de que se fije la cuantía de la fianza necesaria para que el recurso pueda ser acogido, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1196 del Código Judicial.

No obstante, antes de proceder con lo anteriormente señalado, es necesario revisar el libelo del recurso y determinar si cumple con los requisitos mínimos que prescribe la ley; puesto que el artículo 1197 ibídem le concede al Magistrado Sustanciador la facultad de rechazar de plano el recurso de revisión, cuando sea manifiestamente improcedente.

De acuerdo con las constancias procesales, el apoderado judicial impugna la sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia de 29 de abril de 1998, mediante la cual este Tribunal modifica la sentencia No. 35 de 24 de abril de 1997 proferida por el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el cuaderno que contiene la demanda de reposición interpuesta por los ejecutados en el proceso de quiebra que los señores JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY instauran en contra de los señores ISAAC DAVID MIZRACHI, ABRAHAM DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y de la sociedad anónima DESARROLLO VIZCAYA, S. A y condena a los demandantes JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY al pago de la suma de B/.106,000.00 en concepto de costas a favor de los señores ISAAC DAVID MIZRACHI, ABRAHAM DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y de la sociedad anónima DESARROLLO VISCAYA, S. A. (Fs. 31-32).

Contra la sentencia cuya revisión se solicita se interpuso el recurso extraordinario de casación y mediante resolución de 3 de febrero de 1999 la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no admitió las causales de forma y de fondo del recurso de casación interpuesto por JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY. (fs. 38-50)

De lo anteriormente expuesto se desprende que se intenta revisar una sentencia dictada dentro de un proceso en el que se surtieron las dos instancias y contra la cual también se interpuso el recurso de casación.

En fallos de 25 de noviembre de 1998 y 30 de abril de 1999, esta

Corporación de Justicia se ha pronunciado en relación con la naturaleza restrictiva del recurso de revisión de la siguiente manera:

> "Es precisamente el carácter extraordinario y excepcional lo que originó que el legislador dispusiera de normas restrictivas para su regulación pues no se puede desconocer, como ya la Sala lo ha manifestado anteriormente, que en el fondo el recurso de revisión va dirigido a dejar sin efecto la autoridad de cosa juzgada de que está revestida la sentencia ejecutoriada cuya revisión se solicita. De allí la consideración de que ello sea posible, por vía de excepción, por las razones y bajo las circunstancias que señala la ley, de manera que la revisión de una sentencia no se pueda utilizar, como pretenden algunos, como una tercera instancia, sino en los casos que taxativamente se señala y en los que por razones extraordinarias suscitadas dentro de los procesos, como por ejemplo fuerza mayor, dolo, fraude, etc., y otras circunstancias que dan paso a que se culmine con una sentencia viciada, cuya revisión se hace necesaria para corregir tales anomalías y purificar el proceso con miras a una correcta y justa administración de justicia" (Resolución de 25 de noviembre de 1998).
>
> "Ahora bien, el artículo 1189 del Código Judicial prescribe que habrá lugar a la revisión de una sentencia dictada por: 1. La Corte Suprema; 2. Un Tribunal Superior; o, 3: Un Juzgado de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aún existiendo el recurso de apelación, éste no se haya surtido por alguno de los supuestos que enumera a continuación y que constituyen las causales de revisión.
>
> De la lectura de esta disposición legal se colige su carácter restrictivo; es decir, que únicamente permite la utilización limitada de este recurso, para revisar procesos en los cuales no se haya podido surtir el principio de la doble instancia y, además, que en ellos se haya presentado alguna de las situaciones que, taxativamente, constituyen las causales de revisión. En otras palabras, el recurso de revisión, por su naturaleza restrictiva, es un recurso extraordinario que no es viable en aquellos procesos en los que se han cumplido todas las etapas procesales correspondientes, dentro de las cuales se han sometido al análisis y dictamen de los distintos tribunales de instancia." (Fallo de 30 de abril de 1999)

En vista de que el presente recurso es manifiestamente improcedente, debe rechazarse de plano, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1197 del Código Judicial.

En consecuencia, el MAGISTRADO SUSTANCIADOR, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el Recurso de Revisión interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Suprema, por el licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, en representación de JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY contra la Sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 29 de abril de 1998, dentro del Proceso de Quiebra instaurado por JOSUE LEVY LEVY y RUBEN LEVY LEVY contra ABRAHAM DAVID MIZRACHI, ISAAC DAVID MIZRACHI, SELLY DAYAN DE MIZRACHI, YOLANDA MADURO DE MIZRACHI y la sociedad anónima DESARROLLO VIZCAYA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## TRIBUNAL DE INSTANCIA

**PEDRO PABLO CASTILLO ALVARADO Y AGUSTIN SANCHEZ GARCIA RECURREN EN CASACION EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE EVANGELISTA FRIAS GUTIERREZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FABREGA Z. PANAMA, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.**

**VISTOS:**

**En el proceso ordinario que EVANGELINA FRIAS GUTIERREZ le sigue a PEDRO PABLO CASTILLO ALVARADO y AGUSTIN SANCHEZ GARCIA, presentó la parte demandada recurso de casación contra la resolución de 11 de noviembre de 1999 proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.**

**Repartido el negocio, ordenó el sustanciador fijarle en lista por el término de ley para los alegatos de admisibilidad. Encontrándose el negocio en esta etapa procesal, presentaron las partes por conducto de sus respectivos apoderados judiciales, escrito de solicitud de aprobación de la transacción celebrada entre ambas partes, por lo que pasa la Sala a resolver de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1068 que regula la transacción judicial, cuyo tenor es el que se deja expuesto:**

> **"Artículo 1068. En cualquier estado del proceso, inclusive durante el trámite del recurso de casación y dentro de las condiciones establecidas en el Código Civil, podrán las partes transigir la litis.**
>
> **Para que la transacción produzca sus efectos en el proceso, se acompañará a la respectiva solicitud el documento que la contenga o se hará constar en memorial dirigido al Juez que conoce del asunto.**
>
> **En ambos casos el escrito será presentado personalmente, salvo que la firma de las partes en el respectivo memorial haya sido autenticada ante Juez o ante Notario.**
> **..."**

**Esta Sala considera que la transacción presentada, groso modo, cumple con los requisitos y condiciones exigidas en la ley para su aprobación.**

**En primera instancia, advierte la Sala, que las partes han presentado en casación su escrito de transacción, conforme lo permite o prescribe el artículo citado, por intermedio de los apoderados legales de las partes, los cuales están facultados en sus respectivos poderes para transigir, a foja 1 y 240 respectivamente.**

**La solicitud formulada, aparece acompañada del memorial dirigido a la Sala, en el que consta la transacción celebrada entre las partes, el cual reposa de foja 241 a 242. En cuanto a la presentación de la solicitud, las partes no lo hacen personalmente, pero, las firmas de las partes en el memorial indicado fueron autenticadas ante Notario, opción que permite la norma transcrita arriba.**

**De lo que viene expuesto, concluye la Sala que la transacción celebrada por las partes en el presente proceso reúne los requisitos legales para su viabilidad, por lo que de conformidad con la petición formulada debe esta Superioridad prestarle su aprobación.**

**Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA LA TRANSACCION celebrada dentro del proceso ordinario que a los señores PEDRO PABLO CASTILLO ALVARADO y AGUSTIN SANCHEZ GARCIA le sigue EVANGELISTA FRIAS GUTIERREZ y por tanto, ORDENA EL ARCHIVO del expediente.**

**Notifiquese y Devuelvase.**

**(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.**
**(fdo.) PUBLIO MUÑOZ RODRIGUEZ** **(fdo.) JOSE A. TROYANO**
**(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE**
**Secretaria**

**=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=**

**ÓRGANO JUDICIAL**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA SEGUNDA DE LO PENAL**

**MARZO 2,000**

## AMPLIACIÓN DE SUMARIO

**QUERELLA INTERPUESTA POR GERARDO ALVARADO MARINE CONTRA EL LICENCIADO CARLOS AUGUSTO HERRERA, FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA Y CONTRA EL LICENCIADO RODRIGO SARASQUETA, SECRETARIO GENERAL DE LA FISCALIA AUXILIAR DE LA REPUBLICA POR DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.**

**VISTOS:**

**Procedente de la Procuraduría General de la Nación, la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia recibe para su valoración legal el proceso seguido al Fiscal Auxiliar de la República, licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA y a su Secretario General, licenciado RODRIGO SARASQUETA, por la presunta comisión de los delitos contenidos en los artículos 155, 156, 159, 160, 334, 336, 338, y 353 del Código Penal relativos a la LIBERTAD INDIVIDUAL, ABUSO DE AUTORIDAD, CORRUPCION DE SERVIDOR PULICO, SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN ACTUACIONES JUDICIALES, conforme a querella presentada por el señor GERARDO ALVARADO MARINE.**

**FUNDAMENTO DE LA QUERELLA**

**El querellante labora en la Policía Técnica Judicial como Inspector III. Indica que para el mes de agosto de 1999, el subdirector de esa institución, Inspector RAMIRO JARVIS le instruyó para que participara en unas diligencias investigativas preliminares en las provincias de Colón y Panamá, ya que se tenía conocimiento que ciudadanos de nacionalidad colombiana pretendían introducir al país considerables cantidades de papel moneda estadounidense falso en denominaciones de cien dólares.**

**Continua narrado el querellante, que producto de su trabajo investigativo fueron aprehendidos en la provincia de Colón dos ciudadanos colombianos con siete mil quinientos dólares falsos (B/.7,500.00), los que al narrar su participación en los hechos indicaron, que en el hotel Covadonga de ésta ciudad una tercera persona entregaría más dinero falso.**

**Continua expresando ALVARADO MARAINE, que mientras efectuaba una estacionaria en el referido hotel, se percata que autoridades de la Fiscalía Auxiliar, dirigidas por el Secretario General, RODRIGO SARASQUETA efectuaban diligencia de allanamiento en el sitio indicado por uno de los investigados.**

**Indica el querellante, que se identificó frente al funcionario de instrucción como miembro de la Policía Técnica Judicial, pero fue tratado de manera grosera, irrespetuosa y absurda, ordenándosele su aprehensión, razón por la cual cuando se dirigían a las instalaciones de la Fiscalía Auxiliar se apresuró e introdujo a las oficinas de la Policía Técnica Judicial para notificar a sus superiores lo que le había sucedido.**

**Narra el querellante que posteriormente el licenciado SARASQUETA se dirigió a las oficinas de la PTJ y solicitó su entrega, la que se dilató hasta que presentara orden escrita, siendo conducido posteriormente a las oficinas del Fiscal Auxiliar, licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA, a fin de ser interrogado.**

**En el despacho del Fiscal Auxiliar fue maltratado, ya que se le privó de su libertad con abuso de las funciones del Fiscal Auxiliar, y se le lesionó su honor, honra y reputación profesional aunado al hecho, que las actuaciones del Fiscal Auxiliar y de su Secretario General "... DAÑARON TOTALMENTE una investigación policial preliminar que realizábamos en torno a un grave ilícito (Art. 334 del Código Penal.)".**

Concluye señalando que las actuaciones de los funcionarios querellados se encuentran identificadas en el Código Penal en los artículos 155, 156, 159, 160 (CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL), 334, 336 y 338 sobre CORRUPCION DE SERVIDORES PUBLICOS y ABUSO DE AUTORIDAD y el 353 sobre SIMULACION DE HECHOS PUNIBLES Y CALUMNIA EN ACTUACIONES JUDICIALES.

OPINION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El Procurador General de la Nación al emitir su Vista Fiscal No. 9 de 9 de febrero de 2000 recomienda a la Sala "... dictar un auto de SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, de carácter objetivo e impersonal en lo que concierne al Fiscal Auxiliar de la República, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2210, Numeral 2 del Código Judicial. Como quiera que en la presente investigación figura también el Secretario de la Fiscalía Auxiliar de la República, en calidad de querellado, es por lo que solicito declinar a la esfera correspondiente el conocimiento de su situación jurídica."

Continua expresando el Señor Procurador en su Vista Fiscal, que al tener conocimiento de los hechos querellados por el señor GERARDO ALVARADO MARAINE, se practicaron las pruebas pertinentes a fin de verificar las aseveraciones efectuadas por el ofendido, las que fueron desvirtuadas con las evidencias que se recabaron, por lo que no existe credibilidad con respecto a los cargos que el querellante le imputa al Fiscal Auxiliar y a su Secretario General.

Como sustento a esas aseveraciones se acreditó en el expediente el informe rendido por el licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA en el que expresa que, en la diligencia de allanamiento se encontró información que relacionaba al investigado ALVARADO MARAINE con el ilícito investigado, que el querellante se encontraba trabajando en una investigación como agente encubierto sin las debidas autorizaciones, considerando además que se encontraba en posesión de las llaves de la habitación del hotel donde se realizó la diligencia de allanamiento.

Informa el licenciado SOSSA RODRIGUEZ, que el agente instructor en turno en la provincia de Colón, para la fecha de los hechos, desconocía las actuaciones desplegadas por GERARDO ALVARADO MARAINE, por lo que era necesario trasladarlos a las instalaciones de la Fiscalía Auxiliar para corroborar lo aseverado por el querellante.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La presente querella se encuentra dirigida contra el Fiscal Auxiliar de la República, licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA y al Secretario General de ese despacho instructor, licenciado RODRIGO SARASQUETA, por lo que la Sala Segunda se pronunciará solamente con respecto a la condición jurídica del Señor Fiscal Auxiliar, tal cual lo dispone el artículo 95 del Código Judicial, ya que se carece de competencia para conocer y decidir lo relativo a las actuaciones del Secretario General de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Al revisar el sumario, se observa que el Señor Procurador General de la Nación en su vista fiscal No. 9 de 9 de febrero de 2000 solicita un Sobreseimiento Definitivo de carácter objetivo e impersonal a favor del licenciado CARLOS AUGUSTO HERRERA en lo que respecta a los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y SIMULACIÓN DE HECHOS PUNIBLES, mas no así en el resto de los delitos querellados por el señor ALVARADO MARAINE, señalados a fojas 13 a 15 del sumario.

El ofendido manifiesta que el funcionario instructor cometió Delitos CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, de los contenidos en los artículos 155, 156, 159 y 160 del Código Penal; CORRUPCION DE SERVIDORES PUBLICOS (artículo 334); ABUSO DE AUTORIDAD (artículos 336 y 338),y CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (artículo 353), por lo que el documento remisorio contentivo de las conclusiones allegadas por el Ministerio Público que sustentan su recomendación debe pronunciarse sobre la existencia o no de los otros delitos querellados por el ofendido.

Considera la Sala que es importante aportar los testimonios del inspector RAMIRO JARVIS, DARELVIA HURTADO, PABLO CHEN, así como la ampliación al querellante GERARDO ALVARADO MARAINE para que concretice y explique los actos desplegados, presuntamente, por el Fiscal Auxiliar y el Secretario General de esa agencia de instrucción en lo relativo a los delitos CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL y CORRUPCION DE FUNCIONARIO PUBLICO.

Dada la gravedad de los hechos planteados en la querella, la Sala es del criterio que los mismos deben ser investigados en toda su amplitud, procurando determinar la existencia o no de hecho punible, así como la vinculación por parte de los acusados.

Ello es necesario en atención a lo dispuesto en el artículo 2215 del Código Judicial, que indica:

> "El sobreseimiento definitivo no podrá decretarse sino cuando esté agotada la investigación tendiente a comprobar el hecho punible y determinar la identidad del imputado."

Siendo ello así lo procedente jurídicamente es ordenar la ampliación del sumario.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECRETA LA AMPLIACION del sumario en la forma expuesta en la parte motiva y faculta al funcionario instructor para que practique cualesquiera otra diligencia que emane de las ya ordenadas y que sirvan al esclarecimiento de los hechos querellados.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Ad-hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

EN GRADO DE APELACION INGRESO A ESTA SALA AUTO DE SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A FAVOR DE MARGARITO PINEDA HERNANDEZ COMO PRESUNTO INFRACTOR DEL CAPITULO I, TITULO I, LIBRO II, DEL CODIGO PENAL EN PERJUICIO DE ARCADIO ATENCIO (Q. E. P. D.). MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingreso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el auto de 15 de noviembre de 1999, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se dicta sobreseimiento definitivo a favor de MARGARITO PINEDA HERNANDEZ, como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capitulo I, Título I, del Libro II del Código Penal, en perjuicio de ARCADIO ATENCIO (Q. E. P. D.), quien perdiera la vida el 6 de marzo de 1999, en el Corregimiento de Pasiga, Distrito de Chiman, Provincia de Panamá.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia basó su decisión fundamentalmente en las siguientes consideraciones (fs. 206- 221)

"Se encuentra así el Tribunal ante una situación ejecutada en ausencia de una pluralidad de testigos, pero con la particularidad de que la versión del imputado se encuentra corroborada con el dicho del único testigo presencial, además de que todos los demás declarantes que aportan información relativa al entorno circunstancial en el que se dieron los hechos, confirman como se ha visto, elementos de la versión que el imputado ha sostenido a lo largo de toda la investigación, como lo sucedido. Considera el Tribunal en conclusión que la versión del imputado en lo atinente a las circunstancias que motivaron su conducta, resultan atendibles y reitera que todos los elementos probatorios significativos incorporados a la encuesta, apuntan hacia la veracidad de lo afirmado por él, sobre el evento bajo estudio. Así las cosas, no estima el Tribunal que se encuentre el procesado vinculado razonablemente con la ejecución de un hecho punible, sino al contrario, que la conducta de MARGARITO PINEDA HERNANDEZ encuentra el amparo en la causa de justificación previsto en el artículo 21 del Código Penal, al punto de que se impone la decretación de un sobreseimiento definitivo, al tenor del mandato del numeral 3° del artículo 2210 del Código Judicial".

El Licdo. Rolando Rodríguez Chong, Fiscal Tercero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, al sustentar la apelación anunciada solicita a esta Sala se abra causa criminal contra el señor MARGARITO PINEDA HERNANDEZ por delito de homicidio cometido en perjuicio de ARCADIO ATENCIO, fundamentó su escrito en los siguientes términos:

"Como podrán observar a lo largo del paginario que conforma este negocio penal, no se vislumbra por ningún parte lado acto o conducta alguna por parte del imputado MARGARITO PINEDA que se asimile a la LEGITIMA DEFENSA, pues, huelgan en este proceso penal los elementos constitutivos o integrativos de esa causa de justificación, y agrega más adelante enumerando estas causales lo siguiente:

1. Agresión injusta, actual, o inminente del que resulte afectado por el hecho: podrán percatarse señores Magistrados que la conducta desplegada por el imputado no guarda relación con lo expuesto ut supra, ya que en ningún momento hubo una agresión injusta, actual o inminente de parte del occiso que pusiera en peligro la vida del señor PINEDA HERNANDEZ;

2. Medio racional para impedir o repeler la agresión: Debemos entender que medio racional implica el medio menos grave o dañoso para el agresor. Vemos entonces que el arma utilizada por el imputado en el hecho ilícito es un arma de fuego, una escopeta calibre 20, que no guarda ninguna proporción con un arma blanca estilo MACHETE que supuestamente portaba ARCADIO ATENCIO al momento del hecho, arma esta, como lo señalamos en la Vista Fiscal, que nunca fue vista ni encontrada en la escena del crimen;

3. Imposibilidad de eludirla o evitarla de otra manera: Esta imposibilidad no se cumple en este caso, pues, al no haber existido la agresión por parte del afectado ARCADIO ATENCIO, no tenía el imputado PINEDA HERNANDEZ que eludir o evitar la mencionada agresión, además, debió tratar de persuadir a quien se aprestaba a agredirlo haciéndole por lo menos un disparo al aire o al piso, es decir, buscar otra forma o vía para escapar, eludir o evitar la supuesta agresión, sin embargo, este hecho no ocurrió, porque todos los declarantes allegados al expediente han dicho que se escuchó solo una fuerte explosión; y

4. Falta de provocación de parte de quien se defiende: Definitivamente que, quizás sea este el único elemento que concurrió

> en el actuar del sindicado MARGARITO PINEDA, ya que, el señor ARCADIO ATENCIO fue quien llegó a la casa de PINEDA HERNANDEZ donde tenía una bodega a solicitarle vendiera una botella de Seco Herrerano, a lo cual se negó el imputado, lo que desató la discusión entre la víctima y el victimario que término en el desenlace fatal, sin embargo, también debe existir una proporcionalidad entre las acciones de quien agrede y las acciones de quien se defiende, de manera tal, de que si las primeras no revisten suficiente importancia que justifiquen la respuesta, no opera esta causa de justificación; como es el caso.

Se puede apreciar dentro de la presente encuesta penal que el elemento objetivo del hecho punible se encuentra acreditado con la documentación existentes en autos como lo son la diligencia de levantamiento del cadáver, (fs. 2-6), certificado de defunción (fs. 68), vistas fotográficas (fs. 181-190), el protocolo de necropsia que establece como causa de la muerte del señor ARCADIO ATENCIO shock hemorrágico por disparo de escopeta penetrante al abdomen visible a fojas 538.

Desde el momento en que al señor MARGARITO PINEDA HERNÁNDEZ se le recibe indagatoria, por el hecho que se le imputa (fs. 13-36), acepta su autoría, explicando que lo hizo en defensa propia, en el momento en que el hoy occiso ARCADIO ATENCIO lo iba a agredir con un machete.

> "Llego este señor a mi casa, él solo y me dijo que le vendiera una botella de seco, le conteste que yo no vendía aguardiente, que la cantina estaba cerrada; él insistió a que le vendiera licor y yo le conteste también que yo no vendía; molesto me dijo: "SI TU NO ME VENDES YO ME ATREVO A METERME A SACAR UNA BOTELLA DE SECO". Yo le conteste "ESE ES PROBLEMA TUYO". De pronto se puso a desafearme a pelear afuera en el patio y como yo no le hice caso, se fue para la posada en donde él se encontraba, diciendo que iba a buscar un machete. Yo creía que era juego de CHOLO. A los pocos minutos llegó, se bajo del caballo y corrió para dentro de mi casa y yo le dije: "VAYASE CHOLO", él no puso atención no me hizo caso, saltó para adentro de mi casa con él machete en la mano, y al ver yo, que CHOLO venía encima de mí, con el machete en la mano tuvo que defenderme y como me encontraba arrinconado toqué mi escopeta, la levanté y le disparé".

Igualmente se cuenta en autos con la declaración de ALEJANDRO GONZALEZ BASTITA, (fs. 80-83), CARLOS PASCUAL BATISTA MENDOZA, (fs. 84-88), y CARLOS PASCUAL CEDEÑO, (fs. 110-113), quienes manifiestan no saber nada sobre los hechos ocurridos el día en que perdiera la vida el señor ARCADIO ATENCIO, señalando que solo vieron cuando éste yacía en el piso. Igual declaración brindó la señora NEOMECIA OTERO ARCIA, (fs. 91-94), quien manifiesta no saber nada sobre el caso.

DORINDO CRUZ MURILLO, (fs. 119-121), en declaración rendida manifestó que:

> "Yo escuche una discusión cuando llegue a donde mi hermano de nombre ALFREDITO CRUZ, quien no estaba en la casa y yo fui a dejar la motosierra que él me había prestado y cuando llegue a la casa de él escuche la discusión entre los señores MARGARITO y no se quien era él otro se que era MARGARITO porque escuche la voz que la misma se escuchaba alterada y en voz alta, no recuerdo que decía, cuando escuche eso que le digo salí de la casa para oír quien era, y escuche la voz de ARCADIO ATENCIO, y escuche que éste le dijo "QUE SI TENIA ESA CANTINA SINO ERA PARA ATENDER A LA GENTE MEJOR QUE NO TUVIERA NADA", no escuche más la voz de MARGARITO, y vi pasar a caballo al CHOLO o sea al muerto, en dirección a la casa del papa, y vi cuando regresó nuevamente a caballo, cuando llegó acá desmonto del caballo en frente de la cantina a que no se, en eso escuche el tiro, después me enteré que venía a comprar seco".

Por su parte, ANA CASTILLO PEREZ, (fs. 97-100), quien relata lo sucedido de la siguiente manera:

> "Bueno yo oí una discusión él o sea Cholo como lo conocía a ARCADIO, véndeme una botella de seco, MARGARITO le dijo no te la puedo vender porque esta cerrada la cantina con candado y él insistió que le vendieran la botella de seco, yo en vista de eso me volví a regresar para atrás a recoger una ropa que tenía tendida, ellos quedaron allí, bueno, yo no le preste atención a lo que se estaban diciendo, discutiendo por el seco, "Véndeme, no te vendo", Bueno en ese momento yo oí un disparo, pero yo tampoco le presté atención por que yo creía que no era para tanto y también como estaba acostumbrado a disparar así al aire o sea MARGARITO, yo agarre la tina y venía para adentro cuando venía bajando el hijo de él, y me dijo corre que mi papa le disparó a Chelo, yo empuje la vasija y corrí hasta donde estaba él o sea Cholo y le dije a MARGARITO por que lo hiciste, él me contesto "PORQUE ESTOY CABRIAO". Más adelante en su declaración agrego "Cuando lo vi que estaban discutiendo ARCADIO no tenía nada en la mano y cuando lo vi cayendo al lado del papo herido tampoco tenía nada en la mano"

El menor JOSE JAVIER PINEDA, (fs. 122-128), testigo presencial de los hechos manifestó en su declaración que su padre el señor MARGARITO PINEDA HERNANDEZ, tuvo que disparar contra ARCADIO ATENCIO, para defender su propia vida pues éste quería agredirlo con un machete.

> "Yo me encontraba en el portal de mi casa, vi cuando ARCADIO ATENCIO vino a buscarle problema a mi papá, que le vendiera una botella de seco y mi papá no se la vendió porque la cantina estaba cerrada y el que vendía en la cantina era mi tío no estaba, estaba con unos peones en la finca de mi tío, o sea atendiendo a sus peones, entonces ARCADIO se enrabio que le vendiera la botella de seco porque el era el amo de la cantina y que el seco estaba allá dentro y el muchacho se puso bravo que si no le vendía la botella de seco se saliera afuera para pelear, y mi papá dijo que no iba a pelear, el muchacho le dijo que era cobarde si no salía a pelear y mi papá dijo que el era cobarde y que el no quería problemas en su casa y le dijo que se fuera para casa, ARCADIO le dijo que saliera afuera para machetearlo, y mi papá salió con el arma pero no tenía intención de tirarlo, el muchacho le dijo que era un cobarde que se defendía con arma, el muchacho le dijo que se viniera a pelear con el machete, entonces mi papá dijo que se fuera que él no quería pelear, y el muchacho se le fue acercando, mi papá le dijo que se quitara que no le quería tirar, el joven ARCADIO no puso cuidado se le acerco para machetearlo, mi papá le disparó en defensa propia".

En el presente caso, el Agente Fiscal acepta que hubo provocación de parte de ATENCIO, y la Sala agrega que se dio una agresión verbal e injusta contra PINEDA HERNÁNDEZ y si bien no llegó físicamente a materializarse, resultaba inminente, dado los antecedentes inmediatos al hecho y el machete con el que pretendía atacarlo, con lo cual se daba un peligro inminente contra la vida de PINEDA HERNÁNDEZ, que le era en ese momento imposible de evitarlo y no puede tampoco señalarse que en las condiciones que se produjo el disparo el empleo del medio utilizado no fuera el apropiado.

En fallo de 12 de enero de 1961, esta Corporación sostuvo que "no son los golpes, ni las heridas lo que hacen la defensa legítima, es el peligro que nace de la agresión. El sólo punto a constatar es la existencia y el carácter amenazante de la agresión", agregándose en otra resolución judicial que "en desuso ha caído la clásica teoría de que la defensa del sujeto injustamente atacado, debe ser proporcionada en cuanto a los hechos y consecuencias a los de la agresión. Quien actúa cohibido por el miedo no está en capacidad mental de limitar los actos que considera defensivos porque obra creyendo de buena fe en

la mayor gravedad del mal que lo amenaza y en que el suyo ha de ser más grave que el ajeno. Y quien actúa en un estado de estricta defensa legítima, siempre ha de suponer que el propósito de su agresor ha de ser el de causarle un daño mayor que el que pudiera calcularse por los medios de ejecución con que se inicia el ataque".

El maestro LUIS JIMENEZ DE ASÚA señala que "no es preciso que la agresión ilegítima se haya consumado y causado un mal cierto para que nazca el derecho de rechazarla, sino que basta que haya comenzado a demostrarse en la realidad con los hechos y frases o actitudes del agresor".

En ese mismo orden, el extinto jurista panameño FABIAN VELARDE en su monografía LA RACIONAL DOCTRINA DE LA LEGITIMA DEFENSA, apunta que el "peligro sea actual, antes de que la agresión comience y que no se requiere que la agresión esté siquiera comenzada; basta que sea inminente, según el criterio racional del agredido y lo es "cuando en el agresor se presentan elementos que razonadamente infundan en el agredido, en ese momento, el temor de que aquél le va a causar inmediatamente un daño". Y refiriéndose a la proporción entre el ataque y la defensa, sostiene el jurisconsulto panameño fallecido, "tarea sumamente ardua es ésta de determinar cuando ha habido desproporción entre la defensa y el ataque y no menos peligroso, por las injusticias a que puedan dar lugar, eso de afirmar que el que se excede en la reacción obedece a propósitos criminales" agregando que no es posible suponer en el agredido, "en el momento del conflicto, la serenidad de ánimo necesario para hacer los cálculos, raciocinios y cómputos a que es muy fácil dedicarse, lejos del peligro, en la comodidad del gabinete de trabajo".

La actuación levantada, después de haberla analizado cuidadosamente, nos lleva a la conclusión que se debe preservar la decisión tomada por el Tribunal Primario, dado que se aprecia que, encontrándose MARGARITO PINEDA HERNÁNDEZ en su hogar, después de haber regresado de sus faenas habituales de trabajo, se le presenta ARCADIO ATENCIO, quien venía de una junta donde presuntamente se había repartido chicha, requiriéndole para que le vendiera una botella de seco y al explicarle que no podía hacerlo porque el local estaba cerrado con candado, ARCADIO ATENCIO se disgustó a tal punto que, después de insistir con palabras amenazantes sobre su petición, se aleja momentáneamente del lugar y regresa armado de un machete con el que presuntamente atacaría a PINEDA HERNÁNDEZ por su negativa y ante el avance que agresivamente hacia su persona realizara el hoy difunto empuñando su machete, PINEDA HERNÁNDEZ apreció subjetivamente que su vida se encontraba en inminente peligro y se produce el disparo que, a corta distancia segun se deja establecido en el protocolo de necropsia, causa la muerte de ARCADIO ATENCIO.

La Sala, conforme a los criterios doctrinales que se han vertido en esta decisión y en atención a las distintas declaraciones que se recogen en el sumario, comparten el criterio vertido en el fallo apelado de que se encuentra acreditado en el proceso la excepción que desde el primero momento invocó el imputado.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus parte el auto de 15 de noviembre de 1999, emitido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se SOBRESEE DEFINITIVAMENTE al señor MARGARITO PINEDA HERNANDEZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario-Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

**APELACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ISABEL TENORIO GONZÁLEZ POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE SU HIJO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DEL DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL**

**VISTOS:**

**El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante auto de 9 de noviembre de 1999, ABRIO CAUSA CRIMINAL contra ISABEL TENORIO GONZÁLEZ, como presunta infractora de las disposiciones contenidas en el Libro II, Título I, Capítulo II del Código Penal, relativas al delito de Homicidio en perjuicio del producto de su embarazo.**

**Al notificarse la defensora oficiosa de la encartada, licenciada MATILDE ALVARENGA DE APOLAYO anunció recurso de Apelación, al ser sustentado en tiempo oportuno fue concedido en efecto suspensivo, por lo que corresponde a la Sala de lo Penal analizar las constancias procesales y determinar si le asiste la razón o no a la recurrente.**

### FUNDAMENTO DE LA RECURRENTE

**La licenciada DE APOLAYO, manifiesta que existen contradicciones en los diagnósticos del psicólogo y psiquiatra forense, ya que mientras aquél certifica que "... la evaluada evidencia alteración de la memoria con manifestación de alucinaciones auditivas..."; éste indica que la procesada se encontraba "...consciente y tenía la capacidad mental para darse cuenta de la ilicitud de sus actos y voluntad para regirse según esta comprensión".**

**Indica la apelante, que anteriormente su representada, ISABEL TENORIO fue objeto de violación carnal por parte de su progenitor y producto del hecho nació una menor que fue abandonada "en el monte", razón por la cual, la recurrente expresa la necesidad de ampliar la investigación "... a fin de determinar de manera clara y precisa cuál es el estado emocional y Psicológico de mi representada, toda vez que, si la misma ante embarazos vuelve a vivir el trauma de su niñez puede tener diferentes reacciones en ese momento tan delicado para cualquier mujer, situación esta (sic) que es importante para la defensa, porque tenemos que saber si estamos ante una persona que en estado grávido es imputable, inimputable o semi-imputable."**

**En consecuencia, la licenciada DE APOLAYO solicita se revoque el auto de enjuiciamiento y en su defecto se ordene la ampliación del sumario.**

### OPINIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO

**La licenciada GUILLERMINA MC DONALD DE OTTEY, en su calidad de Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, expresa a fojas 249-250 que la petición invocada por la defensa se encuentra acreditada en la investigación, en el sentido que para el día de los hechos, ISABEL TENORIO era imputable y tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su acto.**

**Continua manifestando la representante del Ministerio Público que las expresiones plasmadas por el psicólogo forense no se encuentran dentro de las modalidades de inimputabilidad contenidas en el Libro I, Título II Capítulo III del Código Penal y ello es corroborado con lo expresado por el psiquiatra forense cuando señaló que "la capacidad volitiva e intelectiva de la procesada no sufrieron disminución o alteración al momento de suscitarse el hecho punible ..."**

**Concluye manifestando la Fiscal Superior que acceder a lo peticionado por la defensa de ISABEL TENORIO dilataría el proceso y las pruebas que requieren sean ampliadas seran valoradas en el acto de audiencia oral, por lo que debe**

confirmarse el auto venido en apelación.

ANÁLISIS DE LA SALA

La inconformidad de la apelante radica en las contradicciones, que a su juicio, contienen los informes del psicólogo y psiquiatra forense con respecto a las facultades mentales de la procesada al momento de la ejecución del ilícito.

Sobre el particular la Sala observa, que es obligación del ente jurisdiccional proceder conforme lo dispuesto en el artículo 2222 del Código Judicial, es decir, determinar la existencia de un delito, así como las pruebas o indicios que vinculan a un sujeto con ese delito.

Las referencias de culpabilidad deberán ser atendidas en el plenario y las partes dentro del periodo probatorio pueden aducir pruebas y formular los alegatos que estimen necesarios para la defensa de los intereses de su representada.

En el plenario se debe valorar la prueba pericial psiquiátrica para determinar la inexistencia de trastorno en las facultades mentales y en el discernimiento de la procesada al momento de la ejecución del hecho punible.

La Sala no constata la existencia de contradicciones en los informes médicos psicológicos y psiquiátricos, practicados a ISABEL TENORIO porque mientras aquél analiza el perfil del delincuente, sus facultades y operaciones en relación con el delito y la propensión a delinquir, la psiquiatría estudia las enfermedades mentales a fin de determinar la modificación de la responsabilidad penal del delincuente. Razón por la cual compartimos el criterio del Ministerio Público al señalar que lo peticionado por la procesada en el recurso de apelación se encuentra acreditado en el sumario.

No existen contradicciones entre ambos informes médicos, ya que la psicología y la psiquiatría forense son ciencias auxiliares del Derecho Penal que atiende aspectos de la personalidad y salud mental de los procesados, por lo que no es procedente acceder a lo pedido por la defensora oficiosa de la señora ISABEL TENORIO.

El auto de enjuiciamiento venido en Apelación debe ser confirmado, porque el aspecto objetivo fue debidamente acreditado con el hallazgo del cadáver de un recién nacido en descomposición, el cual conforme al Protocolo de Necropsia era "un producto a término, apto para la vida extrauterina y presentaba signos de parto reciente y de haber nacido vivo de acuerdo con los hallazgos patológicos encontrados", ya que se le extrajo de su boca un papel, que presumiblemente le obstruyó las vías respiratorias, ocasionandole asfixia mecánica al infante.

Con relación al aspecto subjetivo, se ha acreditado que ISABEL TENORIO era la progenitora del recién nacido, manifestándole ésta al psicólogo forense su arrepentimiento en torno a los hechos.

Surgen en consecuencia serios motivos de credibilidad o graves indicios de responsabilidad contra la encartada, por lo que el binomio fáctico jurídico contenido en el artículo 2222 del Código Judicial para proceder con el auto de llamamiento a juicio se ha cumplido.

Por lo expuesto, esta Sala no accede a la solicitud formulada por la licenciada MATILDE ALVARENGA DE APOLAYO.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACION DENTRO DEL INCIDENTE DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN PENAL, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID SIMMONS, ROGELIO DE GRACIA Y MIGUEL PEÑALBA, POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MARZO DE DOS MIL 2000.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado RICARDO STEVENS acude ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de formalizar Recurso de Casación a favor de los señores DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA y MIGUEL PEÑALBA, y contra la resolución calendada 28 de enero de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que revocó la resolución de 18 de septiembre de 1998, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Penal de Colón, y en consecuencia ordenó continuar el proceso penal contra los imputados por la supuesta comisión del delito genérico de Falsificación de Documentos.

Cumplido el término en lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, se procede a examinar el libelo de casación, con la finalidad de verificar si cumple con los requisitos de admisión.

En primer lugar observamos, que el recurrente incumple con lo estipulado en el artículo 102 del Código Judicial, toda vez que el escrito de casación no fue dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Penal, sino al "SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA".

En cuanto a los requisitos básicos que exige el artículo 2443 numeral 3° del Código Judicial, se observa, que la historia concisa del caso, ha sido redactada de tal forma que se logra desprender el vicio de injuridicidad que se ataca contra la resolución recurrida, sin embargo, el abogado casacionista obvia mencionar la génesis del proceso, contraviniendo de esta forma, lo requerido por la técnica casacionista, que exige, que la historia concisa del caso debe ser redactada de forma breve y sucinta, haciendo alusión a los hechos que dieron origen al proceso.

El recurrente invoca como única causal en el fondo "INFRACCIÓN DE UN TEXTO LEGAL EXPRESO" (f. 63), contenida en el numeral 1 del artículo 2435 del Código Judicial; que es sustentada en un solo motivo, de donde se desprende el vicio de injuridicidad que se ataca contra la resolución impugnada.

En cuanto a la sección de las disposiciones legales infringidas se aducen los artículos 2304 y 1008 del Código Judicial, como normas adjetivas infringidas, sin embargo el casacionista obvia transcribir dichas normas.

A lo anterior debemos señalar, que el recurso de casación por ser de carácter extraordinario debe cumplir con ciertas formalidades indispensables para su admisión. A este respecto, nuestra jurisprudencia y la ley han sido claros en señalar que en esta sección del recurso se debe transcribir la norma considerada infringida, cada una seguida del concepto de la infracción que se alega por separado, y con su respectiva explicación.

Dadas estas consideraciones, se concluye, que debido a que en el presente recurso extraordinario, se evidencian defectos, que son en cuanto a lo estipulado en el artículo 102 del Código Judicial, a la historia concisa del caso y la trancripción de las dispocisiones legales infringidas; procede ordenar la corrección del escrito en el sentido anotado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA la corrección del presente recurso de casación interpuesto por el licenciado RICARDO STEVENS, y DISPONE mantener el negocio en Secretaría por el término de cinco (5) días hábiles de conformidad a lo establecido en el artículo 2444 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA GUILLERMO GOTI MUÑOZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA UNO (1) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución judicial expedida el 29 de diciembre de 1999, esta Superioridad admitió el recurso de casación presentado a favor de GUILLERMO GOTI MUÑOZ y ordenó que el libelo de formalización del recurso de casación penal en el fondo presentado por el Lcdo. SILVIO GUERRA MORALES, en su condición de defensor de EUSEBIO TORRES JULIO, procesado por delito de posesión agravada de droga ilícita, permaneciera en Secretaria por el término de cinco (5) días, a fin de que la parte recurrente subsanara lo defectos formales que le fueron advertidos en la referida resolución.

En tiempo oportuno se presentó el escrito de corrección, por lo que corresponde ahora decidir sobre la admisibilidad de la iniciativa procesal propuesta.

El examen del nuevo libelo permite comprobar que el casacionista realizo la correcciones en la forma indicada por la Sala, en lo que se refiere a la historia concisa del caso, a los motivos y a las disposiciones legales infringidas, aspectos sobre los cuales versaron los errores que fueron puntualizados en nuestra resolución anterior.

En consecuencia, el suscrito Magistrado sustanciador de la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, ADMITE el presente recurso de casación penal en el fondo y dispone que se corra traslado a la Procuraduría General de la Nación por el término de cinco (5) días hábiles.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALCIDES RAMOS ARANGO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.**

**VISTOS:**

**La licenciada ROSARIO GRANDA DE BRANDAO, ha presentado recurso de Casación en el Fondo contra la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el 9 de marzo de 1999, en la que se confirma la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en contra de JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS.**

**La casacionista considera que el fallo censurado incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica infracción de la ley sustancial penal, y que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado, constituyendo esta causal la razón de ser de este recurso.**

**HISTORIA CONCISA**

**Los señores JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS y ALCIDES RAMOS ARANGO fueron procesados por posesión agravada de drogas ilícitas.**

**El día 17 de octubre de 1996 en el sector de Calidonia, calle "Mariano Arosemena" fue retenido el vehículo Toyota Starlet que conducía ALCIDES RAMOS ARANGO, junto a JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS, y en el asiento trasero se encontraban las menores LIZABETH MARTÍNEZ LORENZO, ANDREA MENA MURILLO, YESSENIA JIMÉNEZ MENDEZ, YICELMA JUDITH ARBOLEDA y YESIBETH IBARGUEN MURILLO.**

**Al ser detenido y revisado el vehículo el Cabo Segundo OMAR EDUARDO GONZALEZ DEL MAR, encontró a simple vista en el interior del auto, en el piso cerca del conductor, tres sobres de un polvo blanco.**

**Los miembros del orden público, GONZALEZ DEL MAR y RAYMUNDO BARROSO le encontraron igualmente a ORTIZ CABEZAS la suma de trescientos sesenta y cuatro balboas (B/364.00) y un sobre con polvo blanco en su cartera.**

**Los análisis de laboratorio certificaron que los sobres contenían 108.07 gramos de la droga conocida como Cocaína.**

**ALCIDES RAMOS ARANGO y JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS negaron su vinculación con el ilícito, no obstante, en ampliación de indagatoria, ratificada posteriormente, RAMOS ARANGO le formuló cargos a ORTIZ CABEZAS.**

**Mediante sentencia de primera instancia, el A-Quo absolvió de cargos a ALCIDES RAMOS ARANGO, y condenó a seis años de prisión por el delito de posesión agravada de drogas a JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS, decisión que fue confirmada en Segunda Instancia, para lo cual el Ad-Quem valoró los testimonios de OMAR EDUARDO GONZALEZ DEL MAR, RAYMUNDO BARROSO y ALCIDES RAMOS ARANGO.**

**Manifiesta la casacionista que el cargo de injuridicidad estriba en que fueron valorados incorrectamente los testimonios señalados en el párrafo anterior.**

**CAUSAL INVOCADA**

**"Error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica infracción de la ley sustancial penal y que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado". (Artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial)**

MOTIVOS:

La casacionista sustenta su causal en tres motivos, los cuales serán expuestos a continuación:

PRIMERO: Expresa la recurrente que el Segundo Tribunal Superior de Justicia valoró incorrectamente la declaración y posteriores ampliaciones de ALCIDES RAMOS ARANGO, ya que a fojas 16-25 manifestó desconocer la procedencia de la droga, y a folios 132-135 expresó que JUAN ANTONIO RAMOS ORTIZ CABEZAS la "sacó del bolsillo delantero de su pantalón tres bolsas plásticas contentivas de la sustancia ilícita incautada y las lanzó debajo de asiento del conductor ..."

SEGUNDO: Indica la casacionista, que la Segunda Instancia cometió error de derecho en la apreciación de la prueba al dar por acreditada la existencia de indicios de referencia, porque dedujo de la declaración del cabo segundo OMAR EDUARDO GONZALEZ DEL MAR (fojas 113-116), que el procesado se agachó para esconder la droga, cuando el testigo manifestó, que no podía "... precisar que movimiento realizó el imputado dentro del automóvil, ..." ni si utilizó las manos.

TERCERO: Sostiene la casacionista que el Ad-Quem apreció incorrectamente el testimonio del miembro del orden público RAYMUNDO BARROSO GUARDADO (folios 117-119) porque éste señaló que, cuando requisaba a ORTIZ CABEZAS le manifestó ser el propietario de la droga, a pesar que este acto no fue verificado ante un funcionario instructor.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION

La licenciada ROSARIO GRANDA DE BRANDAO, como sustento a la causal invocada expresa que han sido vulnerados los artículo 908, 972 y 2068 del Código Judicial, así como el artículo 260 del Código Penal.

Con relación al artículo 908 del Código Judicial indica la casacionista, que fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque a pesar que la norma procedimental determina que: "No hará fe el dicho del testigo que se contradiga notablemente en una o mas declaraciones; ...", el "A-Quem" no aplicó dicha disposición al valorar el testimonio de ALCIDES RAMOS ARANGO quien rindió tres declaraciones en las cuales se contradijo notablemente, las cuales están contenidas a fojas 16-25, a fojas 70 y finalmente a fojas 134.

Al sustentar la vulneración del artículo 972, del Código Judicial, relativo a los indicios, la casacionista indica que se dio en concepto de violación directa por omisión porque el Ad-Quem derivó indicios graves en contra de su representado de la declaración de OMAR EDUARDO GONZÁLEZ DEL MAR. Al deducir que el procesado se inclinó para esconder la droga dentro del vehículo, aún cuando éste manifestó no poder precisar qué tipo de movimiento hizo ORTIZ CABEZAS dentro del vehículo, ni sí en ese movimiento utilizó sus manos.

Con respecto al artículo 2068, también del Código Judicial fue vulnerado, de acuerdo a la recurrente, en concepto de violación directa por omisión, porque el Segundo Tribunal Superior de Justicia le otorgó pleno valor probatorio a lo manifestado por el miembro del orden público, RAYMUNDO BARROSO GUARDADO, cuando indicó que al revisar a JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS éste manifestó que la droga encontrada dentro del carro era de su propiedad, en circunstancias en que dicho funcionario no tiene la calidad de agente instructor, por lo que dicha afirmación carece de validez.

Finalmente y con relación a la norma sustantiva, la casacionista manifiesta que fue transgredido en concepto de indebida aplicación el artículo 260 del Código Penal, ya que a consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS fue sancionado sin haberse demostrado que haya estado en posesión de la droga incautada.

**OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

**La licenciada MERCEDES ARAÚZ DE GRIMALDO, en su calidad de Procuradora General de la Nación, Suplente Encargada, recomendó a este Tribunal de Casación no casar la sentencia de 9 de marzo de 1999, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.**

**Con relación a los motivos, es del criterio que la casacionista no logró acreditar los cargos de injuridicidad, ya que ALCIDES RAMOS ARANGO explicó que no había dicho la verdad porque fue amenazado por ORTIZ CABEZAS, por lo que no existe contradicción, sino aclaración de los hechos.**

**Expresó igualmente la representación social, que no comparte las aseveraciones esbozadas por la casacionista con respecto al testimonio de OMAR EDUARDO GONZÁLEZ DEL MAR porque el miembro del orden público fue enfático al señalar a folio 115 del proceso que lo vió cuando el imputado se inclinó, en forma muy sospechosa. Y con respecto al testimonio de RAYMUNDO BARROSO GUARDADO es del criterio, que no existe error manifiesto, por lo que concluye que la licenciada GRANDA DE BRANDO no sustentó correctamente los cargos de ilegalidad endilgados a la sentencia censurada.**

**Con relación a las disposiciones legales infringidas expresa criterios similares a los externados con relación a los motivos, de allí que a su juicio no se configuraron las infracciones señaladas con relación a las normas adjetivas, artículos 908,972 y 2068 del Código Judicial, por lo que tampoco se produjo la vulneración de la norma sustantiva.**

**DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN**

**La casacionista ha invocado la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia.**

**De acuerdo a PERÉZ VIVES, citado por Guerra de Villaláz y Ponce en su obra CASACIÓN a página 319, ésta causal se produce cuando:**

> **"... se le da a la prueba determinada fuerza que la ley no le atribuyó, se desconoce la que si le asignó, o se permite su producción sin llenar los requisitos legales, aplicandoles luego una fuerza estatuida sólo para elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por la ley. No se trata entonces de una falsa noción de hecho, sino de una noción equivocada de la ley".**

**Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que el error en la apreciación de la prueba debe ser manifiesto o "protuberante", pues de no haberse cometido, el fallo sería distinto. Señalados estos criterios doctrinales y jurisprudenciales procede el Tribunal de Casación a examinar los motivos que sustentan la causal arriba indicada.**

**En el primer motivo, la recurrente sostiene que el Ad-Quem valoró de manera incorrecta el testimonio de ALCIDES RAMOS ARANGO, visible a fojas 132 -135 del proceso, porque de esa declaración dedujo la autoría de JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS en la posesión agravada de drogas, cuando el testigo había manifestado en declaraciones anteriores que desconocía la procedencia de la droga.**

**Al confrontar lo aseverado por la casacionista con los criterios contenidos en la sentencia impugnada (folios 355), la Sala aprecia que con respecto al testimonio de RAMOS ARANGO, el Ad-Quem manifestó lo siguiente:**

> **"PRIMERO: Después del estudio de las piezas recabadas en el negocio penal, la sala está de acuerdo con el criterio vertido por el Juez de primera instancia, toda vez que reposa en autos el señalamiento que hace el imputado ALCIDES RAMOS al indicar que JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS es el propietario de la droga encontrada debajo del asiento**

del automóvil y que tanto él como su familia están bajo amenazas por parte de ORTIZ CABEZAS".

Considera el Tribunal de Casación que lo aseverado por el Ad-Quem no es producto de deducciones o conjeturas derivadas de un hecho cierto, como lo manifiesta la casacionista, ya que el declarante fue enfático al manifestar a folio 134 que la droga era de JUAN ORTIZ, manifestando que no lo había dicho anteriormente "... porque él me tenía amenazado y yo le tenía miedo. Me he atrevido a hablar y decir la verdad porque mi familia, sobre todo mi mamá, que sí se ha atrevido a decir todo, me a (sic) pedido que yo lo haga y por eso le pido que me de protección ya que por miedo no lo había hecho antes".

La Sala comparte el criterio de la representación social al manifestar, que no se trata de una contradicción entre lo que declara en un principio Ramos Arango, sino de su aclaración del por qué no dijo lo que sabía con respecto a los hechos, explicación que el Tribunal Superior, al valorarla en conjunto con los otros medios probatorios, le concedió credibilidad y eficacia probatoria.

Se concluye entonces que la recurrente no acreditó en este motivo el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia de 9 de marzo de 1999.

Con relación al segundo motivo la licenciada GRANDA DE BRANDAO expresa que el Segundo Tribunal Superior de Justicia cometió un yerro jurídico al dar por acreditados los indicios de referencia con respecto a la declaración del cabo segundo OMAR EDUARDO GONZALEZ DEL MAR.

Indica la recurrente, que de la declaración de GONZALEZ DEL MAR (folios 113-116) el Ad-Quem dedujo indicios para acreditar que JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS se agachó dentro del vehículo para colocar la droga debajo del asiento de RAMOS ARANGO, cuando ese testimonio no precisó qué movimientos realizó el imputado y si llegó a utilizar sus manos.

Sobre el particular, observa la Sala que la Segunda Instancia (fojas 355) efectuó el siguiente pronunciamiento:

"Aunado se tiene el testimonio del agente policial OMAR EDUARDO GONZALEZ DEL MAR (fs. 113), que fue quien vio cuando ORTIZ CABEZAS se agachó y luego de (sic) enderezó dentro del vehículo al notar sub(sic) presencia."

Al analizar la deposición de OMAR EDUARDO GONZALEZ DEL MAR a fojas 114, se tiene que el testigo narra que le solicitó a su compañero que detuviera el carro porque vio "... que el copiloto o acompañante del conducto (sic), al notar mi presencia, se encogió agachó y luego se enderezó nuevamente ...

A foja 115 agregó que:

"No le puedo precisar si realizó otro movimiento o maniobra dentro del vehículo ya que por la misma estructura del carro, es imposible ver si él se movió o realizó algún movimiento con las manos en la parte de bajo del mismo. Lo cierto es que lo vi cuando se inclinó, en forma muy sospechosa, y por eso ordené que se retuviera el vehículo."

Acreditado lo anterior la Sala estima que el Ad-Quem ha efectuado las valoraciones correctas, ya que el miembro del orden público explicó la causa por la que solicitó que el vehículo se detuviera.

La casacionista manifiesta que las estimaciones probatorias efectuadas por el A-Quem son producto de indicios, sin embargo éste Tribunal de Casación debe recordarle que los indicios constituyen un medio probatorio en la investigación de los delitos y son circunstancias y antecedentes, que teniendo relación con el delito, pueden razonablemente fundar una opinión sobre hechos determinados.

En esta oportunidad la Sala observa, que a través de la prueba testimonial de OMAR EDUARDO GONZÁLEZ DEL MAR surgen, junto a las otras pruebas testimoniales los elementos indiciarios necesarios para considerar que JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS era el propietario de la droga encontrada en el vehículo que conducía RAMOS ARANGO. En consecuencia, las valoraciones efectuadas por el Ad-Quem fueron estimadas conforme a las reglas de la Sana Crítica, por lo que la recurrente no logró acreditar el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia de 9 de marzo de 1999.

Con relación al tercer motivo, la recurrente cuestiona el valor probatorio otorgado a la deposición del otro miembro del orden público RAYMUNDO BARROSO GUARDADO, (fojas 117-119)porque éste señaló que JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS confesó ser el propietario de la droga.

Agrega la recurrente que de ser así esa "presunta confesión" no se profirió ante un funcionario de instrucción y por tanto "legalmente carece de valor probatorio".

Al confrontar estas aseveraciones con la sentencia impugnada, se observa a fojas 355, que la Segunda Instancia valora la prueba en los siguientes términos:

> "También se cuenta con la declaración jurada de RAYMUNDO BARROSO GUARDADO (fs. 217), y manifestó que en el acto de registro tanto de los imputados como del vehículo, el señor ALCIDES RAMOS indicó que la droga era de él, que JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS indicó que no le quería hacer daño a las menores que estaban en el automóvil, que la droga era de él y le ofreció la suma de B/2,500.00 para que lo ayudara a salir".

Al verificar la declaración de BARROSO esta Corporación de Justicia constata, que lo señalado en la sentencia es acorde con lo expresado por el testigo a folio 119 del proceso, por lo que no observa que el Ad-Quem efectuara estimaciones contrarias al sistema de valoración que autoriza la legislación patria, es decir, la Sana Crítica.

Debe la Sala observar que la licenciada GRANDA DE BRANDAO en su calidad de defensora oficiosa de ORTIZ CABEZAS cuestiona lo aseverado por el miembro de la policía RAYMUNDO BARROSO GUARDADO, sin embargo no consta en el proceso, ni se aportan elementos probatorios para considerar que BARROSO tiene algún interés en el proceso o ha faltado a la verdad, por lo que el testimonio vertido se ajusta a los requerimientos de nuestro derecho positivo, de allí que no se configura el cargo de injuridicidad atribuido a la sentencia impugnada.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La casacionista indica como disposiciones legales infringidas los artículos 908, 972 y 2068 del Código Judicial, así como el artículo 260 del Código Penal.

Al referirse al artículo 908 del Código Judicial, indica que fue vulnerado en concepto de violación directa por omisión porque el Ad-Quem reconoció valor probatorio a las declaraciones de ALCIDES RAMOS ARANGO, cuando esas deposiciones, de acuerdo a la recurrente, son contradictorias.

El artículo 908 expresa que "No hará fe el dicho del testigo que se contradiga notablemente en una o mas declaraciones ...". Observa la Sala que RAMOS ARANGO rindió tres declaraciones, en las dos primeras manifiesta desconocer quien es el propietario de la droga, y en la última le formula los cargos a ORTIZ CABEZAS.

El Tribunal de Casación es del criterio que RAMOS ARANGO no se contradijo, muy por el contrario, aclaró lo sucedido, ya que como explicó se encontraba siendo objeto de amenazas por parte del procesado, y ello es motivo suficiente

para guardar silencio.

Por otro lado se observa, que el Ad- Quem no se fundamentó en este único testimonio para declarar culpable al procesado, muy por el contrario, las pruebas fueron valoradas en su conjunto y en base a los principios de la Sana Crítica, visualizando el juzgador de Segunda Instancia el universo probatorio existente en la encuesta penal, lo que le permitió confirmar la sentencia de 30 de marzo de 1998.

En consecuencia la Sala observa que no se ha violado de manera directa por omisión el artículo 908 del Código Judicial.

De acuerdo a la recurrente el artículo 972 fue infringido en concepto de violación directa por omisión porque el Ad-Quem derivó indicios graves de las declaraciones de OMAR EDUARDO GONZALEZ DEL MAR en contra de los procesados.

No comparte esta Superioridad las aseveraciones de la casacionista al manifestar que los indicios son de poca gravedad, pues la declaración de OMAR GONZALEZ DEL MAR (fojas 113-116) es clara y diáfana al narrar los movimientos desplegados ORTIZ CABEZAS, por lo que el artículo 972 no ha sido infringido.

Los indicios nacen de un hecho conocido "... del cual a través de un juicio lógico que se inserta en el esquema característico del silogismo probatorio, se puede argumentar la existencia de otro hecho desconocido, que constituye el "thema probandum"" (GIANTURCO, Vito. LOS INDICIOS EN EL PROCESO PENAL, pág.1).

Es responsabilidad del juzgador utilizar los medios lógicos y racionales para valorar las pruebas y los indicios que de ellas nazcan; en éste sentido, no observa la Sala que la Segunda Instancia soslayara los criterios consignados para la estimación de los indicios, pues no existe duda, que de los testimonios de GONZALEZ DEL MAR, ALCIDES RAMOS ARANGO y RAYMUNDO BARROSO GUARDADO surgen graves indicios de responsabilidad contra JUAN ANTONIO ORTIZ CABEZAS.

Otra disposición infringida, de acuerdo a la casacionista, es el artículo 2068 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión, ya que el Ad-Quem otorgó valor probatorio a la presunta confesión realizada por el procesado al agente BARROSO GUARDADO, cuando éste no ostenta la calidad de agente instructor.

Esta Superioridad observa que la frase: "En ningún caso se tendrán como diligencias del sumario, las practicadas por personas o funcionarios que no tengan la calidad de funcionarios de instrucción" es la que señala la casacionista como vulnerada.

Sobre el particular, manifiesta la Sala, que la norma no exime de valor probatorio las confesiones suministradas a los agentes captores, el artículo 2068 indica, que para ser consideradas como diligencias del sumario deben ser proferidas ante un agente instructor (personero, fiscal, procurador).

No obstante, sobre este particular el artículo 2029 del Código Judicial establece que:

> "Las declaraciones ante las autoridades y funcionarios de policía, previas a la investigación ordinaria de los delitos, servirán de base cierta al funcionario de instrucción para iniciar la investigación sumaria respectiva"

El Tribunal constata, que el agente instructor utilizó este fundamento jurídico en las investigaciones, y aunado a ello le recibió declaración juramentada a RAYMUNDO BARROSO GUARDADO ratificando bajo la gravedad del juramento la forma en que se dieron los hechos y narrando el ofrecimiento que le hizo el procesado para salir bien librado de la situación en la que se encontraba.

Como bien se manifestó en párrafos anteriores, la Sala no observa la existencia de elementos que le permitan considerar el interés de faltar a la verdad del testigo, muy por el contrario, lo expuesto por BARROSO no se opone al sentido común, además de explicar las razones por las cuales los hechos narrados le constan.

En consecuencia este Tribunal de Casación concluye que el artículo 2068 del Código Judicial no ha sido infringido de manera directa por omisión.

Con respecto a la vulneración de la norma sustantiva, artículo 260 del Código Penal, que de acuerdo a la casacionista fue vulnerado por indebida aplicación, la Sala reitera que en las causales de naturaleza probatoria la violación de la norma sustantiva penal se produce cuando ha tenido lugar la infracción de la adjetiva, por lo que, sí esto último no ha ocurrido, no se configura la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo. La transgresión se produce de manera indirecta.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia de 9 de marzo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, recurrida por la licenciada ROSARIO GRANDA DE BRANDAO.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A VICENTE ANTONIO BENT INNIS POR DELITO CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL EN PERJUICIO DE OLIVER JOEL DAVIS TEJADA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, NUEVE (9) MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En este proceso penal, seguido a VICENTE ANTONIO BENT INNIS, por delito contra el pudor y la libertad sexual, ante el escrito presentado por el propio imputado en donde interponía recurso de casación contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, de 13 de junio de 1999, confirmatoria del fallo del 26 de enero del mismo año, pronunciado por el Juzgado Décimo Cuarto Penal que lo condenó a la pena de noventa y cuatro meses de prisión por el delito de violación carnal en perjuicio de la menor OLIVER JOEL DAVIS TEJADA, en atención a lo previsto por el artículo 2050 del Código Judicial se corrió traslado de la iniciativa procesal presentada por el sindicado al Defensor de Oficio para que lo asistiera en la "correcta formalización del recurso interpuesto, si registra causal legal que lo fundamente".

En ese orden, vencido el término para ello, el Licdo. Rolando Marcos - Hermoso, en su condición de Defensor de Oficio asignado para tal efecto, en escrito que aparece a fs 193-194 comunica a esta Sala que, después de entrevistarse con el imputado y de realizar un análisis de las constancias procesales, llega a la conclusión que no observa "elementos suficientes para lograr enervar el fallo dictado por el Segundo Tribunal Superior" razón por la cual "no formalizaremos el presente recurso de casación por estas causas"

Dada las circunstancias que expone la defensa, no es posible a la Sala

continuar con el trámite de la iniciativa perseguida por el imputado y es del caso desestimarla.

En mérito de lo dicho la Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, DESESTIMA la iniciativa procesal presentada por el propio imputado VICENTE ANTONIO BENT INNIS para que su causa sea revisada en recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HOLMI GUERRA PITTY Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante providencia de 4 de febrero del año en curso, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo presentado por el Licdo. ALCIBIADES CAJAR AMADOR, Fiscal del Circuito Judicial de Coclé, contra la sentencia de 31 de agosto de 1999, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, por la cual se absuelve al señor ANDRÉS GUEVARA VILLARREAL de los cargos por delito contra la salud pública. (Fs.6559-6561)

Es importante recordar, que el referido auto de 4 de febrero del presente año ordenó corregir los siguientes puntos del recurso:

Primeramente, se señaló que la historia concisa del caso, fue redactada de conformidad con la técnica casacionista, pero el recurrente cometió el yerro de citar fojas de la encuesta penal, lo que no corresponde a esta sección del recurso.

Igualmente, se dispuso que se corrigiera la denominación de las causales invocadas, el "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal y el "Error de hecho en la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación de la ley sustantiva penal", causales contenidas en el numeral 1, del artículo 2434 del Código Judicial.

Finalmente, se ordenó que se transcribiera el texto del artículo 255 del Código Penal y del artículo 1 de la Ley 23 de 1986, los cuales fueron reformados por la Ley 13 de 1994.

Este Despacho Sustanciador advierte que el actor presentó su escrito de corrección dentro de los términos legales señalados por la Secretaría de esta Sala de la Corte, con las correcciones solicitadas. Por consiguiente, procede admitir el presente recurso de casación penal en el fondo.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expresado, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, representada por la Magistrada Sustanciadora, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, promovido por el Fiscal del Circuito de Coclé, Licdo ALCIBIADES

CAJAR AMADOR, y DISPONE, correr traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, para que emita concepto en el término de cinco días, tal cual lo establece el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE BYRON MENDOZA ARIAS, SINDICADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de recurso extraordinario de casación promovido por la defensa técnica de Byron Harold Mendoza Arias, contra la resolución de 11 de agosto de 1999 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmatoria de la sentencia proferida en primera instancia que condena al imputado a la pena de 64 meses de prisión, como responsable del delito de tráfico internacional de drogas.

Vencido el termino de lista previsto en el artículo 2443 del Código Judicial, debe la Sala decidir sobre la admisibilidad de este recurso extraordinario. Con tal finalidad se observa que ha sido propuesto contra sentencia de segunda instancia dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso por delito cuya pena es superior a dos años. El libelo expone con claridad la historia concisa del caso e invoca dos causales de casación en el fondo, las que se pasan a examinar. En cuanto a la primera causal, que se refiere al error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, viene sustentada con sus respectivos motivos y disposiciones legales infringidas, elementos que hacen inobjetable la presentación del recurso.

En cuanto a la segunda causal, se lee la afirmación del casacionista en el sentido de que la sentencia atacada incurre en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que consagra el numeral 1 del Artículo 2434 del Código Judicial (f. 183. Esta segunda causal viene apoyada en un motivo y en tres disposiciones legales infringidas.

Ante la comprobación de que las causales invocadas no adolecen de defectos en cuanto a los motivo y a las disposiciones legales infringidas, se concluye que se encuentra debidamente fundamentada, por lo que resulta admisible.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Byron Harold Mendoza Arias, contra la resolución de 11 de agosto de 1999 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO GONZALEZ
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**RECURSO DE CASACIÓN FORMULADO POR LA DEFENSORA DE OFICIO DE JUVENAL ALEXIS JIMÉNEZ, SINDICADO POR DELITO DE HURTO AGRAVADO. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMÁ, DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.**

**VISTOS:**

**La defensora de oficio de Juvenal Alexis Jiménez ha formalizado recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 18 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual, previa reforma al fallo de primera instancia, impone al sumariado la pena de 60 meses de prisión, por ser responsable del delito de hurto agravado.**

**La recurrente invoca como causal de casación en el fondo la que prevé el numeral 10 del artículo 2434 del Código Judicial, que se refiere al caso en que la sentencia impugnada incurra "en indebida aplicación de la ley sustancial al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad criminal" (f. 117). Se incurre en esta causal cuando el juzgador yerra en la aplicación de elementos modificadores de la penalidad. La casacionista apoya la causal comentada con dos motivos. En el primer motivo censura que el Tribunal Superior "dosifica nuevamente la pena impuesta para el delito..", mientras que en el segundo motivo plantea que no está comprobada la reincidencia de su patrocinado, ya que el historial policivo se refiere a una suspensión condicional por dos años, sin precisar si se trata de una suspensión condicional de la pena o una suspensión condicional del proceso (f. 118). Como se observa, el primer motivo no es congruente con la causal invocada, toda vez que discute la dosificación de la pena impuesta por ad-quem. En todo caso, ese argumento se relaciona con otra causal de casación en el fondo no que no se advierte en el libelo, cual es el que postula el numeral 10 del artículo 2434 del Código Judicial.**

**El defecto anotado hubiese sido suficiente para ordenar la corrección del libelo de casación; pero al proseguir con su examen, se advierten otros de mayor significación, esta vez en el requisito concerniente a las disposiciones legales infringidas. Señala la recurrente que la sentencia impugnada infringió el artículo 59 del Código Penal de manera directa por comisión (f. 118). Si el segundo motivo sostiene que el imputado no es reincidente, entonces, resulta incongruente que se alegue ese concepto, pues hace suponer que el artículo 59 era la norma aplicable al caso, pero que el tribunal, al momento de darle cumplimiento, lo hizo de manera incompleta, ya que desconoció un derecho consagrado en favor del imputado.**

**La casacionista sostiene que el artículo 56 del Código Penal resultó infringido de manera directa por comisión, por estimar que el Tribunal Superior procedió a dosificar la pena imponible al sindicado. No es posible atender esa infracción en los términos en que se plantea, ya que, como se ha dicho, ese argumento no es congruente con la causal que se aduce.**

**Finalmente, la recurrente transcribe el artículo 1133 del Código Judicial, pero no señala o explica la manera en que la sentencia atacada infringió esa norma legal (por violación directa, indebida aplicación, interpretación errada de la ley),**

**Como quiera que los defectos advertidos hacen que la causal carezca de coherencia lógica y jurídica, es inevitable concluir que este recurso extraordinario no puede ser admitido.**

**Por las anteriores consideraciones LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por la defensora de oficio de Juvenal Alexis Jiménez Navarrete, contra la resolución de 18 de junio de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.**

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ALBERTO GONZALEZ
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE ELIZABETH DE VARGAS DE MEDINA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DEL DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El día veintiséis (26) de octubre de 1999 se celebró la audiencia oral y pública del recurso de casación interpuesto por la Dra. ASUNCIÓN ALONSO DE MONTALVO, defensora de oficio del señor NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA, y contra la sentencia de 16 de marzo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la resolución de primera instancia, y en donde se condena a RUIZ SALDARRIAGA a la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, por la comisión del delito de robo agravado en perjuicio de ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA.

Ahora bien, nos corresponde como tribunal de casación entrar a decidir sobre el fondo del recurso interpuesto.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

El presente proceso se inicia con la denuncia formulada por ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA, quien manifestó que el día 18 de mayo de 1998, aproximadamente a las 12:30 de la madrugada, se encontraba en los alrededores del Seguro Social de Transístmica, cuando fue asaltada por dos sujetos que poseían armas de fuego, quienes lograron despojarla de su cartera que contenía B/.50.00 y sus documentos personales, entre ellos, su carnet de policía.

Agrega la denunciante, que logra identificar a NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA, como uno de los sujetos que la asaltaron, debido a que el prenombrado había aparecido por televisión, cuando estaba siendo detenido por otro delito.

NICOMEDES RUÍZ SALDARRIAGA niega tener participación alguna con el delito investigado, pues indica que el día de los hechos se encontraba en su casa, sin embargo es identificado por la denunciante en diligencia de rueda de detenidos, y no así en diligencia fotográfica previamente realizada.

Posteriormente, mediante sentencia No. 24 de 5 de febrero de 1998, el Juzgado Tercero de Circuito Penal de Primer Circuito Judicial de Panamá, condena a RUIZ SALDARRIAGA a la pena de cinco (5) años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas, por la comisión del delito de robo agravado en perjuicio de ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA.

Dicha sentencia de primera instancia fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante fallo de 16 de marzo de 1998, y ésta decisión de alzada, es la que considera la recurrente, fue valorada erróneamente.

CAUSAL INVOCADA Y MOTIVOS QUE LA SUSTENTAN

La recurrente invoca como única causal "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica violación

de la ley sustantiva penal", la cual se encuentra contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial. Dicha causal probatoria es sustentada por tres motivos.

PRIMER MOTIVO: Señala la recurrente, que el Tribunal A-Quo incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba, porque le otorgó mayor valor probatorio a la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos (fs. 220-221), practicada tres meses después de ocurrido el hecho punible, y en donde ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA logra identificar al prenombrado RUIZ SALDARRIAGA, que a la diligencia de reconocimiento fotográfico (f.143), la cual resultó negativa y fue practicada en fecha más próxima a la comisión del delito investigado. Agrega la recurrente, que el Tribunal Superior de haberle dado el valor probatorio adecuado a la diligencia de reconocimiento fotográfico, hubiera concluido en no acreditar la responsabilidad penal de NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA.

SEGUNDO: En este segundo motivo señala la abogada casacionista, que el tribunal A-Quo le otorgó pleno valor probatorio a la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, a pesar que el sujeto reconocido, RUIZ SALDARRIAGA, no guarda las mismas características físicas mencionadas por ELIZABETH VANEGAS en su denuncia visible a foja 4.

TERCERO: En el último de los motivos expuestos por la recurrente, señala, que el Tribunal Superior incurre en error de derecho porque considera como un indicio en contra del prenombrado RUIZ SALDARRIAGA, el hecho de que se encontró en el carro que poseía, el carnet de ELIZABETH VANEGAS, a pesar que dicho automóvil fue transportado de Chorrera a Panamá y fue requisado sin la presencia del señor RUIZ SALDARRIAGA, tal y como lo señaló ISMAEL HERRERA DELGADO en declaración jurada realizada en audiencia, visible de fojas 293-294.

DISPOSICIONES LEGALES Y CONCEPTO EN QUE HAN SIDO INFRINGIDAS

La abogada casacionista señala como norma infringida el artículo 972 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, utilizando los mismos argumentos que fueron expuestos en los motivos.

Por último, manifiesta la recurrente, que como consecuencia del error de derecho en la apreciación de prueba anotada, se infringe el artículo 186 del Código Penal en concepto de indebida aplicación, toda vez que en este proceso no se ha demostrado que NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA haya participado en la ejecución del delito perpetrado en perjuicio de ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA.

Dado lo anterior solicita, se case la sentencia recurrida y se absuelva a NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA de los cargos formulados en su contra. (fs. 375-380)

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA R., en su calidad de Procurador General de la Nación, mediante Vista Fiscal No. 80 de 26 de agosto de 1999, solicita no se case la sentencia de 16 de marzo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, toda vez que no se ha logrado demostrar el vicio de injuridicidad que adolece la resolución recurrida en casación por la licenciada ASUNCIÓN DE MONTALVO dentro del proceso seguido a NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA.

Expresa el representante del Ministerio Público, que en cuanto al primer motivo señalado por la abogada casacionista, no se ha logrado configurar el vicio de ilicitud que se le endilga al fallo recurrido, dado que el solo transcurso del tiempo entre la práctica de una prueba (diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos) y otra (reconocimiento fotográfico), no es un elemento determinante para restarle valor probatorio a una de ellas.

Además señala, que el reconocimiento en rueda de detenidos no es la única prueba que el juzgador toma en cuenta al momento de endilgar la responsabilidad

al procesado RUIZ SALDARRIAGA, sino que también valora otros elementos probatorios que en conjunto deducen la culpabilidad del procesado. Es por lo anotado, que éste primer motivo no prospera.

En cuanto al segundo motivo, señala el señor Procurador General de la Nación, que el mismo no procede, dado que la abogada casacionista hace alusión a un aspecto no debatido en la sentencia recurrida, es decir, la descripción física de Ruíz Saldarriaga.

En el tercer y último motivo, indica la representación de la Vindicta Pública, que no procede por cuanto que la abogada casacionista cuestiona la valoración de un medio probatorio (declaración de Ismael Herrera Delgado) no apreciado por el Juez A-Quem. Que lo valorado por el tribunal de alzada fue lo concerniente a la forma en que se realizó la inspección al vehículo que poseía el señor RUIZ SALDARRIAGA.

En cuanto a la sección de las disposiciones legales que se dicen infringidas, manifiesta, que los argumentos que se exponen para sustentar el artículo 972 del Código Judicial son similares a los sostenidos en los motivos, por lo que la Procuraduría reitera lo expuesto en párrafos anteriores y es de la opinión que el citado precepto legal no prospera.

Con respecto al artículo 186 del Código Penal, manifiesta, que como quiera que se trata de una causal probatoria en donde no se ha probado la norma adjetiva, no se hace necesario entrar a examinar la sustantiva.

Por las consideraciones expuestas, solicita, no se case la sentencia de 16 de marzo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial. (fs. 395-406)

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La abogada casacionista invoca como única causal "Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la ley sustantiva penal y que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida". Dicha causal de naturaleza probatoria tiene lugar, cuando el juzgador le concede a la prueba una fuerza determinada que la ley no le atribuyó, o cuando se le desconoce la que la ley le asignó, o cuando admite un medio probatorio que no llena los requisitos legales.

Este error de derecho debe ser de tal envergadura, que si no se hubiera cometido, no habría influido en lo dispositivo de la sentencia impugnada.

Hechas esta apreciaciones, pasamos a examinar los tres motivos que sustentan la causal señalada por la recurrente.

En el primer motivo, señala la recurrente, que el Tribunal A-Quem acredita la responsabilidad de RUIZ SALDARRIAGA con la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, la cual resultó positiva y fue practicada tres (3) meses después de ocurrir el hecho punible, sin considerar que en una diligencia más próxima- reconocimiento fotográfico- no logró identificar al prenombrado RUIZ SALDARRIAGA.

Con respecto a lo que cuestiona la abogada casacionista en este primer motivo, observamos, que el fallo recurrido se refiere a estos medios probatorios en breves líneas:

> "En cuanto a la identificación del sancionado, la denunciante si bien no lo reconoció en fotos, sí lo identificó en Diligencia de Rueda de Detenidos, consultable a fojas 220-221." (f. 355)

Al confrontar lo cuestionado por la recurrente con el fallo impugnado, la Sala observa, que la responsabilidad de RUIZ SALDARRIAGA no se deduce solamente

de la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, sino que el tribunal toma en cuenta otros elementos probatorios, que estudiados en conjunto acreditan la culpabilidad del procesado. Entre ellos podemos mencionar, la denuncia y declaración jurada rendida por ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA, en donde describe a NICOMEDES RUIZ como una de las personas que la despojó de su cartera, y se dio a la fuga en un vehículo Toyota Corolla, color blanco. (fs. 1-8, 33-34)

Igualmente se encuentra, el informe de entrevista suministrado por los detectives de la Policía Técnica Judicial, OSVALDO ATENCIO y YOANY CASCANTE, quienes señalan a NICOMEDES RUIZ, como la persona que al momento de su captura, conducía un vehículo Toyota Corolla, color blanco, y dentro del cual apareció la cartera de la denunciante. (f. 9)

Declaración jurada de YOANY YARIEL CASCANTE JIMÉNEZ, quien se ratifica del informe de entrevista visible a foja 9. (fs. 112-113)

Declaración indagatoria de NICOMEDES RUIZ SALDARRIAGA, quien manifestó que el vehículo Toyota Corolla, color blanco, fue alquilado por un amigo de él, señor ANDRÉS GRAFF, pero que en el contrato de alquiler aparecía como chofer adicional. (f.52)

Por otra parte, el hecho que el tribunal A-Quem le haya reconocido pleno valor probatorio a la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, en donde la ofendida, ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA reconoce a RUIZ SALDARRIAGA como uno de los sujetos que la asaltaron la noche del 18 de mayo de 1999, no le resta eficacia con respecto a la diligencia fotográfica que resultó negativa. Además, el lapso de tiempo transcurrido entre la práctica de la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos y el reconocimiento fotográfico, no es motivo determinante para restarle valor probatorio al primero, toda vez que el juzgador al momento de evaluar el caudal probatorio, lo hace utilizando los principios rectores de la experiencia y la lógica (sana crítica).

Es por lo anotado, que la Sala considera, que este primer motivo no prospera, por cuanto que no se ha logrado acreditar el cargo de injuridicidad que se ataca contra la sentencia recurrida en casación.

En cuanto al segundo motivo que sustenta la causal error de derecho en la apreciación de la prueba, la recurrente indica, que el juzgador A-Quem, le otorgó pleno valor probatorio a la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, a pesar que el sujeto reconocido no guarda las mismas características físicas mencionadas por ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA en su denuncia visible a foja 4 (cejas escasa y rectilíneas) con la declaración indagatoria (f. 49) en donde la Fiscalía deja ver que el prenombrado RUIZ SALDARRIAGA tiene cejas gruesas y tupidas.

Como bien señala la representación del Ministerio Público, la recurrente hace alusión a un punto no debatido en la sentencia recurrida en casación, es decir, la descripción física de RUIZ SALDARRIAGA, por lo que mal podemos deducir de este motivo el cargo de injuridicidad que se ataca contra el fallo recurrido.

Nuestra jurisprudencia en este sentido ha sido clara en expresar, que para que prospere la causal de naturaleza probatoria se requiere que el juzgador la haya apreciado, de lo contrario se estaría ante la causal de error de derecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Es por lo anotado, que consideramos, no procede este segundo motivo.

En el tercer y último motivo, la recurrente se refiere a que el Juez A-Quem, consideró como un indicio en contra del prenombrado RUIZ SALDARRIAGA, el hecho de encontrar dentro del carro que poseía el denunciado, el carnet de ELIZABETH VANEGAS, a pesar que dicho automóvil fue transportado de Chorrera a Panamá y fue requisado sin la presencia del señor RUIZ SALDARRIAGA, tal y como lo señaló ISMAEL HERRERA DELGADO en declaración jurada realizada en audiencia,

visible de fojas 293-294.

Ahora bien, al confrontar lo señalado por la recurrente con respecto al fallo impugnado, observa la Sala, que dicha sentencia no hace alusión a la declaración de ISMAEL HERRERA DELGADO, sino que se refiere a la forma en que se realizó la inspección al vehículo Toyota blanco que poseía RUIZ SALDARRIAGA, al momento que es detenido en La Chorrera por la supuesta comisión de otro delito en perjuicio de su esposa ZAHIRA ODALISKA SÁNCHEZ, siendo éste el hecho que lo pone al descubierto, cuando un medio de televisión lo presenta y que da lugar a que ELIZABETH VANEGAS DE MEDINA lo reconozca como uno de los dos sujetos que la asaltaron.

Por tanto, al no ser apreciado este medio probatorio por el juez A-Quem (declaración de ISMAEL HERRERA DELGADO, f.28, 293-294), no se puede extraer de este motivo ningún cargo de injuridicidad contra el fallo recurrido, por lo que no procede el mismo.

En cuanto al aparte de las disposiciones legales y el concepto en que se dicen infringidas, la abogada casacionista menciona el artículo 972 del Código Judicial en concepto de violación directa por omisión y el artículo 186 del Código Penal en concepto de indebida aplicación.

Con respecto al primero de ellos, se observa al igual que la representación social, se utilizan los mismos argumentos expuestos por la recurrente en los tres (3) motivos señalados, por lo que al no prosperar los mismos, tampoco procede esta sección del recurso interpuesto. En consecuencia la Sala considera que no se ha violado de manera directa por omisión el artículo 972 del Código Judicial.

Ahora bien, con respecto a la violación de la norma sustantiva -artículo 186 del Código Penal- debemos reiterar, que en las causales de naturaleza probatoria, la violación de la norma sustantiva se produce cuando ha tenido lugar la norma adjetiva, por tanto al no darse la infracción de ésta, no se configura la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo del fallo y que implica infracción de la ley sustantiva penal.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de marzo de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, recurrida por la Dra. Asunción Alonso de Montalvo.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HUMBERTO PINEDA ARAUJO Y OTROS, SINDICADOS POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 21 de septiembre de 1999 se llevó a cabo la audiencia oral y pública del recurso de casación interpuesto dentro del proceso seguido contra GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI, sancionado por delito contra la fe pública y el patrimonio.

Corresponde en este momento procesal dictar la sentencia de fondo en el caso en comento.

FUNDAMENTACIÓN DE LA CASACIONISTA

La Licda. SARAI I. BLAISDELL solicita al Tribunal de Casación que reforme la sentencia de 30 de octubre de 1998, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de absolver a GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI de los cargos formulados en su contra por los delitos de Estafa en perjuicio de CÉSAR LEONEL PÉREZ QUINTERO y Falsificación de Documentos y Sellos Públicos en perjuicio del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial; que se corrija la calificación del delito imputado a su poderdante, cometido en perjuicio de EDISON WARNER ROBLETO tipificándolo como estafa ejecutada por medio de cheque girado contra cuenta cerrada, conforme lo establece el artículo 193 del Código Penal, con el correspondiente ajuste de la pena impuesta y que en el hecho punible cometido en perjuicio de ISABEL BERMÚDEZ, FERNANDO SANTOS, EMMA DE SANTOS, GRACIELA DE VERGARA y PLINIO LOMBARDO, le sea aplicada la pena correspondiente a la calificación aceptada respecto del delito, que es la estafa.(F.2020)

HISTORIA CONCISA

Manifiesta la casacionista que el 30 de junio de 1994, el señor VÍCTOR SHABUT interpuso denuncia contra GILBERTO OWEN BILINGSLEA, porque éste se apoderó de 20 títulos prestacionales que mantenía guardados en su oficina. Agotada la instrucción sumarial por la Fiscalía Segunda del Primer Circuito Judicial, se dictó Auto N° 173 de 13 de diciembre de 1995, en el que se dictó llamamiento a juicio contra el procesado por la supuesta comisión del delito genérico de hurto.

Por otro lado, MAYRA PÉREZ CASTILLERO, representante legal de American Securities & Realty S. A., denunció que el 5 de diciembre de 1994 HUMBERTO GARUZ se presentó a Multi Credit Bank para hacer efectivo un cheque por la suma de B/.97.488.72, que resultó ser falsificado, el que fue expedido por OWEN BILINGSLEA. El negocio fue tramitado por la Fiscalía Cuarta del Primer Circuito Judicial y en audiencia preliminar celebrada el 19 de diciembre de 1995, se formularon cargos contra OWEN BILINGSLEA como presunto transgresor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título VIII del Libro II del Código Penal, es decir por delito de falsificación de documentos en general.

Igualmente, el 23 de febrero de 1995 el señor EDISON WARNER ROBLETO JIMENEZ denunció ante la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial que OWEN BILINGSLEA le compró títulos prestacionales por un monto de B/.12,466.08, entregándole en pago el cheque N° 000097 de 5 de diciembre de 1994, girado contra la cuenta 011-02450-2 del BANAICO, documento que al ser presentado para su cobro fue rechazado porque la cuenta respectiva estaba cerrada y el cheque de marras, según la institución bancaria, era falsificado. En audiencia preliminar se abrió causa criminal contra GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI como presunto transgresor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título VIII del Libro II del Código Penal, es decir por delito de falsificación de documentos en general.

El 30 de marzo de 1995, CESAR LEONEL PÉREZ QUINTERO interpuso denuncia contra GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI señalando que le vendió cierta cantidad de títulos prestacionales recibiendo en pago el cheque N° 000095 de 5 de diciembre de 1994, que al ser presentado para su cobro fue rechazado porque la cuenta respectiva estaba cerrada. Una vez terminada la instrucción sumarial por la Fiscalía Séptima del Primer Circuito Judicial, se celebró Audiencia preliminar el 31 de enero de 1996 en donde se abrió causa penal contra BILLNGSLEA DORATI por la presunta comisión del delito contenido en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del Código Penal, estafa y otros fraudes.

El 20 de marzo de 1995, ISABEL BERMUDEZ, FERNANDO SANTOS, EMMA DE SANTOS, GRACIELA DE VERGARA y PLINIO LOMBARDO denunciaron ante la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial que vendieron a BILLNGSLEA DORATI títulos

prestacionales, Recibiendo en pago cheques girados por el procesado, que no pudieron hacerse efectivo porque la cuenta estaba cerraba. Este caso fue investigado por la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial y mediante Auto calendado 2 de octubre de 1995, se formularon cargos al procesado como presunto autor de los delitos de estafa y falsificación de documentos.

Por otra parte, el día 24 de noviembre de 1995, la Licda. MARÍA EDUARDA CÓRDOBA CHEN denunció ante la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial la falsificación de un oficio mediante el cual ese tribunal supuestamente ordenaba la libertad de dos detenidos, procesados por delitos contra la salud pública relacionado con drogas, así como la falsificación del sello del Juzgado, que fue estampado en el oficio de la referencia. Durante el curso del sumario se determinó la vinculación de HUMBERTO PINEDA ARAUJO a este hecho. A su vez, dicho imputado acusó como partícipe en las falsificaciones a GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI y mediante auto de 27 de febrero de 1997, se formularon cargos contra el procesado, como presunto infractor de disposiciones legales contenidas en los Capítulos I y III, del Título VIII del Libro II del Código Penal.

Los seis procesos fueron acumulados y decididos por el Juzgado Decimocuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, que mediante sentencia de 9 de enero de 1998 condenó a GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI a la pena de 17 años de prisión y 10 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, como responsable de los delitos de falsificación de documentos y sellos públicos y falsificación de cheques particulares.

La resolución fue apelada y surtida la alzada, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial calificó erróneamente como falsedad de documento el hecho punible cometido en perjuicio de EDISON ROBLETO, omitió la consideración de la certificación visible a foja 474 en el contexto del sumario relativo al hecho denunciado por CESAR LEONEL PÉREZ QUINTERO; calificó como estafa el delito cometido en perjuicio de ISABEL BERMÚDEZ FERNANDO SANTOS, EMMA DE SANTOS, GRACIELA DE VERGARA y PLINIO LOMBARDO, pero asignó para este hecho la pena correspondiente al tipo penal de falsedad de documento y erró en la valoración de la prueba a propósito de la declaración de HERNANDO PINEDA ARAUJO en relación con el proceso seguido contra el imputado por delito de falsificación de documentos y sellos públicos en perjuicio del Juzgado Décimo tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, todo lo cual condujo al Ad-quem a confirmar la decisión de primera instancia.

## CAUSALES DE FONDO INVOCADAS

La postulante al formalizar el recurso de casación en el fondo incluyó cuatro causales; sin embargo, la Sala al resolver la admisibilidad del mismo consideró que la primera y segunda causal no prosperaban.

Siendo así las cosas, el recurso de casación en estudio se fundamenta en dos causales:

## PRIMERA CAUSAL

"Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia e implica la violación de la ley sustancial penal" (numeral 1, del artículo 2434 del Código Judicial).

## MOTIVO

Se tiene que esta causal se sustenta en un motivo único, en el cual la abogada indica que, en el proceso seguido a GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI por delito de falsificación de documento y sellos públicos en perjuicio del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, el A-quem, en el fallo impugnado, comete error de derecho en la apreciación de la prueba al evaluar la declaración de HUMBERTO PINEDA ARAUJO (Fs.1623-1230), porque bajo la premisa que señala a BILLNGSLEA DORATI como partícipe de las falsificaciones en

cuestión, da por acreditada la vinculación de éste con el delito subjúdice, otorgándole al testimonio de marras un valor que no le corresponde. Se trata de un testigo único, que no puede por sí solo formar plena prueba de la autoría de las falsificaciones de la referencia, por parte de BILLINGSLEA DORATI.(Fs.2018-2019)

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La casacionista señala que a consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba, se han transgredido las siguientes normas:

-Artículo 905 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, porque el único medio de prueba que invoca el A-quem para sustentar la vinculación de BILLNGSLEA DORATI con la falsificación del oficio 2505 y la utilización del sello del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, lo es la declaración del co-imputado HUMBERTO PINEDA ARAUJO (Fs.1623-1630) que acusa a BILLNGSLEA DORATI como autor del ilícito en cuestión. Sin embargo se trata de un testimonio unitario que no puede formar plena prueba. (F.2019)

-Artículo 265 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, porque a consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba no se ha demostrado en debida forma que GILBERTO OWEN BILLINSLEA haya ejecutado actos de falsificación de documentos en perjuicio del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, por lo que la disposición transcrita, no regula la situación de hecho que se investiga en cuanto a la persona de su poderdante.(Fs.2019-2020)

-Artículo 279 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación. Esto es así, porque como consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba no se ha demostrado en debida forma que GILBERTO OWEN BILLINGSLEA haya ejecutado actos de falsificación de sellos públicos en perjuicio del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, por lo que la disposición no regula la situación del hecho que se investiga, en cuanto a la persona de su poderdante. (F.2020)

SEGUNDA CAUSAL

Error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo",(numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial).

MOTIVO

La Licda. BLAISDELL sustenta esta causal en un motivo único y señala que el A-quem comete error de derecho al calificar como delito de falsedad de documento la acción del procesado consistente en haber girado a favor de EDISON WARNER ROBLETO JIMENEZ el cheque N° 000097 de 5 de diciembre de 1994, en concepto de compraventa de títulos prestacionales.

Explica la casacionista que la cuenta contra la cual se giró ese instrumento estaba cerrada al momento que el beneficiado se presentó al Banco Agro Industrial y Comercial de Panamá para su cobro y como pertenece a GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI, en esas circunstancias, la falsedad que se acusa dirigida a afectar una cuenta bancaria, resulta evidentemente inocua, por cuanto el sujeto activo y pasivo de la acción es la misma persona y, por tanto no es punible como delito de falsificación de documento la acción del procesado.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Manifiesta la casacionista que han sido infringidos los siguientes artículos:

-Artículo 265 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, pues el A-quem ha soslayado que para que haya lugar a la sanción que estipula la norma, es requisito esencial que pueda resultar un perjuicio de la falsedad, lo que no ocurre en el caso del cheque N° 000097 fechado 5 de diciembre de 1994 girado por GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI, porque la cuenta bancaria que pudiera afectarse a través de ese documento negociable, pertenecía al procesado, por lo que éste es el sujeto activo y pasivo de la acción, de allí que se excluye el hecho como delito de falsedad de documento.(F.2013)

-Artículo 269 del Código Penal, fue violado en concepto de indebida aplicación, porque no se ha demostrado en el proceso que BILLINGSLEA DORATI haya falsificado un cheque en perjuicio de otro, sino que el documento fue girado por el procesado contra una cuenta propia y esa acción no genera la comisión de un delito por vía de la falsedad a que se refiere la excerta legal.(F.2014)

-Artículo 190 del Código Penal, en concepto de violación directa por omisión, toda vez que, considera que de acuerdo al fallo que se pretende impugnar, está demostrado que BILLINGSLEA DORATI obtuvo un provecho patrimonial ilícito, consistente en títulos prestacionales que le fueron entregados, mediante engaño, por EDISON WARNER ROBLETO JIMENEZ a cambio del cheque N° 000097, por lo que el Tribunal de segunda instancia debió aplicar esta norma.(F.2014)

-Artículo 193 del Código Penal fue violado en concepto de violación directa por omisión, ya que en el proceso se ha demostrado que BILLINGSLEA DORATI obtuvo un provecho ilícito a consecuencia de haber engañado a ROBLETO JIMENEZ entregándole el cheque N° 000097, girado contra una cuenta cerrada, para que éste le entregara la suma de B/.12,466.08 en títulos prestacionales.(F.2015)

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El Licdo. JOSÉ ANTONIO SOSSA R., Procurador General de la Nación, por medio de Vista N° 72 de 27 de julio de 1999, explica que ninguno de los motivos expuestos por el casacionista para sustentar las causales invocadas, demuestran los cargos de injuridicidad que se endilgan al fallo recurrido.

En el primer motivo, advierte el señor Procurador que, para confirmar la sentencia de primera instancia, el Tribunal A-quem señala que en el transcurso de la investigación se determinó que BILLINGSLEA, junto a HUMBERTO PINEDA ARAUJO, falsificaron el oficio mediante el cual se logró la libertad de EDUARDO TORRES y JOSÉ LOPEZ, hecho que fue aceptado por el imputado PINEDA, lo que hace concluir que esta afirmación es inferida de las declaraciones de las funcionarias del Organo Judicial, María Córdoba Chen y Doris Esther Justiniani, y que se suman al informe del estudio grafocrítico, y a la declaración de la señora Dilsia Socorro Soto Tejada. Todos estos elementos probatorios fueron ponderados por el Tribunal Superior de manera conjunta, para confirmar la sentencia de primera instancia.(F.2030)

En cuanto a la segunda causal, señala el alto funcionario del Ministerio Público que que no se presenta el delito de estafa sino el de falsificación de documento, lo que se infiere de la declaración del abogado BUENAVENTURA CASTRELLON, de Banaico. Pues, en este caso se falsificó un cheque particular del cual ha resultado un perjuicio, toda vez que con la entrega del documento falsificado, el denunciante le dio al procesado unos títulos prestacionales y que al presentarse a hacerlo efectivo en el banco, le informaron que ese cheque era falsificado. (F.2034-2035)

El señor Procurador manifiesta respecto a las disposiciones legales infringidas que, no se demuestra la violación de las normas adjetivas y sustantivas aludidas como violadas por la recurrente y concluye solicitando a la Sala Segunda que, en su oportunidad, no case la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia por estar la misma acorde a derecho.(F.2041)

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

Primeramente, se debe indicar que en el caso en examen se ha producido la acumulación de seis procesos seguidos contra el señor GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI y la inconformidad de la recurrente se centra en dos de las causas penales: el delito de falsificación de documentos en general, en perjuicio de EDISON WARNER ROBLETO JIMÉNEZ, y el delito de falsificación de documentos y falsificación de sellos públicos en perjuicio del Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial.

PRIMERA CAUSAL

Antes de entrar al análisis del recurso, es necesario conocer el contenido de la sentencia proferida por el Tribunal A-quem para luego proceder a determinar la existencia o no de la causal señalada. En ese orden de ideas, se tiene que el Segundo Tribunal Superior indicó lo siguiente:

> "El sexto proceso trata sobre la falsificación de firma de la secretaria del Juzgado Decimotercera(SIC) del Circuito e Panamá, Licda. DORIS JUSTINIANI, quien para la fecha del 6 de noviembre de 1995, ejercía dicho cargo, lográndose con ello la libertad de BILLINGSLEA quien se encontraba detenido por la comisión de otros delitos. Al efectuarse las investigaciones se determinó que para el 6 de noviembre de 1995 la Juez titular de ese despacho era la Licda. MARÍA CÓRDOBA DE CHEN y no la secretaria, es decir JUSTINIANI. En el transcurso de la investigación se determinó que BILLINGSLEA, junto a HUMBERTO PINEDA ARAUJO, falsificaron el oficio mediante el cual se logró la libertad de aquél; ello fue aceptado por el imputado PINEDA." (F.1960)

En cuanto a lo expresado por la casacionista en el motivo único que sustenta la causal, se tiene que el A-quem hace referencia a la declaración de HUMBERTO PINEDA ARAUJO y ello se debe a que es la única persona que hace un señalamiento directo contra el procesado GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI ya que en declaración indagatoria hizo cargos contra éste, lo que afirmó y ratificó en la declaración jurada rendida ante el Fiscal que investigó el caso. (F.1630)

Si bien es cierto que el testigo único en nuestro ordenamiento jurídico no hace plena prueba, conforme al artículo 905 del Código Judicial, la norma establece claramente que si el testigo es hábil, establece gran presunción según su condición y su exposición, es por ello que el Juzgador no debe dejar de ponderar su testimonio. En ese sentido, se ha señalado en la doctrina que:

> "Ello no significa, sin embargo, que hay que desconocerle trascendencia al testigo único. Un testimonio claro, coherente, de una persona que exponga 'la razón de su dicho', (SIC) percepción directa, espontánea, no meramente o mecánicamente responsiva, unido a cualquier otro medio de prueba -v.gr.:documento, indicio, y no desvirtuado por 'prueba en contrario'-puede servir de base a una sentencia"(Fábrega P., Jorge, 1. Medios de Prueba 2. La Prueba en Materia Mercantil, 2ª Edición, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1998. p.257)

El Tribunal de Casación advierte que la declaración de PINEDA ARAUJO no es el único elemento de prueba que determina la vinculación de BILLINGSLEA DORATI con la comisión del hecho punible. Veamos.

Al examinar la encuesta penal, tenemos que DORIS ESTHER JUSTINIANI, Secretaria Judicial del Tribunal, dijo saber algo sobre quienes pudieron haber hecho la falsificación del documento. Esta funcionaria manifestó que en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas se estaba llevando a cabo la investigación relativa a la fuga de los señores JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ y EDUARDO ALBERTO JARAMILLO en la cual se investiga al señor GILBERTO OWEN BILLINGSLEA DORATI y otros vinculados en la fuga de los prenombrados LÓPEZ y JARAMILLO (F.831); esta declaración constituye un indicio grave contra el

procesado BILLINGSLEA DORATI.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que el testimonio de PINEDA ARAUJO es corroborado por otros elementos de prueba que constan en el expediente, como lo son, la declaración de la Licda. MARÍA EDUARDA CORDOBA CHEN, Juez del Juzgado Décimotercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien señala en declaración jurada que el Fiscal de Drogas le llamó el 21 de noviembre de 1995, para hablarle de una supuesta nota N° 2505 del 6 de noviembre de 1995, en la cual se otorgaba libertad definitiva a los imputados JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ y EDUARDO ALBERTO JARAMILLO. La funcionaria manifiesta que al proceder a verificar la información, se percató que el Oficio # 2505, emitido por ese Juzgado, era del 25 de octubre de 1995, que iba dirigido al Juez de Circuito de Turno en el Grupo A.(F.811)

Por otro lado, se llevó a cabo un estudio grafocrítico, en donde se tiene que se le práctico un examen caligráfico a BILLINGSLEA DORATI el cual fue confrontado con la firma que aparece en el documento falsificado, y se concluyó que la firma presenta características de las firmas con apariencia de calco.(fs.1598-1599)

Con base en lo anterior, el Tribunal de Casación estima que, aun cuando el A-quem solamente hizo referencia a la declaración jurada precitada, no menos cierto es que en la encuesta penal operan otros elementos de convicción que permiten a esta Sala concluir que no se comprueba el cargo de injuridicidad que se le endilga a la sentencia recurrida.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, la recurrente estima que se ha violado el artículo 905 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión. El Tribunal de Casación estima que en este caso no prospera el argumento de la recurrente, pues el testimonio de PINEDA ARAUJO es de gran presunción y aunado a los otros elementos de prueba descritos en líneas que anteceden, se comprueba la vinculación y responsabilidad del procesado BILLINGSLEA DORATI por lo que no se ha dado la violación de esa norma adjetiva.

En cuanto a la alegada violación de los artículos 265 y 279 del Código Penal, ambas normas en concepto de indebida aplicación, el Tribunal de Casación considera que como se ha demostrado que no existe violación de las norma adjetiva, no ocurre la infracción de la normas penales citadas como infringidas. Toda vez que para que ello ocurra se requiere que se haya producido la infracción de la norma adjetiva. Lo que significa que la causal invocada no aparece comprobada.

La Corte hace un llamado de atención al Segundo Tribunal Superior, ya que en la sentencia recurrida expresó que por medio del oficio falsificado se logró la libertad de BILLLINGSLEA DORATI cuando en realidad el escrito fue falsificado por éste a efectos de lograr la libertad definitiva de JOSÉ GUILLERMO LÓPEZ GÓMEZ y EDUARDO ALBERTO JARAMILLO, como se observa en el documento falsificado que consta a foja 1615 de la encuesta penal.

SEGUNDA CAUSAL

En el fallo que se pretende impugnar, se tiene que el Tribunal A-quem señaló lo siguiente:

> "El tercer sumario trata sobre la denuncia presentada por EDISON WARNER ROBLETO, quien indicó que entregó sus títulos prestacionales a BILLINGSLEA, quien a cambio le entregó el cien por ciento del valor de los referidos títulos, pero para ello entregó un cheque personal por la suma de doce mil cuatrocientos sesenta y seis balboas con ocho centavos, el cual resultó estar falsificado. A fojas 319 se concluye que BILLINGSLEA fue el autor del hecho". (F.1958)

El cargo de injuridicidad que la casacionista endilga a la sentencia, es

que no existe la falsedad de documento porque la cuenta bancaria afectada es propiedad del mismo girador y nos encontramos ante otro hecho punible que se adecúa al tipo penal de la estafa.

Cabe señalar que en el caso en comento se presentan dos situaciones. Primeramente, el señor EDISON WARNER ROBLETO JIMENEZ tenía títulos prestacionales cuyo monto ascendía a B/.12,466.08 y se los entregó a BILLINGSLEA DORATI a cambio del cheque N° 000097 de 5 de diciembre de 1994; este documento negociable le fue devuelto porque provenía de una chequera falsificada. En segundo lugar, se tiene que el cheque fue girado contra la cuenta 011-02450-2 de BANAICO, la cual estaba cerrada.(Fs.3784 y 386)

La acción desplegada por el procesado se adecúa a la falsedad documental material, pues ha simulado un documento toda vez que no contaba con autorización para mandar a hacer sus cheques. (F.411-412)

En ese sentido, explica el penalista colombiano Luis Fernando Tocora que:

> ... para los efectos penales, sólo debe entenderse como documento auténtico o genuino, el que goza de certeza sobre la legalidad de su origen y su autor, pues si quien lo suscribe y respalda no está autorizado para hacerlo, sólo tiene el documento una apariencia de autenticidad, de la que se vale precisamente el falsario para engañar y afectar la seguridad de la prueba documental...” (Derecho Penal Especial, 5ª Edición, Librería del Profesional, Santafé de Bogotá, 1997.p.113) (Lo subrayado es nuestro).

Siendo así las cosas, nos encontramos ante la falsificación de un cheque particular que fue girado contra una cuenta cerrada, viéndose afectado el girado porque no pudo hacer efectivo el cheque, experimentando un detrimento en su patrimonio, de allí que mal puede señalar la recurrente que quien se veía afectado con la falsificación es el procesado BILLINGSLEA DORATI y que su acción no constituye delito, por lo que la Sala concluye que no se demuestra el cargo de injuridicidad.

A juicio de la casacionista la sentencia recurrida infringe los artículos 265 y 269 del Código Penal, ambos en concepto de indebida aplicación.

Es oportuno indicar que la Jurisprudencia de esta Corporación de Justicia ha establecido que el concepto de infracción legal por indebida aplicación consiste en “la aplicación al caso de una norma determinada que no regula esa situación, en vez de aplicar aquella que la regula efectivamente”. (Junio 29 de 1994)

Al analizar el argumento que ensaya la recurrente respecto del artículo 265 del Código Penal, la Sala advierte que dista de la realidad de los hechos, pues el procesado aceptó haber mandado a confeccionar un documento privado y como señala el abogado de la institución bancaria, BILLINSGLEA DORATI no tenía autorización para ello. Si bien el cheque fue girado contra una cuenta personal del procesado, el ofendido fue la persona que recibió el perjuicio porque entregó sus títulos prestacionales a cambio de un cheque que le reconocía el valor total de los mismos, pero el documento negociable resultó ser falso y no pudo hacerlo efectivo.

Por otra parte, la recurrente también considera vulnerado el artículo 269 de la citada excerta legal; no obstante, la Sala es del criterio que el tipo penal aplicado fue el correcto ya que en el caso en comento se ha comprobado que el girador actuó con dolo al elaborar un documento sin estar autorizado para ello y así adquirió los títulos prestacionales propiedad de EDISON WARNER ROBLETO JIMENEZ. De allí que consideramos que el argumento de la recurrente no tiene asidero jurídico.

En cuanto al artículo 190 del citado Código, la casacionista indica que su

infracción se produce por violación directa por omisión. Esta Corporación de Justicia estima que las pruebas allegadas al proceso dan por probada la existencia de la falsedad de un documento privado, específicamente de un cheque particular, y no una estafa como plantea la casacionista. Por tanto, no debió invocar esta norma sustantiva como violada.

Finalmente, la recurrente estima que se ha infringido el artículo 193 del citado cuerpo de normas, en concepto de violación directa por omisión. Considera este Tribunal de Casación que los tipos penales de los artículos 265 y 269 del Código Penal fueron aplicados debidamente, ya que no se demostró que el fallo impugnado incurriera en error de derecho al calificar el delito. Por tanto, los argumentos con los cuales la recurrente sustenta la supuesta infracción de la norma citada no prosperan.

Del análisis realizado se colige claramente que la casacionista no acreditó las causales invocadas y por consiguiente no han sido violados los artículos alegados como infringidos, por lo que en consecuencia no procede casar la sentencia.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo que antecede, la Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, No casa la sentencia recurrida por la defensa técnica de GILBERTO OWEN BILLNGSLEA DORATI.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RODRIGO ERNESTO CELIS ROTH, SINDICADO POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Por cumplido el período de lista de que trata el artículo 2443 del Código Judicial, en los casos de recursos extraordinarios de casación en materia penal, la secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha pasado el expediente contentivo del juicio seguido a RODRIGO ERNESTO CELIS ROTH quien fue condenado por el delito de apropiación indebida, mediante la sentencia de 28 de diciembre de 1998, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que se resuelva sobre la admisibilidad del recurso.

El memorial está dirigido a los "HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL", cuando debió ser dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Penal, de conformidad con el texto del artículo 102 del Código Judicial.

El recurso fue presentado por persona hábil, promovido dentro del término establecido por las normas de procedimiento penal, contra una resolución que en efecto admite este tipo de recurso extraordinario y por delito cuya sanción es superior a 2 años de prisión.

Corresponde en este momento procesal analizar la estructura y el contenido

del presente recurso, a fin de comprobar si reúne los requisitos del artículo 2443 del Código Judicial.

En cuanto a la historia concisa del caso, nuestra jurisprudencia ha establecido que debe ser una relación breve, objetiva y precisa que introduzca al Tribunal de Casación al conocimiento de los hechos y fundamentos que originaron la resolución que se impugna con este recurso extraordinario. No obstante, el recurrente incluye apreciaciones subjetivas, lo que contradice la técnica casacionista.

En el escrito se enuncia una sola causal, la cual denomina el letrado como "Infracción de la ley sustancial penal por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba", siendo que la correcta denominación de esta causal es "Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, e implica infracción de la ley sustancial penal", y está contenida en el numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial.

Con relación a los motivos que sustentan la causal, estos deben ser desarrollados en forma tal que cada uno contenga, de manera independiente, un cargo de injuridicidad y además, deben ser formulados en forma precisa, clara y concreta, en congruencia con la causal invocada.

Se tiene que el recurrente ha desarrollado dos motivos que sustentan la causal única, los que pasamos a examinar.

En la redacción del primer motivo, se observa que el recurrente señala el vicio de injuridicidad que opera contra la sentencia que se pretende impugnar. No obstante, introduce apreciaciones subjetivas a manera de alegato, pues señala que su defendido "fue víctima de una presión sicológica montada por los directivos de la empresa SWIFT & COMPANY, en contubernio con los apoderados de ella". (F.621)

Con respecto al segundo motivo, se advierte que es una continuación de lo esgrimido en el primer motivo, toda vez que se señala que el Tribunal A-quem "además de entrar a apreciar ésta viciada manifestación de voluntad la cual no reúne los requisitos legales de ser propia, voluntaria, espontánea ni producto de la liberalidad del hablante; la sentencia recurrida erró también en la misma apreciación ..." incurriendo el casacionista nuevamente en el error de desarrollar el motivo como si se tratara de un alegato y sin señalar el cargo concreto de injuridicidad.

El casacionista señala como disposiciones legales infringidas los artículos 770 y 2120 del Código Judicial; y explica que consecuentemente se transgredió el artículo 37 del Código Penal. Seguidamente se aprecia otra sección titulada "Concepto de la infracción", en la cual el casacionista cita y transcribe las normas señaladas, e indica y desarrolla el concepto de la infracción.

Cabe señalar que el artículo 2443 del Código Judicial establece en el literal c del numeral 3, que en el escrito de casación se deben especificar las disposiciones legales infringidas y el concepto que lo han sido, lo que constituye una sección del recurso.

En lo atinente a las normas transgredidas, señala el casacionista que el artículo 2120 del Código Judicial, ha sido infringido en concepto de aplicación indebida, toda vez que la sentencia recurrida tomó como base para acreditar el aspecto subjetivo del hecho punible "una supuesta confesión del imputado", la cual fue hecha bajo coacción producto de la presión ejercitada por directivos y representantes de la empresa SWIFT & COMPANY.(F.623)

El argumento esgrimido no es coherente con la excerta legal, ya que ésta alude al empleo de promesa, coacción o amenazas, preguntas capciosas o sugestivas hechas por el funcionario que lleva a cabo la investigación, a fin de que el

imputado declare. Distinto es lo planteado por el casacionista quien manifiesta que el procesado declaró bajó coacción de los directivos y representantes de la empresa con que laboraba.

Con relación al artículo 37 del Código Penal, el casacionista indica que el concepto de infracción es la indebida aplicación y lo explica a continuación. En cuanto al artículo 700 del Código Judicial, transcribe el texto de la norma, indica y explica el concepto de la infracción que es la violación directa por omisión.

Cabe señalar que la indebida aplicación "consiste en la aplicación al caso de una norma determinada que no regula esa situación, en vez de aplicar aquella que la regula efectivamente.(Sentencia de 20 de julio de 1992)

Si bien el casacionista considera que a consecuencia del error de derecho en la apreciación de la prueba fue indebidamente aplicado el artículo 37, que es una norma sustantiva, yerra al señalar que a consecuencia de esa infracción se dejó de aplicar una norma adjetiva, como lo es el artículo 700 del Código Judicial, cuando lo que corresponde es señalar cuál es la norma sustantiva que regulaba el caso y no fue aplicada por omisión del Tribunal A-quem. Por tanto, no existe congruencia entre las disposiciones legales que se estiman infringidas, los motivos y la causal.

Con base en lo anterior, la Sala concluye que el recurso en examen no cumple con los requisitos establecidos en el numeral 3, literales a, b y c, y numeral 4 del artículo 2443 del Código Judicial, los cuales establecen los elementos de la esencia del recurso, lo que hace improcedente su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo, promovido por la defensa técnica de RODRIGO ERNESTO CELIS ROTH

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANTONIO OSORIO ABREGO Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE DALLYS ALICIA RÍOS RANDOLPH Y MIXILA GUERRA DE CASTILLO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DEL DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La doctora AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, actuando en nombre y representación de ANTONIO OSORIO ABREGO, ha interpuesto recurso de Casación en el Fondo contra la sentencia de fecha 17 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en la que se confirma la condena de treinta y seis meses de prisión (36) impuesta a su representado y al pago del daño material y moral ocasionado a los denunciantes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, por haber sido encontrado culpable del delito de Falsificación de Documentos en General.

La casacionista considera que el fallo censurado incurrió en errores al

conceptuar como delito un hecho que no lo es y en la valoración de las pruebas en derecho, lo que implicó violación de la ley sustancial e influyó en lo dispositivo del fallo.

HISTORIA CONCISA

Manifiesta la casacionista que el 4 de marzo de 1994, el licenciado ANTONIO OSORIO ABREGO en su calidad de accionista, tesorero y agente residente de la sociedad MED, S.A. protocolizó el acta de asamblea extraordinaria de accionistas realizada el 21 de enero de 1994, en la que se nombraron nuevos directores y dignatarios, ya que el señor MEDIN CASTILLO como presidente y accionista de la sociedad de capitales, había fallecido.

El 7 de marzo de 1996, DALIS ALICIA RIOS RANDOLPH y MIXILA GUERRA DE CASTILLO presentaron ante la Fiscalía Primera del Circuito de Chiriquí denuncia contra los señores ANTONIO OSORIO ABREGO, JOSÉ DE LA ROSA CASTILLO y AURELIA ROSA GONZALEZ DE CASTILLO, siendo procesados y condenados el 5 de mayo de 1998 por delitos Contra la Fe Pública, ya que incluyeron en el acta protocolizada una declaración falsa.

La sentencia fue apelada por las partes y el 17 de diciembre de 1998, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial confirmó la pena impuesta a ANTONIO OSORIO ABREGO.

CAUSALES INVOCADAS

La recurrente sustenta este recurso en dos causales de fondo.

PRIMERA CAUSAL

"Cuando se tenga como delito un hecho que no lo es.” (Artículo 2434, numeral 2 del Código Judicial).

MOTIVOS:

La doctora AURA E. GUERRA DE VILLALAZ sustenta esta causal en siete (7) motivos, algunos de los cuales, por razones prácticas se analizaran en conjunto.

Observa este Tribunal de Casación que en los motivos primero, segundo, y tercero la recurrente presenta acotaciones sobre la constitución de la sociedad MED, S.A., así como del contenido de algunas clausulas del pacto social relativas al capital social y a la suscripción de acciones, sin acreditar los vicios de injuridicidad endilgados a la sentencia impugnada.

Tampoco observa la Sala el cargo de injuridicidad en el cuarto motivo, porque la casacionista indica la existencia de dos acciones emitidas, y agrega que al momento de fallecer MEDIN CASTILLO se desconocían quienes eran los herederos del accionista fallecido. Aseveraciones éstas que no acreditan el yerro jurídico que le endilga al fallo recurrido.

Con relación al quinto motivo, la recurrente expresa que la injuridicidad radica en que las aseveraciones contenidas en el acta levantada en ocasión de la celebración de la asamblea extraordinaria no es falsa (foja 101), en el sentido que se encontraban presentes todos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho voto.

Con relación al sexto motivo, la recurrente expresa que el yerro jurídico radica en que, el incumplimiento en el procedimiento de convocatoria y quórum para la celebración de una asamblea en una sociedad anónima se ventila en la esfera civil o mercantil.

Finalmente con relación al motivo séptimo la casacionista expresa que la legislación penal no erige como delito la protocolización de actas de sociedades

mercantiles "... que recojan la verdad de lo acontecido en las reuniones que dichas actas registran".

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

Como disposición legal infringida la casacionista señala el artículo 1 del Código Penal en concepto de violación directa por omisión porque no se consideró esta disposición y se subsumió la conducta de ANTONIO OSORIO ABREGO dentro del tipo penal de falsedad documental, vulnerándose el principio de "nullum crimen sine previas lege".

SEGUNDA CAUSAL

"Error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica violación de la ley sustancial y ha influido en lo dispositivo de la sentencia" (Artículo 2434, numeral 1, segundo párrafo del Código Judicial).

MOTIVOS

Esta segunda causal es sustentada en dos motivos, los cuales se indicarán a continuación:

PRIMERO: Expresa la casacionista que el vicio de injuridicidad radica en que la sentencia deduce la existencia de una declaración falsa en la escritura pública (fojas 100-102), que protocoliza el acta de la asamblea extraordinaria de accionistas celebrada por la sociedad MED. S.A., aunque para el 21 de enero de 1994 el único socio suscriptor de acción era ANTONIO OSORIO ABREGO.

SEGUNDO: Expresa la recurrente que el fallo censurado contiene yerros jurídicos al valorar el contenido de la escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991, visible a fojas 67-69 del proceso porque indica que se han emitido cien acciones a razón de cien dólares cada acción, cuando lo que se había emitido eran solamente dos acciones para la fecha de la asamblea extraordinaria.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

La casacionista indica como disposiciones legales infringidas los artículos 823 del Código Judicial, 265 y 266 del Código Penal.

Expresa la recurrente que el artículo 823 del Código Judicial fue vulnerado en concepto de violación directa por comisión al valorar la escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991 alejado de las reglas de la sana crítica y por ende de lo establecido por ley.

Indica la casacionista que el artículo 265 del Código Penal fue violado de manera directa por comisión porque los hechos contenidos en la investigación no se subsumen a la descripción del hecho punible contenido en el artículo 265 del Código Penal.

Agrega además, que por tratarse de una norma en blanco el artículo 266 del Código Penal fue transgredido en concepto de indebida aplicación porque el licenciado OSORIO no incluyó en el acta de la asamblea extraordinaria declaraciones falsas, "... ni se causaron perjuicios a los herederos a ese momento desconocidos y ni declarados judicialmente, lo cual no dio lugar a la integración del tipo penal ...".

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

El Señor Procurador General de la Nación, al emitir concepto es del criterio que la sentencia de 17 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no debe ser casada, ya que la recurrente no logró acreditar las causales aducidas.

Con relación a la primera causal "cuando se tenga como delito un hecho que no lo es", el representante del Ministerio Público solamente se refirió a los motivos quinto, sexto y séptimo y con respecto a ellos expresó que la recurrente no logró acreditar los cargos de injuridicidad porque la escritura pública No. 2118 de 4 de marzo de 1994 contiene afirmaciones falsas, ya que en ella se aseveró que para la celebración de la asamblea extraordinaria se encontraban presentes los tenedores de la totalidad de las acciones "... cuando se acreditó en autos que existían dos suscriptores de acciones y de las que, si bien uno de los tenedores de éstas había fallecido, no convertía a uno solo de los accionistas en el poseedor de la "totalidad de las acciones emitidas" y mucho menos que este constituyera, como anota el ad-que (sic), en "la mayoría de los accionistas".

Agrega el Señor Procurador, que con la declaración de uno de los procesados, JOSÉ DE LA ROSA CASTILLO CABRERA (fojas 159-163), se patentiza la falsedad, ya que éste señaló el conocimiento que tenían con respecto a los derechos que le asistían a los herederos del difunto.

En consecuencia, el Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA RODRIGUEZ es del criterio que no se ha vulnerado en concepto de violación directa por omisión el artículo 1 del Código Penal porque ANTONIO OSORIO ABREGO fue sentenciado luego de la acreditación del delito de falsedad documental, por lo que fue investigado, juzgado y sentenciado por la comisión de un hecho descrito como delito.

El representante del Ministerio Público al proferir sus consideraciones jurídicas sobre la segunda causal denominada "Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que implica violación de le ley sustantiva penal que ha influido en lo dispositivo del fallo impugnado" expresó que el primer motivo presentado por la casacionista no acredita los cargos de ilicitud, ya que la valoración efectuada por el Tribunal de Segunda Instancia a la escritura pública se ajusta a los parámetros consignados en la ley.

Con relación al segundo motivo, el representante de la sociedad, indica que no próspera porque la recurrente cuestiona un hecho que no fue relevante para la determinación de la decisión adoptada por el Ad-Quem por cuanto que la falsedad gira en torno a la cantidad de acciones suscritas que participaron en la asamblea extraordinaria y no con respecto a lo establecido en el pacto social relativos al capital social autorizado.

Al referirse a las disposiciones legales infringidas y al concepto de la infracción, expresa el licenciado SOSSA RODRIGUEZ, que el medio probatorio utilizado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial fue la escritura pública No. 2118 de 4 de marzo de 1994, que protocoliza el acta de la asamblea extraordinaria, y no la No. 309 de 15 de enero de 1991 constitutiva de la sociedad MED, S.A.

Agrega el Señor Procurador que la escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991 "... no ofrece mayores elementos como para sustentar la violación del citado precepto legal, documento en el que se deja establecido, quienes eran los suscriptores originales de las dos acciones emitidas, al constituirse la sociedad MED, S.A."

Finalmente, al no acreditarse la vulneración de la norma adjetiva, el representante del Ministerio Público, concluye que la causal probatoria no se configuró, pues ante este tipo de causales la transgresión de la norma sustantiva se produce de manera indirecta.

## DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

### PRIMERA CAUSAL

La doctora AURA E. GUERRA DE VILLALAZ es del criterio que la sentencia de 17 de diciembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito

Judicial incurrió en el error de calificar como delito un hecho que no lo es.

Esta causal se encuentra consagrada en el artículo 2434, numeral 2 del Código Judicial y la misma se manifiesta cuando los hechos que se dan por probados no constituyen delito, con ello se protege el principio de estricta legalidad, impidiendo que una persona sea perseguida, procesada y sancionada por hechos a los cuales la ley no les ha dado la categoría de hecho punible.

Expresado lo anterior corresponde a este tribunal de casación examinar los motivos que sustentan la primera causal.

Como se señaló ut supra los motivos primero, segundo y tercero carecen de cargos de injuridicidad porque la casacionista se ha limitado a señalar los detalles inherentes a la constitución de la sociedad MED, S.A., así como a reproducir algunas de las cláusulas contenidas en el pacto social de la referida persona jurídica, por lo que el tribunal procederá a desestimarlos.

En el cuarto motivo la recurrente relata, que a la muerte del tenedor de una de las acciones sólo quedó un accionista con derecho a voto, desconociendose quienes eran los herederos del accionista fallecido para el 21 de abril de 1994. A juicio de la Sala lo expuesto por la casacionista no contribuye a clarificar el cargo de injuridicidad endilgado a la sentencia de 17 de diciembre de 1998.

Con relación al quinto motivo, la recurrente expresa que la incorporación en la escritura pública de las frases "estuvieron presentes todos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto" y que el hecho que la reunión extraordinaria fuera presidida por el tesorero no constituyen una falsedad, ya que eso fue lo que ocurrió el 21 de enero de 1994.

Sobre el particular el fallo censurado expresa que el licenciado ANTONIO OSORIO ABREGO se presentó personalmente a la Notaría Quinta del Circuito de la Provincia de Panamá con la finalidad de protocolizar la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad MED, S.A., celebrada el 21 de enero de 1994, en la que se nombraron nuevos directores y dignatarios.

Continúa indicando el fallo, que para la fecha de esa reunión extraordinaria sólo se encontraba presente el único socio suscriptor de una acción equivalente a cien dólares, por lo que OSORIO ABREGO no ostentaba la calidad de socio mayoritario.

A foja 957 expresa el Ad-Quem que:

> "... es conveniente señalar que bajo ninguna interpretación es posible concluir que en una sociedad que ha emitido 100 acciones equivalentes a 100 balboas cada una, en la cual existe constancias (sic) de que sólo existían dos suscriptores dueños de una acción respectivamente, al producirse la muerte de uno el sobreviviente constituye la mayoría de los accionistas. Considera la sede que se ha faltado a la realidad al expresar una situación que no es verdadera ..."

considera la Sala que los fundamentos jurídicos señalados por el Ad-Quem para confirmar la sentencia condenatoria en contra de ANTONIO OSORIO ABREGO se ajustan a derecho porque la realidad procesal contenida en este proceso acredita de manera fehaciente y sin lugar a dudas que, para la fecha del 21 de enero de 1994, sólo se encontraba presente el tenedor de una acción y ello no constituye mayoría. En las sociedades de capitales el derecho al voto guarda estrecha relación con las acciones registradas a nombre de cada accionista.

En tal sentido, la mayoría de los accionistas gobiernan la sociedad, por lo que las decisiones que se adopten deberán ajustarse a lo estipulado en la ley, los estatutos y al pacto social.

Debe este tribunal observar igualmente, que la junta de accionistas deberá ser convocada por los facultados para ello, cumpliendo con las designaciones establecidas en el pacto social (presidente o secretario) y en última instancia a través de la convocatoria judicial, por lo que considera este Tribunal de Casación que el licenciado ANTONIO OSORIO ABREGO, en su calidad de tesorero carecía de facultades para convocar a reunión de accionistas, lo que trae como consecuencia, que no se configura el cargo de injuridicidad acusado en este motivo.

En los motivos sexto y séptimo la casacionista expresa que las irregularidades que se cometen en las asambleas de sociedades anónimas "generalmente se dilucidan en sede civil o mercantil, no así en lo penal", por lo que la ley penal no erige como delito la verdad contenida en las actas, producto de lo acontecido en esas reuniones.

Sobre el particular este tribunal de Casación observa que el Ad-Quem constató que la escritura pública No. 2118 de 4 de marzo de 1994, contiene falsedades que no reflejan la verdad contenida en la asamblea extraordinaria de la sociedad MED, S.A., por las razones expuestas en el motivo anterior y concluyó que la actitud desplegada por ANTONIO OSORIO ABREGO enmarca perfectamente con lo dispuesto en los artículos 265 y 266 del Código Penal, relativos a la falsedad documental.

En principio la Sala comparte los criterios vertidos por la casacionista, en el sentido que la legislación civil y mercantil es la encargada de dirimir las controversias por irregularidades cometidas en la convocatoria y con respecto al quórum de asistencia y de voto de las sociedades, mas no cuando los actos desplegados por uno o varios de los socios se enmarcan en tipos penales, como el caso que nos ocupa.

A juicio de este Tribunal de Casación el acta levantada por ANTONIO OSORIO ABREGO, en ocasión de la asamblea extraordinaria de accionistas, celebrada el 21 de enero de 1994 no recoge de ninguna manera la verdad de lo acontecido en dicha reunión, por lo que se concluye manifestando, que la casacionista no logró acreditar en los motivos sexto y séptimo los cargos de injuridicidad endilgados a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Con relación a las disposiciones legales infringidas, la casacionista señala el artículo 1 del Código Penal.

Expresa que ese artículo fue violado de manera directa por omisión porque no fue considerado y se subsumió la conducta de su representado en el delito de falsedad documental violentándose el principio de "nullum crimen sine previa lege", ya que no existe un precepto de derecho que recoja la actuación desplegada por su representado.

El artículo 1 del Código Penal indica que: "nadie podrá ser procesado ni penado por un hecho no descrito expresamente como delito por la Ley vigente al tiempo de su comisión, ni sometido a medidas de seguridad que la ley no haya establecido previamente".

Este precepto constituye una garantía individual que exige la existencia de un delito como precedente de un hecho delictivo y guarda relación con uno de los elementos integrantes de la teoría del delito, el tipo penal.

En tal sentido RAINIERI, indica que el "tipo (modelo o figura) legal es el conjunto de los elementos que, según ladescripción contenida en los preceptos de las normas penales, componen los hechos humanos que están prohibidos y ordenados con la amenaza de una pena"(Citado por CAMPO ELIAS MUÑOZ R. y AURA E. GUERRA DE VILLALÁZ en la obra DERECHO PENAL PANAMEÑO, Parte General, Panamá, 1977, pág.214)

Expresado lo anterior, corresponde al tribunal analizar el texto de los artículos 265 y 266 del Código Penal, los cuales regulan lo relativo a la

falsedad documental.

> El artículo 265 indica que:
> " El que falsifique en todo o en parte una escritura o documento público o auténtico de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 5 años".
>
> El artículo 266 complementa el 265 y expresa:
> "Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que incluye o haga incluir en una escritura o documento público o auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio."

Para este Tribunal es un hecho cierto que ANTONIO OSORIO ABREGO incluyó en el acta de la asamblea extraordinaria llevada a notariar, una declaración falsa, al consignar que "estuvieron presentes todos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto ...", porque de las cien acciones que autorizaba el pacto social, podía emitir la sociedad, sólo se encontraban en circulación dos, la de MEDIN CASTILLO y ANTONIO OSORIO ABREGO, pero en la asamblea, sólo se encontraba presente una, la de OSORIO ABREGO, por lo que la afirmación contenida en la escritura pública era falsa, ya que faltaba la otra acción para obtener la mayoría necesaria y poder modificar el acto social de MED, S.A.

El delito de Falsedad Ideológica se configura cuando se inserta en un documento público información que es contraria a la verdad, es decir, falsedades o mentiras.

En tal sentido la doctrina ha manifestado que el agente utiliza los medios de autenticidad oficiales, para hacer aparecer como garantizada por el Estado la prueba de un hecho y que por ese alcance de garantía oficial, esta hipótesis delictiva no puede cometerse en los documentos privados.

Por su parte SEBASTIAN SOLER expresa que "la falsedad ideológica no se refiere a cualquier falsedad o mentira introducida en el documento, sino solamente aquellas que recaen sobre el hecho que el instrumento mismo prueba erga omnes" (SOLER, Sebastián, citado por BARRERA DOMINGUEZ, Humberto en DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA, editorial Temis, 1986, pág.188).

A través de este tipo penal el sujeto activo se refiere a hechos que el documento público acredita y agrega la doctrina que se comete cuando se:

-hace aparecer como sucedido un acto que en realidad no ha ocurrido, para lo cual se cuenta con las facilidades que le proporcionan las formas autenticadoras de las que dispone;

-hace aparecer que intervino en un acto una persona que no ha concurrido a él;

-atribuye a las personas que han intervenido en el acto declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho;

-faltar a la verdad en la narración de los hechos; y

-suministra copia o certificado de un documento que no existe o manifiesta en ellos cosas diversas de la que contiene el verdadero.

Siendo ello así este Tribunal de Casación considera en el caso bajo examen, que el procesado ANTONIO OSORIO ABREGO fue sancionado por haber introducido en un documento público información falsa, hechos estos que son los elementos constitutivos del tipo penal por el cual fue sancionado. En consecuencia, no ha sido vulnerado en concepto de violación directa por omisión el artículo 1 del Código Penal.

**SEGUNDA CAUSAL**

**La segunda causal que sustenta la doctora AURA E. GUERRA DE VILLALÁZ es de carácter probatoria y se identifica como "error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica violación de la ley sustancial y ha influido en lo dispositivo de la sentencia."**

**Los supuestos de esta causal cobran vigencia cuando el juzgador le da a la prueba una fuerza determinada que la ley no le atribuye, se desconoce lo que la ley le asigna o bien se permite su producción sin llenar los requisitos legales, aplicandoles luego una fuerza estatuida sólo para elementos probatorios que reúnan todas las cualidades exigidas por ley.**

**Esta causal es sustentada en dos motivos, los cuales se analizaran a continuación:**

**Con relación al primer motivo la casacionista señala, que la segunda instancia al ponderar la escritura pública No. 2118 de 4 de marzo de 1994 dedujo "que hay una declaración falsa". Agrega que para el 21 de enero de 1994 el único socio suscriptor de una acción era su representado ANTONIO OSORIO ABREGO.**

**La casacionista no explica cuáles son las deducciones efectuadas por el tribunal de segunda instancia que lo llevaron a concluir la existencia de una declaración falsa, ni indica, de ser así, cual fue el yerro jurídico cometido por el Ad-Quem al valorar esa declaración, de allí que la Sala no observa el cargo específico de la injuridicidad que se acusa.**

**En el segundo motivo, la recurrente sostiene, que la sentencia impugnada establece que la sociedad emitió cien acciones equivalentes a cien balboas cada una, cuando lo que el pacto social establece es que MED, S.A. tendrá un capital social autorizado de cien acciones.**

**Coincide la Sala con las apreciaciones contenidas en éste motivo con respecto a las aseveraciones que contiene la sentencia impugnada a foja 954, pero sobre el particular este Tribunal ha indicado que en las causales de carácter probatoria el yerro jurídico cometido por el Ad-Quem debe ser "protuberante", de tal suerte que de no haberse cometido otra sería la decisión.**

**A juicio de la Sala lo señalado por el Ad-Quem en su sentencia no concretiza cargo de injuridicidad, ya que no nos encontramos ante un desacierto notorio que conlleve una variación en lo resolutivo del fallo.**

**Sobre el particular ha quedado acreditado en el proceso que existían dos acciones emitidas y en circulación, una en propiedad de ANTONIO OSORIO ABREGO y la otra de MEDIN CASTILLO, quien por haber fallecido, su acción se integraba a la masa sucesoria que dejaba en poder de sus herederos, una vez se cumpliera con el proceso sucesorio respectivo. Esto no significa, a criterio de la Sala, que esa acción perdiera validez y dejara de ser decisiva para la toma de decisiones de la sociedad, por lo que el Tribunal es del criterio, que tampoco se ha logrado materializar el vicio endilgado a la sentencia.**

**El Tribunal concluye de esta forma porque las acciones y el capital social de la sociedad se determinan conforme a las estipulaciones contenidas en el pacto social.**

**En tal sentido el artículo 20 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927 establece que:**

> **"La sociedad tendrá facultad para crear y emitir una o más clases de acciones, con las designaciones, preferencias, privilegios, facultades de voto, restricciones o requisitos y otros derechos que su pacto social determine ..."**

> lo que significa que, los accionistas tendrán igualdad de derechos conforme al tipo de acciones que hubiesen adquirido. En el presente caso, las acciones eran de la misma clase por lo que los derechos que MEDIN CASTILLO y ANTONIO OSORIO tenían en la toma de decisiones eran de la misma naturaleza. El artículo 23 de la ley de Sociedades Anónimas indica que "Todas las acciones de una clase, ya sean con valor nominal o sin valor nominal, serán iguales a las acciones de esa misma clase, con sujeción, no obstante, a las designaciones, preferencias, privilegios, facultad de voto, restricciones o requisitos conferidos o impuestos con respecto a cualquiera clase de acciones.".

En base a lo anterior, este Tribunal de Casación es del criterio que la acción de MEDIN CASTILLO tenía plena válidez y ese voto era necesario e indispensable para las decisiones de la sociedad MED, S.A., ya que el pacto social no indicaba lo contrario.

En tal sentido el artículo 34 de la ley 32 de 26 de febrero de 1927 establece que:

> "Podrá estipularse en el pacto social que los tenedores de cualquiera clase determinada de acciones no tendrán derecho de votación, o podrá restringirse o definirse ese derecho con respecto a las distintas clases de acciones".

Pero si el pacto social no dispone otra cosa, todo accionista tendrá derecho a un voto por cada acción registrada a su nombre (artículo 45 de la ley de Sociedades Anónimas), lo que significa que las decisiones adoptadas por la Asamblea Extraordinaria celebrada por MED, S.A. el día 21 de enero de 1994, contó con el voto de un accionista, así de las dos acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, la representación con la que se pretendió obtener la mayoría y aprobar las modificaciones al pacto social fue de un voto, y un voto no es mayoría.

La ley de Sociedades Anónimas es clara cuando precisa, que las decisiones se adoptaran con el voto favorable de la mayoría de los accionistas, de allí que las reformas al estatuto reglamentario, la variación en el tipo de acciones que emite la sociedad, la designación de la junta directiva, así como su remoción quedará en manos de "los tenedores de la mayoría de las acciones suscritas con derecho a votación ..." (Artículo 63 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927).

Siendo ello así, la Sala recuerda que la Asamblea General de Accionistas constituye el poder supremo de la sociedad y "... en ningún caso podrá por un voto de la mayoría privar a los accionistas de sus derechos adquiridos ..." (Artículo 417 del Código de Comercio).

En jurisprudencia de octubre de 1982, esta Corporación estimó que "En las sociedades anónimas la mayoría de los accionistas gobiernan la sociedad y sus decisiones se cumplen siempre que se tomen conforme a la ley, los estatutos y el acto social".

La doctrina por su parte ha manifestado que "... la convocación y el quórum son condiciones esenciales para la existencia de la asamblea general; la falta de cualquiera de ellas impide que una reunión de los socios tenga ese carácter y sea, consecuencialmente, idónea para que se produzcan en ella acuerdos o decisiones obligatorias para todos los asociados, en la forma ya indicada." PINZON Gabino, SOCIEDADES COMERCIALES, Vol. 1, Teoría General, Quinta edición, editorial Temis, pág 191).

Con relación a las disposiciones legales infringidas, la casacionista señala el artículo 823 del Código Judicial, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal.

Indica la doctora GUERRA DE VILLALÁZ que el artículo 823 fue vulnerado en concepto de violación directa por comisión porque el juzgador de segunda instancia valoró inadecuadamente la escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991, ya que se alejó de las reglas de la sana crítica y de las disposiciones legales relativas a sociedades anónimas.

La escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991 contiene el pacto social de la sociedad anónima MED.

El artículo 823 del Código Judicial establece que:

> "Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las certificaciones que en ellos haga el servidor que los expidió.
>
> Las declaraciones o afirmaciones que hagan el otorgante en escritura pública o en cualquier documento público tendrán valor entre éstos y de sus causahabientes, en lo dispositivo del acto o contrato. Deben ser tomadas en cuenta en su integridad, con las modificaciones y aclaraciones, y el Juez las apreciará en concurrencia con las otras pruebas del expediente, y según las reglas de la sana crítica. Pero respecto a terceros, el Juez las apreciará solo en lo que se refiera de modo directo a lo dispositivo del acto o contrato tomando en cuenta asimismo las otras pruebas del expediente y apreciándolas según las reglas de la sana crítica."

La escritura pública No.309 de 15 de enero de 1991, a la que se refiere la casacionista como valorada de manera incorrecta, es la que da fe de la constitución y existencia jurídica de la sociedad MED, S.A. Este documento público fue valorado por el Ad-Quem ya que al confrontarlo con lo establecido en la escritura pública No. 2118 de 4 de marzo de 1994, (que consigna las modificaciones efectuadas al pacto social), es que la segunda instancia concluye que se ha vulnerando lo dispuesto en el acta constitutiva de la referida sociedad.

En consecuencia, la escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991 fue estimada, conforme a las estipulaciones contenidas en el artículo 823 del Código Judicial, y el Ad-Quem efectuó sus interpretaciones en total apego a los principios contenidos en la norma procedimental y a la Sana Crítica.

Cabe anotar que el tipo penal por el cual fue procesado ANTONIO OSORIO ABREGO (Falsedad Ideológica) fue determinado luego de confrontar la información contenida en la escritura pública No. 2118 de 4 marzo de 1994 con lo establecido en la escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991, constitutiva de la sociedad, MED, S.A..

La escritura pública No. 2118 de 4 de marzo de 1994, certificó que:

> "... Estuvieron presentes todos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, quienes fueron debidamente convocados mediante Aviso de Convocatoria publicado en el Diario El panamá América ...
>
> Presidió la reunión el Tesorero y Agente Residente de la Sociedad, LIC. ANTONIO OSORIO ABREGO, por ausencia de su titular, debido a su fallecimiento y actúo como Secretaria de la reunión, la señora AURELIA ROSA GONZALEZ DE CASTILLO, por ausencia de su titular ..."

Por su parte, la escritura pública No. 309 de 15 de enero de 1991 indicó en lo siguiente:

> CUARTO: ... cada acción tendrá derecho a un voto.

QUINTO: Cada uno de los otorgantes suscribe una (1 acción.

SÉPTIMO: El Presidente será el Representante legal de la sociedad y en sus ausencias temporales o accidentales llevará la representación el Secretario o en ausencia de éste último la persona que designe la Junta General de Accionistas. ...

DÉCIMO: Los Directores y Dignatarios no necesitan ser accionistas y tanto los Directores como los Dignatarios, podrán ser removidos en cualquier tiempo, sin causa, por el voto de los tenedores de la mayoría de las acciones con derecho a voto."

La Sala observa que las reformas que se introdujeron al pacto social de la sociedad MED S.A. debieron ser introducidas conforme los procedimientos y reglamentos, que para el efecto consagra el acta de constitución de la sociedad, por lo que, el artículo 823 del Código Judicial no ha sido vulnerado, en consecuencia, no prospera la causal invocada por la casacionista.

Con relación a las normas sustantivas que se dicen vulneradas en concepto de violación directa por comisión (artículo 265 del Código penal) y por indebida aplicación (artículo 266 del Código Penal) este Tribunal de Casación se remite al criterio jurisprudencial que señala, que en los recursos de Casación en el fondo sustentados en causales de naturaleza probatoria, la violación de la norma sustantiva se produce de manera indirecta, es decir, sólo cuando ha tenido lugar la vulneración de la norma adjetiva; por lo que ante la ausencia de ello, no se configura la causal aducida en el artículo 2434 del Código Judicial, numeral 1.(Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, fallo de 20/2/97, Registro Judicial de febrero de 1997, pág. 167)

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia recurrida por la defensa técnica del señor ANTONIO OSORIO ABREGO.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Ad-hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE SEGUNDO MENDOZA MENDOZA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licdo. GERARDO PUERTO GORDON ha interpuesto recurso de casación penal en el fondo contra la resolución de 19 de julio de 1999, expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirma la sentencia de 9 de diciembre de 1998, mediante la cual el Juzgado de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de Bocas del Toro condena a SEGUNDO MENDOZA MENDOZA a la pena de ocho (8) años de prisión, como autor de un delito contra la salud pública relacionado con drogas.

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del código Judicial, corresponde a la Sala examinar el libelo de formalización del recurso,

a objeto de decidir sobre su admisibilidad.

A tal efecto, prima facie se advierte que el escrito se dirige a los "Honorables Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda Penal", contraviniendo lo que prescribe el artículo 102 del Código Judicial, según el cual el recurso sub júdice debe dirigirse al Magistrado Presidente de esta Sala.

La historia concisa del caso recoge un relato sucinto de los hechos que dieron origen a la causal penal bajo examen.

La causal invocada se refiere al error de derecho en la calificación del delito, si la calificación ha influido en el tipo o en la extensión de la pena aplicable, advirtiéndose que el recurrente transcribe completamente el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial, sin individualizar a cual de los dos supuestos que contiene dicha norma se refiere. Sobre este particular, en resolución de 23 de abril de 1997, la Sala explicó lo siguiente:

> "Con relación a esta causal, debemos hacer los siguientes comentarios: Esta causal, en realidad contempla dos supuestos, los cuales son excluyentes entre si y son: cuando la calificación del delito ha influido en el tipo y cuando la calificación del delito ha influido en la extensión de la pena. Si el recurrente quería referirse a uno de ellos lo debió especificar, por lo que en esta segunda causal volvió a invocar incorrectamente la denominación de la causal". (Registro Judicial, abril de 1997, página 212).

Desde esta perspectiva, al haberse invocado simultáneamente dos causales en una, se incumple con el requisito que exige la técnica casacionista, en el sentido que el libelo debe especificar, con la debida separación cada una de las causales en que se funda el recurso.

En adición a lo anterior, la Sala observa que el libelo bajo examen no contiene debidamente estructurados los epígrafes relativos a la especificación de los motivos y las disposiciones legales infringidas, con su respectivo concepto de infracción. A contrario censu, el casacionista desarrolla un extenso alegato, que entremezcla argumentos relativos a la sentencia de primera instancia con disposiciones de carácter procesal, ajenas a la causal invocada, así como transcripción de fragmentos de la resolución impugnada, todo lo cual se aparta de los parámetros que gobiernan la técnica de formalización del recurso de casación penal.

La deficiencias advertidas que incluyen, entre otras, la invocación simultánea de dos causales en una sola, la ausencia de especificación de los motivos y la inadecuada presentación de las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción, hacen que la iniciativa procesal sub-júdice resulte ininteligible, por lo que hay lugar a declarar su inadmisibilidad.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A EDWIN GONZÁLEZ MONTENEGRO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, VEINTIDOS

(22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de lista que establece el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo presentado por el Licenciado Samuel Quintero V., contra la resolución de 7 de octubre de 1999, expedida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que confirma la sentencia de 8 de junio de 1999, mediante la cual el Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de Chiriquí condena a EDWIN GONZÁLEZ MONTENEGRO a la pena de cuarenta (40) meses de prisión como autor del delito de posesión agravada de drogas ilícitas.

Al examinar el libelo de formalización del recurso, se observa que la historia concisa del caso relata en forma sucinta los hechos que originaron el proceso, destacando los eventos procesales más importantes.

El casacionista invoca dos causales. La primera de ellas es la de error de derecho sobre la existencia de la prueba la cual se enuncia conforme a la denominación que le da el artículo 2434 del Código Judicial.

Con relación a los seis motivos que se presentan para sustentar la primera causal, la Sala advierte que los cinco primeros contienen meras referencias a elementos probatorios y situaciones que, según el censor, fueron acreditadas en el proceso pero no se desarrolla cargo de injuridicidad alguno congruente con la causal invocada. Por otra parte, en el sexto motivo, el casacionista se limita a expresar que el Ad-quem se fundamentó en pruebas que no figuran en el proceso en tanto que, según señala, omitió pruebas acreditadas en el expediente a favor del procesado. Al respecto, la Sala observa que el sexto motivo se limita a expresiones abstractas, que no cumplen con el propósito designado a este epígrafe del recurso, cual es el de servir de sustento a la causal invocada.

De manera constante, la doctrina jurisprudencial ha venido sosteniendo que cuando se invoca la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba, en cada uno de los motivos el casacionista debe identificar cuál es el medio o medios de prueba que considera omitidos por el fallo de segunda instancia, con la explicación razonada de la forma en que la consideración de dichos elementos hubiere conducido al Tribunal de Segunda Instancia a una decisión distinta o bien, en otro supuesto, cuáles son las pruebas en que se ha fundamentado la resolución de segunda instancia, que no figuran legalmente en el proceso, explicando en debida forma de qué manera dicho yerro incidió en la decisión objetada, todo lo cual representa la expresión adecuada de los cargos de injuridicidad que sustentan la causal de la referencia.

A propósito de las disposiciones legales infringidas, el recurrente acusa la violación directa por omisión de los artículos de 770 y 904 del Código Judicial, pero prima facie se advierte la omisión de la norma sustantiva que se considera infringida como consecuencia de la violación de las normas adjetivas aducidas, lo cual constituye un requisito esencial cuando se invocan causales de naturaleza probatoria.

Los defectos señalados ponen de relieve que la primera causal invocada carece de sustento lógico jurídico.

La segunda causal aducida por el censor, cuya denominación se expresa correctamente, se refiere al error de derecho al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del imputado en los hechos que la sentencia dé por probados.

Al examinar los seis motivos que se presentan para sustentar la segunda causal, se aprecia que en todos ellos el recurrente se refiere a aspectos

probatorios de la causa y a la no responsabilidad criminal del sentenciado, todo lo cual es ajeno al alcance de la causal de la referencia.

El supuesto que establece el numeral once del artículo 2434 del Código Judicial, como causal de casación en el fondo, se refiere al error de derecho al determinar la participación criminal del procesado en los hechos que la sentencia dé por aprobados, es decir, si se trata de autor inmediato, autor mediato, cómplice primario, cómplice secundario, etc, con la consecuente responsabilidad penal derivada del grado de participación criminal. Partiendo de esta premisa, a través de la causal sub-júdice no es posible, como lo hace el recurrente, cuestionar los hechos que la sentencia da por probados para sustentar la responsabilidad criminal del procesado, sino tan sólo, propiciar la adecuada ubicación de dicha responsabilidad criminal en el grado de participación que corresponda, de conformidad con lo establecido en el Capítulo V, Título II del Libro I del Código Penal, a propósito de la autoría y participación.

En la sección de las "Disposiciones Legales Infringidas", el recurrente aduce la interpretación errada del artículo 38 del Código Penal pero al sustentar el concepto de infracción, reitera el yerro de cuestionar los hechos que la sentencia de segunda instancia da por aprobados para sustentar la responsabilidad criminal del procesado. En adición a lo anterior, el casacionista no cumple con el parámetro que establece la doctrina jurisprudencial en el sentido que cuando se aduce la interpretación errónea de una disposición legal, debe citarse la norma que consagra la regla de hermenéutica jurídica que ha sido desconocida por el Juzgador, con su correspondiente concepto de infracción.

Las deficiencias señaladas conducen a la Sala a declarar la inadmisibilidad del recurso de casación sub-júdice.

En consecuencia, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el presente recurso de casación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) MARIANO HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ALEXANDER CHEN SMITH, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el 26 de marzo de 1999 (fs. 150-155) que reforma la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar responsable al señor ALEXANDER ANTONIO CHEN SMITH (a) "Pata E Gallo" y lo condena a veinte (20) meses de prisión y a la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas por término similar, por el delito de venta ilícita de drogas, el licenciado Markel Iván Mora Bonilla , Fiscal Delegada Especializada en delitos Relacionados con Drogas de la provincia de Herrera y Los Santos, anunció y formalizó recurso de casación en el fondo.

Cumplidas las fases de admisión, sustanciación y celebrada la audiencia oral y pública, se procede a resolver el fondo del recurso presentado.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

Manifiesta el recurrente que la captura del señor Alexander Antonio Chen Smith (a) "Pata E Gallo" se dio a raíz de una Operación Encubierta de Compra Vigilada de Drogas, el día 19 de septiembre de 1998, en la comunidad de Guararé, Provincia de Los Santos, cuando intentaba cambiar los billetes autorizados por la Fiscalía para la referida diligencia (fs.10-20).

Señala que antes de la captura, se le venían haciendo seguimiento al señor Chen Smith, porque supuestamente se estaba dedicando a la venta de drogas en la citada comunidad, por lo que se autorizó la diligencia que dio origen a su detención (fs.1-8).

Al ser indagado el señor Chen Smith aceptó haberle vendido drogas a un informante de la Fiscalía, producto de lo cual se ubicaron al momento de la aprehensión los diez balboas (B/.10.00) autorizados para esos menesteres, situación que incorrectamente admitió el Tribunal Ad-Quem como atenuante sin ser ella espontánea y oportuna, cometiendo por ende un error jurídico al admitir o calificar los hechos constitutivos de la responsabilidad criminal de Chen Smith al momento de expedir la sentencia.

Indica que el señor Chen Smith fue condenado por el Juzgador A-Quo en sentencia de 11 de febrero de 1999 a la pena de 40 meses de prisión e igual período de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el delito de Venta Ilícita de Drogas.

Dicha sentencia fue apelada tanto por la Fiscalía como la defensa técnica, y fue revocada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en el sentido que se le reconoció la atenuante de la confesión, la cual en su opinión no era espontánea porque el señor Chen Smith fue sorprendido en flagrante delito, así como tampoco era oportuna ya que habían otras pruebas en el proceso que lo comprometían con el acto contrario al orden penal, con lo cual se ha dado lugar a que se haya cometido error de derecho al admitir o calificar esa confesión como atenuante y rebajándose por ende la pena de veinte (20) meses de prisión e igual período de inhabilitación de funciones públicas y se confirmó en lo demás.

CAUSAL DE FONDO INVOCADA

"Cuando se comete error de Derecho al admitir o calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal" (art. 2434 numeral 8 del Código Judicial).

MOTIVOS

Es un sólo motivo el que sustenta la causal invocada, en el cual el casacionista afirma que el Tribunal Ad-Quem cometió un error de derecho al calificar la confesión del señor Alexander Antonio Chen Smith (a) "Pata E Gallo", como atenuante, dado que se observa en la diligencia que contiene la misma (f.37-41), que ella se da en momentos cuando ya se tenía información de seguimiento que Chen Smith se estaba dedicando a la venta de drogas (f.2-4) y se autorizó efectuarle una Compra Vigilada de Drogas (fs.5-8).

Y efectivamente, con esta diligencia se le compró judicialmente drogas y se le sorprendió en intención de cambiar el dinero que se había utilizado para esa diligencia (fs.10-20), con lo cual -en su criterio-, no se podía calificar a dicha confesión como espontánea, dado que todas estas diligencias detalladas provocaron la captura de Chen Smith en flagrancia. Lo que significa que el señor Chen Smith no llegó por sus propios medios ante las autoridades sino producto de su aprehensión material luego de la operación de compra vigilada de drogas.

También sostiene el casacionista, que en ningún momento la confesión de Chen Smith puede ser calificada como oportuna en razón de que ella, según el material probatorio citado (2-4 y 10-20), se da en virtud de que ya se le había

identificado al mismo objetiva y subjetivamente en su relación con el hecho punible. Todo ello ha dado lugar a que el Tribunal Superior haya infringido la ley sustancial penal al admitir como atenuante una confesión que no cumple con los requerimientos de ley, es decir, la oportunidad y espontaneidad.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El casacionista manifiesta que el fallo atacado ha infringido el artículo 66 del Código Penal numeral 5 en concepto de indebida aplicación, porque se aplicó a un supuesto de hecho que no está regulado en él, toda vez que la sola confesión sin los elementos de espontaneidad y oportunidad que comentó en el motivo, no la explican como circunstancia atenuante haciéndola perder por tanto la fuerza legal de su reconocimiento.

En consecuencia concluye, que el error jurídico del Tribunal Superior radica en la incorrecta calificación de la confesión del señor Chen Smith, ya que se le dio el sentido y alcance que realmente no tiene, debido a que se le juzgó oportuna y espontánea, cuando en realidad no lo era.

También considera infringido el artículo 69 del Código Penal en concepto de indebida aplicación, afirmando que el Tribunal Superior cometió un error de derecho al considera la confesión del señor Chen Smith como atenuante cuando ella no era espontánea y oportuna, calificándola incorrectamente para una rebaja injurídica de un tercio de la pena que sumó la cantidad de veinte (20) meses de prisión, cuando ello no se justificaba según los hechos del proceso.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., mediante Vista N° 82 de 31 de agosto de 199, recomienda a esta Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, casar la sentencia de 26 de marzo de 1999, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, por haberse demostrado su disconformidad con la realidad procesal y el quebrantamiento de la ley penal.

Luego de resumir lo expuesto por el casacionista y transcribir el fundamento del Tribunal Superior al reconocerle al señor Chen Smith la atenuante de la confesión espontánea y oportuna, señala la máxima representación del Ministerio Público que nuestra ley sustantiva reconoce tal circunstancia a objeto de aminorar o reducir la pena, atenuando por ende la responsabilidad criminal; pero se exige la concurrencia de dos elementos esenciales: la espontaneidad y la oportunidad.

Sin embargo, sostiene que ninguna de estas dos situaciones se presenta en el caso bajo examen. En ese sentido explica que la declaración del procesado no es conciliable con una confesión espontánea y oportuna, pues Chen Smith no compareció ante la autoridad de manera voluntaria a poner en conocimiento de las autoridades el ilícito cometido, sino luego de haber sido detenido como consecuencia de los informes de investigación y diligencia de compra controlada de drogas y ante la existencia de circunstancias y factores que la relacionaban con el hecho, lo llevaron a confesar, convirtiendo ésta en una mera declaración de los hechos criminosos que no se enmarca dentro del sentido que prevé la norma que se alega como infringida.

Concluye que el Tribunal Ad-Quem incurrió en una errada valoración de la confesión del procesado, al considerarla espontánea y oportuna. Por lo que considera que prospera el cargo de injuridicidad.

En lo que respecta a las dos disposiciones sustantivas alegadas como infringidas por el casacionista, estima que han sido efectivamente vulneradas por indebida aplicación.

FUNDAMENTO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

Corresponde analizar el motivo en que se funda la causal invocada, a efecto de determinar si ésta puede prosperar.

Se tiene que el argumento del único motivo presentado como apoyo a la causal invocada, se centra en que el Tribunal Ad-Quem reconoció al imputado la circunstancia atenuante de la confesión espontánea y oportuna del agente, cuando admite una confesión que no cumple con los requerimientos de ley, por lo que infringió la ley sustancial penal.

Al respecto, el Tribunal Ad-Quem, en el apartado de sus "Fundamentos Legales", señaló lo siguiente:

> "Lo que sí debemos reconocerle al inculpado es que desde el principio lisa y llanamente confesó su actuar punible, porque explicó que para buscar el pedido que le hizo el agente encubierto, él fue a buscar la sustancia ilícita al lugar donde la tenía escondida, regresó a los minutos, hizo la entrega y recibió diez balboas (B/.10.00) en denominación de cinco (B/.5.00) y un (B/.1.00), 'y apenas se había retirado, la gente de la Policía Técnica Judicial me agarraron y me llevaron para mi casa a hacer un allanamiento' " (f.154).
>
> Luego en el apartado de sus conclusiones, determinó:
>
> "... si bien es cierto que el Juez primario le impuso la pena base de sesenta (60) meses de prisión, se le disminuyó en un tercio, por acogerse a juicio abreviado, mas no se reconoció la confesión como atenuante, y en honor a la objetividad que debe imperar en estos procesos, siendo esta libre y espontánea, que contribuyó al esclarecimiento rápido y preciso del ilícito y de su autoría, se debe tomar en cuenta como tal y reducir la pena base en otro tercio, quedando así la sanción líquida en veinte (20) mes de prisión" (f.155).

Al remitirnos al examen de las pruebas allegadas al expediente, como bien lo señala el casacionista, la Policía Técnica Judicial tenía información previa que el señor Alexander Antonio Chen Smith se dedicaba a la venta de droga (fs.2-3), tal como consta en los informes de 6 y 8 de agosto de 1996 (fs.2-3).

En consecuencia, mediante resolución de 19 de septiembre de 1998, la Fiscalía Delegada de Drogas autorizó la realización de un Operativo Encubierto de Compra Controlada de Drogas al señor Chen Smith en la población de Guararé, designando al detective Leonardo González Villarreal para que actuase en dicha operación; y destinó la suma de diez (B/.10.00) balboas desglosados en un billete de cinco (B/.5.00) balboas con la serie 80429016 B, y cinco billetes de un balboa, con las series números B 03005206 T, B 92941008 V, I 15072337 C, B 52322101 G, y B 89316951 T, para ser utilizados en el referido operativo (fs. 5-6 y 7-8).

Con esa misma fecha -19 de septiembre-, consta Informe de Agente Encubierto donde se explica cómo se realizó la diligencia ordenada (fs.10-11).

También se tiene el acta de la Diligencia de Allanamiento y Registro (fs.14-16), donde consta que el señor Chen Smith fue aprehendido por el detective Manuel Reyes en la Refresquería "Aura Ines" al momento que iba a cambiar un dinero que portaba en la mano, en la caja atendida por la señora Betzy de Urriola, el cual correspondía a la cantidad de diez balboas, distribuidos en un billete de cinco y los demás de un balboa, los cuales coinciden no sólo con la cantidad sino también con el número de denominaciones y series que designó la Fiscalía Delegada de Drogas para llevar a cabo la Compra Controlada de Droga (fs.14-16).

Ahora bien, el Tribunal Ad-Quem afirmó que desde el inició, el procesado

confesó su actuar punible, sin embargo, contrario a ello, es dos días después de llevada a cabo las diligencias a que nos hemos referido en párrafos precedentes, el 21 de septiembre, que el señor Chen Smith rindió declaración indagatoria en la cual explicó detalladamente lo acontecido momentos antes de su aprehensión (fs.37-41), lo que coincide con lo consignado en el Informe de Agente Encubierta (fs.10-11), la Diligencia de Allanamiento y registro (fs.14-16), el Informe de Vigilancia y Aprehensión (fs.17-20), el Informe de Registro Corporal (fs.21), Informe de Allanamiento y Registro (f.22) y la Diligencia de la prueba de campo (f.23).

De conformidad con lo expuesto, se resalta que la confesión admitida por el Tribunal de Segunda Instancia, no reúne los elementos para constituir una circunstancia atenuante.

Ello es así, porque "desde la perspectiva penal, la confesión del agente es un comportamiento que se presenta con posterioridad a la comisión del delito. Consiste en el expreso reconocimiento del imputado sobre su participación en la comisión de un hecho punible. Ahora, la ley sustantiva penal establece claramente que la confesión del sujeto activo del delito opera como circunstancia atenuante, en el caso que el agente la haya efectuado de manera espontánea y oportuna. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte ha manifestado que esas dos condiciones ocurren cuando el imputado pone en conocimiento a la autoridad sobre su participación en la comisión de un delito y, que ese reconocimiento haya contribuido de manera significativa y oportuna para esclarecer el hecho investigado" (Sala Penal 4 de julio de 1995).

Lo que significa, que para determinar tal circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, hay que considerar la manera en que se lleva a cabo la comparecencia del agente ante las autoridades, al igual que la situación procesal de la investigación en el momento en que el imputado confiesa su actuación o participación criminal en los hechos. Además que la confesión es oportuna cuando se hace en tiempo anterior al descubrimiento del delito.

Siendo ello así, la Sala concluye que el casacionista acredita el cargo de injuridicidad contra la sentencia censurada en el único motivo expuesto, dado que en efecto, no se dan los presupuestos indicados respecto a la atenuante de la confesión espontánea y oportuna a la luz de las pruebas allegadas al proceso.

Como normas sustantivas infringidas el casacionista señala dos artículos del Código Penal: el artículo 66 en su numeral 5 el cual se refiere a la atenuante de la confesión espontánea y oportuna; y el artículo 69 del Código Penal que establece la penalidad de las circunstancias atenuantes, ambos en concepto de indebida aplicación.

En relación con estas normativas, nos remitimos a los criterios explicados al analizar los motivos.

Siendo que el casacionista ha probado que la resolución atacada ha incurrido en error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal, por cuanto prospera el razonamiento plasmado en el motivo expuesto, así como en las disposiciones legales señaladas como violadas, se procede a resolver el recurso según las aspiraciones del postulante.

Por tanto, se condena al señor Chen Smith como autor del delito de venta de droga ilícita tipificado en el artículo 258 del Código Penal cuya sanción oscila entre 5 a 10 años de prisión. Y de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 56 del código punitivo, se le aplica la pena base de cinco (5) años de prisión, y por haberse acogido al juicio abreviado (art. 2528-D del Código Judicial), se le disminuye un tercio, quedando la pena líquida a imponer en cuarenta (40) meses de prisión, con igual período de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 26 de marzo de 1999 emitida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, y en su defecto condena al señor ALEXANDER ANTONIO CHEN SMITH (a) "Pata E Gallo o Chino Chen" a la pena de CUARENTA (40) MESES DE PRISIÓN e INHABILITACIÓN POR IGUAL PERÍODO PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS, como responsable del delito de Venta ilícita de Drogas.

Notifíquese y Dvuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA Y MIGUEL PEÑALBA, POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de primero (1) de marzo de dos mil (2000), ésta Sala ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por el licenciado RICARDO STEVENS, a favor de los señores DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA y MIGUEL PEÑALBA, y contra la resolución calendada 28 de enero de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que revocó la resolución de 18 de septiembre de 1998, emitida por el Juzgado Segundo de Circuito, Ramo Penal de Colón, y en consecuencia ordenó continuar el proceso penal contra los imputados por la supuesta comisión del delito genérico de Falsificación de Documentos.

Una vez cumplido el término establecido en el artículo 2444 del Código Judicial, que ordena la corrección del recurso anunciado, se procede a examinarlo, con la finalidad de decidir sobre su admisibilidad.

En tal sentido, observamos que el recurrente cumple con lo dispuesto en resolución de 1° de marzo de 2000, expedida por ésta Sala, en donde se ordena la corrección del recurso en lo siguiente:

> "... debido a que en el presente recurso extraordinario, se evidencian defectos, que son en cuanto a lo estipulado en el artículo 102 del Código Judicial, a la historia concisa del caso y la trancripción de las disposiciones legales infringidas; procede ordenar la corrección del escrito en el sentido anotado." (f.74-75)

Dado lo anterior, esta Sala concluye, en admitir el recurso interpuesto por el licenciado RICARDO STEVENS, apoderado de los señores DAVID SIMONS, ROGELIO DE GRACIA y MIGUEL PEÑALBA.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado RICARDO STEVENS, y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días para que emita concepto de conformidad a lo establecido en el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ H.
Secretario Ad-hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A CARMEN ALICIA CANDELO SALCEDO, SINDICADA POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de lista establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, corresponde a la Sala decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación en el fondo interpuesto por la licenciada MARIBEL DEL R. VEGA V., apoderada judicial de CARMEN ALICIA CANDELO SALCEDO contra la sentencia de 25 de noviembre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual confirma el fallo de primera instancia en virtud del cual se condena a su representada a la pena de dos (2) años de prisión como autora de delito contra la fe pública.

Los requisitos externos sobre oportunidad y legitimación se han cumplido en este caso, por cuanto se anunció y formalizó el recurso en los plazos establecidos por la ley, por persona hábil y en proceso penal por delito que tiene pena privativa de libertad superior a dos años.

Por ello, el suscrito Magistrado Sustanciador, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por la licenciada MARIBEL DEL R. VEGA V. contra la sentencia dictada el 25 de noviembre de 1999 por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Córrasele traslado al señor Procurador General de la Nación por el término de cinco días, vencido el cual se señalará fecha para la celebración de la audiencia de casación.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario Ad hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A NANCY ARACELY SAAVEDRA G., SINDICADA POR DELITO CONTRA LA FE PUBLICA Y CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE LA MINISTRA DE SALUD. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA (31) Y UNO DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Verificados los trámites procesales correspondientes, se encuentra pendiente de decidir el recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el licenciado CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, en representación de NANCY ARACELY SAAVEDRA GONZALEZ.

Manifiesta el casacionista que la sentencia de 5 de agosto de 1998, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, confirma el fallo condenatorio emitido por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito

Judicial de Panamá de 7 de enero de 1998, en la que se condena a su representada a cincuenta y dos (52) meses de prisión y sesenta días multa y se le inhabilita en el ejercicio de funciones públicas por un término igual al de la pena de prisión impuesta como responsable de los delitos de Falsificación, Estafa y Ejercicio Ilegal de la Profesión.

La causal invocada por el recurrente es la contenida en el artículo 2434, numeral 8 del Código Judicial, que se denomina "Error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal"

Sustenta la causal en cinco motivos, entre los que se expresa, que la procesada cooperó de manera significativa en la investigación, permitiendo a las autoridades investigativas la ubicación de terceros que se encontraban en las mismas condiciones que la de ella (adquirir diplomas falsos para el ejercicio de la profesión de odontología) pudieran ser procesados y condenados. Pese a ello indica el casacionista NANCY ARACELY SAAVEDRA fue condenada a la pena de cincuenta y dos (52)meses de prisión.

Indica el recurrente como disposiciones legales infringidas los artículos 56, 66 y 69 del Código Penal, así como el artículo 2112 del Código Judicial.

Expresa que los artículos 56, 66 y 69 del Código Penal y el 2112 del Código Judicial fueron infringidos en concepto de violación directa por omisión.

Al emitir su opinión jurídica, el Procurador General de la Nación es del criterio que a la procesada debe reconocérsele el derecho a la rebaja de pena que consagra el artículo 2112 del Código Judicial, por lo que recomienda que la sentencia sea casada ya que: "... la colaboración que ha brindado la procesada ha resultado indispensable al Ministerio Público para levantar sumarias contra otras personas que han incurrido en los mismos actos delictivos, y que antes de que la procesada revelara sus nombres, no se contaba con ningún elemento para descubrir y probar la participación de estos autores en las citadas conductas delictivas."

Estando el recurso en estado de decidir por parte de la Magistrada Sustanciadora, conforme lo dispone el artículo 2449 del Código Judicial, el licenciado CARLOS CARRILLO GOMILA presentó solicitud adjunta al Recurso, que aparece en cuadernillo que se anexa al expediente de Casación, consistente en la extinción de la pena a favor de su representada, por lo que se le corrió traslado nuevamente al Señor Procurador general de la nación de la petición formulada por el casacionista para que emitiera concepto.

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

Manifiesta el casacionista que NANCY SAAVEDRA fue una de las treinta y cinco (35) personas favorecidas con un indulto presidencial, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 201 de 30 de agosto de 1999, el cual fue publicado en la Gaceta oficial No. 23,876 de 31 de agosto de 1999, por lo que solicita la declaratoria de la extinción de la pena.

OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO

Al proferir su criterio jurídico, el Señor Procurador General de la Nación recomienda, que no se decrete extinguida la pena impuesta a NANCY SAAVEDRA por las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Decreto Ejecutivo No. 201 de 30 de agosto de 1999 fue derogado en todas sus partes por el Decreto Ejecutivo No. 213 de 3 de septiembre de 1999, lo que significa que sus efectos cesaron de manera expresa produciendo consecuencias inmediatas, por lo que carece de fundamento la petición formulada por el licenciado CARRILLO GOMILA.

SEGUNDO: Que el artículo 179, numeral 12 de nuestra Carta Magna permite al

Presidente de la República con la participación del ministro respectivo la extinción de la pena sólo para los delitos políticos, "... lo que implica que no por cualquier acto delictivo se puede otorgare este perdón".

TERCERO: Concluye señalando el Señor Procurador General de la Nación, que la petición de extinción de la pena por motivo del indulto otorgado a NANCY SAAVEDRA no constituye un delito político, por lo que no procede decretar el beneficio que solicita el recurrente.

OPOSICION DEL RECURRENTE

El licenciado CARRILLO GOMILA se opone a los criterios proferidos por la representación social e indica que la Sala Segunda de lo Penal en reiterados fallos (7/12/95; 28/8/96; 7/7/97; 30/7/97 ha señalado que el perdón presidencial tiene tres modalidades: el indulto por delitos políticos, la rebaja de pena y libertad condicional por delitos comunes, por lo que no es censurable que NANCY SAAVEDRA haya sido beneficiada con la extinción de la pena.

Continua manifestando el recurrente, que en la última década el Ejecutivo ha proferido decretos ejecutivos concediendo indultos a reos políticos y comunes sin considerar la etapa procesal o situación del procesado al momento de la emisión del perdón presidencial.

Con respecto al Decreto Ejecutivo No. 213 de 3 de septiembre de 1999, que revoca el 201 de 30 de agosto de 1999, expresa el peticionario, que el mismo tuvo su vigencia y "Por principios constitucionales y la totalidad de la doctrina, si el beneficio de la extinción de la pena se dio y rigió a favor del condenado, es menester, interpretar su ultra actividad en beneficio del reo."

Apoya su opinión en los artículos 14 del Código Penal y 43 de la Constitución Política de la República de Panamá que establecen lo siguiente:

ARTICULO 14 DEL CODIGO PENAL

> "La ley penal que prive el carácter criminoso a un hecho definido como tal, la que suprima o aminore una pena y la que en cualquier forma modifique favorablemente para el reo las disposiciones penales se aplicará desde que entre en vigencia, aunque haya sentencia ejecutoriada.
>
> Para los efectos de este artículo se procederá de oficio o a petición de parte".

ARTICULO 43 DE LA CONSTITUCION POLITICA

> "Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada".

Finalmente, expresa el licenciado CARRILLO que no debe ser admitido el argumento del Ministerio Público, por lo que la Sala debe declarar extinguida la pena impuesta a NANCY ARACELY SAAVEDRA GONZALEZ.

DECISIÓN DE LA SALA

Como se ha expresado, la Sala, al momento de decidir el recurso de Casación en el Fondo presentado por el Licenciado CARRILLO, ante la solicitud formulada por el casacionista, en el sentido que a su representada se le reconozca el beneficio de la extinción de la pena por virtud del indulto con el que fuera favorecida, dada la naturaleza de la petición, pasará a examinarla primeramente.

Observa la Sala, en consecuencia, que la procesada NANCY ARACELY SAAVEDRA

GONZALEZ fue una de las beneficiadas con el perdón presidencial, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 201 de 30 de agosto de 1999 mediante el cual el Presidente de la República con fundamento en lo dispuesto en el artículo 179, numeral 12 de la Constitución Política de la República de Panamá y en asocio del Ministro de Gobierno y Justicia otorga indultos. El artículo primero del referido decreto establece que el mismo se otorga a:

> "... favor de los ciudadanos que se detallan a continuación y que resulten investigados, sindicados, procesados o condenados conforme a supuestas conductas transgresoras de la ley, por la Comisión de delitos contra el Honor, la Integridad Personal, la Fe Publica, la Personalidad Jurídica del Estado, el Patrimonio o contra la Administración Pública, la Comunidad Internacional, la Administración de Justicia o por Posesión Ilícita de Armas de Guerra, ya sea que los procesados se encuentran en su fase sumaria, plenaria o con sentencia condenatoria o en cualquier otro trámite procesal, en cualquier Juzgado, tribunal Superior de Justicia o en cualquier Tribunal, Juzgado o dependencia del Organo Judicial od el Ministerio Público, con o sin auto de enjuiciamiento y aun cuando se hubiese o no verificado Audiencia o bien que se encuentran tales causas en grado de Apelación, sanción o en cualquier trámite procesal.".

Finalmente expresa el referido Decreto, que el indulto extingue la acción penal y la pena según sea el caso (artículo 91 del Código Penal).

FERNANDO VELASQUEZ VELASQUEZ, en su obra DERECHO PENAL, Parte General indica que:

> "... el indulto también es aplicable a quienes tienen la calidad de procesados, lo cual termina confundiéndolo con la amnistía y, dependiendo de si se concede al momento de emitir la condena respectiva o una vez esta ya ha entrado en ejecución, se divide en propio e impropio. Inclusive, en pugna con el carácter concreto del indulto, suele clasificársele en general y particular, atendiendo al alcance que tenga" (pág. 669-670).

La jurisprudencia de la Sala Penal ha señalado ante casos similares que:

> "El indulto en la doctrina y en las legislaciones, forma parte del antiguo derecho de gracia otorgado a los gobernantes, similar a los votos de indulgencia y de perdón que aún mantiene el jefe del Ejecutivo en algunas latitudes. Esta institución se diferenció de la amnistía no sólo por razón del funcionario o entidad que la confiere, sino también porque ésta sólo es aplicable a los delitos políticos, mientras que el indulto afecta delitos comunes. Tanto la Constitución de 1972 como el Código Penal de 1982, a diferencia de los criterios doctrinales y del derecho Comparado, han extendido el radio de acción del indulto, al permitir que el mismo se extienda a los delitos políticos al igual que a los comunes, pero con una modalidad con relación a los últimos, al convertirlo en otorgante de la individualización administrativa de la ejecución penal." (Mgda. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, R.J. de Diciembre de 1995)

Los aspectos medulares que cuestiona el Señor Procurador General de la Nación, en cuanto a la solicitud de extinción de pena formulada por el licenciado CARLOS CARRILLO GOMILA dentro de este recurso de Casación en el Fondo consisten en que el delito por el cual fue sentenciada la procesada no tiene la calidad de delito político, razón de ser de todo indulto, aunado al hecho que el Decreto Ejecutivo que dispensó este perdón presidencial fue derogado de manera expresa por otra disposición reglamentaria, por lo que no existe tal beneficio.

Con respecto a este ultimo aspecto, señalado por el representante de la

vindicta pública, que es objetado por el licenciado CARRILLO, con apoyo de las disposiciones constitucionales, la Sala estima que el indulto es una causa de extinción de la sanción penal y es un acto soberano del Organo Ejecutivo encaminado a suspender condicionalmente, atenuar o perdonar las consecuencias jurídicas de una condena o impida la prosecución de una acción penal en contra de una determinada persona.

En consecuencia, la solicitud del casacionista, que aparece en cuadernillo adjunto debe ser resuelta teniendo como norte los principios procesales penales que rigen estos juicios y que exigen el reconocimiento de los derechos a favor de los sentenciados.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, mediante pronunciamiento de la Sala Penal, en el Recurso de Casación resuelto el 7/12/95, bajo la ponencia de la Magistrada AURA E. GUERRA DE VILLALAZ se le reconoció el derecho que le asistía al procesado en base al principio de Favorabilidad al reo, extinguiéndosele la pena. Se transcribe lo pertinente:

> "La Sala Segunda coincide con el criterio expuesto por el Señor Procurador en el sentido de que los delitos contra la libertad individual no son delitos políticos, pero el artículo 1 del decreto ejecutivo No. 469 se fundamenta en el numeral 12 del artículo 179 de la Constitución, que se refiere tanto a los indultos por delitos políticos como a las rebajas de penas por delitos comunes y con base al principio de favorabilidad al reo, cabe interpretar que ESTEBAN RAMOS, reo de delito contra la libertad individual, con sentencia condenatoria de 4 años de prisión, quien había sido detenido preventivamente, ha sido favorecido con una rebaja de la pena impuesta, modalidad ésta que integra el concepto jurídico penal de indulto y que tiene efectos extintivos de la pena"

Los principios constituyen el punto de partida para conocer e interpretar el derecho y permiten que la administración de justicia sea expedita y racional. En el Derecho Penal los principios constituyen el marco de referencia dentro del cual es obligatorio agitarse, al interpretar el contenido y alcance de un precepto jurídico.

Estás máximas en el campo penal garantizan el fiel cumplimiento por parte del juzgador de los derechos y beneficios de las partes y en especial de los procesados. Uno de esos principios, como bien lo anotó el fallo de jurisprudencia anotado , lo constituye el de favorabilidad.

El principio de favorabilidad establece que en las materias que guardan relación con el proceso penal y con los sujetos vinculados a estos procesos se aplicará preferentemente la ley favorable, aunque sea posterior, constituyendo una excepción al de cosa juzgada.

Este principio indica la obligación del juez a aplicar "... la ley penal más benigna de entre todas las vigentes entre el tiempo del hecho y del juicio, a condición, claro está, de que todo el hecho se haya perpetrado bajo una u otra ley, pues si se perpetró bajo ambas sólo cabe racionalmente preferir la última bien sea porque resulta ser la mas favorable. (FERNÁNDEZ C., JUAN Derecho Penal Fundamental, Tomo II, editorial Temis Colombia, 1989 Pág.105).

Ahora bien, el principio de favorabilidad se relaciona de manera directa con los principios de Retroactividad y Ultra actividad de la norma penal, ya que si la nueva ley es favorable al reo debe aplicarse retroactivamente, pero si la norma positiva anterior favorece al procesado ésta es la que debe ser aplicada.

En el caso que nos ocupa y dadas las particularidades del Decreto Ejecutivo No. 201 de agosto de 1999 que fue derogado por el Decreto Ejecutivo No. 213 de 3 de septiembre de 1999, considera la Sala que debe primar el principio de Ultra actividad de la ley, en la que por la favorabilidad, de manera excepcional la

norma derogada prolonga sus efectos a favor del sentenciado.

Así lo ha reconocido el Pleno de este máximo Tribunal en sentencia de reciente data, de fecha 20 de diciembre de 1999, en la acción de hábeas corpus promovida a favor de VICENTE GAUDIANO CHAMBONET, igualmente beneficiado con el indulto concedido a través del decreto No. 201, en donde si bien se hizo referencia a que dicho Decreto había sido impugnado por vía de una demanda de inconstitucionalidad, destacó la Corte que hasta tanto se resuelva dicha controversia, que hasta la fecha de hoy no ha sido resuelta, conforme a certificación extendida por la Secretaría General que aparece en autos, deben reconocerse los efectos del indulto, porque así lo impone precisamente el principio de favor libertatis bajo examen.

En la mencionada sentencia el Pleno de esta Corporación señaló, entre otras consideraciones, lo siguiente:

> Con el objeto de allegar al cuaderno suficientes elementos de juicio sobre la presente causa constitucional subjetiva, se solicitó a la Secretaría General de la Corte que informara acerca de la existencia de algún proceso constitucional objetivo pendiente contra el Decreto Ejecutivo que indulta al beneficiario de este hábeas corpus. Sobre el particular, la Secretaría General comunicó que "se han presentado una demanda y dos advertencias de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo No. 201 de 30 de agosto de 1999, bajo las entradas No. 561-99, 562-99 y 563-99 las cuales se encuentran en trámite ..." (Fs. 31).
>
> A juicio de este Pleno, mientras se ponga término a diferendo constitucional debe prevalecer el reconocimiento del principio favor libertatis, en el sentido de mantener el beneficio reconocido a GAUDIANO por el Decreto Ejecutivo No. 201 de 30 de agosto de 1999, que deja sin efectos la medida cautelar que le fuera impuesta".

El criterio adoptado por el Pleno de esta Corporación en el caso transcrito en el punto anterior, que reconoce la eficacia del indulto en cuestión para extinguir la acción penal, también procede aplicarla al proceso sub júdice, habida cuenta que se trata de una persona igualmente beneficiada por el Decreto 201 de la referencia y que, además, los delitos imputados son los de ejercicio ilegal de una profesión, falsedad de documento y delito contra el patrimonio, todos comprendidos en la Títulos IV y VIII del Libro Segundo del Código Penal, a los que se refiere la gracia presidencial en el indulto concedido.

El principio de Ultra Actividad constituye una proyección de la norma derogada que el juez deberá aplicar, aun después de terminada su vigencia, a los hechos cubiertos con su vigencia.

La doctrina ha señalado de manera acertada que:

> "Una vez dictada la ley favorable el reo adquiere algo así como un derecho constitucional a ser juzgador conforme a ella, aunque desaparezca del orden jurídico poco después ... no se vislumbra razón valedera alguna para que el juez no pueda aplicar una disposición declarada inexequible." (FERNÁNDEZ C. JUAN. Derecho Penal Fundamental, Tomo I, editorial Temis. Colombia, 1989, pág. 131)

Los principios anotados se enlazan diáfanamente con el favor libertatis, en los que la libertad del procesado se restringe de manera excepcional por la gravedad del delito cometido, por la personalidad del procesado y por su reiterada transgresión a la ley penal, presupuestos entre los que no se encuentra NANCY ARACELYS SAAVEDRA, ya que se ha acreditado en el proceso que la misma es delincuente primaria, no es de peligrosidad y ha colaborado de manera decisiva en la investigación, permitiendo el procesamiento de terceros que se encontraban

en iguales circunstancias de transgresión a la norma pernal (delitos CONTRA LA FE PUBLICA) con lo cual conviene el Señor Procurador General de la Nación.

Con relación al principio favor libertatis, bajo la ponencia del magistrado HUMBERTO A. COLLADO T., nuestra jurisprudencia ha manifestado que el mismo:

> "... sienta las bases para que el tribunal propenda a buscar una interpretación de la ley que, inspirada en el principio del favor libertatis, favorezca la situación jurídica del sujeto pasivo de la relación jurídico procesal. En efecto, de este principio se deduce que no solo en los "supuestos dudosos habrá que optar por la interpretación que mejor proteja los derechos fundamentales, sino que implica concebir el proceso hermenéutico como una labor tendiente a maximizar y optimizar la fuerza expansiva y la eficacia de los derechos humanos fundamentales en su conjunto" (Jurisprudencia de 30/12/1997 proferida por la Sala de lo Penal en ocasión de un recurso de casación. Registro Judicial de diciembre de 1997, pág.169.)

Ahora bien, en el contexto planteado importa destacar que la petición de extinción de la acción penal formulada por el licdo. CARRILLO GOMILA a favor de NANCY SAAVEDRA resulta impropia, porque la situación jurídica de la procesada no registra la vigencia de una pena derivada de sentencia ejecutoriada.

Antes bien, en el actual estado del proceso, la causa transita por la última fase del trámite relativo al recurso de casación penal propuesto a favor de la imputada, lo que significa que, en el caso sub júdice, está vigente la acción penal pero como ya se dejó expresado ut supra conforme lo establece el artículo 91 del Código Penal y el 1682 del Código Judicial el indulto extingue la acción penal y la pena.

Siendo ello así no le queda a la Sala otra opción que reconocerle a la procesada NANCY SAAVEDRA el derecho otorgado en lo que respecta a la extinción de la acción penal contenido en el Decreto Ejecutivo No. 201 de 30 de agosto de 1999, por las consideraciones arriba expuestas.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EXTINGUIDA la acción penal seguida contra NANCY ARACELYS SAAVEDRA GONZÁLEZ por los delitos de falsificación, estafa y ejercicio ilegal de la profesión.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario Ad-hoc

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA

SUMARIAS SEGUIDAS A ELITZA CEDEÑO Y OTROS POR DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PÚBLICA, LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL ESTADO Y USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Pleno de esta corporación, en decisión de 21 de enero del presente año, dentro de la denuncia presentada por los Licenciados Guillermo Morales, María Carrillo Brux y Miguel Antonio Bernal contra la Licenciada ELITZA CEDEÑO ocupa en la actualidad el cargo de Magistrada del Primer Tribunal Superior, declinó ante esa Sala, el conocimiento de la presente denuncia en lo que respecta a la Licenciada Cedeño.

En cumplimiento a lo resuelto y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 95 del Código Judicial, se procede a conocer de la denuncia formulada y para tal efecto se adelantan las siguientes consideraciones.

En los hechos que fundamentan la denuncia se expresa lo siguiente:

> "PRIMERO: Los señores ELITZA A. CEDEÑO, MARIBLANCA STAFF WILSON Y OSCAR CEVILLE promovieron en su condición de Magistrados de la Sala Quinta una demanda de amparo contra la Asamblea legislativa por la aprobación en segundo debate del Proyecto de ley No. 3 de 13 de Septiembre de 1999 por la cual se deroga la ley 3 de 23 de julio de 1999 y se establece la vigencia de varios artículos del Código Judicial y de la ley 23 de 1986 y se toman estas (sic.) medidas.
>
> SEGUNDO: La citada demanda fue sustanciada bajo la ponencia del Magistrado ROBERTO WILL GUERRERO, y concluyó con la sentencia de 24 de octubre de 1999 que fue firmada, además de por (sic.) el MAGISTRADO Sustanciador, por los hasta entonces Magistrados RICARDO ALEMAN, JOSE DE LA CRUZ BERNAL Y NELSON ROJAS AVILA como Secretario de la EX SALA QUINTA.
>
> TERCERO: La resolución sentencia de 24 de octubre de 1999 dispuso conceder la Acción de Amparo impetrado por los hasta entonces Magistrados ELITZA CEDEÑO, MARIBLANCA STAFF WILSON y OSCAR CEVILLE contra la Asamblea Legislativa de aprobar en Segundo debate el Proyecto de Ley No. 3 Por el cual se Deroga la Ley 32 de 23 de julio de 1999, se restablece la vigencia de varios artículos del Código Judicial y de la Ley 23 de 1986 y se toman otras medidas y ORDENO suspender la prosecución de los actos de formación de la Ley concernientes al referido proyecto.
>
> CUARTO: A pesar de la existencia jurídica de la ley No. 49 de 24 de octubre de 1999, los denunciados continúan en sus puestos en la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, la cual se encuentra derogada por una ley formal de la República siendo que en consecuencia, ejercen y ostentan cargos públicos legalmente inexistentes."

Sostienen los denunciantes que los hechos previamente mencionados constituyen hechos ilícitos descritos por la Ley y en ese sentido, se citan, como disposiciones penales infringidas, las siguientes:

> "A. Delito contra las libertades políticas contemplado en el capítulo 1 del Título II del Código Penal, artículo 147 del Código Penal.
>
> Según esta norma "quien impida o paralice total o parcialmente el ejercicio de cualesquiera de los derechos políticos será sancionado con prisión de 6 a 20 meses y de 15 a 100 días -multa, siempre que el hecho no esté previsto en alguna otra disposición especial de este Código. Si el autor fuere un servidor público y hubiere cometido el delito con abuso de sus funciones, la sanción será de 8 a 40 meses de prisión."

Tal cual se expuso en los hechos de la denuncia los señores ELITZA CEDEÑO, MARIBLANCA STAFF WILSON Y OSCAR CEVILLE promovieron una demanda de amparo de garantías constitucionales en su condición de Magistrados de la Sala Quinta con

el propósito de evitar la aprobación de la ley que deroga a la Sala en mención. Y en ese actuar obtuvieron la sustanciación de la demanda de amparo de garantías constitucionales que culmina con la sentencia de 24 de octubre de 1999 firmada por los Magistrados suplentes ROBERTO WILL GUERRERO, RICARDO ALEMAN y JOSE DE LA CRUZ BERNAL, como NELSON ROJAS AVILA actuando como secretario de dicha Sala Quinta, en la cual se ordenó la renovación del acta de la Asamblea Legislativa de aprobar en segundo debate el proyecto de Ley No. 3 por el cual se deroga la ley 32 de 23 de julio de 1999 y ordenó suspender la prosecución de los actos de formación de la ley concernientes al referido proyecto.

Por lo tanto los demandantes como los que firmaron la resolución de 24 de octubre de 1999 de la hasta entonces Sala Quinta de Instituciones de garantía de la Corte Suprema de Justicia incurrieron en el delito descrito en el artículo 147 del Código Penal ya que el proceso de formación de las leyes en la República de Panamá. por parte de la Asamblea Legislativa, es un derecho político del Estado Panameño que consagra el artículo 153 de la Constitución Nacional.

Tal derecho no puede ser disminuido, menoscabo (sic.), derogado o de cualquier forma alterado o impedido por el Organo Judicial ya que en nuestro régimen constitucional rige el principio de separación de poderes de los Organos del Estado que consagra el articulo 2 de nuestra Constitución Política, por lo que resulta claro que tanto los demandantes como los que firmaron la resolución se intromitieron (sic.) en la formación de una Ley de la República con abuso de sus funciones como miembros de la propia Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia las normas penales contenidas en el Capítulo II delitos contra la Personalidad Interna del Estado, del título IX (de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado) del Código Penal.

B. VIOLACION DE LAS NORMAS PENALES CONTENIDAS EN EL CAPITULO SEGUNDO, DELITOS CONTRA LA PERSONALIDAD INTERNA DEL ESTADO, DEL TITULO IX (de los delitos contra la personalidad jurídica del Estado) del Código Penal.

De acuerdo al artículo 302 del Código las sanciones del artículo 301 del mismo cuerpo legal (15 a 20 años de prisión) "se aplicarán a los que impidan la formación, funcionamiento o renovación de los Organos del Estado en los términos y formas legales".

Los denunciados incurrieron en el delito indicado ya que con su actuación intentaron impedir el funcionamiento del Organo Legislativo en la formación de las leyes y tal es así, que incluso, la propia sentencia entra a calificar el proyecto de ley tildándole de "un yerro sin parangón en nuestra vida legislativa republicana". Sin embargo, y contradictoriamente, la propia sentencia reconoce que no puede adentrarse "a la materia de constitucionalidad o no de las normas del proyecto, una vez sean ley de la república ... ".

Obviamente, la acción de los denunciados precisamente procura evitar que el proyecto de ley en discusión en segundo debate por el pleno de la Asamblea Legislativa, se convierta en ley de la República, con lo cual de manera directa incurrieron en el delito de impedir el funcionamiento del Organo Legislativo.

La misma situación jurídica la plantea el artículo 303 del Código Penal al señalar penas de 1 a 4 años y 50 a 200 días multa para quienes impidan el cumplimiento de alguna norma legal o impidan el funcionamiento del régimen constitucional vigente y en este acto incurrieron los denunciados al pretender con abuso de sus funciones y con interés en mantener la vigencia de la Sala Quinta, que el Organo Legislativo cumpliera con sus obligaciones CONSTITUCIONALES Y LEGALES de dictar leyes (artículo 153 de la Carta Magna).

C. USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS (capítulo V) título X (DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA)

El artículo 343 del Código Penal expresa que "El que ejerza funciones públicas sin autorización legal o el servidor público que continúe ejerciéndolas

después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo o después de haber recibido del organo competente comunicación oficial que ordenó la cesantía o suspensión, será sancionado con prisión de 6 meses a un año.

Mediante la Ley No. 49 de 24 de octubre de 1999 publicada en la Gaceta Oficial No. 23914 de 24 de octubre de 1999 se deroga la Ley 32 de 1999 que creó la Sala Quinta de instituciones de garantía razón por la cual, la sentencia de 24 de octubre de 1999 es ilegal y constituye un claro acto de usurpación de funciones públicas.

Además es un hecho público, conocido a través de los medios de comunicación social, que los denunciados aún se mantienen en las instalaciones de la derogada Sala Quinta en abierto desconocimiento de la Ley No. 49 del 24 de octubre de 1999 que derogó la misma. (Gaceta Oficial No. 23914 de 24 de octubre de 1999).

Solicitamos al Honorable señor Procurador que en atención a que los denunciados por efecto de lo dispuesto en la Ley No. 49 del 24 de octubre de 1999, ya no ostenta funciones públicas, ni gozan de privilegio procesal alguno, se proceda a iniciar la investigación sumarial respectiva e imponer las sanciones establecidas en el Código Penal, siendo procedente la inmediata detención de los denunciados ... (fojas 1-4).

Se procede a confrontar la conducta denunciada de la ex magistrada Elitza Cedeño de la extinta Sala Quinta, con lo dispuesto por las normas penales señaladas como violadas, a fin de verificar si los respectivos cargos prosperan.

El primer delito que se expresa en la denuncia es contra las libertades políticas, el cual se encuentra tipificado en el artículo 147 del Código Penal.

Lo que esta norma protege es el normal ejercicio de los derechos políticos y su infracción se materializa cuando mediante conductas dolosas se impide el libre ejercicio de estos derechos. El Título IV de nuestra Constitución establece como "DERECHOS POLITICOS" el de la ciudadanía y el del sufragio.

El cargo que se formula en relación a la violación de esta norma no prospera, ya que el hecho de que los ex magistrados de la Sala Quinta promovieran una demanda de amparo, según se alega para evitar la aprobación de la ley que derogó dicha Sala no constituye una transgresión a un derecho político. En este caso el hecho denunciado no constituye un atentado contra la ciudadanía ni implica que a través del mismo se pretendiese impedir por medio de amenazas, violencia o engaño el derecho de elegir y el derecho de ser elegido.

En este orden de ideas, el Procurador General de la Nación estimó:

> "Al sostener los denunciantes que las personas contra las cuales dirigen sus pretensiones, incurrieron en el delito tipificado en el artículo 147 del Código Penal, por considerar que el proceso de formación de las leyes por parte de la Asamblea Legislativa, es un derecho político del Estado panameño, incurren en un yerro, al obviar el hecho fundamental de que los derechos de elegir y ser elegidos, cuya tutela legal corresponde al citado artículo 147 del Código Penal, sólo lo pueden ejercer las personas naturales, es decir, los ciudadanos panameños que, por Constitución y por ley, tengan derecho a ello.
>
> De allí que quede sin piso jurídico el cargo anterior, amén de que no hay nada que demuestre que las personas denunciadas hayan atentado contra los derechos políticos de los denunciantes o de otras personas dentro del territorio nacional." (fs. 39)

Coincidiendo con la opinión del Ministerio Público, a juicio del Pleno el cargo carece de sustento, por lo que resulta injustificado.

El siguiente cargo consiste en que los denunciados con su acción incurrieron en "el delito de impedir el funcionamiento del Organo Legislativo", debido a que procuraban evitar que el proyecto de ley que en segundo debate discutía la Asamblea Legislativa se convirtiera en ley de la República. Estima esta Superioridad que tal cargo no se enmarca en el tipo penal que describe el artículo 302, en concordancia con el 301 del Código Penal, como afirman los denunciantes.

Vemos que el artículo 302 del Código Penal aplica las sanciones que establece el 301 para los que impidan la formación, funcionamiento o renovación de los Organos del Estado "en los términos y formas legales o no cumplan con el deber de poner la fuerza pública a disposición del gobierno constitucional".

A juicio de la Corte, la interposición de una acción de amparo de garantías constitucionales por parte de los ex magistrados de la Sala Quinta, contra la denominada orden de hacer representada en la aprobación en segundo debate del Proyecto de Ley No. 3 de 13 de septiembre de 1999 no constituye delito. El hecho de utilizar uno de los remedios que nuestra Carta Fundamental ha puesto a disposición de la ciudadanía, incluyendo a los servidores públicos como los de este caso particular, cuando se estimare que se ha atentado contra derechos y garantías fundamentales (ya sea para impedir una destitución o para oponerse a la privación del ejercicio de las correspondientes funciones representadas en la ejecución de la supuesta orden demandada), bajo ningún punto de vista puede calificarse como un acto que infringe la ley penal y menos es dable derivar del mismo que se tenía como finalidad impedir el funcionamiento de un Organo del Estado.

Sobre este particular el Jefe del Ministerio Público, al referirse a la situación de los ex magistrados de la Sala Quinta al ver que sus nombramientos quedaban sin efecto con la derogatoria de la Ley 32 de 1999, señaló:

> "... optaron por hacer uso de un mecanismo protector constitucional, como lo es el amparo de garantías, en procura de salvaguardar sus derechos que creían vulnerados. El sentimiento instintivo de conservación y auto defensa, innato en el ser humano, lo impele a buscar protección legal cuando ve o presiente, con razón o sin ella, que sus derechos y garantías han sido violados por una autoridad. Ello es comprensible por que en la praxis representa la vigencia activa de los instrumentos jurídicos que el Estado pone en manos de los ciudadanos para precaverse y defenderse, en un momento determinado de la violencia que pueda generar sus propias instituciones ...
>
> Esa acción huérfana de dolo, no puede, bajo ningún concepto, interpretarse como una acción delictiva que buscara socavar los cimientos del Estado de derecho al impedir el normal funcionamiento de la Asamblea Legislativa, ni mucho menos dar al traste con el principio rector de la gobernabilidad, pivote fundamental sobre el cual debe descansar la vida institucional de nuestro país." (Ps.41 y 42)

Finalmente, los denunciantes alegan la violación del artículo 343 del Código Penal, que consagra el delito de usurpación de funciones.

El hecho expresado para sustentar la vulneración de esta norma no se produjo, ya que después de derogada la Ley 32 de 1999, mediante la Ley 49 de 24 de octubre de 1999, los hasta entonces magistrados de la extinta Sala Quinta dejaron de ejercer funciones y abandonaron sus respectivos cargos, en cumplimiento de la ley que acababa de ser aprobada y publicada en la Gaceta Oficial No. 23,914 del mismo día.

Por tanto este cargo, al igual que los anteriores, no está justificado y carece de fundamento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO E IMPERSONAL en las presentes sumarias.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A EMILIO NAVARRO ROMERO, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE ELVIN JOEL ESPINOSA SAMUDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DEL DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 16 de febrero del año en curso se recibió en la Secretaría de la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, el recurso de revisión interpuesto por la Licda. ANA CRISTINA DE LEÓN, abogada principal, y FABÍAN O. CUEVAS, abogado sustituto, a favor de EMILIO NAVARRO ROMERO, contra la sentencia de 22 de mayo de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial que confirma la sentencia de 20 de febrero de 1996, emitida por el Juzgado Cuarto del Circuito de Chiriquí, Ramo Penal, en donde se condenó al procesado a la pena de 6 años de prisión y 2 años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por el delito de Violación Carnal Agravado.

Cumplidos los trámites del reparto, se adjudicó el negocio a este Despacho Sustanciador, por lo que entramos al análisis del contenido del libelo para determinar si cumple con los requisitos formales exigidos en el artículo 2459 del Código Judicial.

Primeramente, se advierte que el recurso de revisión fue interpuesto mediante memorial, dirigido a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, cuando debió ser dirigido al Magistrado Presidente de ésta Sala conforme a lo establecido en el artículo 102 del Código Judicial. La recurrente indica cuál es la sentencia cuya revisión se solicita, el tipo de delito y la pena impuesta.

En cuanto a las causales que sustentan el recurso, la Licda. DE LEÓN invoca los numerales 3 y 5 del artículo 2458 del Código Judicial, las cuales se apoyan en catorce motivos que sirven de fundamento de hecho, en los que resume los aspectos relevantes del proceso.

La causal contenida en el precitado numeral 3°, preceptúa que habrá lugar al recurso de revisión "cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la condena.

Sobre esta causal de revisión -"propter falsa"-, esta Sala de manera reiterada ha señalado que "para que prospere es indispensable acompañar copia de la resolución en la que se acredita la falsedad probatoria, sea esta documental, testimonial o pericial esto es lo que significa la frase "se demuestre que es falso..." utilizada por el Código Judicial al enunciar esta causal." (Autos de

Abril 30 de 1997, Marzo 6 y Diciembre 8 de 1998).

En los argumentos esgrimidos por la recurrente se indica que, en cuanto a la comprobación del hecho punible, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial indicó que la vinculación subjetiva del procesado se infiere de las declaraciones de los señores DENIA NILSA GONZÁLEZ CABALLERO, GLORIA CASTILLO ESPINOZA, YOLANDA ESTHER CASTILLO ONÉSIMO ORTEGA y el padre del ofendido IZAEL ESPINOZA MOJICA, de los cuales emergen indicios de responsabilidad. (F.4)

No obstante, la recurrente discrepa de este planteamiento pues señala que los declarantes al ser interrogados respecto a si tenían conocimiento de algún tipo de relación sexual entre EMILIO NAVARRO ROMERO y ELVIN JOEL ESPINOZA, estos contestaron que no, que se habían enterado del mismo en la reunión celebrada en la escuela con el maestro para conversar con él sobre los comentarios que se venían dando. Señala la revisionista que de ello "se deduce que tales testimonios no cumplen con los presupuestos que en nuestra legislación corresponde a la prueba indiciaria, adecuándose a lo que se conoce como testigos de referencia." (F.4)

Tal como se advierte, en el fundamento de hecho se alude a los testigos de referencia, lo que no es congruente con la causal invocada toda vez que la excerta legal hace referencia a la falsedad de testimonio.

Aunado a lo anterior, las pruebas documentales aportadas por la revisionista, esto es, las Declaraciones Notariales Juradas rendidas por IZAEL ESPINOZA MOJÍCA y el menor ELVIN JOEL ESPINOZA SAMUDIO (Fs.12 y 13 respectivamente), no constituye prueba de la falsedad alegada.

Respecto a la causal contenida en el numeral 5°, la norma indica que habrá lugar al recurso de revisión "cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa".

Esa causal de revisión permite que errores judiciales cometidos con personas que no consumaron el hecho punible sean absueltas o acreedoras de una sanción penal menos severa, siempre que se aporten hechos que no existían dentro del proceso penal cuando se profirió la sentencia.

Ahora bien, la Sala advierte que los argumentos esgrimidos por la revisionista versan sobre pruebas testimoniales y periciales que constan en el expediente, los cuales fueron objeto de análisis por el Tribunal de instancia.

En cuanto a las declaraciones vertidas ante notario público, se tiene que IZAEL ESPINOZA MOJÍCA indicó que "no puede decir ciertamente que fue lo que pasó, se ha escuchado de la gente del pueblo de Boquerón que un taxista fue el que le hizo daño a mi hijo ELVIN JOEL ESPINOZA, el (sic) es toda la verdad ..."(F.12)

Por su parte, El menor ELVIN JOEL ESPINOZA SAMUDIO, señaló que el maestro EMILIO NAVARRO:

> "es inocente, él no me hizo nada a mí, yo no se lo he dicho a mi papá, esa es la verdad, la Señora Gloria y otras más, no me acuerdo su nombre me engañaron y me enredaron en contra del maestro Emilio, eso fue todo lo que pasó ..." (F.13)

Estas declaraciones no revisten la calidad de nuevos hechos o elementos probatorios admitidos por nuestra jurisprudencia, toda vez que en el contenido de aquéllas no se observa un elemento que no haya sido incorporado al proceso, pues los testigos ya habían dado su versión de los hechos en el transcurso del proceso. Por otra parte, no se ha comprobado que el hecho punible no existió, que el condenado no lo cometió o que el hecho cometido encuadra en una norma más favorable.

La Corte debe manifestar al revisionista que tal como ha quedado sentado en la jurisprudencia de esta Sala, este medio de impugnación es "un recurso extraordinario que pretende la revisión de una sentencia ejecutoriada que hace tránsito a cosa juzgada y que por esa excepcional finalidad, debe ajustarse a todas las exigencias normativas que lo regulan. No estamos ante una tercera instancia, sino ante el trámite de un medio impugnativo que se aparta de los recursos ordinarios y que establece con claridad los requisitos formales y los de fondo que deben acatarse para su viabilidad" (Noviembre 19 de 1999).

Siendo que los hechos fundamentales y las pruebas aportadas por el recurrente no comprueban lo previsto en los numerales 3 y 5 del artículo 2458 del Código Judicial, la Corte es del criterio de que la solicitud debe ser negada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando Justicia en nombre del República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por la defensa técnica de EMILIO NAVARRO ROMERO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SILVESTRE FUENTES VALDES, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingreso a la Corte Suprema Sala Segunda de lo Penal, la solicitud de revisión que de su proceso hace SILVESTRE FUENTES VALDES, quien se encuentra recluido en el Centro Penal de Coiba y quien fuera condenado por el delito de homicidio y robo.

Conforme a lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial, esta Sala corrió traslado del negocio a la Licda. MICAELA MORALES MIRANDA, Defensora de Oficio, a fin de que formalizara adecuadamente, de existir causal para ello, la revisión demandada por el sindicado. Para cumplir con este fin el Licdo. FEDERICO ISMAEL PONCE, suplente de la Licda. MORALES MIRANDA, presentó escrito formal visible a fs. 9-12 en donde hace un recuento de los hechos y piezas procesales que llevaron a la condena del señor SILVESTRE FUENTES VALDES, siendo lo medular para el presente recurso de revisión lo siguiente:

> "SILVESTRE FUENTES en su escrito del 20 de septiembre de 1999, alega que fue condenado habiendo pruebas a su favor y que supuestamente existe un autor confeso del hecho. Dice que JOSÉ ANTONIO GUERRA confesó ser el autor del crimen el 1 de febrero de 1999 en declaración en la oficina de Corrección de David, pero no existe constancia de dicho hecho.
>
> Señala igualmente que no hay evidencia, que no hay huella, ni vista ocular, pero en el expediente está la diligencia de Reconstrucción que se práctico en la misma audiencia. Alega que fue amenazado EL Y SU FAMILIA por ELIECER CABALLERO MIRANDA, pero tampoco hay evidencia de esto.

De conformidad con los numerales establecidos en el artículo 2458 del Libro III° del Código Judicial sólo el 3° y el 6° pudieran aplicarse al presente proceso, pero no se detecta de las constancias de autos que existe falso testimonio por parte de los que involucran a SILVESTRE FUENTES, ni que existiere violencia o cohecho en la obtención de evidencias.

Creemos que sólo en caso de que se aporte la identidad y declaración de confesión de JOSÉ ANTONIO GUERRA podría revisarse el proceso pues de todas las constancias procesales se desprende que el juicio seguido a SILVESTRE FUENTES y la condena en su contra hallan respaldo en las pruebas obtenidas y practicadas que lo involucran plenamente y que convenció al jurado de su culpabilidad, consideramos, entonces, que no existen méritos para la REVISIÓN".

Ante esta manifestación, concluye esta Colegiatura señalando que no es posible ordenar la revisión del proceso, toda vez que no se constituye ninguna de las causales que, conforme al artículo 2458 del Código Judicial, dan lugar a la interposición de este recurso extraordinario, dado que la circunstancias de que habla el defensor designado y que a su juicio darían lugar para acceder a lo solicitado, no se encuentran acreditadas en forma tal que permita la revisión demandada.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión formulada por SILVESTRE FUENTES VALDES y por consiguiente ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

REVISIÓN SOLICITADA POR MARVIN M. SALAZAR HIND, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VENTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licdo. GONZALO MONCADA LUNA, en representación de MARVIN MAURO SALAZAR HINDS, interpuso ante la Sala Penal de la Corte Suprema recurso de revisión contra la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, fechada el 9 de octubre de 1998, en la que se impuso a su representado la pena de veinte (20) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, por la comisión del delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de DAVID MARTIN RODRÍGUEZ.

Como causales alegadas se invocan las correspondientes a los numerales 3 y 5 del artículo 2458 del Código Judicial y al respecto se indica que esas dos causales "no son excluyentes entre si, su concordancia se aplica a la presente demanda toda vez que existe un hecho nuevo que guarda estricta relación con una prueba ya existente viciada por su error y que fue valorada en una dimensión distinta a la realidad, y tomada en consideración para proceder a la condena de nuestro representado".

Las causales que cita el revisionista como fundamento de derecho para su petición son del tenor siguiente:

" ARTÍCULO 2458: Habrá lugar al recurso de revisión contra las sentencias ejecutoriadas, cuales quiera que sea el Tribunal que las hubiera dictado, en los casos siguientes:

...
3. Cuando aluno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere bases suficientes para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la condena.
4...
5. Cuando después de la condena se descubran nuevos hechos que, por si mismos o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa por la aplicación de una disposición penal menos severa.

Como fundamento de hecho de la pretensión, se manifiesta esencialmente que a MARVIN MAURO SALAZAR HINDS, un jurado de conciencia lo declaró culpable de la muerte de DAVID RODRIGUEZ ESQUINA y tanto el "Jurado de conciencia como los Magistrados del Segundo Tribunal de Justicia tomaron en consideración las pruebas acopiadas en el proceso para emitir sus respectivas resoluciones, resultando vital y decisivo un informe pericial visible de fojas 346 a 349 suscrito por los detectives ROLANDO SANCHEZ y el inspector MARTIN NUÑEZ, ambos funcionarios de la División de Investigación Criminal de la Policía Técnica Judicial, quienes en esta ocasión hicieron las veces de peritos en dactiloscopia".

Se alega en esta demanda de revisión "que la única prueba directa y vinculante que distingue MARVIN MAURO SALAZAR HINDS de los otros imputados es precisamente el peritaje mencionado en el punto anterior, sin embargo existe una gran presunción de que dicho peritaje o dicha prueba se encontraba viciada por un error que presumimos se haya cometido sin mala intención" dada "la existencia de una posible equivocación en la parte medular de dicho informe pericial, toda vez que luego de investigaciones adelantadas revelan de manera extraoficial que la comparación de los fragmentos de huellas dactilares levantadas fueron cotejadas con pliegos dactilares y palmares correspondientes a un ciudadano reseñado en los archivos de la Sección de identificación criminal de la Policía Técnica Judicial que responde a un nombre completamente distinto al de nuestro representado MARVIN MAURO SALAZAR HINDS, es decir que con el número de identificación A-65663 aparece reseñado una persona distinta a MARVIN MAURO SALAZAR HINDS".

La afirmación que hace la parte revisionista no encuentra respaldo procesal y obedece a manifestaciones subjetivas que, inclusive en sus apreciaciones se habla de "la posibilidad de que dicho peritaje o dicha prueba se encuentre viciada, por una posible equivocación". No se acompaña con la petición ninguna prueba que evidencie la existencia de lo que se exprese y no es la sola manifestación del revisionista que ni siquiera es categórica la que puede dar por acreditada la existencia del nuevo hecho que se demanda.

Por otra parte, cuando se alega la falsedad de algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la condena, en pronunciamientos reiterados de esta Sala se ha sostenido que, en esos casos, resulta indispensable que previamente se haya demostrado, a través de la decisión jurisdiccional correspondiente, la falsedad del medio probatorio que dio lugar a la expedición del fallo cuya revisión se solicita, situación que no se advierte en la presente solicitud.

El recurso de revisión es un medio de impugnación de carácter extraordinario y la ley establece las formalidades legales para interponerlo. Así, el artículo 2459 del Código Judicial señala que se debe interponer ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante memorial que debe indicar la

sentencia cuya revisión se demanda, el Tribunal que la hubiere expedido, el delito que hubiese dado motivo a ella, la clase de sanción que se hubiera impuesto, los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyare la solicitud y además, aportar las pruebas de los hechos fundamentales.

De otro modo, cabe señalar que HINDS fue juzgado por un Tribunal de Jurados que, como preceptúa el artículo 2354 del Código Judicial, sus integrantes "deben decidir acerca de los cargos contra el imputado y de la razones de la defensa según su conciencia y con la imparcialidad y firmeza de todo hombre honesto y libre" y su decisión de inocencia o culpabilidad debe tener como "fundamento único la convicción interna que se hayan formado de la responsabilidad del acusado que ante ellos comparecen. Conforme al juramento que prestan, no les es permitido revelar las opiniones y votos emitidos en la decisión que tomen, por lo que resulta muy subjetiva la afirmación que se hace en el sentido de que, para que el Jurado emitiera su decisión, resultó vital y decisivo el informe pericial visible a fs. 346-349.

Finalmente no se da cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 2458 del Código Judicial, puesto que no se ha acreditado que la resolución judicial censurada se encuentre ejecutoriada, pues como puede observarse a fs. 15 vuelta, esa circunstancia no se deja establecida con la copia de la sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Superior y sí se aprecia que el pronunciamiento condenatorio fue apelado por el propio imputado, sin que se haya establecido cuál fue el resultado de esa impugnación.

De todo lo anterior se concluye que el recurso presentado no cumple con las condiciones y requisitos restrictivos señalados en nuestra ley procesal, por lo que no se puede acceder a la pretensión del postulante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el Licenciado Gonzalo Moncada Luna contra la sentencia de 9 de octubre de 1998, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JAVIER ANTONIO RAMOS SMITH, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor JAVIER ANTONIO RAMOS SMITH, mediante manuscrito remitido desde El Centro Penitenciario La Joya, y recibido el 30 de agosto de 1999 en la Secretaria de la Sala Penal de esta Corporación de Justicia, solicitó revisión de su proceso penal, toda vez que fue condenado por el Segundo Tribunal Superior, a la pena de 11 años y 3 meses de prisión por Delito de Homicidio.

Cumplidos los trámites de reparto, se dispuso mediante proveído de diez (10) de septiembre de 1999, correr traslado del negocio al licenciado ERNESTO MUÑOZ GAMBOA, Defensor de Oficio, para que asistiera al recurrente en la correcta formalización del recurso interpuesto, si hubiera causa legal que lo fundamente (f. 6).

Al respecto, el Defensor de Oficio, mediante informe visible a foja 7, señaló lo siguiente:

> "Luego del estudio minucioso del expediente, somos del criterio que las causales enunciadas por el solicitante, como fundamento del Recurso no se configuran dentro de los parámetros que establece el artículo 2458 del Código Judicial. El mismo alega que debió ser juzgado conforme al artículo 138 del Código Penal y no conforme al artículo 132 de la misma excerta legal.".

Del informe transcrito, se observa, que en la solicitud de revisión formulada por el señor RAMOS SMITH, no hay causal para formalizar el presente recurso. Esta Sala Penal, en reiteradas ocasiones, ha señalado, que la revisión, debe ajustarse a cualesquiera de las causales estrictamente establecidas en el artículo 2458 del Código Judicial, puesto que es un requisito indispensable para que sea admitido.

En vista de lo anterior, no procede la solicitud formulada por el señor RAMOS SMITH, toda vez que no hay causal que fundamente la presente solicitud de revisión.

PARTE RESOLUTIVA

Por los motivos anteriormente expuestos, la SALA SEGUNDA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor JAVIER ANTONIO RAMOS SMITH.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) CÉSAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO H. GONZÁLEZ
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

PROCESO SEGUIDO A JOSE ALBERTO MENA MARTÍNEZ POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE EDUARDO ANTONIO VEGA Y ABDIEL VEGA MAC. FARLANE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada han ingresado a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia las sumarias instruidas contra JOSÉ ALBERTO MENA MARTÍNEZ sindicado por delito de homicidio en perjuicio de EDUARDO ANTONIO VEGA y ABDIEL VEGA McFARLANE, hecho de sangre ocurrido el 6 de diciembre de 1995, en el barrio del Chorrillo, distrito de Panamá.

Celebrada la audiencia en derecho, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 4 de octubre de 1999 absolvió a MENA MARTÍNEZ de los cargos que se le formulaban, por considerar que existen dudas razonables en cuanto a la vinculación del imputado con el hecho de sangre ocurrido, toda vez que el testigo ocular EDWIN LINO VEGA, en el acto de audiencia señaló que el procesado no disparó contra los hoy occisos, siendo que éste es el único testigo y que también resultó lesionado ese día. Por otra parte, el arma de fuego calibre 380 que según declaración del testigo Gilberto Osvaldo Moreno Rodríguez le fue entregada por el procesado a fin que se la cuidara no

corresponde al calibraje de los proyectiles encontrados en los cadáveres que mediante peritaje de expertos de la Sección de Balística de la Policía Técnica Judicial, fue determinado como un calibre 38 de posible marca Smith & Wesson. Finalmente señala la sentencia que no constan medios probatorios suficientes para concluir que el imputado llevó a cabo una conducta dolosa en ese hecho.

MOTIVOS DE LA APELACIÓN

Por su parte, la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, en su escrito de sustentación de apelación señala que la experticia balística no es excluyente, como lo señala el Tribunal de la causa, pues la misma sólo hace referencia a un proyectil extraído al cadáver de EDUARDO ANTONIO VEGA, quien fue impactado por varios proyectiles, como se deja establecido en el protocolo de necropsia y solamente se logra la recuperación de un proyectil del cuerpo de la víctima.

En este sentido, el representante del Ministerio Público plantea que el Tribunal al dictar su veredicto, parte de una premisa falsa al considerar que los 2 proyectiles calibre 38 que fueron analizados por el Departamento de Balística fueron extraídos de los cadáveres cuando los mismos proceden de distinta fuente, ya que uno de ellos fue hallado por un vecino del barrio y el otro fue extraído del cuerpo de EDUARDO ANTONIO VEGA, lo cual demuestra que no existe evidencia científica que excluya a JOSÉ ALBERTO MENA de la comisión de delito de homicidio por el sólo hecho de la declaración de un testigo que indica que el arma que le da a guardar el sindicado es una 380 y los proyectiles que aparecen son calibre 38, porque en el cuerpo de ABDIEL VEGA MCFARLANE no se pudo recuperar ningún proyectil.

Otra censura que destaca el agente instructor consiste en la contradicción del testigo Edwin Lino Vega cuando se retracta de su primera versión, donde manifiesta que se hizo el muerto para que no lo mataran y luego en segunda oportunidad, en el acto de audiencia oral indica al tribunal que fue otra la persona que disparó contra EDUARDO ANTONIO VEGA y ABDIEL VEGA MCFARLANE y que el luchó con el sindicado por arma con la cual el mismo le había disparado. Dentro del sumario ha quedado demostrado, sostiene el apelante, que existía una enemistad entre el sindicado y EDWIN LINO VEGA cuya consecuencia fue el hecho se sangre con un saldo de dos victimas.

La Fiscalía finaliza manifestando su disconformidad con la decisión del Tribunal de Primera Instancia señalando que al absolver al sindicado no se tómo en cuenta la figura de la participación criminal, cuando quedó demostrado que JOSE ALBERTO MENA se encontraba en el lugar de los hechos, situación que es aceptada por el propio sindicado en sus descargos, conjuntamente con un individuo de apodo CHOMBO BLACK, quien es mencionado a lo largo de las sumarias y del cual no se ha podido establecer su verdadera identidad. Siendo evidente que al encontrarse ambos sujetos en el lugar de los hechos, portando armas de fuego, se pretendía lesionar mortalmente a las víctimas y que de acuerdo a lo que establece el Código Penal en su artículo 42 la acción desplegada por el sindicado y el sujeto no identificado se enmarca dentro de la norma, pues no sólo iba dirigida a lesionar sino que además se demuestra que tenía motivación para la ejecución del hecho de sangre.

En cumplimiento del principio procesal de la doble instancia, procede la Sala a resolver la alzada, según los términos descritos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, sólo sobre los puntos de la resolución que han sido objetados por el recurrente.

HISTORIA DEL CASO

Las piezas procesales permiten determinar que en horas de la noche del día 6 de diciembre de 1995, EDUARDO ANTONIO VEGA y ABDIEL VEGA MCFARLANE recibieron impactos de bala que le produjeron la muerte a ambos. El hecho de sangre ocurrió en el sector del Chorrillo, Calle 26, Primer piso del Edificio 24 de Diciembre,

Provincia de Panamá. Según las consideraciones médico legales consignadas en el protocolo de necropsia, visible de fojas 132 a 151 la causa de muerte de los dos se produce por un choque hemorrágico por perforación pulmonar vascular. También resultó herido en este hecho de sangre EDWIN LINO VEGA, primo de los fallecidos y único testigo presencial del hecho, quien manifiesta en su declaración y posterior ampliación, (fs. 26 y 125), lo siguiente:

> "... yo fui a buscar a mi primo ORIEL para comprar un suéter, nos fuimos para la multi, luego en la entrada de la multi estaba mi primo COCORON, o sea Eduardo Vega, y el nos llevó para el piso 14, lugar donde vive un pelao disque Toca, luego nos quedamos un rato allí y después el nos dijo VAMONOS PARA ABAJO A BUSCAR EL SUETER, el me dijo ESPERAME ALLI EN EL PISO 1, y después se fue a buscar el sueter disque donde un pelao, yo y mi primo ORIEL y COCO estábamos conversando en el piso 1, el se estaba demorando, después se apareció JOSESITO, en compañía de otro pelao de Río Abajo el cual estaba parqueando en el Chorrillo porque tuvo problemas en Río Abajo, el nos dijo párense, yo me paré y mis primos se quedaron sentados, el comenzó a revisarnos a todos, después me soltó un tiro en el pie con una pistola negra, yo me caí al piso, después entre los dos comenzaron a soltar, mis primos que estaban sentados cogieron las balas".

## CONSIDERACIONES DE LA CORTE

De la lectura de las diferentes declaraciones e intervenciones en este proceso, se advierte que sólo existe un testigo que estuvo en el lugar de los hechos y que también resultó herido, los demás son de referencia, que no declaran por percepción propia, sino por lo que expresa haberle contado el propio testigo presencial EDWIN LINO VEGA, como es el caso de los testigos YELENA YISEL VEGA y GUILLERMO ENRIQUE VANEGA.

Es un hecho cierto que el día de la audiencia oral, a diferencia de lo manifestado en la fase sumarial, el testigo EDWIN LINO VEGA se retracta de los cargos formulados contra el sindicado, en el sentido de indicar que es sólo a él a quien hiere pero que no lo hizo contra los hoy occisos. Esta declaración, a pesar de guardar serias incongruencias con lo manifestado en declaraciones anteriores, coincide siempre en el hecho que el sindicado sólo dispara contra el testigo. Lo argumentado por la Fiscalía, en relación a que existían motivos del sindicado para ejecutar el hecho de sangre queda desvirtuado, pues en todo caso dicha enemistad era con el testigo, tal cual se desprende de las declaraciones, tanto del sindicado JOSÉ ALBERTO MENA como del testigo EDWIN LINO VEGA, quien el día de la audiencia al ser interrogado, se manifiesta en los siguientes términos:

> "Quien fue la persona que disparó contra ti? CONTESTO: El señor ... PREGUNTADO: JOSÉ MENA, JOSÉ MENA, es quien, lo puedes indicar aquí? CONTESTO: JOSESITO, PREGUNTADO: quien es Josesito? Lo puedes indicar aquí CONTESTO: El que está aquí. PREGUNTADO: El fue la persona que disparó contra ti. CONTESTO: Si ... PREGUNTADO: Quien disparó contra tus primos? CONTESTO: El otro muchacho, el moreno. PREGUNTADO: Quiere decir que lo que tu declaraste aquí no fue cierto? CONTESTO: Como el me disparó yo me caí al piso, yo estaba luchando con él estaba el otro muchacho fue quien disparó. PREGUNTADO: El otro te disparó a tí? CONTESTO: No, el comenzó a disparar. PREGUNTADO: Tú luchaste con él por el arma. CONTESTO. Sí PREGUNTADO: Y porqué tú declaraste que él había disparado contra tus primos. CONTESTO: Porque yo me había caído <u>yo tenía problemas con él.</u> (El subrayado es nuestro).

Por otro lado, si bien es cierto lo señalado por el Ministerio Público en el sentido que la experticia de balística no es excluyente, no ha quedado demostrado en autos que el sindicado tuviera en su poder el arma homicida o por lo menos el arma que ultimó a EDUARDO VEGA, pues fue el único que al momento de

la autopsia se le encontró dentro del cuerpo un proyectil calibre 38. Del allanamiento practicado a la residencia de GILBERTO OSVALDO MORENO RODRÍGUEZ, quien rinde declaración el día 4 de marzo de 1997 se desprende que el sindicado MENA MARTÍNEZ le da a guardar un arma calibre 380, la cual a diferencia del revolver calibre 38, puede disparar cartuchos o municiones y no es posible que dispare proyectiles calibre 38 como el encontrado en el cuerpo de EDUARDO VEGA, por lo que no encontramos fundamento suficiente para revocar la sentencia absolutoria, considerando además que la evaluación psiquiátrica forense que se hace del perfil del individuo por parte del Instituto de Medicina Legal (fs. 93-94), así como la experticia realizada por la Sección de Balística Forenses de la Policía Técnica Judicial, visible a foja 389 del expediente, no sugiere que se deba concluir teniendo a JOSÉ ALBERTO MENA MARTÍNEZ como el autor de la muerte de EDUARDO ANTONIO VEGA y ABDIEL VEGA MCFARLANE, si de otro modo no existen otras pruebas fehacientes que demuestren esa autoría.

En todo caso, ante la eventualidad de pronunciar un fallo que conduzca a una injusticia irreparable, en casos como el presente, donde existe una duda razonable acerca de quien causó la muerte de los primos VEGA y tomando en consideración que existe un individuo del cual únicamente conocemos el apodo de CHOMBO BLACK quien también se encontraba en la escena del crimen y del cual se desconoce su paradero y que al sindicado MENA MARTINEZ se le juzga en derecho, principios procesales penales como el indubio pro reo y el de presunción de inocencia, que se recogen en el fallo motivo de apelación, resultan suficientes para dar la aprobación a la sentencia apelada por el Agente del Ministerio Público, quien el día de la audiencia oral tal cual se aprecia a foja 371 del expediente, quien actúo en ese acto en representación del Ministerio Fiscal, señaló, luego de la retractación del testigo EDWIN LINO VEGA, que dado que el sindicado tiene tres años de estar detenido no se oponía a que se le diera la libertad inmediata.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de 4 de octubre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante el cual se ABSUELVE a JOSÉ ALBERTO MENA MARTÍNEZ de los cargos que se le formularon por el homicidio de EDUARDO ANTONIO VEGA y ABDIEL VEGA MCFARLANE.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO GONZÁLEZ
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENÓ A JOSÉ ALFONSO MARTÍNEZ TEJADA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE Y LESIONES PERSONALES. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, VIENTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante sentencia calendada 2 de julio de 1999, condenó a José Alfonso Martínez Tejada a diez años y cuatro meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por tres años después de cumplir la pena principal, por la comisión de los delitos de homicidio simple y lesiones personales en perjuicio de Filiberto Rodríguez Reyes y de Jorge Enrique Rodríguez Reyes, respectivamente. Contra esa decisión judicial el imputado Martínez anunció y sustentó recurso de apelación, en tiempo oportuno, el cual fue concedido en el

efecto suspensivo. Por mandato del artículo 2038 del Código Judicial, este tribunal de alzada debe decidir sin mas trámite, a lo que procede.

El recurrente manifiesta en su manuscrito de apelación que es inocente de la comisión de los delitos que se le imputan, ya que nunca estuvo en el lugar de los hechos y los testigos que lo incriminan son de oídas, por lo que no tienen soporte jurídico (fs. 470-476).

Conocidos los argumentos del apelante, corresponde a la Sala decidir la alzada, sólo sobre los aspectos objetados en el escrito de apelación, de conformidad con el artículo 2428 del Código Judicial.

El cuaderno penal permite conocer que la tarde del 3 de enero de 1990, en el Sector del Martillo, distrito de San Miguelito, provincia de Panamá, Raúl Hernández Small (a) "Pichi" y José Alfonso Martínez Tejada (a) "Marielo", insultaron a la novia de Filiberto Rodríguez Reyes, razón por la que este les llamó la atención. Inmediatamente se produjo una pelea entre Martínez y Filiberto Rodríguez, en la cual Martínez sacó un cuchillo e hirió mortalmente a Filiberto Rodríguez. Ante esa situación, Jorge Enrique Rodríguez Reyes, hermano de la víctima, intentó detener la agresión, pero Martínez le efectuó un disparo con un arma de fuego, causándole una lesiones personales.

El protocolo de necropsia revela que el cuerpo de Filiberto Rodríguez presentaba herida producida por arma blanca en el tórax, la cual laceró un pulmón que le ocasionó una hemorragia interna. Concluye el informe médico legal que las causas de la muerte fueron "Shock Hemorrágico, Laceración pulmonar izquierdo, Herida por arma blanca penetranta (sic) en tórax" (fs. 10-21). Por su parte, el examen médico legal practicado a Jorge Enrique Rodríguez Reyes indicó que el mismo presentaba "herida por arma de fuego en el flanco izquierdo y herido por arma blanco (sic) en el flanco derecho", las cuales pusieron en peligro la vida de este, que le ocasionó una incapacidad definitiva de 5 semanas (f. 179).

Cabe señalar que no pudo ser procesado penalmente Raúl Hernández Small, pues fue encontrado muerto en su celda el 20 de junio de 1997, por lo que el tribunal de la causa extinguió la acción penal en su contra (fs. 372-373). También es importante advertir que la situación jurídica de Martínez fue atendida con la intervención de jurados de conciencia, quienes declararon su culpabilidad, por lo que solo corresponde examinar en esta instancia la individualización judicial de la pena impuesta.

El tribunal de la causa determinó que la conducta desplegada por el imputado encuentra adecuación típica en la figura del homicidio doloso simple y en el delito de lesiones personales contemplados en los artículos 131 y 136 del Código Penal, respectivamente. Para la fijación de la pena tomó en cuenta el artículo 56 y 64 del Código Penal, partiendo de la pena base de 84 meses por el delito de homicidio simple. También, se le impuso 27 meses por las lesiones, aplicando un tercio de esta a la pena base quedando la misma en 93 meses. Asimismo, se le aplicó la circunstancia agravante que contiene el artículo 67, numeral 7 del mismo Código, aumentándo la pena en una tercera parte, quedando esta en 10 años y cuatro meses, ya que el condenado se valió de la ayuda de Raúl Hernández Small, para la comisión del hecho punible (fs. 464-468).

Como ya se ha señalado, el estudio de la sentencia condenatoria apelada debe recaer sobre la pena impuesta al autor de la conducta ilícita. En ese sentido, la Sala comparte la decisión adoptada por el a-quo, ya que la conducta del agente encuentra adecuación en la figura del delito de homicidio simple, toda vez que en el cuaderno penal no se encuentra acreditada fehacientemente ninguna circunstancia que permita calificar el delito como homicidio agravado.

Con respecto a las lesiones sufridas por Jorge Enrique Rodríguez Reyes, también se encuentra comprobado en autos que fue el condenado quien disparó contra aquel poniendo en peligro su vida y produciéndole una incapacidad de cinco semanas.

Pese a que el imputado no cesuró la aplicación de la circunstancia agravante que consagra el numeral 7 del artícuo 67 del Código Penal, se procede a examinar su viabilidad de manera oficiosa siempre que el razonamiento no desmejore su situación jurídica. En tal sentido, la Sala disiente de los argumentos que llevaron al tribunal a emplear la agravante en cuestión, toda vez que en los actos de ejecución para la perperación del delito de homicidio no está fehacientemente comprobado que el sumariado tenía la intención o el interés de que otras personas facilitaran su comisión. Los antecedentes del caso revelan que Martínez actuó de manera individual al sacar un cuchillo, que tenía entre sus ropas, con el cual hirió mortalmente a la víctima.

Con vista de que no se encuentra plenamente justificada la circunstancia agravante contemplada en el numeral 7 del artículo 67 del Código Penal, la Corte considera conveniente desestimarla, por cuanto que ese criterio no se opone al principio de reformatio in pejus (Cfr. Sentencia de 5 de junio de 1992).

Por lo expuesto, se mantiene como pena base a imponer 93 meses surgida por la comisión del delito de homicidio simple y lesiones personales en perjuicio de Filiberto Rodríguez y de Jorge Enrique Rodríguez Reyes, respectivamente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia calendada 2 de julio de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a José Alfonso Martínez Tejada a la pena de 93 meses de prisión y la CONFIRMA en todo lo demás.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS.
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON.
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A RICARDO ANTONIO DRAKES HOWARD, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO EN PERJUICIO DE BRICEIDA ALVAREZ Y MILITZA CONCEPCION ARAUZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO H. COLLADO. PANAMA, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la sentencia de 21 de octubre de 1999 (fs. 394 a 403, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condenó a RICARDO ANTONIO DRAKES HOWARD, a la pena principal de ocho (8) años de prisión y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período que la pena principal, una vez cumplida ésta, por haber sido encontrado culpable del delito de homicidio simple en perjuicio de Briseida Alvarez y Militza Concepción Araúz.

A fojas 361 y 362, consta el escrito de renuncia a ser juzgado por jurados de conciencia, suscrito por el imputado RICARDO ANTONIO DRAKES HOWARD, a fin de que el debate oral se surtiera bajo los trámites del proceso ordinario, es decir, para ser juzgado en derecho, conforme a lo establecido en el artículo 2321 del Código Judicial.

Al celebrarse la Audiencia en Derecho, el día 17 de septiembre de 1999, el procesado DRAKES HOWARD se declaró inocente de los cargos imputados a su persona.

Por su parte, la licenciada Mireya Rodríguez Monteza, Defensora de Oficio, presentó su escrito de sustentación apelación calendado 22 de diciembre de 1999 (fs. 408 a 409), donde solicita que se modifique la sentencia en base a los siguientes argumentos: Que DRAKES HOWARD reconoció el haber estado presente en el lugar de los hechos y que en aras de preservar su vida respondió a los disparos que le hacía Brígido Murillo; que su patrocinado no conocía a las occisas y mal podría tener motivo o intención para ocasionarles la muerte a Briseida Alvarez y Militza Araúz; que su representado carecía hasta la fecha en que se produjo el lamentable hecho de sangre de sanción por delito alguno.

También se refiere la Defensora de Oficio al ambiente hostil dentro del cual el procesado se desenvuelve, motivo por el cual solicita se modifique la dosificación de la pena impuesta a su representado, de acuerdo a las circunstancias atenuantes contenidas en la clasificación del artículo 66, ordinal 8, del Código Penal, cuyo texto citamos a continuación:

> "Artículo 66: Son circunstancias atenuantes comunes, cuando no estén previstas como elementos constitutivos o como atenuante específica de un determinado hecho punible, las siguientes:
> ...
> 8. Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del Tribunal deba ser apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones del ambiente.

Por su parte, el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, Licenciado Dimas E. Guevara G., mediante contestación de traslado de 4 de febrero de 2000 (fs. 411-416), solicita confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, pues considera que el caudal probatorio incorporado al expediente ha sido analizado en forma adecuada y la sanción impuesta al señor RICARDO DRAKES HOWARD resulta congruente con la gravedad del delito cometido por el sujeto y la peligrosidad demostrada a través de dicho acto.

La FiscalÍa se opone a lo manifestado por la defensa y aduce que la confesión del individuo carece de validez para ser tenida en cuenta como atenuante en virtud que no tiene el carácter de espontánea y oportuna a que alude la Legislación panameña. En este sentido el representante del Ministerio Público cita jurisprudencia de la Sala de lo Penal de 26 de mayo de 1992 y 12 de octubre de 1993 como asidero jurídico de su sustentación.

Manifiesta el Ministerio Público que la intención de DRAKE HOWARD se infiere de los actos que despliega en la ejecución del delito o iter criminis, refiriéndose a la acción del procesado en los siguientes términos:

> "... el mismo acciona en repetidas ocasiones el arma de fuego que portaba por lo que siendo este instrumento idóneo para causar la muerte se infiere que esta era su intención al apuntar tal instrumento sobre la anatomía de otro ser humano.

De otro modo, la Fiscalía se opone a la invocación, por parte de la defensora de oficio, de solicitar el reconocimiento como atenuante en favor de DRAKES HOWARD de las condiciones del ambiente, señalando que vivir en determinada área no puede ser condicionante para que un individuo determinado proceda a realizar actos de violencia como el que nos ocupa.

Conocidos los argumentos expuestos por la recurrente, se pasa a resolver la alzada sólo sobre los puntos a que se refiere la impugnante, tal como lo dispone el artículo 2428 del Código Penal.

El cuaderno penal permite determinar que el hecho de sangre ocurrió el día 16 de junio de 1996 en horas de la madrugada en el barrio del Chorrillo, en las afueras de la Cantina Los Siete Amores, donde el procesado se enfrentó a tiros con otros individuos apodados "JHONY y FULO", balacera que culminó con la muerte de Briseida Alvarez (en estado de gravidez) y Militza Araúz. La muerte de ambas

fue producida por heridas de arma de fuego, la primera de ellas en la cabeza y la segunda, por lesión al tórax con laceración cardiáca y hemorragia torácica.

Cabe advertir que el sentenciado renunció de manera expresa a ser juzgado por jurado de conciencia, por lo que el trámite procesal continuó regido por las reglas del proceso ordinario, conforme lo dispone el artículo 2322 del Código Judicial.

Así el tribunal determinó que la conducta del sentenciado encuentra adecuación típica en el artículo 38 del Código Penal, ya que ejecutó la acción con la intención de acabar con la vida de otro sujeto, toda vez que en el proceder del reo se causó la muerte de dos personas aún cuando en ningún momento el hubiera de antemano planeado la muerte de las mismas, pues no se desprende del cuadernillo prueba que demuestra o explique motivo para ello, sin embargo, se produjeron las consecuencias trágicas de su acto doloso cuando, en cruce de disparos que se daba entre el sindicado y otra personas, se causa la muerte de otros dos (2) seres humanos que no tenían participación alguna en el hecho que estaba aconteciendo, situación que se encuentra contemplada en el artículo 34 del Código Penal.

La defensa manifiesta que su representado reconoce haber estado presente en el lugar del los hechos "y que al efectuar los disparos respondía a los que hacía BRÍGIDO MURILLO (A. CORONEL), teniendo como fin el preservar su propia vida".

Ese señalamiento, que no se encuentra sustentado en la formalización de la apelación, no tiene fundamento en las constancias procesales, de forma tal que pueda considerarse la actuación del sentenciado amparada con la causal de justificación conocida como legítima defensa.

Por otra parte, el reconocimiento de la confesión que se insinúa como atenuante queda desvirtuada, pues no se cumplen las características de espontaneidad y oportunidad, en atención a que la declaración donde el procesado aceptó haber realizado los disparos, se hizo luego de existir serios indicios en su contra que dieron lugar a su captura por las autoridades policiales, dado que RICARDO ANTONIO DRAKE HOWARD no se presentó personalmente ante las autoridades a declarar sino que su persona fue aprehendida posteriormente con su acompañante de nombre Jetzabel Julio Rodríguez, por miembros de la Dirección de Investigaciones Policiales y al momento de rendir su declaración ya se encontraban anexos a la investigación elementos que lo vinculaban de manera directa con el ilícito sucedido.

Se indica en la sustentación de la defensa "que en ningún momento mi patrocinado quiso ocasionarle la muerte a estas dos personas, ya que no las conocía y mal podría tener motivo alguno para realizar tal acción" y con relación a esta afirmación donde en el fondo se está pidiendo el reconocimiento de la atenuante común establecida en el numeral segundo del artículo 66 del Código Penal, se estima que no es posible su aplicación, dada la utilización de un arma letal en la ejecución del hecho, cuyo uso implica en si mismo el dolo en la conducta y si bien es cierto que no se ocasionó la muerte a la persona contra la que se disparaba, el hecho de disparar irresponsablemente en lugar público con la finalidad de causar daño a una determinada persona debe llevar a preveer que con ese actuar era previsible que se causara daño a otra u otras personas que no necesariamente fueran las que se pretendía lesionar, tal como en efecto ocurrió en este caso, en que se causó la muerte a terceras personas ajenas a la controversia que estaba sucediendo.

A este respecto, esta Sala Penal, en fallo de 22 de julio de 1997, refiriéndose al las clases de dolo ha señalado:

> "En primer término, según lo dispuesto en el artículo 31 del Código Penal, el sujeto activo actúa con dolo cuado desea los resultados del hecho legalmente descrito, evento e el que el ánimo del agente

se evidencia de manera inmediata (dolo directo); o cuando el sujeto se encuentra en capacidad de prever el resultado del daño al menos como posible, supuesto en el que su conducto se manifiesta de manera indirecta (dolo eventual)".

En relación a las condiciones hostiles del ambiente que invoca la defensa como atenuante, debemos señalar que dicha circunstancia únicamente encuentra aplicación cuando el ilícito investigado ocurre bajo elementos culturales o sociales que por su relevancia e incidencia, condicionan de tal manera el actuar del imputado que lo llevan hacia el acto delictual. En el caso que nos ocupa el hecho por sí solo, del área social en la que se desenvuelve el sentenciado, no puede en modo alguno, dar lugar a la aplicación de la atenuante demandada.

El Tribunal de instancia individualizó la pena partiendo discresionalmente de 8 años de prisión, por el delito de homicidio simple, tomando en cuenta la ausencia de antecedentes penales con lo cual se desestima la posición de la defensa en este sentido.

La evaluación Psicológica realizada al sentenciado (f. 338), demuestra que el procesado posee un coeficiente de inteligencia promedio con buena capacidad mental de razonamiento, juicio crítico y discernimiento lo que sirve de base para considerar que RICARDO ANTONIO DRAKES HOWARD tenía pleno conocimiento de sus actos al momento de cometer los homicidios.

Dadas las anteriores consideraciones, no existen pues, a juicio de esta Sala atenuantes que permitan la modificación de la pena impuesta por el a- quo, pues ésta cumple con los requerimientos necesarios para ser perfectamente adecuada al caso sub-júdice.

En mérito de expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 21 de octubre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condenó a RICARDO ANTONIO DRAKE HOWARD, a la pena principal de ocho (8) años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período que la pena principal, una vez cumplida ésta, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de BRISEIDA ALVAREZ y MILITZA ARAUZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario Ad-Hoc

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SIGUIDO A ORLANDO ALEXIS BLAKE, POR DELITO DE HOMICIDO COMETIDO EN PERJUICIO DE ROGELIO WILSON (A) SIMPLE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMA, (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de 18 de octubre de 1999, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el proceso que por delito de homicidio se le sigue a ORLANDO ALEXIS BLAKE, cometido en perjuicio de ROGELIO WILSON (A) SIMPLE, conforme hecho ocurrido en horas de la noche del día 6 de julio de 1996, en el sector de Patio Rochet, Corregimiento de Santa Ana, Distrito Capital.

La audiencia oral se llevó a cabo el día 1 de octubre de 1999 y el jurado

de conciencia encontró culpable al imputado del cargo que originó su encausamiento.

La sentencia pronunciada condena a ORLANDO ALEXIS BLAKE a cumplir la pena principal de quince (15) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que la pena principal. Al dosificar la pena, el Tribunal A-Quo estimó que se trataba de homicidio agravado tipificado en el numeral 2° del artículo 132 del Código Penal y al fijar la pena base tomó en cuenta los parámetros del artículo 56 del mismo Código y al no advertir circunstancias modificativas, la pena base impuesta no sufrió variación alguna.

La defensa del imputado, a cargo del Licenciado Gerardo Carrillo, anunció apelación de la decisión pronunciada, y en su escrito de sustentación, en el que solicita a esta Sala "revoque" la sentencia recurrida, básicamente alega lo siguiente:

> "... en el proceso seguido a ORLANDO ALEXIS BLAKE no se ha demostrado sin lugar a dudas que él haya sido el autor de los disparos que segaron la vida de ROGELIO WILSON. Tampoco se ha demostrado que en la consumación del ilícito hubo premeditación ..." (fs. 246-248).

Por su parte, el Fiscal colaborador de la instancia, Licenciado Rolando Rodríguez Chong, en su escrito de oposición a la apelación expresa que "... los argumentos expuestos por la defensa técnica del justiciables ORLANDO ALEXIS BLAKE, son aspectos que fueron debatidos en el acto de audiencia oral y no son materia de análisis en esta etapa procesal, y como quiera que existe pronunciamiento de culpabilidad dictado por el Jurado de Conciencia en contra del procesado, el cual es irreversible y por tanto no sujeto a modificación ...".

En cuanto a la calificación de la conducta del condenado, el Licenciado Rodríguez señala que el hecho que BLAKE "se apersonara hasta el patio Rochet, lugar frecuentado por el occiso, en aparente ajuste de cuentas por rencillas anteriores ... configura la modalidad de homicidio doloso calificado, tipificado en el artículo 132, numeral 2 del Código Penal ...". (fs. 250-252).

Corresponde a la Sala, expuesto lo anterior, decidir sobre la alzada interpuesta, lo que se hará en los términos previstos por el artículo 2428 del Código Judicial.

En primer lugar, en cuanto a la afirmación del recurrente de que no existen pruebas suficientes que incriminen a su defendido como autor material del hecho en comento, la Sala coincide con las consideraciones vertidas a este respecto por el Fiscal Superior. En este sentido, y tal como ya lo ha reiterado en numerosas ocasiones esta Superioridad, procede indicar que el veredicto de culpabilidad fue proferido por un jurado de conciencia que "es el ente en el que nuestro ordenamiento jurídico hace descansar la responsabilidad de condenar o absolver al procesado y la decisión o veredicto que en ese sentido se dicte, obliga al tribunal de derecho en los términos de del artículo 2389 del Código Judicial. Por ello, la Sala no puede entrar, siquiera por razón de este recurso, a examinar la culpabilidad o inocencia". (Sala de lo Penal. Diciembre, 3 de 1992).

En cuanto a la calificación de homicidio agravado el Tribunal A-Quo señaló que "no cabe duda que el agente activo premeditó la muerte de WILSON, ya que ha quedado establecido que el hecho obedeció a un ajuste de cuentas, además que el imputado llevaba el arma de fuego que utilizó en la mano lo que es indicativo que pretendía ejecutar el ilícito ...". (fs. 236-242).

En este punto, debemos mencionar que en nuestro Derecho Penal, los juristas Muñoz Rubio y González Ferrer, le atribuyen a la premeditación los siguientes elementos esenciales:

a) Resolución y persistencia en la decisión;
b) Transcurso de cierto tiempo;
c) Tranquilidad y frialdad de ánimo.

La Sala advierte que dichos elementos se encuentran configurados en la presente encuesta penal, así se desprende de las declaraciones juradas de CARLOS ANTONIO VÁSQUEZ CASTILLO y GUILLERMO MONTILLA, quienes afirman que el imputado llegó al sector de Patio Rochet con un arma en sus manos y que el hecho tuvo su origen en un "ajuste de cuentas" entre el imputado, ORLANDO ALEXIS BLAKE y la víctima ROGELIO SIMPSON. En ese sentido, GUILLERMO MONTILLA señaló lo siguiente:

> "... tengo conocimiento que eso fue un ajuste de cuenta, ya que el hoy occiso habia (sic) tenido percance con el individuo ORLANDO, eso fue en el año 94, en esa ocasión el difunto le metió un tiro en la cabeza que le rozó, le metió un tiro por el costado, y le robó una plata y una droga que este (sic) iba a comprar, y este ORLANDO se enteró que SIMPLE parqueaba en PATIO ROCHET, ya que ORLANDO vive en calle No. 21 central ... entonces ese día parece que ORLANDO fue y lo recogió, el (sic) se fue caminado y según sé ORLANDO le efectuó a SIMPLE como cinco (5) detonaciones". (fs. 22-23).

Por otro lado, CARLOS ANTONIO VÁSQUEZ en su declaración jurada visible a fs. 20-21 del expediente, explica lo siguiente:

> "... yo me encontraba como a las once de la noche aproximatamente (sic) en la escalera la cual está al lado de mi cuarto vi cuando entraron tres sujetos por el callejón de la casa en una forma sospechoza (sic) y en sus manos tenían cada uno de ellos un arma de fuego, luego a los pocos segundos escuche (sic) varios tiros, alrededor de cinco tisparos (sic) dichos disparos procedían del patio, posteriormente estos sujetos salieron corriendo y entre estos sujetos pude reconocer a un sujeto de nombre ORLANDO, el mismo portaba un arma de fuego la cual tenía entre las manos ...".

Siendo esta la realidad procesal, la Sala estima que no existen méritos para proceder a una reforma de la sentencia apelada, pues esta cumple con los requerimientos necesarios para adecuarla al caso que nos ocupa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 18 de octubre de 1999, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en el proceso seguido a ORLANDO ALEXIS BLAKE, por el delito de homicidio agravado cometido en perjuicio de ROGELIO WILSON (A) SIMPLE.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ANA EMÉRITA CALAMARIS BONILLA, SINDICADA POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOSÉ DAVID BALLESTEROS. MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, mediante auto calendado 25 de enero de 2000, denegó la solicitud de excarcelación bajo fianza a favor de Ana Emerita Calamaris Bonilla, sindicada por la supuesta comisión del delito de homicidio doloso en perjuicio del menor José David Ballesteros. Contra esa decisión, la defensa técnica de Calamaris anunció y sustentó recurso de apelación en tiempo oportuno, el cual fue concedido en el efecto diferido.

Del libelo de apelación se desprende que la iniciativa procesal del recurrente se dirige a que se revoque el auto apelado y se conceda la fianza de excarcelación, pues la declaración del médico Klever De Lora, permite establecer que a su defendida se le debe imputar el delito contemplado en el artículo 138 del Código Penal (fs. 15-16 cuaderno de fianza).

Por conocidos los argumentos del recurrente, la Sala pasa a resolver la alzada, sólo sobre los aspectos objetados en el escrito de apelación, de conformidad con el caudal probatorio y según lo estipulado en el artículo 2428 del Código Judicial.

Las constancias procesales permiten conocer que en la mañana del 30 de septiembre de 1998, en el Hospital Gerardino Vargas, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos, murió el menor de tres años de edad José David Ballesteros por haber recibido múltiples golpes en su cuerpo. El protocolo de necropsia reveló que el cuerpo de la víctima presentaba signos de múltiples agresiones físicas por contusiones y mordidas humanas producidas en diferentes fechas, trauma craneal, trauma en el tórax y abdomen de gran intensidad y gravedad para producir la muerte por hemorragias. Concluye el informe médico legal que las causas de la muerte fueron "A) HEMORRAGIA PERITONEAL CONMOCION CEREBRAL. B) TRAUMATISMO CERRADO DE TORAX Y ABDOMEN. C) MALTRATO FISICO INFANTIL SEVERO (f. 288 antecedentes).

Para llegar a la decisión que ahora se recurre, el Tribunal de la causa se basó en que Calamaris debió prever que al golpear a José David Ballesteros le podría causar la muerte, como en efecto ocurrió. En consecuencia, el a-quo consideró que la conducta de la imputada se adecua en el delito de homicido doloso, al que la ley sanciona con pena mínima de cinco años de prisión, por lo que no es posible concederle el beneficio de la fianza de excarcelación (fs. 8-14 cuaderno de fianza).

Para resolver el recurso interpuesto, es necesario examinar ciertos elementos probatorios que constan el cuaderno penal. En ese sentido, Ana Emérita Calamaris Bonilla, al rendir declaración indagatoria, manifestó que le pegaba a su hijastro José David Ballesteros y a la hermana de este de nombre Roxana Ballesteros, porque "se portaban mal, se peleaban entre ellos ... les pegaba con una correa ... con bejuco de guandú, a veces con la mano, pero no trompones, con la mano abierta les pegaba, les pegaba en las piernas y en las nalgas ..." (f. 105, antecedentes).

Por su parte, el médico forense Klever Aquiles De Lora Jaén, señaló que el menor fallecido sufrió lesiones que le produjeron un trauma indirecto que le ocasionó un desgarro por peloteo, es decir, "cuando una víscera interna es lesionada por un trauma externo que se produce a través de la piel de la víctima". Agregó el deponente, que ese trauma le provocó un sangrado lento de varias horas, que le causó la muerte (fs. 510-511).

Pese a que la imputada aceptó que golpeaba al menor José David Ballesteros en áreas como piernas y nalgas, esa afirmación no se compadece con el protocolo de necropsia el cual reveló traumas a la altura del cráneo, del tórax y abdomen de la víctima. Además, las lesiones internas que presentaba el menor Ballesteros en esas áreas del cuerpo no fueron producidas por golpes comunes; según se desprende del informe medico legal, esos golpes fueron de gran intensidad y gravedad, por tratarse de un menor de tres años de edad. Ante esas circunstancias, no es posible adecuar la conducta de la imputada en el delito de lesiones personales con resultado muerte.

Por otra parte, el recurrente insiste en considerar como prueba de la calificación del delito, la circunstancia de haberse producido la muerte del menor Ballesteros algunas horas después del maltrato inferido a este. La relación de causalidad no tiene que ser de efectos inmediatos y el reporte del médico Klever no arroja los resultados que aduce el recurrente.

Como quiera que el apelante no logró probar su petición, el delito que se le imputa a Calamaris es el de homicidio doloso, el cual tiene una penalidad superior a los cinco años de prisión, por lo que no es posible conceder el beneficio de excarcelación bajo fianza.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto fechado 25 de enero de 2000, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, el cual negó la solicitud de fianza de excarcelación a favor de Ana Emérita Calamaris Bonilla, sindicada por la comisión del delito de homicidio en perjuicio de José David Ballesteros.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE DANIEL MORENO JULIO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE CIRILO PÉREZ. MAGISTRADO PONENTE: CESAR PEREIRA BURGOS. PANAMA, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial de Panamá, mediante auto fechado 4 de febrero de 2000, denegó la solicitud de excarcelación bajo fianza a favor de Daniel Moreno Julio, sindicado por la presunta comisión del delito de homicidio doloso cometido en detrimento de Cirilo Pérez Pérez. Contra esa decisión, la defensa oficiosa de Moreno anunció y sustentó recurso de apelación en tiempo oportuno, el cual fue concedido en el efecto diferido.

El recurrente se muestra disconforme con el auto atacado, toda vez que el delito que se le debe imputar a Moreno es el de lesiones personales con resultado muerte, ya que la víctima murió porque no fue transportada oportunamente a los centros médicos del lugar (fs. 27-28 cuaderno de fianza).

Conocidos los argumentos del apelante, corresponde a la Sala resolver la alzada, sólo sobre los aspectos objetados en el libelo de apelación, de conformidad con el artículo 2428 del Código Judicial.

El cuaderno penal permite conocer que en la tarde del 4 de agosto de 1999, en el distrito de Los Santos, provincia del mismo nombre, Daniel Moreno Julio, con un pick-up, derribó la cerca de la casa de Cirilo Pérez Pérez. Luego, entró en la casa de Pérez y con un palo de coa le propinó varios golpes que le causaron la muerte. El protocolo de necropsia revela que se trata del cuerpo de una persona con una edad aparente de 72 años, la cual presentaba un trauma contuso en la parte inferior de la parrilla costal izquierda, equimosis por contusión directa en la fosa renal izquierda (fs. 225-232). También "SE ENCONTRÓ GRAN CANTIDAD DE SANGRE EN EL ABDOMEN, SUFICIENTE PARA PRODUCIRLE HIPOVOLEMIA FATAL A UNA PERSONA PEQUEÑA DESNUTRIDA Y DEBIL COMO EL OCCISO, EL SHOCK TRAUMATICO CONTRIBUYO TAMBIEN POR LA LESION GRAVE A ORGANOS VITALES TALES COMO EL PANCREAS, RIÑON BAZO Y SUPRARRENAL". Concluye el informe médico legal que las causas de la

muerte fueron "A). SCHOC (sic) TRAUMATICO, ANEMIA AGUDA. B). HEMOPERITONEO-HEMORRAGIA PERIRRENAL. C). ESTALLAMIENTO ESPLENICO-LACERACION RENAL POR TRAUMA EXTERNO" (f. 233).

Para resolver el recurso interpuesto es necesario examinar ciertos elementos probatorios que constan en el cuaderno penal. En ese sentido, Daniel Moreno Julio, al rendir declaración indagatoria, manifestó que con su vehículo derribó la cerca de la casa de Pérez, entró a la casa de este y le dio dos golpes con el palo de una coa. Luego, se retiró a su casa y en la noche se enteró de que Pérez había muerto (fs. 325-334).

Por su parte, Dolores Guadalupe Carrera Rodríguez de Corro señaló que, observó cuando Moreno tumbó la cerca de la casa de Pérez con un pick-up, que se bajó del carro con una "coa o bate largo", entró a la casa de la víctima y lo agredió (fs. 19-22). Esta declaración es corroborada por Heriberto Arturo Saucedo Pérez (fs. 44. 48); y por Nuvia Mirella González De León (fs. 52-56).

Otro testimonio allegado al cuaderno penal es el de Ana María Delgado Pérez. Relata la deponente que recibió una llamada telefónica de Cheva Rodríguez, quien le informó que habían golpeado a Pérez. Cuando se presentó a la casa de la víctima, observó que tenía golpes en todo el cuerpo, que estaba embriagado y que se negaba a la asistencia médica (fs. 74-76). Este testimonio es confirmado por Plácido Pérez Pérez, quien agragó que Pérez se negó a que lo trasladaran al centro médico (fs. 77-79).

Por otro lado, el doctor Klever De Lora Jaén, indicó que "de haber aceptado el hoy occiso a ser atendido en un hospital, se le había (sic) podido practicar algunas maniobras médicas incluyéndose seguramente una cirugía de urgencia que habría podido conservarle la vida" (f. 395).

Como se observa, Moreno aceptó que golpeó a Pérez, afirmación que es corroborada por Dolores Guadalupe Carrera Rodríguez, Heriberto Arturo Saucedo Pérez y Nuvia Mirella González De Léon. También se aprecia la intención de Moreno de causarle la muerte a la víctima, toda vez que entró violentamente a la casa de Pérez y lo golpeó, pese a que existía una desproporción física entre el agente y el sujeto pasivo, quien se encontraba ebrio. En adición debemos atender que, el protocolo de necropsia, señala que los golpes que presentaba la víctima resultaron significativos, sobre todo, en una persona desnutrida y débil, la cual no podía oponer mayor resistencia. Ello permitió que golpeara a la víctima sin dificultad y de manera indiscriminada.

Pero lo más importante, consiste en el hecho de que el imputado, luego de golpear repetidamente a la víctima, lo abandonó en su casa, sin que alguien, oportunamente, se percatara del daño que le había causado, del cual le sobrevino la muerte. Así las cosas no es posible adecuar la conducta del sindicado en el delito de lesiones personales con resultado muerte.

En virtud de lo anteriormente expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto calendado 4 de febrero de 2000, el cual denegó la solicitud de excarcelación bajo fianza a favor de Daniel Moreno Julio, sindicado por la presunta comisión del delito de homicidio doloso cometido en perjuicio de Cirilo Pérez Pérez.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) CESAR PEREIRA BURGOS

(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) ALBERTO H. GONZALEZ H.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**ÓRGANO JUDICIAL**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y LABORAL**

**MARZO 2000**

## DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

**DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MODESTO CERRUD DUARTE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL GERENTE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN Y LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, INCURRIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA MISMA INSTITUCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**

**VISTOS:**

**El licenciado Darío Montero, actuando en su condición de apoderado judicial de MODESTO CERRUD DUARTE, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción con el propósito de que se declare nula por ilegal la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 de 8 de noviembre de 1997, dictada por el Gerente Regional de Panamá Este del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y la negativa tácita por silencio administrativo, incurrida por el Director General de la misma Institución.**

**Mediante el acto impugnado, la Gerencia Regional de Panamá Este del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) comunicó al señor MODESTO CERRUD DUARTE que procedió a desconectar y remover los equipos de instalación y medición colocados por esta entidad en el Mini Super Villa Unida, negocio del cual él es propietario, por el hecho de que este establecimiento comercial se encontraba ubicado en terrenos que constituyen una servidumbre de paso reconocida a favor del ente emisor para el paso de líneas de alta tensión; situación ésta que representaba peligro tanto para el mismo, como para sus trabajadores y clientes.**

### ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

**El demandante sustenta su pretensión aduciendo básicamente dos situaciones.**

**Por una parte considera que las medidas adoptadas por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) mediante la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 de 8 de noviembre de 1997 constituye un acto de abuso de autoridad; mientras que, por la otra, denuncia que el hecho en virtud del cual el ente emisor decidió suspenderle el servicio de electricidad al Mini Super Villa Unida no está previsto como una causal para rescindir el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica suscrito entre las partes en conflicto.**

**Al respecto, el recurrente expone en el hecho noveno del libelo de demanda lo siguiente:**

> **NOVENO: La negativa tácita por Silencio de la Administración y la sorpresiva resolución que hoy impugnamos es repudiada por la población de Villa Unida por los (sic) siguientes (sic):**
>
> **A. El corte del fluido (sic) eléctrico del local comercial, sin ninguna notificación constituye un verdadero abuso de autoridad, en perjuicio del local comercial.**
>
> **B. El local comercial que por más de 20 años, ha venido operando la actividad de ventas de mercancía seca y refrigerada en general, sele (sic) ha impedido continuar, producto del abuso e irrespeto a los derechos particulares.**
>
> **C. El contrato de Suministro de Energía Eléctrica solo se termina por los siguientes casos:**

-Incumplimiento de las cláusulas establecidas en el presente contrato.

-Solicitud escrita del propio cliente.

-La formación de concurso de acreedores.

-Disolución del propio cliente.

INFORME EXPLICATIVO DE CONDUCTA

En este documento el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, justificó las acciones adoptadas contra el Mini Super VILLA UNIDA, propiedad de MODESTO CERRUD, en el hecho de que dicho establecimiento comercial había sido construido "violando disposiciones municipales sobre obras y construcciones, acorde a criterio vertido por autoridades competentes del ramo, inclusive en área(s) de servidumbre(s) que ocupan nuestras torres de alambrado de transmisión eléctrica." (Lo subrayado es del Tribunal).

Cabe destacar que también forman parte de este informe una serie de notas y memorandos expedidos por el IRHE y el Municipio de Panamá los cuales, a juicio de aquélla entidad, sustentan la procedencia y viabilidad de su actuación.

CRITERIO DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Mediante Vista Fiscal No. 179 de 14 de mayo de 1998, la señora Procuradora de la Administración solicitó a los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte de Suprema de Justicia denegar las pretensiones del actor, por considerar que las mismas carecen de fundamento jurídico.

En ese sentido, tenemos que la referida servidora pública desestimó el primer cargo de ilegalidad endilgado por el recurrente, mismo que gira en torno al artículo 36, numeral 3 de la ley No. 135 de 1943 que establece lo siguiente:

"Artículo 36: Se considerará agotada la vía gubernativa:
...
3 ... Cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Si se comprobare plenamente que no fue admitido el memorial en que se hizo la solicitud de que trata el inciso anterior, se considerará asimismo agotada la vía gubernativa." (Lo subrayado es de la Procuraduría de la Administración).

La señora Procuradora considera que este primer cargo de ilegalidad no procede, puesto que el silencio administrativo se configura cuando ha transcurrido el término de dos meses sin que la Administración haya decidido expresamente un asunto determinado sometido a su decisión, y no cuando ha precluído el plazo de treinta días previsto en el artículo 41 de la Constitución Política, norma en la que el demandante ha apoyado su pretensión.

Para ilustrar esta situación, la Procuraduría de la Administración elaboró la siguiente relación de hechos:

"En el caso sub júdice, el interesado, señor Modesto Cerrud D., el día 13 de octubre de 1997, remitió una Nota al Director del I. R. H. E, Fernando Aramburú Porras, para que se le reinstalaran los medidores del local comercial de su propiedad, los que le fueron retirados el día 9 de octubre de 1997.

Dicha solicitud fue recibida en la Institución, el día 14 de octubre de 1997, tal como consta en la foja 4 del expediente judicial.

Por lo tanto, la Administración contaba con dos meses para emitir una respuesta al Administrado; concretamente, hasta el día 14 de diciembre de 1997.

Antes que se venciera dicho término, el Ingeniero Carlos Mosquera, Gerente Regional de Panamá Este, emitió el Oficio No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97, el día 8 de noviembre de 1997, en el que le explicaba al señor Modesto Cerrud Duarte las razones por las cuales la institución a su cargo decidió la desconexión y remoción del equipo que se encontraba en el establecimiento en referencia.

Siendo ello así, no se produjo el Silencio Administrativo alegado."

De igual modo, cabe destacar que la Vista Fiscal en referencia contiene un estudio detallado de los aspectos de mayor relevancia que tanto legal como jurisprudencialmente se advierten en la figura del silencio administrativo.

Al proceder al análisis del segundo cargo de ilegalidad, esta funcionaria de alta jerarquía advirtió que el artículo 12 del Decreto de Gabinete No. 235 de julio de 1969 no establece, como lo afirmó el recurrente, las formas de disolución del Contrato de Suministro de Energía Eléctrica; sino que la norma en comento describe quienes son los miembros que integran la Junta Directiva del I. R. H. E.. Ante esta confusión, la señora Procuradora optó por no emitir concepto y justificó la legalidad de la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 de 8 de noviembre de 1997 en el artículo 160 del Manual de Normas y Condiciones para la Solicitud y Suministro del Servicio Eléctrico y el artículo 146 del Decreto No. 535 de 1960 ambos relacionados con las prohibiciones que se suscitan en torno a las servidumbres constituidas a favor del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

## DECISION DEL TRIBUNAL

Evacuados los trámites procesales atinentes a los procesos contenciosos administrativos de plena jurisdicción, corresponde a los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia entrar a resolver el fondo del presente litigio, mismo que tiene su origen en la expedición de la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-04-97 de 8 de noviembre de 1997 dictada por el Gerente Regional de Panamá Este del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), mediante la cual se comunicó al señor MODESTO CERRUD la decisión del IRHE de proceder con la desconexión y remoción de los equipos eléctricos instalados en el MINI SUPER VILLA UNIDA por el hecho de que el anexo efectuado a dicho establecimiento comercial se encontraba a 12 1/2 metros de una servidumbre constituida a favor del ente emisor para el paso de líneas de alta tensión. Esta situación, a juicio del IRHE, ponía en peligro la vida del señor MODESTO CERRUD, sus trabajadores y clientes, considerando que en las proximidades de tales terrenos se había producido, anteriormente, la muerte de dos personas como consecuencia de una descarga eléctrica.

Este Tribunal Colegiado procede de inmediato a analizar las normas legales que el recurrente consideró infringidas por la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 de 8 de noviembre de 1997.

El primer cargo de ilegalidad endilgado por la parte actora se produce en torno a la supuesta transgresión del artículo 36, numeral 3 de la ley No. 135 de 1943 el cual preceptúa lo siguiente:

"Artículo 36: Se considerará agotada la vía gubernativa:

1. Cuando interpuestos alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 33 se entienden negados, por haber transcurrido un plazo

de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos;

2. Cuando no se admita al interesado el escrito en que interponga cualesquiera de los recursos señalados en el artículo 33.

La circunstancia que contempla este inciso deberá ser probada plenamente;

3. Cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Si se comprobare plenamente que no admitido el memorial en que se hizo la solicitud de que trata el inciso, anterior, se considerará asimismo agotada la vía gubernativa." (Lo resaltado es del Tribunal)

En sustento de la alegada infracción, el actor solamente se limitó a realizar el siguiente enunciado:

"Artículo 41. de la Constitución Política de la República de Panamá."

Esta norma dispone:

"Artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.

El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días.

La Ley señalará las sanciones que corresponden a la violación de esta norma."

Esta Superioridad no entiende que quiso decir el demandante al relacionar la supuesta transgresión del artículo 36, numeral 3 de la ley N° 135 de 1943 con la disposición constitucional transcrita. La primera norma instituye lo que el Derecho Administrativo ha denominado Silencio Administrativo, mientras que la segunda consagra la figura que el Derecho Constitucional conoce como Derecho de Petición, las cuales no guardan ninguna relación entre sí.

El silencio administrativo es una ficción jurídica que la ley ha creado en protección o beneficio de los administrados y se produce cuando un particular, a través de alguno de los medios de impugnación procedentes en la vía gubernativa (reconsideración y apelación), presenta un reclamo ante la administración y transcurre el término que la ley señala (dos meses) sin que ésta emita su dictamen. Ante esta situación se entiende que el ente administrativo demandado ha proferido una decisión tácita sobre el punto controvertido, misma que tiene dos efectos importantes:

1. Se entiende denegada la pretensión del recurrente y,

2. Se entiende agotada la vía gubernativa, lo que constituye un presupuesto indispensable para recurrir ante esta jurisdicción de lo contencioso administrativo en las acciones de plena jurisdicción.

Por su parte, el derecho petición "es un acto unilateral por medio del cual se ejerce la facultad que tiene todo individuo de dirigirse a los poderes constituidos pidiendo la reparación de un agravio o reclamando su intervención en asuntos de interés público; no inicia proceso alguno y la solicitud debe ser resuelta en el término de treinta días." (Jurisprudencia Constitucional. Centro

de Investigación Jurídica, Universidad de Panamá, Tomo I, pág 260.)

De las consideraciones expuestas se evidencia que el silencio administrativo y el derecho de petición son dos figuras jurídicas totalmente distintas. El primero es el efecto que se produce cuando la Administración incurre en un estado de inercia o inactividad al no resolver en el término de dos meses un determinado asunto sometido a su pronunciamiento; mientras que el derecho de petición es una facultad constitucional atribuida al particular con el propósito de que éste presente respetuosamente, de manera informal, sus quejas y peticiones ante los servidores públicos; las cuales deben ser atendidas en el término de treinta días. Sin embargo, si transcurre este lapso sin que la Administración de respuesta al requerimiento planteado, éste mutismo no constituye Silencio Administrativo; sino que acarrea sanciones para el funcionario a quien fue dirigida la solicitud desatentida, a la luz de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley No. 36 de 5 de junio de 1998 "Por la cual se desarrolla el artículo 41 de la Constitución Política de la República".

Hechas las anteriores aclaraciones, corresponde ahora determinar si la Gerencia Regional de Panamá Este del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) incurrió efectivamente en silencio administrativo; así como corroborar si tal circunstancia ha quedado debidamente acreditada.

El señor MODESTO CERRUD promovió ante el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACION I. R. H. E. recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 de 8 de noviembre de 1997 ante el IRHE el 17 de noviembre de 1997, siendo a partir de esta fecha cuando comenzó a correr el término de los dos meses para que se configure el silencio administrativo, es decir, que dicho término tenía como fecha de vencimiento el día 17 de enero de 1998.

Si bien es cierto que conforme a lo actuado en el expediente bajo estudio no se advierte que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, dentro del período comprendido del 17 de noviembre de 1997 al 17 de enero de 1998, haya emitido su decisión en torno al reclamo incoado por el señor MODESTO CERRUD; tampoco se desprende de lo analizado en esta causa administrativa que el apoderado judicial de la parte actora haya realizado las diligencias pertinentes a fin de demostrar efectivamente que la dependencia estatal demandada negó tácitamente la pretensión de su poderdante al no emitir su dictamen en el término legal de dos meses; es decir por haber incurrido en Silencio Administrativo.

Para acreditar tal circunstancia, el demandante tenía, tal como lo expuso la señora Procuradora, alguna de estas dos opciones:

1. Acreditar que había requerido al INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACION la documentación pertinente que certificara si había recaído o no decisión sobre el recurso incoado, o que habiendo realizado las diligencias pertinentes le fue imposible obtener dicha certificación; ó

2. Solicitar al Magistrado Sustanciador que requiriera de la autoridad demandada información sobre si ha recaído o no decisión respecto del punto controvertido.

Al no haberse aportado ninguno de los documentos probatorios descritos, este Tribunal concluye que el INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACION, en el presente caso, no incurrió en la negativa tácita de su pretensión por Silencio Administrativo y por tanto lo procedente es rechazar este primer cargo de ilegalidad.

Como segunda norma supuestamente transgredida, se invoca el artículo No. 12 del Decreto de Gabinete No. 235 de 30 de julio de 1969.

Al respecto, la Sala se percata, tal como fue advertido por la señora Procuradora, que la referida disposición legal no prevé las causales en virtud de las cuales procede la rescisión del Contrato de Suministro de Energía

Eléctrica suscrito entre el IRHE y el señor MODESTO CERRUD, sino que señala los miembros que integran la Junta Directiva de la recién transformada empresa de electricidad estatal.

No obstante, esta Superioridad procedió a la revisión de las normas que conforman el Decreto de Gabinete No. 235 de 1969 a efectos de realizar el análisis pertinente, sin encontrar el texto que el actor consideró infringido, por lo que ante la carencia de una norma supuestamente vulnerada, lo lógico es obviar el estudio de dicha transgresión.

Ante las argumentos expuestos por la parte actora y las conclusiones a las que ha arribado esta Superioridad después de haber realizado los estudios correspondientes, los miembros de este Tribunal Colegiado no encuentran sustento jurídico en las pretensiones del actor, por lo cual lo procedente es denegar los requerimientos del recurrente y declarar la legalidad de la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 de 8 de noviembre de 1997 expedida por el Gerente Regional de Panamá Este del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución No. DEDC-GNPC-GRPESC-041-97 de 8 de noviembre de 1997 expedida por Gerente Regional de Panamá Este del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación y la negativa tácita por silencio administrativo, incurrida por el Director General de la misma institución.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO BARRÍA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ JERÓNIMO HUC CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 468-D-136 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Luis Alberto Barría, en representación de JOSÉ JERÓNIMO HUC CASTILLO, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 468-D-136 de 15 de noviembre de 1999, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda incoada, a fin de determinar si la misma cumple o no con los presupuestos legales exigidos para su admisión.

Como ha sido jurisprudencia de esta Sala, uno de los requisitos fundamentales para la admisión de toda demanda contencioso administrativa, es el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que a la letra dispone lo siguiente:

"Artículo 28. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativa contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes;
2. Lo que se demanda;
3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;
4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación.

En el caso que nos ocupa, a primera vista se observa que el recurrente no cumplió con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo supra citado, ya que omitió señalar quién es el funcionario al cual se demanda, y la designación de la Procuradora de la Administración, que actúa en defensa del acto acusado, en concordancia con el numeral 2, del artículo 348 del Código Judicial.

En adición a lo expresado, la Sala considera que la deficiencia más trascendental para la inadmisión del libelo, radica en la falta de cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, toda vez que el afectado no precisó el concepto de la violación de la norma alegada como infringida. Es importante aclararle al actor que no sólo basta citar textualmente los artículos que se estiman transgredidos, sino que también es necesario explicar claramente en qué concepto han sido presuntamente quebrantados los mismos. Esta afrenta a la norma o normas jurídicas puede configurarse en diversas formas, de acuerdo a lo estatuído en el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, a saber:

1. Infracción literal de los preceptos legales que a su vez puede producirse por violación directa por comisión, o violación directa por omisión o falta de aplicación; por interpretación errónea o por indebida aplicación;

2. La falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o entidad que haya dictado el acto administrativo;

3. Quebrantamiento de las formalidades legales; y

4. Desviación de Poder.

La jurisprudencia constante de este Tribunal de Justicia ha sostenido que este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad invocados por el actor.

En atención al número significativo de defectos arriba señalados, no queda otra alternativa que negar la admisión de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el Licenciado Luis Alberto Barría, en representación de JOSÉ JERÓNIMO HUC CASTILLO, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 468-D-136 de 15 de noviembre de 1999, dictada por el Ministro de Gobierno y Justicia, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CHAVEZ MARTINEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 28 DE 10 DE JUNIO DE 1998, DICTADA

POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Herrera, en representación de LUIS CHAVEZ MARTINEZ, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 28 de 10 de junio de 1998, dictada por el Director General de la Policía Técnica Judicial (P. T. J.), el acto confirmatorio y para que se ordene el reintegro inmediato del señor LUIS CHAVEZ MARTINEZ y el pago de los salarios caídos.

Las disposiciones legales que se estiman infringidas son las siguientes: los artículos 30, acápite c y 42 de la Resolución del Ministerio Público No. 25-94 de 15 de noviembre de 1994.

I. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA EL DEMANDANTE

El demandante señala que el 27 de noviembre de 1986, tomó posesión del cargo de Agente, con Placa de orden No. 13,000, en las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, quedando finalmente asignado en la Policía Técnica Judicial.

Posteriormente, mediante Resolución No. 28 de 10 de junio de 1998, proferida por la Policía Técnica Judicial, fue destituido por utilizar su cargo o influencias oficiales para coaccionar a algunas personas en beneficio propio o de tercero. Esta decisión fue confirmada mediante Resolución No. DG-PER-007-98 de 7 de julio de 1998.

Al respecto, alega el accionante que fue destituido injustamente, ya que no ha cometido ninguna falta o delito que amérite dicha sanción disciplinaria.

Que como consecuencia de los hechos descritos, paralelamente, el recurrente fue objeto de un proceso penal ante el Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual concluyó con un sobreseimiento definitivo a su favor, mediante Auto No. 9 de 28 de mayo de 1998.

El recurrente explica, que sólo podía ser destituido de su cargo, en virtud de causa justificada plenamente comprobada, circunstancia ésta excepcional que no se ha cumplido. Que tampoco ha incurrido en las causales contenidas en el artículo 11 de la Ley No. 16 de 9 de julio de 1991, y en el acápite p del artículo 41 del Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, los cuales fueron utilizados como fundamento legal para su destitución.

De acuerdo a estas circunstancias, el demandante alega que el acto acusado desconoce el derecho a la estabilidad laboral de que goza, contenido en el acápite c del artículo 30 de la Resolución del Ministerio Público No. 25-94, por la cual se aprueba el Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial.

En cuanto a las pruebas presentadas, indica la parte actora:

> "... las pruebas testimoniales evacuadas hacen fe que el mismo jamás constriñó o coaccionó a la señora MARLINE YANETH ALLEN BROOKS para que le entregara a los señores ALEX APARICIO OLMOS y ALBERTO LAZARO una suma de dinero, con el fin de que éstos desistieran de su intención de presentar una denuncia penal en contra de la señora ALLEN BROOKS, por el delito de hurto. Ni mucho menos existe prueba alguna de que mi representado haya recibido o se hubiese hecho prometer dinero u otro beneficio para él o para un tercero, pues la acción de la señora ALLEN BROOKS para con sus potenciales denunciantes, fue libre y voluntaria, tal y como se desprende de las

pruebas practicadas." (F. 19)

También considera el actor, que se ha violado el artículo 42 del Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, el cual establece que la destitución de un funcionario deberá estar precedida por una investigación para esclarecer los cargos presentados. El concepto de la infracción es violación directa por omisión, en virtud de que la investigación realizada no arroja pruebas concretas y efectivas en su contra sobre la comisión de un hecho ilegal o indebido que justificase la destitución de su cargo público.

Agrega además, que en el acto acusado no existe una exposición razonada de las pruebas en la que se soporta o fundamenta; y lo que se observa en el mismo son meras consideraciones subjetivas. Por tanto, considera el accionante que mal podía la Policía Técnica Judicial sancionarlo disciplinariamente con la destitución, cuando un tribunal de justicia decidió absolverlo de responsabilidad penal, a través de la figura del sobreseimiento definitivo.

II. INFORME DE CONDUCTA

El Magistrado Sustanciador le solicitó al Director General de la Policía Técnica Judicial que rindiera informe de conducta en relación a la presente demanda.

El precitado funcionario señaló que en la destitución del señor LUIS CHAVEZ MARTINEZ se procedió de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 16 de 9 julio de 1991.

El artículo 20 de la norma antes descrita establece que los servidores públicos serán nombrados y removidos conforme a la Ley por el Director General de la Policía Técnica Judicial, previo concepto del Procurador. Que mediante oficio PGN-SS-504-98 de 27 de mayo de 1998, el Procurador General de la Nación emitió concepto favorable.

En cuanto a los hechos que motivaron la destitución del señor CHAVEZ MARTINEZ, la autoridad demandada nos indicó que se inician a raíz de la denuncia presentada el día 31 de julio de 1997 por la señora MARLINE ALLEN BROOKS, en la Agencia de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito.

De acuerdo al contenido de la denuncia, la señora ALLEN BROOKS quien trabajaba en el Bar "Niño Beto", fue vinculada por el señor ALEX APARICIO OLMOS propietario del establecimiento en cuestión y de su socio el señor ALBERTO LAZARO, en la sustracción de una suma de dinero en este lugar.

Se señala además en dicha denuncia, que ambos señores en compañía de dos funcionarios de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito actuaron de la siguiente manera:

> "la amenazaron y coaccionaron con el objeto de que se responsabilizara del delito de marras y les diera la suma de trescientos cincuenta balboas (B/.350.00) a fin de evitar ser trasladada al Centro Femenino de Rehabilitación y que no le interpusieran la anunciada denuncia.
>
> Agregó la señora ALLEN BROOKS que decidió acceder a lo solicitado, por ello le pidió al señor APARICIO que la acompañaran a la empresa Polymer S. A., lugar donde labora su hermana para conseguir el dinero por ellos exigido, propuesta que fue aceptada y en efecto se apersonaron en compañía del Detective LUIS ALBERTO CHAVEZ MARTINEZ, a dicho lugar en donde el señor APARICIO recibió de la joven JACKELYN ALLEN en un cheque por la suma de trescientos balboas (B/.300.00)." (fojas 25, 26)

Por su parte, la señora JACKELIN en su declaración, indicó que converso con

los detectives LUIS CHAVEZ MARTINEZ y LUIS SANDOVAL, quienes le explicaron los detalles del ilícito y del arreglo al que habían llegado los dueños del bar con la joven MARLINE.

Respecto a la actuación del detective CHAVEZ MARTINEZ, el Jefe de Agencia de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito Inspector VICTOR JIMENEZ, sostuvo que este detective no entregó los informes relacionados con la comisión efectuada en el Bar "Niño Beto" y a la empresa Polymer S. A., lo cual estaba obligado a realizar al concluir los respectivos turnos.

Destaca el Director de la Policía, que el señor APARICIO, al rendir declaración indagatoria en la Fiscalía Auxiliar de la República, en relación a si estuvo de acuerdo que MARLINE ALLEN consiguiera el dinero por medio de su hermana, contestó textualmente "si todos sabían, porque ella fue la que manifestó que podía obtener el dinero allí."

Respecto a este mismo punto, el señor LAZARO declaró que a petición suya, el Detective CHAVEZ MARTINEZ permitió que se diera una concertación extraprocesal entre ellos y la hermana de la joven MARLINE ALLEN.

Por todo lo expuesto, indica la autoridad demandada que la actitud realizada por la parte actora, viola el artículo 11 de la Ley 16 de 1991, el cual estipula lo siguiente:

> "prohíbe a los miembros de la Policía Técnica Judicial inducir a constreñir a terceros a dar o prometer dinero o provechos de cualquier clase a algún miembro de la Policía Técnica Judicial, por la realización u omisión de un acto, indebidamente a ellos o a terceros."

La norma en comento establece como sanción, por incurrir en la violación de estas prohibiciones, la pérdida inmediata del empleo, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar de acuerdo con el artículo 329 y siguientes del Código Penal.

De igual manera, la conducta realizada por el demandante es contraria a la Ley, normas morales y de buena conducta. Que la labor de todo miembro de esta Institución, es servir como auxiliares de la justicia no así ser partícipes de los mismos, ocasionándole perjuicio al prestigio de la Institución, por tanto tal conducta viola lo preceptuado en el artículo 45 de la Ley 16 de 1991.

A su vez, el Reglamento Interno, en el artículo 41 señala como causal para la remoción del cargo, "valerse del mismo o influencias oficiales para coaccionar a algunas persona en beneficio propio o de tercero."

En cuanto a lo argumentado por la parte actora, con relación al sobreseimiento definitivo con que fue favorecido, la entidad demandada señala que el mismo no guarda relación con el proceso administrativo instruido, ya que la autoridad nominadora puede proceder a la destitución del cargo del funcionario que esté señalado como autor de la comisión del delito, siempre que la actuación desplegada configure una falta administrativa que tenga como sanción la remoción del cargo, máxime si esta facultad está consagrada en la ley, no existiendo condicionalidad entre el proceso penal y el administrativo.

## III. CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACION

De igual manera se le corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración, quien mediante Vista Fiscal No. 511 de 22 de diciembre de 1998, solicitó que se desestime la pretensión del demandante por carecer de fundamento legal.

La Procuradora de la Administración expresa que difiere de lo planteado por el demandante, en relación a que se le desconoce el derecho a la estabilidad en

el cargo público que ostentaba. Que lejos de infringirse el acápite c del artículo 30, de la Resolución del Ministerio Público No. 25-94 de 1994, la misma fue acatada a cabalidad.

El criterio de la Procuradora, lo respalda la denuncia formulada por la señora MARLINE ALLEN BROOKS, en la que se pone de manifiesto que el Detective LUIS CHAVEZ MARTINEZ (demandante), la amenazó y coaccionó, con el objeto de responsabilizarla de un supuesto delito de hurto.

La conducta del Detective LUIS CHAVEZ MARTINEZ fue violatoria de los artículos 11 y 41 de la Ley No. 16 de 1991, lo que trajo como consecuencia que fueran destituidos de la Policía Técnica Judicial.

Con relación a las alusiones que formula el demandante, vinculadas al proceso penal, señala la Procuradora que el proceso administrativo y el proceso penal, son autónomos y, por consiguiente, las decisiones que se acaten en uno y otro son independientes. Que así lo ha manifestado la doctrina y la jurisprudencia en diversas ocasiones. (Ver Fallo de 23 de mayo de 1991, emitido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y Sentencia de 20 de octubre de 1995, de la Sala Tercera de la Corte Suprema)

Por otro lado, la Procuradora indica que yerra el demandante en sus apreciaciones sobre la supuesta violación del artículo 42 de la Resolución del Ministerio Público No. 2594 de 15 de noviembre de 1994, en cuanto a que en las investigaciones realizadas no conducen a pruebas concretas y efectivas en su contra.

Señala, que debe considerarse que las autoridades de la institución demandada iniciaron una prolija investigación de la que emanaron las pruebas irrefutables que comprueban los hechos acaecidos; máxime cuando los mismos están respaldados por los testimonios de quienes intervinieron en el proceso. Además, el demandante presentó recurso de reconsideración, en el cual se puso de manifiesto las razones por la cual disentía de la Resolución que decidió su destitución, mismo que fue resuelto, a través de la Resolución No. DG-PER-007-98 de 7 de julio de 1991.

## IV. DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA MARLINE ALLEN BROOKS

La señora MARLINE ALLEN BROOKS presentó denuncia el 31 de julio de 1997, en la Agencia de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito, en la cual se pone de manifiesto la actuación irregular del detective LUIS CHAVEZ MARTINEZ.

En la citada diligencia, la señora MARLINE ALLEN BROOKS, manifestó que laboraba como salonera en el Bar "Niño Beto", ubicado en el Sector de Las Mañanitas de Tocúmen. Sostiene que el 28 de julio de 1997, en horas de la mañana, le comunicaron que habían robado en el establecimiento. Que cuando entró al bar notó que la puerta estaba violentada y que hacia falta cierta cantidad de botellas, que en la noche anterior ella había inventariado. Agrega, que esa noche había dejado dentro de un cartón de leche la suma de NOVENTA Y NUEVE BALBOAS (B/.99.00), y que los puso debajo de la nevera.

Inmediatamente, el señor ALBERTO LAZARO, quien es socio del propietario del lugar, le dice que se monte al carro y le pregunta por el dinero, a lo cual responde que la misma se encuentra debajo de la nevera. Al proceder a buscar el dinero éste no fue encontrado, razón por cual ella solicitó que llamaran a la Policía.

Señala la señora MARLINE ALLEN BROOKS que esperó afuera de la cantina el regreso de sus jefes. Que como a las once de la mañana llegaron, acompañados de dos sujetos los cuales se identificaron como P. T. J. Uno de ellos es de estatura alta, grueso, cabello color negro, de tez culiso; el otro sujeto, de tez blanca, estatura baja, gordito, de cabello liso.

Al respecto indica, que uno de éstos sujetos le preguntó si había tocado algo, a lo que respondió que sólo buscó el dinero y no lo encontró. Que este señor procedió a poner un polvo con una brocha en una botella de Old Parr, luego entra en el servicio y busca en el techo. También se le ordenó que sacara los bolsillos, lo cual hizo en presencia del detective. Posterior a esto, sus jefes con los dos detectives comienzan a hablar, para luego interrogarla. Ella expresó, que no era necesario robarse el dinero si al día siguiente ya cobraba.

Añade la señora MARLINE ALLEN BROOKS, que se encontraba nerviosa y que le dijo a su jefes que cuanto querían que ella le pagara, que si querían todo su cheque. Que ellos, de común acuerdo, le piden TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00), en presencia de los miembros de la P. T. J.

En virtud que no tenía la suma de dinero solicitada, le manifestó a los señores APARICIO y LAZARO que la llevaran donde su hermana YACKELIN ALLEN, en la empresa Polymer para que le prestara el dinero. Al llegar a este lugar, le manifiesta a su hermana que sus jefes quieren que ella le pague la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00); luego su hermana habló con el señor APARICIO. Su hermana accedió a lo pedido y procedió a hacerle el cheque al señor APARICIO por la suma señalada, pero que se le pidió CINCUENTA BALBOAS (B/.50.00) más.

Luego se fueron al bar, y los dueños del local realizaron un inventario. Que como a las cuatro de la tarde, observa a éstos en una mesa, junto a los dos P. T. J., con una botella y manifestando que "ahora si iban a celebrar."

V. ACTUACION DE LA POLICIA TECNICA JUDICIAL

La Sala procedió al examen de los documentos que reposan en el expediente administrativo, en vías de determinar la actuación adoptada por la Policía Técnica Judicial, en la destitución del demandante.

En primer lugar, se observa el informe presentado por el Inspector VICTOR JIMENEZ Jefe de la Sede de la Policía Técnica Judicial del Distrito de San Miguelito, el 31 de julio de 1997, con respecto a la denuncia de la señora MARLINE ALLEN BROOKS.

En dicho documento se indica que la denunciante fue considerada, por sus jefes como responsable de la pérdida de un dinero en el Bar "Niño Beto". Que ante esta situación, ella solicitó que llamaran a la Policía, para lo cual uno de ellos sale en su vehículo y regresó acompañado de dos personas, los cuales se identificaron como funcionarios de la Policía Técnica Judicial de San Miguelito.

Inmediatamente se da inicio a una serie de indagaciones sobre lo ocurrido en el establecimiento, se hace una revisión del área y se le interroga a ella como responsable de haber sustraído el dinero antes mencionado. Agrega, que fue amenazada y coaccionada, a fin de que se responzabilizara del ilícito de marras y les entregara la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00), con el objeto de evitar que fuera trasladada al Centro Femenino, puesto que si éstos recibían el dinero requerido, no interpondrían denuncia en su contra.

Continúo indicando la señora MARLINE ALLEN BROOKS, que para no quedar detenida, optó por solicitarle al señor APARICIO, que se dirigieran a la Empresa Polymer, donde laboraba su hermana JACKELIN ALLEN BROOKS, para que ésta suministrara el dinero requerido.

Esta propuesta fue aceptada, y se apersonaron en compañía de los Detectives de la P. T. J., al lugar señalado. La Ingeniera JACKELIN ALLEN BROOKS fue informada de los hechos y amenazada con enviar a su hermana al Centro Femenino de Rehabilitación si no les hacía entrega de la suma de dinero indicada. Ante esta situación, ella accede a lo pedido y endosa un cheque a nombre de uno de los Jefes por la suma solicitada y se los entrega.

Finalmente, expresó la señora MARLINE, que en horas de la tarde, cuando

retiraba algunas de sus pertenencias del bar, observó a sus jefes en la compañía de los dos supuestos detectives de la P. T. J. que la habían interrogado, celebrando en una mesa con una botella de licor.

Destaca además el Inspector JIMENEZ, que los Detectives SANDOVAL y CHAVEZ MARTINEZ no entregaron los informes relacionados a la comisión efectuada al Bar "Niño Beto" y a la empresa Polymer; situación irregular, ya que el procedimiento consiste en que esta documentación debe presentarse al finalizar los turnos.

Como consecuencia de la denuncia mencionada, el Departamento de Responsabilidad Profesional (D. R. P.) instruyó el expediente No. 1081, por corrupción a los Detectives LUIS CHAVEZ MARTINEZ y LUIS SANDOVAL.

Entre las diligencias adelantadas para determinar la probable falta de los funcionarios investigados, podemos señalar las siguientes:

a) Declaración rendida por la Ingeniera JACKELIN ALLEN BROOKS, hermana de MARLINE ALLEN BROOKS, mediante la cual confirmó que el día 28 de julio de 1997, la misma se apersonó a la empresa Polymer, en compañía de unos señores, entre los cuales identifica a los Detectives LUIS SANDOVAL y LUIS CHAVEZ MARTINEZ, e indica que el primero de ellos, le explicó que eran funcionarios de la P. T. J., y que se estaban llevando a su hermana a la cárcel, porque había cometido un auto-robo, en el lugar donde trabajaba y la misma había llegado a un arreglo con los dueños del local. Que accedió a proporcionar un cheque por TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

b) Informe de Entrevista realizada a la señora ALICIA FONSECA, quien labora en la empresa Polymer. Señaló que fue quien recibió la llamada de parte de la recepcionista BELKYS, para que le llevara la cartera a la Ingeniera ALLEN. Que salió y vio que la misma se encontraba al fondo donde hay una caseta con dos personas del sexo masculino, luego le entregó la bolsa.

c) Informe de Entrevista a la señora BELKIS GUTIERREZ, labora como recepcionista en la empresa Polymer y puntualizó que la hermana de la Ingeniera ALLEN, llegó a este lugar llorando, acompañada de un muchacho alto. Luego ambas salieron a hablar con el muchacho.

d) Informe de Entrevista al señor DAVID GARCIA, quien labora en la misma empresa y manifestó que vio en la recepción al Detective LUIS SANDOVAL, ya que lo conoce desde pequeño porque vivían en Samaria, Sector No. 4.

e) Declaración rendida por MARLINE ALLEN BROOKS, en la cual narra lo ocurrido el 28 de julio de 1997, en el bar "Niño Beto".

f) Declaración rendida por VICTOR JIMENEZ, el cual ratificó el informe fechado 31 de julio de 1997.

g) Declaración rendida por PEDRO ALVARADO, funcionario de servicio en la P. T. J., quien se encontraba de turno, como Supervisor de Criminalística el 28 de julio de 1997, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Señala que fue informado por el Detective SANDOVAL, que a las 13:00 horas iba a salir a una inspección en compañía del Detective CHAVEZ MARTINEZ, en un vehículo particular, al sector de Mañanitas. Posteriormente, el Detective SANDOVAL retornó a la Agencia, a las 5:00 p. m. y le indicó que el caso estaba prácticamente resuelto, que había sido una empleada del local. Que este Detective no le entregó el informe técnico, pero que consta copia en los archivos de la Sección a su cargo.

También manifestó el compareciente, que el Detective SANDOVAL no le informó que se trasladó en compañía del Detective CHAVEZ MARTINEZ a la empresa Polymer. Que tampoco tenía conocimiento que estaban prohibidas las comisiones en vehículos particulares; excepto que las mismas fueran autorizadas por el Inspector Jefe o por el Asistente.

h) Declaración rendida por ABDIEL AGRAZAL, Asistente del Jefe de grupo, quien se encontraba encargado el 28 de julio de 1997 y fue quien ordenó la comisión de los Detectives LUIS CHAVEZ MARTINEZ y LUIS SANDOVAL. Explicó que al regreso de los Detectives, sólo le informaron que no había ninguna novedad, que sólo habían hecho la inspección y que no le entregaron ningún informe. Agregó que tenía conocimiento de que la comisión se iba a llevar a cabo en un vehículo particular.

Por otro lado, los Detectives LUIS CHAVEZ MARTINEZ y LUIS SANDOVAL, en sus descargos manifestaron que desconocían a qué tipo de arreglo había llegado el ciudadano ALEX APARICIO con la hermana de MARLINE ALLEN BROOKS; y aducen que, tampoco sabían que endosó un cheque por TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00), a favor del señor APARICIO.

Es pertinente indicar, que la denunciante identificó a los Detectives, al ver el libro donde reposan las fotos de las personas de los funcionarios de la Policía Técnica Judicial.

Consta además, en el expediente administrativo, copia del cheque No. 0000125 del Banco Continental, expedido a favor de ALEX APARICIO.

Como conclusión de la investigación, el Departamento de Responsabilidad Profesional, mediante Nota No. 427 de 27 de abril de 1998, dirigida al Director General de la Policía Técnica Judicial, señaló lo siguiente:

> "Con fundamento en los hechos descritos en párrafos que anteceden, Recomendamos la Destitución de los Detectives 10421, LUIS SANDOVAL Y 10207, LUIS CHAVEZ, puesto que el proceder de éstos, en el caso que nos ocupa, es contrario a derecho, a la moral y buenas costumbres, e incluso se constituye en un acto ilícito, al cual deben responder penalmente."

Por último, el Director de la P. T. J., mediante Nota No. A. L-0280-98 de 1 de mayo de 1998, solicitó previo concepto al Procurador General de la Nación, de acuerdo al artículo 20 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, para proceder a la destitución de los Detectives señalados.

Por consiguiente, el Director General de la Policía Técnica Judicial, expide la Resolución No. 28 de 10 de junio de 1998, mediante la cual se resuelve destituir al señor LUIS CHAVEZ MARTINEZ, por utilizar su cargo o influencias oficiales para coaccionar a alguna persona en beneficio propio o de tercero.

La parte actora presentó recurso de reconsideración contra está resolución, el cual fue resuelto por medio de la Resolución No. DG-PER-007-98 de 9 de julio de 1991, manteniendo el acto acusado en todas sus partes.

## VI. CRITERIO DE ESTA SALA

Cumplidos los trámites de rigor, esta Superioridad procede a resolver la presente controversia.

El demandante considera que la Resolución No. 28 de 10 de junio de 1998, por la cual se le destituye del cargo que ocupaba en la Policía Técnica Judicial, ha violado el literal c, del artículo 30 de la Resolución del Ministerio Público No. 25-94 de 15 de noviembre de 1994 (Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial).

La norma en mención dice así:

> "ARTICULO 30: De los Derechos: Son derechos de los funcionarios de la Policía Técnica Judicial sin perjuicio de los establecidos en la Constitución y la Ley, los siguientes:
>
> c. Gozar de estabilidad en el ejercicio del cargo mientras realice

el trabajo de acuerdo con la ley, siempre y cuando no incurra en las causales de despido que señala este Reglamento Interno."

Se alega que la presente disposición jurídica ha sido infringida en el concepto de violación directa por omisión, toda vez que el acto acusado le desconoce el derecho a la estabilidad en el cargo público que ostentaba, ya que sólo podía ser destituído del mismo si se suscitaba una causa justificada y plenamente comprobada, que lo ameritara.

La disposición recién transcrita es clara al establecer la estabilidad laboral de que gozan los funcionarios de esta Institución, la cual no se vera afectada, de no incurrir los mismos en las causales de destitución contempladas en el Reglamento Interno.

A juicio de este Tribunal, la conducta adoptada por el Director General de la Policía Técnica Judicial al proceder a destituir al Detective LUIS CHAVEZ MARTINEZ, no constituye una violación al acápite c de la Resolución del Ministerio Público No. 25-94 de 1994, ya que la misma se produjo en virtud de los hechos en que se vinculó al demandante, con relación a la denuncia presentada por MARLINE ALLEN BROOKS.

En la investigación disciplinaria realizada se determinó que ocurrieron circunstancias intimidantes contra la señora MARLINE ALLEN BROOKS, tendientes a que entregara una suma de dinero, a fin de que no la responzabilizaran de un supuesto delito de hurto. Esta conducta es contraria a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, cuyo texto es el siguiente:

"ARTICULO 11: Se prohíbe a los miembros de la Policía Técnica Judicial recibir dádivas, dinero, especies o estímulos ilegítimos por actos ejecutados en el desempeño de sus funciones o con motivo de estas, o aceptar promesas de esa naturaleza para retardar u omitir un acto que debe ejecutar en el ejercicio de sus funciones o para realizar un acto contrario a sus deberes.

Le es igualmente prohibido inducir a constreñir a terceros a dar o prometer dinero o provecho de cualquier clase a algún miembro de la Policía Técnica Judicial, por la realización u omisión de un acto, indebidamente a ellos o a terceros.

El miembro de la Policía Técnica Judicial que viole estas prohibiciones incurrirá en la pérdida inmediata del empleo, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar de acuerdo con el artículo 329 y siguientes del Código Penal." (El subrayado es nuestro)

De igual manera, esta norma contempla que la violación de estas causales tiene como consecuencia la destitución inmediata, distinguiendo a su vez, entre el proceso administrativo y el proceso penal, ya que advierte que el primero no causa perjuicio a la acción penal a que tenga lugar.

Si se comprueba el hecho, de que la actuación en cuestión configura una falta administrativa que contemple como sanción la remoción del cargo, conducta que puede constituir además un delito, la autoridad nominadora puede proceder a ejecutar la destitución del funcionario responsable.

Al respecto, la Corte Suprema ha manifestado que el procedimiento disciplinario no está sujeto a las mismas garantías que el proceso penal, y al explicar la diferencia entre el derecho penal y el proceso disciplinario, manifestó lo siguiente:

"También ha advertido la Corte cierta confusión entre el derecho penal y el poder disciplinario. Algunos demandantes tienden a creer que el poder disciplinario es una manifestación o una modalidad del

> derecho penal, sujeta a todas las prerrogativas o garantías de éste. Pero ello no es así. Todos los autores que tratan la materia hacen constar que el poder discrecional no forma parte del derecho penal.
>
> Así CAPITANT define el poder disciplinario en los siguientes términos:
>
> "Competencia del superior jerárquico o de órganos representativos de los cuerpos políticos, judiciales, administrativos o profesionales, para aplicar sanciones apropiadas, extrañas al orden penal, a aquellas personas que, colocadas bajo su autoridad o control, han faltado a los deberes profesionales o han adoptado una actitud capaz de comprometer el buen nombre del cuerpo al que pertenecen (CAPITANT, Henri. Vocabulario Jurídico, trad. española, Edit. Depalma, Buenos Aires, 1966, p. 32. (Subraya la Corte)
>
> A su vez, SIERRA ROJAS, al tratar del poder disciplinario, afirma lo siguiente:
>
> "No debe confundirse el poder disciplinario con el derecho penal aunque los dos tengan como carácter el de ser procedimiento de represión para fines sociales. El derecho penal se aplica a todos, el poder disciplinario sólo a los funcionarios o empleados en el ejercicio de su cargo. Las sanciones penales deben estar precedidas de las garantías constitucionales, en cambio el poder disciplinario implica procedimientos más atenuados, con una estimación discrecional ... " (SIERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo, 5a. ed., 1972, México, t. I, pp. 472-73). (Sentencia de 20 de octubre de 1995)

Por todo lo expuesto, en cuanto a lo argumentado por el recurrente con relación al sobreseimiento definitivo con que fue favorecido por el Juzgado Decimoquinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, por el delito contra el patrimonio, se entiende que ésta decisión no condiciona el resultado en el proceso disciplinario seguido por la Policía Técnica Judicial.

La Resolución No. 28 de 1998 también señala como fundamento legal, el artículo 45 de la Ley 16 de 1991 y el artículo 41 del Reglamento Interno, los cuales preceptúan:

> "ARTICULO 45: Todo funcionario o servidor de la Policía Técnica Judicial, por el hecho de serlo, está obligado a acatar esta Ley, y además leyes de la República; así mismo, a observar las normas morales y de buena costumbre que practica nuestra sociedad, tanto dentro de su vida pública como privada ..."
>
> "ARTICULO 41: De la Remoción del Cargo.
>
> Además de lo establecido en el artículo anterior, se procederá a la destitución del funcionario, en los siguientes casos:
>
> p. Utilizar su cargo o influencias oficiales para coaccionar a alguna persona en beneficio propio o de tercero."

El acto impugnado en su parte resolutiva, indica que se destituye al señor LUIS CHAVEZ MARTINEZ, por utilizar su cargo o influencias oficiales para coaccionar a alguna persona en beneficio propio o de tercero, causal que amerita la remoción de su cargo, de acuerdo a la precitada norma.

En este punto es de lugar resaltar, que la autoridad demandada está facultada para nombrar y remover a los servidores públicos, conforme a la Ley y previo concepto del Procurador, tal como lo estipula el artículo 20 de la Ley 16 de 9 de julio de 1991, procedimiento que fue utilizado en su actuación.

El recurrente considera además, que el acto impugnado vulnera el artículo 42 de la Resolución del Ministerio Público No. 2594 de 1994, cuyo texto es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 42: De la Investigación que Precede a la Destitución. La destitución de un funcionario deberá estar precedida por una investigación destinada a esclarecer los cargos que se le atribuyen a éste, en la cual se le permite ejercer su derecho a defensa. Dicha investigación debe ser realizada por el Departamento de Responsabilidad Profesional, tal como lo establece el artículo cuarenta y tres (43) de la Ley 16 de 1991."

En cuanto a esta disposición legal, señala el demandante que ha sido infringida en el concepto de violación directa por omisión, por cuanto que la investigación realizada no existen pruebas concretas y efectivas en su contra que justifiquen la destitución de su cargo público.

La Sala advierte que no le asiste la razón a la parte actora, ya que previo a la destitución del señor CHAVEZ MARTINEZ, se realizó una prolija investigación por parte del Departamento de Responsabilidad Profesional, la cual contiene suficientes elementos probatorios que demuestran la conducta irregular que desplegó el citado detective en la Comisión del 28 de julio de 1997, en el Bar "Niño Beto" y la empresa Polymer.

A foja 1 del expediente, consta la Resolución No. 28 de 1998, en la cual se señala que el demandante fue investigado por corrupción, a raíz de la denuncia presentada por MARLINE ALLEN BROOKS.

De acuerdo a las declaraciones vertidas tanto por el señor ALEX APARICIO (dueño del bar "Niño Beto") y la señora JACKELIN ALLEN, se comprueba que desde un principio el demandante tenía pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo. En estas circunstancias, le correspondía al Detective CHAVEZ MARTINEZ trasladar a las partes a la Agencia de San Miguelito para poner en conocimiento de sus superiores lo ocurrido, ya que no él no estaba facultado para ejecutar la practica de un procedimiento de conciliación extra procesal.

Del análisis efectuado, este Tribunal concluye que no prosperan los cargos impetrados a los artículos 30, acápite c y 42 del Reglamento Interno de la Policía Técnica Judicial, razón por la cual lo procedente es, desestimar las pretensiones de la parte demandante.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Resolución No. 28 de 10 de junio de 1998, mediante la cual se destituye al señor LUIS CHAVEZ MARTINEZ y la Resolución No. DG-PER-007-98 de 7 de julio de 1998, que constituye el acto confirmatorio, ambas dictadas por el Director General de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FÁBREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS & ABREGO, ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE ERIC FIDEL SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 219-04-450 DE 3 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE

DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Rubio, Alvarez, Solís & Abrego, actuando en representación de ERIC FIDEL SANTAMARIA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 219-04-450 de 3 de abril de 1996, dictada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado, se le exige al contribuyente ERIC FIDEL SANTAMARIA con R.U.C. 4-109-408 el pago de Impuesto Sobre la Renta y Seguro Educativo por la suma de B/.1,898.38 para el año 1993. También se señala que las sumas que contiene esa resolución se han liquidado con un recargo de diez por ciento (10%), y el interés mensual será liquidado a la presentación de esa resolución para su pago.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 219-04-450 de 3 de abril de 1996, dictada por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, y los actos confirmatorios contenidos en la Resolución N°219.04-80 de 23 de enero de 1998 y la Resolución N° 205-010 de 3 de marzo de 1998, dictadas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí y por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, respectivamente. Finalmente se solicita, que como consecuencia de esas declaraciones, el Ministerio de Hacienda y Tesoro se abstenga de cobrar los impuestos a que hace referencia la Resolución N° 219-04-450 de 3 de abril de 1996.

Los hechos u omisiones fundamentales de la acción, la firma Rubio, Alvarez, Solís & Abrego los sustentan en los siguientes términos:

> "PRIMERO: En el período constitucional 1989-1994, nuestro representado ocupó una curul en la Asamblea Legislativa.
>
> SEGUNDO: Manifiesta la Administración Regional de Ingresos que en el mismo período hubo discrepancias entre el Organo Legislativo y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, por cobros que debieron retenerse en la fuente y que no se hicieron.
>
> TERCERO: En virtud de la Ley 36 de 6 de julio de 1995, que adiciona un literal al artículo 701 del Código Fiscal, la discusión quedó allanada.
>
> CUARTO; El artículo 701 del Código Fiscal es de orden público y tiene efectos retroactivos por tanto, también la es el literal dicho en el hecho anterior contra la Resolución N° 219-04-450 de 3 de abril de 1996, presentamos Recurso de Reconsideración el 8 de enero de 1998, el recurso de Reconsideración fue resuelto por la propia Administración Regional de Ingresos mediante Resolución N° 219-04-80 de 23 de enero de 1998, en la cual se resolvió negar lo solicitado, con posterioridad se sustentó recurso de Apelación ante la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos, la cual negó la misma y mantiene en todas sus partes la Resolución N° 219-04-80 de 3 de abril de 1996.

Como disposición legal infringida sólo figura el literal k) del artículo 701 de la Ley 36 de 6 de julio de 1995, que en su texto expresa:

"ARTICULO 701:
...
K ... las sumas que en concepto de dietas y gastos de combustible pague el Organo Legislativo a los legisladores y miembros de la Junta Directiva, estarán sujetas a la retención de cinco por ciento (5%) en concepto de impuesto sobre la renta, que será remitido a la Dirección General de Ingresos dentro de los primeros quince días del siguiente mes. Las sumas así retenidas, se considerarán como pago definitivo, y no serán acumulables a otros ingresos para la determinación del impuesto sobre la renta. Esta disposición es de orden público y por ende tiene efecto retroactivo."

II. El informe explicativo de conducta del Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante Nota N° 219-01-786 de 17 de junio de 1998, el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, rindió el respectivo informe explicativo de conducta, el cual es visible de fojas 20 a 23 del expediente. En el informe se destaca que luego de una serie de investigaciones realizadas por el Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos con base a lo establecido en los Artículos 696, 710, 723, 724, 725, 728 y 746 del Código Fiscal y 12 del Decreto de Gabinete N°109 de 7 de mayo de 1970 se determinó que el contribuyente ERIC FIDEL SANTAMARIA, con Registro Unico de Contribuyente N° 4-109-408, no presentó su declaración de renta correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1993, al establecerse que sobre los salarios y sobresueldos devengados para ese año, la Asamblea Legislativa no retuvo la totalidad del Impuesto Sobre la Renta conforme a las normas establecidas en el Código Fiscal y el Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, hecho que fue aceptado por el recurrente.

Sostiene el Administrador Regional de Aduanas de la Provincia de Chiriquí, que el gravamen de oficio impuesto en este caso, recae sobre los sueldos y sobresueldos, por lo que no es aplicable lo previsto en el literal k) del artículo 701 del Código Fiscal, que hace clara referencia a las dietas y gastos de combustibles que pague el Organo Legislativo a los Legisladores y miembros de la Junta Directiva.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 312 de 11 de agosto de 1998, que es visible de fojas 31 a 37 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Mediante el acto administrativo demandando, se resuelve exigir al contribuyente ERIC FIDEL SANTAMARIA, con R.U.C. 4-109-408 el pago de Impuesto sobre la Renta y Seguro Educativo por la suma de B/.1,898.38 para el año 1993.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se destaca el hecho que en el período constitucional 1989-1994, en el cual el señor Eric Fidel Santamaría ocupó una curul en la Asamblea Legislativa, hubo discrepancias entre el Organo Legislativo y el Ministerio de Hacienda y Tesoro, por cobros que debieron retenerse en la fuente y que no se hicieron. De ese modo se alega la violación al artículo 701 del Código Fiscal, adicionado por la Ley 36 de 6 de julio de 1995, pues, en opinión del recurrente, la Administración aplicó una norma que ha sido adicionada en junio de 1995, adición que en nada elimina el carácter de interés social y efectos retroactivos.

Luego de examinados los argumentos que sustentan la violación que se invoca

y las constancias procesales, la Sala estima que yerra el actor en cuanto a la interpretación que le concede al literal k) del artículo 701 del Código Fiscal, adicionado por la Ley 36 de 6 de julio de 1995, pues, esta disposición hace clara alusión a las sumas que en concepto de dietas y gastos de combustible pague el Organo Legislativo a los Legisladores y miembros de la Junta Directiva, más no alude, como hace ver el demandante, a los dineros recibidos como salarios y sobresueldos.

Según consta en autos, luego de una investigación efectuada por parte de la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, a través de la Dirección de Auditoría Integral, se le exigió al señor Eric Fidel Santamaría, el pago del Impuesto Sobre la Renta dejados de pagar durante los meses comprendidos entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 1993, sumas que debieron ser descontadas de sus salarios y sobresueldos percibidos como legislador. A juicio de la Sala, no es aplicable entoces lo previsto en el artículo 701 Literal k) del Código Fiscal al caso que no ocupa, por tanto, no prospera la violación alegada.

Por las razones anotadas, lo procedente es declarar que no es ilegal el acto demandado y no acceder a las pretensiones formuladas.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 219-04-450 de 3 de abril de 1996, dictada por el Administrador Regional de Aduanas de la Provincia de Chiriquí, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ALMA L. CORTÉS EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS HENRÍQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO ALCALDICIO N° 1312 DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL ALCALDE DEL DISTRITO CAPITAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La licenciada Alma Cortéz en representación de CARLOS HENRÍQUEZ, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare, nulo por ilegal, el Decreto Alcaldicio N° 1312 de 6 de octubre de 1999 dictado por el Alcalde del Distrito de Panamá.

A foja 17 del expediente la parte actora solicita al Magistrado Sustanciador que, previa a la admisión de la demanda, requiera al señor Alcalde del Distrito de Panamá que envíe copia debidamente autenticada del Decreto Alcaldicio N° 1312 de 6 de octubre de 1999.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación. Con fundamento en la disposición antes mencionada y ante la falta de respuesta del funcionario demandado a la petición

presentada por el apoderado de la parte actora, que consta a foja 6 del expediente, se dispone solicitar a la Alcaldía del Distrito de Panamá, que envíe copia debidamente autenticada, con constancia de su notificación, del Decreto Alcaldicio N° 1312 de 6 de octubre de 1999 y del acto confirmatorio, es decir, la Resolución N° 796 de 17 de diciembre de 1999, ambos dictados por el señor Alcalde del Distrito de Panamá.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciada Alma Cortés, en representación de CARLOS HENRÍQUEZ DISPONE solicitar por Secretaría a la Alcaldía del Distrito de Panamá que en el término de cinco (5) días expida y envíe a esta Sala copia debidamente autenticada del Decreto Alcaldicio N° 1312 de 6 de octubre de 1999 y de la Resolución N° 796 de 17 de diciembre de 1999, dictados por el señor Alcalde del Distrito de Panamá, con las constancias de su notificación.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SILKA CORREA, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE AND WIRELESS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DPER-3553 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VISTOS:

La licenciado Silka Correa, actuando en nombre y representación de CABLE AND WIRELESS, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Nota DPER-3553 de 2 de noviembre de 1999, expedida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si cumple con todos los presupuestos procesales necesarios para ser admitida.

Al examinar la demanda se observa que la misma no cumple con los requisitos de orden formal exigidos para su admisión, toda vez que se acusa la violación de la Nota DPER-3553 de 2 de noviembre de 1999, expedida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos, mediante la cual se cita al Gerente General de Cable & Wireless Panamá, S. A. a comparecer a las oficinas de asesoría legal del Ente Regulador de los Servicios Públicos a rendir testimonio y presentar las pruebas que estime conveniente para sustentar su posición ante el incumplimiento de las normas vigentes en materia de telecomunicaciones, la cual constituye un acto preparatorio tendiente a resultar en una resolución definitiva. Esta última es la que puede ser objeto de impugnación y no los actos de investigación.

Al respecto cabe señalar lo establecido en el artículo 42 de la Ley N°135 de 1943, cuyo texto es el siguiente:

> "Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa,

lo que se entenderá cuando los actos resoluciones respetuosos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si éstas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación" (el subrayado es nuestro de la Sala).

En este caso no se configura un presupuesto procesal para concurrir ante la Sala Tercera, toda vez que es evidente que no estamos frente a una resolución definitiva.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la licenciado Silka Correa, actuando en nombre y representación de CABLE AND WIRELESS, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GUILLERMO QUINTERO, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO SANTAMARIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 29-99 DXR DE 16 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Guillermo Quintero, actuando en nombre y representación de PEDRO SANTAMARIA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución No.29-99 DxR de 16 de diciembre de 1999, dictada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, y para que se hagan otras declaraciones.

El licenciado Quintero solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado en la parte final de su libelo; no obstante, por razones de economía procesal, la Sala procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para su admisión.

Observa quien suscribe que el recurrente señala como infringido los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional. Al respecto, la Sala ha mantenido el criterio de que la demanda contencioso administrativa tiene como fundamento examinar la legalidad del acto jurídico impugnado, por lo cual lo correcto es señalar como normas infringidas preceptos legales y no preceptos constitucionales, lo cual es propio de una demanda de inconstitucionalidad y no de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, como la que en este caso nos ocupa.

Como la parte actora omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Guillermo Quintero, actuando en nombre y representación de PEDRO SANTAMARIA, para que se declare nula, por ilegal, la resolución No.29-99 DxR de 16 de diciembre de 1999, dictada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CÉSAR RUILOBA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALFONSO LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 77-99, DE 6 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL COMANDANTE PRIMER JEFE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Pendiente de admisión está la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado César Ruiloba, en nombre y representación de Juan Alfonso López, para que se declare nula, por ilegal, la Orden General No. 77-99, de 6 de octubre de 1999, emitida por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto impugnado, se decidió entre otras cosas, declarar "cesante el cargo remunerado del inspector JUAN ALFONSO LOPEZ, con cédula de identidad No. 8-159-216, quien ocupa la posición No. 232 en la Planilla No. 010 del Cuerpo de Bomberos de Panamá" (foja 1).

Una lectura del escrito de demanda bajo estudio, para comprobar si cumple los requisitos legales de admisión, ha determinado que no debe dársele el curso correspondiente, ya que no reune ciertos presupuestos jurídicos establecidos por la Ley de lo contencioso administrativo. El referido documento omite las siguientes exigencias legales: no expone el concepto en que supuestamente fueron infringidas por el acto acusado las disposiciones legales y reglamentarias invocadas; y el acto que confirma la Orden General No. 77-99, de 6 de octubre de 1999, o sea, la Orden General No. 84, de 15 de noviembre de 1999 (fojas 3-4), carece de constancia de que ha sido notificado al interesado.

En efecto, el actor aduce la violación de los artículos 91, 94 y 95 de la Resolución No. 1, de 13 de agosto de 1983, que aprueba el Reglamento General de Cuerpos de Bomberos de la República, publicado en la Gaceta Oficial No. 23,094, de 5 de agosto de 1996; y el artículo 2 de la Ley 9, de 20 de junio de 1994, que regula la Carrera Administrativa; sin embargo, no señala ni explica en qué forma han sido violadas estas normas jurídicas, tal como lo ordena el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946.

En cuanto al segundo defecto de la demanda, no existe constancia de notificación al interesado de la Orden General No. 84, de 15 de noviembre de 1999, proferida por el Comandante Primer Jefe de la institución bomberil, que incumple lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, norma que dispone que a la demanda "deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos", lo que sirve para ilustrar al Tribunal en cuanto a si la acción encaminada al

restablecimiento por lesión del derecho subjetivo fue presentada dentro del término legal e improrrogable de dos (2) meses previsto por el artículo 42b de la Ley 135 de 1943.

El incumplimiento de las formalidades descritas impiden que pueda dársele el curso a la presente demanda, de allí que la Magistrada sustanciadora debe abocarse a su no admisión.

De consiguiente,la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado César Ruiloba, en nombre y representación de Juan Alfonso López para que se declare nula, por ilegal, la Orden General No. 77-99, de 6 de octubre de 1996, dictada por el Comandante Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO CÉSAR DE LEÓN, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ARELY JESUS FUENTES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

Esta Corporación de Justicia conoce de la demanda de plena jurisdicción presentada por el licenciado Julio César De León, en nombre y representación de Arely Jesús Fuentes, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución S/N, de 6 de septimbre de 1999, expedida por el señor Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto administrativo acusado se decidió rescindir el contrato por servicios profesionales celebrado entre la entidad pública demandada y la señora Arely Jesús Fuentes.

La suscrita Magistrada Sustanciadora, al revisar la demanda en cuestión para corroborar si cumple con todos los requisitos que la Ley sobre la materia establece para este tipo de acción, se percata que la misma no debe ser admitida porque ha sido presentada extemporáneamente, es decir, después de transcurrido el plazo de dos (2) meses que prevé el artículo 42b de la Ley 135 de 1943. Esto es así porque, a fojas 1, consta una copia autenticada del acto administrativo acusado fechado el 6 de septimbre de 1999; contra dicho acto la señora Arely Jesús Fuentes interpuso mediante apoderado judicial recurso de apelación ante el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, impugnación que fue denegada por improcedente, según Resolución No. 1 D.M.83/99, de 10 de diciembre de 1999, cuya copia autenticada consta a fojas 3, notificada a su vez por Edicto No. 109/99, el mismo día de su expedición, por un término de veinticuatro (24) horas; de lo que se desprende que el día siguiente, 11 de diciembre de 1999, comenzó a correr el término de prescripción para la interposición del recurso en la esfera jurisdiccional de lo contencioso administrativo, cuyo objeto es el restablecimiento por lesión del derecho subjetivo que se afirma violado.

A fojas 82, en el sello estampado por Secretaría de esta Sala al escrito de demanda incoada por Arely Jesús Fuentes, se aprecia que ésta fue recibida a las 8:36 am., del día 22 de febrero del año 2000, aproximadamente once (11) días en exceso del previsto por el artículo 42b de la Ley 135 de 1943. Esta norma preceptúa señala textualmente lo siguiente:

> "ARTICULO 42b. La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución de acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda". (Destaca la Sala).

Como han transcurrido más de dos (2) meses desde la fecha en que se surtió la notificación a la interesada en la vía administrativa que habilita su acceso a la esfera contencioso administrativa, se ha producido el fenómeno de la prescripción de la acción, por lo que la demanda bajo examen no debe ser admitida, y a ello se procede.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la señora Arely Jesús Fuentes, por medio de abogado, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución S/N, de 6 de septiembre de 1999, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ESKILDSEN & ESKILDSEN, EN REPRESENTACIÓN DE CYBER-TECH INTERNACIONAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 245 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y EL VICEMINISTRO DE ECONOMÍA EN SU CALIDAD DE DIRECTOR NACIONAL DEL PROYECTO PAN/95/001, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Eskildsen & Eskildsen actuando en nombre y representación de CYBER-TECH INTERNACIONAL, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 245 de 19 de noviembre de 1999, dictada por el Ministro de Salud y el Viceministro de Economía en su calidad de Director Nacional del Proyecto PAN/95/001, y para que se hagan otras declaraciones.

Con la demanda se formuló una solicitud especial con el fin de que sean suspendidos provisionalmente los efectos de la resolución impugnada, previo al trámite de admisión de la demanda.

La empresa demandante participó en el Acto Público No. 001-98-1, para la elaboración de un Atlas de Salud, Segunda Fase del Estudio del Sistema de Información de Salud y Catastro de Infraestructura Física, para el Ministerio de Salud.

Dicho acto público fue adjudicado definitivamente a la empresa demandante,

mediante Resolución No. 42 de 24 de junio de 1999. Contra esta resolución, la empresa GEOINFO, S. A. interpuso recurso de reconsideración.

El acto impugnado, lo constituye la Resolución No. 245 de 19 de noviembre de 1999, la cual decidió el recurso presentado y en ella se dispuso revocar el contenido de la resolución antes citada y ordenar, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de Cargos, invitar a negociar al oferente que obtuvo el segundo puntaje más alto, a fin de que se pueda examinar su propuesta económica presentada para el Acto Público No. 001-98-1.

El demandante fundamenta su petición en los daños y perjuicios patrimoniales que alega sufrirá por conculcarse los derechos subjetivos ya adquiridos con la resolución primaria No. 42 de 24 de junio de 1999.

Argumenta el solicitante que el acto acusado es presuntamente contrario a las normas de contratación pública, por las siguientes consideraciones:

En primer lugar, porque la Comisión Técnica Evaluadora y el Banco Interamericano de Desarrollo, señalaron a CYBER-TECH INTERNACIONAL S. A., como una de las empresas precalificadas. Posterior a esto, se nombró otra Comisión Técnica Evaluadora para aplicar los criterios de ponderación sobre la mejor propuesta técnica y económica, calificando la empresa peticionaria, como la mejor dándole 100 puntos, dos más sobre GEOINFO S. A. El hecho que el Banco Interamericano de Desarrollo no haya objetado el criterio utilizado por las Comisiones Técnicas Evaluadoras para calificar, representa, a juicio de la demandante, la apariencia de buen derecho que se desprende de la violación flagrante de las normas que rigen la contratación pública, principalmente los artículos 42, 44 y 45 de la Ley 56 de 1995. Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, pueden suspenderse los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a criterio de la Sala, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave de díficil o imposible reparación.

En reiterados fallos se ha manifestado que para que se decrete la suspensión de los efectos del acto impugnado es necesario que la parte actora esté amparada por el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, es decir, que la resolución impugnada tiene que existir visos manifiestos de ilegalidad o lesivos a la integridad del ordenamiento jurídico.

Del examen preliminar del acto impugnado, se aprecia que en el mismo se indica que al momento de valorar los argumentos esgrimidos por GEOINFO, S. A., se concluyó que la Comisión Técnica Evaluadora no examinó, con la debida exactitud, si la empresa CYBER-TECH INTERNACIONAL, S. A., contaba con la "certificación autorizada en el área de capacitación", requisito vital para la operatividad del proyecto.

Esta situación puede corroborarse, a foja 45 del expediente, Sección VI, punto No. 4 del pliego de cargos, el cual exigía expresamente que la consultoría se ajustara, entre otros, al requisito de contar con una "Certificación autorizada en el área de capacitación".

Cabe añadir, que en el expediente tampoco existe prueba que apoye la afirmación de que el Banco Interamericano de Desarrollo manifestó no tener objeciones al informe de evaluación de ofertas preparado por la Comisión Técnica, como alega la empresa demandante en el décimo cuarto hecho de su libelo de demanda. (Véase foja 86)

Ante tales hechos, es la opinión de este Tribunal que la resolución impugnada se encuentra motivada en cuanto a la revocación de la resolución inicial y que a primera vista tal actuación no muestra signos de infracción de alguna norma jurídica.

Aparentemente la Resolución administrativa atacada se expidió con el propósito de subsanar algunos requerimientos que fueron soslayados al momento de

efectuar la adjudicación definitiva, específicamente el relativo a la certificación autorizada que tenía que tener la empresa CYBER-TECH INTERNACIONAL, S. A. en el área de capacitación requerida. Hay que tener en cuenta que dicha resolución se expidió en atención a un recurso de reconsideración propuesto por otra de las entidades licitantes, motivo por el cual hasta este momento, la Sala no advierte que existan ostentibles motivos de ilegalidad en el proceder de la entidad demandada.

En estas circunstancias, esta Superioridad estima que no se desprenden, prima facie, violaciones a las normas que se citan como infringidas que impongan la necesidad urgente de adoptar la medida cautelar de suspensión.

Por otra parte, el demandante manifiesta que el acto acusado le produce perjuicios patrimoniales, situación que hasta el momento no cuenta con el imprescindible sustento probatorio.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 245 de 19 de noviembre de 1999, dictada por el Ministro de Salud y el Viceministro de Economía en su calidad de Director Nacional del Proyecto PAN/95/001.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ANAYS ALVAREZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACION PARA LA DEFENSA DEL PUEBLO (FUND.DEPU), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA N°256-D.A.L. DICTADA POR EL MINISTERIO DE JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Anays Alvarez, actuando en nombre y representación de la FUNDACION PARA LA DEFENSA DEL PUEBLO (FUN.DE.PU), ha interpuesto demanda contencioso contencioso administrativa de plena jurisdicción para qeu se declare nula, por ilegal, la Nota No. 256-D.A.L., dictada por el MINISTERIO DE JUVENTUD, LA MUJER, LA NIÑEZ Y LA FAMILIA, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado 8 de febrero del 2000, visible a foja 76 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, conforme a lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, que permite el desistimiento en cualquier estado del proceso, y los artículos 1073 y 1080 del Código Judicial que recogen el mismo principio.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Anays Alvarez, actuando en nombre y

representación de la FUNDACION PARA LA DEFENSA DEL PUEBLO (FUN.DE.PU), DECLARA que ha terminado el presenta proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SABINO E. VARGAS EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA MONTANARI DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 216 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Sabino Vargas en representación de MARÍA MONTANARI DE HERRERA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, el Decreto N° 216 de 22 de noviembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Educación, la negativa tácita por silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la demanda, la Magistrada Sustanciadora considera que la misma no cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En primer lugar, la demandante no cumplió con la formalidad exigida en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, de presentar copia autenticada del acto impugnado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos. Lo anterior es así porque se pide la nulidad del Decreto N° 216 de 22 de noviembre de 1999, y el documento que se aporta en original es la Nota N° DP-DOPA-6930 de 24 de noviembre de 1999, emitida por la Directora de Personal, en la que transcribe parcialmente el decreto impugnado para poner en conocimiento de la demandante del acto de destitución dictado en su contra.

En segundo lugar, cabe señalar que la parte actora al notificarse de dicha Nota, solicitó reconsideración con apelación en subsidio del acto de destitución (fs. 7-12) y ha concurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa alegando el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, y para demostrar su existencia aporta como prueba un documento fechado el 31 de enero de 2000, legible a fojas 14, en el cual pide al Director de Asesoría Legal del Ministerio de Educación que le comunique si ha recaído o no decisión sobre el recurso de reconsideración interpuesto; sin embargo, no aporta la certificación para acreditar que efectivamente en la fecha de presentación de su demanda no ha recaído decisión sobre el recurso, ni tampoco solicita en la demanda que antes de admitirla se pida al funcionario demandado dicha certificación.

El ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 ha sido interpretado por la Sala en el sentido de que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

En fallo fechado 18 de octubre de 1996, esta Sala puntualizó lo siguiente:

> "Sin embargo, tales aseveraciones no han sido debidamente comprobadas como bien lo manifestara este Tribunal ad-quem en el Auto objeto de impugnación. Se observa a f. 9 del expediente, que pese a que el recurrente solicitó al Magistrado Sustanciador requerir del Ministerio de Educación el envío de una serie de copias autenticadas, así como también, ciertas certificaciones relacionadas con su mandante, en ningún momento solicitó al Magistrado Sustanciador requerir de dicho Ministerio, certificación de si sobre el referido recurso, había recaído o no decisión, a los efectos de acreditar debidamente el agotamiento de la vía gubernativa.
>
> Retomando la idea anterior, tal exigencia no es suficiente para acreditar la negativa tácita de la administración si no se hace acompañar necesariamente a la demanda, copia autenticada del escrito contentivo del recurso gubernativo con fecha de presentación ante la institución demandada, más la constancia o certificación de esta última, de que pasados los dos (2) meses a los que alude el artículo 36 (ordinal 1), de la Ley 135 de 1943, no ha recaído decisión resolutoria sobre el mismo.
>
> El cumplimiento de este requisito por parte de la jurisprudencia reiterada de esta Sala tiene como finalidad y encuentra plena justificación en el hecho de que en la medida en que se acredite debidamente dicha negativa, se comprueba plenamente el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, requisito esencial para ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley No. 33 de 1946, en concordancia con el artículo 22 de la misma Ley. (Registro Judicial de octubre de 1996, págs. 388 y 389).

Como en este caso, tal como ha sido expuesto no se ha presentado copia autenticada del acto impugnado y no se ha probado el agotamiento de la vía gubernativa por silencio adminstrativa, no debe dársele curso a la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Sabino Vargas, en representación de MARÍA MONTANARI DE HERRERA, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 216 de 22 de noviembre de 1999, emitido por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Educación, y la negativa tácita por silencio administrativo.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN CANIMAR IMPORT AND EXPORT, S. A., CUYO APODERADO GENERAL ES EL SEÑOR DOV BINDER, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DECA 1672-99, DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 1999, EMITIDA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE CUARENTANA AGROPECUARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADAMINISTRATIVA.**

**VISTOS:**

**El licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, actuando en nombre y representación de la empresa Canimar Import and Export, S. A., cuyo apoderado general es el señor Dov Binder, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jusridicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DECA 1672-99, de 25 de septiembre de 1999, emitida por el Secretario Ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria, dependencia del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.**

**La Nota demandada la envía el doctor Pablo Constantino Moreno, Director de Cuarentena Agrpecuaria del MIDA, al señor Dov Binder, en su calidad de apoderado general de la mencionada empresa, y en su parte medular expresa:**

> **"En revisión a las solicitudes de Licencia Zoosanitaria de Importación No. 1174, para la importación de 210,000 kg de leche evaporada "Regalo" procedente de Canadá, y de la cual fue autorizada por el Ex-Ministro de Desarrollo Agropecuario, la cantidad de 30,000 kg. y la Licencia No. 1361 para la importación de 171,000 kg., le informamos que según los controles que constan en esta Institución, se han encontrado algunas irregularidades en la tramitación de las Licencias de Importación, violando lo establecido en materia de Cuarentena Agropecuaria.**
>
> **Con fundamento en lo establecido en el artículo 51 numeral 10 de la Ley No 23 fechada el 15 de julio de 1997, le informamos que, son funciones de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, la retención para el posterior decomiso de la mercancía en referencia, la cual se encuentra depositada en algunos establecimientos nacionales" (foja 1).**

**Adjunta a la demanda indicada, ha sido incluida una solicitud de suspensión provisional de los efectos de esta Nota, petición incidental que esta Sala debe resolver antes de emitir decisión de fondo en el presente caso.**

**Al analizar preliminarmente la medida provisoria pedida, a juicio de los que suscriben, no debe accederse a suspenderse los efectos del acto impugnado, porque éste no incurre en violación palmaria u ostensible del ordenamiento jurídico, lo que constituye un elemento fundamental para poder considerarla amparada por el principio de "fumus boni iuris" o apariencia de buen derecho.**

**El artículo 73 de la Ley 135 de 1943, orgánica de lo contencioso administrativo, preceptúa que la Sala "puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave". Como se observa, esta es una disposición legal que atribuye al máximo tribunal de lo contencioso administrativo una facultad de carácter discrecional con el propósito de evitar un perjuicio notoriamente grave, que la jurisprudencia ha dicho debe ser probado.**

**En el presente asunto, el actor alega que la medida adoptada por el acto administrativo que acusa le causará perjuicios; sin embargo, no aporta los elementos de convicción o pruebas que apoyen su pretensión cautelar. Como ha**

tenido la oportunidad de recalcar esta Sala en múltiples decisiones anteriores, no basta con sólo afirmar que el acto reprochado ocasionará perjuicios graves e inminentes, sino que es esencial acompañar prueba de dicha afirmación. El documento que reposa a fojas 69, consistente en una declaración jurada rendida ante Notario por el señor George Fayez Dagher Snono, asesor de mercadeo de la empresa Canimar Import and Export, S. A., no reune, según la sana crítica aplicada, el requisito de prueba a que se refiere este Tribunal.

Estima la Sala que la suspensión, además, carece de objeto por cuanto en autos, fojas 31 a 42, existen constancias de diligencias de retención efectuadas por la autoridad competente en varios comercios de la localidad racaída sobre el producto leche evaporada "Regalo", medida que ha sido ejecutada y por tanto no puede suspenderse.

En mérito de lo expuesto, la Sala debe negar la solicitud de suspensión provisional bajo examen, sin que ello constituya una decisión del fondo de la controversia principal.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional presentada por el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en nombre y representación de la compañía Canimar Import and Export, S. A., dentro del proceso administrativo de plena jurisdicción incoado para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DECA 1672-99, fechada el 25 de septiembre de 1999, expedida por el Director Ejecutivo de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE MARTA TRINIDAD VÁSQUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 99 (130) 546 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Eduardo Ríos Molinar, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de MARTA TRINIDAD VÁSQUEZ, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 99 (130) 546 de 19 de noviembre de 1999, dictado por la Directora General de la Lotería Nacional de Beneficencia.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda, para determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos que exige la ley, para que la misma pueda ser admitida.

Observa el suscrito, que en el libelo la parte actora solicita en el punto cuya expresión dice: "Lo que se demanda", que se declare nulo por ilegal el Resuelto N° 99 (130) 546 de 19 de noviembre de 1999. Sin embargo, el recurrente sólo aportó como prueba copia de la Nota N° 99 (130) 445 de 19 de noviembre de 1999, por medio de la cual se le notifica de la destitución de su cargo, que no

constituye el acto acusado de ilegal. El artículo 44 de la Ley 135 de 1943 exige que al libelo de demanda se acompañe el acto debidamente autenticado como uno de los prerequisitos sine-qua-non para la admisión del mismo. La disposición antes mencionada a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos".

La Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones la importancia de aportar el acto que se acusa de ilegal y que además debe estar autenticado, formalidades procesales que deben cumplirse en su totalidad, para que la demanda pueda ser presentada adecuadamente y la misma pueda imprimírsele el trámite correspondiente.

Además, quien suscribe desea indicar al demandante tratándose el presente caso de una destitución como servidor público, es necesario que acompañe la prueba idónea de que como tal, estaba amparado por una ley especial o de Carrera Administrativa que es la que le establece la prerrogativa de estabilidad en el cargo. Las carreras en los servicios públicos sólo pueden establecerse mediante ley conforme a los principios de sistema de méritos, ya que de lo contrario, su pretensión no podrá verse satisfecha en atención a que es potestad discrecional de la entidad demandada el libre nombramiento y remoción de sus miembros.

Se concluye en consecuencia, que la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción no puede ser admitida conforme a las circunstancias anteriormente descritas.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Licenciado Eduardo Ríos Molinar en representación de MARTA TRINIDAD VÁSQUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 219-04-324 DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Trujillo, Vidal y Miranda, actuando en representación de STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 219-04-324 de 20 de marzo de 1997, dictada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 18 de febrero de 2000, visible a foja 41 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la acción contencioso

administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por el recurrente es procedente y debe acogerse, conforme a lo perceptuado en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 66. En cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso-administrativo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la firma Trujillo, Vidal y Miranda, en representación de STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A. y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURIDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLCUIÓN N° 219-04-304 DE 20 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINITRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Trujillo, Vidal y Miranda, actuando en nombre y representación de STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la resoluión No. 219-04-304 de 20 de marzo de 1997, dictada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Chiriquí, actos confirmatoriso, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 22 de febrero del 2000, la firma Trujillo, Vidal y Miranda presentó desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la firma Trujillo, Vidal y Miranda, actuando en nombre y representación de STANDARD FRUIT DE PANAMA, S. A., y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENICADO CARLOS ARAÚZ EN REPRESENTACIÓN DE DEOCLIDES MELENDEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N°11-97 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N°4 DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE. ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Carlos Araúz, actuando en representación de DEOCLIDES MELENDEZ, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución de Desahucio N°11-97 de 12 de noviembre de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N°4 dictada por el Ministerio de Vivienda, el acto confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante la Resolución de Desahucio N° 11-97 de 12 de noviembre de 1997, se resuelve decretar el desahucio del arrendatario DEOCLIDES MELENDEZ V., quien ocupa el Apto. y/o Cuarto N°20, de la Casa y/o Edificio N°14, ubicada en calle 68 del Corregimiento de San Francisco. También se le concede un término de seis (6) meses improrrogables para que entregue al Arrendador el cuarto que actualmente ocupa en el Edificio N°14, ubicado en la Calle 68 del Corregimiento de San Francisco (Paseo Peatonal de San Francisco).

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en que la Sala declare la ilegalidad y consiguiente nulidad de la Resolución N°11-97 de 12 de noviembre de 1997, expedida por la Comisión de Vivienda Nª4 del Ministerio de Vivienda y de la Resolución N°11-98 de 26 de marzo de 1998, expedida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción, se destaca que en el acto demando, la Comisión de Vivienda N°4, en su parte considerando no hace mención alguna de la prueba documental pública que fuera presentada el día de la Audiencia, consistente en el Decreto 450 de 8 de mayo de 19996, expedido por la Alcaldía del Distrito de Panamá, el cual crea el Paso Peatonal del Corregimiento de San Francisco en la Calle 68, que es precisamente donde se encuentra el Edificio N°14, el cual presenta características Anglo- Caribeña. También se afirma que el Considerando de la Resolución de Desahucio N°11-97 expedida por la Comisión N°4, no tomó en consideración la prueba documental pública presentada en Audiencia, consistente en una Resolución N° 29-96 de 26 de marzo de 1996 expedida por el Ministerio de Vivienda debidamente refrendada por el señor Ministro de Vivienda, que en su artículo tercero prohíbe a los dueños de fincas a lo largo de la vía peatonal, demoler las edificaciones con características ANGLO-CARIBEÑA; en su artículo cuarto establece pautas en relación con las nuevas edificaciones y con las que se reformen, mismas que no serán superior a los tres pisos altos; y, el artículo quinto, que prevé que corresponderá a la Dirección de Proyectos Especiales y a la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, aprobar los planos para que las "edificaciones nuevas o las que se reformen", cumplan con las normas y condiciones establecidas en esa resolución, y no como hace ver la Administración, a casos de demolición.

En cuanto a las disposiciones legales que se alegan como infringidas, figuran el artículo 27 del Decreto Ejecutivo N°87 de 28 de septiembre de 1993; los Artículos Segundo y Tercero de la Resolución N°29-96 de 26 de marzo de 1996,

expedida por el Ministro de Vivienda cuyos textos se reproducen a continuación:

> "ARTICULO 27: El fallo emitido deberá contener un resumen de los hechos, con indicación de los que se estimen probados, y los medios por las cuales lo han sido; los considerandos de hecho y de derecho que motivan la resolución; la parte resolutiva, que deberá decidir cada uno de las partes planteadas el plazo para su cumplimiento, los recursos que caben contra la resolución y el término dentro del cual deben interponerse."
>
> "ARTICULO SEGUNDO: Todo proyecto de construcción, remodelación o adición a las edificaciones existentes, comprendido en el tramo denominado VIA PEATONAL, deberá mantener la arquitectura ANGLO-CARIBEÑA que existe en el sector."
>
> "ARTICULO TERCERO: Queda prohibido a los dueños de fincas a lo largo de la Vía Peatonal, demoler las edificaciones con características ANGLO-CARIBEÑA."

En opinión del demandante, el artículo 27 del Decreto Ejecutivo N°87 de 28 de septiembre de 1993, se violó por falta de aplicación, dado que la Resolución de Desahucio N° 11-97 expedida por la Comisión de Vivienda N°4 con fecha 12 de noviembre de 1997, no contiene un resumen de los hechos con indicación de los que se estimen probados y los medios por los cuales lo han sido, ni los considerandos de hecho y de derecho que motivan la resolución.

En cuanto al Artículo Segundo de la Resolución N° 29-96 de 26 de marzo de 1996, se violó a juicio de la parte actora por interpretación errónea, pues, no hace referencia a demoliciones, como es el caso que nos ocupa, sino a construcción, remodelación y adición a las edificaciones existentes comprendidas en tramo denominado VIA PEATONAL, es decir, la Calle 68 del Corregimiento de San Francisco, Distrito de Panamá.

Con respecto al Artículo Tercero de la Resolución N° 29 de 26 de marzo de 1996, afirma el representante de la parte actora que se violó de forma directa por comisión, dado que se le concede seis (6) meses improrrogables a su poderdante para que entregue al Arrendador el cuarto N°20, ya que se accede a la petición de desahucio por demolición solicitada por el demandante-arrendador, pasando por alto lo previsto en esta disposición, que prohíbe taxativamente a los dueños a lo largo de Vía Peatonal, el demoler edificaciones con características ANGLO-CARIBEÑA, la que sin duda presenta el Edificio N°14 de la Calle 68 del Corregimiento de San Francisco, donde se encuentra ubicado el Cuarto N°20.

II. El informe explicativo de conducta expedido por el Presidente de la Comisión de Vivienda N°4 y el escrito de oposición a la demanda.

La demanda presentada fue admitida en resolución de dieciséis de junio de 1998, y se hizo traslado de la misma al Presidente de la Comisión de Vivienda N°4, a los señores ITZEL IVONNE DE GRIMALDO y FLORENCIO A. GRIMALDO, y a la Procuradora de la Administración.

Mediante el Informe N° 7D00-168-98 de 22 de mayo de 1998, el Presidente de la Comisión de Vivienda N°4, rindió el respectivo informe explicativo de conducta el cual es visible de fojas 41 a 43 del expediente. En el informe se señala que el 15 de julio de 1997, se presentó ante la Comisión de Vivienda de Turno, un proceso de Desahucio por Demolición en contra de Deoclides Melendez, mismo que recae sobre el Cuarto N°20, de la Casa 14, ubicada en Calle 68, Corregimiento de San Francisco. Según el informe, la demanda fue acogida en virtud de que se aportaron las pruebas exigidas por la Ley, tales como Certificado de Propiedad expedido por el Registro Público, Paz y Salvo del Inmueble; los Permisos de Sanidad y de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá, los cuales se observan de fojas 3 a 8 del expediente, se procedió a dar traslado al demandado, señor Deoclides Meléndez quien contestó dentro del término

concedido por la Ley. Según el Presidente de la Comisión de Vivienda N°4, analizadas las pruebas aportadas, se decide conforme al Artículo 46 y 47 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, conceder del desahucio, pues, se cumplió con llenar los requisitos de presentar el Permiso de Demolición que concede el Municipio de Panamá a través de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales y la indemnización a que tiene derecho el arrendatario.

En cuanto al permiso de demolición, quien preside la Comisión de Vivienda N° 4, aclara que la Ley no lo faculta a cuestionar dicho permiso. En ese mismo orden de ideas, sostiene que el Artículo Quinto de la Resolución N°29-96 de 26 de marzo de 1996 emitida por el Ministerio de Vivienda, consciente de que es responsabilidad del Municipio de Panamá conceder o negar tales permisos, prevé que esa Institución, a través de la Dirección de Proyectos Especiales y de la Dirección de Obras y Construcciones, le corresponde aprobar los planos para que las edificaciones nuevas o las que se reformem cumplan con las normas y condiciones establecidas en dicha resolución.

Los señores Itzel Ivonne de Grimaldo y Florecio A. Grimaldo, presentaron en calidad de propietarios su oposición a la demanda presentada. En cuanto a los hechos expuestos en el escrito de oposición, se destaca que el señor DEOCLIDES MELENDEZ, no ocupa la fachada exterior del inmueble, sino por el contrario, tiene arrendado un cuarto en la parte trasera con características de barraca. En cuanto a las consideraciones de derecho se sostiene que la Resolución de Desahucio N°11-97 expedida por la Comisión de Vivienda N° 4 con fecha 12 de noviembre de 1997, no viola el artículo 27 del Decreto Ejecutivo N°87 de 28 de septiembre de 1993, dado que los aspectos allí previstos fueron considerados. En cuanto al artículo segundo y tercero de la Resolución N°29-96 de 26 de marzo de 1996, alegados por la parte actora como infringidos, se afirma que no han sido conculcados, pues, las características ANGLO-CARIBEÑAS de la fachada frontal de su edificio han de ser mantenidas cuando se ejecute el proyecto de construcción del edificio, tal como lo establece el Decreto N° 450 de 8 de mayo de 1996, expedido por la Alcaldía del Distrito Capital, y bajo esas condiciones fue que se aprobaron los respectivos planos que avalan y autorizan la nueva edificación.

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Fiscal N° 362 de 17 de setiembre de 1998, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia para lo cual entra a examinar las disposiciones legales señaladas como infringidas y los argumentos que la sustentan, conjuntamente con el resto de la documentación que reposa en el expediente.

El acto demandado es la Resolución N° 11-97 de 12 de noviembre de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N°4 del Ministerio de Vivienda, en la que se ordena decretar el desahucio del arrendatario señor DEOCLIDES MELENDEZ, quien ocupa el Cuarto N°20, Edificio 14, ubicado en Calle 68 del Corregimiento de San Francisco. En la mencionada resolución se le concede un término de seis (6) meses improrrogables para que entregue al Arrendador el cuarto.

Al examinar la violación que se invoca al artículo 27 del Decreto N°87 de 1993, la Sala no comparte los planteamientos que la sustentan, puesto que si se observa el contenido de la Resolución N° 11-97, salta a la vista que las formalidades previstas en el artículo 27 del Decreto de Gabinete N° 87 de 1993 fueron cumplidas. Ello es así, pues, se advierte que en la parte relativa a "los considerandos" de la resolución que se demanda, se señala que los señores ITZEL IVONNE DE GRIMALDO y FLORENCIO GRIMALDO en calidad de propietarios, demostraron que necesitan el desahucio para posteriomente demoler, entre otros, el Cuarto N°20, del Edificio N°14 ubicado en Calle 68 del Corregimiento de San Francisco, causal que se ajusta, según esa Comisión, a lo que contempla el Artículo 46 del Capítulo VIII de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973. En cuanto a la parte

"resolutiva", la Sala igualmente observa que se decreta el desahucio por demolición al señor DEOCLIDES MELENDEZ quien ocupa el inmueble antes detallado, se le concede un término de seis (6) meses para su desocupación y, finalmente, se le advierte al arrendatario que contra esa resolución procede el Recurso de Apelación ante la Dirección General de Arrendamientos, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación. En razón de ello, a juicio de la Sala no prospera este cargo.

Los artículos segundo y tercero de la Resolución N° 29-96 de 26 de marzo de 1996, expedida por el Ministro de Vivienda, la Sala los analiza conjuntamente por estar relacionados en el concepto de la violación y los argumentos que la sustentan, mismos que se centran en establecer que el acto demandado pasa por alto la prohibición consistente en demoler las edificaciones con características Anglo-Caribeña.

Efectuado el análisis de la Resolución N° 29-96 de 26 de marzo de 1996, "Por la cual se permiten actividades comerciales y turísticas en las fincas ubicadas en el tramo de la Calle 68 Este, comprendido entre las avenidas 3A Sur y 3B Sur, del Corregimiento de San Francisco", expedida por el Ministerio de Vivienda y publicada en la G.O. N° 23,013 de 11 de abril de 1996, la Sala advierte que debe partirse del hecho que la resolución en mención fue expedida a solicitud del Municipio de Panamá para tal fin, tal como se plantea en el párrafo final relativo a "los considerandos". En adición a ello, no debe perderse de vista que, si bien es cierto que en la Resolución N°29-96 de 26 de marzo de 1996 se deja sentado que el Ministerio de Vivienda de conformidad con los literales "q" y "v" del artículo 2 de la Ley N°9 de 25 de enero de 1973, es competente para "levantar, regular y dirigir los planos reguladores, lotificaciones, zonificaciones, urbanizaciones, mapas oficiales, líneas de construcción y todos los demás asuntos que requiera la planificaciones de las ciudades con la cooperación de los Municipios y otras entidades públicas; así como establecer regulaciones sobre las zonas industriales, residenciales y comerciales de los centros urbanos y urbanizaciones en general", la Sala también advierte que no es menos cierto que existe regulación específica para la materia que nos ocupa. En efecto, mediante el Decreto N° 450 de 8 de mayo de 1996, "por el cual se crea el Paseo Peatonal de San Francisco en la Calle 68 del Corregimiento de San Francisco y se reglamenta su conservación en general", publicado en la G.O. N° 23,037 de 16 de mayo de 1996, claramente se prevé en su Artículo Sexto, que es la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, quien extiende "el permiso de construcción o mejoras, previa opinión favorable de la Dirección de Proyectos Especiales del Municipio de Panamá, quien será el Agente Rector en los diseños arquitectónicos".

Lo anterior, a criterio de la Sala, evidencia claramente que de ningún modo debe endilgársele al acto demandado la violación a los artículos Segundo y Tercero de la Resolución N°29-96 de 26 de marzo de 1996, pues, la orden de desahucio se decretó, como fue planteado en el informe explicativo de conducta expedido Presidente de la Comisión de Vivienda N°4, una vez fueron aportadas pruebas, entre otras, la del permiso de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá. A la Comisión de Vivienda N°4 del Ministerio de Vivienda, no le corresponde según lo planteado, al momento de ventilar un proceso de desahucio cuando se trate de la Vía Peatonal de San Francisco, determinar si las mejoras o edificaciones que se pretendan efectuar en los inmuebles allí ubicados, mantienen la arquitectura Anglo-Caribeña, toda vez que para ello claramente se asigna a la Dirección de Proyectos Especiales del Municipio de Panamá, como Agente Rector en los diseños arquitectónicos, para que emita su concepto favorable previamente a la expedición del permiso de construcción o mejoras que extiende la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá. Se desestiman, pues, estos cargos.

Por las razones antes anotadas, la Sala concluye que no es ilegal la Resolución N° 11-97 de 12 de noviembre de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N°4 del Ministerio de Vivienda, por tanto no se accede a las pretensiones formuladas.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 11-97 de 12 de noviembre de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N°4 del Ministerio de Vivienda, como tampoco lo son sus actos confirmatorios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE IRMA H. KHATUM MOLLICK, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, EL DECRETO EJECUTIVO N° 221 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LA NOTA N° DP-DOPA-6429 DE 15 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Teófanes López, actuando en nombre y representación de IRMA KHATUM MOLLICK, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 221 de 3 de diciembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República, por conducto del Ministerio de Educación, la Nota DP-DOPA- 6429 de 15 de octubre de 1999, dictada por la Directora Nacional de Personal, la negativa tácita por silencio administrativo; y para que se haga otras declaraciones.

A foja 17 del expediente la parte actora solicita que antes de admitir la demanda, la Magistrada sustanciadora pida a la señora Ministra de Educación expida una certificación en donde conste lo siguiente:

a) Que mediante Nota DP-DOPA-6429 de 15 de octubre de 1999, suscrita por la Directora Nacional de personal, se le destituyó de la posición de Planificadora III-Supervisora, cargo que ocupaba en la Planilla 0033-023, empleada N° 33778.

b) Que contra dicha destitución interpuso y formalizó recurso de reconsideración mediante escrito presentado el 25 de octubre de 1999.

c) Que hasta la fecha el Ministerio de Educación no ha resuelto dicha petición ni se ha pronunciado sobre la reconsideración interpuesta produciéndose silencio administrativo.

El demandante prueba que hizo la solicitud anterior, mediante el escrito visible a foja 8 del expediente del proceso contencioso administrativo.

Ahora bien, el ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos rcurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Por otra parte, el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el

Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

Con fundamento en las disposiciones citadas y ante la falta de respuesta del funcionario demandado a la petición hecha por la parte actora, se dispone solicitar a la Señora Ministra de Educación la certificación requerida pro el demandante.

En consecuencia, la magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Teófanes López, en nombre y representación de IRMA KHATUM MOLLICK, DISPONE solicitar por Secretaría a la Señora Ministra de Educación:

1. Que certifique si ha sido o no resuelto el recurso de reconsideración promovido pro la recurrente contra la Nota DP-DOPA-6429 de 15 de octubre de 1999, suscrita por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación, y 2. Si el recurso de reconsideración ha sido resuelto, que expida y envíe copia autenticada del acto mediante el cual se resolvió el recurso y la constancia de su notificación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° JD-946 DE 10 DE AGOSTO DE 1998, EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, Y SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma forense Alemán, Cordero, Galindo & Lee, actuando en representación de Cable & Wireless Panamá, S. A., interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulas, por ilegales, las Resoluciones N° JD-946 de 10 de agosto de 1998 y N° JD-1053 de 2 de octubre de 1998, proferidas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Después que la señora Procuradora de la Adminsitración contestara el traslado de la demanda mediante su Vista Fiscal N° 102 de 5 de marzo de 1999 y el Director Presidente de la entidad demandada remitiera a esta Superioridad la Nota N° DPER-3630, de 22 de noviembre de 1999, en la cual explica que mediante la Resolución JD-1633 de 25 de octubre de 1999 se dejó sin efectos el acto administrativo originario impugnado (adjunta copia autenticada de fojas 69 a 78), la apoderada judicial de la parte actora presentó el 21 de febrero de 2000, escrito desistiendo de la pretensión incoada (f. 80). De dicho escrito se corrió en traslado a la representante del Ministerio Público por el término de tres días, sin que presentara objeciones.

Como quiera que con fundamento en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943

modificada por la Ley 33 de 1946, en cualquier estado del proceso es admisible el desistimiento de la pretensión y el apoderado judicial del demandante tiene facultad para desistir (f. 15), su petición debe resolverse favorablemente.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee en representación de CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., para que se declare nulas, por ilegales, las Resoluciones N° JD-946 de 10 de agosto de 1998 y N° JD-1053 de 2 de octubre de 1998, dictadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Notifíquese

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA & MARRE EN REPRESENTACIÓN DE CARDOZE & LINDO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 644-97 D. G. DE 2 DE ABRIL DE 1997, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN N° 298-99 D. G. DE 28 DE MAYO DE 1999, DICTADAS POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma Endara & Marre ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de CARDOZE & LINDO, S. A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 644-97 D. G. de 2 de abril de 1997, modificada por la Resolución N° 298-99 D. G. de 28 de mayo de 1999, dictadas por la Directora General de la Caja de Seguro Social, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que antes del trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada copia autenticada del acto impugando y de los actos confirmatorios, ambos con constancia de su notificación.

A foja 1 del libelo, se aprecia la solicitud de certificación con fecha de 21 de febrero de 1999, dirigida al Secretario General de la Caja de Seguro Social.

Considera quien sustancia que el actor cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

Como la solicitud del demandante se ajusta a lo establecido en el artículo supra citado, y que los documentos detallados prueban que el actor realizó las gestiones pertinentes a obtener los documentos solicitados, es dable acceder a

lo pedido.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que, por Secretaría, se solicite al Secretario General de la Caja de Seguro Social que remita copia autenticada del acto administrativo contenido en la Resolución N° 644-97 D. G. de 2 de abril de 1997 y de los actos confirmatorios, ambos con constancia de su notificación.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE MARIELA SÁNCHEZ DE VILLALAZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0889-99 DE 29 DE JUNIO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de MARIELA SÁNCHEZ DE VILLALAZ, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-0889-99 de 29 de junio de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 29 a 34 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> ...
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro)
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido

para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE HERMEL ROSAS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 99-15-D DE 20 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Arosemena y Arosemena, actuando en nombre y representación de HERMEL ROSAS, ha presentado SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL de la Resolución No. 99-15-D de 20 de julio de 1999, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El acto administrativo impugnado resolvió lo siguiente:

"Separar al servidor público HERMEL ROSAS, con cédula de identidad personal No. 8-29-639 quien labora de PROFESOR TITULAR 50% T. C. en la Facultad de MEDICINA VETERINARIA de la Universidad de Panamá, a partir del nueve (9) de agosto de 1999."

FUNDAMENTO DE LA PETICION DE SUSPENSION

El actor ha sustentado la necesidad de suspender los efectos derivados de la actuación recurrida, por considerar que de esta forma se evitaría al servidor público afectado, HERMEL ROSAS, "perjuicios irreversibles de toda naturaleza, respecto de los cuales decimos, como ejemplo, que si deja de trabajar durante los próximos 5 años en la Universidad, dejaría de percibir más de B/.173,940.27, suma que, definitivamente, constituye una pérdida de recursos irremplazable en su presupuesto familiar, toda vez que no tiene otro ingreso fijo con que sustituirlo, y su jubilación es muy limitada." (Lo subrayado es del Tribunal).

MOTIVACION DEL TRIBUNAL

En primer término, es pertinente señalar que la suspensión provisional del acto administrativo es una potestad discrecional conferida a la Sala Tercera de la Corte Suprema, por disposición del artículo 73 de la Ley 135 de 1943. Ello

siempre y cuando el acto acusado no se encuentre recogido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 74 de la ley 135 de 1943 que de manera explícita niega la posibilidad de ordenar la suspensión provisional de actos administrativos en cuatro circunstancias a saber:

> "Artículo 74. No habrá lugar a suspensión provisional en los siguientes casos:
>
> 1. En las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos de empleados nombrados para períodos fijos;
>
> 2. En las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas;
>
> 3. Cuando la acción principal esté prescrita;
>
> 4. Cuando la ley expresamente lo dispone." (Lo resaltado es del Tribunal)

Después de haber analizado las constancias procesales, la Sala concluye que en el caso bajo estudio no procede decretar la suspensión provisional de la resolución recurrida; toda vez que no está acreditado en el expediente que el nombramiento de HERMEL ROSAS como Profesor Titular 50% T. C. en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Panamá sea por un período determinado como lo exige el numeral 1, artículo 74 de la Ley 135 de 1943.

Vale la pena destacar que este Tribunal Colegiado, mediante fallo de 4 de octubre de 1999, adoptó similar criterio al denegar la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución No. 1-10-99-06 de 12 de febrero de 1999 incoada por Nitzia María Fernández contra el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá.

De igual modo, resulta pertinente hacer la salvedad que la anterior consideración, en modo alguno, constituye un criterio final o determinante para el pronunciamiento de fondo que en su momento será emitido por quienes integran esta máxima corporación de justicia, que gira en torno a la legalidad o ilegalidad de la actuación recurrida.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDEN a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 99-15-D de 20 de julio de 1999, dictada por el Rector de la Universidad Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL DOCTOR JAVIER CARRILLO GONZÁLEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 76 DE 23 DE JULIO DE 1997, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO; Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El doctor JAVIER CARRILLO GONZALEZ en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulos por ilegales el Decreto de Personal N° 76 de 23 de julio de 1997, dictado por el Presidente por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro, acto confirmatorio; y para que se haga otras declaraciones.

En su demanda el señor CARRILLO señala que mediante el Decreto N° 154 de 5 de septiembre de 1991, fue nombrado en la Dirección General de Aduanas en el cargo de Asistente Ejecutivo II, y que no obstante lo anterior en el Decreto de Personal N° 76 de 23 de julio de 1997, mediante el cual se declara insubsistente su nombramiento, se señala que ocupaba el cargo de abogado III.

Para probar sus alegaciones el señor CARRILLO presentó copia auténtica del Decreto N° 154 de 5 de septiembre de 1991, mediante el cual se le nombró en el Ministerio de Hacienda y Tesoro como Asistente Ejecutivo II (ver fojas 18-19 del expediente judicial), así como del acta mediante la cual tomó posesión de ese cargo (Ver foja 20 del expediente judicial).

Igualmente presentó copia auténtica del Decreto de Personal N° 66 de 23 de julio de 1997 (ver foja 76 del expediente judicial).

Agotados los trámites procesales previos a la etapa decisoria, los Magistrados de la Sala, en consideración a los hechos antes expuestos, estiman necesario, para mejor proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, y los artículos 782 y 880 del Código Judicial, solicitar al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas un certificado en el cual conste lo siguiente:

1. El cargo que ocupaba el señor JAVIER CARRILLO GONZALEZ en julio de 1997 en el entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro.

2. Si existen diferencias entre el cargo de Asistente Ejecutivo II y Abogado III, qué funciones desempeña quien ostenta dichos cargos y qué funciones desempeñaba JAVIER CARRILLO GONZALEZ cuando fue declarado insubsistente en el cargo de abogado III.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaría se requiera al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas para que, en el término de cinco (5) días, informe:

1. ¿Qué cargo ocupaba el señor JAVIER CARRILLO GONZALEZ en julio de 1997 en el entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro?

2. Si existen diferencias entre el cargo de Asistente Ejecutivo II y Abogado III, qué funciones desempeña quien ostenta dichos cargos y qué funciones desempeñaba JAVIER CARRILLO GONZALEZ cuando fue declarado insubsistente en el cargo de Abogado III.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA WATSON Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CITIBANK, N.A. PARA QUE SE DECLARE NULA

POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 074 DE 5 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR EL DIRECTOR DEL HIPÓDROMO Y OTROS JUEGOS DE AZAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense WATSON & ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de CITIBANK, N.A., ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 22 de diciembre de 1999, proferida por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la parte actora para que declare nula, por ilegal, la Resolución No. 74 de 5 de abril de 1999, emitida por el Director de Hipódromos y Otros Juegos de Suerte y Azar.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda puesto que, en su opinión, el poderdante no está debidamente legitimado para actuar en representación del recurrente, toda vez que es requisito esencial para la presentación de la acción de plena jurisdicción, que el poder para quien ejerza la representación judicial haya sido otorgado por quien tenga plenos derechos para actuar en representación de la sociedad.

El resto de los Magistrados que componen la Sala proceden a examinar si de dan los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida.

La firma forense WATSON & ASOCIADOS sustenta su recurso de apelación en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Mediante Resolución s/n de 22 de diciembre de 199, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, no (sic) resolvió no admitir la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción incoada por CITIBANK, NA. Persona Jurídica debidamente inscrita a ficha 404, rollo 238, imagen 3 de la Sección de Micropelícula Mercantil del Registro Público, iniciada para que se declarase nula por ilegal la Resolución 074 de 5 de abril de 1999, emitida por el Director de Hipódromos y Otros Juegos de Suerte y Azar, de la Junta de Control de Juegos.
>
> SEGUNDO: En dicha Resolución s/n de 22 de diciembre de 1999, se señala que la persona natural que otorga el poder a nombre de CITIBANK NA., en este caso el Señor DIONISIO KOO CORTEZ, quien otorga el poder a favor de la firma forense WATSON & ASOCIADOS, no ha aportado prueba que acredite que es el Representante Legal o apoderado legal de la sociedad antes citada.
>
> TERCERO: Mediante Certificado del Registro Público aportado a los efectos, como prueba, con este escrito, se acredita plenamente que el señor DIONISIO KOO CORTEZ, tiene poder otorgado por CITIBANK, NA., desde el 21 de julio de 1983, otorgado mediante poder inscrito al rollo 11354, imagen 0028, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público.
>
> CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, podemos manifestar que el Señor DIONISIO KOO CORTEZ, está plenamente legitimado para otorgar poder a la firma WATSON &ASOCIADOS, a nombre de CITIBANK, NA." (Fs. 26 a 27).

Efectivamente, consta en el expediente que en el momento de la presentación de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción el poderdante no estaba debidamente legitimado para actuar en representación del recurrente. Posteriormente, a raíz del auto de no admisión, proferido el 22 de diciembre de 1999 por el Magistrado Sustanciador, la firma forense WATZON & ASOCIADOS, dentro

del término de sustentación del recurso de apelación que anunciara contra dicha resolución, adjuntó el Certificado del Registro Público en el que se acredita que el señor DIONISIO KOO CORTEZ tiene poder otorgado por CITIBANK, N.A. desde el 21 de julio de 1983, mediante poder inscrito al rollo 11354, imagen 0028, de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público.

En virtud de lo anterior, este Tribunal de Apelación considera que una vez presentado el Certificado del Registro Público que acredita que el Señor DIONISIO KOO CORTEZ, tiene poder otorgado por CITIBANK, N.A. desde el 21 de julio de 1983, tal como consta de fojas 24 a 25 del expediente, se ha subsanado el requisito formal de que adolecía la demanda al momento de su presentación, por lo que procede, previa revocatoria de la Resolución de 22 de diciembre de 1999, admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la firma forense WATSON & ASOCIADOS.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la resolución de 22 de diciembre de 1999, ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense WATSON & ASOCIADOS, en nombre y representación de CITIBANK, N.A., para que se declare nulo, por ilegal, la Resolución No. 074 de 5 de abril de 1999, dictada por el Director del Hipódromo y Otros Juegos de Suerte y Azar.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARIO E. CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS BHIKÚ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 06-98 DE 14 DE MAYO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración (Suplente) ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de 17 de septiembre de 1998, que admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Licenciado Darío E. Carrillo G., en nombre y representación de AGENCIAS BHIKÚ, S. A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 06-98 de 14 de mayo de 1998, dictada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador admitió la demanda por considerar que la misma cumplía los requisitos procesales mínimos para ser admitida.

La Procuradora de la Administración fundamenta su recurso de apelación en los siguientes términos:

> "El apoderado judicial de la sociedad Agencias Bhikú, S. A., solicita que Vuestra Honorable Sala declare nula, por ilegal, la Resolución No. 60-98 de 14 de mayo de 1998, emitida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, mediante la cual se ordena la rehabilitación del inmueble Amina, ubicado en

Calle 17 Oeste y Calle H, Corregimiento de Santa Ana, de propiedad de Agencias Bhikú, S. A. Así mismo, esta resolución concede al propietario, 90 días a partir de la notificación de esta Resolución, para que efectúe reparaciones en el sistema eléctrico, techo y cielo raso, y para que arregle las grietas de las paredes del inmueble Amina.

Sin embargo, en un examen del expediente contentivo de la demanda que ante Vuestra Augusta Corporación de Justicia se ha presentado, se evidencia que quien ha otorgado el poder legal al Licdo. Darío E. Carrillo, no ostenta la calidad de representante legal de la sociedad Agencias Bhikú, S. A. En efecto, de conformidad con la certificación expedida por la Dirección General del Registro Público, visible a foja 13, consta que la representación legal la ejercerá Fatema Rawat de Bhikú e Ishak Salomón Bhikú Rawat, y en el escrito visible a foja 14 del expediente, la señora Amina Bhikú de Daya, es quien otorga el poder legal al Licdo. Darío El Carrillo, "para que en nombre y representación de la sociedad, promueva RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN con el propósito que se declare nula, por ilegal, la resolución 06-98 del 14 de mayo de 1988, proferida por la Dirección General de Arrendamientos, del Ministerio de Vivienda, actos confirmatorios y se realicen otras declaraciones".

La señora Amina Bhikú de Daya es una de las personas que conforman el cuerpo de dignatarios y está designada en el cargo de Vocal, de la sociedad Agencias Bhikú, S. A., más no tiene la calidad de representante legal de la misma, por tanto no está facultada legalmente para otorgarle poder legal al Licdo. Darío E. Carrillo, para que éste interponga la referida demanda contencioso administrativo de Plena Jurisdicción ante Vuestra Sala.

De acuerdo a la legislación vigente la representación de una persona jurídica la posee su representante legal, y en el caso bajo estudio, es evidente que la señora Amina Bhikú de Daya, al momento de interponer la presente demanda, no tiene la calidad de representante legal de Agencias Bhikú, S. A., ya que de acuerdo a la Certificación expedida por la Dirección General del Registro Público, la representación legal la ejercerá el Presidente: Fatema Rawat de Bhikú y el Secretario Ishak Salomón Bhikú Rawat, indistintamente ..."

"En el caso subjúdice, reiteramos que quienes tienen la calidad de representantes legales de la sociedad son los señores Fatema Rawat e Ishak Salomón Bhikú Rawat. En este punto, es importante señalar que, si bien la señora Fatema Rawat De Bhikú, otorgó poder legal al Licdo. Darío E. Carrillo para que defendiera la sociedad Agencias Bhikú, S. A., en la vía administrativa que se llevó a cabo ante la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda; es preciso destacar que: "La demanda contencioso administrativa no obedece a un recurso, sino al contrario, es una acción independiente, cuya finalidad es la revisión judicial de las actuaciones administrativas" (El subrayado es nuestro) (Sentencia de 6 de julio de 1999, por ende, es necesario que quien otorgue el poder legal se encuentre plenamente facultado para ello, y la señora Amina Bhikú de Daya, no lo está, por lo que el poder legal otorgado no reúne los requisitos legales suficientes para que el mismo sea considerado como válido en este proceso judicial." (fs. 57-60).

Posteriormente, a raíz del recurso de apelación que anunciara la Procuradora de la Administración, el Licenciado CARRILLO GOMILA, dentro del término de oposición a dicho recurso de apelación, presentó escrito en el que la señora FATEMA RAWAT DE BHIKÚ, en su condición de Presidenta y Representante Legal

de la sociedad AGENCIAS BHIKÚ, S. A. manifiesta que ratifica el poder conferido al Licenciado DARÍO E. CARRILLO GOMILA.

Por otro lado, consta de fojas 4 a 11 del expediente, que el Licenciado DARIO E. CARRILLO GOMILA actúo en nombre y representación de la sociedad AGENCIAS BHIKÚ, S. A., ante la vía administrativa que se llevó a cabo en la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

En virtud de lo anterior, este Tribunal de Apelación considera que una vez presentada la ratificación de poder por parte de la representante legal de la sociedad AGENCIAS BHIKÚ, S. A., señora FATEMA RAWAT DE BHIKÚ, al Licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, se ha subsanado el requisito formal de que adolecía la demanda al momento de su presentación, por lo tanto debe confirmarse la resolución apelada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Resolución de 17 septiembre de 1998, que ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado DARIO E. CARRILLO GOMILA, en representación de la sociedad AGENCIAS BHIKÚ, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 06-98 de 14 de mayo de 1998, dictada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TEÓFANES LÓPEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE DAVID COHEN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DG-010-96, DE 11 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Teófanes López, actuando en nombre y representación del señor David Cohen, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. DG-010-96, de 11 de marzo de 1996, emitida por el, en esa fecha, Director General del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, los actos confirmatorios, y para que se haga otras declaraciones.

I. Contenido del acto impugnado:

A través del acto acusado descrito, el entonces Director General del extinto Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, en adelante, INRENARE, dispuso imponer "... sobre la finca del señor DAVID COHEN una servidumbre de acueducto en beneficio de la comunidad de Las Margaritas, en el Distrito de las Minas, Provincia de Herrera"; que dicha servidumbre tendrá una dimensión de 964.50 metros cuadrados de longitud por un metro de ancho, medida aplicable a la construcción de acueductos rurales; que la comunidad de Las Margaritas se obliga al pago en favor del señor David Cohen de la suma de

B/.106.00, entre otras disposiciones contenidas en dicha resolución.

También han sido impugnadas mediante la presente acción, los actos confirmatorios contenidos en las Resoluciones No. DG-028, de 12 de diciembre de 1996, y la No. 09-97, de 11 de abril de 1997, expedidas por la Dirección General y la Junta Directiva del INRENARE, respectivamente.

II. Disposiciones legales que se estiman infringidas y su concepto:

El demandante estima que los actos acusados son violatorios de los artículos 44, 47, 49 y 58 del Decreto Ley No. 35, de 22 de septiembre de 1966, que reglamenta el "uso de las aguas"; y de los artículos 14, 16, 24 y 31 del Decreto Ejecutivo No. 55, de 13 de junio de 1973, reglamentario de las servidumbres en materia de aguas.

El primer artículo invocado es del siguiente tenor literal:

> "Artículo 44: La servidumbre de aguas es un gravamen impuesto sobre un predio, en favor de otro predio de distinta propiedad. El predio que sufre el gravamen se denominará predio sirviente; el que recibe el beneficio, predio dominante".

Según afirma el actor, esta norma fue infringida por aplicación indebida, ya que para que exista una servidumbre de agua es necesario dos predios colindantes de distinta propiedad, e INRENARE ha impuesto una servidumbre sobre el predio del señor David Cohen "sin que haya necesidad de beneficiar a un predio colindante sino supuestamente en provecho de toda una Comunidad de Las Margaritas, es decir, a favor de muchos predios y casas, inclusive, predios lejanos, habiendo soluciones mas practicas e inmediatos (sic) como la construcción de pozos turbinados, y la habilitación de los tres pozos artesianos, entre otros, sobre todo que existe el dinero disponible para tales obras que son de carácter permanentes y de beneficio total para los moradores" (sic) (foja 23).

La segunda disposición legal invocada es el artículo 47 del citado Decreto Ley, que preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 47: El dueño de un predio sirviente no puede alterar, disminuir ni hacer más incómodo para el predio dominante la servidumbre con que está gravado el suyo, ni el dueño de un predio dominante podrá aumentar el gravamen constituído para el predio sirviente".

Tras parafrasear el contenido de esta norma legal, el apoderado judicial del demandante afirma que el INRENARE impuso una servidumbre contra el predio de su mandante, sin que existan dos predios colindantes o sin que exista predio dominante ni predio sirviente; y "también impuso la servidumbre de aguas a favor de toda una comunidad lo que significa que el gravamen impuesto es enorme y excesivo, contrario al querer de la norma, y el cual estará en aumento constante a medida que crezca la población causándole graves perjuicios al predio sirviente de propiedad del Sr. David Cohen", por ello asegura que la comentada disposición legal fue violada de manera directa por omisión (fojas 24-25).

El tercer artículo que se invoca es el 49, norma que establece lo que a continuación se copia:

> "Artículo 49: Los dueños de predios sirvientes tienen derecho al pago mediante avalúo pericial, de todo terreno ocupado con motivo de la servidumbre de aguas y a la indemnización justa, por parte de los beneficiarios, de los perjuicios ocasionados por la instalación del sistema".

En opinión del demandante, también se viola este artículo de manera directa por omisión, porque la Resolución atacada no sólo establece en forma injusta una

servideumbre de acueducto, que debe constituirse con gastos a cargo de los beneficiarios, sino que además dispone una indemnización de sólo B/.106.00 a cargo de la comunidad de Las Margaritas, suma ridícula que ni quiera será pagada por ésta, y no ha sido fijada pericialmente.

La útima disposición del Decreto Ley 55 de 1966 que se afirma violada es el artículo 58, que a seguidas se transcribe:

> "Artículo 58: El Ministerio de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública será la entidad vinculada y directamente responsable de cuanto atañe a la salubridad e higiene de las aguas, pero sus decisiones o disposiciones deberán ser notificadas a la Comisión a través de su representante en el seno de la misma".

El actor afirma que este artículo ha sido transgredido de manera directa por omisión, ya que no se le ha pedido opinión al Ministerio de Salud, aunque el agua que se extrae de la finca sobre la que pesa la servidumbre de acueducto se ha utilizado por muchos años para que el ganado beba y para actividades agropecuarias, "pudiendo estar contaminada". Agrega que esto coloca en "peligro la salud de la población sin necesidad". (foja 26).

Con relación a las disposiciones jurídicas del Decreto Ejecutivo No. 55, de 13 de junio de 1973, reglamentario de las servidumbres en materia de aguas, la primera norma invocada como violada es el artículo 14, que textualmente preceptúa:

> "Artículo 14: Entiéndase por acueducto, para los efectos de este reglamento, todo conducto artificial para conducir agua, exceptuando aquellos que sirvan como vías de navegación".

En opinión de la parte que impugna la resolución que causa estado, la violación ha ocurrido de manera directa por omisión, porque el INRENARE no ha atendido la definición contenida en el precepto, pues no señaló cuáles son las obras de construcción del acueducto artificial que deben hacerse para conducir las aguas desde su predio a toda la comunidad (foja 27).

El siguiente artículo invocado del decreto reglamentario citado, es el 16, que establece lo que se transcribe:

> "Artículo 16: No puede imponerse servidumbre de acueducto para objetos de interés privado sobre construcciones o edificios, a menos que la importancia de la obra le justifique, a juicio del Consejo Consultivo de Recursos Hidráulicos y mediante Resolución refrendada por el Ministro". (Resalta la Sala).

Esta excerta fue conculcada, según el demandante, de forma directa por omisión debido a que la imposición de la servidumbre cuestionada beneficia a toda una comunidad y la decisión respectiva no lo justifica, ya que existen otras alternativas para la solución del problema como "una partida destinada al efecto". No se consultó al Consejo Consultivo, y el gravamen real beneficiará, sin necesidad, a predios privados, edificios y casas privadas. (foja 28).

El artículo 24 del referido decreto dispone lo siguiente:

> "Artículo 24: El Departamento de Aguas podrá autorizar, mediante permiso o concesión a los propietarios de los predios sirvientes para utilizar las aguas del acueducto correspondiente, siempre que ello no perjudique a los propietarios de los predios dominantes, y determinando, en cada caso, las modalidades del uso que se le autorice y las obligaciones que implique".

A criterio del impugnante, esta norma fue violada de manera directa por omisión, pues la servidumbre que grava su predio ha perjudicado sus actividades

agropecuarias, tales como la ganadería y siembras, entre otras, sin que se "establezca claramente las obligaciones de la comunidad y quiénes serán los responsables de los daños y perjuicios que les puedan ocasionar" (sic) (fojas 28-29).

Como última norma invocada se aduce el artículo 31 del mismo instrumento reglamentario que establece lo siguiente:

> "Artículo 31: No se impondrán las servidumbres de que trata el artículo anterior sobre pozos ordinarios, cisternas o aljibes o terrenos cercados con pared. Se exceptúan los casos en que a causa de sequía, se haya declarado el área como zona de Régimen Especial de Aprovechamiento de Aguas".

El demandante reitera los argumentos anteriores; no señala en qué concepto esta disposición a su criterio fue infringida, pero explica que la Administración no contempló el peligro de que dichos pozos "se secarían"; que no se ha demostrado la existencia de sequía en la población; y que el área respectiva no ha sido declarada zona de "Régimen Especial de Aprovechamiento de Aguas" (foja 29).

II. Informe de conducta de la entidad pública demandada:

Mediante Nota No. DIRG-2032-97, de 11 de septiembre de 1997, la Directora General del INRENARE rindió informe explicativo de conducta (fojas 40-42), que en lo medular establece que ante la solicitud de servidumbre de aguas presentada por el Alcalde, el Representante de Corregimiento y el Presidente de Comité Pro-acueducto de la Comunidad de las Margaritas, Distrito de Las Minas, se efectuaron diligencias de rigor, entre ellas, avenir a las partes.

Ante la oposición, mediante apoderado legal, del señor David Cohen, propietario del predio sobre el cual se establecería la servidumbre de agua, se efectuó una inspección ocular y evaluación pericial en la que "participaron Peritos designados por cada Parte y uno por la Institución". Los informes resultantes fueron evaluados por la Dirección Nacional de Cuencas Hidrográficas y, mediante Nota N° DINACH-101, de 9 de febrero de 1996, dicha dependencia "recomendó la imposición de esta servidumbre". (foja 40).

En el aparte destinado a comentarios finales, la funcionaria afirma que en la sustanciación del presente asunto "se respetó el principio del Debido Proceso Legal", porque al señor David Cohen "... se le dio traslado de la solicitud, se le aceptó su perito, se le llamó al diálogo, y se le notificó a sus apoderados legales de todas las diligencias" (foja 41).

Agrega que con fundamento en las disposiciones que le atribuyen competencia en estos asuntos, la decisión adoptada por la Institución se inspiró en el principio de interés social.

III. Opinión jurídica de la Procuraduría de la Administración:

La representante de esta Agencia del Ministerio Público contestó el traslado de la demanda contenciosa bajo examen oponiéndose, como lo ordena la Ley, a las pretensiones de la parte actora, según se aprecia en la Vista Fiscal No. 528, de 24 de noviembre de 1997 (fojas 44-54).

Esta opinión jurídica afirma que carecen de fundamento las afirmaciones vertidas por el demandante al explicar las supuestas infracciones contra el Decreto Ley 35 de 1966 y el Decreto Ejecutivo No. 55 de 1973, toda vez que la servidumbre impuesta sobre el predio del señor David Cohen "tiene el propósito de beneficiar a una comunidad de la provisión de agua", y se trata de una "servidumbre pública", para lo que cita a Rafael Bielsa en su Derecho Administrativo, Editorial La Ley, Tomo IV, Buenos Aires, p. 399-402. (fojas 48-49).

IV. Consideraciones y decisión de la Sala:

Esta Corporación de justicia procede a resolver la presente controversia previas las siguientes motivaciones.

Estima la Sala que no le asiste razón al demandante cuando aduce la violación de las disposiciones legales y reglamentarias invocadas como fundamento de derecho de su pretensión, consistente en que se declaren nulas las Resoluciones identificadas ut supra, emitidas por la Administración a través de lo que se conociera en el sistema público panameño, antes de ser absorbidas sus funciones por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), según Ley 41, de 1o. de julio de 1998 (artículo 132), como Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), organismo que con anterioridad a la Ley 21 de 1986, formó parte de la administración central, en calidad de dirección nacional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Respecto del primer cargo de infracción, es decir contra el artículo 44 del Decreto Ley 35 de 1966, lo analizaremos en conjunto con el artículo 47 del mismo instrumento, porque los argumentos que hace el demandante son similares.

Es oportuno iniciar apuntando el concepto de servidumbre y más que ello la aplicación que en el Derecho Público, especialmente en el Derecho Administrativo, tiene esta secular institución jurídica originaria del derecho civil o común.

La servidumbre es una figura vinculada necesariamente al derecho de propiedad sobre una cosa, y como nos explica el tratadista Eugene Petit, el estado ordinario de la propiedad es el de ser libre, es decir, el de procurar al propietario solo todas las ventajas que ella proporciona; y agrega que si bien el "jus abutendi" (derecho a abusar de la cosa) únicamente puede pertenecer al propietario, otros derechos como el "jus utendi" (derecho a usarla) y el "jus fruendi" (derecho a percibir sus frutos), pueden estar, algunas veces, en todo o en parte, separados de la propiedad, ocasionando una disminución o aminoramiento de la misma; entonces, "se dice que está gravada con una servidumbre" (Cfr. PETIT, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1989, p. 230).

Sobre la noción o concepto y las especies de servidumbre el mismo expositor francés explica que ésta es una restricción a la propiedad de una parte, y de otra parte es un derecho sobre la cosa de otro, o sea, un "jus in re aliena"; distinguéndose así dos especies de servidumbres, a saber:

1. Las personales establecidas sobre una cosa mueble o inmueble, en beneficio de una persona determinada, sin pasar a sus herederos; y,

2. Las reales o prediales, que únicamente pueden ser constituídas a favor de un fundo porque es un derecho vinculado al mismo y beneficia a los propietarios sucesivos de éste.

No obstante existir reglas especiales aplicables a estos dos tipos o especies de servidumbres, también, por su propia naturaleza, le son aplicables principios comunes como: a) Al emanar de las servidumbres ventajas derivadas del derecho de propiedad aquellas deben procurar una utilidad a una persona o a un fundo y no se puede tener servidumbre sobre cosa propia (nemni res sua servit); b) es un derecho real y no una obligación; c) es una relación entre una cosa y una persona determinadas, o entre dos fundos igualmente determinados, por tanto es inalienable; y, d) las consagra el Derecho Civil, que le concede al titular la acción confesoria para hacerla valer en juicio (Cfr. PETIT, Op. cit. pp. 230-231).

El demandante al exponer su concepto de infración contra el artículo 44 del Decreto Ley 35 de 1966, que equivale al artículo 513 del Código Civil, cuya fuente, asu vez, estriba en el artículo 530 del Código Civil español, no hay duda que se refiere al concepto legal de servidumbre real o predial "... categoría

genuina o más típica del concepto de servidumbre" (BACHOFER GARCIA, Carlos. Diccionario Jurídico Espasa, Madrid, 1999, p. 913), según el cual ésta es un gravamen impuesto sobre un inmueble en favor de otro de distinto propietario; sin embargo, ésta no es la clase de servidumbre con que la autoridad estatal, reunidos los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico, ha decidido gravar parte del fundo o finca propiedad del señor David Cohen, conforme Resolución No. DG-010-96, de 11 de marzo de 1996.

A juicio de la Sala, la servidumbre impuesta sobre parte de la propiedad inmueble del demandante identificada como finca No. 359, tomo 124, folio 580, de aproxiomadamente 66 hectáreas (fojas 42-42 del expediente administrativo) no se ubica dentro del concepto tradicional y naturaleza de las servidumbres reales o prediales, porque es una servidumbre legal y forzosa de acueducto prevista en la Ley y desarrollada por el reglamento, o sea, por el Decreto Ejecutivo No. 55, de 13 de junio de 1973, emitido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Este Decreto Ejecutivo enumera en su artículo 8 las servidumbres legales, las que pueden ser:

1. De acueducto, que incluye los acueductos generales;
2. De abrevadero y saca de agua; y,
3. Para el aprovechamiento de aguas subterráneas.

En el presente asunto se presenta la particularidad que los peticionarios solicitaron una servidumbre de acueducto para conducir aguas subterráneas provenientes de ojos de aguas ubicados en un predio ajeno. El supuesto de servidumbre para obtener aguas subterráneas está previsto por el artículo 35 de la referida excerta reglamentaria, servidumbre especial que incluye la "instalación del sistema de extracción y facilidades anexas indispensables".

El artículo 518 de nuestro Código Civil establece que "Las servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los propietarios. Aquellas se llaman legales y éstas voluntarias" (Subraya este Despacho), y el artículo 531 de la misma excerta prevé que "las servidumbres impuestas por la ley tienen por objeto la utilidad pública o el interés de los particulares".

Este último contenido y descripción jurídica de la servidumbre legal que a tenor de la norma copiada puede tener un interés público o privado, nos llama a determinar cuás el es el tipo de fundamento o razón que inspira la servidumbre adjudicada en favor de la comunidad de Las Margaritas, Distrito de Las Minas, ubicada en la Provincia de Herrera, que grava parte del fundo perteneciente al señor David Cohen.

A juicio de la Sala, la servidumbre de marras excluye el interés privado o individual por ser utilidad pública, debido al beneficio comunitario que ha servido de causa a su imposición o establecimiento: proveer de agua que emana de una fuente natural subterránea, mediante un acueducto, a un número plural de familias moradoras de la comunidad antes indicada, para su uso doméstico. El vital líquido, de acuerdo a las constancias procesales, fluye y ha de ser canalizado de sólo dos (2) de los doce (12) "ojos de agua" detectados en la propiedad del señor David Cohen.

Cabe recordar que la Constitución Política de la República, en su Título XII, sobre "La Hacienda Pública", Capítulo Primero, enunciativo de los bienes y derechos del Estado, específicamente en el artículo 255, numeral 5, establece que "Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada", "Los demás bienes que la Ley defina como de uso público".

El Decreto Ley 35 de 1966, ha sufrido modificaciones en virtud del artículo 83 del Decreto Ley No. 2, de 7 de enero de 1997, que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario; sin embargo, a juicio de la Sala, son aplicables a la

presente controversia los artículos 1 y 2 del citado Decreto Ley 35 porque no contravienen lo establecido por la nueva regulación en la materia objeto de estudio. Estos preceptos establecen lo siguiente:

> "Artículo 1: Reglaméntase,la explotación de las aguas del Estado, para su aprovechamiento conforme al interés social. Por tanto, se procurará el máximo bienestar público en la utilización, conservación y administración de las mismas".
>
> "Artículo 2. Son bienes de dominio público del Estado, de aprovechamiento libre y común con sujeción a lo previsto en este Decreto Ley, todas las aguas fluviales, lacustres, marítimas, subterráneas y atmosféricas, comprendidas dentro del territorio nacional, continental e insular, el subsuelo, la plataforma continental submarina, el mar territorial y el espacio aéreo de la República".

Estas disposiciones tienen una perceptible armonía, por cuanto la primera de ellas entroniza al interés social como uno de los principales objetivos en la explotación y administración de las aguas pertencientes al Estado panameño; y la segunda, es clara al enunciar como parte del dominio público y por tanto de "aprovechamiento libre y común", a las aguas subterráneas en toda la República.

Aplicado al presente caso, lo anterior permite afirmar que los "ojos de agua" que se utilizarán como fuente de abastecimiento de la servidumbre forzosa de acueducto impuesta a través de la resolución impugnada son bienes del Estado, de uso público, a pesar de estar ubicados en un fundo de propiedad privada, por lo que están afectos a servir, a tenor de la Ley, al binestar público e interés social, que es precisamente el destino que inspira a la Resolución que el demandante reprocha. No es necesaria, entonces, como indebidamente asegura éste, la adyacencia o contigüidad de dos predios uno en calidad de fundo dominante y el otro como sirviente de la servidumbre legal de acueducto que nos ocupa.

La servidumbre pública de carácter administrativo de que hablamos, impuesta por autoridad con facultades legales al efecto, tiene especiales características que la distinguen de la tradicional servidumbre predial regulada por el Derecho Privado, mas aquella no es ajena a los orígenes que distinguen al concepto de servidumbre. Por ejemplo, la doctrina española que guarda íntima relación ya que ha servido de antecedente inmediato importante a nuestro Código Civil, sobre la servidumbre administrativa ha señalado:

> "... sólo acepta las servidumbres sobre bienes privados en favor de bienes públicos, y algún autor como GARRIDO FALLA ... señala que las servidumbres administrativas la idea de predio dominante no es esencial, ni siquiera existe normalmente. La servidumbre pública se establece en favor de la comunidad, sin que ello quiera decir que tal gravámen suponga el uso público del predio sirviente por parte de la comunidad. Por ello el estudio de las servidumbres administrativas no debe limitarse a las prediales o reales, sino que han de ser abarcadas cualesquiera impuestas sobre la propiedad privada por razón de interés público". (BACHOFER GARCIA. Ibídem, p. 917).

Compartimos este criterio que atenúa el requisito de existencia de predio dominante en la servidumbre administrativa, porque su fundamento está comúnmente en el interés público. Esto no obsta para que como particularides distintivas que la servidumbre bajo examen, además de ser impuesta por la Ley, sea en principio aparente y continua.

De acuerdo al mismo Código Civil "Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales que las determinan ..." y sólo en ausencia de un régimen especial serán aplicables las normas del Título correspondiente a las

"Servidumbres" contenido en el citado Código (Cfr. art. 538 C. C.); igual precepto sobre prelación normativa está contenido en la parte final del artículo 46 del Decreto Ley 35 de 1966. Recordemos que según la parte motiva del Decreto reglamentario No. 55 de 1973 todo lo concerniente a las servidumbres de utilidad pública o de interés particular se regiría por los reglamentos especiales que dictase el Organo Ejecutivo. De ahí que las normas directamente aplicables son las incluidas en el Decreto Ley tantas veces señalado, en cuanto no contravenga las disposiciones del Decreto Ley No. 2 de 1997, y el reglamento en materia de servidumbre de aguas contenido en el Decreto Ejecutivo No. 55 de 1973.

La doctrina es clara al explicar que las servidumbres legales, como la que examinamos, pueden a su vez clasificarse en aquellas que son impuestas directamente por la Ley y aquellas otras en la que los particulares, basándose en un precepto legal, pueden pedir coactivamente, mediante un acto judicial o administrativo, su constitución, incluso ante la oposición del dueño del predio sirviente. Al respecto BACHOFER GARCIA agrega que "la doctrina moderna sólo considera a éstas como auténticas servidumbres legales en cuanto que estima que las impuestas directamente por la Ley no tienen tal carácter, por faltarles la característica de innovar la precedente situación jurídica de un fundo, sino que constituyen simples limitaciones al derecho de propiedad basadas en relaciones de vecindad de los predios, que exigen que el legislador tome medidas cuando la situación y posiciones relativas de unos inmuebles con respecto a otros pudieran derivarse injustas consecuencias para uno o varios de ellos, que deben ser corregidas" (Op. cit., p. 915).

La Sala desea añadir que en las servidumbres legales la conveniencia se convierte en una necesidad, además que el caso bajo examen no es el único supuesto de servidumbre para cuyo establecimiento debe mediar el interés o utilidad pública, ya que las servidumbres de saca de agua y de abrevadero, que además de implicar el paso accesorio de personas y ganados por el predio sirviente, han de apoyarse en la utilidad pública en cuanto las mismas están destinadas a establecerse en favor de "alguna población o caserío", y se exige la previa indemnización correspondiente (Cfr. artículos 538 y 539 del C. C., tal como fueron subrogados por el Decreto Ley 35 de 1966, artículo 64). Esta norma del Código Civil patrio tiene su antecedente inmediato en el artículo 555 del Código Civil español, norma que según los comentarios dirigidos por Manuel Albaladejo García, "... concreta la necesidad de la servidumbre a causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío, expresión ésta indudablemente referida a pequeños núcleos de población rural o caseríos, mencionados expresamente en el precepto, aludiendo quizás a esas poblaciones que cuenten, al menos, diez vecinos, de que hablaba la Exposición de Motivos de la Ley de Aguas de 1886". (Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Tomo VII, Vol. 2, Artículos 530 al 608, pp. 150-151).

Las razones expuestas obligan a la Sala a desestimar los alegados cargos de violación tanto del artículo 44 como del 47 del Decreto Ley 35 de 1966.

Con respecto a la aducida infracción del artículo 49 del Decreto Ley, no procede porque en autos consta varios informes periciales de entre los que destaca el elaborado por el INRENARE, que fijó en B/.106.00 la cantidad líquida que la comunidad de Las Margaritas está obligada a sufragar al señor David Cohen en su calidad de propietario del fundo sirviente del gravamen de acueducto impuesto mediante el acto administrativo atacado.

En el punto II del Informe se deja anotado lo siguiente respecto a la indemnización a la que se refiere la parte actora:

"II. ASIGNACION DEL VALOR DE LA TIERRA:

Para la asignación del valor de la servidumbre de agua, motivo del conflicto se tomaron en consideración todos los factores tanto internos como externos que influyen y afectan el valor del mercado de la tierra del área tales como:

> 1. Característica física del área, entre ellos los aspectos de relieve, clima, hidrológica y suelo (sic) Ubicación, vías de acceso y cercanía a los mercados.
>
> 3. Situación legal de la finca
>
> 4. La presión solcial sobre la tierra.
>
> 5. Valor de mercado de las tierras comparables.
>
> 6. Mejoras en la finca (Reforestación, cultivos y otros).
>
> Después de recopilar la información de gabinete, inspeccionar, investigar y analizar todo lo relacionado con el área objeto de estudio, se logró determinar un valor de once centavos (B/.0.11) por metro cuadrado. El valor total de la indeminzación depende finalmente de la longitud que se destine para la servidumbre" (fojas 41-42).

De esto resulta que la operación aritmética de multiplicar 964.50 m2 de longitud, que corresponde al área de terreno gravada, por B/.0.11, valor asignado al metro cuadrado, arroja un total de B/.106.00 en concepto de indemnización.

Como se observa, la indemnización debida sí fue tasada pericialmente; carece de sustento el argumento en contrario del demandante, por lo que la Sala procede a rechazarlo.

En atención al cargo de infracción por omisión aducido contra el artículo 58 del Decreto Ley 35 de 1966, el mismo no debe prosperar, por cuanto en autos reposan constancias procesales que demuestran que en el presente asunto a nivel de la vía administrativa se siguió el procedimiento administrativo por la autoridad competente, -que según el artículo 28, en concordacia con el artículo 3, de la Ley 21 de 1986 es el INRENARE, institución a la que se le atribuyeron las funciones contempladas en el Decreto Ley 35 de 1966-, para el establecimiento de la servidumbre de acueducto cuestionada, que derivó en la recomendación por parte de la dependencia competente del INRENARE al Director General de la época que adjudicara el gravamen real en favor de la población o comunidad de Las Margaritas.

Cabe destacar que esta Corporación de Justicia ha puesto especial énfasis en la verificación del cumplimiento de los principios concernientes al debido proceso adjetivo, y se percata que, conforme al expediente administrativo acopiado y lo destaca el Informe de Conducta rendido, se respetaron los derechos de "las partes" a ser oídas; ofrecer e intervenir ya sea directamente o mediante apoderado legal en la práctica de las pruebas; se emitió una decisión fundada en derecho; al igual que fueron interpuestos los recursos que el ordenamiento jurídico prevé para enervar el acto administrativo que, en el caso particular del demandante, estima lesiona sus intereses subjetivos; razones que animan a este Tribunal a desestimar el cargo de infracción alegado.

En atención a las presuntas infracciones de algunas normas contenidas en el decreto reglamentario de las servidumbres de aguas, la Sala conceptúa lo siguiente:

El cargo afirmado contra el artículo 14 que define lo que debe entenderse como acueducto no debe prosperar, porque la referida norma no establece como requisito para el establecimiento de este tipo de servidumbre la enunciación o determinación de las obras, o bien, materiales utilizables en la construcción de ésta, al respecto el artículo 12 del Reglamento dispone:

> "Artículo 11: Serán de cuenta del que haya solicitado y obtenido la imposición de una servidumbre legal, las obras necesarias para el ejercicio de la misma. A este efecto se le autorizará a ocupar

temporalmente los terrenos necesarios para el depósito de materiales y labores complementarias, previa indemnización de daños y perjuicios".

Como se aprecia, es expreso el permiso que concede este precepto al titular de la servidumbre para ejecutar las actividades que viabilicen el ejercicio del derecho, siendo de cargo de los beneficiados los perjuicios que se causen al obligado a soportar el gravamen; también el artículo 18 establece las modalidades en que este tipo de servidumbres puede consistir (acequia descubierta, acequia cubierta y cañería o tubería), según las circunstancias que deben ser objeto de evaluación. Por ende, la Sala desestima el cargo de infracción aducido contra el artículo 14.

Con respecto a la violación del artículo 16 del Decreto. No 55, el Tribunal considera que no debe entrar a analizarlo, ya que al estudiar el primer concepto de infracción explicó que la servidumbre que nos ocupa no ha sido adjudicada por la Administración en interés particular o privado, sino teniendo presente el interés o utilidad pública comprobado para acceder a su constitución o establecimiento.

Respecto del artículo 24 del mismo instrumento jurídico, los que suscriben consideran que el demandante ha incurrido en interpretación errónea de la citada disposición, cuyo correcto sentido estriba en contemplar la potestad en haber del propietario del fundo sirviente para aprovechar las aguas del acueducto que le ha sido impuesto, siempre y cuando medie permiso o concesión a su favor y que ello no irrogue perjuicio a "los propietarios de los predios dominantes", que en este caso debe entenderse se refiere a la comunidad o caserío a favor del que se ha autorizada la servidumbre de acueducto; por ende, se desecha el presente cargo.

La última norma reglamentaria que se adujo es el artículo 31 que a su vez remite al contenido del artículo que le antecede, o sea, el 30, que norma lo relativo a las servidumbres de saca de agua y de abrevadero, dos servidumbre distintas, también de naturaleza legal, como antes fue explicado, y que no son pertinentes al objeto cuestionado, salvo en el aspecto destacado por este Tribunal en el sentido que ambas encuentran su fundamento en la utilidad pública, "... en favor de alguna población o caserío", a tenor del artículo 538 del Código Civil. Motivo por el cual debe rechazarse el cargo imputado.

Fundamentada en todas las consideraciones anteriores, la Sala debe declarar legales los actos acusados, y a ello se aboca de inmediato.

De consiguiente, la Sala Tercera Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que NO SON ILEGALES: la Resolución No. DG-010-96, de 11 de marzo de 1996,la Resolución N° DG-028, de 12 de diciembre de 1996, proferida por el aquel entonces Director General del hoy extinto INRENARE, y la Resolución N° 09-97, de 11 de abril de 1997,emitida por la Junta Directiva de la citada institución, y NIEGA las demás pretensiones contenidas en el libelo de demanda presentada por el señor DAVID COHEN, a través de apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NELSON ROJAS, EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO PARILLON, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 27-99 D, DE 4 DE OCTUBRE DE 1999,

DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Nelson Rojas, actuando en nombre y representación de GILBERTO PARILLON, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución No. 27-99 D de 4 de octubre de 1999, dictada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante escrito fechado el 15 de marzo de 2000, visible a foja 23 del expediente, la actora desistió de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Nelson Rojas, actuando en nombre y representación de GILBERTO PARILLON, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARELLANO, CHALHOUB & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ISHMAEL BAILEY THOMAS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 09-97 D.N. DE 23 DE JULIO DE 1997, DICTADA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA N° 3 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Arellano, Chalhoub & Asociados, actuando en representación de ISHMAEL BAILEY THOMAS, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal la Resolución N° 09-07 D.N de 23 de julio de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N° 3 del Ministerio de Vivienda, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal la Resolución N° 09-07 D.N de 23 de julio de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N°, que niega la solicitud

de desahucio, para uso personal, interpuesta por su representado, así como el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 16-97 de 10 de diciembre de 1997, dictada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda. De igual manera se solicita que se decrete el Desahucio solicitado por su representado contra el Sr. Baltazar Romero, con cédula de identidad personal N° E-8-4018, arrendatario del apartamento N°2 de la Casa N° 2473, ubicada en Calle 5ta. Corregimiento de Río Abajo, construido sobre la Finca N° 7943, inscrita al Tomo 253, Folio 342, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, del Registro Público. Finalmente, se solicita que se le conceda al arrendatario. Sr. Baltazar Romero, el término que señala la Ley para desalojar y restituir a su representado, el apartamento arrendado.

Como disposición legal infringida se invoca el artículo 46 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, adicionado por el Artículo 6 de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974 que en su texto expresa:

> "ARTICULO 46: Sólo se admitirá la solicitud de desahucio cuando el propietario necesitare el inmueble arrendado para su uso personal o de algún miembro de su familia hasta el tercer grado de consanguinidad, o cuando el inmueble se someta al Régimen de Propiedad Horizontal en los términos del Artículo 16, o para su demolición y construcción posterior de un nuevo edificio, lo cual debe ser debidamente comprobado mediante declaración jurada del solicitante o la presentación del permiso de demolición, según el caso. En caso de que el solicitante o el familiar no ocupen el inmueble dentro de los tres (3) meses siguientes a la resolución que decretó el desahucio, el responsable será sancionado con multa hasta de B/.1,500.00 sin excluir la indemnización a la cual podrá ser condenado por los daños y perjuicios causados."

En opinión de la parte demandante, el artículo 46 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, adicionado por el Artículo 6 de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974, se violó de manera directa por omisión y de manera directa por comisión, en la medida que, por un lado, la Comisión de Vivienda N°3 negó la solicitud de desahucio fundamentándose en apreciaciones y hechos que la Ley de manera expresa no faculta para denegar una solicitud de desahucio, y, por el otro lado, exige otros medios de prueba no contemplados en la norma, en adición a la declaración jurada para demostrar la necesidad del "uso personal". A ello añade, que precisamente por el hecho de que no se requieren otros medios de prueba, es que el propio artículo 46 de la Ley 93 sanciona con una suma cuantiosa de hasta B/.1,500.00, sin excluir la indemnización por los daños y perjuicios, a quien habiéndosele favorecido con un desahucio posteriormente demuestra falso su juramento o no ocupa el inmueble dentro de los tres meses siguientes a la resolución que decretó el desahucio.

II. El informe explicativo de conducta expedido por el Presidente de la Comisión de Vivienda N°3 y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante Nota N° 7C00-100-98 de 26 de marzo de 1998, el Presidente de la Comisión de Vivienda N°3, expidió el respectivo informe explicativo de conducta. En dicho documento se destaca que luego de presentada la demanda de desahucio para uso personal ante esa Comisión de Vivienda, y efectuados todos los trámites de ley e investigaciones sociales que ameritan estos tipos de demanda por parte de una trabajadora social, el pleno de la Comisión luego de analizar las pruebas y declaraciones de las partes, decidió negar el desahucio para uso personal solicitado por el señor Ishmael Bailey en Resolución N° 09-97 D.N. de 23 de julio de 1997, y se notifica a las partes. El apoderado legal del demandante apela a la Resolución N° 09-97 D.N. de 23 de julio de 1997, misma que fue confirmada por la Resolución N° 16-97 de 10 de diciembre de 1997.

Por su parte, mediante la Vista Fiscal N° 273 de 16 de julio de 1998, la Procuradora de la Administración, le concede la razón a la parte demandante, puesto que, según su opinión, el artículo 46 de la Ley 93 de 1973, adicionado por

la Ley 28 de 12 de marzo de 1974, es diáfano al contemplar que para proceder a la admisión de la solicitud de desahucio presentada por el propietario, cuando se aduce que necesita el inmueble para su uso personal, se deberá probar dicha necesidad a través "de declaración jurada" y, en el caso que nos ocupa, el demandante cumplió con las exigencias requeridas.

III. Decisión de la Sala:

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

La Sala observa que mediante la Resolución N° 09-97 de 23 de julio de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N° 3 del Ministerio de Vivienda, se resuelve negar la solicitud de desahucio para uso personal, presentada por la Lcda. Mariela Sanson V. en representación de Ishmael Bailey, contra Baltazar Romero (Lina Romero) arrendatario del Apartamento N° 2 del Inmueble N° 2473, ubicado en Calle Quinta, Corregimiento de Río Abajo de esta Ciudad. En la resolución en cuestión, se pone de manifiesto que se considera la viabilidad de una solicitud de desahucio de un inmueble presentado por una sociedad (persona jurídica) que bajo declaración jurada, alegue tener necesidad del mismo para uso personal, no siendo así en el caso que nos ocupa cuando una persona natural solicita el desahucio para uso personal para ampliar sus actividades comerciales.

Una vez efectuado el análisis del expediente, la Sala concluye que le asiste la razón a la parte actora, dado que se demuestra que la Resolución N° 09-97 D.N. de 23 de julio de 1997, expedida por la Comisión de Vivienda N° 3, viola el artículo 46 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973 adicionado por el artículo 6 de la Ley 28 de 12 de marzo de 1974. Ello es así, pues, tal como lo contempla el artículo 46 en referencia, dentro del expediente figura la declaración jurada del señor Ishmael Bailey Thomas, donde hace constar la necesidad del inmueble para uso personal por razón de la instalación de un negocio, requisito necesario para proceder a la admisión de la solicitud de desahucio presentada por el propietario. De igual manera se incorporaron otras pruebas como lo son el contrato de arrendamiento, certificación del Registro Público donde consta que el señor Ishmael Bailey es el dueño de la Finca N° 7943, inscrita al Folio 342, Tomo 253 de la Sección de la Propiedad la Provincia de Panamá, Paz y Salvo de la Dirección General de Ingresos por concepto del Impuesto de Inmueble y copia del Registro Comercial Tipo B de fecha 27 de junio de 1996, del establecimiento denominado "Novedades Ishma" de propiedad del señor Bailey, el cual se dedicará a la venta al por menor de ropa, calzados y novedades (Ver fojas 4, 5, 6, 7 y 8 del expediente administrativo).

A juicio de la Sala, es oportuno destacar lo expuesto por la Procuradora de la Administración, en cuanto a los resultados de la evaluación socio-económica de la familia Romero, donde consta que dicha familia tiene más de 26 años de residir en el inmueble del señor Bailey y no ha resuelto su problema habitacional pese a que allí ingresan dos salarios, hecho que igualmente se demostró en los estudios efectuados.

Por las razones anotadas, es evidente entonces que el señor Bailey tiene todo el derecho de exigir el goce de su propiedad, en este caso a través de una solicitud de desahucio para uso personal que es visible de fojas 2 a 4 del expediente administrativo, misma que a juicio de la Sala se ajustó a derecho.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, la Resolución N° 09-97 D. N. de 23 de julio de 1997, dictada por la Comisión de Vivienda N° 3, del Ministerio de Vivienda, como también lo es el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 09-97 D.N. de 23 de julio de 1997 proferida por la Comisión de Vivienda N° 3, SE ACCEDE a la solicitud de desahucio para uso personal solicitado por el señor ISHMAEL BAILEY THOMAS contra el arrendatario BALTAZAR ROMERO, del Apartamento N° 2 de la Casa N° 2473, ubicada en Calle Quinta, Corregimiento de Río Abajo, y SE LE CONCEDE al

arrendatario un término de 6 meses para desocupar el inmueble, conforme lo prevé el artículo 47 de la Ley 93 de 1973.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ARACELLY MIRANDA EN REPRESENTACIÓN DE ANTONIO JOSÉ ACOSTA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 019, DE 14 DE ENERO DE 1999, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor FELIPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, fue admitido como parte interesada para impugnar la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Licenciada Aracelly J. Miranda, en representación de ANTONIO JOSÉ ACOSTA, mediente Resolución de 3 de diciembre de 1999.

El Licenciado JULIO CÉSAR JOVANE, quien actúa en nombre y representación del señor FELIPE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ha presentado recurso de apelación contra la Resolución de 17 de marzo de 1999, emitida por el Magistrado Sustanciador, por medio de la cual se admitió la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Licenciada ARACELLY MIRANDA, en representación de ANTONIO JOSÉ ACOSTA, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 019 de 14 de enero de 199, dictada por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador admitió la demanda por considerar que la misma cumplía con los requisitos procesales mínimos para ser admitida.

El escrito contentivo de la sustentación de la apelación fue interpuesto en los siguientes términos:

> "A nuestro juicio, la demanda de plena jurisdicción presentada NO CUMPLE con los requisitos de Ley, ya que el demandante no indicó o expresó el CONCEPTO DE LAS VIOLACIONES en las que funda su demanda, conforme lo exige, para toda demanda contencioso administrativa, el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946. Esto significa que no podrá estudiarse el fondo del asunto, ya que en ninguna parte de la demanda se hace mención en qué forma el acto administrativo demandado viola el precepto legal.
>
> De acuerdo a lo indicado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946, no se dará curso a la demanda que carezca de alguna de las formalidades indicadas en la Ley Contencioso Administrativa, y su presentación no interrumpe los términos señalados para la prescripción de la acción.
>
> En reiterados casos, la Sala Contencioso Administrativo ha expresado la obligación del cumplimiento de este requisito sine qua non de la referida acción, porque el concepto de la infracción permite establecer en qué sentido se ha dado la infracción alegada.
>
> Como lo ha indicado el ex Magistrado de la Corte Suprema de

> Justicia, Edgardo Molino Mola, "El Proceso Contencioso Administrativo gira alrededor de los motivos de ilegalidad, que es lo que se pide en la demanda".
>
> La misma Sala ha indicado que el concepto de la infracción está ligado a los motivos de ilegalidad a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, que establece que éstos comprenden tanto la infracción literal de los preceptos legales como la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, o el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse y la desviación de poder. Adicionalmente, hay que indicar si la infracción fue por comisión, por omisión, por indebida aplicación, interpretación errónea." (fs. 114-115).

Por su parte, la Licenciada Aracelly J. Miranda, en su escrito de oposición al recurso de apelación señala, que la demanda de plena jurisdicción cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1946, toda vez que en su contenido en la Sección V, expresa claramente la expresión de las disposiciones legales que se estiman violadas y el concepto de las violaciones de las disposiciones legales citadas.

Encontrándose la alzada en este estado, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal entran a resolver si le asiste la razón o no a la parte recurrente.

En este caso en particular, el Tribunal de Apelación considera que no le asiste razón al recurrente, toda vez que en la demanda contencioso administrativo de plena jurisdicción presentada por la Licenciado Aracelly J. Miranda, en representación del señor ANTONIO JOSÉ ACOSTA, en su Sección IV y V, señala claramente la Expresión de las Disposiciones Legales que se estiman violados y el Concepto en que lo han sido, tal como aparece a fojas 33 del expediente, cumpliendo así con el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946.

Por todo lo anterior, la resolución que admitió la presente demanda contencioso administrativo debe confirmarse.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución dictada el 17 de marzo de 1999, QUE ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la Licenciada ARACELLY MIRANDA, en representación de ANTONIO JOSÉ ACOSTA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 019 de 14 de enero de 1999, dictada por la Gobernación de la Provincia de Chiriquí, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIOLA MENDIETA DE DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE KARELINA LUNA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL N° 99 (2210-22-2) 20 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada Viola Mendieta de De León ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de KARELINA LUNA, para que se declare nula por ilegal, la Acción de Personal N° 99 (2210-22-2) 20 de 16 de septiembre de 1999, dictada por la Gerencia General del Banco Hipotecario Nacional, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a la revisión del libelo incoado en vías de determinar si el mismo cumple con los requisitos legales que hagan viable su admisión.

Advierte esta Superioridad que el acto impugnado, es decir, la Acción de Personal N° 99 (2210-22-2) 20 de 16 de septiembre de 1999 y la Resolución de Gerencia N° 247-99 de 28 de septiembre de 1999, por la cual se resuelve confirmar en todas sus partes la Acción de Personal N° 99 (2210-22-2) 20 de 16 de septiembre de 1999, a pesar de ser copias auténticas de su original, no contienen constancias de su notificación. (Ver fojas 1 y 8 del expediente)

Este dato es necesario, a efectos de que este Tribunal pueda determinar si la demanda bajo estudio fue presentada oportunamente o si por el contrario, el recurrente dejó precluir el término para la formalización de la acción contencioso administrativa de plena jurisdicción, que es de dos (2) meses contados a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto recurrido. Este requisito sine qua non está recogido en el artículo 44 y 42b de la Ley 135 de 1943, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos." (El resaltado es nuestro)
>
> "Artículo 42b. La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda."

Se concluye en consecuencia, que la presente acción de plena jurisdicción no puede ser admitida conforme a la circunstancia anteriormente descrita.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre república y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la Licenciada Viola Mendieta de De León en representación de KARELINA LUNA.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CARLOS MERLANO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DV-19-97 DE 19 DE AGOSTO DE 1997, DICTADA POR EL VICEMINISTRO DE VIVIENDA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA AREAS REVERTIDAS, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Humberto Ricord, actuando en su condición de apoderado judicial de LUIS CARLOS MERLANO ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. DV-19-97 de 19 de agosto de 1997, dictada por el Viceministro de Vivienda, Presidente de la Comisión para Areas Revertidas, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose este proceso en estado de fallar, considera este Tribunal que con el propósito de contar con más elementos de juicio para decidir la presente controversia, debe dictarse este Auto Para Mejor Proveer de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943 que preceptúa lo siguiente:

> "Es potestativo del Tribunal Contencioso-Administrativo dictar auto para mejor proveer, con el fin de aclarar los puntos dudosos u obscuros de la contienda. Para hacer practicar las correspondientes pruebas, se dispondrá de un término que no podrá pasar en ningún caso de treinta días, más las distancias."

Dado lo anterior la Sala está interesada en que el Director del Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de Vivienda nos suministre los textos legales (leyes, resoluciones, reglamentos, decretos, etc.) que regulan las facultades conferidas a la Comisión de Evaluación de la Oficina de Enlace de Areas Revertidas, así como el trámite o procedimiento que este despacho debe seguir para cancelar las adjudicaciones de los lotes ubicados en estos sitios.

El anterior requerimiento se formula en virtud de que la documentación solicitada nos resulta imprescindible para realizar el análisis de fondo de los cargos de ilegalidad denunciados en el presente litigio.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOLICITA al DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA que haga llegar a este Tribunal Colegiado en el término de cinco días a partir del conocimiento de esta Resolución, la información descrita en párrafos anteriores la cual guarda relación con la expedición de la Resolución No. dv-19-97 de 19 de agosto de 1997, proferida por el Viceministro de Vivienda, Presidente de la Comisión para Areas Revertidas, acto confirmatorio y para que se hagan otras aclaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE HUGO NAVARRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 99-15-D DE 20 DE JULIO DE 1999, DICTADA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Arosemena y Arosemena, actuando en nombre y representación de HUGO NAVARRO, ha presentado SOLICITUD DE SUSPENSION PROVISIONAL de la Resolución No. 99-15-D de 20 de julio de 1999, dictada por el Rector de la Universidad de Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El acto administrativo impugnado resolvió lo siguiente:

> "Separar al servidor público HUGO NAVARRO, con cédula de identidad personal No. 3-35-565 quien labora de PROFESOR TITULAR 50% T. C. en la Facultad de ARQUITECTURA de la Universidad de Panamá, a partir del nueve (9) de agosto de 1999."

FUNDAMENTO DE LA PETICION DE SUSPENSION

El actor ha sustentado la necesidad de suspender los efectos derivados de la actuación recurrida, por considerar que de esta forma se evitaría al servidor público afectado, HUGO NAVARRO, "perjuicios irreversibles de toda naturaleza, respecto de los cuales decimos, como ejemplo, que si deja de trabajar durante los próximos 5 años en la Universidad, dejaría de percibir más de B/.180,000.00, suma que, definitivamente, constituye una pérdida de recursos irremplazable en su presupuesto familiar, toda vez que no tiene otro ingreso fijo con que sustituirlo, y su jubilación es muy limitada." (Lo subrayado es del Tribunal).

MOTIVACION DEL TRIBUNAL

En primer término, es pertinente señalar que la suspensión provisional del acto administrativo es una potestad discrecional conferida a la Sala Tercera de la Corte Suprema, por disposición del artículo 73 de la Ley 135 de 1943. Ello siempre y cuando el acto acusado no se encuentre recogido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 74 de la ley 135 de 1943 que de manera explícita niega la posibilidad de ordenar la suspensión provisional de actos administrativos en cuatro circunstancias a saber:

> "Artículo 74. No habrá lugar a suspensión provisional en los siguientes casos:
>
> 1. En las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos de empleados nombrados para períodos fijos;
>
> 2. En las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas;
>
> 3. Cuando la acción principal esté prescrita;
>
> 4. Cuando la ley expresamente lo dispone." (Lo resaltado es del Tribunal)

Después de haber analizado las constancias procesales, la Sala concluye que en el caso bajo estudio no procede decretar la suspensión provisional de la resolución recurrida; toda vez que no está acreditado en el expediente que el nombramiento de HUGO NAVARRO como Profesor Titular 50% T. C. en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá sea por un período determinado como lo exige el numeral 1, artículo 74 de la Ley 135 de 1943.

Vale la pena destacar que este Tribunal Colegiado, mediante fallo de 4 de octubre de 1999, adoptó similar criterio al denegar la solicitud de suspensión de los efectos de la Resolución N° 1-10-99-06 de 12 de febrero de 1999 incoada por Nitzia María Fernández contra el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá.

De igual modo, resulta pertinente hacer la salvedad que la anterior consideración, en modo alguno, constituye un criterio final o determinante para

el pronunciamiento de fondo que en su momento será emitido por quienes integran esta máxima corporación de justicia, que gira en torno a la legalidad o ilegalidad de la actuación recurrida.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDEN a la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 99-15-D de 20 de julio de 1999, dictada por el Rector de la Universidad Panamá, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SILKA A. CORREA EN REPRESENTACIÓN DE CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° JD-1466 DE 23 DE JULIO DE 1999, EXPEDIDA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la Licenciada Silka A. Correa, en representación de CABLE & WIRELESS, S. A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° JD-1466 de 23 de julio de 1999, expedida por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

La demanda incoada no fue admitida por la Magistrada Sustanciadora, mediante Auto de 21 de diciembre de 1999, basándose en los siguientes argumentos:

> "En primer lugar, la parte demandante recurrió contra la Resolución N° JD-1466, proferida por el Ente Regulador en primera instancia, pero no impugnó la Resolución N° JD-1560, dictada el 17 de septiembre de 1999 por la misma autoridad para resolver el recurso de reconsideración interpuesto, lo cual era necesario porque el Ente Regulador modificó algunos aspectos de la primera dictando nuevas disposiciones en la segunda y la declaratoria de ilegalidad de la resolución originaria no deja sin efecto las nuevas y distintas en reemplazo por la autoridad demandada al reconsiderar.
>
> El artículo 29 de la Ley 33 de 1946 establece que no es necesario dirigir la demanda contra los actos simplemente confirmatorios que hayan agotado la vía gubernativa, puesto que dichos actos quedan sin valor una vez anulado o reformado el acto originario. Sin embargo, esta norma se refiere a los actos meramentes confirmatorios y como ya se expresó, la Resolución N° JD-1560 de 17 de septiembre de 1999, no solamente mantiene y deja sin efecto algunas disposiciones de la Resolución N° JD-1466 de 23 de julio de 1999, sino que también modifica otras, por tanto debieron impugnarse ambas.
>
> Por otra parte, la Sala observa que como el acto administrativo impugnado es complejo, o sea que contiene diversas disposiciones numeradas individualmente que tratan cada una sobre un tema en particular, la apoderada judicial de Cable & Wireless Panamá, S. A.,

debió confrontar los artículos de esa resolución que considera ilegales,con las normas que cita violadas y no confrontar el acto impugnado con las diversas leyes que citó, como si fuera un acto simple y homogéneo".

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal ad-quem que efectivamente la parte demandante debió impugnar, además de la Resolución N° JD-1466 de 23 de julio de 1999, la Resolución N° JD-1560 de 17 de septiembre de 1999, pues pese a que el artículo 29 de la Ley 33 de 1946 establece que no es necesario dirigir la demanda contra los actos simplemente confirmatorios que hayan agotado la vía gubernativa, ya que dichos actos quedan sin valor una vez anulado o reformado el acto impugnado, esta no es la situación en que se encuentra, pues la Resolución N° JD-1560 de 17 de septiembre de 1999 no solamente resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la Licenciada Silka A. Correa, sino que también reforma el contenido de la primera resolución que es la que se impugna ante este Tribunal, por lo cual debieron impugnarse ambas. Es decir, la Resolución N° JD-1560 de 17 de septiembre de 1999, no es un acto simplemente confirmatorio, ya que introdujo reformas a la situación controvertida por la demandante en la vía gubernativa, motivo por el cual era indispensable que enderezara su pretensión impugnativa incluyendo dicho acto administrativo. En estas condiciones, el resto de la Sala no le queda más alternativa que confirmar la inadmisión apelada por considerar que la misma se ajusta a derecho.

Por otro lado, a manera de aclaración, en consonancia con el segundo cargo por el cual se rechaza el libelo, si bien es cierto la demandante no confronta los artículos de la Resolución N° JD-1466 de 23 de julio de 1999 que considera ilegales, con las normas que cita violadas, entiende esta Superioridad, de la simple lectura del expediente, que lo que la actora impugna es la supuesta falta de competencia del ente emisor de la Resolución N° JD-1466 de 23 de julio de 1999, lo que según la recurrente, hace el acto administrativo inexistente, disconformidad ésta que no está debidamente planteada en esta demandada contenciosa.

En consecuencia, el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el Auto de 21 de diciembre de 1999, que decidió NO ADMITIR la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la Licenciada Silka A. Correa, en representación de CABLE & WIRELESS PANAMA, S. A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 1466 de 23 de julio de 1999, dictada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ DE GRACIA ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE PETER ROMERO GRENAL, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO N° 195 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1998, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda

contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Licenciado José De Gracia Zamora, en representación de PETER ROMERO GRENAL, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto N° 105 de 4 de septiembre de 1998, dictado por el Presidente de la República por Conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La demanda incoada no fue admitida por el Magistrado Sustanciador, mediante auto de 31 de mayo de 1999, basándose en los siguientes argumentos:

> "En primer lugar, se observa que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943. Ello es así, ya que solamente se encuentra debidamente autenticado uno de los actos acusados, el otro acto no cumple con los requisitos de autenticación. En este sentido, en ninguno de los actos acusados se encuentra constancia de la notificación requerida, por lo que no se puede verificar el agotamiento de la vía gubernativa. ...
>
> En segundo lugar, el apoderado judicial de la parte actora en el apartado referente al concepto de la violación, no especificó las modalidades en que se haya producido la infracción literal de los preceptos legales la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación según ha sido señalado con anterioridad por esta Sala."

De acuerdo a lo anterior, considera este Tribunal ad-quem que efectivamente la parte demandante sólo aportó debidamente autenticada uno de los actos impugnados, el cual corresponde al Resuelto N° 103-R-43 de 17 de marzo de 1999, el otro acto no cumple con el requisito de autenticación. De igual forma, en ninguno de los dos actos señalados como ilegales constata la notificación de los mismos, lo cual es imprescindible a efectos de determinar si la demanda ha sido interpuesta en tiempo oportuno.

Los defectos arriba señalados están en evidente contradicción con los artículos 44 y 42b de la Ley 135 de 1943, que a la letra disponen lo siguiente:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos." (Lo subrayado es nuestro).
>
> "Artículo 42b. La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda."

Por otro lado, el actor no precisó el concepto de la violación de la norma alegada como infringida, tal como lo estipula el artículo 26 de la Ley 135 de 1943, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 26. Los motivos de ilegalidad comprenden tanto la infracción literal de los preceptos legales como la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, o el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse y la desviación de poder."

La jurisprudencia constante de este Tribunal de Justicia ha sostenido que este es un requisito indispensable que debe cumplir toda demanda contencioso administrativa a fin de que esta Superioridad pueda analizar el fondo de las causales o motivos de ilegalidad invocados por el recurrente.

En consecuencia, el resto de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

CONFIRMAN el Auto de 31 de mayo de 1999, que decidió NO ADMITIR la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el Licenciado José De Gracia Zamora, en representación de PETER ROMERO GRENAL, para que se declare nulo por ilegal el Decreto N° 195 del 4 de septiembre de 1998, dictada por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HILARIO BELLIDO EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO MORALES Q., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4150-97 DNP DE 10 DE OCTUBRE DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Hilario Bellido, actuando en representación de ERNESTO MORALES Q., ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal la Resolución N° 4150-97 DNP de 10 de octubre de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Mediante el acto demandado se resuelve destituir por extraer datos o información de carácter privado o confidencial, sin ninguna autorización para fines personales aprovechándose de la naturaleza de su cargo, a partir de la fecha de la notificación de esa resolución al señor ERNESTO MORALES, seguro social N° 375-0062, identificación 810-03-93779, del cargo de Archivero II que desempeñaba en la Sección de Archivos, del Departamento de Ingresos, Cambios y Separaciones de la Dirección Nacional de Personal.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda se formula pretensión consistente en petición para que la Sala Tercera declare que es nula por ilegal, la Resolución N° 4150 DNP de 10 de octubre de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social y los actos confirmatorios contenidos en la Resolución N° 0129-98 DNP, fechada el 16 de enero de 1998, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social y la Resolución N° 16,019-98 J.D., fechada el 7 de mayo de 1998, proferida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se solicita a la Sala que ordene el reintegro del señor Morales a su puesto de trabajo en la Caja de Seguro Social y ordene el pago de los salarios dejados de percibir desde su destitución hasta que se haga efectivo el reintegro.

Entre los hechos u omisiones fundamentales de la acción se destaca que en la investigación efectuada no se desprende que la falta en que haya podido incurrir el señor ERNESTO MORALES QUINTERO, preste mérito para que se le aplique la más drástica de las sanciones como lo es la destitución, pues, era un funcionario ejemplar. El cuadro básico de sanciones de la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, establece un sistema gradual de sanciones que van de la más atenuada a la más drástica, en este caso la destitución.

Según el apoderado judicial de la parte demandante, no debe perderse de vista que las sanciones disciplinarias para su aplicabilidad tienen que ser aprobadas por ley y siendo que en el Decreto Ley 14 de 1954, no existe un sistema un sistema de faltas, penas y sanciones, por lo que debió existir cierta presunción a favor del funcionario despedido.

Como disposiciones legales, alegadas como infringidas, figuran los artículos 84 y 22 literal e) del Decreto Ley 14 de 27 de agosto de 1954, Orgánica de la Caja de Seguro Social, cuyo tenor es el que sigue:

> "ARTICULO 84: La Caja de Seguro Social, por medio de un Reglamento especial, establecerá las normas de procedimiento para la tramitación de todos sus asuntos.
>
> ARTICULO 22: Son atribuciones y deberes del Director General:
>
> e. Nombrar, trasladar y remover a los empleados, determinar sus deberes e imponerles sanciones."

Según el recurrente, la infracción del acto demandado consiste en que el mismo tiene como fundamento para la imposición de la sanción de destitución, la Resolución N° 768 de 16 de marzo de 1977, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, por la cual se dicta el Reglamento Interno de Personal del Ministerio de Salud-Caja de Seguro Social. La violación directa ocurre porque las normas de administración de personal aplicable a los servidores públicos destacan que todo lo relativo a selección, nombramiento, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantías y jubilaciones serán determinadas por ley, y esta norma sólo faculta a la Directora General de la Caja de Seguro Social y los estamentos de dicha institución, a aplicar el Reglamento Interno como norma de procedimiento para la tramitación de la destitución.

En cuanto al artículo 22 literal e), se afirma que al no tener la Resolución 768 de 16 de marzo de 1977 -Reglamento Interno de Personal- el carácter de Ley, el acto demandado vulnera esta disposición, en la media que no contiene en ninguna de sus partes a la destitución como sanción ni sus causales. Ello igualmente, según el demandante, es violatorio de los principios de administración de personal que contiene el artículo 297 de la Constitución Nacional, que remite a la Ley y hace reserva legal para la materia de nombramiento y destitución de los funcionarios públicos.

II. El informe explicativo de conducta rendido por la Directora General de la Caja de Seguro Social y la Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Directora General de la Caja de Seguro Social, en el informe explicativo de conducta fechado el 11 de agosto de 1998, expuso que el señor Ernesto Morales Quintero, laboró en la Caja de Seguro Social desde el 27 de abril de 1992, desempeñando el cargo de Archivero II en la Sección de Archivos del Departamento de Ingresos, Cambios y Separaciones de la Dirección Nacional de Personal.

Se destaca que en nota de 26 de agosto de 1997, la Dra. Maybis Marilú Rodríguez Solís, solicitó a la licenciada Dana Castañeda, Jefa de Personal y Recursos Humanos, se sirviera iniciar una prolija investigación de los hechos ocurridos el domingo 25 de agosto de 1997, en donde se encuentra seriamente implicado el señor Ernesto Morales Quintero, por lo que la Dirección de Personal procedió a efectuar la investigación relativa a la conducta del funcionario, y, mediante memorando de 28 de agosto de 1997, dirigido al Licenciado Daniel Rivera, Jefe del Departamento de Bienestar del Empleado, se solicita una evaluación psicosocial y médica del señor Ernesto Morales. También se señala que se le tomó declaración al señor Ernesto Morales Quintero, quien aceptó haber llamado a la casa de la Doctora Maybis Marilú Rodríguez Solís y que obtuvo documentación que fue remitida de la Dirección Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas al expediente de la doctora, que reposa en la Sección de Archivos, sin autorización oficial para hacerlo.

Según la Directora General de la Caja de Seguro Social, del Informe de la Dirección Nacional de Personal de fecha 26 de septiembre de 1997, se comprobó que el señor Ernesto Morales Quintero asumió una conducta impropia, aprovechándose de su cargo como Archivero, lo que le permitía manejar documentos que contenían información confidencial para fines personales, conducta que afectó la tranquilidad personal y familiar de la Doctora Maybis Rodríguez Solís y el prestigio de la Dirección Nacional de Personal de la Caja de Seguro Social. De ese modo, la Dirección Nacional de Personal concluyó que el señor Morales Quintero aprovechó su cargo de (archivero) y sustrajo datos confidenciales del expediente de la Doctora Maybis Rodríguez Solís, violando el artículo 47, literal f), del Reglamento Interno de Personal.

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 387 de 1 de octubre de 1998, que es visible de fojas 67 a 76 del expediente, se opone a los criterios expuestos por el recurrente, razón por la que solicita a la Sala que desestime sus pretensiones. En su opinión, el señor Ernesto Morales incurrió en conducta inapropiada en el ejercicio de sus funciones, cuando utilizó información confidencial sin ningún tipo de autorización so pretexto de resolver un problema que confrontaba la Dra. Maybis Rodríguez. A ello añade que no existe en el expediente documento que corrobore que quien recurre participó en un concurso de méritos para optar por el cargo que desempeñaba.

III. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites legales, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

Ante todo la Sala advierte que no se demostró en el expediente que el señor ERNESTO MORALES hubiese participado en concurso de mérito alguno para optar por el cargo de Archivero II en la Sección de Archivos del Departamento de Ingresos, Cambios y Separaciones de la Dirección Nacional de Personal, por lo que su posición era de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora, es decir, la Directora General de la Caja de Seguro Social. Pese a ello, consta en autos que al señor Morales se le brindó la oportunidad de ser oído y formular descargos. No obstante, no logró desvirtuar los cargos que se le imputaban, y no se aprecia desviación de poder, que sería el vicio de ilegalidad que podría invocarse en el caso de los servidores públicos que no tienen estabilidad en el cargo.

El acto demandado es la Resolución N° 4150-97 DNP de 10 de octubre de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, en la que se resuelve destituir al demandante por extraer datos o información de carácter privado o confidencial, sin ninguna autorización para fines personales aprovechándose de la naturaleza de su cargo, a partir de la fecha de la notificación, del cargo de Archivero II que desempeña en la Sección de Archivos, del Departamento de Ingresos, Cambios y Separaciones de la Dirección Nacional de Personal. En el acto acusado se expone que luego de la investigación y análisis del caso, los hechos demostraron claramente que existió un grave proceder en el desempeño de sus funciones y su conducta afectó la tranquilidad personal y familiar de la Doctora Maybis Rodríguez y el prestigio de la Dirección Nacional de Personal de la Caja de Seguro Social.

Al analizar el expediente, la Sala estima que no le asiste la razón a la parte actora, dado que en autos se demuestra que luego de la investigación efectuada al señor Morales, en ocasión de la solicitud que presentara la Doctora Maybis Rodríguez por los hechos ya mencionados, y luego incluso de ser escuchado, la Caja de Seguro Social concluyó que el señor Morales cometió falta grave en el desempeño de sus funciones. Ello es así, pues, se pudo determinar que extrajo datos confidenciales contenidos en el expediente de la doctora Rodríguez sin la debida autorización, conducta que claramente se subsume dentro de una de las causales de destitución contemplada en el Reglamento Interno, y en el acto demandado ello fue claramente sustentado en lo dispuesto en el artículo 21 literal j) y el artículo 47 literal f) del Reglamento Interno de Personal del

Ministerio de Salud - Caja de Seguro Social, que prevén como deber de los servidores del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, "guardar la más absoluta reserva sobre los asuntos confidenciales o privado de la dependencia donde labora", y como causal de destitución, "suministrar datos o informes de carácter confidencial sin la debida autorización", respectivamente.

Por las razones anotadas, lo procedente, es, pues, no acceder a las pretensiones formuladas.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N°4150-97 DNP de 10 de octubre de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, ni su acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 0129-98 DNP de 16 de enero de 1998, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA VIOLA MENDIETA DE DE LEÓN, EN REPRESENTACIÓN DE GLORIA MITCHELL PEREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 200-99 (D) DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Viola Mendieta de De León, actuando en nombre y representación de GLORIA MITCHELL PEREZ, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución No.200-99 (D) de 14 de septiembre de 1999, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador considera que la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible.

En primer lugar, observa quien suscribe que la actora no ha demostrado el agotamiento de la vía gubernativa. Esto es así, toda vez que la Sala ha señalado en distintas ocasiones que es requisito sine qua non, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que el actor no sólo solicite ante la entidad demandada que certifique si se ha producido el silencio o negativa tácita de su pretensión, sino que además es necesario, si la administración no se pronuncia, que el demandante le solicite al Magistrado Sustanciador que requiera al funcionario demandado la información antes descrita. Es necesario advertir que si la actora no hace esta solicitud, la Corte no puede pedirle a esta información al ente demandado, toda vez que la misma solamente se hace a petición de parte.

En segundo lugar, la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se exprese el concepto de la violación. En este caso, el demandante no expresa las modalidades en que se ha producido la infracción literal de los preceptos legales la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida

aplicación, tal como lo ha señalado esta Sala en jurisprudencia constante.

En virtud de que la actora omitió los requisitos mencionados su demanda no debe admitirse, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Viola Mendieta de De León, actuando en nombre y representación de GLORIA MITCHELL PEREZ, para que se declare nula, por ilegal, la resolución No.200-99 (D) de 14 de septiembre de 1999, dictada por el Gerente General del Bnaco Hipotecario Nacional, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ PÍO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN DE BERTA G. DE ÀLVAREZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 220 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Pío Castillero en representación de Berta González de Àlvarez, interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Educación y para que se haga otras declaraciones.

A fojas 10 del expediente, la demandante solicita a la Magistrada Sustanciadora que, antes de admitir la demanda, solicite al Ministerio de Educación que certifique si ha resuelto o no el recurso de reconsideración que interpuso el 16 de diciembre de 1999 la profesora de Àlvarez, contra el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999 ahora impugnado, en virtud que no ha recibido respuesta de esta autoridad en este sentido, a pesar de haberlo solicitado mediante el escrito fechado 26 de febrero de 2000, presentado ante la Dirección Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación en esa misma fecha.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, cuando no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación. De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Sala el petente debe probar que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

En el presente caso la parte actora sí presentó copia autenticada de la resolución atacada, pero no ha podido demostrar que agotó oportunamente la vía gubernativa ni constancia de la fecha en que lo hizo, puesto que la autoridad demandada no ha atendido su solicitud, requisito indispensable para decidir la admisión de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

Con fundamento en las normas citadas y ante la falta de respuesta del funcionario demandado a la petición hecha por el apoderado de la parte actora, que consta a foja 3 del expediente, se dispone solicitar al Ministerio de Educación que expida y envíe a esta Superioridad certificación donde consta si se ha resuelto o no el recurso de reconsideración presentado contra el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999, con la constancia de la fecha de su presentación, y de haberse resuelto, que expida y envíe copia autenticada de dicho acto con la constancia de su notificación.

En consecuencia, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José Pío Castillero en representación de BERTA GONZÀLEZ DE ÀLVAREZ, DISPONE solicitar por Secretaría de la Sala Tercera al Ministerio de Educación que en el término de cinco días, certifique y envíe lo siguiente:

1. Constancia de la fecha de presentación del escrito de reconsideración interpuesto por Berta González de Álvarez contra el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999,

2. Certificación en donde conste si dicho recurso de reconsideración ha sido o no resuelto, y

3. Si el recurso ha sido resuelto, que extienda y envíe copia de la resolución dictada y la constancia de su notificación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ PÍO CASTILLERO EN REPRESENTACIÓN DE DIOMILA D. DE HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 220 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Pío Castillero en representación de Diomila Domínguez de Herrera, interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999, dictado por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Educación y para que se haga otras declaraciones.

A fojas 10 del expediente, la demandante solicita a la Magistrada Sustanciadora que, antes de admitir la demanda, solicite al Ministerio de Educación que certifique si ha resuelto o no el recurso de reconsideración que interpuso el 21 de diciembre de 1999 la licenciada de Herrera, contra el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999 ahora impugnado, en virtud que no ha recibido respuesta de esta autoridad en este sentido, a pesar de haberlo solicitado mediante el escrito fechado 28 de febrero de 2000, presentado ante la Dirección Nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación en esa misma fecha.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, cuando no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación. De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Sala el petente debe probar que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

En el presente caso la parte actora sí presentó copia autenticada de la resolución atacada, pero no ha podido demostrar que agotó la vía gubernativa ni constancia de la fecha en que lo hizo, puesto que la autoridad demandada no ha atendido su solicitud, requisito indispensable para decidir la admisión de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

Con fundamento en las normas citadas y ante la falta de respuesta del funcionario demandado a la petición hecha por el apoderado de la parte actora, que consta a foja 3 del expediente, se dispone solicitar al Ministerio de Educación que expida y envíe a esta Superioridad certificación donde consta si se ha resuelto o no el recurso de reconsideración presentado contra el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999, con la constancia de la fecha de su presentación, y de haberse resuelto, que expida y envíe copia autenticada de dicho acto con la constancia de su notificación.

En consecuencia, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José Pío Castillero en representación de DIOMILA ISABEL DOMÍNGUEZ DE HERRERA, DISPONE solicitar por Secretaría de la Sala Tercera al Ministerio de Educación que en el término de cinco días, certifique y envíe lo siguiente:

1. Constancia de la fecha de presentación del escrito de reconsideración interpuesto por Diomila Isabel Domínguez de Herrera contra el Decreto Ejecutivo N° 220 de 3 de diciembre de 1999, y

2. Certificación en donde conste si dicho recurso de reconsideración ha sido o no resuelto, y

3. Si el recurso ha sido resuelto, que extienda y envíe copia de la resolución dictada y la constancia de su notificación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GENADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE JULIO SANTAMARÍA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN R. L. C. S. N° 027 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Ayala, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de JULIO SANTAMARÍA, para

que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Resolución R. L. C. S. N° 027 de 27 de octubre de 1999, expedida por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuario, y para que se hagan otras declaraciones.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que antes del trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada copia autenticada del acto impugnado y de los recursos interpuestos, a fin de acreditar el silencio administrativo, y si la demanda fue interpuesta en tiempo oportuno.

A foja 6 del libelo, se aprecia la solicitud donde el actor peticionó que se le remitiera copia autenticada de la la Resolución R. L. C. S. N° 027 de 27 de octubre de 1999, así como del recurso de reconsideración interpuesto y certificación de silencio administrativo, con fecha de 16 de marzo de 2000, dirigida al Director General del IDIAP.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943, prevé que el Magistrado Sustanciador tiene la facultad de solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia.

Como la solicitud del demandante se ajusta a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, ya que los documentos detallados prueban que el demandante realizó las gestiones pertinentes a obtener los documentos solicitados, el Magistrado Sustanciador estima procedente acceder a lo pedido.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que, por Secretaría, se solicite al Director General del IDIAP remita lo siguiente:

1. Copia autenticada del acto administrativo contenido en la Resolución R. L. C. S. N° 027 de 27 de octubre de 1999.

2. Copia autenticada del recurso de reconsideración presentado por el actor contra la Resolución R. L. C. S. N° 027 de 27 de octubre de 1999.

3. Copia autenticada del escrito que resuelve el recurso de reconsideración, como prueba de haber agotado la vía gubernativa.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENZO EDUARDO POLO, EN REPRESENTACIÓN DE DAVID EDWARD SIMPSON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUSIÓN N° 714-04-115-98 DE 7 DE JULIO DE 1998, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE ADUANAS ZONA OCCIDENTAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Enzo Eduardo Polo, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de DAVID EDWARD SIMPSON, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 714-04-115-98 de 7 de

julio de 1998, dictada por la Administración Regional de Aduanas Zona Occidental, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Acompaña a la demanda, una solicitud especial mediante la cual se requiere que antes del trámite de admisión de la misma, el Magistrado Sustanciador solicite a la entidad demandada que certifique si el edicto por medio del cual se notificó la Resolución N° 715-04-001 de 5 de enero de 2000, fue desfijado el día 17 de enero de 2000.

El recurrente, según consta en el expediente a foja 23, anunció recurso de apelación contra la Resolución N° 714-04-135-98 de 11 de agosto de 1998, el cual fue resuelto mediante Resolución N° 715-04-001 de 5 de enero de 2000, cuya notificación fue efectuada por edicto, fijado el día 14 de enero de 2000 y desfijado el 17 de enero del mismo año.

A foja 51 del libelo, se aprecia la solicitud de certificación, con fecha de 14 de marzo de 2000, dirigida al Administrador Regional de Aduanas de la Zona Occidental.

Considera quien sustancia que el actor cumplió con la exigencia contemplada en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, de llevar a cabo todas las gestiones pertinentes a fin de obtener la documentación idónea; pero al resultar infructuosas estas gestiones, solicitó a esta Sala que procediera a oficiar a la entidad demandada para que remita a esta Superioridad la documentación solicitada, ello en atención a la facultad que le confiere el artículo supra citado, que a la letra dispone lo siguiente:

> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda."

Ante tales circunstancia, el Magistrado Sustanciador estima procedente acceder a lo pedido.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que, por Secretaría, se solicite al Administrador Regional de Aduanas de la Zona Occidental la certificación de que el edicto de notificación de la Resolución N° 715-04-001 de 5 de enero de 2000, fue desfijado el 17 de enero de 2000.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, EN REPRESENTACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° REC-002-99 DE 5 DE AGOSTO DE 1999, PROFERIDA POR LA COMISIÓN DE LIBRE COMPETENCIA Y ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (CLICAC), ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre, Arias, Castro & Reyes, actuando en nombre y representación de PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la resolución N° REC-002-99 de 5 de agosto de 1999, proferida por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda interpuesta por la parte actora es extemporánea. Ello es así por cuanto que la apoderada de la demandante se notificó, mediante escrito de notificación recibido el 14 de diciembre de 1999 en la Dirección Ejecutiva Legal de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (f.56), de la Resolución N° PC-081-99 de 26 de noviembre de 1999, la cual confirma la Resolución N° REC-002-99 de 5 de agosto de 1999, agotando así la vía gubernativa.

La demandante tenía pues, un término de dos meses contados a partir del 14 de diciembre de 1999 para interponer la presente acción. Como puede observarse a foja 98 del expediente, la demanda fue presentada el 2 de marzo del año 2000, por lo que en esa fecha, ya había prescrito el derecho del demandante interponer demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, según se desprende de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Carece de fundamento legal lo alegado por los apoderados judiciales de la parte demandante en el hecho undécimo de la demanda, porque la apoderada de dicha parte se notificó personalmente el 14 de diciembre de 1999 y no puede la CLICAC mediante un simple acto de notificación por edicto prorrogar el termino previsto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946 ni tampoco modificar lo previsto en esta norma.

Por lo anteriormente expuesto lo procedente es no admitir la presente demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Sucre, Arias, Castro & Reyes, actuando en nombre y representación de PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la resolución N° REC-002-99 de 5 de agosto de 1999, proferida por la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC), acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMIDIO MANZANÉ EN REPRESENTACIÓN DE MATILDE DE LA CRUZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 20-2000 DE 8 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Emidio Manzané en representación de MATILDE DE LA CRUZ, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 20-2000 de 8 de febrero de 2000, dictada por el Ministro de Vivienda y para que se hagan otras declaraciones.

En su libelo, el licenciado Manzané pidió a la Sala la suspensión provisional de los efectos del acto acusado. No obstante, la Magistrada Sustanciadora, después de examinar la demanda para determinar si cumple los requisitos de forma, considera que ésta no debe admitirse por las razones que a continuación se expresan.

La parte actora sólo impugna el acto administrativo mediante el cual se le canceló al señor Humberto Gutiérrez, la asignación del lote N° 2-0-3, Sector 2, Barriada 2000; se le ordenó a la señora MATILDE DE LA CRUZ desalojarlo y se reasignó el mismo al señor Feliciano Hipólito Salas. Sin embargo, no impugnó la Resolución N° DV-20-97 fechada 2 de julio de 1997, es decir, el acto mediante el cual se le canceló a la señora MATILDE DE LA CRUZ la asignación del mencionado lote y, se le asignó provisionalmente al señor Humberto Gutiérrez (Ver f. 1).

En el caso en estudio, lo procedente es impugnar tanto el acto de desalojo como el acto de cancelación del lote, pues de impugnarse sólo el primero, la cancelación seguiría surtiendo sus efectos jurídicos respecto a la señora MATILDE DE LA CRUZ y la asignación provisional, en relación al señor Humberto Gutiérrez.

Por otro lado, el licenciado Manzané, dirigió su demanda en forma genérica al "Magistrado Sustanciador de la Sala Tercera" y no a la Magistrada Presidenta, según establece el artículo 102 del Código Judicial.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Emidio Manzané, en representación de MATILDE DE LA CRUZ, contra la Resolución N° 20-2000 dictada por el Ministro de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN RENÉ MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARIBEL COCO DE GARIBALDI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1752-99-DNP DE 1° DE JULIO DE 1999, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Edwin René Muñoz, en representación de Maribel Coco de Garibaldi, interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulos, por ilegales, la Resolución N° 1752-99-DNP de 1 de julio de 1999, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, sus actos confirmatorios y para que haga otras declaraciones.

A foja 79 del expediente, el apoderado judicial de la demandante solicita a la Magistrada Sustanciadora que, antes de admitir la demanda, pida a la

Dirección General de la Caja de Seguro Social copias autenticadas del acto administrativo impugnado y de las resoluciones con las que se agotó la vía gubernativa, en vista de que las solicitó al Secretario General de la Caja de Seguro Social mediante memoriales presentados el 9 de marzo de 2000 (fs. 17 y 18), sin que haya recibido respuesta alguna.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 dispone que la Magistrada Sustanciadora puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, cuando no ha sido publicado o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación. De acuerdo con reiterada jurisprudencia de la Sala el petente debe probar que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

En el presente caso la parte actora presentó copias simples de las resoluciones atacadas con la constancia de su notificación y probó que gestionó la autenticación de las mismas sin recibir respuesta positiva de la autoridad demandada, por tanto lo procedente es solicitarle a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social que envíe copias autenticadas de las resoluciones administrativas que se citan a continuación, por ser un requisito indispensable para decidir la admisión de la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción.

En consecuencia, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Edwin René Muñoz en representación de MARIBEL COCO DE GARIBALDI, DISPONE solicitar por Secretaría de la Sala Tercera a la Secretaría General de la Caja de Seguro Social, que en el término de cinco días, envíe los siguientes documentos:

1. Copia autenticada de la Resolución N° 1752-99 de 1 de julio de 1999, expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social,

2. Copia autenticada de la Resolución N° 2219-99-DNP de 11 de agosto de 1999, expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, y

3. Copia autenticada de la Resolución N° 18,423-99 J.D. de 25 de noviembre de 1999, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILIA DE MONTÚFAR EN REPRESENTACIÓN DE ARGELIS AGUILAR BARRIOS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 203-99 (D) DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, Y SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO.

VISTOS:

La licenciada Edilia de Montúfar en representación de ARGELIS AGUILAR BARRIOS, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción

para que se declaren, nulas por ilegales, las Resoluciones N° 203-99 (D) de 14 de septiembre de 1999 y N° 243-99 de 28 de septiembre de 1999, ambas dictadas por la Gerencia General del Banco Hipotecario Nacional.

Estima la Magistrada Sustanciadora que la precitada demanda no debe admitirse, debido a que no consta en autos que el actor agotó la vía gubernativa. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley N° 135 de 1943, el agotamiento de la vía gubernativa es presupuesto esencial para recurrir ante la Sala Tercera en demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción y en autos no existe prueba de que el recurso de apelación en subsidio aducido el 14 de septiembre de 1999 contra el acto impugnado (Cfr. f. 2), no ha sido resuelto, y que por ese motivo se haya producido el silencio administrativo.

En el caso en estudio, la parte actora sólo presenta con su demanda el documento fechado el 13 de enero de 2000, legible a fojas 3, en el cual pide a la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional que le informe si ha recaído o no decisión sobre el recurso de apelación interpuesto; sin embargo, no aporta la certificación para acreditar que efectivamente en la fecha de presentación de su demanda no ha recaído decisión sobre el recurso, ni tampoco solicita en la demanda que antes de admitirla se pida al funcionario demandado dicha certificación.

El ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 ha sido interpretado por la Sala en el sentido de que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

En fallo fechado 18 de octubre de 1996, esta Sala puntualizó lo siguiente:

> "Sin embargo, tales aseveraciones no han sido debidamente comprobadas como bien lo manifestara este Tribunal ad-quem en el Auto objeto de impugnación. Se observa a f. 9 del expediente, que pese a que el recurrente solicitó al Magistrado Sustanciador requerir del Ministerio de Educación el envío de una serie de copias autenticadas, así como también, ciertas certificaciones relacionadas con su mandante, en ningún momento solicitó al Magistrado Sustanciador requerir de dicho Ministerio, certificación de si sobre el referido recurso, había recaído o no decisión, a los efectos de acreditar debidamente el agotamiento de la vía gubernativa.
>
> Retomando la idea anterior, tal exigencia no es suficiente para acreditar la negativa tácita de la administración si no se hace acompañar necesariamente a la demanda, copia autenticada del escrito contentivo del recurso gubernativo con fecha de presentación ante la institución demandada, más la constancia o certificación de esta última, de que pasados los dos (2) meses a los que alude el artículo 36 (ordinal 1), de la Ley 135 de 1943, no ha recaído decisión resolutoria sobre el mismo.
>
> El cumplimiento de este requisito por parte de la jurisprudencia reiterada de esta Sala tiene como finalidad y encuentra plena justificación en el hecho de que en la medida en que se acredite debidamente dicha negativa, se comprueba plenamente el agotamiento

de la vía gubernativa por silencio administrativo, requisito esencial para ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley No. 33 de 1946, en concordancia con el artículo 22 de la misma Ley. (Registro Judicial de octubre de 1996, págs. 388 y 389).

Como en este caso, tal como ha sido expuesto no se ha probado el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, no debe dársele curso a la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Edilia de Montúfar, en representación de ARGELIS MARÍA AGUILAR, para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 203-99 (D)° 216 de 14 de septiembre de 1999 y N° 243-99, ambas emitidas por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILIA CEDEÑO DE MONTÚFAR, EN REPRESENTACIÓN DE MIRKA MORÁN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 262-99 (D) DE 8 DE OCTUBRE DE 1999, EXPEDIDA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, ASÍ COMO SU ACTO CONFIRMATORIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La licenciada Edilia Cedeño de Montúfar en representación de MIRKA MORÁN, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren, nulas por ilegales, las Resoluciones N° 262-99 (D) de 8 de octubre de 1999 y, N° 346-99 de 16 de noviembre de 1999, ambas dictadas por la Gerencia General del Banco Hipotecario Nacional.

Estima la Magistrada Sustanciadora que la precitada demanda no debe admitirse, debido a que no consta en autos que el actor agotó la vía gubernativa. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley N° 135 de 1943, el agotamiento de la vía gubernativa es presupuesto esencial para recurrir ante la Sala Tercera en demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción y en autos no existe prueba de que el recurso de apelación en subsidio promovido el 14 de septiembre de 1999 contra el acto impugnado (Cfr. f. 2), no ha sido resuelto, y que por ese motivo se ha producido el silencio administrativo.

En el caso en estudio, la parte actora sólo presenta con su demanda el documento fechado el 27 de enero de 2000, legible a fojas 3, en el cual pide a la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional que le informe si ha recaído o no decisión sobre el recurso de apelación interpuesto; sin embargo, no aporta la certificación para acreditar que efectivamente en la fecha de presentación de su demanda no ha recaído decisión sobre el recurso, ni tampoco solicita en la demanda que, antes de admitirla, se pida al funcionario demandado dicha certificación.

El ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 ha sido interpretado por la Sala en el sentido de que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

En fallo fechado 18 de octubre de 1996, esta Sala puntualizó lo siguiente:

> "Sin embargo, tales aseveraciones no han sido debidamente comprobadas como bien lo manifestara este Tribunal ad-quem en el Auto objeto de impugnación. Se observa a f. 9 del expediente, que pese a que el recurrente solicitó al Magistrado Sustanciador requerir del Ministerio de Educación el envío de una serie de copias autenticadas, así como también, ciertas certificaciones relacionadas con su mandante, en ningún momento solicitó al Magistrado Sustanciador requerir de dicho Ministerio, certificación de si sobre el referido recurso, había recaído o no decisión, a los efectos de acreditar debidamente el agotamiento de la vía gubernativa.
>
> Retomando la idea anterior, tal exigencia no es suficiente para acreditar la negativa tácita de la administración si no se hace acompañar necesariamente a la demanda, copia autenticada del escrito contentivo del recurso gubernativo con fecha de presentación ante la institución demandada, más la constancia o certificación de esta última, de que pasados los dos (2) meses a los que alude el artículo 36 (ordinal 1), de la Ley 135 de 1943, no ha recaído decisión resolutoria sobre el mismo.
>
> El cumplimiento de este requisito por parte de la jurisprudencia reiterada de esta Sala tiene como finalidad y encuentra plena justificación en el hecho de que en la medida en que se acredite debidamente dicha negativa, se comprueba plenamente el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, requisito esencial para ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley No. 33 de 1946, en concordancia con el artículo 22 de la misma Ley. (Registro Judicial de octubre de 1996, págs. 388 y 389).

Como en este caso, tal como ha sido expuesto no se ha probado el agotamiento de la vía gubernativa por silencio adminstrativo, no debe dársele curso a la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Edilia Cedeño de Montúfar, en representación de MIRKA DE MORÁN, para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 262-99 (D) de 8 de octubre de 1999 y, N° 346-99 de 16 de noviembre de 1999, ambas emitidas por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROBERTO ROJAS C., EN REPRESENTACIÓN DE EDILIA DE MONTUFAR, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 198-99 (D) DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1999, DICTADA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, EL ACTO COFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Roberto Rojas, en representación de la señora EDILIA DE MOTUFAR, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 198-99 (D) de 13 de septiembre de 1999, dictada por la Gerencia General del Banco Hipotecario Nacional, acto confirmatorio; y para que se haga otras declaraciones.

A juicio de la Magistrada Sustanciadora, la presente demanda no debe admitirse, porque el demandante no ha probado que se produjo el silencio administrativo, que agotó la vía gubernativa. De acuerdo con el artículo 42 de la Ley N° 135 de 1943, el agotamiento de la vía gubernativa es presupuesto esencial para recurrir ante la Sala Tercera en demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y en autos no existe prueba de que el recurso de apelación en subsidio promovido, el 15 de septiembre de 1999, contra el acto impugnado (Cfr. reverso de la foja 1), no ha sido resuelto, y que por ese motivo se ha producido el silencio administrativo.

En el caso en estudio, la parte actora sólo presenta con su demanda el documento fechado el 13 de enero de 2000, legible a fojas 3, en el cual se pide a la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional que le informe si ha recaído o no decisión sobre el recurso de apelación interpuesto; sin embargo, no aporta la certificación para acreditar que efectivamente en la fecha de presentación de su demanda no ha recaído decisión sobre el recurso, ni tampoco solicita en la demanda que, antes de admitirla, se pida al funcionario demandado dicha certificación.

El ordinal 3° del artículo 36 de la Ley 135 de 1943 preceptúa que se considerará agotada la vía gubernativa por silencio administrativo, cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semiautónoma, siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso administrativa.

El artículo 46 de la Ley 135 de 1943 ha sido interpretado por la Sala en el sentido de que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia o certificación.

En fallo fechado 18 de octubre de 1996, esta Sala puntualizó lo siguiente:

"Sin embargo, tales aseveraciones no han sido debidamente comprobadas como bien lo manifestara este Tribunal ad-quem en el

> Auto objeto de impugnación. Se observa a f.9 del expediente, que pese a que el recurrente solicitó al Magistrado Sustanciador requerir del Ministerio de Educación el envío de una serie de copias autenticadas, así como también, ciertas certificaciones relacionadas con su mandante, en ningún momento solicitó al Magistrado Sustanciador requerir de dicho Ministerio, certificación de si sobre el referido recurso, había recaído o no decisión, a los efectos de acreditar debidamente el agotamiento de la vía gubernativa.
>
> Retomando la idea anterior, tal exigencia no es suficiente para acreditar la negativa tácita de la administración si no se hace acompañar necesariamente a la demanda, copia autenticada del escrito contentivo del recurso gubernativo con fecha de presentación ante la institución demandada, más la constancia o certificación de esta última, de que pasados los dos (2) meses a los que alude el artículo 36 (ordinal 1), de la Ley 135 de 1943, no ha recaído decisión resolutoria sobre el mismo.
>
> El cumplimiento de este requisito por parte de la jurisprudencia reiterada de esta Sala tiene como finalidad y encuentra plena justificación en el hecho de que en la medida en que se acredite debidamente dicha negativa, se comprueba plenamente el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, requisito esencial para ocurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1946, en concordancia con el artículo 22 de la misma Ley. (Registro Judicial de octubre de 1996, p.p. 388 y 389).

Como el apoderado judicial de la demandante no ha probado el agotamiento de la vía gubernativa por silencio administrativo, la demanda es inadmisible de conformidad con el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Roberto Rojas, en representación de la señora EDILIA DE MONTUFAR, contra la Resolución N° 106 de 3 de marzo de 1993, dictada por la Gerencia General del Banco Hipotecario Nacional, acto confirmatorio; y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ARMANDO SALAZAR (REPRESENTANTE DEL CORREGIMIENTO DE RÍO ABAJO), PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 14 DE FEBRERO DE 2000, POR MEDIO DE LOS CUALES SE DECLARA NULO UN VOTO EMITIDO A FAVOR DE ARMANDO SALAZAR, Y SE REALIZAN NUEVAS ELECCIONES PARA ELEGIR A UN NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL, REALIZADOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Eugenio Carrillo en nombre y representación de ARMANDO SALAZAR, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo por ilegal el acto administrativo de 14 de febrero de 2000, por medio del cual se declara nulo el voto emitido a favor del demandante, y se realizan nuevas elecciones para elegir a un nuevo Presidente del Consejo Municipal, realizados por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

SOLICITUD DE SUSPENSION

Conjuntamente con la pretensión de la demanda, el recurrente solicita que esta Sala Tercera ordene la suspensión del acto acusado, tal como se lee de foja 48 a 50 del expediente. Veámos:

> "Solicitamos a la Honorable Sala que al momento de admitir la presente demanda de nulidad, ordene la SUSPENSIÓN de los efectos del acto impugnado de admitir y votar una propuesta para declarar la Nulidad de un acuerdo anterior, que conlleva la nueva elección del Presidente del Concejo Municipal en transgresión a las normas que para la realización de dicho acto, contenidas en el Reglamento Interno del Concejo Municipal.
>
> Mediante Resolución fechada el 28 de agosto de 1997, bajo la ponencia del Magistrado Arturo Hoyos en Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad presentada por el Licdo. Luis Alberto Navarro en representación de Santiago Carrión González, para que se declare nula por ilegal, el acta N° 5 de 16 de junio de 1997, del Consejo Provincial de Coclé ...
>
> A prima facie se puede constatar la existencia de vicios y actuaciones administrativas que violan las disposiciones reglamentarias establecidas, asumiendo el Concejo atribuciones privativas de vuestra Sala Tercera, de lo contencioso administrativo. Probada la existencia de la elección previa y proclamación por los organismos correspondientes, no puede, so pretexto de anular una elección invocarse una nulidad no establecida en la Ley ni advertida oportunamente, sino hasta luego de ejecutado el acto y perfeccionado el mismo proceder de facto irrogándose facultades no establecidas en la Ley.
>
> Adicional a lo anterior, por la trascendencia de la orden ilegal, adicional a la prepotencia y advertencia de otras instancias políticas, es menester mantener el orden de legalidad y seguridad previendo que actuaciones flagrantemente violatorias no sean mantenidas en beneficio de factores extrajurídicos. El precedente sentado por su trascendencia obliga a pedir a la Sala se suspenda los actos de facto y restablecer posteriormente el orden jurídico"

OPOSICION A LA SOLICITUD DE SUSPENSION

Por medio de escrito fechado 22 de los corrientes, el licenciado Teófanes López actuando en su propio nombre compareció al proceso como tercero impugnante, manifestando su oposición a la solicitud de la medida cautelar de suspensión (ver fojas 54, 56, y 56). el tercerista sostiene, en primer lugar, que el demandante alude a un precedente de la Sala en torno al Consejo Provincial de Coclé, el cual no le es aplicable, ya que ese Consejo Provincial no anuló una elección.

En segundo término, sustenta el opositor que de suspenderse el acto que se le imputan vicios de ilegalidad, esta actuación discrecional traería como consecuencia un perjuicio grave e irreparable al Consejo Municipal de Panamá, puesto que no se podría retrotraer ciertos actos emitidos por la Corporación, además de que se tendría que determinar quién es el funcionario que se encargaría de la Presidencia y Vice-Presidencia del Consejo Municipal de Panamá, ya que estas dos posiciones resultaron elegidas en los comicios que hoy se impugnan.

Aunado a lo anterior, esgrime el licenciado López que el demandante no ha demostrado que a prima facie el acto es ilegal.

Por último afirma el tercero impugnante, que el artículo 98 del Código Judicial no contempla el supuesto de anulación de elecciones, para recurrir en la vía contencioso administrativa.

CUESTIONES PREVIAS

Del texto del artículo 73 de la Ley 135 de 1943, tal como quedó modificado por el artículo 76 de la Ley 33 de 1946 y siguientes, se deriva la facultad discrecional que tiene la Sala para suspender los efectos del acto administrativo impugnado, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio económico o patrimonial notoriamente grave y de difícil reparación que se pudiera ocasionar por razón del acto recurrido.

Sin embargo, para acceder a dicha medida cautelar es imprescindible, tal como ha sido jurisprudencia reiterada, que el recurrente compruebe previa y fehacientemente, los hechos alegados como motivo de la solicitud de suspensión. Igualmente se requiere que el peticionario no sólo enuncie la solicitud (como ocurre en el presente caso), sino que la motive adecuadamente, suministrando al Tribunal los elementos de juicio indiciarios que justifiquen la necesidad de adoptar con urgencia la medida cautelar requerida. Al respecto pueden consultarse, entre otros, los Autos de 21 de junio de 1995, de 31 de julio de 1996, de 23 de septiembre de 1997, de 20 de marzo de 1998 y de 4 de septiembre de 1998 expedidos por este Tribunal.

DECISION DEL TRIBUNAL

Con vista en la petición de Suspensión Provisional que se ha formulado, la Sala se ocupado de examinar detenida y responsablemente los argumentos expresados tanto por el demandante como por su opositor, y ha llegado a la conclusión de que hasta este momento no existen razones que justifiquen decretar con carácter de urgencia la citada medida cautelar.

Las razones que sirven de sustento a este criterio se exponen a continuación:

1. De la lectura del libelo de demanda promovido así como de la documentación aportada por la misma no se advierte, a juicio de la Sala, la presencia de los presupuestos que, según la Ley y la jurisprudencia, deben existir para que se acceda a decretar la medida cautelar de Suspensión Provisional. Estos presupuestos de procedibilidad de la medida cautelar son, como se sabe, el denominado fumus bonis iuris (apariencia de buen derecho) y el periculum in mora (peligro o amenaza que puede afectar los intereses en conflicto por la demora natural de los procesos judiciales).

En cuanto a la primera de las exigencias, esto es, la apariencia de buen derecho, no se observa la presencia de una prueba sumaria que de modo manifiesto, claro e incontestable acredite a simple vista los presuntivos cargos de ilegalidad expuestos por el demandante. En estas circunstancias, se conceptúa que, para que la Sala pueda, en este caso, apreciar la magnitud de la violaciones jurídicas alegadas sería necesario e indispensable que se realizara un estudio detallado de la cuestiones de hecho y de las valoraciones probatorias consiguientes, tarea ésta que no puede adelantarse hasta tanto se practiquen las pruebas y sean debidamente justipreciadas en la sentencia de mérito que en su oportunidad expedirá el Tribunal.

2. En lo que atañe al presupuesto del periculum in mora, esta Corporación estima que, tomando en cuenta el estado de incertidumbre del derecho alegado por el demandante, la adopción de la Suspensión Provisional solicitada, en lugar de favorecer la satisfacción del interés general lo único que podría conseguir es debilitarlo, pues, evidentemente, suspender la elección de la Directiva del

Consejo Municipal de Panamá, afectaría de suyo la continuidad, regularidad y eficacia de la actuación de este Ente Administrativo Municipal. La Corte considera que al analizar la exigencia del periculum in mora, se hace necesario que se efectúe un análisis de ponderación ecuánime de los intereses que podrían verse afectados con la medida cautelar.

Esta Corporación considera oportuna la ocasión para hacer suyas las juiciosas acotaciones que formula la Administrativista española Carmen Chinchilla Marín en su obra "LA TUTELA CAUTELAR EN LA NUEVA JUSTICIA ADMINISTRATIVA" (Editorial Civitas, Madrid, 1991, pág. 44) en torno al examen de ponderación de intereses que debe efectuarse al ejercitar la Tutela Cautelar en sede administrativa, cuando expresa lo siguiente:

> "Todavía en el plano de la comprobación por el Juez del periculum in mora, la tutela cautelar administrativa presenta una peculiaridad muy importante consistente en que debe valorarse siempre el interés público que el acto administrativo de que se trate ponga en juego. Es decir, que la apreciación del daño irreparable debe hacerse en presencia de la apreciación del posible daño que para los intereses generales pueda derivarse de la adopción de una medida cautelar. En una palabra, la irreparabilidad del daño para el recurrente ha de ser comparada y ponderada con la irreparabilidad del daño para el interés público". (Subrayado es de la Sala).

Los señalamientos que preceden sirven de apoyo para afirmar que en el estado incipiente en que se encuentra el proceso no existen elementos que hagan apremiante y urgente la adopción de la medida cautelar de suspensión solicitada, habida cuenta que, en todo acto de elección siempre existe la elevada probabilidad que las partes afectadas con la votación formulen toda clase de reparos y cuestionamientos. Para que estos cuestionamientos o discusiones sobre la legalidad de un determinado escrutinio puedan justificar el ejercicio urgente de las potestades cautelares que la Ley le reconoce a la Sala, es preciso que tales cuestionamientos estén revestidos de una gravedad, en principio, ostensible e indubitable que hagan necesaria la Suspensión Provisional del acto atacado.

En definitiva, esta Corporación es del criterio de que en la presente circunstancia no existen los presupuestos jurídicos esenciales para acceder a la adopción de la Suspensión Provisional impetrada por el demandante.

Hacemos la salvedad que las anteriores consideraciones, en modo alguno constituyen un criterio final o determinante para el pronunciamiento de fondo que en su momento será emitido por quienes integran esta Máxima Corporación de Justicia, misma que gira en torno a la legalidad o ilegalidad de la anulación del voto que favorecía la candidatura ARMANDO SALAZAR en los comicios para Presidente del Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ACCEDEN A LA SUSPENSION del acto administrativo de 14 de febrero de 2000, por medio del cual se declara nulo el voto emitido a favor de ARMANDO SALAZAR y se realizan nuevas elecciones para elegir a un nuevo Presidente del Consejo Municipal, realizados por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS VILLALAZ EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N°6,534 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1995, SUSCRITO POR EL ENTONCES MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, Y POR EL ADMINISTRADOR DE LA REGIÓN INTEROCEÁNICA. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**

**VISTOS:**

**El licenciado Carlos A. Villalaz ha presentado advertencia de inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo 434 del 1 de octubre de 1959. La advertencia ha sido presentada dentro de la demanda contencioso administrativa de nulidad promovida por el licenciado Carlos A. Villalaz para que se declare nula, por ilegal, la Escritura Pública No. 6534 de 20 de noviembre de 1995, suscrito por el entonces Ministro de Hacienda y Tesoro y por el Administrador de la Región Interoceánica.**

**El Magistrado Sustanciador procede a revisar el escrito contentivo de la advertencia de inconstitucionalidad presentada, a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos legales que hagan viable su remisión al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.**

**Observa quien suscribe que mediante fallo de 9 de mayo de 1962, el Pleno de esta Corporación declaró que no es inconstitucional el Decreto Ejecutivo 434 del 1 de octubre de 1959.**

**En virtud de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 434 del 1 de octubre de 1959, no procede remitir el conocimiento de la presente advertencia al Pleno de esta Corporación, conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución Nacional.**

**En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso Adminsitrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECIDE NO REMITIR AL PLENO DE LA CORTE SUPREMA la advertentencia de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Carlos Villalaz.**

**Notifíquese y Cúmplase.**

**(fdo.) JORGE FABREGA P.**
**(fdo.) JANINA SMALL**
**Secretaria**

**==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=**

**DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA CIRCULAR DE 1 DE MARZO DE 1999, EXPEDIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EL ACUERDO N°19-99 DE 21 DE ABRIL DE 1999, DICTADO POR EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE JORGE FABREGA P. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**

**VISTOS:**

**La firma Arosemena y Arosemena, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la CIRCULAR de 1 de marzo de 1999, expedido por el Rector de la Universidad de Panamá, el**

ACUERDO N° 19-99 de 21 de abril de 1999, dictado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para verificar si la misma cumple con los requisitos legales para que pueda ser admitida.

Observa quien suscribe que la demanda no puede ser admitida, toda vez que no ha individualizado el acto administrativo con toda precisión tal como lo establece el artículo 43a de la Ley 135 de 1943. Esto es así, pues la actora demanda la nulidad de todo acuerdo 19-99, el cual está conformado por varios actos administrativos sin señalar cuál es el acto específico que desea impugnar dentro de dicho acuerdo.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por la firma Arosemena y Arosemena, actuando en su propio nombre y representación para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la CIRCULAR de 1 de marzo de 1999, expedido por el Rector de la Universidad de la Panamá, el ACUERDO No. 19-99 de 21 de abril de 1999, por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA DIXA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ELIDA ORTEGA GUERRA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ADJUDICACIÓN MUNICIPAL DE UN LOTE DE TERRENO DE ELIDA DEL CARMEN VILLAMONTE ORTEGA Y OTROS, Y QUE CULMINÓ CON LA ESCRITURA PÚBLICA N° 210 DE 26 DE FEBRERO DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada DIXA CASTILLO DE MÉNDEZ, actuando en representación de la señora ELIDA ORTEGA GUERRA, ha interpuesta Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la adjudicación municipal que culminó con la Escritura Pública No. 210, de 26 de febrero de 1998, mediante la cual el Municipio de David, adjudicó un lote de terreno a ELIDA DEL CARMEN VILLAMONTE ORTEGA, ELIDA ORTEGA Y OTROS.

El Magistrado sustanciador procede a examinar la demanda incoada, en vías de determinar si el libelo ha cumplido con los presupuestos procesales que se haga efectiva su admisión, y así lo detallamos a renglón seguido:

Del presente libelo se observa que la pretensión de la actora es el reclamo de derechos subjetivos, los cuales son propios de ser demandados a través de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. En este sentido debemos señalarle a la apoderada judicial de la parte actora que ha incurrido en el error de confundir la demanda contencioso administrativa de nulidad con la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Ello es así por cuanto el objeto de la demanda contencioso administrativa de nulidad es impugnar actos generales y no actos individuales tal como se evidencia del presente proceso.

También se advierte que la recurrente no ha cumplido enteramente con los

requisitos preceptuados en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, relativo a la presentación de demandas contencioso administrativas. Así es, el numeral 1 del citado artículo dispone que toda demanda presentada ante la jurisdicción contencioso administrativa contendrá "la designación de las partes y sus representantes", lo cual no se cumple en la demanda bajo estudio, ya que se omite señalar a la Procuradora de la Administración como parte del proceso; designación ésta que la doctrina jurisprudencial ha exigido en forma reiterada.

Otro defecto que observa el que suscribe es que la representante legal de la parte afectada dirige el libelo, de manera indeterminada y errónea a "Los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Sala Tercera de los Negocios Generales" y no la Magistrada Presidenta de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que es la forma correcta. Esto contraviene los requerimientos formales contenidos en el artículo 28 de la Ley 33 de 1946 y en artículo 102 del Código Judicial, normas legales en que se fundamenta la exigencia reiterada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Por los defectos antes anotados, lo procedente es negar la admisión de la presente demanda conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por la Lic. DIXA CASTILLO DE MÉNDEZ, en representación de la señora ELIDA ORTEGA GUERRA.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ASCENCIÓN BROCE, EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, PARA QUE SE DECLAREN NULOS, POR ILEGALES, LOS LITERALES A Y B DEL DECRETO EJECUTIVO N° 302 DE 7 DE DICIEMBRE DE 1999, EXPEDIDO POR LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ascención Broce, actuando en nombre y representación del ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declaren nulos, por ilegales, los literales a) y b) del artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 7 de diciembre de 1999, expedido por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, el licenciado Broce solicitó la suspensión provisional de los efectos del literal b) del artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 7 de diciembre de 1999, expedido por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, "por el cual se regula el servicio de radioaficionados de la República de Panamá". Dicha solicitud de suspensión fue sustentada en los siguientes términos:

> "A pesar de que mediante la presente demanda se solicita que se declare NULO, por ilegal el Artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 1999, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 135 de 1943, solicitamos respetuosamente a la Sala ordenar solamente la suspensión de

los efectos del literal b, del Artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 1999 antes citado, hasta tanto se tramite y decida el proceso contencioso-administrativo respectivo, para evitar perjuicios notoriamente graves que tal ejecución produciría.

Esta especial petición se basa en las siguientes razones:

PRIMERO: Si no se suspenden los efectos del Literal b., del Artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 1999 impugnado, se causarían graves perjuicios a los concesionarios de telecomunicaciones existentes, los cuales se verían en forma repentina e ilegal afectados por la asignación de bandas y frecuencias determinadas en el Literal b., del Artículo 29 del referido Decreto Ejecutivo No. 302 de 1999, toda vez que dichas bandas y frecuencias le fueron previamente asignadas en virtud de mandato de la Ley No. 31 de 8 de febrero de 1996.

Por tanto, mediante la norma impugnada se permite ilegalmente la colisión de asignaciones de bandas de frecuencias perjudicando gravemente, como es lógico conceptuar, la sana disciplina que debe imperar en administración del Espectro Radioeléctrico.

SEGUNDO: Igualmente los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones se verían afectados gravemente por interferencias perjuiciales ocasionadas por la colisión de bandas y/o frecuencias mencionadas en el punto anterior, lo que repercutiría negativamente en la calidad de los servicios de telecomunicaciones que deben recibir los usuarios de tales servicios.

Tal sería el caso, por ejemplo, del servicio de telefonía pública que se brinda en áreas rurales de difícil acceso donde el teléfono público constituye el único medio de comunicación disponible.

TERCERO: Los graves perjuicios no sólo alcanzarían a los usuarios de los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones, si no a los mismos radioaficionados que se afectarán económicamente por inversiones cuantiosas realizadas para la adquisición e instalación de equipos de comunicaciones amparados en el Decreto Ejecutivo objeto de impugnación.

CUARTO: Se resalta, con profunda preocupación que , como producto de lo determinado en el literal b., del Artículo 29 del referido Decreto Ejecutivo No. 302 de 1999, se están afectando, desde ya, el funcionamiento de instituciones públicas como lo son, el Servicio Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud, además, empresas tales como, Refinería Panamá, S. A., Televisora Nacional, S. A. (Canal 2), Kadair, S. A., Internet de Panamá, S. A., Televisora Istmeña, S. A., Ce Comunica, S. A., BSC de Panamá, S. A. y Cable & Wireless Panamá, S. A., entre otras.

QUINTO: El literal b., del Artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 7 de diciembre de 1999 impugnado, tiene toda la apariencia de ser ilegal, lo que justifica aún más que se ordene la suspensión de sus efectos, para hacer efectiva la tutela legal sobre los actos de la administración.

En consecuencia, solicitamos que una vez ordenada la suspensión de los efectos del citado Literal b., del Artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 1999, se comunique tal medida al Ministerio de Gobierno y Justicia y a la Procuraduría de la Administración, a efecto de que se eviten, cuanto antes, los perjuicios notoriamente graves que la ejecución y aplicación de la norma impugnada produciría según todo lo que se deja afirmado arriba." (fs.227-229).

De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

A criterio de la Sala, prima facie , se advierte que no se configura el supuesto alegado por la actora que amerite la suspensión provisional de los efectos del literal b) del artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 7 de diciembre de 1999, expedido por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión de los efectos del literal b) del artículo 29 del Decreto Ejecutivo No. 302 de 7 de diciembre de 1999, expedido por la Presidenta de la República por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA BAHIA LAS MINAS, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN N° JD-1700 DE 10 DE DICIEMBRE DE 1999, DICTADA POR EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Arias, Fábrega y Fábrega, actuando en nombre y representación de la EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA BAHIA LAS MINAS, S. A., ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la resolución No JD-1700 de 10 de diciembre de 1999, dictada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

La firma Arias, Fábrega y Fábrega solicitó la suspensión de los efectos del acto impugnado en la parte final de la demanda. Sin embargo, por razones de economía procesal, la Sala procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda es inadmisible por las razones que se exponen a continuación.

Es evidente que la pretensión de la parte demandante se ubica fundamentalmente en el plano de derechos subjetivos dimanantes de contratos celebrados entre dicha sociedad, como generadora de energía térmica y vendedora de la misma al sistema nacional de electricidad, y otras empresas distribuidoras de la misma.

El punto central de su reclamación constituye la alegación de que mediante el acto administrativo impugnado se ha variado la definición del concepto denominado "energía requerida" modificándose así el concepto de "energía asociada" que forma parte de dichos contratos y que, mediante dicha modificación

unilateral, se le han causado o se le podrían causar sustanciales perjuicios financieros, los cuales se han acreditado mediante dictamen pericial de la empresa KPMG Peat Marwick que obra de fojas 157 a 166 del expediente.

La pretensión de fondo y la petición de suspensión del acto como medida cautelar para asegurarla descansan en derechos subjetivos de la parte demandante y no tienen por objeto principal la tutela del orden jurídico abstracto: el interés del actor no se confunde con el de la colectividad. De allí que lo procedente es una demanda de plena jurisdicción.

Con razón ha sostenido la jurisprudencia colombiana que la acción de nulidad "procede contra todos los actos administrativos (generales o particulares) con el objeto de tutelar el orden jurídico; pero si mediante la petición de nulidad se pretende la tutela de derechos particulares para restablecerlos o precaver su violación se configura una pretensión litigiosa y deberá instaurarse contra la administración una acción de plena jurisdicción ...". También ha señalado que el contencioso de nulidad "se desenvuelve en torno de dos extremos únicamente: la norma transgredida y el acto transgresor, sin que las posibles situaciones jurídicas que se interpongan jueguen papel alguno en la litis, en tanto que el contencioso de restablecimiento (plena jurisdicción) ... se desarrolla alrededor de tres elementos: la norma violada, el derecho subjetivo protegido por ella y el acto violador de aquélla y éste. El lindero preciso entre los contenciosos es, pues, la situación jurídica subjetiva amparada por la norma civil o administrativa." (cfr. Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Colombia, 1989, págs. 21 y 22).

Es claro que el tema de la modificación unilateral de los contratos específicos y concretos que se plantea en la demanda no puede juzgarse ni evaluarse en términos abstractos como lo requiere un proceso de nulidad, ni mucho menos puede analizarse apropiadamente la petición de suspensión porque la misma se fundamenta en perjuicios patrimoniales que podría sufrir la empresa demandante y cuya tutela es propia de un contencioso de plena jurisdicción.

En el proceso de nulidad la suspensión procede cuando el acto viola ostensiblemente el ordenamiento jurídico o el principio de separación de poderes y en este caso el análisis no podría hacerse en términos abstractos, haciendo caso omiso de los contratos específicos celebrados por la parte demandante, ya que si se confronta el acto administrativo con el orden jurídico abstracto la violación no aparecería como evidente, pues los artículos 71 y 76 de la Ley No. 56 de 1995 sobre la contratación pública prevén la potestad de la administración de introducir modificaciones unilaterales a los contratos, posibilidad que es también ampliamente aceptada por la doctrina como potestad exorbitante de la administración en razón del interés público, que determina la existencia de la categoría de contratos administrativos, distintos de los de derecho privado.

Lo que hay que analizar en este caso es si los contratos administrativos específicos y concretos suscritos por la demandante pueden o no ser modificados por la administración; qué entidad estatal sería la competente para hacerlo; qué tipo de modificación, si alguna en el contexto de estos contratos específicos, podría realizarse; si los perjuicios financieros específicos que alega la demandante son o no de difícil o imposible reparación; y si el interés o derecho subjetivo de la empresa demandante requiere de una tutela prioritaria y preeminente en relación con el interés de la administración.

De todo lo anterior surge con claridad meridiana la conclusión de que el proceso que se ajusta a los requerimientos legales para resolver la pretensión y tutelar los derechos contractuales de la parte demandante es el de plena jurisdicción, independientemente de la aparente generalidad del acto administrativo impugnado, el cual no va dirigido a una pluralidad indeterminada de sujetos, como es la hipótesis normal de los reglamentos, sino a una pluralidad determinable de destinatarios cuyos derechos subjetivos afecta palmariamente.

Por último, conviene recordar que el artículo 14 de la Ley 33 de 1946,

señala que en los procesos de plena jurisdicción podrán demandar "las personas afectadas por el acto" y en los de nulidad "cualquier persona natural o jurídica", lo cual aclara aún más el caso que nos ocupa.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por la firma Arias, Fábrega y Fábrega, actuando en nombre y representación de la EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA BAHIA LAS MINAS, S. A., para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo contenido en la resolución No. JD-1700 de 10 de diciembre de 1999, dictada por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR ALVARADO, LEDEZMA & DE SANCTIS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO GARCÍA, PATRICK DILLON, ALLAN BAITEL, TETEL DE CONTRERAS, SHANINA CONTRERAS, JULIO CONTRERAS, JOSÉ CHIRINO, MARÍA DE CHIRINO, SOUHAILA CHIRINO, LUIS CHIRINO, FRANCISCO ALVARADO, MARIELA CALDERÓN, AVELINA DE CALDERÓN, RICARDO SOTO, CECILIA ALMENGOR, ROSA ELVIRA DE ROMERO, JAVIER ROMERO, ANNETTE DE ROMERO, YOLANDA MARCO SERRA, LUIS CASCANTE Y RAQUEL DE CASCANTE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 122 DE 20 DE MAYO DE 1998, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA SE DICTEN OTRAS DISPOSICIONES EN SU REEMPLAZO. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA LÓPEZ. PANAMÁ, VEINTITRES (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Alvarado, Ledezma & De Sanctis, en representación de Octavio García, Patrick Dillon, Allan Baitel, Tetel de Contreras, Shanina Contreras, Julio Contreras, José Chirino, María de Chirino, Souhaila Chirino, Luis Chirino, Francisco Alvarado, Mariela Calderón, Avelina de Calderón, Ricardo Soto, Cecilia Almengor, Rosa Elvira de Romero, Javier Romero, Annette de Romero, Yolanda Marco Serra, Luis Cascante y Raquel de Cascante ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998, dictado por el Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, y para se dicten otras disposiciones en su reemplazo.

El Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998 aprobó el cambio de código de zona de RM2 a RM3, con un 49.8% de tolerancia en densidad, solicitado por el arquitecto Edwin Brown, en representación de VIPASA, S. A., propietario de la Finca 22341, inscrita la folio 464 del Tomo 527, ubicada en la Avenida 3B Norte (Ave. José Martí), Urbanización El Cangrejo, Corregimiento de Bella Vista.

En el libelo de la demanda los actores solicitan la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado.

Según los demandantes su solicitud tiene como fin evitar los perjuicios que ocasionaría la edificación de mejoras contrarias al esquema urbanístico del sector, con los consecuentes cambios en la calidad de vida de los residentes; además, de las pérdidas económicas a los promotores del proyecto derivadas de una posible demolición de la construcción, por su incongruencia con las normas urbanísticas.

El artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943 permite al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo suspender provisionalmente los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

De una revisión del expediente se observa que la solicitud de rezonificación del área donde se encuentra ubicada la finca 22341, hecha por el arquitecto Edwin Brown se fundamenta en un proyecto cuyo fin es la construcción en la zona en conflicto de un edificio de apartamentos, de 14 pisos, con 4 apartamentos en cada uno.

MOTIVACIONES DE LA SALA

En consideración a la petición de Suspensión Provisional que han formulado los demandantes en relación con el Resuelto N° 122 de 20 de mayo de 1998, objeto de impugnación, la Sala ha examinado en forma detenida y responsable la situación planteada y ha llegado a la conclusión de que, en este momento, constan una serie de elementos de atendible significación que justifican el que ésta Corporación decrete la suspensión impetrada, a los propósitos de evitar la materialización de perjuicios notoriamente graves al orden jurídico y al interés general.

Las razones que sirven de apoyo a este criterio son las que se exponen a continuación:

1. El Resuelto Administrativo impugnado autoriza un significativo cambio en el Código de Zonificación y en la tolerancia de densidad del área en que se edificará el proyecto. Según las constancias que reposan en el expediente, el cambio de Código de Zona se eleva de la categoría RM2 a RM3 con una tolerancia de densidad de 49.8%.

2. Conforme se deduce de la documentación que milita en autos, el cambio de zonificación adoptado en el Resuelto atacado aparentemente se concedió, pese a que los informes técnicos del propio Ministerio de Vivienda no aconsejaban tal incremento, habida cuenta que, de acuerdo a estas autoridades, la tolerancia del sector donde se desarrollará la obra es de alta densidad según la escala de zonificación vigente (Véase fojas 1 y 2 del expediente).

3. Los informes técnicos elaborados por las autoridades del Ministerio de Vivienda en las distintas ocasiones en que el promotor del proyecto solicitó el cambio de Código de Zonificación son coincidentes en la no viabilidad de dicho incremento. Así, en el informe técnico de fecha 22 de noviembre de 1996, el departamento de trámites de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, efectuó los siguientes señalamientos sobre la inconveniencia de cambiar el Código de Zona de RM2 a RM3, en los siguientes términos:

> "... si se desarrollan lotes específicos, con alta densidad (RM3) los mismos traerán conflictos mayores a la propia vía y al área circundante. Ademas (sic) su infraestructura es completa en cuanto a sus servicios, pero no se sabe a ciencia cierta si los actuales sistemas tendrán la capacidad como para absorver el servicio requerido a edificaciones que sobre pasan de los 10 altos.
> ...
> Del análisis anterior consideramos que no es factible otorgar el Código de Zona RM3." (Véanse fojas 23 y 24 del expediente). El resaltado es de la Sala.

En el mismo sentido, las propias autoridades técnicas del Ministerio de Vivienda expresaron en su informe de 20 de mayo de 1998, elaborado con motivo de la segunda petición de cambio de zona planteada por el promotor, la siguiente conclusión:

"EN CONCLUSIÓN CONSIDERAMOS QUE NO ES FACTIBLE EL CAMBIO DE CÓDIGO

> DE ZONA DE RM2 A RM3 + TOLERANCIA DE 49.8% DE TOLERANCIA EN DENSIDAD, EL CUAL REPRESENTA UN AUMENTO DE DENSIDAD DE 1000PERS/HAS. A 2,237.03 PERS/HAS. (RM3 + 49.8%)." (Véase foja 6 del expediente). Subrayado por la Sala.

4. Como un elemento adicional, en el Resuelto No. 14 de 14 de enero de 1997, mediante el cual las autoridades de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda negaron el cambio de código de RM1 a RM3 y aprobaron el cambio de código de zona de RM1 a RM2, se hizo constar que la tendencia del sector donde está ubicado el proyecto no es RM3 (ver foja 18). Es prudente observar además, que esta resolución resolvió la reconsideración formulada por el peticionario, ante la negativa del Ministerio a ampliar la tolerancia en densidad del área de RM1 a RM3; y entre este resuelto, expedido el 14 de enero de 1997 y el acto impugnado, sólo hay 1 año y cuatro meses de diferencia.

5. De la lectura del material incorporado al expediente parece deducirse que el cambio de zonificación de RM2 a RM3 fue adoptado por razones de superioridad jerárquica interministerial, relegando a un segundo plano los conceptos técnicos que adversaban tal medida. Sobre el particular el informe técnico No. 134-98 de 20 de mayo de 1998, apunta en su parte final lo siguiente:

> "DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES EMANADAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO, DESPUÉS DE REITERADAS REUNIONES SE NOS SOLICITÓ QUE SE APROBARÁ EL CAMBIO REQUERIDO DE RM2 A RM3 CON TOLERANCIA DE UN 49.8%". (Véase foja 6 del expediente).

6. Las circunstancias expuestas, a juicio de la Sala, proyectan, prima facie, la eventual infracción de normas reglamentarias que exijen que los cambios de Código de Zona se encuentren respaldados y sustentados en razones de carácter técnico. No escapa a la consideración de ésta Corporación que la construcción del proyecto, que aún se encuentra en una etapa incipiente, podría originar importantes alteraciones en el ambiente urbano vigente en la Calle José Marti (también conocida como 3 B Norte de esta ciudad), motivo por el cual ante la posibilidad de que el adelantamiento de la obra genere desfavorables perjuicios para el interés general, la Sala estima prudente ejercitar la facultad cautelar de Suspensión Provisional que le concede la Ley, mientras se surten los trámites de este proceso Contencioso Administrativo en el que, como es natural, se incorporarán adicionales elementos fácticos para estar en condiciones de apreciar si se han producido o no los presuntivos cargos de ilegalidad invocados por los demandantes.

Resulta importante destacar que la Suspensión Provisional del cambio de zonificación cuestionado es una medida que puede resultar prudente, en consideración a que si el proyecto se adelanta y en un futuro llegaren a prosperar las pretensiones de ilegalidad expuestas en la demanda, la consecuencia natural de ello podría ser la cancelación de una serie de permisos y la eliminación de los trabajos realizados, lo cual indudablemente podría representar irreparables y graves daños de carácter económico para los promotores de la obra.

Cabe agregar, para evitar equívocos, que los efectos de la presente declaratoria de suspensión provisional sólo recaerán sobre el cambio de zona con tolerancia en densidad RM3 de la Finca 22341, aprobado por el Ministerio, a través del Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998 (fs. 1), lo que implica la aplicación en el área del código de zona anterior, es decir el RM2, aprobado mediante el Resuelto No. 14 de 14 de enero de 1997. Por tanto, de proseguir la construcción del proyecto denominado Vista Park, el mismo debe sujetarse a las condiciones establecidas para las áreas de tolerancia en densidad de RM2, hasta tanto esta instancia jurisdiccional determine la legalidad o ilegalidad del citado cambio de zona a RM3.

Finalmente es preciso indicar que las anteriores consideraciones, en modo alguno constituyen un criterio final o determinante para el pronunciamiento de fondo que en su momento tendrá expedir ésta Corporación en relación con los

cargos de ilegalidad señalados por los demandantes.

Por las razones que preceden, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos del Resuelto No. 122 de 20 de mayo de 1998, dictado por el Director General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS GONZÁLEZ RAMÍREZ EN REPRESENTACIÓN DE CERVECERÍA DEL BARÚ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 8 DE FEBRERO DE 2000, DICTADA POR LA JUNTA DE CARNAVAL 2000 DE PENONOMÉ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ernesto González Ramírez, en representación de la sociedad CERVECERÍA DEL BARÚ, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1 de 8 de febrero de 2000, dictada por la Junta de Carnaval 2000 de Penonomé.

En su libelo, el licenciado González Ramírez solicitó también la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, sin embargo, por razones de economía procesal, la Magistrada Sustanciadora pasa a examinar la demanda para comprobar si cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En tal sentido, se aprecia que el apoderado judicial del actor designó como parte demandada en este proceso a la Junta de Carnaval 2000 de Penonomé, cuyo Presidente es el señor EDDY ROSAS.

Ahora bien, el artículo 582 del Código Judicial establece que: "El Estado, las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas comparecerán en proceso por medio de sus representantes autorizados, conforme a la Ley."

Observa esta Superioridad que en el presente caso la parte actora no acompañó a su demanda copia auténtica de la Resolución N° 1 de 28 de septiembre de 1999, mediante la cual la Alcaldía Municipal del Distrito de Penonomé nombró a la Junta de Carnaval para organizar, coordinar y proyectar todas las actividades relacionadas con los carnavales penonomeños del año 2000. Dicha resolución es necesaria para determinar quién es la persona legalmente autorizada para representar en los procesos a esa entidad, así como para comprobar que la misma puede dictar actos administrativos.

Tampoco cumple el demandante con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, porque no designa entre las partes y sus representantes, a la señora Procuradora de la Administración, quien actúa en los procesos contencioso administrativos de nulidad en interés de la ley, tal como lo preceptúa el numeral 1 del artículo 348 del Código Judicial.

Por los anteriores motivos y, con fundamento en el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943, la Magistrada Sustanciadora estima que la presente demanda no

debe admitirse.

De consiguiente, la Magistrada Sustanciadora, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Carlos González Ramírez, en representación de la sociedad CERVECERÍA DEL BARÚ, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1 de 8 de febrero de 2000, expedida por la Junta de Carnaval 2000 de Penonomé.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL VANEGAS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE CORREGIMIENTO DE LA COMARCA KUNA DE MADUNGANDI, OVIDIO ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHEPO, CELEBRADA EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Carlos A. Broce C., en su condición de apoderado judicial del Consejo Municipal del Distrito de Chepo, ha presentado OPOSICION A LA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL mediante resolución del 22 de diciembre de 1999, consistente en la SUSPENSION PROVISIONAL DE LOS EFECTOS DERIVADOS DE LA sesión de instalación del Consejo Municipal del Distrito de Chepo, celebrada el día 2 de septiembre de 1999.

En el acto impugnado se procedió a escoger los miembros que integrarían la Junta Directiva de la Cámara Edilicia demandada, misma que quedo conformada de la siguiente forma:

Presidente: Honorable Simón Avila
VicePresidente: Honorable Albert Alexander
Tesorero: Franklin E. Valerín
Secretario: Tadeo Valencia
Abogado Consultor: Lic. Carlos Broce
Subsecretaria: Harari Jaén
Agrimensor: José Gálvez
Inspector de Obras: Gino Dand Rodríguez.
Inspector de Tierras: José Rosario Vargas.

Mediante resolución calendada 22 de diciembre de 1999, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, fundamentada en el artículo 234 de la Constitución Política, estimó conveniente acceder a la suspensión provisional de lo decidido en la actuación recurrida, ordenando la incorporación del Representante de Corregimiento de la Comarca Kuna de Mandungandí al Consejo Municipal del Distrito de Chepo y la celebración de nueva votación para escoger la Junta Directiva de dicha Cámara Edilicia.

No estando de acuerdo con esta decisión, la Corporación demandada confirió poder al licenciado Carlos Broce, quien justificó la necesidad de revocar la orden contenida en el auto calendado 22 de diciembre de 1999, por considerar que la adopción de esta medida cautelar ocasiona "serios perjuicios para toda la colectividad toda vez que se ha producido una crisis de funcionalidad, a lo interno de esa administración Municipal."

Estos argumentos, a juicio de quienes suscriben, son demasiado genéricos, y en modo alguno desvirtúan las motivaciones jurídicas y fácticas que llevaron a este Tribunal a ordenar la suspensión provisional de los efectos de la actuación recurrida.

En ese sentido, vemos que el proponente del asunto bajo estudio en el libelo contentivo de su pretensión ni describe ni demuestra de manera concreta y específica los hechos, situaciones y el mecanismo como se producen los perjuicios alegados y la crisis de funcionamiento en el Consejo Municipal del Distrito de Chepo, en virtud del acatamiento de lo dispuesto mediante el auto de 22 de diciembre de 1999, por lo que los Magistrados que integran esta Sala Plena, consideran que lo pertinente en el presente caso es no acceder a la solicitud formulada por el licenciado Carlos Broce y así proceden a declararlo de inmediato.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDEN A LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION, MEDIDA CAUTELAR contenida en la resolución de 22 de diciembre de 1999.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DOCTOR PEDRO MORENO CESPEDES Y EL LICENCIADO GABRIEL D ANNUNZIO ROSANIA, EN SUS PROPIOS NOMBRES Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 Y 28 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 70 DE 6 DE AGOSTO DE 1999, EMITIDO POR EL ORGANO EJECUTIVO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El doctor Pedro Moreno Céspedes y el licenciado Gabriel D' Annunzio Rosanía, ambos actuando en su propio nombre y representación han promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declaren nulos por ilegales, los artículos 1, 2, 3, 4 y 28 del Decreto Ejecutivo N° 70 de 6 de agosto de 1999, emitido por el Organo Ejecutivo.

En su libelo, los demandantes solicitaron también la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, sin embargo, por razones de economía procesal, la Magistrada Sustanciadora pasa a examinar la demanda para comprobar si cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En tal sentido, observa esta Superioridad que el demandante señala que el acto impugnado está contenido en la Gaceta Oficial N° 23,863 de 13 de agosto de 1999, sin embargo, no presentó copia autenticada de dicha Gaceta. Esta copia autenticada es indispensable para la admisión de la demanda, pues, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, en concordancia con el artículo 45 de la misma Ley, las publicaciones en los periódicos oficiales, contentivas del acto acusado, deben presentarse "debidamente autenticadas por los funcionarios correspondientes", para que se reputen copias hábiles.

Además, el artículo 775 del Código Judicial preceptúa que toda resolución emanada de alguna autoridad o funcionario de cualquier Órgano del Estado o Municipio publicada en la Gaceta Oficial hará plena prueba en cuanto a su

existencia, sin necesidad de que conste en el proceso, pero exceptúa expresamente de esa regla los casos en que la resolución publicada sea objeto de la demanda, en los que deberá aportarse "conforme a las reglas comunes".

También observa la Sala que los demandantes, al referirse al CONCEPTO DE LA INFRACCION, no explican, en relación con cada una de las disposiciones legales que consideran infringidas por el acto impugnado, los motivos de la ilegalidad.

Tampoco cumplen los demandantes con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, porque no designan entre las partes y sus representantes, a la señora Procuradora de la Administración, quien actúa en los procesos contencioso administrativos de nulidad en interés de la ley, tal como lo preceptúa el numeral 1 del artículo 348 del Código Judicial.

Finalmente, la parte actora no dirige su demanda a la Magistrada Presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, incumpliendo así con lo exiguido por el artículo 102 del Código Judicial.

Por los anteriores motivos y, con fundamento en el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943, la presente demanda no debe admitirse.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el doctor Pedro Moreno Céspedes y el licenciado Gabriel D' Annunzio Rosanía para que se declaren nulos por ilegales, los artículos 1, 2, 3, 4 y 28 del Decreto Ejecutivo N° 70 de 6 de agosto de 1999, emitido por el Organo Ejecutivo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD EN REPRESENTACI{ON DE MANUEL FUENTES, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-1531 DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1998, EXPEDIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

Mediante su Vista N° 570 fechada 3 de diciembre de 1999, la señora Procuradora de la Administración, licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, solicitó, a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que la declare impedida para conocer del proceso iniciado con la demanda contencioso-administrativa de nulidad, interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de MANUEL FUENTES, para que se declaren nulos por ilegales, el acto administrativo N° RUTP-N- 1531 de 24 de noviembre de 1998, expedido por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, y los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración manifiesta que emitió opinión sobre el acto acusado, por lo que está impedida para conocer de este negocio,

según lo prevé la parte final del numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial y el numeral 4, del artículo 348 del mismo Código.

Las normas aludidas son del tenor siguiente:

"Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el esté impedido.

Son causales de impedimento:
1 ...
5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo".

"Artículo 388: Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces".

A juicio de la Sala la causal invocada ha sido probada y por esto debe declararse legal el impedimento

Por lo antes expuestos, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Procuradora de la Administración y, en consecuencia, la separa del conocimiento de la presente demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, y llama a su suplente para que actúe en el proceso interpuesto por la Dra. Aura Feraud, en representación de MANUEL FUENTES para que se declaren nulos por ilegales, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N 1531 de 24 de noviembre de 1998, expedida por el Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, y los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE PEDRO RICARDO REBOLLEDO ISTURAIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0482-99 DE 6 DE ABRIL DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de PEDRO RICARDO REBOLLEDO ISTURAIN, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-0482-99 de 6 de abril de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 29 a 34 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> ...
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro).
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE MARIANA DE MCPHERSON, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0481-99 DE 6 DE ABRIL DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda

contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de MARIANA DE McPHERSON, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-0481-99 de 6 de abril de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 29 a 34 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> ...
>
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro).
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE RODRIGO ARQUIMEDES QUEZADA CORONADO PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0385-99 DE 19 DE MARZO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS

MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de RODRIGO ARQUIMEDES QUEZADA CORONADO, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-0385-99 de 19 de marzo de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 29 a 34 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> ...
>
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro)
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR MONTEMAYOR ABREGO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0615-99 DE 3 DE MAYO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.**

**VISTOS:**

**La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de OSCAR MONTEMAYOR ABREGO, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-0615-99 de 3 de mayo de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.**

**La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 29 a 34 del expediente.**

**El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:**

> **"Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.**
>
> **Son Causales de impedimentos:**
> **...**
>
> **5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro)**
>
> **Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.**
>
> **Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".**

**A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.**

**En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.**

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE ESTRELLA ASUNCIÓN OLCESE JIRÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-210-99 DE 9 DE FEBRERO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de ESTRELLA ASUNCIÓN OLCESE JIRÓN, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-210-99 de 9 de febrero de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 29 a 34 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> ...
>
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro).
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA DRA. AURA FERAUD, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS GABRIEL MUÑOZ SAMUDIO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO EN LA NOTA N° RUTP-N-0407-99 DE 24 DE MARZO DE 1999, PROFERIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Dra. Aura Feraud, en representación de LUIS GABRIEL MUÑOZ SAMUDIO, para que se declare nula por ilegal, el acto administrativo contenido en la Nota N° RUTP-N-0407-99 de 24 de marzo de 1999, proferido por el Rector de la Universidad Tecnológica, los actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 257 de 9 de noviembre de 1999, visible a fojas 29 a 34 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.
>
> Son Causales de impedimentos:
> ...
>
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro).
>
> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido

para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MAUAD & MAUAD EN REPRESENTACIÓN DE COMEXA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1-0203-99 DE 12 DE MAYO DE 1999, EXPEDIDO POR EL GERENTE DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. (IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha presentado solicitud para que se le declare impedida y, en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la firma Mauad & Mauad en representación de COMEXA, S. A., para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N° 1-0203-99 de 12 de mayo de 1999, expedido por el Gerente del Instituto de Seguro Hipotecario, actos confirmatorios, y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración expresa que en su condición de Consejera Jurídica de los Servidores Públicos, consignada en el artículo 348, numeral 4 del Código Judicial, emitió criterio respecto de los hechos que generaron el Proceso Contencioso Administrativo actual, mediante la Consulta N° 88 de 5 de junio de 1995, visible a fojas 64 a 67 del expediente.

El solicitante fundamenta su pretensión en los artículos 749, numeral 5, 388 y 754 del Código Judicial, los cuales son del tenor siguiente:

"Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.

Son Causales de impedimentos:
...
5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyugue o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o por haber dictaminado por escrito respecto de los hechos, que dieron origen al mismo ... (El Subarayado es nuestro).

> Artículo 388. Serán aplicables a los Agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces.
>
> Artículo 754. El Juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes al ingreso del expediente a su despacho, exponiendo el hecho que constituya la causal".

A juicio de los Magistrados de la Sala Tercera, las circunstancias presentadas hacen aplicables las normas transcritas referentes a las causales de impedimento, por lo que es dable acceder a la petición invocada en este caso.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por la señora Procuradora de la Administración ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, por lo tanto la separan del conocimiento del presente negocio, y ORDENAN designar al suplente que le corresponda para que conozca del asunto.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RENALDO MELÉNDEZ EN REPRESENTACIÓN DE MARCOS OSES DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL JUZGADO EJECUTOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Renaldo Meléndez, actuando en su condición de apoderado judicial de MARCOS OSES, ha interpuesto INCIDENTE DE NULIDAD dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias.

I. ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA

El procurador judicial de la parte actora alega que la ejecución forzosa promovida por el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) contra MARCOS OSES está viciada de nulidad en virtud de que no existe documento alguno que acredite que su representado recibió dinero por parte del PATRONATO NACIONAL DE LA JUVENTUD RURAL PANAMEÑA (PANAJURU) en concepto de préstamo.

Esta situación, continua alegando el recurrente, implica que en el caso bajo estudio no se cuenta con "la prueba que presta mérito ejecutivo", por lo que ante la carencia de un documento que esté revestido de esta condición, "no puede abrirse un Proceso de Jurisdicción Coactiva contra ninguna persona."

II. OPINION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Mediante Vista Fiscal número 436 de 8 de septiembre de 1999, la señora Procuradora de la Administración, después de haber realizado un detallado estudio cronológico de los hechos que se suscitan en torno al punto controvertido,

recomendó a los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declarasen no probado el presente incidente de nulidad.

A juicio de esta funcionaria de alta jerarquía, la documentación contenida en el expediente administrativo es suficiente para acreditar que a MARCOS OSES efectivamente le fue desembolsada cierta suma de dinero en concepto de préstamo por parte del PATRONATO NACIONAL DE LA JUVENTUD RURAL PANAMEÑA (PANAJURU) y que dado el hecho de que este señor no cumplió la obligación contraída, se procedió a expedir la correspondiente Certificación de Saldos, documento que constituye el título o recaudo ejecutivo de la presente ejecución.

III. DECISION DEL TRIBUNAL

Evacuados los trámites procesales correspondientes, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia pasan a resolver el fondo del presente litigio.

En primer término, resulta pertinente aclarar que en el caso bajo estudio, tal como la ha señalado la Procuraduría de la Administración, el documento que se encuentra revestido de fuerza o mérito ejecutivo es la Certificación de Saldos confeccionada por la Dirección General de la Pequeña Empresa del Ministerio de Comercio e Industrias, certificación ésta que se encuentra visible a fojas 26 del expediente administrativo.

Este documento cuenta con la suficiencia para que prosperara la ejecución incoada por el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias contra MARCOS OSES.

Sin embargo, este Tribunal Colegiado no puede desconocer el hecho de que ha sido la propia corporación prestamista, PATRONATO NACIONAL DE LA JUVENTUD RURAL PANAMEÑA (PANAJURU), la que en nota fechada 19 de agosto de 1999, visible a fojas 9 del expediente judicial, certificó al Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), lo siguiente:

> "... luego de revisar los archivos de nuestra institución hemos constatado que el señor MARCOS OSES GONZALEZ no recibió desembolso alguno de parte del PATRONATO NACIONAL DE LA JUVENTUD RURAL PANAMEÑA (PANAJURU) y por lo tanto el Préstamo M-03-01-043 nunca fue suscrito entre las Partes." (Lo subrayado es del Tribunal).

Mediante este memorial, por un lado, queda corroborado la veracidad de lo manifestado por el ejecutado en su declaración del 26 de abril de 1999, visible de fojas 32 a 34 del expediente administrativo, en el sentido de que si bien es cierto que realizó una solicitud de crédito con PANAJURU por la suma de Dos Mil Seiscientos Balboas con 00/100, esta transacción nunca se llegó a materializar, puesto que desistió de la misma antes de que le fuera desembolsado el dinero correspondiente.

Por otra parte, la certificación transcrita, también hace evidente que al no haberse perfeccionado o celebrado nunca ningún contrato de préstamo entre el PATRONATO NACIONAL PARA LA JUVENTUD RURAL PANAMEÑA (PANAJURU) y MARCOS OSES, tampoco surgieron ningún tipo de obligaciones o derechos respecto de alguna de las partes; en consecuencia no existe deuda que pagar a cargo de MARCOS OSES o de su deudor solidario, MARITZA ENEIDA JUAREZ DE OSES, por lo cual, la reclamación del Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) no es viable.

Ante la relación de hechos arriba elaborada, lo procedente es acceder a los requerimientos del actor, declarando probado el incidente de nulidad bajo estudio; y en consecuencia, ordenar el levantamiento inmediato de las medidas cautelares practicadas por el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias contra MARCOS OSES y MARITZA ENEIDA JUAREZ DE OSES en la tramitación de la ejecución instaurada.

En mérito de las consideraciones expuestas, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PROBADO el incidente de nulidad promovido por el Licenciado Renaldo Meléndez en nombre y representación de MARCOS OSES dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Juzgado Ejecutor del Ministerio de Comercio e Industrias le sigue; y ORDENAN el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante el auto No. 039-99 de 7 de abril de 1999, expedido por la misma Institución.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERIA EXCLUYENTE, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE DARSHAN SINGH, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A ORDOS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Shirley & Asociados, actuando en nombre y representación de DARSHAN SINGH, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, tercería excluyente dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Banco de Desarrollo Agropecuario le sigue a ORDOS, S. A.

Mediante escrito fechado el 24 de febrero de 2000, que consta a foja 42 del expediente, la parte actora presentó desistimiento de la tercería excluyente interpuesta dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Banco de Desarrollo Agropecuario le sigue a ORDOS, S. A., por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 1080 del Código Judicial señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso y una vez efectuado el traslado allí requerido a la parte demandada, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por la firma Shirley & Asociados, actuando en nombre y representación de DARSHAN SINGH, DECLARA que ha terminado el proceso y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCION DE ILEGITIMIDAD DE PERSONERIA, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GILBERTO BOSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN FILOPOULOS Y/O INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO LE SIGUE AL HOTEL CENTRAL Y/O INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., Y/O PREVEZA, S. A. Y/O AZBEL TRISTAN Y/O JUAN FILOPOULOS. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO

ARJONA L. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado GILBERTO BOZQUEZ, en representación de JUAN FILOPOULOS y/o INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., ha interpuesto excepción de ilegitimidad de personería, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) le sigue al HOTEL CENTRAL y/o INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., y/o PREVEZA, S. A. y/o AZBEL TRISTAN y/o JUAN FILOPOULOS.

CRITERIO DEL EXCEPCIONANTE

El proponente de la excepción bajo estudio sostiene en el memorial contentivo de su pretensión, los argumentos que se aprecian a continuación:

> "PRIMERO: El Instituto Panameño de Turismo interpuso un Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva contra Juan Filopoulos, y otras empresas.
>
> SEGUNDO: Que mediante el auto No. 1 de fecha de 19 de mayo de 1997 el Juzgado Ejecutor del Instituto Panameño de Turismo libró mandamiento de pago en contra de Inmobiliaria Catedral, S. A. y otras sociedades.
>
> TERCERO: Que la sociedad Inmobiliaria Catedral, S. A. no tiene ninguna relación directa o indirecta con el ya mencionado Hotel Central, razón por la cual haber interpuesto un mandamiento de pago en contra de nuestra representada es totalmente ilegitimo.
>
> CUARTO: Que en consecuencia, solicitamos que se sirva excluir a la sociedad Inmobiliaria Catedral, S. A. del presente Proceso Ejecutivo por Jurisdicción Coactiva.
>
> PRUEBAS: Solicitamos la práctica de las siguientes:
>
> 1. Que se oficie al Departamento de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industria a fin de obtener copia de la Licencia Comercial expedida a nombre del Hotel Central."

POSICION DE LA PROCURADURIA DE LA ADMINISTRACION

Del libelo de la excepción se procedió a darle traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante Vista No. 414 de 25 de agosto de 1999, solicitó que no se considere probada la excepción presentada en base a las siguientes consideraciones:

La precitada funcionaria define la ilegitimidad de personería como la carencia de legitimación para actuar en el proceso por una de las partes, lo que representa ilegitimidad de tipo sustantivo; mientras que la falta de capacidad para representar a una de las partes en el proceso, constituye la ilegitimidad adjetiva.

Al respecto, señala la Procuradora que en el presente caso existe legitimación adjetiva por parte de INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., para comparecer en el proceso, ya que la misma actúa a través de su representante legal, señor JUAN FILOPOULOS, de acuerdo a certificación del Registro Público. (Ver foja 247 del expediente por cobro coactivo)

En cuanto al aspecto sustantivo o interés directo, se indica que INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A. y su representante legal son objeto de persecución a través del apremio coactivo, debido a que dicha empresa fungió como

administradora del Hotel Central. A juicio de la Procuradora, aquí radica el interés y legitimación sustantiva, para haber sido demandada en el proceso que nos ocupa.

Esto último se desprende de ciertas constancias procesales, como son: el Memorándum 140-50-97 de 22 de julio de 1997, suscrito por Raúl R. Villalobos, Jefe de Tasas Turísticas del IPAT (foja 236); el primer tomo del expediente por cobro coactivo, a foja 286.

Otra razón por la que la Procuradora considera que no existe ilegitimidad de personería, es que se han observado los procedimientos establecidos legalmente para evitar indefensión de aquellos ejecutados que como INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A. no habían concurrido a los estrados del Juzgado Ejecutor a estar a derecho, pese a las varias diligencias de citación efectuadas por dicho juzgado.

Como prueba de ello, argumenta que mediante Auto N° JE-079-98 de 25 de junio de 1998, se designó a la licenciada CARMEN ROSA ROBLES defensora de ausente de INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A. y/o JUAN FILOPOULOS (Cfr. foja 342).

La licenciada ROBLES se notificó de las resoluciones que delegan la jurisdicción coactiva que tiene el Director del IPAT, y aquella que libra mandamiento de pago contra INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A. y/o JUAN FILOPOULOS, entre otras personas.

Destaca la Procuradora que no fue sino mediante escrito de 1 de enero de 1999, recibido en el Juzgado Ejecutor el 15 de enero último que se presenta poder especial a cargo del licenciado GILBERTO BOSQUEZ y discernido a su persona por JUAN FILOPOULOS en su propio nombre y representación, no en nombre y representación de INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A.

Por último, la Procuradora manifiesta que la excepción de ilegitimidad de personería resulta extemporánea, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1706 del Código Judicial. Consta a foja 360 del expediente, que la licenciada ROBLES se notificó del auto que libra mandamiento de pago contra INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A. y/o JUAN FILOPOULOS, el día 21 de julio de 1998, por tanto al 27 de mayo de 1999, fecha en que fue interpuesta la presente excepción, a precluyó en exceso el término para proponer la misma.

CONTESTACION POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTANTE

Vencido el término para oponerse a la excepción, la entidad ejecutante no presentó escrito alguno. La actuación del Juzgado Ejecutor del IPAT, se limitó únicamente a enviar el expediente contentivo del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Institución le sigue al HOTEL CENTRAL y/o INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., y/o PREVESA, S. A. y/o AZBEL TRISTAN y/o JUAN FILOPOULOS.

HECHOS DE LA CONTROVERSIA

El Juzgado Ejecutor del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), mediante Auto No. 1 de 19 de mayo de 1997, libró mandamiento de pago contra el HOTEL CENTRAL y/o INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., y/o PREVENZA, S. A. y/o AZBEL TRISTAN y/o JUAN FILOPOULOS, hasta la concurrencia de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES BALBOAS CON 33/100 (B/.134,403.33), en concepto de Tasa de Servicio de Hospedaje, dejadas de pagar al IPAT, sus respectivos intereses, más los gastos judiciales de cobranza que se fijan en 10% de la suma adeudada, lo cual da un total de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS BALBOAS CON 66/100 (B/.147,846.66).

El Auto Ejecutivo N° JE-A-004/97 de 19 de mayo de 1997, decretó formal secuestro sobre los bienes muebles e inmuebles, créditos valores, dinero en efectivo, joyas, bonos, cuentas por cobrar y cualquiera otra suma de dinero que tenga o deban recibir de terceras personas los demandados antes descritos, hasta la concurrencia de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS

BALBOAS CON 66/100 (B/.147,846.66) más los intereses legales que resulten a la fecha de cancelación.

De igual manera, el Auto Ejecutivo No. A-006/97 de 19 de mayo de 1997, decretó formal secuestro sobre la Administración del HOTEL CENTRAL.

Por medio del Auto No. JE-079-98 de 25 de junio de 1998, se designa a la licenciada CARMEN ROSAS ROBLES, como Defensora de Ausente, quien se notificó del Auto que libra mandamiento de pago y del Auto que ordena el secuestro, en su escrito de contestación de 21 de julio de 1998, lo cual consta a fojas 342 y 365 del expediente.

Posterior a esto, JUAN FILOPOULOS otorga poder especial al licenciado GILBERTO BOSQUEZ para que lo represente en el proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva que le sigue el IPAT, mediante escrito de 15 de enero de 1999, visible a foja 360 del proceso ejecutivo.

DECISION DE ESTA SUPERIORIDAD

El proceso por jurisdicción coactiva promovido por el IPAT, contra JUAN FILOPOULOS y/o INMOBILIARIA COMERCIAL, S. A., y otros, se originó en virtud de suma adeudada por el HOTEL CENTRAL, en concepto de Tasa de Hospedaje, desde el 1 de enero de 1987 al 31 de diciembre de 1995, por la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES BALBOAS CON 33/100 (B/.134,403.33). La actuación del IPAT se fundamenta en el artículo 4, literal f del Decreto Ley 22 de 15 de septiembre de 1960.

El accionante fundamenta su pretensión argumentando que la sociedad INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A. no tiene relación directa o indirecta con el HOTEL CENTRAL.

Del examen de los documentos del expediente contentivo del proceso ejecutivo se observa que las sociedades INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A. y PREVENZA, S. A. fueron demandadas en conjunto con el HOTEL CENTRAL, en virtud que las mismas se desempeñaron como administradoras de este lugar por el período en que fueron dejadas de sufragar las cuotas antes mencionadas, situación que puede verificarse de acuerdo a lo siguiente.

A foja 6 y 7 del expediente administrativo, se aprecia el Certificado de Alcance Definitivo en contra del HOTEL CENTRAL (INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A.) (PREVENSA, S. A.), emitido por la Directora de Finanzas del IPAT y el Jefe de la Auditoría de la Contraloría en el IPAT.

Aunado a esto, en el Memorándum suscrito por el Jefe de Tasas Turíticas del IPAT Raúl Villalobos, se indica que el HOTEL CENTRAL fue administrado por dos sociedades denominadas INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., la cual operó hasta el 31 de enero de 1991 y la sociedad PREVEZA, S. A., que funcionó desde el 1 de febrero en adelante, razón por la que solicita información al respecto para registrarla en el Alcance Definitivo. (Ver foja 236)

A foja 247 y 348 del expediente se aprecia certificación del Registro Público de 29 de junio de 1998 en la que consta que JUAN FILOPOULOUS funge como Presidente y Representante Legal de la sociedad INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A.

La empresa INMOBILIARIA CATEDRAL, S. A., representada a través de JUAN FILOPOULOS, en conjunto con la otra empresa administradora del HOTEL CENTRAL, son responsables por retener cuota de 10% del valor total del importe que se pagado por el servicio de hospedaje, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Junta Directiva del IPAT No. 75/95 de 25 de diciembre de 1995.

Lo anterior demuestra la relación que víncula al excepcionante y el HOTEL CENTRAL, y su obligación de responder por haber incurrido en mora. Por tanto, la Sala coincide con el criterio emitido por la Procuradora de la Administración,

de que no es válida la afirmación del recurrente, en cuanto a que no existe vínculo jurídico entre los mismos.

Cabe agregar, que el demandado al invocar la excepción, se convierte en actor y le corresponde al mismo la carga de la prueba, situación contraria a lo ocurrido en el caso que nos ocupa. La actuación del recurrente se límita a solicitar a la Sala que oficie al Departamento de Comercio Interior e Industria copia de la licencia comercial del HOTEL CENTRAL.

Otro aspecto a destacar por esta Corporación de Justicia, es que la excepción en estudio resulta extemporánea, ya que ha precluído el término para la presentación de la misma.

Las excepciones deben ser propuestas dentro del término señalado por la ley, el cual se encuentra regulado en el artículo 1706 del Código Judicial que dice así:

> "ARTICULO 1706: Dentro de los ochos días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan; pero no se suspenderá la práctica de las diligencias ejecutivas, las cuales deben adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto de remate, para aguardar la decisión sobre las excepciones que se hayan propuesto." (El subrayado es nuestro).

La norma en comento señala el período de ocho (8) días para interponer la excepción, el cual debe computarse a partir de la fecha de notificación del Auto Ejecutivo que ordena al demandado dar cumplimiento a la obligación.

Destaca esta Superioridad, que en el presente caso el Auto No. 1 de 19 de mayo de 1997, que libra mandamiento de pago, fue notificado al excepcionante el día 21 de julio de 1998 a través de la licenciada ROSAS actuado en calidad de defensora de ausente, siguiendo los parámetros establecidos en los artículos 1002 y 1004 del Código Judicial, ya que el paradero de los demandados se desconocía. Por otro lado, tenemos que la fecha en que el licenciado BOSQUEZ, en representación de JUAN FILOPOULOS presentó la excepción de ilegitimidad de personería, fue el 27 de mayo de 1999.

Si observamos el período transcurrido del 21 de julio de 1998 a la fecha en que fue propuesta la excepción, es evidente que ha precluído en exceso el término de presentación de la excepción establecido por la ley.

En base a todas las consideraciones expresadas, la Sala concluye que la excepción incoada carece de asidero jurídico, y, por tanto, la misma debe ser desestimada.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN QUE NO SE HA PROBADO la Excepción de Ilegitimidad de Personería, propuesta por el licenciado GILBERTO BOSQUEZ, en representación de JUAN FILOPOULOS.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FÉLIX ALBERTO PÉREZ ESPINOSA, EN REPRESENTACIÓN DE TUNA FISHERY ENTERPRISES, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 6 DE ABRIL DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ELOY CORONADO -VS- TUNA FISHERY ENTERPRISES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JORGE FABREGA P. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Félix Alberto Pérez Espinosa, actuando en nombre y representación de TUNA FISHERY ENTERPRISES, S. A., ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia de 6 de abril de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral: Eloy Coronado -vs- Tuna Fishery Enterprises, S. A.

Mediante escrito fechado el 6 de enero del 2000, visible a foja 15 del expediente, la parte actora presentó desistimiento del recurso de casación interpuesto contra la mencionada resolución, por lo que la Sala procede a determinar su admisibilidad.

Por su parte, el licenciado Nelson Carreyó, apoderado judicial del señor Eloy Coronado, presentó un escrito por medio del cual se notifica del desistimiento presentado por la actora y solicitud imposición de costas ejemplares. Dicha solicitud de imposición de imposición de costas ejemplares fue sustentada en los siguientes términos:

"ANTECEDENTES

El 19 de agosto (sic) 97 el Sr. CORONADO presentó demanda. El 5 de mayo (sic) 98 el Juzgado Segundo de Trabajo aprobó una Transacción judicial poniéndose fin al proceso. No obstante, la demandada-recurrente no cumplió la obligación a la que se comprometió en la transacción, motivando la interposición de solicitud de Ejecución a la recurrente, ésta no la contestó ni se opuso (foja 118-120). Por el contrario, lo que hizo fue interponer una serie de escritos con el propósito de dilatar que se le forzara cumplir con el pago. escritos a los cuales nos opusimos.

El 30 de junio (sic) 98, mediante el Auto N°239, el Juzgado Segundo negó la solicitud de Ejecución, y ordenó levantar el secuestro así como las peticiones de la parte recurrente, contra cuyo auto nos alzamos en apelación a la que la recurrente se opuso.

El 15 de septiembre (sic) 98 el Tribunal Superior de Trabajo notificó causal de nulidad pero ninguna de las partes se manifestó sobre dicha solicitud por lo que pedimos se resolviera lo pertinente. El 11 de noviembre de 1998, transcurridos OCHO (8) MESES, presentamos solicitud de impulso procesal. El 7 de enero de 1999 presentamos otra solicitud de impulso, esta vez motivándola en que si bien el propósito de haber transigido era paliar las dificultades que confrontaba el trabajador, lo que la empresa recurrente hacía era beneficiarse por el transcurso del tiempo y profundizar la crisis del trabajador también por el tiempo que tomaba decidir.

El 6 de abril el Tribunal Superior REVOCÓ EL AUTO APELADO ordenando el inicio de la ejecución de la transacción, manteniendo el secuestro y negó la petición del demandado tanto en relación al banco garante como a la devolución de la caución.

HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA PETICION

PRIMERO: El 19 de abril de 1999, a pesar que la resolución del Tribunal Superior era sumamente clara, introdujo una Solicitud de "Aclaración", a la cual nos opusimos. La mencionada Solicitud de Aclaración fue rechazada mediante el Auto del 27 de abril del mismo año, sin costas.

SEGUNDO: El 7 de mayo de 1999, también sin ningún sustento jurídico, el recurrente introdujo el Recurso de Casación al cual también nos opusimos mediante escrito de 27 de mayo.

TERCERO: El 20 de mayo, en nuestro escrito de oposición al recurso, expresamos cuáles eran las razones procesales por las que dicho medio de impugnación carecía totalmente de fundamento, además de manifestar que el único fin perseguido por la demandada-recurrente era dilatar el cumplimiento de la obligación a la que se había comprometido cuando transigió judicialmente el proceso.

CUARTO: Después de transcurridos (8) OCHO MESES, la parte demandada recurrente presentó solicitud de DESISTIMIENTO del Recurso de Casación.

***

Sres. Magistrados, el ejercicio cincuspecto (sic) del derecho de defensa exige que la conducta de la recurrente sea objeto de alguna consecuencia en costas por su inusitada conducta procesal. El recurso no reunía los más elementales requisitos para siquiera ser admitido. AUN ASI, EL RECURRENTE ESPERÓ OCHO (8) MESES CONSCIENTE DE LA FALTA DE FUNDAMENTO DE SU RECURSO PARA ENTONCES, CUANDO YA SE IBA A DECIDIR, DESISTIR DEL MISMO.

¿Es justo entonces, haber forzado tanto tiempo la espera de la decisión para ahora simplemente desistir? Durante todo este tiempo se ha profundizado, injustificadamente, la crisis por la que atraviesa el trabajador que perdió uno de sus miembros inferiores y todo el trauma que aún lo mantiene sumido en la desesperación en espera del dinero de su indemnización.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente se imponga una CONDENA EN COSTAS EJEMPLAR AL RECURRENTE." (fs.18-19)

A juicio de la Sala el desistimiento presentado por la parte actora es procedente y debe acogerse, dado que los artículos 941 y 942 del Código de Trabajo señalan que se puede desistir en cualquier estado del proceso con anterioridad a la sentencia siempre que medie facultad expresa para ello y se cuente con la conformidad de la otra parte, la cual se aprecia de fojas 18 a 19 del expediente, pues el apoderado judicial del señor Eloy Coronado no manifiesta oponerse al desistimiento presentado por la actora.

No obstante, cabe señalar que la Sala no puede acceder a la solicitud del licenciado Carreyó, toda vez que la interposición de costas sólo se produce cuando ha habido un pronunciamiento, tal como lo dispone el artículo 890 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento del recurso de casación interpuesto por el licenciado Félix Alberto Pérez Espinosa, actuando en nombre y representación de TUNA FISHERY ENTERPRISES, S. A., contra la sentencia de 6 de abril de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral: Eloy Coronado-vs-Tuna Fishery Enterprises, S. A., NIEGA la solicitud de interposición de costas ejemplares y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JORGE FABREGA P.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GERARDO SIMEÓN EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUI LAND COMPANY, CONTRA LA SENTENCIA DE 10 DE JULIO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: LUIS ALBERTO SUÑE -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDOS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Gerardo Simeón ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el día 10 de julio de 1998, dentro del proceso laboral promovido por LUIS ALBERTO SUÑE contra la empresa CHIRIQUI LAND COMPANY.

En el recurso se pide a la Sala que case y revoque en todas sus partes la resolución impugnada y que se absuelva a su representada de todas las reclamaciones planteadas en su contra.

Se trata de un proceso laboral común promovido por el señor LUIS ALBERTO SUÑE contra la mencionada empresa a fin de que ésta sea condenada al pago de B/.24,000.00, en concepto de prima de antigüedad, indemnización, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, salarios dejados de pagar más costas, gastos e intereses. El juzgador de primera instancia condenó a la empresa demandada al pago de B/.7,075.88 en concepto de prima de antigüedad, vacaciones proporcionales y décimo tercer mes proporcional, declinó ante las Juntas de conciliación y Decisión de David la indemnización reclamada e igualmente declinó al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de la Región de Chiriquí lo referente a salarios dejados de pagar. El Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial modificó la sentencia y condenó a la empresa al pago de B/.21,103.96 en concepto de prima de antigüedad, vacaciones y décimo tercer mes proporcionales e indemnización, además declaró que los honorarios del perito deben ser cancelados por el demandante, adiciona los recargos establecidos en los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo y adicionó las costas en un 10%.

Por otro lado, el licenciado Alvaro Muñoz Fuentes, en tiempo oportuno, presentó escrito mediante el cual se opone a los argumentos esbozados por el casacionista en el presente recurso.

La Sala pasa a examinar los cargos que se formulan a la sentencia recurrida en el recurso de casación.

El recurrente sostiene que la sentencia por él impugnada ha infringido los artículos 69, 149, 199 numeral 5; 213 acápite B numeral 3; 222, 223, numeral 12; 225 y 735 del Código de Trabajo.

Afirma el recurrente que el artículo 69 se violó por interpretación errónea, pues, a pesar de que a foja 191 del expediente consta el contrato de trabajo suscrito el 28 de julio de 1970, entre el demandante y su representada, la resolución recurrida indica que la relación de trabajo inició en junio de 1962.

El juzgador de segunda instancia consideró que el vínculo obrero patronal

data de 1962, pues, fue corroborado por las declaraciones rendidas por los testigos; y concluye expresando que si la Caja de Seguro Social hubiera existido antes de 1970, el trabajador hubiese sido incorporado al régimen de seguridad social desde 1962, y que dicha relación culminó el 5 de marzo de 1996, dando como resultado que el trabajador laboró 35 años y 9 meses; y afirma que como consecuencia impera la presunción iuris tantum consagrada en el artículo 69 del Código de Trabajo.

El artículo 69 establece que "a falta de contrato escrito se presumirán ciertos los hechos o circunstancias alegados por el trabajador que debían constar en dicho contrato. Esta presunción podrá destruirse mediante prueba que no admita duda razonable".

Visto lo anterior, la Sala concuerda con la parte actora, pues, si bien es cierto el artículo 69 del Código de Trabajo establece que, a falta de contrato escrito se presume lo dicho por el trabajador, es igualmente cierto esta presunción siempre y cuando no exista prueba en contrario. En ese sentido, obra a foja 435, certificación rendida por la Caja de Seguro Social de Puerto Armuelles a través de la cual se indica que el señor LUIS ALBERTO SUÑE ha cotizado desde el mes de mayo de 1970 hasta el mes de mayo de 1990 con la empresa Chiriquí Land Company, constituyendo ésta, precisamente, la prueba en contrario, el cual permite ponderar de manera cierta el inicio de la relación de trabajo.

La Corte ha reiterado que no basta que el actor simplemente afirme situaciones o hechos, toda vez que la presunción es desvirtuada por los hechos probados (Sent. de 21 de abril de 1995).

El tratadista Miguel Bermúdez Cisneros al respecto expresa que "... por último no deseamos discutir si las presunciones son realmente medios probatorios o como dice Chiovenda y la escuela italiana son derechos sustantivos y no prueba, para el objeto de punto de estudio bástenos decir, que las presunciones consisten en esencia en un razonamiento lógico y que tal razonamiento lo debe de desarrollar el tribunal, ya sea ante presunciones legales señaladas por la misma ley (Juris et de Juri) o bien ante presunciones humanas (Juris Tantum)" (La Carga de la Prueba, Segunda Edición, Editorial Cárdenas, pág. 88, 1976).

Dentro de este contexto estima la Sala que, en efecto, le asiste razón al casacionista al afirmar que la sentencia del ad-quem ha infringido el artículo 69 del Código de Trabajo.

El casacionista afirma que la resolución recurrida ha infringido el artículo 199, numeral 5, porque desconoció la certificación expedida por la Agencia de la Caja de Seguro Social, la cual establece que el trabajador Suñe tiene una pensión definitiva desde el 13 de abril de 1992, por lo que desde esa fecha en adelante no existía suspensión del contrato de trabajo.

Estos señalamientos resultan extemporáneos, pues no es a través de este proceso que se van a dilucidar situaciones que la empresa en su momento no realizó.

Los juzgadores de primera y segunda instancia coincidieron en que entre los años 1990 a 1996 operó la suspensión de los efectos del contrato, en virtud del cual no constituye para el trabajador la obligación de prestar el servicio y para el empleador saldar la remuneración mensual, toda vez que las sumas pagadas por la Caja de Seguro Social en concepto de subsidio por incapacidad o pensión de invalidez, no constituyen salario, y así lo ha sostenido esta Superioridad en varias ocasiones (Cfr. resoluciones de 22 de febrero de 1991 y 9 de febrero de 2000).

La Sala mantiene como un hecho cierto, que el trabajador Suñe presentó nota calendada 5 de marzo de 1996, (cfr. foja 15) dirigida a la empresa Chiriqui Land Company, a través de la cual expresa su decisión de dar por terminada la relación laboral que lo unía a la misma, teniendo como consecuencia que la empresa

iniciara los trámites de liquidación de las prestaciones laborales al Sr. Suñe, las cuales motivan la presente controversia.

Dentro de este orden de ideas, esta Superioridad estima que el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial no transgredió la norma invocada, por lo tanto se desestima el cargo.

El casacionista argumenta que la sentencia recurrida infringió el artículo 213, acápite B, numeral 3 del Código de Trabajo, porque desde el momento en que el demandante fue beneficiado con la pensión definitiva el 13 de abril de 1992, ésta debió comunicarlo a su empleador a fin de terminar la relación de trabajo en base al referido artículo.

La Sala disiente de lo esgrimido por el casacionista, pues la parte actora pretende retrotraer el proceso a situaciones pasadas que fueron de entera competencia de la empleadora y del trabajador, argumentos que en el presente recurso resultan extemporáneas y ajenas a los juzgadores. En ese sentido, no vemos de qué manera el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial ha vulnerado dicha norma.

Por otro lado, el casacionista invoca una sentencia proferida por la Sala, dentro del proceso SANDRA BLACKWOOD -VS- COLEGIO EPISCOPAL DE CRISTO, calendada 9 de marzo de 1990, criterios que no se aplican al caso bajo estudio, toda vez que en ese caso la trabajadora pretendía que se le reintegrara a sus labores, bajo el pretexto de que estaba bajo licencia por estudios, no obstante, se comprobó que a partir del momento en que solicitó dicha licencia ésta empezó a laborar para otra empresa, incurriendo evidentemente en abandono de sus labores.

La Sala estima que la sentencia recurrida no ha incurrido en violación alguna de la norma citada, por tanto, no procede el cargo.

La parte actora afirma que la sentencia impugnada ha violado el artículo 222 del Código de Trabajo, pues,"el documento que corre a foja 15 del expediente no es idóneo para dar por terminada la relación de trabajo porque no cumple con el artículo 222 en concordancia con el numeral 7 del artículo 210 del Código de Trabajo, ni cumple con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No.14 de 7 de mayo de 1990 ... no es una renuncia voluntaria ni así lo expresa, ... no constituye una renuncia justificada, porque no indica las causas de la supuesta terminación, por lo que incumple el artículo 223 del Código de Trabajo y deja en estado de indefensión a mi defendida".

La Sala no comparte el criterio vertido por el casacionista, pues considera que el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial ponderó correctamente el documento obrante a foja 15, pues, estimó "que la nota es lo suficientemente explícita en el sentido de que el trabajador comunica formalmente su decisión de dar por terminada la relación laboral y como tal reúne los requisitos de validez para que sea invocada". Compartimos ampliamente el criterio del juzgador, pues resulta palmario, y así se colige de la lectura de la nota que obra a foja 15, que el trabajador pone de manifiesto su deseo de ponerle fin a la relación laboral, y sobre lo cual no hay duda alguna, no obstante, coincidimos con el recurrente en el sentido de que no estamos en presencia de una renuncia justificada, tema que analizaremos en los cargos que trataremos a posteriori.

Ante ese escenario, concluye la Sala que no procede el cargo endilgado.

La parte recurrente invoca como violados los artículos 223, numeral 12, 225 y 149 del Código de Trabajo. Estas infracciones las trataremos en conjunto por mantener un fundamento común, y consiste en que el trabajador no ha probado que la relación de trabajo terminó por despido indirecto, y que por lo tanto, no tiene derecho a la indemnización.

Estima el casacionista que no consta en el expediente documento alguno que acredite que Chiriqui Land Company violó la Ley o el contrato de trabajo, y

sostiene que ha sido jurisprudencia reiterada del Tribunal Superior de Trabajo y de esta Sala que en los casos de renuncia con causa justificada el trabajador debe demostrar los hechos en que se fundamenta, y que además debe reunir las mismas características de una carta de despido, situación que no ha ocurrido en el presente caso.

Esta Superioridad comparte lo esgrimido por el recurrente, pues, la nota que reposa a foja 15 suscrita por el trabajador Suñe no contiene las razones de hecho y de derecho que lo impulsaron a dar por terminada la relación laboral de forma justificada.

En ese sentido, esta Superioridad ha expresado en múltiples ocasiones que la carta de renuncia justificada debe congregar los mismos requisitos que se exigen para las cartas de despido, atinentes a los hechos y fundamentos de derecho que justifican la cesación del vínculo de trabajo...el trabajador estaba obligado a describir cuáles fueron las circunstancias o causas contrarias a la ley, que lo indujeron a presentar su renuncia justificada, pues, de lo contrario, la Sala no ve de qué manera el juzgador, sin esos elementos esenciales, pueda ponderar en la debida dimensión jurídica de nuestro ordenamiento interno vigente, un proceso laboral como el que nos ocupa (Cfr. sentencias de 28 de enero de 2000 y 27 de febrero de 1998).

En lo atinente a la indemnización, la sentencia de segunda instancia establece que el trabajador Suñe tiene derecho a la misma, porque "cuando éste se retiró voluntariamente de la empresa, hecho que se formalizó con la carta de renuncia y cuya falta de cancelación originó el despido indirecto, ya que compete a la Chiriqui Land Company una vez presentada esta carta deberá proceder a satisfacer este beneficio emanado de una Convención Colectiva ... esto significa que le asiste el derecho al peticionario en requerir la indemnización que tiene, ya que por estar establecida en el convenio en mención se eleva a derecho adquirido y terminado el nexo laboral por retiro voluntario del trabajador donde se colige que se trata de una renuncia voluntaria a la que se refiere el artículo 222 del Código de Trabajo o Justificada regulada en el artículo 223 del mismo cuerpo legal" (Cfr. foja 548).

Ante estos criterios vertidos por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, la Sala manifiesta su discrepancia a continuación.

En primer lugar, esta Superioridad ha manifestado en múltiples resoluciones, que la indemnización no es un derecho cierto cuando no media despido injustificado o renuncia justificada, y en jurisprudencia reciente así lo hemos reiterado, que si estas condiciones no concurren, la falta de su pago no implica renuncia de derechos (Cfr. sentencias de 9 de febrero de 2000 y 20 de diciembre de 1996), y en segundo lugar, resulta palmario que la relación de trabajo que existía entre el Sr. Suñe y la empresa Chiriqui Land Company terminó por decisión voluntaria del trabajador, y así parece comprenderlo el Tribunal Superior de Trabajo en parte, no obstante, discrepamos en lo atinente a que el despido fue indirecto, pues, dentro de la documentación obrante en el expediente, no hay constancia de esta afirmación.

El trabajador Suñe al presentar su renuncia solicita, entre otras prestaciones, el pago de una indemnización a la cual no tenía derecho, pues el Código de Trabajo en el artículo 225 señala que se tiene derecho a esta cuando la terminación de la relación laboral fuese por despido injustificado o sin la autorización previa necesaria, razón por la cual la empresa no estaba obligada a pagar lo concerniente a la indemnización; éste ha sido el criterio de la Sala.

En cuanto a este punto, el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial mantuvo una posición equivocada en la sentencia impugnada y por lo tanto, le asiste razón a la parte actora, razón por la cual, la Sala arriba a la conclusión de que fueron transgredidos los artículos 223, numeral 12, 225 y 149 del Código de Trabajo.

Por último, el recurrente afirma que la sentencia de segunda instancia ha infringido el artículo 735 del Código de Trabajo.

Dentro de este contexto, argumenta que se trasladó la carga de la prueba a su defendida, cuando en realidad es el demandante quien estaba obligado a probar los hechos que motivaron su pretensión; pues la resolución recurrida erróneamente manifiesta que el demandante probó los hechos de su pretensión e indicó que Chiriqui Land Company no cumplió con probar los supuestos que la eximen de las pretensiones del demandante.

Es correcto lo afirmado por el recurrente, la carga de la prueba, en este punto, no le incumbe a la empresa demandada, sino al trabajador, quien no ha demostrado que la relación laboral cesara por renuncia justificada.

Consideramos que este punto fue dilucidado en párrafos anteriores, razón por la cual concluimos que el Tribunal Superior de Trabajo infringió el artículo 735 del Código de Trabajo.

Como corolario de todo lo expuesto, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 10 de julio de 1998, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral: LUIS ALBERTO SUÑE -VS- CHIRIQUI LAND COMPANY , ABSUELVE a la empresa CHIRIQUI LAND COMPANY del pago de la indemnización solicitada por el señor LUIS ALBERTO SUÑE y CONFIRMA el fallo recurrido en todo lo demás.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA EN REPRESENTACIÓN DE DIEGO AGUILAR, CONTRA LA SENTENCIA DE 25 DE JUNIO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: DIEGO AGUILAR -VS- SUPER DORADO, S. A., Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Dr. Rolando Murgas T., actuando en representación de DIEGO AGUILAR, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 25 de junio de 1998, dentro del proceso laboral promovido por el señor DIEGO AGUILAR contra SUPER DORADO, S. A. y OTROS.

El casacionista persigue con este recurso que la Sala revoque la sentencia recurrida y, en su lugar, condene a todas las pretensiones de la demanda, más las costas de las dos instancias y las del presente recurso.

La firma de abogados Shirley & Asociados, apoderados especiales de las empresas demandadas SUPER DORADO, S. A., IMPORTADORA RICAMAR, S. A. y otras, presentó, en tiempo oportuno, escrito de oposición al recurso de casación laboral.

Se trata de un proceso común de trabajo en el cual el demandante pide que la parte demandada sea condenada a pagarle, en forma solidaria, la suma de veintisiete mil veintiséis balboas con ochenta y dos centésimos (B/.27,026.82),

en concepto de capital, más intereses, recargos, costas y gastos del proceso. El juzgador de primera instancia absolvió a la demandada y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó el fallo.

La Sala pasa a examinar los cargos que se formulan a la sentencia recurrida en el recurso de casación.

El actor señala que la sentencia de segunda instancia ha infringido los artículos 84, 12-A, 33, 48, 54, 169, 170 y 149 del Código de Trabajo; y el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 18 de noviembre de 1971.

El recurrente sostiene que la sentencia por él impugnada ha infringido el artículo 84 del Código de Trabajo, en el concepto de aplicación indebida, pues aduce que en el expediente no existen pruebas que conduzcan a sustentar que el demandante era un trabajador de confianza ... no se ha demostrado el ejercicio de funciones de dirección, representación o fiscalización a nivel general en la empresa ... y que no es creíble que una persona que termina una relación de trabajo de ocho años, con un sueldo de B/.350.00 mensuales, en una poderosa, enorme y millonaria cadena de supermercados, pueda reputarse racionalmente como un "trabajador de confianza".

El Tribunal Superior de Trabajo concluyó que estaba debidamente acreditada en el proceso la condición de trabajador de confianza, "aunque no se reportara una remuneración acorde con su función, pero que denota conformidad en la relación de trabajo" (Cfr. foja 400).

La Sala ha sostenido que el trabajador de confianza lleva la responsabilidad de representar al empleador, tiene mando para velar por la producción y la organización del resto del personal, y son los auxiliares más inmediatos del dueño o los dueños de la empresa, aún cuando son trabajadores dependientes frente al patrono, en relación con el resto del personal se distinguen porque cumplen ciertas funciones de empleador.

En el caso in examine, tanto el juzgador de primera, como de segunda instancia, coincidieron en afirmar que quedó demostrado que se trataba de un trabajador de confianza, basando su concepción en el caudal probatorio aportado.

Esta Sala, una vez examinado el expediente, comparte el criterio vertido por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, en el sentido de que el demandante es un trabajador de confianza, pues las funciones que desempeñó Diego Aguilar en las distintas sucursales de la empresa, tales como Encargado de la caja fuerte, Supervisor de cajeras, Encargado de cambiar planillas, Custodio de las llaves del almacén y del local, realizar arqueos de la caja fuerte local, y Sub Gerente, entre otras, para lo cual le daba órdenes a los subalternos, ponen claramente de manifiesto la naturaleza de la prestación del servicio de fiscalización, y dirección en representación del empleador en cercana y estrecha colaboración con éste.

En virtud de lo anterior, no procede el cargo endilgado.

Manifiesta el casacionista que la sentencia recurrida ha infringido el artículo 12-A del Código de Trabajo en el concepto de aplicación indebida, toda vez que Diego Aguilar no es trabajador de confianza y, por lo tanto, no puede aplicarse el plazo de prescripción de tres meses al reclamo por horas extraordinarias, trabajo en días domingos y en días compensatorios.

La Sala estima que obviamente no le asiste razón al recurrente, pues, el análisis del cargo anterior concluye que era un trabajador de confianza, por lo tanto, le es aplicable la prescripción de 3 meses para el reclamo por horas extraordinarias, trabajo en días domingo y días compensatorios.

En ese sentido, observa la Sala que, en efecto, la acción está prescrita, pues, el trabajador laboró para estas empresas hasta el 14 de diciembre de 1990,

y presentó sus reclamaciones el 29 de julio de 1991, fuera del término para demandar concedido por dicha norma para los trabajadores de confianza.

Resulta palmario que la norma no fue violentada, razón por la cual se desestima el cargo.

Ante este escenario jurídico, no entraremos a analizar el resto de las infracciones endilgadas a la sentencia de segunda instancia (Artículos 33, 48, 54, 169, 170 del Código de Trabajo y el artículo 2 del Decreto de Gabinete No.221 de 18 de noviembre de 1971), toda vez que dependían de la existencia de los cargos anteriores, los cuales fueron desestimados.

Como corolario de lo antes expuesto, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 25 de junio de 1998, dentro del proceso laboral promovido por el señor DIEGO AGUILAR contra SUPER DORADO, S. A. y OTROS.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ANAYS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACION LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA MURGAS & MURGAS EN REPRESENTACIÓN DE ANDYELENA S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE OCTUBRE DE 1999, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE LUIS DE PUY GARCIA -VS- ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A., Y DE PUY FAGIA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ADAN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

La firma Murgas & Murgas en nombre y representación de ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A. ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 12 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del Proceso Laboral: JORGE LUIS DE PUY GARCIA -vs- ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A.

Del recurso se le corrió traslado al trabajador, de acuerdo a lo previsto en el artículo 927 del Código de Trabajo, y el mismo, por medio de su procurador judicial, haciendo uso de su derecho, se opuso a este medio de impugnación extraordinario.

ANTECEDENTES DE ESTE RECURSO

La génesis de este recurso de casación descansa en un proceso ejecutivo que se inició en el Juzgado Tercero de Trabajo de la Tercera Sección, incoado por JORGE LUIS DE PUY GARCIA, en razón de un mutuo acuerdo, que según el trabajador, prestaba mérito ejecutivo. Dentro de este proceso ejecutivo, las empresas ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., propusieron excepciones de prescripción y de pago parcial, lo que obligó al Tribunal de Primera Instancia tramitar estos incidentes a través de proceso abreviado.

Frente a los hechos de esta acción especial de Trabajo, el Juez Tercero de Trabajo de la Tercera Sección, por medio de la Sentencia N° 8 decidió las excepciones argüidas por las empresas demandadas, en el sentido de reconocer la

excepción de prescripción revocando así el Auto Ejecutivo N° 7 de 19 de febrero de 1999, y ordenó el levantamiento del embargo sobre los dineros que tenía que pagar a las empresas ejecutada, Del Monte Fresh Produce Panamá, S. A., y Produce Panamá, S. A.

Disconforme el trabajador con la decisión del juzgador a-quo, propuso recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Colegiado de Segunda Instancia al conocer de la alzada, emitió la Sentencia de 12 de octubre de 1999 por medio de la cual modificó la Decisión del Juez a-quo considerando lo siguiente:

1. Que si bien es cierto, el título que presta mérito ejecutivo se entiende exigible a partir del momento en que el documento fue suscrito, no es menos evidente de que el deudor debía reconocer dicho documento en razón de que se trataba de un documento privado. Que por ello se tuvo que utilizar la vía ordinaria para dicho reconocimiento, es decir se presentó la demanda ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 10 el día 26 de abril de 1993, lo cual interrumpió el término de prescripción. Que dicha prescripción quedó suspendida durante todo el tiempo de la tramitación del despido injustificado en las Juntas y que culminó con la Sentencia de 20 de mayo de 1998. Adicionalmente señala el Tribunal Ad-Quem, que es a partir de ejecutoriado el fallo, en que comienza a contarse el nuevo término de prescripción para el documento privado suscrito por JORGE LUIS DE PUY GARCIA y ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A. Que por tanto, el plazo de prescripción de un año se inició el 26 de mayo de 1998, y la demanda ejecutiva fue presentada el nueve de febrero de 1999; y

2. Que se reconoce la excepción de pago parcial, dado que en al proceso fueron aportadas las pruebas de que el trabajador pactó en el mutuo acuerdo la suma de B/.17,000.00 y recibió B/.5,600.00, y lo que le adeudan es B/.11,400.00, más los intereses que contempla el artículo 169 del Código de Trabajo. Que la totalidad de la cuantía es B/.21,888.00.

Este discernimiento jurídico, ha sido señalado como ilegal por parte de las empresas ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A., por medio de su procurador judicial, al considerar que el Tribunal Superior de Trabajo quebrantó el mandato contenido en los numerales 1, 5, y 7 del artículo 12 y el artículo 600 todos del Código de Trabajo, supuesto éste que la condujo a proponer el presente recurso de casación.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver lo pertinente.

DECISION DE LA SALA

Cuestiones Previas

Antes de adentrarnos al conocimiento de fondo de este asunto laboral, esta Corporación de Justicia deja claro que el recurso extraordinario de casación, en concordancia con el artículo 924 del Código de Trabajo, tiene como objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales de segunda instancia que hacen tránsito de cosa juzgada y en las que sin esta última circunstancia pueden acarrear graves e irreparables perjuicios. Los Juicios Ejecutivos, en razón de excepciones interpuestas, pueden ser revisables ante esta Sala, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1012 del Código de Trabajo que reza así:

> "Artículo 1012. Las excepciones seguirán en adelante el trámite de proceso abreviado y la sentencia que se dicte hace tránsito de cosa juzgada".

También cabe reiterar que para la formalización del referido medio de impugnación extraordinario, el escrito del casacionista debe cumplir con ciertas formalidades estatuidas en los artículos 925, 926, y 928 ibídem, con los cuales cumple parcialmente el interesado.

Y decimos que parcialmente, en vista de que el demandante ha señalado que la Sentencia de 12 de octubre de 1999 quebranta una norma, la cual ha sido calificada por la doctrina como disposición adjetiva o de procedimiento, como lo es el artículo 600 (términos legales) del Código de Trabajo, y que no es revisable individualmente en esta vía procesal.

Sobre este punto, la Corte ha manifestado en innumerables ocasiones, que las normas adjetivas, pueden servir de medio para demostrar la violación de disposiciones sustantivas. Estas últimas establecen los derechos, que de no haber sido reconocidos, pueden ser reclamados. En este sentido, las normas adjetivas deben incidir en las sustantivas, para que puedan ser revisables ante esta Superioridad, en caso de que se considere que aquellas han sido quebrantadas. El Tribunal de Casación conoce de errores in judicando y no de errores in procedendo (Ver Sentencias de 25 de enero de 2000, 28 de junio de 1999, 3 de marzo de 1998, 27 de febrero de 1998, de 24 de junio de 1997, 12 de junio de 1995, 19 de mayo de 1995 y 6 de julio de 1994).

Cuando la acusación se refiere exclusivamente a normas de carácter adjetivo, como en el presente caso, el cargo o los cargos quedan incompletos y no alcanzan a producir los resultados que persigue el recurso de casación, ya que así lo dispone el párrafo final del artículo 928 ibídem. Esta disposición recoge lo siguiente:

> "Artículo 928. Recibido el expediente, el Tribunal de Casación Laboral rechazará de plano el recurso si se ha interpuesto contra lo que dispone el artículo 925. Lo mismo hará cuando el recurso se pida únicamente la corrección, reposición o práctica de trámites procesales". (subrayado es nuestro).

Como corolario de la explicación vertida en párrafos anteriores, sólo conoceremos de los cargos en relación a los numerales 1, 5, y 7 del artículo 12, del Código de Trabajo.

**Fondo**

La razón fundamental por la cual ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. Y DE PUY FAGIA, S. A. han interpuesto este recurso de casación es, pues, que considera que la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo quebrantó lo previsto en los numerales 1, 5, y 7 del artículo 12, del Código de Trabajo, en virtud de que se ha desconocido la excepción de prescripción oportunamente promovida por las empleadoras. Que además, el juzgador no puede establecer un momento distinto para empezar a contar el término de prescripción, ya que el mismo corre por ministerio de la ley. Concluye el recurrente, que no es cualquier acción o pretensión la que interrumpe la prescripción, toda vez que necesariamente el titular de un documento que presta mérito ejecutivo ha de entablar una demanda ejecutiva y no otro tipo de proceso (ver de foja 7 a 9 del expediente contentivo del recurso).

La excerta legal cuya afrenta se alega es del tenor siguiente:

> "Artículo 12. La prescripción se regirá por las siguientes reglas:
>
> 1. Prescriben en un año las acciones que no tengan señalado plazo especial de prescripción.
>
> ...
> 5. La prescripción corre a partir de la fecha del despido o de la terminación de la relación laboral, salvo cuando se trate de riesgo profesional, caso en el cual correrá desde que ocurrió el riesgo o

se agravaron las consecuencias; ...

...
7. La prescripción se interrumpe por el reconocimiento de la obligación, el reclamo extrajudicial o en la vía administrativa, y por la sola presentación de la demanda. No obstante, tratándose de acciones que competan al empleador, la prescripción sólo se interrumpe por la presentación de la demanda".

-Reconocimiento de la Obligación.

Este Tribunal de Casación al avocarse al análisis de los hechos acaecidos en el proceso laboral surtido ante los Tribunales de Primera y Segunda Instancia, verificó la actuación a través de sus decisiones y comprobó que la determinación judicial adoptada por el Juzgador A-quem, no se compadece con las normas relativas a la prescripción y con la jurisprudencia mantenida por esta Máxima Corporación Judicial.

La afirmación anterior obedece a que no es cierto que para hacer valer un documento privado o para que el deudor reconozca la deuda, tal como se colige de lo afirmado por el Tribunal Laboral de Segunda Instancia, se justifica un proceso ordinario, y más si se trata de un documento que podría prestar mérito ejecutivo. Veamos textualmente lo comentado:

"Pero es el caso, que el documento que se aporta como recaudo ejecutivo no prestó mérito ejecutivo desde el momento en que fue suscrito ya que tratándose de un documento privado debía ser reconocido por el deudor. Por tal motivo, entendemos, se acogió la vía ordinaria para solicitar su cumplimiento y se presentó una demanda ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 10 el día 26 de abril de 1993. En ese momento se interrumpió el plazo de prescripción, el cual quedó suspendido durante todo el tiempo de la tramitación del proceso al que hacemos referencia, que concluyó por sentencia de fecha de 20 de mayo de 1998 de este Tribunal Superior de Trabajo, que estimó que la relación de trabajo entre las partes no concluyó por despido sino por mutuo consentimiento, señalándose entoces, que lo procedente era la ejecución del mutuo acuerdo por el cual se dio fin al vínculo contractual". (Subrayado es de la Sala).

Ante estas circunstancias, cabe recordar que el proceso ejecutivo contiene un mecanismo especial para surtir la etapa de reconocimiento de la deuda por parte del obligado en caso que conste en un documento privado, tal como se desprende de los artículos 998 y numerales 1 y 2 del 1002 del Código de Trabajo. Estas disposiciones dicen:

"Artículo 998. Si propuesto un proceso ejecutivo no se pudiere requerir en forma legal a la persona que deba reconocer el documento, el demandante podrá previo informe secretarial, presentar escrito transformando su demanda en proceso plenario abreviado, y en esta vía se continuará el proceso. Lo mismo podrá hacer si el deudor no reconociere como suya la firma, pero en este caso deberá presentar su escrito dentro de los seis días siguientes al día en que pudieren ser citados o negaren la firma". (Subrayado es de la Sala).

"Artículo 1002. La vía ejecutiva podrá preparase:

1. Solicitando al ejecutado que reconozca la firma cuando el documento sea privado y requiere reconocimiento;

2. Reconocida la firma, el documento presta mérito ejecutivo, aunque se hubiere negado su contenido. Si el ejecutado negare la firma, el ejecutante podrá, mediante cotejo de firma y otras medidas,

> comprobar la autenticidad del documento;" ... (Subrayado es de la Sala).

En este caso, las Juntas de Conciliación y Decisión conocieron de la reclamación del señor DE PUY por despido injustificado, y no por un reconocimiento de deuda, recogida esta última en un mutuo acuerdo. y cuyo contenido, presuntamente, era ejecutable mediante proceso ejecutivo. Aunado a esto subrayamos que, la función de las Juntas de Conciliación y Decisión, enmarcada en la Ley N° 7 de 1975, no está dirigida para tramitar reconocimientos de deudas plasmadas en un documento privado para que éstos luego, sean utilizado en un proceso ejecutivo.

Esto demuestra de manera palmaria que el proceso surtido en la Juntas de Conciliación y Decisión obedecía a una reclamación distinta, a un reconocimiento de deuda, pues se trataba de derechos deprecados en razón de un despido, aparentemente, injustificado.

-Cómo se interpreta que la prescripción se interrumpe con la sola presentación de la demanda.

Por otro lado, el señor JORGE LUIS DE PUY, equivocando la vía judicial para demandar, en principio propuso una acción por despido injustificado ante las Juntas de Conciliación y Decisión, tal como se señaló en líneas precedentes, la cual fue desestimada en tiempo ulterior por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante Sentencia que data de 20 de mayo de 1998, al conocer la alzada (la Junta de Conciliación y Decisión N° 10 declaró injustificado el despido), y la base jurídica de la Resolución radicaba en que entre JORGE LUIS DE PUY GARCIA y ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. y DE PUY FAGIA, S. A., se había celebrado un mutuo acuerdo para dar por terminada la relación de trabajo, lo que desvirtuaba la cesación de servicios por despido, alegado por el trabajador (ver fojas 76 y 77 de los antecedentes). Entre las motivaciones jurídicas expresadas por el Tribunal Superior, en la Sentencia de 20 de mayo de 1998, una de ellas se refiere a la manera cómo podría el trabajador hacer valer un mutuo acuerdo cuyo contenido era pecuniario y que la parte deudora no había cancelado según lo convenido en dicho documento. En ese momento, y a manera de sugerencia didáctica, esa Instancia Judicial consideró que era a través de un juicio ejecutivo que el trabajador podría hacer valer sus prestaciones (ver foja 76 de los antecedentes). Estas fueron las palabras textuales de los Magistrados:

> "Si las partes celebran un mutuo consentimiento y las cláusulas respecto a los compromisos de pago no se cumplen, de acuerdo con la teoría de las obligaciones, este documento presta mérito ejecutivo y no la acción de reintegro o indemnización con pagos de salarios caidos".

Posteriormente, el trabajador al no ser favorecido con la decisión que desestimaba el despido injustificado (tal como lo señalamos), siguió a pie de la letra las consideraciones externadas por los Magistrados de Trabajo, y propuso un juicio ejecutivo que culminó con la Sentencia de 12 de octubre de 1999 que, como se constata, es el antecedente inmediato de este recurso de casación.

Al repasarse todo lo sucedido, observa esta Judicatura Colegiada que, el hecho que el Tribunal Superior de Trabajo haya explicado de manera pedagógica en la Sentencia que debe enderezarse un proceso ejecutivo para hacer valer un mutuo acuerdo, y que el trabajador haya procedido a ejecutar a ANDYELENA, S. A., AN DE PUY, S. A. y DE PUY FAGIA, S. A., de acuerdo con los criterios sugerentes esgrimidos por ese Tribunal Superior, no significa que la acción estuviese correctamente encaminada pues, este proceder dista innegablementede de la "reglas de la acción" una de las cuales prevé que debe encausarse en tiempo oportuno y ante el tribunal competente.

Lo procedente era que el señor JORGE LUIS DE PUY GARCIA, por cuenta propia y sin esperar una sugerencia judicial para actuar (tal como parece que ocurrió

en el caso in examine), incoara el juicio ejecutivo (en caso de que procediera) desde el momento en que las empleadoras incumplieron con el pago de lo acordado. En este sentido es dable resaltar que, en vista de que el referido mutuo acuerdo no estipulaba plazo vencido de pago, la fecha que debió tomarse como referencia para computar el término de prescripción, era la de la suscripción del mismo. Dicho convenio laboral se firmó el 16 de enero de 1993 (ver foja 5 de los antecedentes).

El Tribunal Superior en la Resolución que hoy se impugna, reconoció esta circunstancia de tiempo al indicar que:

> "Sin embargo no se especificó las fechas en que tales pagos se efectuarían. Al no hacerlo, es imposible especular sobre ello, por lo que se entiende que la obligación es exigible al momento de la firma del documento ocurrida el 16 de enero de 1993. A partir de ese momento contaba el trabajador con el plazo de un año para reclamar el pago de las prestaciones laborales que le habían sido reconocidas".

Retomando la idea principal, mal puede argüir el trabajador que la demanda que interpuso ante la Junta De Conciliación y Decisión N° 10 interrumpió la prescripción (lo que realmente reclamaba era que había sido despedido injustificadamente), debido a que en esta situación no opera el precepto legal "la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda", en virtud de que la causa a pedir era distinta, tal y como lo hemos dejado sentado en esta Resolución.

Reiteramos que lo ocurrido en las Juntas no fue precisamente un reconocimiento de deuda, por lo que esta particularidad no se relaciona con el juicio ejecutivo entablado por quien, so pretexto que el Tribunal Superior le aconsejó, vía Sentencia, que ejecutara a las empresas, procedió a demandar el pago de la obligación consignada en el mutuo acuerdo.

Este Tribunal de Casación en un caso similar explicó, en Sentencia de 11 de febrero de 1992, en qué consistía la interrupción de la prescripción cuando se presentaba la demanda:

> "La Sala considera que no le asiste la razón al recurrente, en virtud de que la prescripción se interrumpe, entre otras cosas, por la sola presentación de la demanda, no significa que el libelo debe ser presentado ante cualquier tribunal, sin importar si el mismo es competente o no. La Junta de Conciliación es competente para conocer de reintegros, pero cierta clase de reintegros, y son los que no tienen nada que ver con el fuero sindical o el fuero maternidad. Al no `hacerse la distinción en el artículo en cuestión, no significa que las demandas interpuestas ante cualquier otro tribunal no competente, interrumpe la prescripción para interponer otra ante el tribunal idóneo". (Subrayado es de la Sala).

En estas condiciones, resulta imperioso precisar que es incuestionable el hecho de que al señor JORGE LUIS DE PUY GARCIA le prescribió el término el día 16 de enero de 1994 para interponer un proceso ejecutivo de acuerdo al mandato previsto en el artículo 12, numeral 1 del Código de Trabajo.

En síntesis, ha quedado demostrado en este proceso de casación laboral que la Sentencia de 12 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, sí violó el mandato expreso contenido en el artículo 12, numerales 1 y 7 del Código de Trabajo.

Por último, esta Sala frente a los señalamientos de violación del numeral 5 del artículo 12 Ibídem, no conocerá del cargo en virtud de que este caso trata de un proceso ejecutivo y no de despido, ni de terminación de relación de trabajo, ni mucho menos de un riesgo profesional.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Casación Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASAN la Sentencia de 12 de octubre de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, y en consecuencia RECONOCEN la prescripción para proponer Proceso Ejecutivo incoado por JORGE LUIS DE PUY GARCIA.

Notifíquese.

(fdo.) ADAN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z. (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DECLARATORIA DE DESACATO INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS GEORGE, EN REPRESENTACIÓN DE NICASIO ALBAEZ ROSALES, CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, POR INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos George, en su condición de apoderado judicial de NICASIO ALBAEZ ROSALES, ha presentado incidente de desacato contra el Director General de la Caja de Seguro Social por incumplimiento de la Sentencia dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el día 11 de noviembre de 1998.

En la sentencia cuyo incumplimiento invoca el proponente, la Sala resolvió lo siguiente:

> "DECLARAN QUE ES ILEGAL la Resolución No. 1444-97. J. D. de 3 de abril de 1997, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y en consecuencia DECLARA a NICASIO ALBAEZ ROSALES de cédula de identidad personal No. 2-80-857 y seguro social No. 091-3438 INVALIDO y ORDENA a la Caja de Seguro Social haga efectivo (sic) la pensión de invalidez a favor del asegurado citado."

Mediante la Resolución No. 1444-97 J. D. de 3 de abril de 1997, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social confirmó la Resolución No. 16592 de 15 de noviembre de 1994, por medio de la cual la Comisión de Prestaciones resolvió no acceder a la solicitud de pensión de invalidez formulada por el señor NICASIO ALBAEZ ROSALES, con seguro social No. 91-3438.

En lo medular, el actor sustenta su petición en los siguientes puntos:

> "...
> QUINTO: En contravención a la Sentencia proferida por la Sala Tercera, la Comisión de Prestaciones expide la Resolución N° C. D. P. 20177 de Enero de 1999, mediante la cual se RESOLVIO conceder a nuestro representado, una Pensión de Invalidéz (sic) por la suma de B/.239.24, a partir de 11 de Noviembre de 1998, sin tomar en consideración que su estado invalidante, según los Registros Médicos data del mes de Abril de 1993, fecha en que fué (sic) intervenido quirúrgicamente de urgencia, asegurándosele una incapacidad de 50% para realizar sus labores habituales de su Profesión de Mecánica,

> razon (sic) por la cual hubo de solicitar a la Caja de Seguro Social le concediese una Pensión de Invalidéz (sic), la cual fué (sic) negada mediante la Resolución N° 16592 de 15 de Noviembre de 1994, expedida por la Comisión de Prestaciones.
>
> De lo anterior se desprende claramente que, al declarar la Honorable Sala Tercera que es nula, por ilegal la Resolución N° 1444-97 J. D. de 3 de Abril de 1997, expedida por la Junta Directiva de la Caja, conformatoria (sic) de la N° 16592, de 15 de Noviembre de 1994, es lógico concluir que le pago de la Pensión de Invalidéz (sic) al Asegurado NICASIO ALBAEZ ROSALES, debe pagarse retroactivamente al 15 de Marzo de 1994, fecha de la solicitud y no como ha procedido la Caja, al pagarle al asegurado Inválido, a partir del fallo proferido por la Corte.
>
> SEXTO: Ahora bien, frente al erróneo criterio interpretativo del Departamento Legal de la Caja, solicitamos a traves de un memorial, que se revisara lo referente al inicio del pago de la Pensión de Invalidéz (sic) ORDENADO por la Corte, y la Junta Directiva, mediante la Providencia de fecha 2 de Diciembre de 1999, insiste en desatender el fallo de la Corte, señalando que no es viable nuestra solicitud de revisión, violando con su proceder el Artículo 83 de la Ley Orgánica que señala claramente que las Prestaciones que reconoce la Ley Orgánica, son de orden público e interés social.

Por auto de 24 de enero de 2000 se corrió traslado de la petición de declaratoria de desacato al Director General de la Caja de Seguro Social y a la señora Procuradora de la Administración (fs. 8).

El Director General de la Caja de Seguro Social se opuso a la declaratoria de desacato solicitada por el proponente, ya que su actuación estuvo orientada de acuerdo a lo que dispone el artículo 49 del Decreto Ley 14 de 1954, cuyo texto es el siguiente:

> "Artículo 49: La pensión de invalidez comenzará a pagarse desde la fecha en que se declare tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal en el seguro de enfermedad no profesional y maternidad, el pago de la pensión de invalidez comenzará a regir al expirar el derecho al mencionado subsidio.

Por tanto, asegura el funcionario que cumplió a cabalidad lo ordenado por la Sala Tercera, e indica que lo más apropiado hubiera sido la interposición de una aclaración de sentencia para esclarecer las dudas del demandante.

La señora Procuradora de la Administración, por su parte, estima que le asiste la razón al funcionario acusado. Además, considera que la solicitud de desacato no es la vía idónea para dicernir cuándo inicia el pago de la pensión por invalidez.

Vistos los puntos expuestos por las partes involucradas y revisadas las constancias procesales, la Sala considera que el Director de la Caja de Seguro Social no ha incurrido en desacato, como asegura la parte actora, por las razones que a continuación explicamos.

En primer lugar, en el caso que nos ocupa el desacato tiene su fundamento en el numeral 9 del artículo 1956 del Código Judicial. Esta norma advierte que se produce el desacato cuando después de terminado el proceso, se ejecuten hechos que contravengan directamentamente lo ordenado en resolución judicial ejecutoriada; y los que habiendo recibido orden de hacer cosa o de de ejecutar algún hecho, rehusen sin causa legal obeceder al Juez.

La Sentencia expedida por la Sala el 11 de noviembre de 1998, ni en su

parte motiva ni su parte resolutiva indica a partir de qué momento debe la Caja de Seguro Social hacer efectivo el pago de la pensión de invalidez al señor Albaez Rosales, sino que se ciñe a dilucidar las razones de hecho y derecho por las cuales el afectado, mecánico de profesión, no está en capacidad para proveerse de los medios necesarios para subsistir, debido a su operación del páncreas.

La comentada sentencia, fechada el 11 de noviembre de 1998, en su parte resolutiva declaró inválido al señor Albaez Rosales. Como consecuencia de esta declaración la institución de seguridad aplicó la normativa del artículo 49 de su Ley Orgánica, que prevé que la pensión de invalidez comenzará a pagarse desde la fecha en que se declare tal estado.

Por tanto, como no se ha desconocido lo ordenado en la comentada Sentencia, procede negar la solicitud impetrada.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL NO HA INCURRIDO EN DESACATO a lo decidido por este Tribunal en sentencia de 18 de noviembre de 1998.

Notifíquese.

(fdo.) ADÁN ARNULFO ARJONA L.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**ÓRGANO JUDICIAL**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES**

**MARZO 2000**

## ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

**SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL, EN MATERIA CIVIL, PROVENIENTE DEL ALTO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE INGLATERRA DENTRO DEL PROCESO INTERPUESTO POR ROBIN MICHAEL HEMING GILKES EN CONTRA DE VENIZELOS A. N. E., S. A. y OMEN MARINE COMPANY LIMITED. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOS (2) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.**

**VISTOS:**

**Procedente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, ha ingresado a esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la Nota No.1076 de 27 de julio de 1999, mediante la cual se refiere la Carta Rogatoria librada por la Sala de lo Civil (Queen's Bench Division) del Alto Tribunal de Justicia en Inglaterra, dentro del proceso interpuesto por ROBIN MICHAEL HEMING GILKES (actuando en su propio nombre y en nombre de los otros suscriptores de los Slips AL 82094 y AL 82095 respecto del Buque "NIKITA ROUSSOS") contra VENIZELOS A.N.E., S.A. (persona jurídica constituida al amparo de la leyes de la República de Panamá) y OMEN MARINE COMPANY LIMITED (persona jurídica constituida en Chipre).**

**Señala el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, que la remisión de la comisión enunciada se hace para que este cuerpo colegiado determine la viabilidad de su diligenciamiento en el territorio nacional.**

**El Estado Requiriente, representado por el Juez Auxiliar Principal de la Sala de lo Civil (Queen's Bench Division) del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales solicita (ver traducción a fojas 5 y 6):**

> **"... tenga a bien entregar a los primeros Demandados Venizelos A. N. E. S. A. (persona jurídica constituida al amparo de las leyes de la República de Panamá) en Edificio Universal, Piso 12, Avenida Federico Boyd y 51st Street, Ciudad de Panamá, República de Panamá con el emplazamiento e impreso prescrito de Acuse de Recibo en el domicilio anteriormente mencionado o en otro lugar en Panamá en que se encuentren."**

**Además, se solicita que, sea presentada prueba de la diligencia realizada; por escrito y se tenga a bien legalizar dicha diligencia mediante los sellos correspondientes de este Tribunal, para su posterior devolución, a través de las autoridades diplomáticas.**

**Para tal efecto, las autoridades inglesas han incluido junto con la carta rogatoria original, copias del emplazamiento y de las pretensiones de la demanda, debidamente autenticadas; así como, instrucciones especiales para el acuso de recibo de la notificación al primer demandado. La documentación antes señalada, aparece en idioma inglés, con su correspondiente traducción al idioma español y debidamente legalizada a través del sello de La Apostilla.**

**Se aprecia, por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá, lo siguiente:**

**a) Que entre la República de Panamá y el Reino Unido de Gran Bretaña no existe convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias.**

**b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.**

c) Que en los casos en donde no existe una convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Que cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente, o en su defecto, por el Sello de La Apostilla. Sólo en el caso de los países que han ratificado la Convención Interamericana en materia de exhortos, basta con la tramitación del exhorto por la vía diplomática.

e) Que las peticiones a diligenciar no sean violatorias del orden público interno.

En el caso que nos ocupa, la Sala observa que el exhorto que se expide en la Sala de Lo Civil del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra, División de Queen's Bench, cumple con la traducción de los documentos que sustentan lo pedido, así como, con la autenticación del referido exhorto, al contener el sello de La Apostilla.

Lo que se solicita en la presenta carta rogatoria, no vulnera nuestro ordenamiento jurídico, pues se trata de un acto procesal de mero trámite, tal cual es la notificación del inicio de una demanda; por lo que cabe darle la cooperación a las autoridades inglesas, tendiente a contribuir con el proceso aludido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por la Sala Civil, del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra, División de Queen's Bench dentro de la demanda instaurada por ROBIN MICHAEL HEMING GILKES contra VENIZELOS A. N. E., S. A. y OMEN MARINE COMPANY LIMITED, a fin de que se notifique a la sociedad VENIZELOS A. N. E., S. A.; SE ORDENA que la Secretaría realice la correspondiente notificación, en la dirección proporcionada por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá (Edificio Universal, Piso 12, Avenida Federico Boyd y calle 51, Ciudad de Panamá). En el evento de no localizarse a los representantes legales de la sociedad VENIZELOS A. N. E., S. A. en la dirección antes señalada, se ORDENA solicitar a la firma forense FRANCO & FRANCO, Agente Residente de la demandada, la dirección donde pueden ser localizados los representantes legales de VENIZELOS, A. N. E., S. A.

Cumplidas las diligencia ordenadas, remítase copia autenticada del expediente, a la cancillería panameña para su posterior devolución a las autoridades inglesas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN AMSTERDAM DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE ADELANTAN EN EL PROCESO PENAL EN CONTRA DE FIREDICH ADOLF SPECHT Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por tercera ocasión han sido remitidos a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados, la asistencia judicial internacional librada por el Juez de Instrucción de Amsterdam dentro de la investigaciones que se adelantan en el proceso penal en contra de Friedrich Adolf Specht y otros por el delito de estafa.

Se aprecia que la petición del tribunal holandés es idéntica a la realizada mediante comisión rogatoria de 11 de septiembre de 1998, que en primera instancia fue declarada no viable en vista de la amplitud de las peticiones de la autoridad jurisdiccional holandesa. Sin embargo, posteriormente mediante resolución de 22 de marzo de 1999, corregida la petición extranjera, la Sala procede a declarar viable lo solicitado por el juez holandés y en virtud de ello, se ordena a la Procuraduría de la Nación que realice el interrogatorio en los términos de la resolución.

Visto el expediente en la Secretaría de la Sala y en virtud del informe secretarial que antecede, se aprecia que la decisión jurisdiccional de la Sala a la cual nos referimos a párrafo anterior, versa sobre la misma pretensión que nos ocupa, es decir, la toma de declaraciones en calidad de testigos a los señores Bruno Bemporad, ex-director del Banco Banaico, Gloria Paredes, Dimitrio Lakas (q. e. p. d.), Francisco Sánchez Cárdenas, Mitchell Doens, Víctor García. Dichas declaraciones fueron recibidas por la Procuraduría de la Nación, quien realizó de manera satisfactoria las diligencias solicitadas, devolviéndose el expediente con entrada No. 680-98 al Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Oficio SNG 219-99 de 20 de agosto de 1999, para su posterior entrega a las autoridades holandesas.

Se observa que dentro del presente expediente no existe pues, objeto sobre el recaiga o se necesite la actuación de este tribunal, toda vez que las diligencias, en este caso el interrogatorio a diversas personas de la localidad, fue realizado oportunamente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que se ha producido el fenómeno de sutracción de mateira en el presente proceso por lo que ORDENA la devolución de la solicitud de asistencia judicial librada por el Juez de Instrucción en Amsterdam dentro de las investigaciones que se adelantan en contra de Friedrich Adolf Specht y otros al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE GUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## CARTA ROGATORIA

EXHORTO N° 6946/88 POR DEMANDA DE FILIACIÓN PATERNA EXTRAMATRIMONIAL, PROMOVIDA POR GRACIELA RODRÍGUEZ CASTEL CONTRA GERARDO ANTONIO SIMEON MARTINEU, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N° 18 DE MADRID ESPAÑA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados ha ingresado a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, mediante Nota A.J. No. 416 de 22 de febrero de 2000, el exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia

No. 18 de Madrid, relativo a la acción instruida contra GERARDO ANTONIO SIMEON MARTINEU por demanda de FILIACIÓN PATERNA EXTRAMATRIMONIAL.

El propósito de la presente Carta Rogatoria es "que con entrega de las adjuntas copias se emplace en legal forma a l(os) demandado(s) GERARDO ANTONIO SIMEON MARTINEAU, con D. N. I. C. I. F. domiciliado en Chiriquí Land Company-Puerto Armuelles (Chiriquí (República de Panamá), confiriendole (s) traslado de la demanda y documentos presentados por el actor para que dentro del término de 20 días hábiles comparezca (n) en autos representado (s) por procurador y defendido (s) por Letrado en ejercicio ante los Tribunales de Madrid, y CONTESTE (N) LA DEMANDA, con apercibimiento de que, de no verificarlo en el indicado término se dará la misma por contestada y se continuará el trámite en la rebeldía de lo(s) no hubiere lugar en derecho." (fs 5-6).

De acuerdo al Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente procede esta magistratura a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan para ambas naciones. Efectivamente observa esta Sala que tanto el Estado panameño como el Estado español, están actualmente adscritos, a la Conferencia de la Haya de 5 de octubre de 1961 la cual corresponde a nuestra Ley No. 6 de 25 de junio de 1990 y, a la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias, ratificada por panamá mediante Ley No 12 de 23 de octubre de 1975.

Los aspectos a tomar en cuenta por la sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria, es si los documentos que lo acompañan se encuentran debidamente autenticados, y si no es violatoria del orden público panameño, ya que de lo contrario aun y cuando exista alguna convención entre el estado requirente y el estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos.

Esta superioridad observa que los documentos que acompañan a la comisión rogatoria en análisis cumple con el requisito de la apostilla, la cual encierra la presunción de que estas han sido expedidas conforme a la ley local del país requirente.

De igual forma apreciamos que la diligencia solicitada no vulnera nuestro ordenamiento jurídico, ya que se trata del traslado y notificación de una demanda de filiación, la cual corresponde su conocimiento a los Juzgado Seccionales de Familia al tenor del artículo 752 del Código de la Familia, el cual preceptúa:

"752. A los Juzgados Seccionales de Familia les corresponden conocer y decidir en primera instancia:

1 ...
2. Filiación
..."

Es por los señalamientos que preceden que este alto Tribunal considera que es procedente acceder a la solicitud proveniente de la sede diplomática española.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la comisión rogatoria librada por el Juzgado de Primera Instancia No. 18 de Madrid, relativo a la notificación y traslado de la demanda de FILIACIÓN PATERNA EXTRAMATRIMONIAL a GERARDO ANTONIO SIMEON MARTINEU con domicilio en Chiriqui Land Company, Puerto Armuelles, Chiriqui, República de Panamá, dentro de la acción instruida en su contra por GRACIELA RODRÍGUEZ CASTEL y en favor de los menores BERTA ESMERALDA CASTEL RODRÍGUEZ y CARLOS ALBERTO

CASTEL RODRÍGUEZ (q. e. p. d.)., y ORDENA que el mismo sea diligenciado por el Juzgado Seccional de Familia de la Provincia de Chiriqui utilizando para tales efectos las norma jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la materia, y una vez tramitado se proceda a remitirlo a la Cancillería Panameña a través de la Secretaría de esta Sala, para que esta dependencia oficial la devuelva a las autoridades españolas.

Notífiquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA PROCEDENTE DEL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA EL DISTRITO DE NEVADA, RELATIVO AL PROCESO CIVIL POR JEAN ROUSH CONTRA BOBBY BEROSINI, SR. ET. AL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Sub-Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Nota A. J. No. 1574 de 21 de octubre de 1999, la Carta Rogatoria procedente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito de Nevada, relativo al proceso civil promovido por JEAN ROUSH contra BOBBY BEROSINI, SR, ET, AL.

A través de dicha carta rogatoria se solicitan servicios procesales a llevarse a cabo en las direcciones de las sociedades Inversiones Cataluña S.A. y Arias, Alemán & Mora, a efectos de la localización y devolución de mas de B/.2,000,000.00 a una compañía incorporada en Panamá la cual estaba efectuando negocios en Costa Rica.

La Sala atendiendo a lo pedido por las autoridades norteamericanas, considera lo siguiente:

a) Que entre Estados Unidos y Panamá existe convención que regule la materia de exhorto o carta rogatoria. Correspondiéndole a esta Sala Cuarta el conocimiento de estas asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país a la luz de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

b) Que en los casos en donde no existe una convención entre los Estados y en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

c) Que cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requirente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español.

Se aprecia que en la presente documentación el trámite de la legalización se efectúa por medio del sello de la Apostilla, cuya finalidad es la supresión del proceso de legalización y cuyo propósito real se sitúa en la celeridad del tráfico y de los actos o documentos públicos extendidos por Estados Extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado.

De igual forma se observa que la documentación proveniente del Tribunal Norteamericano aparece en su versión en inglés y a continuación al idioma español; sin embargo no se aprecian las resoluciones auténticas correspondientes extendidas por la autoridad o Tribunal extranjero que solicita las diligencia, en donde se explique el fundamento de la diligencia solicitada.

Estos últimos requisitos, de los cuales adolece la carta rogatoria en estudio, son indispensables para el trámite de dichas solicitudes lo cual se desprende del contenido del artículo VIII, literal a, de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, del cual tanto los Estados Unidos de América como la República de Panamá son suscriptores y el cual preceptúa que:

> ARTICULO VIII. Los exhortos o cartas rogatorias deberán ir acompañados de los documentos que se entregarán al citado, notificado o emplazado y que serán:
>
> a. Copia auténtica de la demanda y sus anexos, y de los escritos o resoluciones que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada ...

Esta Sala una vez realizado el análisis de rigor, observa que hacen falta requisitos de forma en el presente exhorto suplicatorio exigidos por convenios internacionales, no siendo procedente declarar la viabilidad del presente exhorto.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en nuestro territorio de la Carta Rogatoria librada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nevada, dentro del expediente relativo al proceso civil promovido por JEAN ROUSH contra BOBBY BEROSINI, SR. et. al., y ORDENA el retorno del expediente a la Cancillería, para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales norteamericanas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DICTADA EL 12 DE JUNIO DE 1996 POR LA CORTE DEL JUZGADO 11 JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE-MIAMI FLORIDA, MEDIANTE LA CUAL SE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A LOS SEÑORES DORIS GUTIERREZ Y OMAR ENRIQUE ADAMES. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Heriberto Araúz, en representación de la señora Doris G. Gutiérrez, ha presentado ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida y ejecutada en la República de Panamá, la sentencia extranjera de divorcio dictada el 12 de junio de 1996 por la Corte del Juzgado 11 Judicial del Condado de Dade-Miami Florida, Estados Unidos de América, en virtud de la cual se disuelve el vínculo matrimonial entre la peticionaria y el señor Omar E. Adames.

## ANTECEDENTES DEL CASO

Los señores Omar E. Adames, panameño con cédula de identidad No. 8-257-1045 y Doris G. Gutiérrez, panameña, con cédula de identidad No. 8-147-185 contrajeron matrimonio el día 29 de enero de 1991, en el Juzgado Quinto Municipal de Ancón. Dicho matrimonio se encuentra inscrito al tomo número 241 de matrimonios de la Provincia de Panamá, asiento 72.

La solicitud de reconocimiento de sentencia extranjera se fundamenta en la existencia de sentencia divorcio No. 96-13152, de fecha 12 de junio de 1996, dictada por la Corte del Juzgado 11 Judicial del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, que disuelve el vínculo matrimonial existente entre las partes mencionadas en el párrafo anterior.

Ante estas circunstancias, el apoderado judicial de la solicitante aporta como piezas probatorias los siguientes documentos:

1. Poder otorgado a favor del licenciado Heriberto Araúz.

2. Copia de la sentencia autenticada por el Cónsul General de Panamá en la ciudad de Miami y legalizada a través del Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, que acredita la firma del funcionario consular.

3. Traducción de la referida sentencia autenticada al idioma español realizada por intérprete público autorizado.

## OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

Por su parte, el Procurador General de la Nación en su Vista N° 11 de 2 de marzo de 2000 (f.14), estimó que la resolución cumple con los requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico por lo cual es pertinente acceder a la ejecutabilidad de la sentencia bajo examen.

## DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido todo el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, pasa a decidir sobre la petición presentada con la finalidad de examinar si la resolución que se pretende reconocer y ejecutar en nuestro país es conforme o no con nuestro orden público interno.

La Sala se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador General de la Nación, atendiendo a que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial, para la ejecución de las sentencias extranjeras.

De hecho la pretensión es lícita en la República de Panamá y de carácter personal. De igual forma no se ha producido el fenómeno de la rebeldía.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá sentencia extranjera de divorcio dictada por la Corte del Juzgado 11 Judicial en y para el Condado Dade, Florida, Estados Unidos de América fechada 12 de junio de 1996, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que unía a los señores DORIS GUTIÉRREZ y OMAR ENRIQUE ADAMES.

Se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DALIDES E. CRUZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO DEL CONDADO DE DALE, ALABAMA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO DONDE SON PARTES LANCE EUGENE OLDHAM Y DALIDES ENEIDA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La señora DALIDES ENEIDA CRUZ, ha solicitado ante esta Sala IV de Negocios Generales, mediante apoderado judicial, Licenciado Diener Vinda, el reconocimiento y la ejecución de la Sentencia dictada por la Corte de Circuito del Condado de Dale, Alabama, de los Estados Unidos de América, dentro del proceso de divorcio donde son partes el señor LANCE EUGENE OLDHAM, como demandante y DALIDES ENEIDA CRUZ, como demandada.

ANTECEDENTES

La solicitante fundamentó esta solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: El Sr. Lance Eugene Oldham y la Sra. Dalides Eneida Cruz contrajeron matrimonio civil el día 24 de septiembre de 1997 en el Juzgado Quinto Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil, con sede en Ancón, el cual se encuentra registrado al Tomo 261 de matrimonios de la Provincia de Panamá, Asiento 363 del Registro Civil.

SEGUNDO: El Sr. Lance Eugene Oldham interpuso demanda de divorcio en contra de la Sra. Dalides Eneida Cruz en la Corte de Circuito del Condado de Dale, Alabama, de los Estados Unidos de América, quien decretó la disolución del vínculo matrimonial que los unía, mediante sentencia de fecha primero de diciembre de 1998.

TERCERO: La Sentencia extranjera se dictó como consecuencia de una acción o pretensión personal, con notificación y comparecencia de la parte demandada en el proceso de divorcio."

La solicitud propuesta fue acompañada por las siguientes pruebas: Certificado de Matrimonio, expedido por al Dirección General del Registro Civil, donde consta que el matrimonio celebrado entre los señores LANCE EUGENE OLDAHAM y DALIDES ENEIDA CRUZ en la ciudad de Panamá, el día 24 de septiembre de 1997; Copia, debidamente certificada y autenticada de la Sentencia dictada en la Corte de Circuito del Condado de Dale, Alabama, Estados Unidos de América, con la correspondiente traducción al idioma español; y, acuerdo presentado ante la Corte del Condado de Dale, Alabama, Estados Unidos de América, con su correspondiente traducción al español.

Seguidamente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1410 del Código Judicial, se remitió el expediente al señor Procurador General de La Nación para

que emitiera su opinión. Concluye el señor Procurador que se han constituido cada uno de los presupuestos que señala el Código Judicial, por lo que la sentencia extranjera proferida el 1° de diciembre de 1998, por la Corte de Circuito del Condado de Dale, Alabama, Estados Unidos, que decretó el divorcio entre el señor LANCE EUGENE OLDHAM y la señora DALIDES ENEIDA CRUZ, materia objeto del presente negocio, cumple con cada uno de los requisitos exigidos por nuestra legislación procesal, razón por la cual estima que debe accederse a la pretensión que originó el presente proceso de exequátur.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El ordenamiento jurídico vigente, exige, para la ejecución en nuestro país de una sentencia dictada en el extranjero, que la misma haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, que no haya sido dictada en rebeldía, entendíendose por tal, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, dentro de la jurisdicción del Tribunal de la causa, a menos que el demandado rebelde solicite la ejecución, y que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Panamá; y, que la copia de la sentencia se auténtica.

Como observamos, luego de las piezas que conforman el expediente, la solicitud y los documentos que la acompañan cumplen con los requisitos exigidos por la ley panameña para que sea reconocida la sentencia y su ejecución en nuestro territorio; por lo que, debemos concordar con el señor Procurador General de La Nación y acceder a la petición formulada.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá, la sentencia dictada por la Corte de Circuito del Condado de Dale, Alabama, Estados Unidos de América, dentro del proceso de divorcio propuesto por LANCE UGENE OLDHAM, varón, estadounidense, con pasaporte N° S. S. 523-45-6931 y DALIDES ENEIDA CRUZ , mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 7-117-260, por la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que los mantiene unidos.

SE AUTORIZA a la Dirección General del Registro Civil de la República de Panamá, que realice las anotaciones e inscriba, en los libros correspondientes, la sentencia de divorcio antes señalada, en los mismos términos que ella indica.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SANDRA LIBRADA MEDINA GONZÁLEZ (NOMBRE USUAL SANDRA CALDERA), SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA EL 3 DE MARZO DE 1998, POR EL JUZGADO DE CIRCUITO DEL UNDÉCIMO CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EN EL CUAL SE DISUELVE EL MATRIMONIO CONTRAIDO CON EL SEÑOR MARVIN JOSÉ CALDERA SOLANO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Sandra Librada Medina González, mediante poder especial otorgado a la firma de abogados ALFARO, FERRER, RAMIREZ & ALEMÁN, ha solicitado a través de la figura jurídica del exequátur, el reconocimiento en la República de Panamá de la sentencia de divorcio dictada el 3 de marzo de 1998 por el Juzgado de Circuito

del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, por medio de la cual se decretó la disolución del matrimonio entre la requirente y el señor Marvin José Caldera.

La petición de la señora Sandra Librada Medina González se circunscribe a que esta Corporación Judicial declare reconocido en la República de Panamá la sentencia extranjera dictada el 3 de marzo de 1998 por el Juzgado de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, por medio de la cual se decretó la disolución del matrimonio contraído entre el señor Marvin José Caldera Solano y la señora Sandra Librada Medina González, y por consiguiente se ordene su inscripción en la Dirección General del "Registro Público", con el propósito de cancelar el matrimonio inscrito al tomo número 203 de matrimonios de la Provincia de Panamá, asiento 101 .

A estos efectos la interesada ha suministrado a esta Sala de la Corte, la sentencia de extranjera de divorcio debidamente autenticada por el Cónsul General de la República de Panamá en Miami, Florida, Estados Unidos de América y la autenticación correspondiente del Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (fjs. 5-6), la traducción de la sentencia al idioma español realizada por interprete público autorizado (fjs.7-9) y finalmente, el certificado No. 297448 expedido por el Registro Civil panameño visible a foja 4, en el cual se plasma la vigencia del matrimonio entre la interesada y el señor Marvin José Caldera Solano.

En este punto se debe destacar que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia es el ente idóneo para:" Examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en el país extranjero incluso las arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de Panamá, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados internacionales" en atención a lo establecido en el artículo 101 numeral 2 del Código Judicial.

En este orden de ideas se percata esta Superioridad que la Procuraduría General de la Nación al vertir su opinión mediante vista mediante vista fiscal N° 12 de 9 de marzo de 2000, considera que la solicitud impetrada cumple con los requisitos exigidos en la legislación procesal panameña por lo cual es pertinente acceder a la ejecutabilidad de la sentencia bajo examen.

Cumplido todo el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, pasa a decidir sobre la petición presentada con la finalidad de examinar si la resolución que se pretende reconocer y ejecutar en nuestro país es conforme o no con nuestro orden público interno.

La Sala se manifiesta de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador General de la Nación, atendiendo a que la solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 1409 del Código Judicial, para la ejecución de las sentencias extranjeras.

De hecho la pretensión es lícita en la República de Panamá y de carácter personal. De igual forma no se ha producido el fenómeno de la rebeldía.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá sentencia extranjera de divorcio dictada por el Juzgado de Circuito del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que unía a los señores Sandra Librada Medina Gonzalez y Marvin José Caldera Solano.

Se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente

resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SAMUEL LEVY MALCA, SOLICITA RECONOCIMIENTO DE SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO, DECRETADA EN EL JUZGADO DIECISIETE DE FAMILIA DE SANTE FÉ DE BOGOTÁ, D. C., CON FECHA 25 DE ENERO DE 1999. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Licenciado Higinio Martínez ha presentado en su calidad de Apoderado Especial del señor Samuel Levy Malca, solicitud a la Sala Cuarta de Negocios Generales para el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Diecisiete de Familia de Santa Fé de Bogotá D.C. dictada el veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999), mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre su persona y la señora María Clara Franky Rodríguez.

ANTECEDENTES DEL CASO

Los señores Samuel Levy Malca y la señora María Clara Franky Rodríguez, contrajeron matrimonio ante el Juzgado Segundo Municipal de Panamá, Provincia de Panamá el veinticuatro (24) de abril de mil novecientos ochenta y seis (1986). Dicho matrimonio se encuentra inscrito al tomo 227 de matrimonios de la Provincia de Panamá, asiento 761, de la Dirección del Registro Civil del Tribunal Electoral.

Posteriormente se produce la disolución del vínculo matrimonial mediante sentencia de veinticinco (25) de enero de mil novecientos noventa y nueve (1999) dictada por el juzgado Diecisiete de Familia de Santa Fé de Bogotá, D.C.

En base a lo anterior el paoderado judicial solicita que se reconozca y se ejecute en la República de Panamá, la sentencia extranjera en estudio toda vez, que la misma cumple con lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado la señora Procuradora General de la Nación, Encargada, quien en su Vista N° 13 de 23 de marzo de 2000 señala que en atención a lo expresado, es válido considerar que en el presente caso se han cumplido los requisitos que la normativa aplicable exige para adjudirle reconocimiento y ejecución a las sentencias extranjeras.

DECISIÓN DE LA SALA

Vista la opinión de la señora Procuradora General de la Nación, Encargada, se observa además, que el apoderado ha presentado como prueba los siguientes documentos: Certificado de matrimonio de los señores Samuel Levy Malca y María Clara Lucia Franky Rodríguez expedido por la dirección General del registro Civil de Panamá visible a foja 3; Copia íntegra de la sentencia extranjera de 25 de enero de 1999 proferida por el Juzgado Diecisiete de Familia de Santa Fé de Bogotá, D.C., Colombia, debidamente autenticada por nuestras autoridades en la

ciudad de Santa Fé de Bogotá Colombia, y posteriormente por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá (fs. 4-6) que incluye el régimen de visitas, así como pensión alimenticia y guarda y crianza de los menores habidos en el matrimonio.

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consencuencia del ejercicio de una acción personal. Se aprecia que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, requisitos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República de Panamá.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio N° 11162 dictada por el Juzgado Diecisiete de Familia de Santa Fé de Bogotá, D.C., Colombia, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los señores Samuel Levy Malca ciudadano panameño con cédula PE-10-1740 y María Clara Franky Rodríguez ciudadana colombiana con pasaporte: po 617876.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## EXHORTOS

CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUEZ TRIGÉSIMO OCTAVO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEJICANOS, RELATIVA A LA CONTROVERSIA DE ORDEN FAMILIAR SOBRE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MÓNICA CECILIA LÓPEZ DE LA VEGA EN CONTRA DE GUSTAVO ZETH RAMOS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRES (3) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Nota A.J. No. 1879 de 27 de diciembre de 1999, la Carta Rogatoria librada por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Distrito Federal de los Estados Unidos Mejicanos, dentro de la causa sobre alimentos promovida por MÓNICA CECILIA LÓPEZ DE LA VEGA en contra de GUSTAVO ZETH RAMOS LÓPEZ, y en favor del menor RENATO EMILIO RAMOS LÓPEZ.

Según lo que establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en nuestro territorio, considerando no se vulnere nuestro orden público, para así establecer que

funcionario debe cumplirlo.

El objeto de la presente Carta Rogatoria consiste sustancialmente en correr traslado de forma personal al señor GUSTAVO ZETH RAMOS LÓPEZ, en su domicilio laboral, ubicado en el Edificio Omega, Tercer Piso, Avenida Samuel Lewis, esquina calle 53, urbanización Obarrio, de la demanda de orden familiar sobre alimentos promovida en su contra por MÓNICA CECILIA LÓPEZ DE LA VEGA y en favor del menor RENATO EMILIO RAMOS LÓPEZ. (Fs 6-9)

Para proceder a dilucidar la viabilidad del presente exhorto resulta necesario establecer si entre la República de Panamá y los Estados Unidos Mejicanos existen convenciones suscritas relativas a Cartas Rogatorias o Exhortos. En cuanto a esto aprecia la Sala que el estado requirente es suscriptor de la Convención Interamericana de Exhortos y Cartas Rogatorias por lo que el análisis del presente negocio debe basarse en los principios de este instrumento legal, siempre y cuando no vulnere el derecho interno del país requerido.

En este orden de ideas esta Sala aprecia que conforme a la costumbre internacional y fundamentándonos en nuestro ordenamiento jurídico interno, en cuanto a la tramitación de exhortos o cartas rogatorias, estos se diligenciaran de acuerdo a la lex fori como estado requerido, no obstante, queda de forma discrecional y por principios de reciprocidad internacional que se le otorgue a la carta rogatoria una tramitación especial, o que en la práctica de las diligencias solicitadas se acepte la observancia de formalidades adicionales, siempre que no vulnere la legislación panameña.

Aunado a lo anterior, la Sala observa que la documentación aportada cumple con el requisito de la legalización, toda vez que consta la incorporación de la apostilla, la cual encierra la presunción de que estos han sido expedidos conforme a la ley local del país requirente.

Ahora bien, en cuanto a la práctica de la diligencia en sí, en esta ocasión la Sala advierte que es competencia de los Juzgados Municipales de Familia el conocimiento de la misma, tal como se desprende del artículo 751 del Código de la Familia, que a la letra plasma:

> "Artículo 751: A los Jueces Municipales de familia les corresponde conocer y decidir en primera instancia:
> 1. ...
> 2. Procesos de Alimentos, a prevención de las Autoridades de Policía
> 8. De los negocios de Familia que no estén atribuidos expresamente por Ley a otra autoridad".

Toda vez que se han cumplido los requisitos necesarios para la tramitación de la presente carta rogatoria, este tribunal no encuentra objeción para que el mismo sea diligenciado por las autoridades jurisdiccionales panameñas.

Por lo anterior, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE, el diligenciamiento del Exhorto librado por el Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar del Distrito federal de los Estados Unidos Mejicanos, dentro del proceso que contiene la controversia de orden familiar sobre alimentos promovida por Mónica Cecilia López de la Vegas contra Gustavo Zeth Ramos López, en lo concerniente con la notificación de la demanda y ORDENA que el mismo sea diligenciado por el Juzgado Municipal de Familia en Turno del Distrito de Panamá, y una vez realizado sea remitido a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, para ser enviado a la Cancillería de la República, para su posterior devolución a las Autoridades Jurisdiccionales Mejicanas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ALLEGANY TRADING CORP., DENTRO DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE HONORARIOS PROMOVIDO POR ROBERTO GUILLERMO AGUIRRE MATOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director general de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado en la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, mediante nota No. A.J. 1907 de 28 de diciembre de 1999, el Exhorto No. 58-99, librado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala dentro del Juicio de Liquidación de honorarios identificado con el número C Dos Guión noventa y nueve guión cinco mil setecientos cinco (C2-99-5705).

Conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, darle el trámite correspondiente a este tipo de negocios y revisar que los mismos cumplan con los requisitos formales exigidos por la ley para estos menesteres, y que además no contravengan nuestro ordenamiento jurídico interno, de allí que se accede a lo pedido siempre y cuando las premisas anteriores, o en caso contrario no será posible otorgar la viabilidad a los mismos.

El presente exhorto tiene por finalidad notificar a Allegany Trading Corp. Calle 50 Edificio Plaza Bancomer, Piso 19, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de la demanda de liquidación en concepto de honorarios no pagados, que interpone en su contra Roberto Guillermo Aguirre Matos y tome nota de la demanda planteada en su contra, así como el derecho que le asiste de oponerse a la misma si no está conforme.

Para determinar si es posible el cumplimiento del presente exhorto es importante verificar si es violatorio del orden público panameño, en el caso de darse dicha violación debe negarse la práctica de la diligencia solicitada.

Observa la Sala que el expediente contentivo del presente exhorto, se encuentra debidamente legalizado por aparecer en dichos documentos a foja cuatro (4) del expediente, el sello de apostilla, lo que corresponde a la Convención de La Haya de 1961, de la cual tanto Panamá, como Guatemala son suscriptoras.

Por todo lo expuesto, y en virtud que no se observan vicios que vulneren el orden público panameño, aspecto primordial que debe tomar en consideración esta máxima Corporación de justicia para el cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria, es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE, el exhorto librado por el Juzgado Octavo de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala , cuyo objetivo lo constituye el acto de notificación a la Sociedad ALLEGANY TRADING CORP., del proceso de liquidación de Honorarios promovido por Roberto Guillermo Aguirre Matos, y ORDENA que la misma sea diligenciada por la Secretaría de la Sala Cuarta utilizando para tales efecto las normas jurídicas de nuestro ordenamiento procesal vigente referente a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO EN LA CAUSA N° 9552/99 CARATULADA "N.N. S/ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS" POR EL JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL N°. 12 DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE MARZO DE DOS MIL (2000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A través de la nota A. J. No. 77 suscrita por el Director General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema, exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 12 de la República de Argentina, interinamente a cargo del Dr. JUAN JOSÉ GALEANO, dentro de los autos caratulados "N.N. S/ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS".

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

La autoridad argentina solicita lo siguiente:

> "... solicitarle al Sr. GUSTAVO TRONCOSO, titular de la firma GLASSGUARD CORPORATION, cuya dirección de correo electrónico es glass@guard.com., si realizó una venta de equipo de grabación inalámbrico marca STG-TDM 9990, nro de serie 4863HK7563489H, y en ese caso quien ha sido el comprador, cual es el domicilio del mismo, en que fecha se llevó adelante esa operación, y todo otro dato de interés al respecto, debiendo acompañar copia de la documentación que acredite dicha operatorio."

Procede este ente colegiado a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan tanto a la nación argentina como a la panameña, relativos a la materia, pudiendo constatar que ambas Repúblicas son parte de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero aprobada en Panamá mediante la Ley No. 13 de veintitrés (23) de octubre de mil novecientos setenta y cinco (1975) , así como al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Ley de la República No. 10 de 18 de junio de 1991.

Se observa, que las autoridades de la República de Argentina, han cumplido con lo establecido en el Convenio de La Haya, pues incorporan la "acotación o apostilla" como formalidad exigida en todo documento público proveniente del extranjero.

A la solicitud del despacho argentino le faltan elementos indispensables para poder diligenciarlo, no ha sido acompañada de los siguientes documentos: copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto, la dirección suministrada no es amplia, siendo este un requisito indispensable para la recepción u obtención de la prueba, el informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo no fue adjuntado. En consecuencia, sería necesario

contar con mayores elementos de juicio sobre el proceso que se surte en la República de Argentina, de forma tal que se establezca el interés dimanate para acceder a la presente petición.

El artículo IV de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero establece lo siguiente:

> "ARTÍCULO 1V: Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción u obtención de pruebas o informes en el extranjero deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber:
>
> 1. Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicitada;
>
> 2. Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria , así como los interrogatorios y documentos que fueran necesarios para su cumplimiento;
>
> 3. Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás intervinientes y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba;
>
> 4. Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo;
>
> 5. Descripción clara y precisa de los requisitos, procedimientos especiales que el órgano jurisdiccional requirente solicitare en relación con la recepción u obtención de la prueba, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 2 párrafo primero, y en el artículo 6".

Esta Corporación estima que no es posible acceder al diligenciamiento del presente exhorto, toda vez que ha señalado reiteradamente que las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, siendo esta una regla de conducta obligatoria para los estados que las suscriben y ratifican.

Cabe advertir, que la negativa a la presente solicitud no constituye un obstáculo para que la referida autoridad exhortante la presente nuevamente, una vez cumpla con los requerimientos establecidos en la Convención Internacional invocada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 12 de la República de Argentina y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores , para su posterior retorno a las autoridades argentinas.

Notifíquese Y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FEDERAL N° 11, SECRETARIA 21. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce del exhorto procedente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Federal No. 11, Secretaria 21, de la República Argentina, librado dentro del proceso caratulado BRIDAS AUSTAL S.A.C/ESTADO NACIONAL. (MINISTERIO DE ECONOMIA) Y OTROS S. ORDINARIO (EXPTE. No. 28.066/95)-CUADERNO DE LA PRUEBA ACTORA.

Observamos que la comisión rogatoria bajo análisis tiene la finalidad específica de que "se sirva ordenar lo necesario para que Overseas Financial of Meilen (OFM), con domicilio en Apartado Postal 6-6661, El Dorado, Panamá, República de Panamá: con las copias de los documentos, que se acompañan en el Anexo I, y corresponden a los acuerdos y operaciones financieras realizadas por OFM con Bridas S.A.P.I.C. y luego transferidas por ésta a Bridas Austral S.A. y con Bridas Austral S.A., informe: (i) si los mismos reproducen fielmente a sus originales; (ii) si las firmas puestas por OFM corresponden a personas que, a la fecha de dichos documentos, tenían capacidad para obligar a OFM; (iii) remita los originales o copia auténtica de los documentos cuyas fotocopias se acompañan; (iv) ratifique o rectifique las operaciones que de dichos documentos surgen y (v) remita, en base a la documentación que se acompaña, el detalle de la totalidad de los pagos recibidos por o por cuenta y orden de Bridas Austral S.A., indicando en cada caso causas de esos pagos". (fs 1-2)

De acuerdo con el Código judicial en su artículo 101, numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia la función de recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por Tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Procede entonces, verificar la existencia de convenios internacionales que rijan a ambas naciones, por lo que se puede apreciar que ambas Repúblicas están adscritas al Convenio de la Haya, concertado el 5 de octubre de 1961, la Convención Interamericana sobre Exhortos o cartas Rogatorias, y a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjeros.

La Sala Cuarta considera que la presente Carta Rogatoria cumple con los requisitos de forma exigidos por las normas y los convenios internacionales aplicables a esta materia, puesto que la representación de los documentos se ha hecho conforme a lo estatuído en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias.

> "Artículo 6: Cuando los Exhortos o Cartas Rogatorias se transmitan por vía consular o diplomática o por medio de la autoridad central será innecesario el requisito de la legalización"

Luego de lo anterior se observa que la documentación aportada cumple con los requisitos de forma exigidos para el diligenciamiento de la Exhortos y Cartas Rogatorias; ahora bien, a esta Magistratura le llama la atención que las autoridades jurisdiccionales Argentinas deben poner a disposición del órgano jurisdicional del país requerido la mayor información para el diligenciamiento de las pruebas solicitadas, lo que no ocurre en el caso en estudio, toda vez que solo se aporta el apartado postal de la empresa sobre la cual recaen las diligencias solicitadas, mas no así su dirección domiciliar o la de su representante legal en la República de Panamá.

Siendo así las cosas esta Corporación Judicial considera que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad, hasta tanto se suministren mayores datos para la ubicación de la empresa sobre la cual recaen las pruebas impetradas.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

**DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, Federal No. 11, Secretaria 21, de la República Argentina, librado dentro del proceso caratulado BRIDAS AUSTAL S.A.C/ESTADO NACIONAL. (MINISTERIO DE ECONOMIA) Y OTROS S. ORDINARIO (EXPTE. No. 28.066/95)-CUADERNO DE LA PRUEBA ACTORA. Y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de relaciones exteriores para que proceda de acuerdo a los convenios internacionales relativos a esta materia.**

**Notifiquese y Cúmplase.**

**(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.**
**(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.**
**(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.**
**Secretaria General, Encargada**

**==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=**

**EXHORTO LIBRADO EN LA CAUSA N° 4031 CARATULADA ALIMO S.A. DE CONTRABANDO QUE SE TRAMITA EN EL JUZGADO NACIONAL DE LO PENAL Y ECONÓMICO N° 7 DE LA CAPITAL FEDERAL DE REPÚBLICA ARGENTINA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.**

**VISTOS:**

**Cursa en la Sala de Negocios Generales la Comisión Rogatoria del Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico a cargo del Juzgado No. 7 de la Capital Federal de la República Argentina, con la finalidad que se practiquen las diligencias ante la autoridad aduanera de Panamá, libradas en la causa Nro. 4031, caratulada "ALIMO S.A. S/AV. DE CONTRABANDO".**

**El presente exhorto tiene como propósito obtener copia certificadas de factura expedidas por la Firma LANATEX (ZONA LIBRE) S.A.,Apartado postal 4003, Zona Libre de Colón, República de Panamá la que fuera presentada en las aduanas habilitadas, relativas al embarque correspondientes a los despachos de importación Nros. 113997-4/94 y 82010-5/94, que documentara el ingreso al país de las mercaderías detalladas en los mismos, como así también en las facturas respectivas.**

**Para el presente diligenciamiento, el tribunal exhortante remite la siguiente documentación anexa, para su debido cotejo y posterior remisión:**

**a) Factura 30161 de 6 de mayo de 1994 de la empresa LANATEX (ZONA LIBRE), S.A.**

**b) Factura 163230 de 28 de abril de 1994 de la empresa LANATEX (ZONA LIBRE), S.A.**

**Analizada la cuestión planteada observa la Sala que tanto la República de Panamá como la de Argentina son suscriptoras de la Convención Interamericanas sobre exhortos o cartas rogatorias, ratificada por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley 12 de 23 de octubre de 1975.**

**Observa la Sala que en el expediente de marras el exhorto se tramitó por la vía diplomática, razón por la cual le es aplicable la exención del requisito de legalización que señala el artículo VI de la Convención Interamericana, aprobada por la República de Panamá, mediante Ley 12 de 1975, por lo que es permisible darle curso a la comisión rogatoria librada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal económico a cargo del Juzgado No. 7 de la Capital Federal de la República Argentina.**

**Observa la Sala igualmente, que las facturas solicitadas son descritas en el presente petitorio con el número 1263230 con fechas diferentes (28/04/94 y**

06/05/94); observa igualmente la Sala que el número 163230 sólo coincide con la factura expedida con fecha 06/05/94 (visible a foja 7 del expediente), por lo que sólo será satisfecho el presente petitorio con el documento claramente descrito.

Por todo lo expuesto y en virtud que no se observan vicios que vulneren el orden público panameño, aspecto primordial que debe tomar en consideración esta máxima corporación de Justicia para el cumplimiento de un exhorto, más aun cuando se trata de un Estado ratificante de este convenio, es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional del exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal económico a cargo del Juzgado No. 7 de la Capital Federal de la República Argentina, en la causa No. 4031, caratulada "ALIMO S.A. S/AV. DE CONTRABANDO", y ORDENA que el mismo sea remitido a la Dirección General de Aduanas, a fin que sea ese despacho se sirva practicar la diligencia solicitada por las autoridades argentinas, y por último tramitada la diligencia, se proceda a devolver el expediente aludido a esta Superioridad para llevar a cabo los ulteriores trámites procesales pertinentes y aplicables a esta materia.

Notifíquese Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILAR
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO NÚMERO 4156/99 PROCEDENTE DEL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NO. 7 DE BURGOS, DENTRO DEL PROCESO DE ALIMENTOS PROPUESTO POR SANDRA SOFIA RINGRESSI GONZALEZ CONTRA SANDRO ALFREDO LUIGI RINGRESSI PRANDI. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Sub Directora General encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, exhorto proveniente del Juzgado de Primera Instancia No. 7 de Burgos, dentro del proceso de Alimentos propuesto por SANDRA SOFIA RINGRESSI GONZALEZ contra SANDRO ALFREDO LUIGI RINGRESSI PRANDI, con el propósito de notificar de la demanda y documentos presentados por Sandra Sofía RINGRESSI GONZÁLEZ, al demandado, para que un término de veinte días se apersone, mediante Procurador que le represente y Letrado que le defienda y conteste a la demanda, apercibiéndole que, de no verificarlo, será declarado en situación de rebeldía procesal, dándose por precluido el trámite de contestación a la demanda, siguiendo el pleito su curso.

La Sala Cuarta atendiendo el pedido del Juzgado de Primera Instancia de No. 7 de Burgos, debe hacer las siguientes observaciones:

a) Que entre la República de panamá y España no existe convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias.

b) La Sala en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial patrio sobre el cumplimiento y diligenciamiento de exhortos y cartas rogatorias en nuestro país y atendiendo al principio de reciprocidad entre los Estados, establecido por el Derecho Internacional, le corresponde conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento

y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentran debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requirente o en su ausencia, la acreditada en una nación amiga.

La autenticidad de los documentos se puede efectuar, ya sea por autoridad consular acreditada en el país requirente o por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización de los documentos públicos en el extranjero.

La legalidad del sello de apostilla se fundamenta en la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961.

d) Que lo pedido por autoridades requirentes no sea violatorio al orden interno.

El requisito de la autenticación del referido exhorto es cumplido por las autoridades españolas al contener la incorporación del sello de la apostilla (visible a foja 9), legalizando así los documentos remitidos por el tribunal de España, siendo este un requisito indispensable para declarar un exhorto o carta rogatoria viable, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la Ley Local del país que los otorgó, según lo establece la Ley No. 6 de 25 de junio de 1990, mediante la cual se aprueba el Convenio por el cual se suprime la exigencia de la legalización para los documentos públicos extranjeros que fue aprobado, tanto por el Estado requirente como por el Estado requerido.

Observa esta magistratura que lo solicitado en el presente suplicatorio consiste en la notificación del proceso de menor cuantía que instaura SANDRA SOFÍA RINGRESSI GONZÁLEZ contra de SANDRO LUIGI RINGRESSI PRANDI, que la dirección señalada en el presente exhorto, no describe en su totalidad la dirección ubicable del demandado, al respecto la norma procesal civil aplicable en nuestro ordenamiento establece que:

> "Artículo 654: El libelo de demanda deberá contener:
> 4. Nombre y apellido del demandado, si es persona natural, y en otro caso, su nombre y el de su representante.
>
> En ambos casos deberá expresarse la vecindad, calle y número donde tenga el demandado su habitación, oficina o lugar de negocio".

De lo anteriormente expuesto por la Sala de Negocios Generales no es permisible darle curso al exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia No. 7 de Burgos.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el exhorto librado por el Juzgado de Primera Instancia No. 7 de Burgos, dentro del proceso de Menor Cuantía incoado por SANDRA SOFÍA RINGRESSI GONZÁLEZ contra SANDRO ALFREDO LUIGI RINGRESSI PRANDI. Y ORDENA devolver el expediente contentivo de la presente documentación a la Cancillería Panameña para los ulteriores trámites diplomáticos a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**EL DECIMO NOVENO (19°) JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DENTRO DEL PROCESO "TERMINACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR NO PAGO DE RENTAS" PROPUESTO POR BANCO BICE CONTRA BURKETOWN INVESTMENT INC. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.**

**VISTOS:**

**A través de la nota A.J.N° 41/2000 suscrita por la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema, exhorto librado por el Décimo Noveno (19) Juzgado Civil de Santiago, República de Chile dentro del proceso "Terminación de Contrato de Arrendamiento por no pago de rentas" propuesto por Banco Bice contra Burketown Investment.**

**De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo."**

**La autoridad chilena solicita lo siguiente:**

> **"a fin de notificar la demanda y su proveído a Burketown Investment Inc., antes Sociedad Comercial e Industrial Faja Maisan S. A. y antes Sociedad Comercial e industrial Faja Maisan Limitada, representada por don Ricardo Soto Paredes, doña Lía de Jurado y don Celestino Araúz, con domicilio en ciudad de Panamá, República de Panamá".**

**Procede este ente Colegiado a verificar la existencia de convenios internacionales que rijan tanto a la nación chilena como a la panameña, relativos a la materia, pudiendo constatar que ambas Repúblicas son parte de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, de tal forma que analizaremos el suplicatorio a la luz de la citadas convencionales internacionales.**

**Dentro de este contexto, la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, preceptúa en su artículo IV que:**

> **"Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la recepción u obtención de pruebas o informes en el extranjero deberán contener la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, a saber:**
>
> **1. Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba solicita;**
>
> **2. Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y documento que fueren necesarios para su cumplimiento;**
>
> **3. Nombre y dirección tanto de las partes como de los testigos, peritos y demás personas intervinients y los datos indispensables para la recepción u obtención de la prueba;**
>
> **4. Informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obtención de la prueba;**
>
> **5. Descripción clara y precisa de los requisitos o procedimientos**

especiales que el órgano jurisdiccional requirente solicitara en relación con la recepción u obtención de la prueba sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 párrafo primero, y en el Artículo 6.

Al tenor del artículo IV de la Convención supra citada, la solicitud del despacho chileno ha cumplido parcialmente con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el extranjero, toda vez que la dirección suministrada no es amplia, siendo este un requisitos indispensables para la recepción u obtención de la prueba.

Esta Corporación estima que no es posible acceder al diligenciamiento del presente exhorto, toda vez que ha señalado reiteradamente que las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, siendo esta una regla de conducta obligatoria para los Estados que las suscriben y ratifican.

Cabe advertir, que la negativa a la presente solicitud no constituye un obstáculo para que la referida autoridad exhortante la presente nuevamente, una vez cumpla con los requisitos establecidos en la Convención Internacional invocada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Décimo Noveno (19) Juzgado Civil de Santiago, República de Chile dentro del proceso "Terminación de Contrato de Arrendamiento por no pago de rentas" propuesto por Banco Bice contra Burketown Investment Inc. y ORDENA que se remita el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para, su posterior retorno a las autoridades chilenas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N°.7, SECRETARÍA 14, DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, SOLICITA ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DENTRO DE LOS AUTOS CARATULOS "SATELITE SHIPING LIMITED C/DEL BENE SACIF S/ORDINARIO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A través de la nota A.J. N°. 432 suscrita por la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestra República, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema, exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N°.7 Secretaría 14 en los autos caratulados "SATELITE SHIPING LIMITED C/DEL BENE SACIF S/ORDINARIO".

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera el orden público y, en el evento de que no lo vulnera, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

LA PETICIÓN

A foja 17 del expediente se aprecia que la petición al tribunal competente panameño consiste en que se libre oficio al Registro de Buques de la República de Panamá, a efecto de determinar cuál es la nacionalidad del buque Alpha Sky y que modificaciones ha sufrido en torno a la misma y quien era el titular de dominio del buque al momento de la colisión ocurrida el cinco de noviembre de mil novecientos noventa y tres.

La solicitud obedece a que el juzgado exhortante acepto pruebas a producirse en el extranjero las cuales requieren de la asistencia o auxilio del Tribunal Panameño.

LOS REQUISITOS PARA EL CUMPLIMIENTO Y LA LEY APLICABLE

Dentro de los requisitos formales para estos negocios debemos tener en cuenta en primer término si el pais exhortante, en este caso Argentina, al igual que Panamá forman parte de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, así como del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatoris, cuyos textos son las leyes aplicables para estos casos, conjuntamente con nuestras normas de procedimiento judicial. Como quiera que ambos países son signatarios de la Convención, conviene en este punto señalar que las prácticas de las diligencias solicitadas sólo serán posibles si la petición una vez analizada no vulnera nuestro orden público.

La Sala observa que la documentación procedente de las autoridades argentinas se encuentra exenta del requisito de la legalización, toda vez que los documentos han sido remitidos a esta Sala por intermedio de la misión diplomática argentina acreditada en la República de Panamá. Aún así, se aprecia que los documentos anexos tienen impreso el sello del Tribunal de la causa.

El juez de la causa ha incluido un breve detalle de los hechos así como copia de la demanda y de la contestación de esta.

DECISIÓN DE LA SALA

Conforme al derecho internacional, el exhorto o comsiión rogatoria es parte de los medios típicos de ayuda procesal, que consisten en que los jueces del proceso o de la causa soliciten al juez extranjero que los asistan en una tramitación dentro de un negocio jurídico, ventilándose en el extranjero.

El Convenio de la Haya suscrito el 5 de octubre de 1961, en sus artículos 2 y 3 establece lo siguiente:

> "Artículo 2: Cada Estado contratante eximirá de la legalización a los documentos a los que se apliquen el presente convenio y que deberán ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido del presente convenio, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del pais en cuyo territorio el documento deba surtir efecto, certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente.
>
> Artículo 3: La única formalidad que podrá ser exigida para certificar la autenticidad de la firma, el carácter con que ha actuado el signatario del documento y, de corresponder, la identidad del sello o del timbre que lleva el documento será una acotación que deberá ser hecha por la autoridad competente del Estado en el cual se originó el documento de conformidad con lo previsto en el artículo 4.
>
> Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o las costumbres vigentes en el Estado en el que el documento deba surtir efecto, o

un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o eximan al documento del requisito de la legalización.

De los artículos antes transcritos se colige, que al no encontrarse Panamá dentro de las excepciones señaladas en el párrafo segundo artículo 3, resulta obligatorio el cumplimiento de la formalidad de la "acotación o apostilla".

La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias en su artículo VI suprime la exigencia de legalización "diplomática o consular", cuando los exhortos o cartas rogatorias se transmitan por vía consular diplomática o por intermedio de la autoridad central, no obstante, es evidente, por lo expresado en párrafos precedentes, que este artículo establece de forma alguna la exclusión de la formalidad exigida relativa al cumplimiento de la "apostilla", la cual se tiene que sustir en el Estado requirente.

Esta Corporación estima que no es posible acceder al diligenciamiento del presente exhorto, toda vez que ha señalado reiteradamente que las convenciones y tratados internacionales otorgan derechos e imponen obligaciones a las partes contratantes, siendo esta una regla de conducta obligatoria para los Estados que las suscriben y ratifican.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 7, Secretaría 14, de la República de Argentina, dentro de los autos caratulados "Satélite SHIPING LIMITED C/DEL BENE SACIF S/ORDINARIO".

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FABREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

INOCENTE HERRERA GONZÁLEZ INTERPONE DENUNCIA POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO EN CONTRA DEL LICENCIADO LUIS ALBERTO ARBOLEDA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Mediante Sentencia de 15 de febrero de 2,000 la Sala IV de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, SANCIONÓ al licenciado LUIS ALBERTO ARBOLEDA DUTARY, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal N° 8-235-2470 y número de registro de abogado 1872, según Acuerdo No.59 de 29 de mayo de 1989, con la suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional por un período de tres (3) meses, contados a partir de su notificación.

El licenciado DANILO MONTENEGRO A., Defensor de Oficio designado para la representación del licenciado LUIS ALBERTO ARBOLEDA DUTARY, como quiera que su paradero es desconocido, se notificó personalmente, de la sentencia dictada, el día 16 de febrero del año en curso. A través del escrito legible a foja 81, el abogado del demandado interpuso recurso de reconsideración contra la sentencia dictada en el proceso subjudice.

Recibido el escrito el día 21 de febrero del año que decurre, el recurso

se interpuso dentro del término concedido por el artículo 36 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, para tal fin.

El licenciado MONTENEGRO basa el recurso de reconsideración, en los siguientes hechos:

> "... Solicitamos con todo respeto, a los Honorables Magistrados que componen la Sala, que se sustituya la sanción impuesta por una amonestación privada, tal como lo contempla el numeral 1 del artículo 20 de la antes citada Ley No.9.
>
> Esta solicitud de reconsideración las fundamentamos (sic) principalmente, en el hecho de que es la primera vez que nuestro patrocinado se le sanciona por falta a la ética y responsabilidad profesional, razón suficiente para que no se aplique una sanción tan grave y severa como es la suspensión para ejercer la profesión. Queremos señalar que en el caso anterior adelantado por esa superioridad el licenciado LUIS ALBERTO ARBOLEDA DUTARY fue relevado de los cargos que le fueron atribuidos, (sic) por lo cual creemos que ni siquiera como marco de referencia debe tenerse para señalar que tiene antecedentes a este respecto; en nuestro concepto ello podría afectar la presunción de inocencia ...".

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Como indicamos anteriormente, la sanción impuesta, por esta Superioridad al licenciado LUIS A. ARBOLEDA DUTARY, consiste en la suspensión del ejercicio de la abogacía por un período de tres (3) meses. El apoderado judicial del demandado ha solicitado a la Sala la sustitución de la pena impuesta por la contemplada en el numeral 1 del artículo 20 de la Ley 9 de 1984, reformada por la Ley 8 de 1993; es decir, la amonestación privada del licenciado ARBOLEDA DUTARY.

La ausencia injustificada, mantenida por el demandado en todo el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y esta Superioridad, además de constituir un indicio en su contra, no le ha permitido explicar y justificar su comportamiento, sobre los hechos denunciados por el quejoso, vulnerando el deber que debe mantener como abogado en ejercicio; así como también, el que tiene como auxiliar del Órgano Judicial, conforme al Código de Ética del Abogado y al Código Judicial de La República de Panamá, en su artículo 215:

> "Artículo 215: Son deberes de las partes y sus apoderados: ...
> ... 5. Concurrir al despacho del Magistrado o Juez siempre que éste los cite y atender sus órdenes e instrucciones para el trámite de audiencias y diligencias; ..."

Por otro lado, con arreglo al artículo 453 del Código Judicial, las sanciones a aplicar deben ser impuestas en razón de la gravedad de la falta cometida. En este caso, el demandado, por actos propios imputables a él, no ha permitido que la Sala considere los descargos que pudo haber realizado oportunamente y analizar las atenuantes que pudieran existir. Por tanto, debemos valorar los hechos, basándonos en las aportaciones del quejoso y la investigación realizada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, contenidos en el expediente.

Lo arriba expuesto, ha impedido considerar el beneficio que implicaría una amonestación privada como sanción aplicable al licenciado ARBOLEDA DUTARY.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA LA RECONSIDERACIÓN interpuesta por el Licenciado DANILO MONTENEGRO, apoderado judicial del Licenciado LUIS ALBERTO ARBOLEDA DUTARY contra la

Sentencia de 15 de febrero del año en curso, dictada en el proceso que por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, propuso el señor INOCENTE HERRERA GONZÁLEZ contra LUIS ARBOLEDA DUTARY y la CONFIRMA en todas sus partes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DENTRO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DOMINGO BATISTA, CONTRA LA LICENCIADA NIVIA ABREGO, POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a esta Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia el recurso de reconsideración, propuesto por la licenciada Nivia Angela Abrego Muñoz, quien actúa en su nombre y representación, contra la decisión contenida en la Sentencia de 21 de diciembre de 1999, la cual la sanciona con la suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional por un período de diez (10) meses.

Los puntos más relevantes en los que se apoya el escrito de reconsideración se puede apreciar diafanamente en los hechos segundo, tercero, quinto del referido instrumento de impugnación, que a continuación transcribimos:

> SEGUNDO: Se ha omitido el conocimiento de los términos de la prescripción llevando a cabo un proceso disciplinario que a todas luces está viciado de nulidad, toda vez que se han violado los artículos 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 y 1973 del Código judicial. So pretermitió el artículo 2297 numerales 3 y 5 al no haberse notificado al imputado a su defensor el auto de enjuiciamiento, y de mi defensor en este caso imputado a su defensor el auto de enjuiciamiento, y de mi defensor en este caso el Doctor Manuel Bermúdez, a quien ni si siquiera se le permitió ver el expediente, ni intervenir en la audiencia pública motivo por el cual tuve que asumir mi propia defensa. Igualmente el numeral 5 el cual establece el no haber notificado los autos y providencias que acogen o niegan pruebas es una causal de nulidad. En el caso que nos ocupa no se nos notifico dicha resolución y se nos rechazaron de plano las pruebas. Nuestro Código Judicial en su artículo 2298 establece: "Se entiende siempre sancionados con nulidad los actos cumplidos con inobservancia de las disposiciones concernientes a:
>
> 1. "La no participación del ministerio público en el proceso y en los actos procesales que lo requieran de acuerdo con la ley". Y en la audiencia que se celebró el día 18 de diciembre de 1999, del presente caso, no estuvo el representante del ministerio público que en este caso debió ser la procuradora de la administración o un representante suyo, como lo ordena el procedimiento según el artículo 34 de la ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la ley 8 de 16 de abril de 1993.
>
> TERCERO: Consideramos que se nos conculcaron algunas garantías constitucionales, toda vez que a nuestro modo de ver se violaron los artículos 22, 31, 32, 35 de la Constitución Nacional, el no permitir

> la aportación ni la práctica de las pruebas, que sin lugar a dudas son de superlativa importancia a efectos de demostrar la inocencia de la suscrita, es conculcar dichas garantías constitucionales, que desde luego hace factible que vuestra Sala Reconsidere dicha decisión.
>
> QUINTO: El artículo 19 del Código de ética y responsabilidad del abogado de dicha ley, hace admisible el pacto o cuota litis cuando el abogado lo celebra por escrito sobre bases justas. Sin embargo la norma peca de ser subjetiva al afirmar "sobre bases justas", toda vez que es un juicio valorativo y que al momento de celebrar el contrato para iniciar un proceso donde no había indicio de cuál fuera el resultado, dicho contrato era justo para las partes, pero cuando el proceso ya estaba definido beneficiando a la parte contratante de los servicios profesionales, pudo considerarlo injusto por la erogación que debía hacer.

Una vez transcrita la parte medular del reclamo presentado por el recurrente, es menester pasar a analizar lo resuelto por la autoridad que conoció del proceso disciplinario incoada en contra de la letrada.

La Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia considero que en primera instancia las pruebas aducidas no le fueron admitidas durante el curso regular del proceso, porque resultaron improcedentes. En segundo lugar, se encuentran aquellas pruebas que se aducen por primera vez en el proceso. En relación a esto el artículo 32 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley N° 8 de 16 de abril de 1993, establece que durante el debate oral se practicarán las pruebas presentadas por las partes. Es el criterio de la Sala que para poder practicar las pruebas durante la audiencia oral, éstas han tenido que ser aducidas con anterioridad al debate a fin de que el tribunal pueda ejercer su criterio sobre su procedencia y decidir cúales tendrá a bien aceptar. Es por ello que este segundo grupo de pruebas debe rechazar de plano, dado que fueron aducidas fuera de la instancia procesal que corresponde.

Observó la Sala que la licenciada Nivia Abrego, al haber retenido los cheques girados por la compañía Aseguradora Mundial y haberlos cambiado en el Banco Panameño de la Vivienda (BANVIVIENDA) sin el conocimiento de los poderdantes, ha infringido los literales ch y e del artículo 34 de la Ley que regula el ejercicio de la Abogacía en Panamá, los cuales establecen lo siguiente:

> Artículo 34: Incurre en falta a la ética el abogado que:
> ...
> ch. Retenga dineros, bienes o documentos suministrados en relación con las gestiones realizadas;
>
> e. No rinda a su cliente las cuentas de la gestión o manejo de bienes;

Con relación a la celebración de un contrato poder con los denunciantes, en el cual se estipula la participación a título de cuota-litis de la licenciada Nivia Abrego en un sesenta por ciento (60%) de la cantidad cobrada en los cheques correspondientes a las pólizas de seguros pagadas por Aseguradora Mundial, la Sala encuentra que la denunciada ha infringido también el artículo 19 de la Ley que regula el ejercicio de la Abogacía en Panamá, el cual establece lo siguiente:

> "Artículo 19: Es admisible el Pacto de cuota-litis cuando el abogado lo celebra por escrito, sobre bases justas siempre que se observen las reglas siguientes:
>
> a. La participación del abogado nunca será mayor que la del cliente;

Al ponderar la Sala los argumentos aportados por la parte recurrente contra la resolución dictada por la Sala Negocios Generales fechada al 21 de diciembre

de 1999, ésta manifiesta que se reitera en el sentido que no es posible pasar por alto faltas a la ética tan graves como las cometidas por la recurrente específicamente lo concerniente a los reparos que hemos transcrito en líneas anteriores, una vez que esta Magistratura al examinar detalladamente cada una de las piezas probatorias que componen el expediente de marras, manifiesta con suficiencia que efectivamente, cada una de ellas fue debidamente revisada y valorada por esta Superioridad en su debido momento a lo largo del presente y extenso cuaderno disciplinario.

Tanto es así que, de acuerdo al hecho segundo y quinto del escrito de alzada presentado por la jurista Abrego Muñoz su propio en nombre, "no estuvo el representante del ministerio público" este argumento obliga a esta Sala expresar lo siguiente: A) Que el recurrente desconoce que el artículo 34 de la citada ley fue declarado inconstitucional en el fallo 30 de octubre de 1996. En este mismo orden de ideas señalaremos que un contrato sobre "bases justas" es un contrato donde ambas partes se benefician por partes iguales siguiendo un sentido de honestidad y honradez, por lo que basados en todo lo anteriormente expuesto, se desestima pues estos cargos.

Por lo tanto y con fundamento en lo señalado, esta Sala considera que al recurrente no le asiste la razón puesto que no ha aportado ningún elemento novedoso que requiera reconsideración por parte de esta Superioridad.

De esta manera, se conceptúa que esta Sala, han manifestado acertadamente todos y cada uno de los argumentos necesarios, tanto de hecho como de derecho, para establecer que lo actuado por la parte impugnante de la Sentencia que se aduce como violatoria dentro de la sanción impuesta a la abogada Abrego Muñoz ampliamente referida en la presente resolución; lleva a esta colegiatura a concluir que, efectivamente, ha de confirmarse en todas sus partes la Sentencia de 21 de diciembre de 1999 dictada por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA LA RECONSIDERACIÓN SOLICITADA Y MANTIENE EN TODAS SUS PARTES la Sentencia de 21 de diciembre de 1999 proferida por esta Sala, donde se le sanciona con la suspensión del ejercicio de la abogacía en el territorio nacional por un período de diez (10) meses, contados a partir de la notificación de la presente resolución a la licenciada NIVIA ANGELA ABREGO MUÑOZ, mujer, panameña, mayor de edad, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal No. PE-12-1274, con domicilio en Edificio Torres de San Francisco, Apto. 12-B, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes y en base a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley No.9 de 18 de abril de 1984 reformada por la Ley No.8 de 16 de abril de 1993.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

LAURA JARAMILLO DE BARRIO INTERPONE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA EL LICENCIADO LUCIO BERNAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá ha ingresado a esta Corporación de Justicia, el expediente que, por Faltas a la Ética y Responsabilidad del Abogado, se llevó en dicha instancia contra el licenciado LUCIO BERNAL, por denuncia formal presentada por la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformado por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, resolvió mediante acuerdo de 22 de junio de 1999, solicitar a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que decrete el llamamiento a juicio de LUCIO BERNAL HERAZO, con cédula de identidad personal No.8-199-1369 y registro No.805, por retener dineros destinados a su gestión, utilizarlos en su beneficio personal y no rendir cuentas de su gestión, violando los literales ch, d y e del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado (v.fj. 14 y 15).

A foja 4 del expediente, consta el escrito de denuncia presentado por la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el día 23 de junio de 1998. Señala la denunciante que se vio en la necesidad de contratar los servicios profesionales de un abogado, para promover un juicio de lanzamiento contra dos inquilinos de un inmueble de su propiedad.

Al solicitar orientación a sus familiares, estos le indicaron que el señor LEANDRO GUEVARA, empleado de la Financiera Nacional, les recomendó al licenciado LUCIO BERNAL, quien podía atender el caso.

Concertada una cita profesional con el licenciado Bernal, la denunciante afirma que en dicha reunión acordaron el pago de B/.250.00; la señora JARAMILLO DE BARRIO, abonó la suma de B/.125.00, ese día, a solicitud del licenciado Bernal, quien le indicó, que al día siguiente le traería un poder. La señora JARAMILLO DE BARRIO expresa que al día siguiente se reunió, nuevamente, con el licenciado Bernal, quien le presentó un recibo por la suma de B/.125.00 (v.fj.6) y no lo acordado el día anterior; es decir, no le presentó poder alguno.

Concluye la denunciante que el licenciado LUCIO BERNAL le proporcionó un número de teléfono donde podía localizarlo, en donde le ha dejado, en repetidas ocasiones, mensajes, sin que hasta la fecha de interposición de la presente denuncia, le hubiese contestado. La señora JARAMILLO DE BARRIO manifiesta que ha tratado de localizar al demandado a través del señor LEANDRO GUEVARA, quien le informa que no ha vuelto a ver al demandado.

Estos hechos dieron motivo, a la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO, para solicitar la investigación de la conducta por faltas a la ética y responsabilidad del abogado Lucio Bernal ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados.

Acogida la denuncia por el Tribunal de Honor, mediante providencia de 1° de julio de 1998, se dispone, entre otras cosas, abrir la investigación a efecto de comprobar los hechos denunciados, la calidad profesional del denunciado y su relación con los hechos atribuídos a su conducta; correr traslado de la denuncia al licenciado LUCIO BERNAL para que haga los descargos y alegaciones que estime; y, practicar las pruebas documentales, testimoniales y periciales que sean necesarias.

Mediante Nota de 1° de julio de 1998 el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados solicitó a esta Sala, certificación sobre la condición de abogado para ejercer la profesión, el tiempo de ejercerla y los antecedentes disciplinarios del licenciado LUCIO BERNAL. Dicha solicitud fue contestada mediante Certificación calendada 7 de julio de 1998, expedida por el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos H. Cuestas C.

Por otro lado, a foja 13 del expediente, encontramos un informe secretarial en donde se hace constar que el día 1° de septiembre de 1998, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados envió nota a la oficina del licenciado Bernal para que realizara sus descargos. Además, indica el informe, que se hicieron dos llamadas telefónicas a las oficinas del licenciado Bernal para preguntar sobre la notificación enviada y se le comunicó a la secretaria que aún no se había recibido la nota de descargos del licenciado Bernal. El informe agrega que, en el mes de diciembre de 1998, la secretaria llamó a las oficinas del licenciado Bernal, respondiendo una persona, que dijo llamarse Rocío, indicando que ese número telefónico no pertenecía a las oficinas del licenciado Bernal, sino, a una nueva empresa.

Luego de las investigaciones realizadas, y tomando en consideración que: "... a) Se certificó la condición de abogado de LUCIO BERNAL (foja 10 y 11); b) El Licenciado Bernal jamás presentó su escrito de descargos ni aportó pruebas (foja 13) ..."; el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados decidió, como señalamos anteriormente, solicitar a esta Corporación el llamamiento a juicio del licenciado LUCIO BERNAL HERAZO.

Recibido el negocio en esta Corporación de Justicia, mediante providencia de 17 de mayo de 1999 se ordenó correr traslado del proceso instaurado, al demandado, por un término de cinco (5) días, para que presentara los escritos de excepciones y de oposición a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

A foja 21, encontramos un informe del notificador de la sala, fechado 2 de junio de 1999, por el cual hace del conocimiento del Tribunal que han sido infructuosos los esfuerzos realizados para localizar al licenciado LUCIO BERNAL y cumplir con lo ordenado en la providencia de 17 de mayo de 1999. En el informe secretarial fechado 4 de junio de 1999, se eleva al conocimiento del Magistrado Sustanciador, el estado del proceso, quien, mediante providencia de 10 de junio de 1999, ordena el emplazamiento del demandado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984.

Cumplido con lo ordenado y vencido el término concedido por la ley para que comparezca el demandado, cuyo paradero se desconoce, se deja constancia de las diligencias realizadas, a través de informe secretarial legible a foja 25 del expediente. Luego de considerado el informe secretarial, el Magistrado Sustanciador, ordenó la designación de un defensor de ausente que representara, en todo trámite del juzgamiento, al licenciado LUCIO BERNAL.

Para dar cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 6 de agosto de 1999, fue designada la licenciada MIREYA RODRÍGUEZ MONTEZA, Defensora de Oficio Distrital, como abogada del demandado, a quien se le corrió traslado de los hechos denunciados contra su representado; de lo cual, se deja constancia a foja 20 del expediente. La abogada del demandado dejó vencer el término concedido para presentar los escritos de excepciones y de oposición correspondientes, sin que esta Colegiatura pudiera escuchar la defensa del demandado.

Leída y estudiadas las piezas procesales que conforman el presente juicio, debemos expresar las siguientes consideraciones. La señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO solicitó los servicios profesionales del licenciado Lucio Bernal para gestionar en debida forma un proceso de lanzamiento contra un inquilino en un inmueble de su propiedad.

Luego de sostenida la primera reunión con el abogado Bernal, éste le solicitó y recibió, un abono a sus honorarios profesionales, sin haber sido constituído formalmente como representante de la denunciante. La querellante pensó que el recibo por la suma de B/.125.00, extendido por el licenciado Bernal, constituía el mandato que debía otorgarse para que quedara conformada la relación cliente-abogado y la representara ante los tribunales correspondientes; como así habían acordado el día anterior. Un desconocimiento razonable al no ser ella abogada. (v.fj.4).

Transcurrido un tiempo razonable, la querellante realizó los esfuerzos necesarios para localizar al licenciado LUCIO BERNAL HERAZO, quien nunca respondió a los mensajes dejados en sus oficinas profesionales. Esta conducta, es la que ha mantenido el licenciado Bernal a través de todo el proceso que nos ocupa, al punto de que esta Sala de la Corte Suprema de Justicia ha debido designar un defensor de oficio para representar al demandado en el negocio subjudice.

Es importante resaltar la situación descrita en el párrafo anterior, toda vez que el demandado ha dejado pasar la oportunidad que la ley le brinda para hacer sus descargos, interponer excepciones u oposiciones a los hechos denunciados por la querellante; imposibilitando a esta Sala conocer los hechos desde la perspectiva del demandado. Ahora bien, la conducta procesal del abogado constituye un indicio en su contra y no obstruye permanentemente el proceso, puesto que existen los mecanismos legales que permiten la continuidad de las investigaciones.

Vemos entonces, que la conducta del licenciado Lucio Bernal denunciada por la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO, contraviene los literales c. y ch. del artículo 10; así como los ch., d. y e. del artículo 34, ambos del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado. En consecuencia, en opinión de la Sala, la investigación llevada contra el licenciado LUCIO BERNAL HERAZO, debe ser elevada a juicio, tal cual lo recomienda el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados al tenor de lo establecido por la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993 y el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA ELEVAR A JUICIO LAS INVESTIGACIONES seguidas al licenciado LUCIO BERNAL HERAZO, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.8-199-1369, de paradero desconocido, conforme a las normas establecidas en la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, en base a la denuncia por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado interpuesta por la señora LAURA JARAMILLO DE BARRIO, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.3-18-345, domicilio en Calle Novena, Parque Lefevre, #71, ciudad de Panamá; y, ORDENA, a la Secretaría de la Sala, señalar día y hora para la celebración de la audiencia correspondiente, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretarial General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL WILSON MATIAS, JUAN BAUTISTA PÉREZ R. , SERGIO AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y SILVIO C. CHAVERRA G. CONTRA EL LICENCIADO MANUEL GONZÁLEZ C., POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, conoce de la denuncia por faltas a la ética judicial y responsabilidad del abogado, interpuesta por los señores MIGUEL ÁNGEL WILSON MATÍAS, JUAN BAUTISTA PÉREZ R., SERGIO AGUSTÍN RODRÍGUEZ Y SILVIO C. CHAVERRA G. contra el licenciado

Manuel González.

A estos efectos se observa a fojas 86-97 que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados solicita a esta Corporación que se decrete la citación a juicio del Licenciado MANUEL GONZÁLEZ CASTILLO, por la infracción del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado literal b.

Esta Superioridad estima conveniente analizar cada una de las denuncias presentadas en contra del licenciado MANUEL GONZÁLEZ, siendo estas las siguientes:

El señor Miguel Ángel Wilson Matías el día 29 de septiembre de 1996 presentó denuncia en contra del licenciado Manuel González,señalando en la misma, que lo había contratado para que le representara ya que había sido condenado por la DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA ,a pagar a la otra parte, los daños descritos en la resolución No. 939 de 22 de marzo de 1996 por colisionar e interceptar el paso a un vehículo. El señor Wilson indica que la otra parte se rehusaba a aceptar el pago y que por este hecho se acercó al Licenciado González, quien aceptó representarlo y le manifestó que le cobraría doscientos veinticinco balboas (B/225.00) , en concepto de honorarios profesionales , motivo por el cual le entregó dicha suma el 15 de octubre de 1996; el denunciante continúa su relato señalando que el Licenciado González le solicitó seiscientos balboas (B/.600.00) más, que según él había que depositar en el juzgado como fianza, estos le fueron entregados el 26 de octubre de 1996,señala el denunciante que nunca recibió constancia del depósito de la fianza, el 20 de noviembre del mismo año el Licenciado González, le señala que va a ser necesario practicar un peritaje y que el costo del mismo sería de cincuenta balboas (B/.50.00) procediendo así, el denunciante a entregarle dicha suma de dinero.

El señor Wilson aportó fotocopias de los tres recibos que le expidiera el Licenciado González , por las sumas señaladas visibles a foja 50 y de la Resolución No. 932 de 22 de marzo de 1996, por la cual el Juzgado Segundo de Tránsito del Distrito de Panamá le condena a pagar multa de veinticinco balboas (B/.25.00) por colisionar el automóvil del señor Gilberto Antonio Cortez Domínguez, más al pago de los daños causados al vehículo .

El veintiuno (21) de octubre de 1997 el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, puso en conocimiento al Licenciado González, de la denuncia en su contra y le solicitó el respectivo informe de conducta con las pruebas que tuviese a bien presentar en su defensa, sin embargo, no se recibió respuesta a pesar de que la comunicación fue recibida el 22 de octubre de 1997 según consta en el informe secretarial preparado por la secretaria del Colegio Nacional de Abogados, señora Amarilis de Callender, al licenciado Luis Carlos Reyes miembro Sustanciador del Tribunal de Honor que señala:

> "Licenciado Luis Carlos Reyes, por este medio le informo Que en este caso No. 489, se le remitió nota para que hiciera sus descargos al Licenciado MANUEL GONZÁLEZ CASTILLO, al momento de entregar la documentación el día miércoles 22 de octubre de 1997, alrededor de las 11:00 de la mañana, el mensajero le comunicó que tenía que firmar el recibido con su nombre y el Licenciado GONZÁLEZ no quiso, únicamente colocó la palabra RECIBIDO. En vista de que desde esa fecha, el abogado na ha dado respuesta alguna con relación a este caso, es por ello que considero que se debe proceder a la evolución de la misma.
>
> Panamá, 21 de agosto de 1998.
>
> Sra. Amarilis de Callender y
> Sr. Feliciano González"

El 24 de junio de 1998 el señor JUAN BAUTISTA PÉREZ R. presentó denuncia

en contra del Licenciado González, señalando en la misma que contrató los servicios profesionales del Licenciado GONZÁLEZ para que representara a su hermano Inés Pérez R. en un caso de supuesta violación carnal. El demandante señala que el domingo 28 de mayo de 1995 entregó al licenciado GONZÁLEZ, la suma de dos mil balboas (B/.2000.00) en efectivo, en presencia de Seferino Ureña P., con cédula 6-41-1395, el licenciado González aseguro que el lunes 29 de mayo iniciaría la defensa del señor Inés Pérez R.; ese mismo día el licenciado GONZÁLEZ se comunicó telefónicamente con el señor Ureña y le manifestó que necesitaba trescientos cincuenta balboas (B/.350.00) , para dos (2) "vistas fiscales"; esta suma le fue entregada al Licenciado González, por el señor Seferino Ureña, el Licenciado González luego pidió la suma de mil balboas (B/.1000.00) más, la cual fue también entregada. El señor Pérez asevera que el Licenciado González, nunca le dio recibo alguno y que pudo constatar que no inició la defensa de su hermano y que por lo antes expuesto se vio obligado a contratar los servicios profesionales de otro abogado. El denunciante manifestó, que dialogó con el licenciado González y que este aceptó devolverle la mitad del dinero que le había sido abonado, entregandole así, trescientos balboas (B/.300.00) continua su relato señalando, que el licenciado González le dijo que regresara para continuar con los pagos más sin embargo, no continuó haciendo los mismos pese a su insistencia.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados envió nota al Licenciado González, para que realizara sus descargos sin embargo, el Licenciado González no atendió los requerimientos de dicho Tribunal.

La tercera denuncia en contra del Licenciado González fue interpuesta por el señor Sergio Agustín Rodríguez el 25 de enero de 1999, en esta señala el denunciante que requirió los servicios profesionales del Licenciado González para que impugnase su destitución del servicio marítimo; continua relatando el denunciante que el Licenciado González le manifestó que por la suma de trescientos balboas (B/.300.00) le solucionaría el problema, sin embargo manifiesta el denunciante que el licenciado González tardó un (1) mes en enviar los documentos al Ministerio de Gobierno y Justicia y que le señaló que debido a su insistencia no se comunicó con quién debía hacerlo y que por ello el fallo le fue adverso, después de transcurrido este hecho el Licenciado González le solicitó cien balboas (B/.100.00) más, para presentar los documentos en la Corte Suprema de Justicia ; en esta oportunidad los documentos fueron presentados ante la Procuradora de la Administración Licenciada Alma Montenegro de Fletcher y no a la Corte Suprema de Justicia como lo había manifestado el Licenciado González.

Con la denuncia en contra del Licenciado González, el señor Sergio Agustín Rodríguez adjuntó los siguientes documentos: poder a favor del Licenciado MANUEL GONZÁLEZ, queja presentada por el Licenciado GONZÁLEZ en nombre y representación del señor Sergio Agustín Rodríguez a la licenciada Alma Montenegro de Fletcher, solicitud de reconsideración de la destitución del poderdante como Sargento Primero Placa No. 1780 ante el Señor Ministro de Gobierno y Justicia, fotocopia de los recibos expedidos por el Licenciado González, en razón de los abonos hechos por el señor Rodríguez.

El Tribunal de Honor del Colegio de Abogados abrió la investigación correspondiente a efecto de comprobar los hechos denunciados y así mediante resolución de 3 de febrero de 1999 corrió traslado al Licenciado González para que realizara sus descargos, esta comunicación fue recibida el 18 de marzo de 1999 por su secretaria y no presentó sus descargos.

El 1 de febrero de 1999 , se presenta otra denuncia en el Colegio Nacional de Abogados en contra del Licenciado González, esta fue interpuesta por el señor Silvio Ciriaco Chávez, quien manifestó que contrató los servicios profesionales del Licenciado González para que lo representara en un caso de Usurpación de funciones públicas e intento de secuestro a un menor de edad . El señor Ciriaco señala que le hizo dos (2) abonos al Licenciado González, el primero de cien balboas (B/.100.00) y el segundo de cincuenta balboas (B/.50.00), para los tramites pertinentes.

El señor Ciriaco Chaverra Gálvez con su denuncia presentó las siguientes pruebas:

> recibo No. 026 por ciento cincuenta balboas (B/.150.00) con fecha 22 de julio de 1998 a favor del denunciante en concepto de honorarios profesionales con firma que dice Manuel González C , fotocopia del poder otorgado por el denunciante al Licenciado MANUEL GONZÁLEZ C., para que en su nombre y representación interpusiera acusación particular contra Abraham Pérez, César Chaw y Rigoberto Madrid por el delito de tentativa de secuestro, firmado por el denunciante y supuestamente aceptado por el denunciado, pero sin su firma, aunque fue extendido en papel membretado con el nombre del Licenciado GONZÁLEZ y la dirección de sus oficinas.

En esta ocasión también el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados corrió traslado al Licenciado González de la denuncia interpuesta en su contra mediante notas de 10 de febrero de 1999 y de 26 de abril de 1999, recibida la primera el día siguiente por Liberta Pinzón secretaria del Licenciado González y la segunda por el propio interesado el 14 de mayo de 1999 , sin embargo el Licenciado González, no compareció al Tribunal de Honor para explicar su conducta y asumir su defensa en cuanto a los cargos que le formuló el denunciante Silvio C. Chaverra según consta a foja 95.

Mediante providencia de quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), esta Corporación de Justicia ordenó darle traslado del expediente al denunciado conforme al artículo 28 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, con el fin de que el Licenciado MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO presentara los escritos de excepciones y de oposición correspondientes a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor.

El licenciado MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO presentó en tiempo oportuno el escrito de oposición a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el cual en su parte medular señala lo siguiente:

> "... procediendo a llamar al señor MIGUEL ÁNGEL WILSON MATÍAS, a su residencia teléfono No. 2-6665979, para entregar le sus B/.400.00 (CUATROCIENTOS BALBOAS 00/1000), pero nunca volví a verlo. El día 1 de mayo de 1997 me mude del Edificio J.J. Vallarino a mis nuevas oficinas; pero en donde este, estoy consciente y anuente a darle sus B/.400.00 (CUATROCIENTOS BALBOAS 00/100), pues son de su propiedad.
>
> ... no he recibido, ni he pagado dinero alguno al señor JUAN BAUTISTA PÉREZ R.
>
> El señor SILVIO CIRIACO CHAVERRA GÁLVEZ, casi me golpea cuando yo me negué a extorsionar a sus denunciados y me exigió la devolución de los B/.150.00 (CIENTO CINCUETA BALBOAS 00/100), que me había dado y que me gané en demasía.
>
> ... llamé a mi oficina al ex-sargento SERGIO A. RODRÍGUEZ y le expliqué lo siguiente:
>
> PRIMERO: No puedo solicitar tu jubilación con el 70% del salario, pues no cumples con lo que establece la Ley 20 de las fenecidas Fuerzas de Defensas:
>
> a) Tienes menos de 20 (veinte ) años de servicio.
>
> SEGUNDO: Al agotarse la vía gubernativa podemos ir a la Corte Suprema de Justicia e interponer el recurso de plena jurisdicción ante la Sala Tercera; pero, yo cobro por el recurso la suma de

B/.500.00 (QUINIENTOS BALBOAS 00/100) Solo tenemos cinco (5) días y el recurso hay que sustentarlo."

Tomando en consideración los hechos anteriores, la Sala pasa al análisis del contenido de la denuncia en los siguientes términos:

Al analizar la actuación del Licenciado MANUEL GONZÁLEZ, frente a las disposiciones del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, es evidente la omisión de gestiones en cada uno de los procesos para los cuales fue contratado de acuerdo a lo esbozado por los denunciantes en párrafos precedentes y a las pruebas que constan en el expediente visibles a fojas 5-74.

Resulta un hecho cierto, que el licenciado González, recibió las aludidas sumas de dinero en concepto de abono a sus honorarios profesionales en los procesos de : colisión de tránsito, violación carnal, destitución de cargo público y usurpación de funciones publicas e intento de secuestro de un menor de edad para los cuales los denunciantes le otorgaron poder y que sus actuaciones no estuvieron acorde con lo establecido en el Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, ya que este en su artículos 5, 10 y 34 preceptúa lo siguiente:

"Artículo5. El abogado debe actuar con honradez y buena fe, no ha de aconsejar, tolerar o valerse de actos fraudulentos sin fundamento real, afirmar negar con falsedad"

Artículo 10. Respecto de la prestación de servicios Profesionales el abogado debe:

a. Convenir una remuneración justa por su servicio Profesional;

b. Abstenerse de retener, concluido el servicio prestado, los dineros, bienes o documentos suministrados en relación con las gestiones realizadas;

c. Utilizar los dineros aportados por el cliente sólo en beneficio de la causa de éste;

ch. Rendir oportunamente al cliente las cuentas de la gestión y manejo de bienes;

d. Otorgar recibo de pago de honorarios o gastos.

Artículo 34.Incunrre en falta a la ética el abogado que:

b. Demore maliciosamente la iniciación o prosecución de las gestiones que le fueren encomendadas"

Esta Superioridad después de haber realizado un estudio del caso in examine encuentra suficientes elementos de juicio que dan lugar a que, se acceda la solicitud impetrada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, consistente en que se llame a juicio al Licenciado Manuel González.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, del Licenciado MANUEL GONZÁLEZ, varón, panameño, abogado en ejercicio , con cédula de identidad personal No. 9-53-989 con oficinas profesionales en la Avenida Cuba, Edificio Policentro, Cuarto Piso, Local No. 3, con fundamento en la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la denuncia interpuesta por los señores: Miguel Ángel Wilson Matías, Juan Bautista Pérez R, Sergio Agustín Rodríguez y Silvio C. Chaverra, por faltas a la ética y la responsabilidad profesional del abogado y , establece, que en fecha posterior se fijará el día y hora de la celebración del debate oral ,en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

Notifiquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CATALINA DE YANIS INTERPONE DENUNCIA ANTE EL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD DEL ABOGADO CONTRA LA LICENCIADA CINTIA OLMEDO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá ha ingresado a esta Corporación de Justicia, el expediente, que por Faltas a la Ética y Responsabilidad del Abogado, se llevó en dicha instancia contra la Lcda. CINTIA OLMEDO, luego de que mediara denuncia formal por la señora CATALINA DE YANIS.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, resolvió mediante acuerdo de 16 de enero de 1996, solicitar a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia que decrete el llamamiento a juicio de CINTIA DAMARIS OLMEDO R., con cédula de identidad personal No.8-158-393 y registro No.890, por retener dineros destinados a su gestión, utilizarlos en su beneficio personal y no rendir cuentas de su gestión, violando los literales ch, d y e del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado (v.fj. 12 y 13).

ANTECEDENTES

A foja 2 del expediente, enviado por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, encontramos la denuncia presentada por la señora CATALINA DE YANIS. La querellante fundamentó la misma en los siguientes hechos:

> "Primero: en el año de 1989, solicité los servicios profesionales de la Lcda. CINTIA OLMEDO, para que ella en mi nombre y representación, interpusiera un juicio para cobrarle cierta suma de dinero a la Señora Fredelinda Duarte.
>
> Segundo: La Lcda. Olmedo me solicitó la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.450.00) para interponer la fianza de garantía en el juicio que debía iniciar, suma que le entregué y por lo cual ella me extendió el Recibo No.45 de 1 de noviembre de 1989.
>
> Tercero: La Lcda. Olmedo no interpuso juicio alguno, es decir, dejó mi caso sin atender y no me devolvió la suma de dinero, a pesar de mis múltiples requerimientos en tal sentido."

La demandante adjuntó a su escrito de queja, fotocopia de recibos por las sumas de B/.5.00, B/.420.00 y B/.25.00, girados por la Lcda. OLMEDO, en razón de un adelanto por los servicios profesionales que le prestaría.

Acogida la denuncia por el Tribunal de Honor, mediante providencia de 12 de marzo de 1996, se dispone, entre otras cosas, abrir la investigación a efecto de comprobar los hechos denunciados, la calidad profesional del denunciado y su relación con los hechos atribuídos a su conducta; correr traslado de la denuncia a la Lcda. CINTIA OLMEDO para que haga los descargos y alegaciones que estime;

y, practicar las pruebas documentales, testimoniales y periciales que sean necesarias.

Mediante Nota de 14 de marzo de 1996 el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados solicitó, a esta Sala, certificación sobre la condición de abogado para ejercer la profesión, el tiempo de ejercerla y los antecedentes disciplinarios de la Licenciada CINTIA OLMEDO. Dicha solicitud fue contestada mediante Certificación calendada 22 de marzo de 1996, expedida por el Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Carlos H. Cuestas C.

Por otro lado, a foja 8 del expediente, encontramos un Informe Secretarial en donde se hace constar que el día 8 de julio de 1996, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados envió nota a la oficina de la Lcda. Olmedo para que realizara sus descargos. Agrega el informe que por haber transcurrido mucho tiempo desde que se envió la nota y no haber tenido respuesta de la demandada, se confecciona el informe para que sean tomadas las medidas pertinentes.

Luego de estudiadas las piezas procesales, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, decidió, basándose en el hecho de la falta de contestación de la demandada y comprobada la condición de Abogada de la Lcda. OLMEDO, solicitar a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, "... DECRETE CITACIÓN A JUICIO a la Licenciada CINTIA OLMEDO ...".

Recibido el negocio en esta Corporación de Justicia, a través de nota fechada 21 de septiembre de 1999 del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, se ordenó correr traslado del proceso instaurado, a la demandada, por un término de cinco (5) días, para que presentara los escritos de excepción y de oposición a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

La denunciada, Lcda. CINTIA OLMEDO, fue notificada personalmente del requerimiento ordenado en la providencia arriba indicada, el día 15 de noviembre de 1999; contestando oportunamente mediante escrito presentado el día 22 de noviembre de 1999. (v.fjs. 17-19).

La Lcda. OLMEDO, en lo medular de su escrito de contestación expone:

Que la señora Catalina de Yanis solicitó sus servicios profesionales en el año 1989.

Que la señora Catalina de Yanis hizo tres abonos a los gastos, en los que debía incurrir, para promover el juicio.

Que la denunciante le solicitó suspender los trámites del proceso, toda vez que, debía viajar al exterior por motivos personales, urgentemente.

Que no volvió a tener más contacto con la denunciante, telefónica o personalmente, antes del momento de la notificación de la providencia, emitida por esta Corporación, donde se le corre traslado de la denuncia presentada por al señora DE YANIS.

Que nunca recibió la nota fechada 12 de marzo de 1996, emitida por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, por la cual se le corría traslado de la denuncia interpuesta en su contra.

Que la denunciante tenía en su poder recibos firmados con los cuales podía iniciar un cobro judicial del dinero entregado para los gastos del proceso.

Que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados no le brindó una oportunidad válida para hacer su descargos, al tramitar una queja sin las garantías de un debido proceso, que implique el conocimiento personal y directo del querellado, lo que no ha ocurrido en este caso, impidiendo su defensa oportuna sobre hechos que no se ajustan a la verdad de su conducta profesional.

Continuando con el examen del expediente, se aprecian, de foja 20 a 23, las pruebas aportadas por la demandada. Consisten en: copia simple del resuelto de 2 de mayo de 1996, por el cual, se ordena trasladar a la Lcda. CINTIA OLMEDO, de la Dirección de Asesoría Legal a la Dirección Regional de Educación de Panamá-Oeste, firmado por el Ministro de Educación; copia cotejada con su original de Certificado, donde se hace constar que, la Lcda. OLMEDO, formó parte de la Comisión Técnica para la Ejecución del Código de La Familia del 27 de septiembre al 30 de diciembre de 1994; copia cotejada con su original, de la Certificación expedida por la Comisión de Divulgación del Código de La Familia, en calidad de Promotor de dicho código; copia cotejada con su original del memorando de 26 de julio de 1995, dictado por la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Educación, donde se le asignan funciones de apoyo a la Dirección Técnica del Consejo Nacional de La Familia y el Menor.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Luego del estudio y examen de las piezas procesales del presente negocio, debemos vertir nuestras consideraciones.

La señora CATALINA DE YANIS solicitó los servicios profesionales de la Lcda. CINTIA OLMEDO RAMOS en el año 1989; esta afirmación fue corroborada, por la demandada, cuando en el punto 1° del escrito de oposición así lo reconoce (v.fj.17). También reconoce, la demandada, haber recibido los dineros aportados por la señora de Yanis para los gastos iniciales del proceso.

Ahora bien, ambas partes han concordado en la fecha en que se dio inicio a la relación profesional, el año 1989. A partir de ese año, según ambas, no hubo más contacto, personal o telefónicamente. Al respecto debemos hacer la siguiente observación: la demandante no concurre ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, a solicitar asistencia por la supuesta falta de ética de la Lcda. OLMEDO, hasta el 16 de enero de 1996; fecha en la que presenta el escrito visible a foja 4 del cuaderno.

Los hechos establecidos en el párrafo anterior dan pie a invocar lo establecido en el artículo 38 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, que a la letra dice:

> "... La acción disciplinaria prescribe a un (1) año, que se contará a partir del día en que se perpetró el último acto constitutivo de la falta. La iniciación del proceso interrumpe la prescripción."

Consecuentemente con lo señalado en párrafos anteriores, debemos tomar como fecha en la que, supuestamente, se perpetró el último acto constitutivo de la falta, el 15 de noviembre de 1989, día en el cual la Lcda. OLMEDO recibió el último de los pagos para gastos del proceso; tal como consta a foja 3 del cuaderno. Como se observa, transcurrieron seis (6) años y dos (2) meses antes que la señora de Yanis interpusiera la queja en el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados.

Por lo tanto, somos de la opinión, que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados debió desestimar la queja interpuestas y no solicitar el llamamiento a juicio de la Lcda. OLMEDO, tal cual lo hizo mediante resolución fechada de 21 de junio de 1999.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PRESCRITA LA ACCIÓN interpuesta por la señora CATALINA DE YANIS contra la LCDA. CINTIA OLMEDO RAMOS y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE previa anotación de su salida en el libro correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General, Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ROGELIO FÁBREGA ZARAK, DENTRO DE LA CARTA ROGATORIA EMITIDA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO, REFERENTE AL JUICIO QUE POR COBRO DE BOLÍVARES SIGUE LA SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR, C.A. Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA CONTRA FIELD REAL STATE CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MARZO DE DOS MIL (2,000)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En la Carta Rogatoria emitida por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario, referente al Juicio que por Cobro de Bolívares sigue la SOCIEDAD FINANCIERA BANCOR, S.A. Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA CONTRA FIELD REAL STATE CORPORATION, el magistrado ROGELIO FÁBREGA ZARAK, ha solicitado al resto de la Sala Cuarta se le declare impedido para conocer de este petitorio con fundamento en el numeral 1° del artículo 749 del Código Judicial.

El presente proceso solicita a esta Superioridad notificar a la empresa FIELDS REAL STATE CORPORATION, a través de su presidente el señor LUIS CARLOS ZARAK, quien tiene parentesco en cuarto grado de consanguinidad con el Magistrado Rogelio Fábrega Zarak.

El artículo 749 numeral 1 preceptúa:

"Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido.

Son causales de impedimento:

1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el Juez o su cónyuge, y alguna de las partes;"

Las razones que expone el Magistrado Fábrega en su escrito de solicitud para que se le declare impedido encuentran su fundamento legal en lo dispuesto por el numeral 1 del artículo transcrito, situación que da lugar a que se le separe del conocimiento del presente caso.

Por lo expuesto, el resto de los Magistrados que componen la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento del Magistrado ROGELIO FÁBREGA ZARAK; en consecuencia, LO SEPARA del conocimiento del presente negocio, y llama al Magistrado que le sigue en turno de la Sala Civil.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LA SEÑORA MITZI LISBETH ABREGO GONZÁLEZ CONTRA EL LICENCIADO PEDRO TORRES TORRES POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD

PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el cuaderno que contiene la denuncia por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado interpuesta por la señora MITZI ÁBREGO GONZÁLEZ contra el licenciado PEDRO TORRES.

La Sala estima pertinente resaltar los antecedentes que originaron la presente denuncia.

ANTECEDENTES

El Tribunal de Honor, en virtud de lo preceptuado por el artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, emitió una relación de los hechos tenido como faltas a la Ética y Responsabilidad Profesional del abogado, (visible a fojas 190 a 197 del expediente), requiriendo a este tribunal DECRETE la CITACIÓN A JUICIO, al licenciado PEDRO DIDIER TORRES T. previstas en el artículo 34 , literales a) y ch), del Código de ética y Responsabilidad Profesional del abogado.

La denuncia presentada por la señora MITZI LISBETH ÁBREGO GONZÁLEZ, a través de nota fecha da 28 de enero de 1998, (visible a fojas 4 a 7 del expediente), dirigida a los miembros del Tribunal de Honor y Ética del Colegio Nacional del Abogado, y corroborada mediante formulario de denuncias del tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (visible a foja 2 del expediente), describe los hechos en que fundamenta su denuncia, en la misma señala su disconformidad en la representación legal obtenida, al señalar en su escrito (visible a foja 6 del expediente), no haber tenido una efectiva representación y el señalamiento directo de los delitos de estafa y apropiación indebida por parte del denunciado. De ello la señora Ortega, señala que firmó con el denunciado un contrato de honorarios profesionales, el cual se comprometía a cancelarlo cuando el proceso culminara (visible a foja 4 del expediente).

La denunciante de igual forma en su escrito describe distintas fechas en las cuales efectuó pago al licenciado Torres, en razón de abono a la suma pactada en el contrato anteriormente descrito, la suma aducida ascendía a B/.6,000.00 balboas. Seguidamente visible a foja 5 del expediente, en su denuncia señala que el licenciado Torres promovió el traspaso de un vehículo de su propiedad, ya que le iban a interponer una demanda civil, dicho traspaso se hizo al señor Gabriel Gilberto Torres, aduciendo que el mismo se hacia en calidad de custodia del mismo, y que luego de concluido el proceso el mismo sería nuevamente traspasado a su nombre (visible a foja 5 del expediente). La denunciante manifiesta que luego de transcurrido un año del proceso señalado, solicitó a una amiga verificar el estado de su proceso, percatándose que su apoderado legal, el licenciado Torres, había renunciado al poder conferido, alegando que la señora Ortega no contaba con los recursos económicos para hacerle frente al proceso , como contra pruebas a lo presentado, la denunciante presentó recibos de pagos (visible a fojas 9 y 11 del expediente).

El Tribunal de Honor mediante providencia de 4 de febrero de mil novecientos noventa y ocho, ordenó abrir la investigación a fin de comprobar lo hechos denunciados y mediante nota fechada 3 de marzo de 1999, procedió con fundamento al artículo 24 de la Ley 8 de 1993, solicitar al licenciado PEDRO TORRES T., que en el término de cinco (5) días hábiles rindiera un informe, contestara y aportara las pruebas con relación a la denuncia por supuesta falta a la Ética, que fuera presentada en su contra.

**ARGUMENTOS DEL DENUNCIADO**

El licenciado Pedro D. Torres T. mediante escrito con fecha de presentación en el Tribunal de Honor el día 10 de marzo de 1998, presento informe respectivo (visible foja 21 a 29 del expediente).

El mismo es dirigido al Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio Nacional de Abogados; del mismo se desprenden argumentos que la Sala pasa a considerar los más relevantes. El informe en mención, deja ver que sí existió la relación abogado cliente, que para tal efecto se firmó un contrato de servicios profesionales, (visible a foja 30 a 32 del expediente) por la suma de B/.12,000.00 (doce mil balboas) más los gastos que surgieran del proceso, suma la cual, el denunciado señaló no haber recibido abono alguno. Al respecto y visible a foja 23 del expediente, el denunciado en su escrito , señala fechas en que compareció en representación de la denunciada en distintas instancias policiales y judiciales, destacando que la representación legal se realizaba a pesar del incumplimiento de pago por parte de la poderdante, y que la razón para no desistir en la misma era el parentesco familiar que les unía. Esto último es reiterado por el denunciado en su escrito (visible a foja 27 del expediente).

Igualmente el denunciado en su escrito tacha los recibos de pago presentado por la denunciante, al señalar que los mismos fueron confeccionados e inventados por Mitzi Ábrego (visible a foja 22 del expediente), y tacha de sospechosos los testigos aportados por la señora Mitzi Ábrego.

También se refiere en su escrito al traspaso legal de un vehículo, producto de un contrato de compra y venta entre el señor GABRIEL GILBERTO TORRES y MITZI ABREGO, el día 10 de mayo de 1995 y señala que para la celebración del traspaso vehicular, no se ejecutó por su parte, ningún acto coactivo e intimidación a la señora Ábrego; traspaso que la denunciante tacha de haber sido estafada.

Visible a foja 24 y 25 del expediente, contiene la manifestación del denunciado de desistir de la representación judicial si no se cumplía con el pago, tal y como se desprende textualmente en el párrafo a continuación del escrito visible a foja:

> "El día 7 de agosto de 1997 ...
> ... me presente a la residencia de la señora ÁBREGO GONZÁLEZ, conjuntamente con la Licenciada TANIA VALDELAMAR DE TORRES para informarle lo ocurrido, asu (sic) vez le comuniqué que tenía que pagarme los gastos en que estaba incurriendo cada vez que tenía que viajar al interior, así como empezar a pagarme los honorarios, toda vez que no me pagaba ni los gastos de los viajes, y ya ha transcurrido aproximadamente un año, por lo que me manifestó que vendría a la Oficina en Panamá, para abonarme. Le advertí que si no me pagaba los gastos y me abonaba algo a los honorarios no continuaría con el proceso tal y como esta(sic) establecido en el contrato.
>
> En la siguiente semana, la señora AGREGO(sic) GONZÁLEZ, se presentó a la Oficina con el propósito de que le explicara ciertas cosas con respecto al incidente que le inquietaban, y me manifestó que no me pagaría, se encontraba presente la Licenciada GIOVANINA SANJUR DE LEÓN y la señora ANAYANSI ACEVEDO, quienes escucharon la conversación, le notifique que de no pagarme renunciaría al poder tal y como esta (sic) establecido en el contrato, manifestándome que yo no le podía hacer eso, por lo que me dijo que sin falta la siguiente semana me traería ciento cincuenta balboas (B/.150.00), comunicándole que de no ser así, yo renunciaría al poder. (testigos las personas mencionadas)."

**VISTA DEL TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS**

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, mediante vista de 21 de junio de 1999, resuelve requerir a este Tribunal que decrete la citación a juicio al licenciado PEDRO TORRES TORRES, portador de la cédula de identidad personal No. 2-126-205, por falta a la ética cometida en el ejercicio de la profesión, sustentándose en el artículo 34 del Código de ética y Responsabilidad Profesional del abogado, literales a) y ch), que a la letra dicen:

"Artículo 34: Incurre en falta a la ética el abogado que:

a) Estorbe la buena y expedita administración de justicia, aconseje la comisión de actos fraudulentos;

ch) Retenga dineros bienes o documentos suministrados en relación con las gestiones realizadas".

Recibido el presente proceso en la Secretaría de la Sala de Negocios Generales de esta corporación de Justicia, se procedió de acuerdo y a los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley No. 9 de 18 de abril de 1984, notificar al denunciado, para que aduzca excepciones u ponerse al juzgamiento, instando el archivo del proceso.

ESCRITO DE SOLICITUD DE ARCHIVO DEL PROCESO

El licenciado PEDRO TORRES TORRES, presentó en tiempo oportuno escrito de solicitud de archivo del proceso que insta a esta Sala al llamamiento a juicio del prenombrado.

En sus escrito el denunciado solicita el archivo del expediente, fundamenta su solicitud en los siguientes Hechos:

1. Se refirió a la manifestación de la denunciante de haber firmado un contrato de servicios profesionales por la suma de B/. 12,000.00 y no tener ningún documento firmado por el denunciado, como recibido, ya que por versión vertida por la denunciante el licenciado Torres se negaba a firmarlos. Para el denunciante esta es la prueba de no haber recibido dinero alguno de la señora Mitzi Abrego, ni el haber recibido como pago un vehículo, de esto último aporta como prueba copia simple del Contrato de Compra Venta suscrito por la señora MITZI ÁBREGO GONZÁLEZ y el señor GABRIEL GILBERTO TORRES GONZÁLEZ, de fecha de 10 de mayo de 1995, del vehículo marca HYUNDAI, modelo Sedán, Modelo G4JM179420, color negro, año 1992 por la suma de B/.3,000.00. (visible a foja 30 del expediente).

2. Se refiere igualmente el denunciado, a la falsificación del documento de fecha 24 de septiembre de 1996, aportado por la señora Mitzi Ábrego, como prueba en su contra, y que consta haber recibido por parte del denunciado la suma de B/.6,000.00, como abono a lo pactado en el contrato de Servicios Profesionales. De esto último, el denunciado cuestiona la validez del documento como prueba, al tenor de lo establecido en los artículos 820,843,844 y 848, señalando además que no hay documento original con que cotejarlo, por lo que lo declara inexistente, y manifiesta que en la copia presentada, su firma aparece alterada (visible a foja 148).

3. El denunciado manifiesta no haber recibido emolumento en concepto de pago por servicios prestados de parte de la señora Mitzi Abrego, para ello aporta como prueba los recibos de pagos recibidos y la respectiva declaración de rentas correspondiente al año 1996, con la que se puede cotejar la totalidad de ingresos que allí aparecen. (visible a fojas 223 a 245).

4. Aporta igualmente el denunciado copias de declaraciones juradas de Mitzi Ábrego, ante el Juzgado Primero del Circuito Penal de Coclé, ante la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial, y su ampliación, de fechas 27 de marzo de 1998, 18 de mayo de 1998 y 17 de agosto de 1998 respectivamente, las mismas versan sobre denuncia realizadas en su contra, y que según el denunciado son

presentadas para probar la contradicciones de la denunciante en sus declaraciones, que versan sobre los pagos efectuados, formas de adquirir el dinero para estos pagos, y testigos de los mismos.

POSICIÓN DE LA SALA

Una vez analizadas las constancias de autos, la Sala advierte que obran a fojas 91, 96, 105, 109, 115, 117, 8 y 14 del expediente, actuaciones del licenciado Pedro Torres, en representación de la señora Mitzi Abrego, que las mismas acreditan la existencia de la relación abogado cliente, a foja 30 copia simple del contrato de Compra y Venta de un vehículo, firmado entre la señora Mitzi Ábrego y Gabriel Gilberto Torres, del cual fueron reconcidas sus firmas por ambos suscriptores, diligencia realizada por el Tribunal de Honor, igualmente obra a foja 148 del expediente, copia simple de documento que contiene la manifestación del licenciado Pedro Torres Torres, de la transferencia de un vehículo en calidad de custodia y no de venta, documento que contradice la voluntad del contrato contraído por las partes (Mitzi Ábrego y Gabriel Gilberto Torres) referido anteriormente.

De este último documento la Sala observa que el mismo contiene el argumento más importante de la controversia; ya que la denunciante adiciona a su inconformidad el hecho de haber sido compulsada a transferir un auto de su propiedad en su detrimento; se observa también que la transferencia en cuestión, debe aparecer como un hecho independiente de los denunciados; y que al respecto obra a foja 188 del expediente certificación de la Tesorera Municipal del Distrito de Aguadulce, en que consta el traspaso de un vehículo de propiedad de la señora Mitzi Ábrego a Gilberto Torres, padre del denunciado, el día 8 de agosto de 1999.

Observa igualmente la Sala en relación a lo anterior, la presentación del poder en representación de la denunciada ante el Fiscal de Circuito de Coclé, el día 23 de agosto de 1999. De lo anterior la Sala advierta que existen hechos no aislados a los señalados, que a pese que los documentos controvertidos que reposan en el expediente son copias simples, esta Superioridad no podría dejar de valorarlo, por ello es importante considerar la resolución que motiva al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, a que esta Superioridad se manifieste al respecto.

Como referencia, la Sala se permite transcribir entre los principios que tutela el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado:

> "Sobre el ejercicio profesional. El abogado debe actuar con irreprochable dignidad, en el ejercicio de la profesión. El abogado debe cuidar con todo esmero de su honor, eludiendo cuando pueda afectar su independencia económica, comprometer su decoro o disminuir la consideración general que debe siempre merecer".

De todo lo anterior La Sala considera que el denunciado debe esclarecer toda duda, ya que la falta contenida en la disposición en el artículo 34 acápites a y ch del Código de ética, contempla la conducción de actos fraudulentos y retención de bienes suministrados en las gestiones realizadas por el abogado denunciado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, del licenciado PEDRO TORRES, con localización en Avenida Justo Arosemena y Calle 32 este, Edificio J.J. Vallarino, Segundo Piso, Oficina No. 2, lugar en donde recibe notificaciones personales y legales, con fundamento en la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, denuncia interpuesta por la señora Mitzi Abrego, por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, y establece que en fecha posterior se fijara el día y hora de la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicaran las pruebas que presenten las partes.

Notifiquese y Cumplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD PRESENTADO POR LA LICENCIADA ERAYDA SIMITI, EN REPRESENACIÓN DE MARICELA CEBALLOS DE RUDAS, DENTRO DEL PROCESO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO, INTERPUESTO POR LA SEÑORA YADIRA JIMENEZ ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE. MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE MARZO DE DOS MIL (2000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La licenciada Erayda Simití, actuando en nombre y representación de Maricela Ceballos de Rudas, ha presentado incidente de nulidad contra la resolución de citación a juicio que dictó esta Sala dentro del proceso por faltas a la ética profesional del abogado, seguido a Maricela Ceballos de Rudas, interpuesto en su contra por la señora Yadira Jiménez Ortega.

La pretensión incidental se fundamenta en la omisión de la fecha en la resolución de vocación a juicio dictada por esta Superioridad, que corre de fojas 58 a 61 de los autos. Sobre este aspecto, la incidentista argumenta lo siguiente:

> "la omisión aludida, quebranta las normas del debido proceso, porque no brindan la certeza de los hechos motivos en el auto (sic) que estudiamos, en relación al tiempo, omisión que trastoca el efectivo trámite subsecuente para efectos de los de ejecutoria, apelación, etc.
>
> Lo anterior es suficiente causal para dictar la nulidad del auto s/n Y s/f de la Honorable Sala Cuarta de Negocios Generales, cuya resolución es contraria al artículo 976 del Código Judicial en concordancia con el artículo 32 de la Constitución Nacional".

Los Magistrados que suscriben consideran que lo alegado por la incidentista no constituye una causal de nulidad de las previstas en el Código Judicial; sin embargo, es evidente que la resolución mediante la que se llama a juicio a la licenciada Maricela Ceballos de Rudas carece de la fecha en que fue emitida, de allí que en opinión de la Sala lo correcto es subsanar esta omisión.

El Código Judicial establece los requisitos que deben reunir las decisiones judiciales. Sobre esta materia el artículo 976 preceptúa, en el extracto pertinente, lo siguiente:

> "Artículo 976: Las resoluciones judiciales indicarán la denominación del correspondiente juzgado o Tribunal, firmadas en el lugar y en la fecha en que se pronunciaren, expresados en letras y concluirán con la firma del Juez o los Magistrados y del Secretario. ..." (Destaca la Sala).

El artículo 199 del Código Judicial, que prevé los deberes en general de los Magistrados y Jueces, en su numeral 11, establece como uno de estos deberes a cargo de los Magistrados y Jueces "Disponer de oficio las diligencias conducentes a evitar nulidades procesales, a conformar adecuadamente el litisconsorcio necesario y eliminar los otros motivos de sentencias inhibitorias".

Con fundamento en lo anterior, lo que procede es declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de citación a juicio dictado contra la licenciada Maricela Ceballos de Rudas, para luego imprimirle el curso normal al presente asunto.

Observa la Sala que también la apoderada judicial de la denunciada ha promovido un recurso de reconsideración contra el auto antes mencionado. Como esta actuación será anulada y se repondrá lo actuado, es inconducente pronunciarse acerca de dicho recurso.

De consiguiente, la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la nulidad de lo actuado en el presente asunto de fojas 58 hasta la 61, y ordena imprimirle el curso normal a este negocio.

Notifíquese y Cumplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR FAKIR MOHAMED CASIN ABOVAD CONTRA EL LICENCIADO LEONEL URRIOLA CASTILLO POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a esta Superioridad, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, la denuncia presentada ante esa instancia por el señor FAKIR MOHAMED CASIN ABOVAD contra el licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO por supuestas faltas a la ética y responsabilidad profesional de abogado; como quiera, que dicho Tribunal, mediante escrito de 21 de junio de 1999, solicitó, a esta Sala de Negocios Generales, el llamamiento a juicio del demandado.

ANTECEDENTES

Legible a foja 4 del expediente encontramos el escrito de queja presentado por el señor CASIN ABOVAD, donde expone los hechos que dieron lugar a su denuncia.

Afirma, el quejoso, que en el año 1996 solicitó los servicios profesionales del licenciado LEONEL URRIOLA para tramitar la visa de su esposa ZAHEDA FAKIR MOHAMED ABOVAD, en calidad de inmigrante, ante la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia. Para tal fin, su esposa firmó un poder al licenciado URRIOLA y se le entregó la suma de mil cincuenta balboas (B/.1,050.00) mediante tres cheques certificados, en concepto de gastos; más, trescientos cincuenta balboas (B/.350.00) en efectivo como honorarios profesionales. (v.fs. 6 a 10).

El demandante en su escrito dirigido al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados solicita que se obligue al demandado a la devolución de los dineros entregados para la gestión administrativa a realizar en la Dirección Nacional de Migración, toda vez que, transcurrieron dos años sin que se hubiese obtenido los resultados esperados de los servicios encomendados al licenciado URRIOLA.

Recibida la denuncia, el Tribunal de Honor solicitó a la Sala certificar si el señor LEONEL URRIOLA CASTILLO es idóneo para ejercer la profesión de

abogado en la República de Panamá; además de los antecedentes disciplinarios si los hubiese. Mediante Certificación de 29 de octubre de 1998, la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia Encargada, dejó establecido que el Licenciado URRIOLA CASTILLO es idóneo para ejercer la profesión de abogado desde el 27 de enero de 1984.

A foja 17 se encuentra legible un informe secretarial, de 29 de abril de 1999, por el cual se deja constancia que le fue enviada nota al licenciado URRIOLA a fin de escuchar los descargos de los hechos denunciados por el señor CASIN ABOVAD. Además, Señala el informe, que el quejoso desea continuar con el proceso toda vez que el demandado le manifestó que le devolvería el dinero, pero que no lo había hecho por completo. Así las cosas, el informe solicita proceder a lo pertinente y resolver la queja interpuesta.

Como señalamos anteriormente, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados mediante decisión fechada 21 de junio de 1999, resolvió solicitar a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la citación a juicio del licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO por considerar que ha incurrido en la falta a la ética establecida en el literal b) del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado.

Recibida la solicitud en este Tribunal, se dispuso correr traslado al demandado por el término de cinco (5) días hábiles, a fin de que contestara a los hechos denunciados en su contra. A continuación encontramos los informes secretariales fechados 9 y 29 de diciembre de 1999, por los cuales se hace constar que ha sido imposible determinar el paradero del licenciado LEONEL URRIOLA. Mediante proveído de 5 de enero de 2000, se ordenó el emplazamiento del demandado de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, modificada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se regula el ejercicio de la abogacía.

Se observa, al reverso de la foja 25 del cuaderno, que el licenciado URRIOLA se notificó de la providencia, de 18 de octubre de 1999, por la cual se le corre traslado de los hechos denunciados en su contra, el día 26 de enero de 2000; fecha posterior al emplazamiento efectuado por la Secretaría de la Sala.

Finalmente, legible a foja 31 del expediente, se encuentra un escrito de desistimiento de denuncia presentado por el señor FAKIR MOHAMED CASIN ABOVAD, con fecha de acuso de recibo, el día 2 de febrero de 2,000.

DECISIÓN DE LA SALA

La parte demandante, señor FAKIR MOHAMED CASIN ABOVAD ha desistido expresamente de la acción entablada contra el Licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO, por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, tal cual lo dispone el artículo 1073 y s.s. del Código Judicial.

Por lo tanto, en atención a lo antes expuesto, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la denuncia por faltas a la ética y responsabilidad profesional del abogado, presentado por el señor FAKIR MOHAMED CASIN ABOVAD, varón, mayor de edad, de nacionalidad hindú, con cédula de identidad personal No. E-8-47487, residente en el Corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá; seguido contra el licenciado LEONEL URRIOLA CASTILLO, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No.4-128-1301 y ORDENA el archivo del expediente, previa anotación de su salida en el libro respectivo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

**DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR FERNANDO IGLESIAS VARGAS CONTRA LA LICENCIADA MARÍA CRISTINA RUIZ POR FALTAS A LA ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE DOS MIL (2,000).**

**CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.**

**VISTOS:**

**Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ha ingresado a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la denuncia por Falta a la Etica y Responsabilidad del Abogado, promovida por el señor FERNANDO IGLESIAS VARGAS en contra de la Profesional del Derecho Licenciada MARIA CRISTINA RUIZ.**

**Del dossier se infiere que, el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, en base a lo preceptuado en el Artículo 26 de la ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, resolvió mediante Vista que reposa a fojas 30,31,32 del expediente, " solicitar respetuosamente a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la citación a Juicio de la Licenciada MARIA CRISTINA RUIZ, abogada en ejercicio, con número de registro 3834, a quien se le puede ubicar en La Arena, Distrito de Chitré, portadora de la cédula de identidad personal número 6-57-1767, por la falta contra la ética profesional prevista en el literal "b" del artículo 34 del Código de Etica y Responsabilidad Profesional del Abogado "...**

**SINOPSIS DEL CASO**

**En este orden de ideas, es saludable hacer constar que la solicitud de llamamiento a juicio antes citada, obedece a la denuncia presentada por el señor FERNANDO IGLESIAS VARGAS en contra de la letrada MARIA CRISTINA RUIZ, en la cual el denunciante declara lo que a continuación se detalla:**

> **"Me dirijo a Usted para poner la queja de que perdí un caso. por motivos de que la Licenciada María Cristina Ruíz de la Arena Chitré se retardó tanto después de que le pague para meter la demanda a Personería. Tanto yo Fernando Iglesias y ella la Licenciada sabíamos bien que estaba a tiempo antes que prescribiera ese caso o sea los 6 años reglamentarios y ella me engañaba y me decía que ya estaba tramitando todo y por lo tanto yo le fue entregando lo que me cobraba. Tengo los Recibos de cuando le entregue el primer Pago y los otros con su fecha .De Personería me vino el resuelto de que ya prescribió ese caso por la tardanza de ella y sus engaños hacía mí. Espero se le haga justicia y me devuelva todo el dinero que yo le he entregado."**

**Para corroborar sus dichos, el señor Iglesias aporta junto con la denuncia, cuatro (4) fotocopias simples de recibos que, según el denunciante le expidiera la Lcda. RUIZ, en razón de los abonos que el realizara a los honorarios por ella fijados. Los recibos se identifican así: a) No. 229 fechado 23 de septiembre de 1997, por la suma de B/.100.00; b) No. 622 de 29 de octubre de 1997,por la suma de B/.80.00; c) No.731 de 15 de abril de 199,por la suma de B/.150.00; d) No. 795 de 21 de agosto de 1998,por la suma de B/.60.00. Lo anterior consta en los folios 7 y 8 del dossier.**

**Atendiendo a la denuncia presentada y de la cual hemos hecho alusión, se observa que el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, como ente encargado de conocer de los procesos de ética como organismo instructor, por medio de resolución fechada 10 de febrero de 1999, ordenó abrir la investigación con el objeto de comprobar los hechos denunciados, dar el respectivo traslado de la denuncia, al profesional del derecho denunciado y practicar las pruebas que**

fueran necesarias.

En ese sentido, consta en el expediente que el Tribunal de Honor, ofició a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales a fin de constatar la condición de abogado de la Lcda. MARIA CRISTINA RUIZ; el tiempo de ejercicio de la profesión y si existían antecedentes disciplinarios en contra de la misma. La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, según consta en el infolio 14, que la letrada denunciada es IDÓNEA para ejercer la profesión de abogada y la fecha desde que es idónea, y el número del acuerdo en el cual se le otorga la idoneidad.

De los folios 15 y 16, se evidencia las gestiones hechas por el Tribunal de Honor para efectuar el traslado de la denuncia a la Licenciada Ruíz, y en el Informe Secretarial que corre a fs. 16 la secretaria del organismo prenombrado, manifiesta entre otras cosas:

> "Licenciado Reyes, este caso No. 598 de denuncia interpuesta por el señor Fernando Iglesias se le envió por transporte nota para que contestara los descargos el día 24 de febrero de 1999. Aparentemente recibió la misma, ya que el denunciante llamó informando que la Licenciada Ruíz había ido a su casa a insultarlo y ella le dijo que no iba a contestar nada. A raíz de esto, constantemente el señor Iglesias está llamando para saber qué respuesta le tenemos. Debido al tiempo transcurrido, es por lo que consideramos que se debe proceder a lo pertinente y resolver el mismo antes de lo posible."

De igual modo, se colige del negocio, que el ente encargado de la investigación, ofició al señor Juez Municipal del Distrito de Los Santos, a fin de solicitar la documentación que guarda relación con el sumario instruido en contra de la señora MARIA GRACIELA VILLARREAL PALMA por denuncia del señor FERNANDO IGLESIAS. El Juzgado Municipal del Distrito de los Santos, atendiendo a lo solicitado remitió al Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados las copias solicitadas, que reposan a fojas 22 a 28, a saber:

a) copia de la vista Fiscal No. 70 del 26 de agosto de 1998;
b) Copia del Poder Especial otorgado por el denunciante a la Licenciada María Cristina Ruíz R.;

c) Copia de la resolución calificatoria del sumario expedido por el Juzgado Municipal del Distrito de Los Santos.

Por considerar que se había concluido el procedimiento, el ente instructor emitió su criterio sobre el caso en particular, el día 11 de junio de 1999, tal y como consta en las fs.30 a 32 del expediente, cuya parte medular ha sido expuesta al inicio de esta resolución; por ello resolvió remitir la denuncia in examine a esta Corporación de Justicia, solicitando que sea llamada a juicio la jurista denunciada.

En ese orden de ideas, y al observar esta Sala que en el negocio no existía constancia alguna que comprobara que, el traslado de la denuncia a la Lcda. Ruíz realmente se había surtido, ordenó que efectuara éste, otorgándole a la denunciada el término que la Ley le concede, para que la contestara, haciendo uso la letrada denunciada de esta oportunidad procesal.

Del caso en examen, es prudente indicar antes de proseguir que, la Licenciada Ruíz ha expresado en la contestación a la denuncia, que a la misma no se le dio la oportunidad de la Legítima defensa, esto es que, en su momento el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, no le dio la opción de presentar, practicar y aducir pruebas a su favor, en virtud de que ella no recibió, ni tuvo conocimiento de la denuncia interpuesta en su contra.

Sobre este último aspecto es saludable manifestar que, del traslado comentado, sólo existe el Informe Secretarial que corre a fs.16 del expediente,

rendido por la Secretaria Asistente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogado; la citada referencia, no constituye bajo ningún punto de vista, una constancia de que la Lcda. RUÍZ obtuvo el traslado de la denuncia incoada en su contra, pues este informe esta basado en supuestas aseveraciones del accionante, carente de objetividad, veracidad, y respaldo jurídico.

Tomando en consideración que, sobre el traslado comentado el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogado, sólo elaboró un informe, es el criterio de esta Sala que, este ente colegiado actúo con premura, al solicitar el llamamiento a Juicio de la Lcda. Ruíz, en virtud de que no agotó el procedimiento legal establecido en el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, que le permitiera tener la certeza de que tan importante garantía procesal se había consumado, cuestión ésta que debe ser tomada en cuenta, por tan importante Organismo, a fin de subsanar estos errores en un futuro.

Consecuentemente con lo anterior, se desprende del conjunto de piezas procesales que componen este negocio, que la Sala IV de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, procedió a enmendar el yerro observado, otorgándole a la denunciada el término que la Ley le concede, para que la contestara, tal y como lo establecen los artículos 28,29 Lex Cit.. Consta en autos que la Licenciada MARIA CRISTINA RUIZ, recibió el traslado aludido y le otorgó poder especial al LCDO. ISAIAS BARRERA ROJAS, para que la representara en el negocio sub judice. Haciendo uso del precitado poder, el Lcdo. Barrera, presentó ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, la contestación a los cargos que se le hacen en la denuncia presentada por el señor Fernando Iglesias(cfr. folio 42 ( 42 vlta) a 57 del expediente). Del escrito en mención se observa que la parte afectada con la denuncia, es decir la Lcda. Ruíz, manifiesta que el Tribunal de Honor del Colegio nacional de Abogados no le ha dado la oportunidad de presentar de realizar los descargos, y mucho menos la oportunidad de aducir y practicar pruebas.

En este estado del negocio y teniendo por cumplido el procedimiento que exige las denuncias por Falta a la Etica y Responsabilidad Profesional del Abogado, está en posición entonces esta Corporación de Justicia, de externar su juicio sobre la materia sujeta a análisis, previo a los siguientes razonamientos.

Sobre el particular es importante determinar, si las constancias que reposan en el dossier, se traducen en reales instrumentos comprobatorias de conductas anómalas, que dieron lugar a que la Licenciada Ruíz, profesional del Derecho, incurriera en Faltas a la Etica y Responsabilidad del Abogado, y que consecuentemente, provoque en el ánimo de esta Sala, que se acceda a la solicitud elevada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, de que sea llamada a Juicio la letrada precitada.

En este orden de ideas, consideramos que es importante determinar si existió o no la relación contractual abogado-cliente, entre el denunciante y el denunciado. Según las constancias que afloran en este expediente, no existe documento que acredite que entre ambas partes se pactara honorarios profesionales y desde cuando surgía tal relación. Sin embargo encontramos una serie de actos consecuentes con esa clase de vínculo; a saber : recibos que a aparecen a fs. 7 y 8 del dossier, relativos a los abonos por honorarios profesionales hechos por el denunciante a la Lcda. Ruíz; el poder que el señor Iglesias otorga a la letrada Ruíz, para que en su nombre promueva la denuncia en contra de la señora GRACIELA VILLARREAL PALMA, que corre a fs. 25 del negocio; de igual modo encontramos la resolución de 4 de septiembre de 1998, proferida por el Juez Municipal del Distrito de Los Santos, por el cual se bastantea dicho poder; aunado a ello, encontramos el auto fechado 16 de noviembre de 1998, del Juzgado Municipal del Distrito de Los Santos en el que dicha autoridad "sobresee definitivamente a MARIA GRACIELA VILLARREAL PALMA " y también se encuentran los medios de convicción que aporta al negocio la Abogada denunciada y que reposan a fs. 53,54,55,56,57 del expediente.

Del análisis de los documentos que obran como pruebas en el caso comentado, se concluye que sin lugar a dudas entre el denunciante, FERNANDO IGLESIAS y la denunciada, MARIA CRISTINA RUIZ, existió una relación profesional, abogado-cliente, que data desde el año 1997.

Tomando en consideración lo anterior, no hay duda de que luego que el señor Iglesias otorgará poder a la Lcda. Ruíz, para que lo representara, en las gestiones relativas a la denuncia penal en contra de Graciela Villarreal. Así consta en el poder que data del 4 de febrero de 1998, notarizado el 15 de mato de 1998, según los folio 6 y 51 del expediente. Según se desprende del infolio 31 del dossier, la denuncia penal fue presentada el día 18 de junio de 1998 y según se observa esta no surtió los efectos esperados, por haber prescrito la acción penal( cfr. el fs. 27 y 28 del expediente).

Por otro lado, se aprecia que si se efectuaron abonos a los honorarios que ambas partes pactaran, pues así lo dice el que acciona en la presente denuncia y así lo ha aceptado la licenciada Ruíz en su escrito de contestación, más no se deduce de sus dichos el total a pagar por el trabajo en derecho. (ver el fs. 47, punto 9 del expediente.).

Según la tarifa de honorarios profesionales mínimos de Abogados en la República de Panamá, que fuera publicada en la Gaceta Oficial No.20.980 de 2 de febrero de 1988, en la cual se establece lo siguiente en cuanto a las actuaciones de los apoderados legales en negocios criminales.

"CONSULTAS
1. Verbales 100.00 a 300.00 ó 50.00 por hora según criterio del abogado.

2. Cuando por razón de la consulta sea necesario ante la autoridad esta comparecencia causará un 50 % de recargo.

FORMALIZACIÓN DE DENUNCIAS O QUERELLAS
1. Ante Personerías Municipales ... B/.350.00
DEFENSA EN NEGOCIOS CRIMINALES

1. Ante Jueces Municipales ... B/.500.00

Siendo lo anterior así, podemos decir que las actuaciones de la Licenciada MARIA CRISTINA RUIZ se encuentran descritas dentro de la categoría antes enunciadas, tal y como se aprecia a lo largo de las pruebas presentadas en el presente negocio. Por consiguiente la suma que en concepto de honorarios recibió la Lcda. Ruíz no resulta excesiva, si tomamos en cuenta que la relación abogado cliente data del año 1997.

Sin embargo, es obvio que lo alegado por el denunciante y la defensa de la jurista denunciada, no permiten que esta Sala se forme un criterio objetivo, sobre la situación planteada;, contrario a lo expresado por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados en el punto 4 de las motivaciones que dan lugar a la solicitud de llamamiento a juicio que nos ocupa( Cfr. el fs. 32 del Expediente), dado a que este ente profiere juicios a priori sobre la materia comentada, sin siquiera contar con elementos fundamentales como lo es la defensa y pruebas de la denunciada.

Por lo antes expuesto, se hace necesario la confrontación de ambas partes, a objeto de verificar la certeza de sus dichos y así dilucidar el grado de responsabilidad o negligencia del abogado denunciado en lo referente a la prescripción del caso que le fuera encomendado, si así se llegare a comprobar.

Como corolario de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, de la Licenciada MARIA CRISTINA RUIZ, mujer, panameña, mayor de edad, abogada en ejercicio, con cédula de Identidad Personal No.6-57-1767, unida, con Domicilio en Avenida Herrera, Edificio

Claribel, primer piso, de conformidad con la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, en la denuncia interpuesta por el señor FERNANDO IGLESIAS VARGAS por Falta a la Etica y Responsabilidad Profesional del Abogado y se establece que próximamente se fijará la fecha para la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que las partes tengan a bien presentar.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General
==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=